



**ANALES DEL CONCEJO
DE BOGOTÁ, D.C.
PROYECTOS DE ACUERDO**

AÑO II N°. 3889 DIRECTORA: LUZ ANGÉLICA VIZCAINO SOLANO ENE. 29 DEL AÑO 2025

TABLA DE CONTENIDO	Pág.
PROYECTO DE ACUERDO NO 221 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL DÍA DEL HUERTERO Y HUERTERA EN BOGOTÁ, SE CREA LA MESA DISTRITAL DE HUERTEROS EN EL DISTRITO CAPITAL., SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”	26311
PROYECTO DE ACUERDO NO 222 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE BRINDAN MEDIDAS PARA PROMOVER Y FORTALECER LAS REDES DE LACTANCIA MATERNA EN EL DISTRITO CAPITAL”	26331
PROYECTO DE ACUERDO NO 223 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL LOS CENTROS DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA -CEA- Y OTROS ORGANISMOS DE TRÁNSITO QUE DICTAN CURSOS SOBRE NORMAS DE TRÁNSITO EN BOGOTÁ DEBEN FORTALECER LA EDUCACIÓN VIAL EN CULTURA CIUDADANA Y EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL EN CONDUCTORES E INSTRUCTORES”	26357
PROYECTO DE ACUERDO NO 224 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL LOS CENTROS DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA -CEA- Y OTROS ORGANISMOS DE TRÁNSITO QUE DICTAN CURSOS SOBRE NORMAS DE TRÁNSITO EN BOGOTÁ DEBEN FORTALECER LA EDUCACIÓN VIAL EN CULTURA CIUDADANA Y EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL EN CONDUCTORES E INSTRUCTORES”	26392
PROYECTO DE ACUERDO NO 225 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE PROMUEVE LA CREACIÓN DE LA MESA PERMANENTE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE EXPERTOS POR LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ, D.C Y SE ESTABLECEN UNOS LINEAMIENTOS SOBRE LA MATERIA”	26412
PROYECTO DE ACUERDO NO 226 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE PRIORIZA LA PARTICIPACIÓN DE MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA EN USO DE BUEN RETIRO COMO REFERENTES DE SEGURIDAD EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ”	26445
PROYECTO DE ACUERDO NO 227 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE PROHÍBE LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE NUEVOS HORNOS CREMATORIOS EN LAS ZONAS DE PROXIMIDAD DEL DISTRITO CAPITAL, SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA EL TRASLADO PROGRESIVO DE LOS EXISTENTES EN ZONAS DE PROXIMIDAD Y OTRAS DISPOSICIONES”	26462
PROYECTO DE ACUERDO NO 228 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA EL SANEAMIENTO DE OBLIGACIONES POR PAGAR EN LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL DEL DISTRITO CAPITAL Y EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ”	26479
PROYECTO DE ACUERDO NO 229 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR EL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EN EL DISTRITO CAPITAL EL “CURSO PEDAGOGICO SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LA FAMILIA, DENTRO DEL MARCO DE LAS ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA EN EL CONTEXTO FAMILIAR Y DE GENERO”	26503

Pág.

PROYECTO DE ACUERDO NO 230 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR EL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL “SELLO ZOOLIDARIO” COMO RECONOCIMIENTO A LAS EMPRESAS, ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO Y SERVICIOS QUE PROMUEVAN LA PROTECCIÓN Y EL BIENESTAR ANIMAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.....	26518
PROYECTO DE ACUERDO NO 231 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 253 DE 2006 «POR EL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL PROGRAMA BOGOTÁ BILINGÜE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.....	26527
PROYECTO DE ACUERDO NO 232 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE PROMUEVE LA COOPERACIÓN SOCIAL ENTRE EL SECTOR INTERRELIGIOSO Y EL DISTRITO CAPITAL, SE CREA EL SISTEMA DISTRITAL DE LIBERTAD RELIGIOSA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.....	26545
PROYECTO DE ACUERDO NO 233 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD, BIENESTAR Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES EN LAS ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO”.....	26558
PROYECTO DE ACUERDO NO 234 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA Y SE FORTALECEN POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD, EN EL MARCO DE LA SENTENCIA C-127 DE 2023...”.....	26581
PROYECTO DE ACUERDO NO 235 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA DESCONGESTIÓN DE EXPEDIENTES EN LAS INSPECCIONES DE POLICÍA DE BOGOTÁ, SE PROPENDE POR SU FORTALECIMIENTO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.”.....	26608
PROYECTO DE ACUERDO NO 236 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTAN LAS CASAS DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL – PYBA – Y CENTROS DE ATENCIÓN PRIORIZADA EN CADA LOCALIDAD DE BOGOTÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.....	26623
PROYECTO DE ACUERDO NO 237 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN MEDIDAS PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL TEJO COMO DISCIPLINA DEPORTIVA, MOTOR ECONÓMICO Y EXPRESIÓN CULTURAL EN EL DISTRITO CAPITAL”.....	26654
PROYECTO DE ACUERDO NO 238 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO DISTRITAL 138 DE 2004 “POR MEDIO DEL CUAL SE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL”.....	26678
PROYECTO DE ACUERDO NO 239 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR EL CUAL SE IMPLEMENTAN LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACIÓN DE CARTERA A CARGO DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL (IPES) EN BENEFICIO DE VIVANDEROS, VIVANDERAS Y COMERCIANTES DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLAZAS DE MERCADO, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.....	26682
PROYECTO DE ACUERDO NO 240 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA FORTALECER LAS ACCIONES EN SALUD PÚBLICA EN	

Pág.

ESTABLECIMIENTOS DE PREPARACIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL DISTRITO CAPITAL".....	26699
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 241 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> "POR EL CUAL SE PROMUEVE EL USO RESPONSABLE Y ÉTICO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL POSICIONANDO A BOGOTÁ D.C. COMO CIUDAD LÍDER EN LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS".....	26725
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 242 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> "POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y LA PLANTA DE EMPLEOS DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C., Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".....	26740

PROYECTO DE ACUERDO NO 221 DE 2025**PRIMER DEBATE**

"POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL DÍA DEL HUERTERO Y HUERTERA EN BOGOTÁ, SE CREA LA MESA DISTRITAL DE HUERTEROS EN EL DISTRITO CAPITAL., SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES "

1. OBJETO DEL PROYECTO

El presente Proyecto de Acuerdo tiene como objeto crear la mesa distrital de huerteros y e institucionalizar el día del Huertero y la Huertera siendo este parte de una celebración icónica como el día de la alimentación, esto en reconocimiento a la labor que realizan los huerteros y huerteras promotores de agricultura urbana en la ciudad de Bogotá D.C. para la resignificación de su trabajo de las familias, organizaciones, instituciones escolares y colectivos que a diario contribuyen a la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente y la seguridad alimentaria desde la óptica de las técnicas actuales y ancestrales.

Adicionalmente, lo que pretende es lograr la creación de una Mesa Distrital de huerteros donde se consideren y articulen los diferentes procesos de participación, organización social que ya tienen avances e historia en la conformación de mesas y redes de AU, con el fin de fortalecer y consolidar la Mesa Distrital, con el fin que cada red local tenga participación e incidencia visibilizando los procesos de agricultura urbana, resignificando el territorio con el desarrollo de actividades de alternativas sostenibles, además de autoabastecimiento y seguridad alimentaria.

2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según el Observatorio Ambiental de Bogotá, la capital es un referente en Latinoamérica en agricultura urbana, gracias a los más de 20 mil huerteros y más de 4 mil huertas que existen en la ciudad. Las huertas urbanas son una actividad que permite la producción de alimentos saludables a través de prácticas agroecológicas en espacios urbanos y periurbanos de la ciudad, sea en el suelo blanco o duro.

Ahora bien, el Jardín Botánico de Bogotá, realiza procesos de asistencias técnicas, capacitación y fortalecimiento a huertas urbanas y periurbanas en la ciudad, este último a través de la entrega de insumos y herramientas básicos de acuerdo con cada requerimiento de la huerta para el aumento, mejoramiento y consolidación de la agricultura urbana en la capital.

De acuerdo con información suministrada por esta entidad, nos indican que, en el marco de las acciones adelantadas en la ciudad de Bogotá por el Jardín Botánico con el objetivo de acompañar a los agricultores urbanos o huerteros de manera técnica y de acuerdo a la meta de asistir 40.000 personas técnicamente y/o con transferencia tecnológica para la producción en huertas urbanas y periurbanas, planteada dentro del proyecto de inversión 7681 - Fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana en las localidades urbanas de Bogotá, la Entidad identificó y acompañó técnicamente en el actual plan de gobierno a más de 28.446 personas interesadas en recibir asistencia técnica en huertas caseras, comunitarias, escolares e institucionales.

Adicionalmente es importante mencionar las acciones que se desarrollan desde la Secretaría Distrital de Ambiente con las huertas en parques de montaña, la Secretaría Distrital de Educación con las huertas escolares, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico con la inclusión de huerteros en los mercados campesinos, Secretaría Distrital de Educación y Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

3. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA

Esta iniciativa surge principalmente de la ciudadanía con la participación de las siguientes asociaciones de la Localidad de Bosa: Mujeres al surco movimiento ambiental “Huerta Orilla del Río” representada por Edilia Meneses Ariza, Laura Sofía Arango Meneses, María Elsa Pacheco, Hilda Ines Elaica, Johana Ruíz Chavarro, José David Cortés; Colectivo Tinta Silvestre “Huerta Tahuasuca” representada por Marleny Ariza Duarte, Bayron David Realpe Ariza, Johan Alfonso Cuellar Reyes y Marlyn del Carmen Quintero Colina, Huerta Quihicha representada por Lady Carolina Zambrano Hernandez, Mama Quilla Social Ecológica representada por Ivan Felipe Varela Torres, Herederas y Herederos del Saber “La Fortaleza de las Herederas” representada por Maria del Transito Arias Santos, María Herlinda Becerra y Rocío López; junto con José Luis Blanco Avendaño, David Augusto Santos Romero y

Marisol Velasco Peña, estos últimos como líderes sociales quienes se reunieron en diferentes encuentros y mesas de trabajo con el objetivo de recolectar ideas e insumos que permitan institucionalizar el día del huertero y la huertera en Bogotá D.C; así como para proponer al IDPAC la creación de la mesa distrital de agricultura urbana.

Las razones de base que fundamentan la propuesta de elevar a proyecto de acuerdo es la intención de mostrar a los habitantes de la ciudad de Bogotá la importancia ambiental, social, sostenible y económica que representa la actividad de agricultura urbana, que de manera histórica han venido aportando conocimiento, generando cultura ciudadanía, recuperando espacio, fortaleciendo el tejido social y la unión familiar, además de contribuir con el cuidado del medio ambiente y la seguridad alimentaria.

La propuesta de este proyecto busca el reconocimiento a la labor que realizan los huerteros, huerteras y demás promotores de la agricultura urbana en la ciudad de Bogotá D.C., institucionalizando este día para la resignificación de su trabajo y visibilidad de las organizaciones y colectivos que a diario contribuyen a la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente, en procura de mantener una seguridad alimentaria.

Así mismo con la implementación de la mesa distrital de agricultores urbanos, se articulan las acciones y se fortalecen los procesos sociales, escolares, comunitarios e institucionales donde se desarrolla la actividad, impactando de manera positiva a los huerteros y huerteras de la ciudad.

Las razones de base que fundamentan la propuesta de elevar a proyecto de acuerdo es la intención de mostrar a los habitantes de la ciudad de Bogotá la importancia ambiental, sostenible y económica que representa las actividades desarrolladas por los campesinos y campesinas urbanos-as que de manera histórica han venido aportando conocimiento, generando cultura ciudadanía, labrando la tierra con sus manos, para aportar al sustento de sus familias, contribuir con el cuidado del medio ambiente y la seguridad alimentaria.

No obstante lo anterior, la labor realizada en algunos casos es invisible, no es conocida por muchas personas, cuenta con un sin número de barreras por no contar con insumos, herramientas, espacios adecuados para la siembra, falta de comercialización de los productos; y en muchas ocasiones la ausencia de apoyo institucional por parte de las entidades distritales que tienen competencia en el tema; así las cosas, urge realizar acciones desde el Cabildo Distrital en pro de los huerteros y huerteras para reconocer,

dignificar y garantizar su quehacer diario.

En el marco de lo anterior, se busca institucionalizar el día del huertero y huertera en Bogotá, el cual se convierte en un requerimiento importante para la sociedad teniendo en cuenta las necesidades sociales, alimentarias, económicas y de conservación del medio ambiente dadas las condiciones actuales en el mundo entero y particularmente en la economía nacional y en el Distrito, antes, durante y después de la pandemia del Covid19, generando una brecha mayor en los estratos socioeconómicos, viéndose afectados en nuestro caso el efecto de los altos precios de los alimentos de la canasta familiar ya que actualmente se encuentran costosos y de difícil acceso; de igual forma se suma a esto la situación de falta de empleabilidad en especial de las mujeres cabeza de familia quienes por estar en el cuidado de sus hijos no tiene oportunidades laborales visibles y las pocas que se encuentran hacen que se vea más el espacio de desigualdad salarial para poder acceder al sustento diario basado en la calidad de vida de sus familias; es por ello que se crea la necesidad de hacer sustentable su alimentación diaria a partir del fortalecimiento y aprovechamiento de sus espacios a realizar en zonas blandas (como antejardines o lotes sin construcción) o en zonas duras (terrazas, patios), utilizando la fuerza de trabajo en conjunto, el contar con un área libre disponible, el aprovechamiento de las aguas lluvia y los residuos sólidos para realizar abonos orgánicos (compostaje).

También se puede evidenciar una invisibilidad a la labor, la cual requiere de la atención institucional de acuerdo a la seguridad alimentaria, todo desde el punto de vista nutricional con enfoque a la salud de los connacionales, también de forma histórica se puede determinar que el país tiene diversidad de suelos y por la falta de atención, el campo pasó hacer en segundo plano a sabiendas de la riqueza que ostentamos en la tierra y la falta de aprovechamiento de estos espacios. Es de entender que dada la participación de nuestros gobernadores y la firma de los TLC'S hizo que la situación en Colombia tuviese un punto de quiebre en la adquisición de productos de la canasta familiar y los costos se dispararon, lo cual hace que esté presente la fragilidad de muchas comunidades de estratos socioeconómicos bajos y repercuta en una asistencia en la alimentación básica sana; ahora bien, dentro de la actividad de los huerteros y huerteras, también se puede identificar que no existe un incentivo que apoye y fortalezca esta actividad, tampoco existe un control frente a la mitigación de costos de precios sobre los insumos para la actividad.

Dentro de la actividad se puede determinar que, dada la escasez de alimentos, se puede impulsar el rol de huertero y huertera como labor rutinaria siempre con la intención de

solventar la escasez de alimentos, de manera que se pueda generar a través de autocultivo y ayudar al cambio climático.

Teniendo en cuenta lo anterior se requiere del compromiso de las instituciones distritales que tienen competencias en el tema, para apoyar las garantías de los huerteros y huerteras en el distrito capital, con base en programas y proyectos para la sostenibilidad económica y ambiental como, por ejemplo, las garantías laborales que adopten las instituciones que por su naturaleza deben cumplir con reglamento de los desafíos ambientales y seguridad alimentaria.

Para concluir, es pertinente indicar que, las huertas tienen una gran importancia en diferentes aspectos de la sociedad y el medio ambiente. A continuación, se mencionan algunas de las razones por las cuales las huertas son importantes:

1. **Seguridad alimentaria:** Las huertas juegan un papel crucial en la producción de alimentos. Permiten el cultivo de frutas, verduras, legumbres y hierbas, lo que contribuye a la seguridad alimentaria de las comunidades. Al cultivar alimentos localmente, se reduce la dependencia de la importación de productos agrícolas y se fomenta la autosuficiencia alimentaria.
2. **Salud y nutrición:** Las huertas proporcionan acceso a alimentos frescos y saludables. Los productos cultivados en huertas suelen ser más nutritivos que los alimentos procesados y tienen un menor contenido de pesticidas y otros productos químicos. Además, el cultivo de alimentos en huertas promueve una dieta equilibrada y diversa, lo que contribuye a una mejor salud.
3. **Protección del medio ambiente:** Las huertas contribuyen a la conservación del medio ambiente de diversas formas. En primer lugar, promueven la agricultura sostenible al utilizar técnicas de cultivo orgánicas y evitar el uso excesivo de productos químicos. Además, las huertas ayudan a conservar la biodiversidad al proporcionar hábitats para insectos beneficiosos, aves y otros animales. También reducen la huella de carbono al disminuir la necesidad de transporte de alimentos desde áreas distantes.
4. **Educación y sensibilización:** Las huertas ofrecen oportunidades educativas tanto para niños como para adultos. Son espacios donde se puede aprender sobre la importancia de la agricultura, el ciclo de vida de las plantas, la conservación de los recursos naturales y la conexión entre la comida y el medio ambiente. Las huertas

comunitarias también fomentan la colaboración, el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades prácticas.

5. **Mejora de la calidad de vida:** Las huertas comunitarias promueven la interacción social y la cohesión entre los miembros de una comunidad. Proporcionan espacios verdes para el esparcimiento y el contacto con la naturaleza, lo que contribuye al bienestar emocional y mental de las personas. Además, las huertas pueden servir como centros de encuentro y promover la participación ciudadana.

Finalmente, la importancia de esta iniciativa radica en el impacto positivo y las oportunidades que genera esta labor de las huertas; donde tienen espacio en los mercados campesinos ya que permite el posicionamiento de la agricultura urbana, esto con el fin de apoyar a los agricultores urbanos vender sus productos, fortalecer el trueque y encadenamientos comerciales con empresas, restaurantes y otros establecimientos del sector alimenticio.

4. NORMATIVIDAD

4.1 CONSTITUCIONALIDAD

ARTÍCULO 1. “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales” ...

- Preámbulo, los artículos 1 y 2 determinan que Colombia es un Estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista fundado en el respeto de la dignidad humana, la diversidad étnica y cultural, estableciendo el estatus especial para las comunidades indígenas.

- El numeral 5 del artículo 40 establece que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, para hacer efectivo este derecho puede: “(...) 5. *Tener iniciativa en las corporaciones públicas (...)*”.

- El Artículo 58 prevé que “(...) *La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica (...)*”.

- El artículo 79 establece que “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos

*fin*es". (Sublíneas y cursiva fuera de texto).

- El artículo 80 determina que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

- El artículo 361 modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 05 de 2011, ordena que los ingresos del Sistema General de Regalías se destinarán al financiamiento de proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales; al ahorro para su pasivo pensional; para inversiones físicas en educación, para inversiones en ciencia, tecnología e innovación; para la generación de ahorro público; para la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos y conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; y para aumentar la competitividad general de la economía, buscando mejorar las condiciones sociales de la población.

-El artículo 366 dispone que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.

- El artículo 334 modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 03 de 2011 prevé que la dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso, el gasto público social será prioritario.

4.1.1 **Bloque de Constitucionalidad:**

Día Mundial del Horticultor Unesco¹

El 17 de mayo se celebra el día del Horticultor, establecido por la Organización de las

¹ https://www.clarin.com/rural/hoy-celebra-mundo-dia-horticultor_0_1Y5NemBkP.html

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en todo el mundo como homenaje a las personas que trabajan en la propagación de las plantas, mejora de las cosechas, abonos de las plantas e ingeniería genética, bioquímica de la planta, fisiología de la planta, y el almacenaje, procesado, y transporte de frutas, bayas, frutos secos, verduras, flores, árboles, arbustos, y césped.

Los horticultores mejoran el rendimiento de las cosechas, su calidad y su valor nutricional, su resistencia a los insectos, enfermedades, y a los cambios ambientales. Se utiliza la genética como una herramienta fundamental en el desarrollo de plantas que pueden sintetizar moléculas químicas que se pueden emplear en la lucha contra enfermedades.

Día Internacional del Agricultor

El 09 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Agricultura como un homenaje a la ardua labor que han desempeñado las personas que con esmero le dedican su vida a cultivar la tierra, con el fin de producir alimentos frescos y de calidad, no solo para el consumo sino también en contribución a un crecimiento económico continuo de la sociedad.

FAO Sistemas de Alimentación²

Diferentes presiones -como el rápido crecimiento demográfico, la urbanización, el aumento de la riqueza y los consiguientes cambios en los hábitos de consumo- están poniendo a prueba la capacidad de nuestros sistemas alimentarios para proporcionar alimentos nutritivos y ayudar a ofrecer mejores oportunidades de subsistencia de forma medioambientalmente sostenible. Nuestros sistemas alimentarios contribuyen a los fenómenos meteorológicos extremos -y se están viendo afectados por ellos- asociados con el cambio climático, a la degradación de la tierra y la pérdida de la biodiversidad. Para hacer frente a estos desafíos es necesario un enfoque sistémico que aborde su alcance y dificultades de una manera integral y sostenible.

Un sistema alimentario sostenible es aquel que garantiza la seguridad alimentaria y la nutrición de todas las personas de tal forma que no se pongan en riesgo las bases económicas, sociales y ambientales de éstas para las futuras generaciones. Esto significa que siempre es rentable, garantizando la sostenibilidad económica; que ofrece amplios beneficios para la sociedad, asegurando la sostenibilidad social; y que tiene un efecto positivo o neutro en los recursos naturales, salvaguardando la sostenibilidad del medio

² <https://www.fao.org/food-systems/es/>

ambiente.

4.1.2 Jurisprudencia de la Corte Constitucional

La línea de jurisprudencial de rango Constitucional en lo concerniente al tema ecológico y del cambio climático se desarrolla en las siguientes sentencias:

Sentencia T-406 de 1992

“La Constitución está concebida de tal manera que la parte orgánica de la misma solo adquiere sentido y razón de ser como aplicación y puesta en obra de los principios y de los derechos inscritos en la parte dogmática de la misma. La carta de derechos, la nacionalidad, la participación ciudadana, la estructura del Estado, las funciones de los poderes, los mecanismos de control, las elecciones, la organización territorial y los mecanismos de reforma, se comprenden y justifican como transmisión instrumental de los principios y valores constitucionales. No es posible, entonces, interpretar una institución o un procedimiento previsto por la Constitución por fuera de los contenidos materiales plasmados en los principios y derechos fundamentales (...).”

Sentencia T-411 de 1992

“La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente”.

Sentencia C- 671 de 2001

“Conforme a las normas de la Carta el medio ambiente es un derecho constitucional fundamental para todos los individuos de la especie humana y el Estado está obligado a velar por su conservación y debida protección, procurando que el desarrollo económico y social sea compatible con las políticas que buscan salvaguardar las riquezas naturales de la Nación.

Esboza Ley 628 de 2000 por medio de la cual se aprueba la ‘Enmienda del Protocolo de

Montreal “... desarrolla los preceptos constitucionales que consagran la cooperación internacional en campos indispensables para la preservación de la salud y la vida de las personas, contenidos en el Preámbulo y en los artículos 1, 2 y 9 de la Carta aprobada por la Novena Reunión de las Partes’, suscrita en Montreal el 17 de septiembre de 1997(...)”.

Sentencia C-339 de 2002

“Nuestra Constitución provee una combinación de obligaciones del Estado y de los ciudadanos junto a un derecho individual (artículos 8, 95 numeral 8 y 366). Es así como se advierte un enfoque que aborda la cuestión ambiental desde los puntos de vista ético, económico y jurídico: Desde el plano ético se construye un principio biocéntrico que considera al hombre como parte de la naturaleza, otorgándoles a ambos valor. Desde el plano económico, el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos ilimitadamente, debiendo sujetarse al interés social, al ambiente y al patrimonio cultural de la nación; encuentra además, como límites el bien común y la dirección general a cargo del Estado. En el plano jurídico el Derecho y el Estado no solamente deben proteger la dignidad y la libertad del hombre frente a otros hombres, sino ante la amenaza que representa la explotación y el agotamiento de los recursos naturales; para lo cual deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas jurídicas y principios donde prime la tutela de valores colectivos frente a valores individuales”.

Sentencia T-415 de 1992

“El derecho al medio ambiente y en general, los derechos de la llamada tercera generación, han sido concebidos como un conjunto de condiciones básicas que rodean al hombre, que circundan su vida como miembro de la comunidad y que le permiten su supervivencia biológica e individual, además de su desempeño normal y desarrollo integral en el medio social. De esta manera deben entenderse como fundamentales para la supervivencia de la especie humana. Nuestra Constitución consagra no sólo la protección de los derechos fundamentales cuando quiera que estén afectados por daños ambientales, sino también unos derechos del ambiente específicos -a participar en las decisiones que lo afecten, por ejemplo- y también un derecho fundamental al medio ambiente”.

Sentencia SU-442 de 1997

“(...) Este derecho se concibe como un conjunto de condiciones básicas que rodean a la persona y le permiten su supervivencia biológica e individual, lo cual garantiza a su vez su desempeño normal y su desarrollo integral en el medio social. En este sentido, el ambiente

sano es un derecho fundamental para la supervivencia de la especie humana; sin embargo, la vulneración del mismo conlleva en determinados casos, al quebrantamiento de derechos constitucionales fundamentales como la vida o la salud (...)”.

Sentencia T-760 de 2007

“(…) La protección al medio ambiente es un principio que irradia todo el orden jurídico puesto que es obligación del Estado proteger las riquezas naturales de la Nación. De otro lado, aparece como el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, derecho constitucional que es exigible por diversas vías judiciales. Y, finalmente, de la constitución ecológica derivan un conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a los particulares”.

Sentencia T 154 de 2013

“La conservación del ambiente no solo es considerada como un asunto de interés general, sino principalmente como un derecho internacional y local de rango constitucional, del cual son titulares todos los seres humanos, “en conexidad con el ineludible deber del Estado de garantizar la vida de las personas en condiciones dignas, precaviendo cualquier injerencia nociva que atente contra su salud”. Al efecto, la Constitución de 1991 impuso al Estado colombiano la obligación de asegurar las condiciones que permitan a las personas gozar de un ambiente sano, y dispuso el deber de todos de contribuir a tal fin, mediante la participación en la toma de decisiones ambientales y el ejercicio de acciones públicas y otras garantías individuales, entre otros”.

4.2 LEGALIDAD

Ley 9 de 1979, *“por la cual se dictan medidas sanitarias”*

Decreto Ley 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente

Ley 165 de 1994 Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad Biológica", hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992

4.3 Normatividad Distrital:

Decreto 555 de 2021 “Por medio del cual se adopta la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá D.C.”

El numeral 12 del artículo 4 sobre los principios rectores determina que la autonomía y seguridad alimentaria, a través de la protección de sus suelos agrícolas y pecuarios, la garantía de su conectividad vial y el fomento de prácticas sostenibles para la producción de alimentos orgánicos y de la mejor calidad, para distribución de circuitos cortos.

El artículo 8 de la política de revitalización urbana y protección a moradores y actividades productivas, se orienta a intervenir estratégicamente, vinculando las dinámicas patrimoniales, ambientales, sociales y culturales, para proteger y garantizar la permanencia y calidad de vida de los pobladores originales de las zonas de intervención, lo que significa atender los espacios de relación y a la calidad del espacio público, contemplando la diversidad social y de usos, la percepción de libertad, el sentimiento de comunidad, respetar todas las formas de vida, junto al cuidado y mantenimiento del ambiente, tanto natural como construido, y en términos de acceso a la vivienda, al empleo y a los servicios públicos domiciliarios. La revitalización urbana se asegura de proveer a la ciudad con mejores estándares de sostenibilidad ambiental, a través del ecourbanismo, y la mejor integración de los espacios verdes, naturales y resilientes con los entornos de vida, asegurando un hábitat digno, impulsando la economía y consolidando el sentido de pertenencia en los sectores de intervención.

El artículo 9 sobre los elementos Locales del Modelo de Ocupación Territorial prevé que el reverdecimiento urbano como garantía de conectividad de los ecosistemas estratégicos que estructuran el territorio

El artículo 11 sobre conectores ecosistémicos sostiene que *“(...) Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos, a través de acciones incluidas en el contenido programático del presente Plan (...)”*.

En la sección 1 sobre las definiciones de los usos de las **DEFINICIONES DE LOS USOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL**

Artículo 43. Definición de los usos de la Estructura Ecológica Principal. Para los usos y condicionamientos al interior de la Estructura Ecológica Principal, se aplicarán las

siguientes definiciones:

“... Uso: Sostenible: Comprende todas las actividades de producción y extracción, relacionadas con el aprovechamiento sostenible de la diversidad

b. Agricultura urbana y periurbana - AUP-. Actividades agroecológicas como un modelo de producción, comercialización y consumo de alimentos en espacios urbanos y periurbanos, que permita la organización de comunidades aledañas para implementar Sistemas agrícolas hacia la soberanía alimentaria, por medio de prácticas en las que se aprovechen los residuos, se optimicen los recursos y no interrumpa las interacciones con los ecosistemas. Podrán emplearse, entre otros, los siguientes sistemas agrícolas: Agricultura vertical, sistemas biointensivos, sistemas de raíces flotantes, producción en camas elevadas, agricultura del reciclaje, agricultura familiar, producción y manejo de fertilizantes biológicos y preparación de bio controladores, según los lineamientos de la autoridad ambiental competente...”

Artículo 74. Condicionamientos y lineamientos de los usos de la Estructura Ecológica

Principal. Para el desarrollo de los usos dentro de la Estructura Ecológica Principal deben cumplir con los siguientes requisitos:

Las actividades de agricultura urbana y periurbana y la agroecología se realizarán bajo el liderazgo del sector Ambiente en coordinación con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en el marco de las competencias de cada entidad, de conformidad con las competencias establecidas en el Acuerdo 605 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya y teniendo en cuenta en lo pertinente la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Bogotá: Construyendo Ciudadanía Alimentaria 2019 - 2031. Su desarrollo debe estar armonizado con el plan de manejo del área y los lineamientos establecidos en el presente Plan, con prioridad en la economía campesina, familiar y comunitaria y orientados al autoabastecimiento, mercados campesinos y la educación ambiental con enfoque agroecológico

CAPÍTULO 3 ECOURBANISMO Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE. Artículo 117. Política Distrital de Ecourbanismo y Construcción Sostenible. El presente Plan reemplaza la Política Pública Distrital de Ecourbanismo y Construcción Sostenible definida mediante el Decreto 566 de 2014, la Resolución 1319 de 2015 y el Decreto Distrital 613 de 2015.

La administración distrital, dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia

del presente Plan, a través de las Secretarías Distritales de Planeación, Ambiente y Hábitat adoptará mediante decreto la reglamentación de las disposiciones de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, para lo cual tendrá en cuenta los siguientes elementos:

1. Reverdecimiento Urbano: Superficies verdes y arborización en las áreas libres privadas, infraestructura vegetada en cubierta y fachada. Artículo 121. Cobertura de espacio público

...

Artículo 122. Criterios de diseño para el sistema de espacio público peatonal y para el encuentro.

4. Conectividad ambiental. c. Se deben utilizar materiales que observen criterios de bajas emisiones, procesos constructivos y de integración con el entorno y que en su desarrollo que propendan por la sostenibilidad ambiental, de acuerdo con las condiciones que se reglamenten. para la construcción sostenible; uso de materiales reciclados e innovadores, con muros y terrazas verdes, promoción de huertas urbanas, nanotecnología con bio-concreto, ciclovías solares, plataformas que produzcan energía al ser pisadas (PA VECEN), nano-partículas en hojas

Artículo 125. Servicios conexos y actividades en el sistema de espacio público peatonal y para el encuentro. 8. Agricultura urbana. Aquellos que desarrollan modelos de producción agroecológica de alimentos en espacios urbanos, tales como, las huertas urbanas que permiten la organización de comunidades aledañas para implementar sistemas agrícolas, por medio de prácticas en las que se aprovechen los residuos, se optimicen los recursos y no interrumpa las interacciones con los ecosistemas, utilizando una gama de tecnologías con el fin de generar procesos de apropiación en el uso, goce y disfrute del espacio público, que permita a su vez la producción de alimentos, la gestión ambiental, el uso sostenible de los recursos naturales y la construcción del tejido social. Para su desarrollo se tendrá en cuenta en lo pertinente, la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Bogotá: Construyendo Ciudadanía Alimentaria 2019 —2031.

Acuerdo Distrital 761 de 2020 *“Por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, en el artículo 34. Programa distrital de agricultura urbana y periurbana.* Se promoverá la conformación de huertas orgánicas con prácticas agroecológicas en espacios urbanos institucionales y comunitarios, a través de la implementación de un programa distrital de agricultura urbana, periurbana y rural, articulado a los mercados campesinos, con participación de organizaciones

campesinas, que a través de sus estructuras garanticen que el pequeño y mediano productor campesino aporte al intercambio cultural y a la transferencia de conocimientos ancestrales, contribuyendo al proceso de implementación en terrazas, patios de viviendas, balcones de edificios y en huertas de campesinos periurbanos.

Resolución No. 361 de 30 de diciembre de 2020 *“Por la cual se establecen disposiciones en materia de reglamentación de la actividad de agricultura urbana y periurbana agroecológica en el Espacio Público del Distrito Capital, regulado por el Decreto 552 de 2018”*

Resolución No. 287 del 12 de octubre de 2021 *“Por medio de la cual se adopta institucionalmente el protocolo de agricultura urbana y periurbana agroecológica en espacio público y se dictan otras disposiciones”*

5. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C

La competencia del Concejo de Bogotá, D.C. para aprobar esta iniciativa se sustenta jurídicamente en los artículos 313 y 322 de la Constitución Política de Colombia y en los numerales 1 y 25 del artículo 12 del Decreto 1421 de 1993, que establece:

➤ **Constitución Política de Colombia.**

“Artículo 313. Corresponde a los concejos: 1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen.”

“Artículo 322 Inciso 1o. modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo No. 1 de 2000. El nuevo texto es el siguiente: Bogotá, Capital de la República y del departamento de Cundinamarca, se organiza como Distrito Capital. (...) A las autoridades distritales corresponderá garantizar el desarrollo armónico e integrado de la ciudad y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito; a las locales, la gestión de los asuntos propios de su territorio.”

➤ **Decreto Ley 1421 de 1993.** *“Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá”*

“Artículo 12 - ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

13. Regular la preservación y defensa del patrimonio cultural.

25. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes.”

6. IMPACTO FISCAL

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 “En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”.

Teniendo en cuenta lo anterior, hay que aclarar que la presente iniciativa no genera un impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez, que no se incrementará el presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO
ANDRÉS DARÍO ONZAGA NIÑO
Concejal de Bogotá
Partido Alianza Verde

PROYECTO DE ACUERDO NO 221 DE 2025

PRIMER DEBATE

"Por medio del cual se institucionaliza el día del huertero y huertera en Bogotá, se crea la Mesa Distrital de Huerteros en el Distrito Capital., se establecen lineamientos y se dictan otras disposiciones "

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.,

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 1, 13 y 25 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993

ACUERDA

ARTÍCULO 1.- OBJETO: Institucionalizar el día del Huertero y la Huertera siendo este el segundo domingo del mes de febrero de cada año en reconocimiento a la labor que ellos realizan en la ciudad de Bogotá D.C; así como hacer la creación de la Mesa Distrital de Huerteros y Huerteras.

Parágrafo. La Administración Distrital definirá los lineamientos generales y estratégicos para la creación de la Mesa Distrital de Huerteros, vinculada con las entidades competentes con la participación de la ciudadanía para promover la incidencia de las redes locales de huertas existentes con el fin de visibilizar los procesos de agricultura urbana, así mismo, visualizar la resignificación del territorio para el desarrollo de actividades de alternativas sostenibles.

ARTÍCULO 2.- DEFINICIONES. –Para efectos del presente Acuerdo se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

Agricultura urbana y periurbana agroecológica: Entiéndase agricultura urbana y periurbana agroecológica como un modelo de producción de alimentos en espacios urbanos y periurbanos, que permita la organización de comunidades aledañas para implementar sistemas agrícolas, por medio de prácticas en las que se aprovechen los residuos, se optimicen los recursos y no interrumpa las interacciones con los ecosistemas, utilizando una gama de tecnologías (Acuerdo 605 de 2015).

La agricultura urbana se realiza en la clasificación de suelo urbano determinada para la ciudad, y la agricultura periurbana se desarrolla en el suelo no urbano de la franja de adecuación de los cerros orientales, según el Plan de Manejo del Decreto Distrital 485 de 2015 (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015), los suelos de expansión urbana y centros poblados establecidos en el Decreto Distrital 555 del 2021 POT de Bogotá (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2021); lo anterior, según las normas que los implementen, adicionen, modifiquen o sustituyan.

La agricultura urbana y periurbana tiene como unidad de producción agrícola la huerta, que según su organización social puede ser: casera, comunitaria, escolar o institucional.

Huerta: es un espacio físico en el que se desarrollan sistemas agrícolas como modelos de producción de plantas alimenticias, medicinales o aromáticas, generalmente con manejo agroecológico, y donde se promueve el acceso a la alimentación, el autoconsumo y en ocasiones la generación de excedentes para el intercambio de productos frescos o transformados. Las huertas se implementan en áreas urbanas o periurbanas, en espacios públicos y en zonas blandas (en superficies permeables, directamente en el suelo) y/o en zonas duras (en superficies construidas o duras como terrazas, balcones, o patios, en las que se utilizan contenedores). Por lo general, las huertas integran policultivos de especies vegetales de diferentes hábitos, como árboles, arbustos, enredaderas y especialmente hierbas, de las que se aprovechan, según su uso, las diferentes partes de las plantas.

De acuerdo con las características de las huertas, los conocimientos técnicos, motivaciones y posibilidades de los interesados en desarrollar sistemas agrícolas en el Distrito Capital, las huertas pueden integrar además del área de siembra o de cultivo: zona de propagación, área de aprovechamiento de residuos orgánicos para la producción de abonos y cosecha de agua lluvia.

La tipología de huertas es la siguiente:

Huertas caseras: huertas conformadas por una persona o por los integrantes de un mismo núcleo familiar.

Huertas comunitarias: huertas conformadas por miembros de diferentes núcleos familiares o por organizaciones o grupos comunitarios (vecinos, comunidad, colectivos sociales, entre otros) articulados con procesos sociales.

Huertas escolares: huertas conformadas por comunidad educativa de los jardines, colegios, universidades y similares, que integran generalmente docentes, administrativos, estudiantes y padres de familia, articulados a procesos pedagógicos y sociales.

Huertas institucionales: huertas conformadas bajo la responsabilidad de entidades o instituciones que vinculen en su proceso productivo generalmente a usuarios, beneficiarios, integrantes, empleados o funcionarios, articulados al cumplimiento de objetivos.

En el contexto urbano y periurbano, las huertas pueden integrarse funcionalmente con procesos económicos en agroparques urbanos.(Jardín Botánico 2021)

Agroparque urbano: es una huerta que articula encadenamientos productivos, integrando funcionalmente la producción agrícola con manejo agroecológico, la transformación de los productos de la huerta, la comercialización o el intercambio. La implementación de esta huerta estará acorde con los usos del suelo permitidos en el Plan de Ordenamiento Territorial y con los permisos requeridos por la autoridad competente para la producción, transformación o comercialización de los productos a que diera lugar; pueden ser huertas comunitarias, escolares e institucionales.

La implementación y mantenimiento de las huertas en espacio público será conforme al Decreto 493 de 2023 “Por medio del cual se reglamenta la administración y el aprovechamiento económico del espacio público en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones” (DADEP, 2023), y Resolución 287 de 2021, “Por medio de la cual se adopta institucionalmente el Protocolo de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica en Espacio Público y se dictan otras disposiciones (JBB, 2021), lo anterior, según las normas que los implementen, adicionen, modifiquen o sustituyan.

Huertero - Huertera: Personas promotoras consagradas a cultivar en espacio urbano y periurbano, destinando sus espacios disponibles para la siembra de especies agroalimentarias para el autoconsumo o comercialización.

ARTÍCULO 3.- Lineamientos y competencias para el cumplimiento del objeto del acuerdo

A. Institucionalización del día del huertero y huertera en Bogotá de competencia del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC

B. Creación de la Mesa Distrital de Huerteros en el Distrito Capital y sus lineamientos de competencia del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC

C. Procesos de formación y capacitación en agricultura urbana de competencia del Jardín Botánico

D. Generar espacios para la comercialización de productos de las huertas urbanas y periurbanas agroecológicas (teniendo en cuenta principios de comercio justo) de competencia de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Instituto para la Economía Social, el Jardín Botánico José Celestino Mutis y la Secretaría Distrital de Integración Social.

E. Destinación de espacios institucionales, escolares y públicos para el desarrollo de la actividad de agricultura urbana por parte de grupos organizados, de acuerdo a la normatividad vigente de competencia de la Secretaría de Educación Distrital y el Jardín Botánico José Celestino Mutis.

ARTÍCULO 4.- RESPONSABILIDADES. La Administración Distrital, en cabeza del IDPAC con el acompañamiento de la Secretaría Distrital de Ambiente, el Jardín Botánico José Celestino Mutis, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, el Instituto para la Economía Social, la Secretaría Distrital de Integración Social, la Secretaría de Educación Distrital y las demás entidades competentes serán las encargadas de promover y desarrollar el día del huertero y la huertera en Bogotá y de la creación de la Mesa Distrital de Agricultura Urbana en el marco de sus competencias.

ARTÍCULO 5.-VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente acuerdo rige a partir del día siguiente de su publicación y deroga las disposiciones que sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PROYECTO DE ACUERDO NO 222 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE BRINDAN MEDIDAS PARA PROMOVER Y FORTALECER LAS REDES DE LACTANCIA MATERNA EN EL DISTRITO CAPITAL”.

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. OBJETO DEL PROYECTO

El objetivo principal del presente Proyecto de Acuerdo es el de fortalecer y promover las redes de lactancia materna; así como también garantizar el derecho a la salud de las madres lactantes y a la primera infancia por medio de la promoción y fortalecimiento de las redes y a la comunidad lactante en general.

2. ANTECEDENTES.

El presente Proyecto de Acuerdo había sido presentado en el periodo legislativo anterior, el cual contó con ponencia positiva con modificaciones y fue asignado con el número 388 de 2021 en la comisión primera del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Proyecto de Acuerdo.	Nombre del Proyecto	Ponentes.	Sentido Ponencia.
388 de 2021	"Por medio del cual se brindan medidas para promover y fortalecer las redes de lactancia materna en el Distrito Capital".	H.C. Celio Nieves Herrera.	Positiva con modificaciones
		H.C. Martín Rivera Álzate	Positiva con modificaciones
077 de 2022	"Por medio del cual se brindan medidas para promover y fortalecer las	H.C. Luz Marina Gordillo Salinas	Positiva con modificaciones

	redes de lactancia materna en el Distrito Capital".	H.C. Ana Teresa Bernal Montañez	
159 de 2022	"Por medio del cual se brindan medidas para promover y fortalecer las redes de lactancia materna en el Distrito Capital".	H.C. Luz Marina Gordillo Salinas H.C. Ana Teresa Bernal Montañez	Positiva con modificaciones

3. JUSTIFICACIÓN

La lactancia materna, según lo contemplado en el Plan Decenal de Lactancia Materna, es definido como la acción natural de alimentar al bebé con el alimento producido por la madre, conocido como leche materna, o en su defecto por una madre sustituta que asuma ese rol.³

Este alimento vital para la vida de los niños, además de ser la mejor opción que se puede ofrecer, es un factor de relevancia ya que influye en el desarrollo de cualquier sociedad organizada, en esencia, porque ofrece los beneficios completos que ningún otro alimento pudiera brindar; además favorece su adaptación al mundo, en el desarrollo psicoafectivo y su estrecha relación con la madre. Así mismo, es relevante indicar que la leche materna protege al menor de enfermedades infecciosas, y es el alimento más nutritivo que existe, puesto que, *"estimula su desarrollo emocional y motriz, su coeficiente intelectual, su desarrollo visual, auditivo y comunicativo"*⁴, por tanto, es dable afirmar que logrando beneficios tanto físicos como psicológicos en los menores.

La leche materna, no solo beneficia a los bebés en su alimentación, sino que también sus beneficios se extienden a las madres, desde el mismo momento del parto, toda vez que ayuda en la expulsión de la placenta, disminuye el riesgo de hemorragias posparto, evita la mastitis y reduce la probabilidad de cáncer.

Uno de los principales problemas de los menores de edad, se encuentra precisamente en la inadecuada alimentación, debido a que existe un aumento en la vulnerabilidad y riesgo de desnutrición en los menores de dos (2) años; esto los afecta tanto a ellos como individuos titulares de derechos, como a la sociedad, incrementado aún más la brecha de desigualdad.

³ Plan Decenal de Lactancia Materna 2010 – 2020.

⁴ Fondo de las Naciones Unidas para la infancia.

Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud -OPS- ha mencionado que las prácticas inadecuadas de lactancia materna, cuando no se realizan de manera exclusiva y duran los primeros seis (6) meses de vida del bebé, causan alrededor de **1,4 millones de muertes en el mundo** y del 10% de las enfermedades en niños de hasta cinco (5) años de edad, lo cual refleja un aumento en la tasa de mortalidad de los infantes (Caicedo, 2012).

3.1 CONTEXTO INTERNACIONAL

En el siglo XX, tras una crisis de morbilidad y mortalidad infantil, surge un renovado movimiento que trabaja a favor de la lactancia materna. Las acciones en pro de ella las inician, en primera instancia, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que desarrollaron proyectos que favorecían la alimentación como derecho fundamental de la población mundial, en especial la de la infancia, luego de las infortunadas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en este campo.

En 1978 se hace la Declaración de Alma-Ata, en la antigua Unión Soviética (URSS), sobre Atención Primaria de Salud, en la cual se considera *“la necesidad de una acción urgente por parte de todos los gobiernos, de todo el personal de salud y de desarrollo y de la comunidad mundial para proteger y promover la salud de todos los pueblos del mundo”*,⁵ que convoca no sólo a las instituciones de salud, sino a aquellas que pudieran influir en decisiones que fomenten la igualdad entre los países desarrollados y los que están en vía de desarrollo y mejoren la calidad de vida en salud de los habitantes del planeta.

De acuerdo con la Declaración, los gobiernos deben formular políticas, estrategias y planes de acción nacionales a favor de la promoción y protección de la salud de sus habitantes. Esto impulsa el desarrollo económico y social sostenido, al igual que contribuye al mejoramiento de la calidad de la vida.

En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual se publica en 1990. En ésta se resalta, en el artículo 24, el derecho de los niños a disfrutar del más alto nivel posible de salud, lo cual incluye que los

⁵ Pan American Health Organization. Declaración de Alma Ata (http://www.paho.org/Spanish/dd/pin/alma-ata_declaracion.htm). Fecha de acceso: 07-12-2009.

padres y niños conozcan los principios básicos de salud, nutrición y ventajas de la lactancia materna.

En 1991 es firmado el Memorándum de Colaboración Interagencial en “apoyo a las acciones de salud de la niñez, la mujer y los y las adolescentes”. A éste se acogieron la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la OMS, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la UNICEF, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y USAID. Posteriormente, en Roma, en la Conferencia Internacional de Nutrición (CIN), se ratifica la importancia de que la lactancia materna sea una política de Estado.

En 2004, surge en Luxemburgo el Plan Estratégico sobre la Protección, Promoción y Apoyo a la Lactancia Materna en Europa, redactado por la Comisión Europea y la Dirección Pública de Salud y Control de Riesgos. Se considera que es una prioridad de salud pública para el continente la protección, la promoción y el apoyo de la lactancia. Adicionalmente, se espera que el Plan Estratégico, al ser ejecutado, logre que en Europa mejoren las prácticas y las tasas de lactancia, la responsabilidad de los padres y la conciencia de los organismos de salud.⁶

3.2 CONTEXTO NACIONAL.

En Colombia, las acciones adelantadas en razón a la lactancia materna datan de la década de los sesenta, es en esta época donde se realiza una capacitación muy somera a un grupo de madres y personal de la salud en estos temas que, en ese entonces, no tenían el impacto que se tiene hoy en día. En 1970 el Gobierno Nacional realiza la primera campaña nacional a favor de la lactancia materna, la cual se denominó Plan Nacional de Alimentación y Nutrición (PAN).

La Ley 12 de 1991 ratifica la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños y las metas de la Cumbre Mundial de la Infancia, en ese entendido, el Gobierno crea el Plan Nacional de Apoyo a la Lactancia Materna 1991-1994, aquí se fija la primera política donde se *“permitió el desarrollo de iniciativas regionales que permitieron disminuir los índices de morbilidad y mortalidad infantil”*.

En 1993 nace en Colombia la Ley 100, la cual crea el Plan Obligatorio de Salud (POS), por medio de su artículo 162; el Plan de Atención Básica (PAB), por medio del artículo 165, “se

⁶ Plan Nacional de Lactancia 201-2020. Ministerio de Salud y Protección Social.

da prioridad a la atención materno infantil y a la Lactancia Materna”¹⁷ en el artículo 166. Además, incluye en su artículo 132 que las Cajas, Fondos y entidades del sector público deberán financiar y administrar de forma independiente y en cuentas separadas el régimen de amparo a la maternidad. Adicionalmente, la maternidad en su totalidad debe ser cubierta financieramente por el POS.⁷

“Colombia ha participado activamente en las cumbres internacionales en las que se han promulgado las acciones que deben ser llevadas a cabo a favor de la lactancia materna y la nutrición infantil, en general. En consecuencia, los compromisos del país al participar en dichas cumbres generan la necesidad de promulgar leyes y formular políticas y estrategias que fomenten la protección y promoción de la lactancia materna.
Se cuenta, igualmente, con distintos avances y logros regionales y locales, sustentados en la creación y la reglamentación de comités territoriales, sistemas locales de nutrición, programas especiales como madres canguro, estrategias regionales y municipales de compromisos políticos y técnicos a favor de la lactancia materna”⁸

3.3 BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA

Como se puede observar, la lactancia cuenta con múltiples beneficios, tanto para los bebés como para las madres lo que redundaría en beneficios para la sociedad y comunidad en general; en ese sentido con miras de fortalecer y establecer la necesidad de apoyo a las iniciativas para el fomento de la lactancia materna, se presenta a continuación el siguiente cuadro:

Beneficios para los niños	Beneficios para la madre	Beneficios para la sociedad
<ul style="list-style-type: none">La lactancia materna es el alimento ideal para los niños, si	<ul style="list-style-type: none">Se reduce la mortalidad de las madres y las	<ul style="list-style-type: none">Aminora la posibilidad de contagio de

⁷ Ibidem
⁸ Plan Nacional Decenal de Lactancia Materna 210-2020, Ministerio de Salud y Protección Social.

<p>se proporciona de manera exclusiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Favorece el crecimiento y desarrollo físico e intelectual. • Ofrece una alimentación completa, equilibrada y adecuada. • Protección inmunológica y menor frecuencia y gravedad de infecciones. • Beneficia y afianza el vínculo materno afectivo-emocional del bebé. 	<p>hemorragias posparto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disminuye el riesgo de contraer cáncer. • Ayuda a recuperar el peso después del parto. • Fortalece el vínculo materno afectivo con el bebé. • Ayuda a que el útero vuelva pronto a su tamaño ideal. 	<p>enfermedades de los niños.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduce los gastos en salud. • Favorece el medio ambiente, al reducir los desperdicios de alimentos sucedáneos de la leche materna. • Condición favorable para el desarrollo humano y superación de barreras de ingreso a nutrición adecuada. • Avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-.
--	---	---

La encuesta de lactancia materna -2019-, informó que las familias obtienen distinta información por medio de personas cercanas, fundaciones, y más recientemente por medio digitales como internet y redes sociales. Aquí es claro que es necesario robustecer los canales de comunicación y fortalecer y promover las redes de lactancia materna existentes.

Igualmente, dentro de los aspectos analizados por la encuesta, se identificaron las barreras y dificultades para lograr una lactancia exitosa, debido a que se contemplan factores que impactan de manera negativa esta práctica de lactancia materna, dentro de estos factores se encontraron: opiniones sociales y familiares, dificultad para realizarla por obligaciones y horas laborales, salas o sitios específicos en la cual se pueda realizar.

Esta iniciativa, trae consigo la necesidad de reconocer la labor de la mujer en su trabajo de lactancia, generando un igualdad y equidad de género, así como también poder cerrar las

brechas existentes en la sociedad en cuanto a obligaciones laborales y grados salariales, brindando facilidades, mayor compromiso y reconocimiento a su labora lactante.

Uno de los problemas que se repiten con más frecuencia y dentro de las familias más vulnerables de la capital del país, es la falta de información y la distorsión de la misma, por parte de médicos, trabajadores de la salud, EPS, IPS y comunidad en general; esto deriva o tiene como consecuencia que se creen mitos y falacias alrededor de la lactancia materna en la sociedad; por ende, es necesario fortalecer y promover la lactancia materna en todos los niveles de la sociedad.

3.4 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Existe una correlación directa entre la lactancia, maternidad y los objetivos de desarrollo sostenible, toda vez que la lactancia materna se erige como una posibilidad de cerrar brechas y garantizar un mejor crecimiento y desarrollo en los niños a los cuales se les puede brindar la misma.

Los ODS cubren temas precisos sobre la ecología, la economía y la equidad, donde se intenta dar frente a las raíces de los problemas que causan la pobreza y la desigualdad, ofreciendo una visión igualitaria en todo el mundo, considerando la lactancia materna como una clave para lograr el bienestar de la población.

Si bien las tasas de lactancia aumentaron hacia fines del siglo XX, en las últimas dos décadas se han estancado. Hoy **sólo el 37% de los menores de seis meses tienen la lactancia materna exclusiva**, en los países de medianos y bajos ingresos.

La Lactancia Materna se relaciona con los ODS a través de cinco grandes áreas:⁹



⁹ https://www.sap.org.ar/docs/profesionales/Lactancia_Materna_claves.pdf

SUPERVIVENCIA, SALUD Y BIENESTAR



1 FIN DE LA POBREZA



3 SALUD Y BIENESTAR



4 EDUCACIÓN DE CALIDAD



10 REDUCCIÓN DE DESIGUALDADES



11 COMUNIDADES Y CIUDADES SOSTENIBLES



ÁREA TEMÁTICA 2

AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO



6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO



7 ENERGÍA ADECUADA Y NO CONTAMINANTE



11 COMUNIDADES Y CIUDADES SOSTENIBLES



12 CONSUMO Y PRODUCCIÓN RESPONSABLE



13 ACCIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO



14 VIDA SUBMARINA



15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES



ÁREA TEMÁTICA 3

PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO FEMENINO



1 SIN POBREZA



4 EDUCACIÓN DE CALIDAD



5 IGUALDAD DE GÉNERO



8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO



9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA



10 REDUCCIÓN DE DESIGUALDADES



ÁREA TEMÁTICA 4

FORMAS DE TRABAJO CONJUNTO: ALIANZAS SOSTENIBLES E IMPERIO DE LA LEY



16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS



17 ALIANZA PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS



En aras de mejorar las tasas de lactancia materna es necesario que se modernice y se mejore las políticas públicas, más aún cuando ya se encuentra vencido el Plan Decenal de Lactancia Materna emitido por el Ministerios de Salud y Protección Social. Es necesario seguir fomentado, promoviendo y promocionando la lactancia materna desde la educación y los canales de comunicación propicios y accesibles a la comunidad.

3.5 Importancia de la Lactancia Materna.

La lactancia materna, se erige como una de las soluciones más simples y eficaces en aras de garantizar el derecho a la vida de la población infantil, ya que, tiene el potencial suficiente

para evitar la desnutrición y muerte de los niños, así mismo, sus beneficios indican que quienes reciben la lactancia materna tienen menos probabilidad de contraer diferentes enfermedades dado sus múltiples propiedades; igualmente proporciona los nutrientes necesarios para lograr un crecimiento y desarrollo adecuado, es decir contiene todos los nutrientes perfectos en calidad y cantidad, que son de fácil digestión y absorción, porque son específicos para la especie humana.

Ahora bien, la lactancia materna establece un vínculo único entre madre-hijo, lo que deriva en una experiencia especial y singular, donde no solo protege al niño, sino también blinda y protege la salud de la madre, además es amigable con el medio ambiente y mitiga el impacto económico de las familias, en el entendido que el hogar no utilizaría productos externos, como leches artificiales, biberones y demás.

3.6 LACTANCIA MATERNA EN BOGOTÁ D.C.

Según las cifras oficiales, en Colombia solo el 36,1% de los niños menores de seis meses reciben como único alimento leche materna, lo cual dista de la meta propuesta por la Organización Mundial de la Salud -OMS- que recomienda que se debe llegar al 50% como mínimo; no obstante lo anterior, Bogotá cuenta con alrededor de un 45,6% de lactancia materna exclusiva en su comunidad; así mismo, la ciudad cuenta con 80 IPS que se encuentran certificadas por la Secretaría de Salud como instituciones amigas de la mujer y la infancia, que promueven su uso exclusivo de la lactancia materna en la primera infancia.

De las 342 Salas Amigas de la Familia Lactante certificadas por la Secretaría Distrital de Integración Social que hay en Bogotá, 306 están ubicadas en jardines infantiles, 4 son comunitarias y 32 corresponden a entidades públicas y privadas.

Fortalecer estas estrategias de lactancia materna exclusiva garantiza el crecimiento y atención de la primera infancia desde su gestación y sus primeros años de vida; de acuerdo con el Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional SISVAN.

3.7 BARRERAS O LIMITACIONES.

En cuanto a las barreras para lograr una lactancia exitosa se han podido identificar varias a partir de los resultados arrojados por encuesta, ya que en esta se encontró que existen

múltiples factores que afectan negativamente la práctica de la lactancia materna exclusiva; en esta encontramos factores como:

1. Las opiniones sociales.
2. Dificultades para realizar la práctica con las obligaciones laborales.
3. No existe un acompañamiento real de las Redes de Apoyo.
4. No se tiene un rol activo por parte de los hombres.
5. Falta de información en los profesionales de la salud.

Ahora bien, para mitigar estas limitaciones y entender la lactancia materna con la importancia debida en la alimentación saludable de la primera infancia es necesario que se focalicen esfuerzos hacia el acceso al conocimiento y fortalecimiento de las redes de apoyo para la divulgación de buenas prácticas de lactancia materna.

Igualmente, lo que se pretende es que con un enfoque preventivo y pedagógico se informe a las madres gestantes y lactantes el conocimiento necesario de las mejores prácticas internacionales para la lactancia, así mismo, conocer los riesgos asociados de la lactancia materna. La información a la que se tenga acceso deber ser amplia, ilustrativa y suficiente antes del momento del parto y posteriormente; en el mismo sentido se debe contar con el acompañamiento, necesario durante el periodo de lactancia para lograr una experiencia exitosa.

Por otra parte, la familia es uno de los escenarios más importantes para garantizar los derechos de la mujer en su rol de madre, pues desde un ambiente de reconocimiento y respeto en el desarrollo de esta hermosa actividad, es que se puede ejercer su labor en su integralidad y se posibilitarán las mejores condiciones para que se pueda vivir de forma satisfactoria la maternidad, la lactancia materna y los demás procesos de crianza. Por esta razón, se propone fortalecer las redes de apoyo que tienen acceso a los hogares, dado que están conformadas por madres lactantes y con una experiencia exitosa de lactancia materna. (Caicedo Carrillo, Ocampo, Zena, & Gómez, 2017).

3.8 EVIDENCIA INTERNACIONAL.

Evidencia empírica – beneficios de la lactancia materna

País	Área	Resultados
------	------	------------

Estados Unidos de América ¹⁰	Nacional	Todos los lactantes amamantados en forma exclusiva presentaron menores razones de probabilidad de diarrea, tos, vómitos, razones medias de enfermedad total, resfrío, infección de oído.
Estados Unidos de América ¹¹	Nacional	Los niños y niñas amamantados alguna vez tuvieron un 37% menos probabilidades de riesgo de sobrepeso y un 16% menos probabilidades de sobrepeso que los niños y niñas que nunca fueron.
Reino Unido (Escocia) ¹²	Urbana	Los niños y niñas que recibieron solo leche materna durante 15 semanas o más tenían una menor probabilidad de padecer enfermedades respiratorias que los lactantes amamantados en forma exclusiva durante menos de 15 semanas y aquellos que recibieron otros tipos de alimentación infantil. Además, una duración más prolongada de la lactancia materna se asoció con una menor probabilidad de haber tenido o tener actualmente una enfermedad respiratoria. Los lactantes que recibieron sólidos antes de las 15 semanas tuvieron un peso significativamente mayor y tenían más grasa corporal que

¹⁰ Raisler J, Alexánder C, O'Campo P. Breast-feeding and infant illness: A dose-response relationship? Am J Public Health. 1999; 89:25–30.

¹¹ Hediger ML, Overpeck MD, Kuczmarski RJ, Ruan WJ. Association between infant breastfeeding and overweight in young children. JAMA 2001; 285:2453–60.

¹² Wilson AG, Forsyth S, Greene SA, Irvine L, Hau C, Howie PW. Relation of infant diet to childhood health: Seven year follow-up of cohort of children in Dundee infant feeding study. Br Med J. 1998;316:21–5.

		los niños y niñas que recibieron sólidos después de las 15 semanas.
China	Distrito Xu Hui, Shanghai	Los lactantes amamantados en forma exclusiva presentaron un peso corporal medio significativamente mayor a los 4 meses que los que no fueron amamantados en forma exclusiva. La incidencia acumulada media de las enfermedades infecciosas durante el primer año de vida fue menor en lactantes amamantados en forma exclusiva que en lactantes amamantados en forma no exclusiva.
Perú ¹³	Urbano	Se observó el efecto protector de la lactancia materna contra las infecciones cutáneas.

Fuente: (León-Cava, Lutter, Ross, & Martín, 2002)

3.9 SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

Dentro del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” se cuenta con un marco de enfoques establecidos en el artículo 6 del Acuerdo 761 del 2020 que busca resaltar el presente acuerdo distrital:

“(…) **Enfoque de género.** Permite comprender las relaciones de poder y desigualdad desde una perspectiva de interseccionalidad que por razones de género existen entre mujeres y hombres y que se reproducen a través de imaginarios, creencias, roles y estereotipos que afianzan las brechas de desigualdad e impiden el goce efectivo de los derechos de las mujeres a lo largo del curso de su vida, en las diferentes dimensiones del

¹³ Brown KH, Black RE, de Romana GL, de Kanashiro HC. Infant-feeding practices and their relationship with diarrheal and other diseases in Huascar (Lima), Peru. Pediatrics 1989;83:31–40.

desarrollo y la vida social y comunitaria. Su fin es promover la igualdad de género y el goce efectivo de sus derechos.

Enfoque diferencial. Reconoce que existen grupos y personas que han sido históricamente discriminados debido a su pertenencia étnica o racial, orientación sexual, identidad de género, creencia religiosa, ubicación geográfica, discapacidad, situación socioeconómica, o de la intersección de diversos sistemas de discriminación que, como el racismo, la discafofia, el clasismo, la homofobia, la transfobia, la xenofobia y la intolerancia religiosa; impiden el acceso a las oportunidades en igualdad de condiciones. Este tipo de discriminación se sustenta en imaginarios, estereotipos, prejuicios y comportamientos construidos social y culturalmente que impiden la garantía plena de derechos. Su fin es hacer ajustes a la oferta institucional para garantizar adecuadamente el acceso a los bienes y servicios reconociendo las particularidades y especificidades de los distintos grupos sociales o personas.

Enfoque de cultura ciudadana. Reconoce que los comportamientos ciudadanos son multimotivados, obedecen a razones, intereses, emociones y multiregulados por la ley, por reflexión moral y la cultura. También existe autorregulación individual y colectiva y regulación mutua. El enfoque de cultura ciudadana aporta a las políticas públicas, la comprensión de que los comportamientos humanos pueden ser transformados y regulados por la ley, la cultura y la moral. Cultura ciudadana entendida como el conjunto de creencias, hábitos y comportamientos que permiten la convivencia en la ciudad y el reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos. (...)

En línea con lo anterior, el desarrollo del PDD se encontró fundamentado con un enfoque específico para la aplicación del presente proyecto de acuerdo, como lo son:

“(...) **Cuidadora.** Una Bogotá - Región cuidadora acoge, respeta y se ocupa deliberadamente de la distribución de la prosperidad colectiva. En ella se (i) construye confianza entre los ciudadanos y las instituciones; (ii) se ejercen libremente los derechos y se cumplen los deberes; (iii) se protegen a las mujeres, niñas y niños, y poblaciones con mayor vulnerabilidad y exclusión; (iv) se reconoce, redistribuye y reduce el trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres; (v) se regula la informalidad y (vi) se disminuye la ilegalidad y la criminalidad.

Consciente. Una Bogotá - Región consciente y creadora reconoce sus debilidades y sus fortalezas, trabaja por mejorar las primeras y convierte las segundas en oportunidades colectivas; aprovecha sus potencialidades; tiene confianza en sí misma, en su ciudadanía e instituciones y es capaz de agenciar su desarrollo humano, unirse y luchar contra la corrupción, hacer más transparente y efectiva la gestión de la ciudad; pone la creación y la innovación constante al servicio del bienestar común, aprovecha la inteligencia colectiva, la tecnología y la transformación digital para el beneficio colectivo y crece y se desarrolla integralmente. (...)”

Bajo estos enfoques y atributos se concibió en el propósito No.1 *“Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política”*, con el programa sexto en los siguientes términos:

(...) Programa 6. Sistema Distrital de Cuidado. Conjunto de servicios, regulaciones, políticas, y acciones técnicas e institucionales, para reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidado, entendiéndolo como una función social necesaria para la vida diaria de las personas y el funcionamiento de la sociedad y enmarcado en los estándares existentes de derechos humanos en materia de cuidado.

El Sistema Distrital de Cuidado concibe el cuidado de, al menos dos tipos: el cuidado indirecto, que hace referencia al trabajo doméstico, incluyendo la preparación de alimentos, la limpieza y mantenimiento del hogar, la limpieza y mantenimiento del vestido, la organización, distribución y supervisión de tareas domésticas, la compra, los pagos o los trámites relacionados con el hogar, las reparaciones al interior del hogar, entre otras funciones; y, el cuidado directo, que comprende el cuidado de personas en condición de dependencia, incluyendo el cuidado y la formación de los niños (traslado al colegio y ayuda al desarrollo de tareas escolares), el cuidado de ancianos, enfermos y personas en condición de discapacidad, y el cuidado de los animales domésticos.

Los servicios prestados por el Sistema serán brindados por el Estado, el sector privado y el sector comunitario, bajo un modelo de corresponsabilidad, con el fin de:

- a) Fortalecer y ampliar la oferta de servicios de cuidado para la atención a la población con mayores niveles de dependencia funcional, incluidos los de la atención para la primera infancia, para la población con discapacidad, para la vejez y los relacionados con apoyos alimentarios.

- b) Desarrollar una estrategia que valore y resignifique el trabajo de cuidado, implementando procesos de empoderamiento para cuidadoras y cuidadores, a través de servicios de reposo y recreación, y espacios de formación y homologación, incluyendo a las adultas mayores que ejercen el rol de cuidadoras, líderes comunitarias, cuidadoras de animales domésticos, mujeres rurales, indígenas, campesinas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rrom.
- c) Implementar una estrategia de cambio cultural y pedagógica en el Distrito, frente a la corresponsabilidad en la realización del trabajo de cuidado en los hogares y comunidades, a fin de redistribuir este trabajo entre hombres y mujeres, propendiendo por el desarrollo de nuevas masculinidades.

Para desarrollar el Sistema Distrital de Cuidado, se creará una Comisión Intersectorial del Sistema, liderada por la Secretaría Distrital de la Mujer como ente articulador y conformada, al menos por: la Secretaría Distrital de la Mujer, la Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaría Distrital de Educación, la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría Distrital de Integración Social, la Secretaría Distrital de Cultura, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la Secretaría Distrital del Hábitat, la Secretaría Distrital de Hacienda, y la Secretaría Distrital de Ambiente. Esta comisión se articulará con las Alcaldías Locales como apoyo para la territorialización del Sistema, y con instituciones del orden nacional. Así mismo, se articularán con el Sistema, la academia, el sector privado y la sociedad civil, conformada, entre otras, por el Consejo Consultivo de Mujeres, la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado y organizaciones de cuidadores y cuidadoras.

El Sistema Distrital de Cuidado contará con una estrategia territorial, la cual, por medio de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado, atenderá, a través de una oferta intersectorial de servicios, a distintas poblaciones que requieren de servicios de cuidado y que proveen cuidado en condiciones de desigualdad. (...)”

Por todo lo anterior, es dable concluir que la finalidad del Sistema Distrital de Cuidado es contribuir a la igualdad de oportunidades para las mujeres a través de la ampliación y cualificación de la oferta institucional de servicios del cuidado, con el fin de reducir su tiempo

total de trabajo; redistribuir el trabajo de cuidado no remunerado con los hombres; y contar con mecanismos para su valoración y reconocimiento social. ¹⁴

Por tanto, el presente proyecto de acuerdo promueve mejores oportunidades para la práctica de la lactancia y la protección de la mujer ante toda forma de discriminación causada por lactar a sus bebés, ocasionando un impacto positivo para avanzar hacia la equidad de género y la reducción de brechas salariales.

Es así como, el presente proyecto de acuerdo se encuentra engranado con las finalidades, proyectos, enfoques y atributos del presente Plan de Desarrollo Distrital permitiendo una articulación entre la necesidad evidenciada y expuesta con los programas a ejecutar por la Administración.

4. MARCO JURÍDICO

4.1 DERECHO COMPARADO

NORMA	AÑO	FUNDAMENTO
Declaración Universal de los Derechos Humanos – ONU	1948	La Carta de los Derechos humanos comprende la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y sus dos Protocolos facultativos. En virtud de la Declaración Universal de los Derechos humanos, el ideal del ser humanos es ser libre, y gozar de sus libertades civiles y políticas para ser liberado de la miseria, Dichos derechos no pueden ser realizados sino son utilizados como condiciones que permitan a cada persona de gozar de estos derechos civiles y políticos, así como los derechos económicos, civiles y culturales.

¹⁴ Información tomada de : <https://bogota.gov.co/mi-ciudad/mujer/el-sistema-distrital-de-cuidado-un-logro-historico-para-las-mujeres>

Convención de los Derechos del Niño.	1983	OIT Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas) núm. 159, y la Recomendación núm. 168 / sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer	1979	Eliminar la discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económica y social a fin de asegurar, en condiciones de igualdad de hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia”
Convención sobre los Derechos del Niño – ONU	1989	Aprobada por el Congreso de la República en la Ley 12 de 1991. Ratificada el 28 de enero de 1991. Promulgada por el Decreto 94 de 1992, 'por el cual se promulgan la Convención sobre los Derechos del Niño y la reserva formulada por Colombia respecto de su artículo 38, numerales, 2o. y 3o'. En vigencia para Colombia desde el 28 de febrero de 1991.
Convención Interamericana para la Eliminación de todas formas de discriminación contra las personas con discapacidad - OEA	1999	Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se comprometen a adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad. Establece que la discriminación se manifiesta con base a cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga como efecto impedir a las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Resalta que la distinción solo se justifica si está al servicio de una mejor y mayor inclusión. Aprobada por el Congreso de la República en la Ley 762 de 2002. En vigencia para Colombia a partir del 11 de marzo de 2004

Convención de las personas con discapacidad ONU	2006	<p>El propósito de la convención es promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y por igual del conjunto los derechos humanos por las personas con discapacidad. Cubre una serie de ámbitos fundamentales tales como la accesibilidad, la libertad de movimiento, la salud, la educación, el empleo, la habilitación y rehabilitación, la participación en la vida política, y la igualdad y la no discriminación. La convención marca un cambio en el concepto de discapacidad, pasando de una preocupación en materia de bienestar social a una cuestión de derechos humanos, que reconoce que las barreras y los prejuicios de la sociedad constituyen en sí mismos una discapacidad.</p> <p>En su artículo 23 del numeral 1, se reconoce que los niños y niñas con discapacidad “deberán disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación del niño en la comunidad”.</p> <p>En el artículo 24 del numeral 1 se reconoce el derecho que los niños y niñas con discapacidad tienen al “más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud.”</p> <p>En vigencia para Colombia a partir del 10 de junio de 2011.</p>
---	------	---

4.2 MARCO CONSTITUCIONAL, LEGAL Y NORMATIVO

CONSTITUCIONALIDAD

Artículo 1	Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general
Artículo 5	El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad
Artículo 13	El Estado deberá proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.
Artículo 29	Derecho al desarrollo integral en la primera infancia. La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en este Código. Son derechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial. En el primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y las niñas.
Artículo 41	Obligaciones del Estado. El Estado es el contexto institucional en el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. En cumplimiento de sus funciones en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal deberá: (...) 14. Reducir la morbilidad y la mortalidad infantil, prevenir y erradicar la desnutrición, especialmente en los menores de cinco años, y adelantar los programas de vacunación y prevención de las enfermedades que afectan a la infancia y a la adolescencia y de los factores de riesgo de la discapacidad.

Artículo 42	<p>La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.</p> <p>El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable.</p> <p>La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables.</p> <p>Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes.</p> <p>Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley.</p> <p>Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes.</p> <p>La Ley reglamentará la progenitura responsable.</p> <p>La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos.</p> <p>Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil.</p> <p>Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley.</p> <p>Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil.</p> <p>También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la ley.</p> <p>La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes.</p>
Artículo 43	<p>La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación.</p> <p>Durante el embarazo y después del parto gozará de especial</p>

	asistencia y protección del Estado, y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia.
Artículo 44	Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia
Artículo 54	Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud.”

LEGAL

NORMATIVA DISTRITAL Y NACIONAL	APLICACIÓN
Código Sustantivo del Trabajo modificado por el Decreto 13 de 1967	Impone la obligación al empleador de conceder a la trabajadora dos descansos, de treinta minutos cada uno, dentro de la jornada para amamantar a su hijo sin que ello implique una disminución salarial.
Ley 12 de 1991:	Todos los sectores de la sociedad deben conocer los principios básicos y beneficios de la lactancia materna, la salubridad, la adecuada higiene y el saneamiento ambiental.
Ley 1823 de 2017	Salas Amigas de la familia lactante: Busca implementar las salas amigas de lactancia en las entidades públicas y privadas se encuentra

	cumpliendo su pretensión, pues se están cumpliendo los plazos de implementación de las Salas amigas de la familia lactante.
Decreto 1397 de 1992	Suscribe el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la leche materna en donde se reglamenta la comercialización y publicidad de los sucedáneos con el fin de que estos no se conviertan en sustitutos de la leche materna en los casos que sea posible la lactancia y el amamantamiento.
CONPES 3861 de 2016	Distribuyó los recursos del Sistema General de Participaciones y con respecto al tema de salud y bienestar afirmó que las líneas de inversión a cargo del Ministerio de Salud contemplan el mejoramiento de las acciones en salud desde antes de la concepción, durante la gestación, el parto, el puerperio, el periodo de lactancia y atención a niños y niñas menores de dos años.
Ley 1618 de 2013 Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.	A partir de la implementación del Modelo Integral de Salud, los principios del respeto a la dignidad, la autonomía individual, la participación e inclusión, entre otros, están dispuestos en los lineamientos técnicos y políticas de atención en salud que establece los procesos de aseguramiento en salud, prestación y provisión de servicios de salud y rehabilitación y acciones colectivas de salud pública.
Ley Estatutaria 1751 de 2015 Por medio de la cual se redefine el Sistema General de seguridad social en Salud y se dictan otras disposiciones”	En cumplimiento de esta normativa la Secretaría Distrital de Salud tiene como propósito garantizar el goce efectivo del derecho a la salud y la plena participación de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores, con el fin de tener un acceso equitativo a los procesos de inclusión social y mejoramiento de la calidad de vida.
Ley 1996 de 2019 “Por medio de la cual se establece el	Se ha llevado a cabo la elección de representantes locales y distritales de

régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad	discapacidad, en donde las personas con discapacidad pueden representar sin importarla condición o el sector al que pertenezcan
--	---

NORMATIVIDAD DISTRITAL

Acuerdo 480 de 2011 Concejo de Bogotá D.C.	Dispone la implementación progresiva de las Salas Amigas de la Familia lactante en el ámbito laboral de las entidades del Distrito Capital, las cuales serán apoyadas logística y técnicamente por la Secretaría Distrital de Integración Social quien las acreditará.
Acuerdo 722 de 2018 Por el cual se establecen estrategias para la promoción, fomento y apoyo a la cultura de la lactancia materna y se apoyan los bancos de leche humana en el Distrito Capital.	Establece estrategias para la promoción, fomento y apoyo a la cultura de la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad y complementaria hasta los dos años y más de edad, con el fin de asegurar sus beneficios y aporte indispensable para la nutrición, crecimiento y desarrollo integral del lactante.
Acuerdo 245 de 2006 “Por medio del cual se institucionaliza el mes de las personas en condición de discapacidad y se dictan otras disposiciones	Desde el Sistema Distrital de Discapacidad se viene desarrollando el reconocimiento, movilización y visibilización de la población con discapacidad, la SDS ha desarrollado acciones de promoción de la salud, así como espacios comunitarios. Así mismo en octubre de cada año, las entidades distritales realizan actividades que buscan visibilizar a la población con discapacidad, sus familias y cuidadores.

5. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ DC

Este Concejo es competente para tramitar la presente iniciativa de conformidad con las siguientes normas:

- **Constitución Política de Colombia.**

- **Artículo 313.** Corresponde a los concejos:

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio.

➤ **Decreto Ley 1421 de 1993. Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá.**

- **Artículo 12°.** Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

6. IMPACTO FISCAL

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 “En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”.

Teniendo en cuenta lo anterior, hay que aclarar que la presente iniciativa no genera un impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez, que no se incrementará el presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación, en la medida en que el presupuesto asignado para el desarrollo del presente proyecto de acuerdo fue planteado dentro del marco fiscal del Plan de Desarrollo Distrital vigente.

ANDRÉS DARÍO ONZAGA NIÑO

Concejal de Bogotá
Partido Alianza Verde

PROYECTO DE ACUERDO NO 222 DE 2025

PRIMER DEBATE

“Por medio del cual se brindan medidas para promover y fortalecer las redes y rutas de lactancia materna en el Distrito Capital”.

El Concejo de Bogotá D.C., en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las previstas en el Decreto-Ley 1421 de 1993, Artículo 12, numeral 1

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. OBJETO: El presente Acuerdo tiene por objeto brindar medidas para promover y fortalecer las redes y rutas de lactancia materna en el Distrito Capital.

ARTÍCULO 2. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN: En el marco de las medidas para promover la lactancia materna, la Administración Distrital implementará estrategias de educación y capacitación a través de las entidades competente a la mujeres gestantes y lactantes, en aras de promover espacios de pedagogía y buenas prácticas de la lactancia materna exclusiva.

ARTÍCULO 3. REGISTRO DE REDES DE LACTANCIA: La administración generará un registro público donde se pueda consultar e indagar toda la información sobre redes, rutas

de apoyo y programas sobre lactancia materna exclusiva, así como realizar los trámites correspondientes y necesarios para acceder a los mismos.

Parágrafo: Se garantizará la accesibilidad de la información correspondiente al registro en comento.

ARTÍCULO 4. RUTA PREFERENCIAL. La Administración Distrital creará una ruta exclusiva y preferencial para las mujeres gestantes y lactantes con discapacidad, y sus mujeres cuidadoras con el fin de brindar accesibilidad al servicio de salud con un enfoque diferencial.

ARTÍCULO 5. RED DE APOYO Y SOLIDARIDAD A LA LABOR DE LA MUJER GESTANTE Y LACTANTE CON DISCAPACIDAD: La Administración dentro de sus competencias designará una entidad coordinadora para la constitución de una Red de Apoyo y Solidaridad a la labor de la mujer gestante y lactante con enfoque diferencial. Esta Red podrá estar articulada a las Manzanas de Cuidado y tendrá como finalidad brindar información y apoyo para la vinculación a los programas distritales ofrecidos en todos los ámbitos y sectores para mejorar la condición de vida la mujer gestante y lactante.

Parágrafo. El Distrito establecerá las condiciones de acceso y permanencia de la mujer gestante y lactante de la Red de Apoyo y Solidaridad.

ARTÍCULO 6. APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA: La Administración Distrital brindará acompañamiento y fortalecimiento a la familia de la mujer gestante y lactante, con un enfoque psicosocial.

ARTÍCULO 7. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN: La Administración contará con 6 meses para generar la estrategia de implementación y cumplimiento del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 8. INFORME: Una vez implementado el presente acuerdo la Administración tendrá 6 meses para la presentación de un informe al Concejo de Bogotá.

ARTÍCULO 9. VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá a los ____ días del mes de _____ de dos mil veinticuatro (2025).

PROYECTO DE ACUERDO NO 223 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL LOS CENTROS DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA -CEA- Y OTROS ORGANISMOS DE TRÁNSITO QUE DICTAN CURSOS SOBRE NORMAS DE TRÁNSITO EN BOGOTÁ DEBEN FORTALECER LA EDUCACIÓN VIAL EN CULTURA CIUDADANA Y EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL EN CONDUCTORES E INSTRUCTORES”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. OBJETO DEL PROYECTO

Con el fin de promover la cultura ciudadana, mejorar el bienestar socioemocional y fortalecer la educación vial, tanto de conductores como de instructores, los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) y otros organismos de tránsito en Bogotá, robustecen los programas educativos enfocados en la formación integral en cultura ciudadana, el manejo de las emociones y el uso responsable de las vías con el fin de reducir incidentes de tránsito, mejorar la convivencia vial y el bienestar de todos los actores que interactúan en las vías.

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Ante el creciente aumento del parque automotor, el incremento de las infracciones y la alta accidentalidad vial en Bogotá, sumado a la poca formación en cultura ciudadana y la ausencia de programas enfocados en el bienestar socioemocional de los conductores, se hace indispensable que las entidades responsables de dirigir, vigilar y garantizar el buen desarrollo de la movilidad en la ciudad establecen lineamientos claros, los cuales deben ser implementados en los Centros de Enseñanza Automovilística y otros organismos de Tránsito, con el objetivo no solo de mejorar los indicadores de seguridad vial, sino también tener un sistema de movilidad ejemplar, eficiente y seguro para todos los ciudadanos.

2.1 ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS DE LA SINIESTRALIDAD VIAL

Teniendo en cuenta el informe del Anuario de Siniestralidad Vial 2023, realizado por la Secretaría Distrital de Movilidad, se registraron incidentes significativos que afectaron principalmente a usuarios vulnerables como peatones, ciclistas y motociclistas, quienes conforman gran parte de las víctimas fatales en la ciudad.

Entre los hallazgos más destacados del 2023:

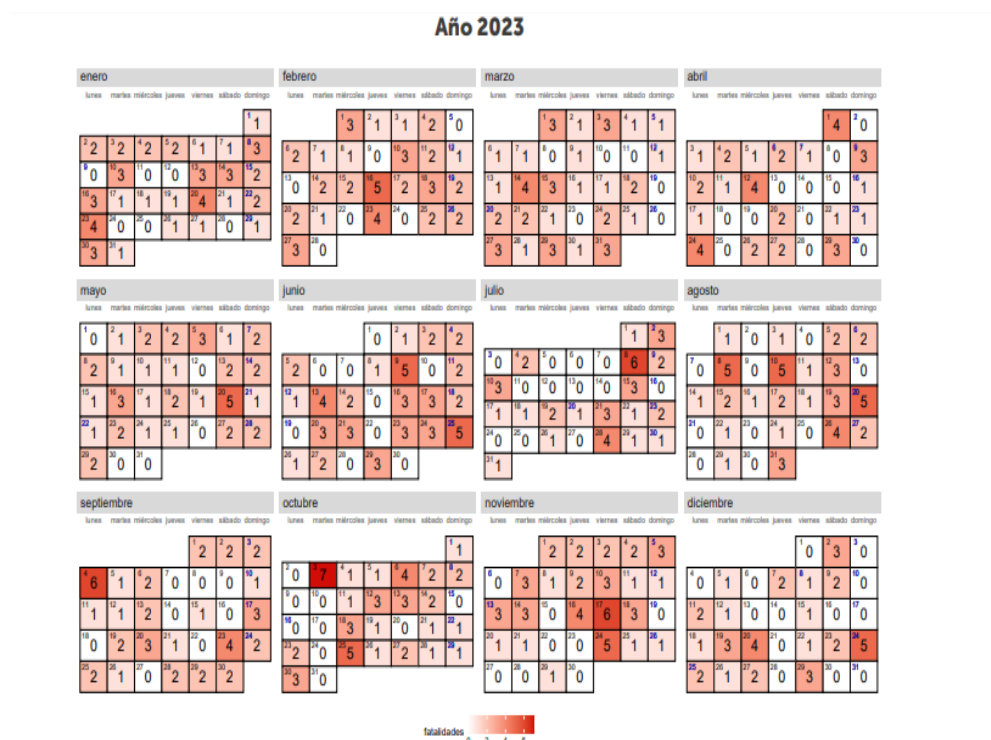
1. **Aumento de fatalidades:** Se reportó un incremento del 3% en comparación con 2022, concentrándose principalmente en actores vulnerables como peatones y motociclistas. Es importante tener en cuenta que, para la estimación de mortalidad asociada a siniestros viales en el presente Anuario, se utilizó el criterio de la IRTAD, en el que se adopta el estándar internacional de medición de mortalidad a 30 días y se establece este indicador para hacer el reporte de fallecimientos.¹⁵
2. **Distribución por localidades:** Algunas localidades como Kennedy, Suba y Engativá registraron los índices más altos de siniestros, lo cual coincide con su alta densidad vehicular y poblacional.
3. **Principales causas:** El exceso de velocidad, la conducción en estado de embriaguez y las fallas en la infraestructura vial continúan siendo factores críticos.
4. **Medidas implementadas:** Se ejecutaron campañas de sensibilización y mejoramiento de infraestructura, como pasos seguros y zonas 30, en puntos críticos identificados.

En el siguiente calendario se muestra la cantidad diaria de muertes ocasionadas por siniestros viales durante el año 2023. Uno de los mayores logros en la seguridad vial de la

¹⁵ Anuario de siniestralidad vial de Bogotá 2023, Secretaría Distrital de Movilidad, año 2024

ciudad, fue que en un total de 102 días del año (28%) no se presentaron muertes en las vías o muertes posteriores en el hospital.

No obstante, si bien la cantidad de días con cero muertes se redujo respecto a los años 2021 y 2022, lograr que la totalidad de días del año sean días con cero muertes debe ser un compromiso permanente y una meta incansable desde las políticas, controles y regulación desde el sector público, pero también desde la participación activa y consciente del sector privado, e indudablemente desde cada uno de los actores viales.



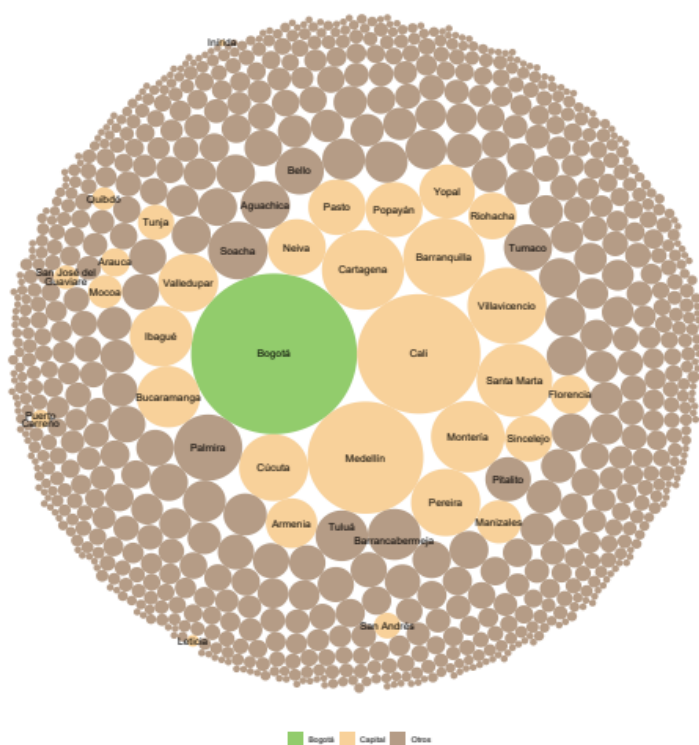
Elaboración: SDM-DIM Fuente: SIGAT 2023 *Datos de fallecidos a 30 días

En el contexto de siniestralidad vial es importante comprender que,

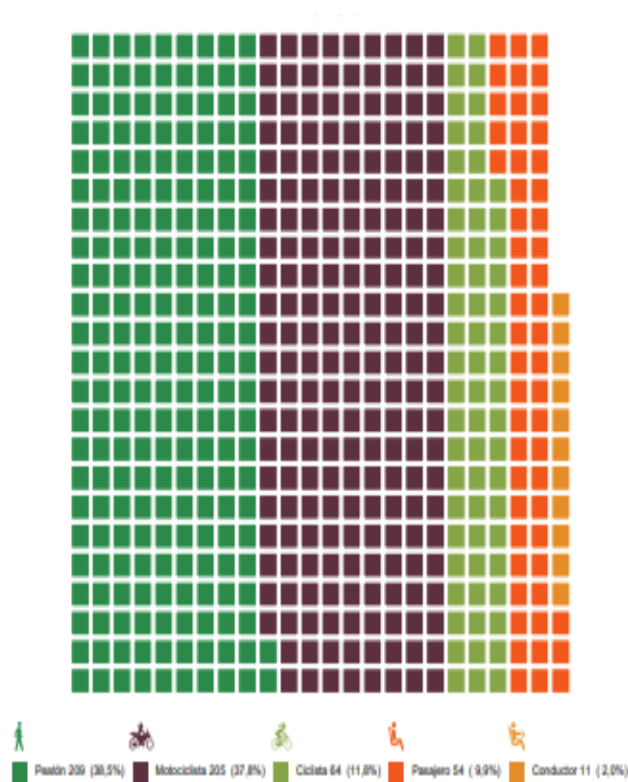
1. **Víctimas fatales:** Son las personas que pierden la vida como consecuencia directa de un siniestro vial. Esto incluye aquellos fallecimientos que ocurren en el lugar del accidente o dentro de un tiempo específico posterior al incidente, según los criterios del sistema de reporte (por ejemplo, hasta 30 días después, según la OMS).
1. **Víctimas lesionadas:** Son las personas que resultan heridas en un siniestro vial, sin que ello implique la pérdida de la vida. Estas lesiones pueden variar desde leves (como raspones o golpes) hasta graves (como fracturas, traumatismos u otros daños que requieran hospitalización o rehabilitación prolongada) y muchos de ellos provocan una discapacidad (según la Organización Mundial de la Salud – OMS 2023).

El costo de los siniestros viales no solo lo asumen las víctimas y sus familias, sino también la economía en su conjunto en términos de personas fallecidas, lesionadas, discapacidades y pérdida de ingresos potenciales.

Como se evidencia en la siguiente gráfica, Bogotá es la ciudad con mayor número de muertes en las vías del país, lo cual está directamente relacionado a su mayor tamaño poblacional, parque automotor y creciente exposición de usuarios vulnerables entre otras variables.



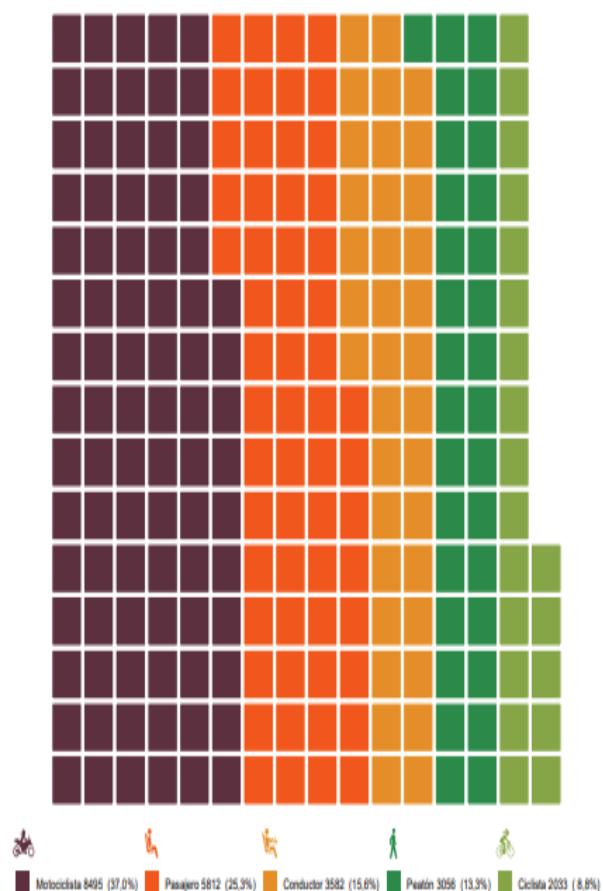
En cuanto a las víctimas fatales, según el informe de Siniestralidad 2023, el 38% de las fatalidades en siniestros viales corresponden a peatones, el 68% de las fatalidades tuvieron por lo menos un motociclista involucrado. 205 conductores de motociclistas, 37 pasajeros de moto, 110 peatones, 13 ciclistas, 2 usuarios de otros vehículos y el 54% de los ciclistas fallecidos perdieron la vida en interacciones con vehículos pesados (transporte de pasajeros y carga)



Elaboración: SDM-DIM Fuente: SIGAT 2023
* Datos de fallecidos a 30 días

Referente a las víctimas lesionadas en Bogotá durante el año 2023, 22.978 usuarios viales sufrieron lesiones no mortales como consecuencia de siniestros de tránsito. Frente al año 2019, la cifra de lesionados aumentó en 24%, año en el cual se reportaron 18.502 lesionados en la ciudad por esta misma causa. Frente al año 2022, la cifra de lesionados aumentó en 7%, año en el cual se reportaron 21.514 lesionados.

Víctimas lesionadas en Bogotá Año 2023



Elaboración: SDM-DIM Fuente: SIGAT 2023
(Cada cuadro representa a 100 víctimas aproximadamente)

Según los datos obtenidos del **Anuario de Siniestralidad 2023**, los centros de enseñanza automovilísticos CEA, que están dentro del registro de los organismos de apoyo al tránsito, tienen un papel clave en contribuir a la reducción de la siniestralidad vial puesto que desde la educación se puede trabajar los enfoques en la prevención, la promoción de la cultura ciudadana en la seguridad vial y el bienestar socioemocional de conductores e instructores.

2.2. REGLAMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA CEA Y OTROS ORGANISMOS DE TRÁNSITO

Teniendo en cuenta que la Resolución 20223040009425, por medio del cual se expide la Resolución Única Compilatoria en materia de Tránsito del Ministerio de Transporte, en su capítulo 2 se refiere a los requisitos de los Centros de Enseñanza Automovilística CEA, *“Los Centros de Enseñanza Automovilística interesados en la prestación del servicio que permita la obtención del certificado de aptitud en conducción y formación de instructores en conducción deberán registrarse ante el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). El registro permitirá la prestación del servicio bajo condiciones de ubicación y funcionamiento, conforme el alcance de certificación de conformidad otorgada por los Organismos de Evaluación de Conformidad (OEC), acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC)”*.

Los Requisitos y condiciones para el Registro de Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) debe contar con:

1. Registro en el RUNT deben registrarse en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) para ofrecer formación a conductores e instructores, cumpliendo con los estándares establecidos por organismos acreditados.
2. Requisitos Principales:
 - a. Obtener la licencia de funcionamiento para los programas de formación de conductores e instructores en conducción, por la Secretaría de Educación de la entidad territorial.
 - b. Estar legalmente constituida y en su objeto social debe encontrarse la realización de actividades como Centro de Enseñanza Automovilística y acreditar registro del establecimiento comercial.
 - c. Contar con una póliza de responsabilidad civil extracontractual (RCE), en cuantía no inferior a sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con el fin de amparar la muerte y/o lesiones a personas y el daño de bienes a terceros que se produzcan por causa o con ocasión de enseñanza automovilística con los vehículos automotores. Su renovación deberá efectuarse anualmente.

- d. Relacionar en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) los instructores por categoría, indicando nombre, dirección, número de cédula, número de la licencia de instructor, las cuales deben figurar en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Contar con infraestructura y vehículos por categoría, equipos e instalaciones según el Ministerio de Transporte.
- e. Recibir la certificación de conformidad donde deberán someterse a auditorías anuales por parte del Organismo Evaluador de la Conformidad acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) y son lo Los Organismos Evaluadores de la Conformidad (OEC), que expiden los Certificados de conformidad de servicio a los Centros de Enseñanza Automovilística quienes deberán informar a la Superintendencia de Transporte y reportar en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Ofrecer los servicios a los usuarios, fijando el precio de los mismos dentro del rango de tarifas que reposan dentro de esta resolución No. 2022304040009425 de 2022.

- 3. Vigencia del Registro: Indefinida, sujeta al cumplimiento continuo de requisitos y auditorías anuales por parte de organismos evaluadores.

2.3. CONTENIDOS CURRICULARES PARA LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE CONDUCTORES E INSTRUCTORES QUE IMPARTEN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Entre los requisitos de funcionamiento de los Centros de Enseñanza Automovilística CEA, está en impartir los cursos de formación de conductores e instructores por medio de la adopción de contenidos curriculares por competencias, establecido en el Anexo 1 “Contenidos curriculares para los cursos de formación de conductores e instructores que imparten los centros de enseñanza automovilística”, el cual hace parte integral de la presente resolución.

Estos centros de enseñanza deben implementar herramientas didácticas y metodológicas incorporando, implementando y articulando en el proceso de formación de los aspirantes a obtener licencia de conducción o licencia de instructor de conducción como mínimo las siguientes herramientas:

- ❖ Elaborar una malla curricular con una metodología de Aprendizaje Basado en Problemas u otra metodología que fomente el aprendizaje significativo.
- ❖ Implementar una guía didáctica como un instrumento de orientación para la planificación, seguimiento y evaluación de las sesiones de clase.
- ❖ Utilizar los recursos educativos digitales de la **Escuela Virtual de Seguridad Vial** de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que se encuentran en la página web de la misma entidad.

El objetivo de estos cursos es formar personas en competencias para la movilidad segura, fundamentando los conocimientos, habilidades y actitudes requeridas para la conducción de un vehículo automotor, sin poner en riesgo su vida y la de los demás.

Algunos de los aspectos más importantes en esta formación es:

- ❖ El Conocimiento de las normas de tránsito mediante la comprensión de las normas, las señalizaciones, límites de velocidad, prioridades en las vías y el respeto a los derechos de otros actores viales como peatones, ciclistas y motociclistas.
- ❖ Desarrollar sus habilidades técnicas de conducción, mediante la revisión preoperacional del vehículo y su funcionamiento, realizar maniobras de frenado, giros, reconocer y hacer uso de los elementos de protección (EPP)
- ❖ Contribuir a la seguridad vial y la prevención de accidentes identificando los riesgos en la vía y las estrategias para evitarlos, manteniendo una distancia segura con una velocidad permitida.
- ❖ Comprender la importancia de la convivencia en la vía, promoviendo comportamientos responsables, empáticos y respetuosos hacia los demás usuarios del espacio público.
- ❖ Manejar los niveles de estrés durante la conducción, fomentando la autorregulación para mantener la calma y manejar situaciones inesperadas con el tráfico y las personas.

El curso para los aspirantes a obtener la licencia de conducción tiene como propósito formar conductores con actitudes, habilidades y destrezas relacionadas con los siguientes núcleos temáticos: Movilidad segura y sostenible, Normas de tránsito, Señalización vial e

infraestructura vial, y el vehículo (Los conocimientos específicos de los vehículos de la categoría).

El curso de formación cuenta con tres módulos, así:

- a) **Formación teórica:** Reconocer los aspectos teóricos relacionados con los núcleos temáticos: Movilidad Segura y Sostenible, Normas de Tránsito, Señalización Vial e infraestructura Vial, y Vehículos
- b) **Formación básica aplicada:** Identificar los elementos que componen la revisión pre operacional y la mecánica y electrónica básica del vehículo, teniendo en cuenta los criterios de seguridad vial asociados.
- c) **Formación específica:** Aplicar los conocimientos teórico-prácticos en contextos simulados y circulación vial mediante la realización de maniobras de conducción teniendo en cuenta las normas de tránsito y la señalización vial e infraestructura vial para una movilidad segura y sostenible.

En estos módulos se desarrollan cuatro (4) núcleos temáticos así:

1. Movilidad Segura y sostenible
2. Normas de tránsito
3. Señalización vial e infraestructura vial.
4. El vehículo

En los núcleos temáticos están incorporados los saberes esenciales obligatorios transversales para todos los conductores de vehículos automotores y los saberes esenciales obligatorios específicos para cada categoría de licencia de conducción.

El egresado del curso de formación a conductores de cualquiera de las categorías de licencia de conducción contará con cinco (5) competencias para la movilidad segura:

- ❖ Comprender el entorno
- ❖ Moverse de manera idónea según medio de transporte seleccionarlo
- ❖ Valorar el riesgo y la vulnerabilidad en la movilidad
- ❖ Asumir la regulación
- ❖ Ser corresponsable en las dinámicas de movilidad.

El egresado del curso de formación de conductores conocerá las normas de tránsito, las señales de tránsito, las características técnico-mecánicas del vehículo automotor, según la categoría de licencia de conducción para la cual haya desarrollado el curso de formación, y deberá tener la capacidad para desarrollar comportamientos seguros al conducir en las vías, así como comprender las consecuencias de los accidentes de tránsito (siniestros viales), Así mismo, estará en capacidad de realizar una revisión pre operacional básica de su vehículo y contará con la habilidad para maniobrar en la vía de manera preventiva y eficiente.

Finalmente, el egresado será capaz de articular sus conocimientos y habilidades con una adecuada valoración de su riesgo al conducir, lo cual le permitirá desplazarse de forma segura y responsable sin comprometer su integridad y la de los demás actores viales.

Cabe mencionar que, la persona que realice y apruebe el curso de formación a conductores podrá presentar el examen teórico y práctico para la obtención del privilegio de la licencia de conducción.

De conformidad a lo anterior, el perfil del egresado deberá contar con los siguientes conocimientos según la categoría de conducción así:

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN CADA CATEGORÍA

Formación para conductores de categoría A1 o A2

- Al finalizar el curso, el conductor de un vehículo de estas categorías estará en capacidad de:
- a) Identificar Los componentes de la revisión pre operacional del vehículo y su funcionamiento con relación a la seguridad vial.
 - b) Conocer las técnicas de conducción adecuadas con relación a la potencia de su vehículo.
 - c) Realizar una maniobra de frenado de emergencia y conocer las tecnologías de ayuda para el frenado (ABS y CBS).
 - d) Reconocer y hacer uso de los elementos de protección personal (EPP) y prendas reflectivas, considerando la talla, calidad y modo de uso específico.
 - e) Identificar y aplicar la normativa vigente que rige a los vehículos de esta categoría

Formación para conductores de categoría B1

- Al finalizar el curso, el aspirante a la licencia de conducción categoría B1, estará en la capacidad de:
- a) Identificar y aplicar la normativa vigente que rige a los vehículos de esta categoría.
 - b) Conocer la adecuación de los Sistemas de Retención infantil al interior del vehículo, cumpliendo con la normativa vigente y priorizando la movilidad segura del infante.
 - c) Reconocer la importancia de los elementos de seguridad vial pasiva y activa del vehículo, y comprender los beneficios de las ayudas tecnológicas para la conducción segura.
 - d) Dominar y maniobrar el vehículo con destreza en la vía para garantizar la correcta movilización atendiendo a las normas de tránsito y a las pautas de conducción preventiva y eficiente.

Formación para conductores de categoría B2

- Al finalizar el curso, el aspirante a la licencia de conducción categoría B2, estará en la capacidad de:
- a) Identificar y aplicar la normativa vigente que rige a Los vehículos de esta categoría
 - b) Reconocer la importancia de los elementos de seguridad vial pasiva y activa del vehículo, y comprender los beneficios de las ayudas tecnológicas para la conducción segura, especialmente para mitigar puntos ciegos.
 - c) Dominar y maniobrar el vehículo con destreza en la vía para garantizar la correcta movilización atendiendo a las normas de tránsito y a las pautas de conducción preventiva y eficiente.
 - d) Conocer la nomenclatura rural y urbana.
 - e) Aplicar a su función de conductor la normativa de convivencia: principios y valores ciudadanos, urbanidad, cortesía.
 - f) Aplicar a su actividad de conductor la normativa de calidad del servicio: presentación personal, presentación del vehículo, cumplimiento de programación, orientación al usuario, conservación y limpieza del vehículo
 - g) Conocer y aplicar las normas de seguridad en el aseguramiento de la carga, en el cargue y en el descargue de mercancías peligrosas y no peligrosas.
 - h) Conocer y aplicar la normativa de seguridad y salud en el trabajo: riesgos biomecánicos, actos inseguros, pausas activas, posturas ergonómicas, estrés, tensión, cansancio, somnolencia, alerta, riesgo, distracción, discapacidad física, consumo nocivo de drogas y alcohol en la conducción.

Formación para conductores de categoría C1

- Al finalizar el curso, el aspirante a la licencia de conducción categoría C1, estará en capacidad de:
- a) Identificar y aplicar la normativa vigente que rige a los vehículos de esta categoría
 - b) Reconocer la importancia de los elementos de seguridad vial pasiva y activa del vehículo, y comprender los beneficios de las ayudas tecnológicas para la conducción segura.
 - c) Dominar y maniobrar el vehículo con destreza en la vía para garantizar la correcta movilización atendiendo a las normas de tránsito y a las pautas de conducción preventiva y eficiente.
 - d) Conocer la nomenclatura rural y urbana; tipología, definición, áreas de operación, terminales, y servicios a transportadores conductores.

Anexo 1
"Contenidos curriculares para los cursos de formación de conductores e instructores que imparten los centros de enseñanza automovilística", información tomada de la Resolución 9425 de 2022

1. Para las categorías A1 y A2

- 1.a) Elementos de protección personal: selección y uso adecuado (Guantes, chaqueta, pantalón, botas, rodilleras, coderas).
- 1.b) Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS por sus siglas en inglés) y Sistema de Frenado Combinada (CBS por sus siglas en inglés).
- 1.c) Elementos de Protección Personal (el casco como EPP fundamental: talla, calidad y modo de uso).
- 1.d) Uso de luces para aumentar la visibilidad del vehículo (normativa e incidencia en la seguridad vial) y uso de prendas reflectivas.
- 1.e) Recomendaciones asociadas a la conducción con acompañante

2. Para las categoría B1

- 2.a) Sistemas de retención infantil.
- 2.b) Adelantamiento a usuarios vulnerables.

3. Para la categoría C1

- 3.a) Sistemas de retención infantil.
- 3.b) Adelantamiento a usuarios vulnerables.
- 3.c) Procedimientos técnicos: protocolos de conservación y limpieza, protocolos de comunicación, protocolos de presentación personal, sistemas de calefacción y confort, manual operativo para terminales, estaciones o áreas asimilables, procedimiento de abordaje y descenso de pasajeros, protocolos de seguridad y riesgo público.
- 3.d) Nomenclatura rural y urbana: mapas viales, rutas urbanas, rutas nacionales, vías principales, secundarias y auxiliares.
- 3.e) Terminales o áreas asimilables: tipología, definición, áreas de operación, procedimientos operativos, servicios a transportadores.
- 3.f) Normativa de convivencia: principios y valores ciudadanos, urbanidad, cortesía, protocolos de prestación del servicio en abordaje y desembarque de pasajeros, protocolos de suministro de información, actitud positiva.
- 3.g) Normativa de calidad del servicio: presentación personal, presentación del vehículo, cumplimiento de programación, suministro de información.
- 3.h) Protocolo del servicio: tipología del servicio, tipología de usuarios, conservación y limpieza del vehículo, presentación personal, orientación al usuario.

4. Para las categorías B2 o C2:

- 4.a) Adelantamiento a usuarios vulnerables.
- 4.b) Procedimientos técnicos: protocolos de conservación y limpieza, protocolos de comunicación, protocolos de presentación personal, sistemas de calefacción y confort, manual operativo para terminales, procedimiento de abordaje y descenso de pasajeros, protocolos de seguridad (uso de salidas de emergencia) y riesgo público.
- 4.c) Nomenclatura rural y urbana: mapas viales, rutas urbanas, rutas nacionales, vías principales, secundarias y auxiliares.
- 4.d) Terminales o áreas asimilables: tipología, definición, áreas de operación, procedimientos operativos, servicios a transportadores.
- 4.e) Normativa de seguridad y salud en el trabajo: riesgos biomecánicos, actos inseguros, pausas activas, posturas ergonómicas, estrés, tensión, cansancio, somnolencia, alerta, riesgo, distracción, discapacidad física, uso de drogas y alcohol, riesgo público.
- 4.f) Normativa de convivencia: principios y valores ciudadanos, urbanidad, cortesía, protocolos de prestación del servicio en abordaje y desembarque de pasajeros, protocolos de suministro de información, actitud positiva.
- 4.g) Normativa de calidad del servicio: presentación personal, presentación del vehículo, cumplimen-

Los módulos de formación están agrupados, así:

- e) Aplicar a su actividad de conductor la normativa de convivencia: principios y valores ciudadanos, urbanidad, cortesía, protocolos de prestación del servicio en abordaje y desembarque de pasajeros, protocolos de suministro de información, actitud positiva.
- f) Aplicar a su actividad de conductor la normativa de calidad del servicio: presentación personal, presentación del vehículo, cumplimiento de programación, orientación al usuario, conservación y limpieza del vehículo.
- g) Conocer y aplicar la normativa de seguridad y salud en el trabajo: riesgos biomecánicos, actos inseguros, pausas activas, posturas ergonómicas, estrés, tensión, cansancio, somnolencia, alerta, riesgo, distracción, discapacidad física, consumo nocivo de drogas y alcohol en la conducción.

Formación para conductores de categoría C2

- Al finalizar el curso el aspirante a la licencia de conducción categoría C2, estará en capacidad de:
- a) Identificar y aplicar la normativa vigente que rige a los vehículos de esta categoría
 - b) Reconocer la importancia de los elementos de seguridad vial pasiva y activa del vehículo, y comprender los beneficios de las ayudas tecnológicas para la conducción segura, especialmente para mitigar puntos ciegos.
 - c) Dominar y maniobrar el vehículo con destreza en la vía para garantizar la correcta movilización atendiendo a las normas de tránsito y a las pautas de conducción preventiva y eficiente.
 - d) Conocer la nomenclatura rural y urbana.
 - e) Aplicar a su actividad de conductor la normativa de convivencia: principios y valores ciudadanos, urbanidad, cortesía, protocolos de prestación del servicio en abordaje y desembarque de pasajeros, protocolos de suministro de información, actitud positiva.
 - f) Aplicar a su actividad de conductor la normativa de calidad del servicio: presentación personal, presentación del vehículo, cumplimiento de programación, orientación al usuario, conservación y limpieza del vehículo
 - g) Conocer y aplicar las normas de seguridad en el aseguramiento de la carga, en el cargue y en el descargue de mercancías.
 - h) Conocer y aplicar la normativa de seguridad y salud en el trabajo: riesgos biomecánicos, actos inseguros, pausas activas, posturas ergonómicas, estrés, tensión, cansancio, somnolencia, alerta, riesgo, distracción, discapacidad física, consumo nocivo de drogas y alcohol en la conducción.

Formación para conductores de categoría C3

- Al finalizar el curso el aspirante a la licencia de conducción categoría C3, estará en capacidad de:
- a) Identificar y aplicar la normativa vigente que rige a los vehículos de esta categoría
 - b) Reconocer la importancia de los elementos de seguridad vial pasiva y activa del vehículo, y comprender los beneficios de las ayudas tecnológicas para la conducción segura, especialmente para mitigar puntos ciegos.
 - c) Dominar y maniobrar el vehículo con destreza en la vía para garantizar la correcta movilización atendiendo a las normas de tránsito y a las pautas de conducción preventiva y eficiente.
 - d) Aplicar procedimientos técnicos y mecánicos al vehículo previo a su conducción, para garantizar que se encuentra en óptimas condiciones de seguridad, evitando riesgos y reduciendo la vulnerabilidad de los actores viales.
 - e) Conocer la nomenclatura rural y urbana
 - f) Aplicar a su actividad de conductor la normativa de convivencia: principios y valores ciudadanos, urbanidad, cortesía, protocolos de prestación del servicio en abordaje y desembarque de pasajeros, protocolos de suministro de información, actitud positiva.
 - g) Aplicar a su actividad de conductor la normativa de calidad del servicio: presentación personal, presentación del vehículo, cumplimiento de programación, orientación al usuario, conservación y limpieza del vehículo
 - h) Conocer y aplicar las normas de seguridad en el aseguramiento de la carga, en el cargue y en el descargue de mercancías peligrosas y no peligrosas.
 - i) Conocer y aplicar la normativa de seguridad y salud en el trabajo: riesgos biomecánicos, actos inseguros, pausas activas, posturas ergonómicas, estrés, tensión, cansancio, somnolencia, alerta, riesgo, distracción, discapacidad física, consumo nocivo de drogas y alcohol en la conducción

MALLAS CURRICULARES

Modulo 1

SABERES ESENCIALES OBLIGATORIOS TRANSVERSALES

Movilidad segura y sostenible

- Visión Cero: todas las muertes en el tránsito son evitables (explicación sobre las cifras de accidentes de tránsito y sus posibles causas según los datos procesados por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, como mínimo para Los últimos cinco años, con miras a comprender por qué todas las muertes en el tránsito son evitables).
- Las víctimas de accidentes de tránsito (fallecidos y lesionados a nivel internacional, nacional y municipal con cifras asociadas a la edad, el género, el mes, el día, la hora, el medio de transporte y los principales factores de riesgo asociados).
- Los usuarios vulnerables y su prelación (el respeto a la vida como prioridad).
- La corresponsabilidad (deberes y responsabilidades de los actores viales, con énfasis en la protección de los usuarios vulnerables).
- La movilidad sostenible (medios de transporte activo y medios de transporte sostenible).
- La omisión de socorro (responsabilidad en caso de presenciar un accidente de tránsito – siniestro vial y protocolo de intervención P.A.S. (Proteger, Avisar, Socorrer)).
- Conducción preventiva: anticipación de los riesgos (distancia de seguridad, adelantamiento seguro, velocidad adecuada según el tipo de vía, conducción en condiciones de baja luminosidad y/o lluvia).
- Conducción eficiente: condiciones de arranque del motor, puesta en marcha del vehículo, trayectoria del vehículo, cambio de velocidad, paradas en rutas, ahorro de combustible. Repercusiones en el medio ambiente y cuidados del automotor.
- Circulación, permanencia y accesibilidad para todos.

Normas de tránsito

- Autorregulación.
- Autoridades de Tránsito.
- Documentos obligatorios (Licencia de conducción, SOAT, revisión técnico mecánica, placas de vehículos).
- Infracciones a las normas de tránsito más frecuentes y su incidencia en la seguridad vial.
- Estructura del Código Nacional de Tránsito Terrestre, normas de comportamiento, sus reglamentaciones y procedimientos.
- Restricciones específicas en la movilidad en la ciudad.
- Conductas apropiadas e inapropiadas de Los actores de la vía
- La alimentación, el estrés y la fatiga en la conducción
- El alcohol y otras sustancias perjudiciales en la conducción
- La velocidad en los diferentes tipos de vía
- Respeto de lugares exclusivos o preferenciales para la circulación o estacionamiento.

Señalización vial e infraestructura vial.

- Señales de tránsito, sus clases y prelación.
- Las vías, sus funciones y los riesgos asociados.
- Carriles de tráfico mixto, carriles preferenciales y carriles exclusivos.
- Ciclo infraestructura.
- El espacio público.

Anexo 1 “Contenidos curriculares para los cursos de formación de conductores e instructores que imparten los centros de enseñanza automovilística”, información tomada de la Resolución 9425 de 2022

- to de programación, suministro de información.
- 4.h) Protocolo del servicio: tipología del servicio, tipología de usuarios, conservación y limpieza del vehículo, presentación personal, orientación al usuario.
- 4.i) Normas de seguridad en el aseguramiento de la carga.
- 4.j) Cargue y descargue de mercancías
- 4.k) Sistemas auxiliares de freno.

5. Para las categorías B3 y C3:

- 5.a) Adelantamiento a usuarios vulnerables.
- 5.b) Procedimientos técnicos: especificaciones del vehículo, puesta en marcha del vehículo, curvas de rendimiento del motor, curvas de frenado, operación del vehículo, adelantamiento de vehículos, conducción preventiva, conducción nocturna, dimensiones viso espacial, sistemas de seguridad y control del vehículo, sistemas de confort, lectura del tablero de instrumentos, manejo de información y equipos de comunicación, reparaciones menores, uso de salidas de emergencia.
- 5.c) Unidades métricas: conceptos de presión, temperatura, volumen, corriente eléctrica, velocidad lineal y angular o revoluciones por minuto.
- 5.d) Conducción eficiente: condiciones de arranque del motor, de puesta en marcha, de desplazamiento del vehículo, de cambios de velocidad, de paradas en vía, de ahorros de combustible, de cuidados del automotor y reducción de emisiones contaminantes.
- 5.e) Tablero de instrumentos: tipología, características, definición y conversión de unidades de medición, rangos y escalas de operación.
- 5.f) Condiciones del entorno: conceptos, características, flujos vehiculares, condiciones de la vía, topográficas, climatológicas, conducción diurna y nocturna.
- 5.g) Técnicas de conducción: cambio y uso del carril, cambio de calzada, virajes intersecciones, adelantamientos, afrontamiento de semáforos, de glorietas y de zonas de parqueo y estacionamiento; cambios de velocidad y aceleración progresiva, tiempos de respuesta, frenadas parciales y totales, paradas momentáneas; características y uso de manuales técnicos.
- 5.h) Normativa de seguridad y salud en el trabajo: riesgos biomecánicos, actos inseguros, pausas activas, posturas ergonómicas, estrés, tensión, cansancio, somnolencia, alerta, riesgo, distracción, discapacidad física, uso de drogas y alcohol, riesgo público.
- 5.i) Normativa ambiental: contaminación auditiva, disposición de residuos, ahorro energético, conducción eficiente.
- 5.j) Accidente de tránsito: primeros auxilios, atención primaria, botiquín, inmovilización, teléfonos de emergencia y protocolos, atención a víctimas.
- 5.k) Técnicas de comunicación: telefónica, radial, oral, y escrita; tipología de equipos y protocolos de comunicación.
- 5.l) Normas de seguridad en el aseguramiento de la carga.
- 5.m) Cargue y descargue de mercancías
- 5.n) Sistemas auxiliares de freno.
- 5.o) Clasificación de remolques y semirremolques.

Modulo 2

SABERES ESENCIALES OBLIGATORIOS TRANSVERSALES

El vehículo

- 1.a) Reconocimiento del vehículo (Partes esenciales, controles y localización).
- 1.b) Revisión pre operacional del vehículo (revisión de líquidos, sistema de frenos, sistema eléctrico y luces, llantas y kit de arrastre (solo en A1 y A2) previo a la conducción).
- 1.c) Elementos de seguridad activa del vehículo y tecnologías para la conducción segura.
- 1.d) Elementos de seguridad pasiva del vehículo y tecnologías para la conducción segura.
- 1.e) Equipo de prevención (componentes y cómo usarlos).
- 1.f) Taller para solucionar las averías más frecuentes del vehículo (cambiar una rueda o despinchar).

**SABERES ESENCIALES
OBLIGATORIOS ESPECÍFICOS****1. Para las categorías A1 y A2**

- Elementos de Protección Personal (el casco como EPP fundamental: talla, calidad y modo de uso).
- Uso de luces para aumentar la visibilidad de la motocicleta (normativa y asociación a la seguridad vial) y uso de prendas reflectivas.

Modulo 3**SABERES ESENCIALES
OBLIGATORIOS TRANSVERSALES****El vehículo**

- 1.a) Presentación de los elementos de seguridad activa del vehículo y tecnologías para la conducción segura.
- 1.b) Postura correcta del asiento.
- 1.c) Ajuste del cinturón de seguridad cuando aplique.
- 1.d) Adaptación viso espacial e identificación de puntos ciegos.
- 1.e) Relación espacial.
- 1.f) Puesta en marcha del motor.
- 1.g) Puesta en marcha del vehículo.
- 1.h) Coordinación: aceleración-freno-embrague.
- 1.i.) Aceleración y desaceleración.
- 1.j) Control del selector de velocidades.
- k) Conducción del vehículo en vía urbana.
- l) Conducción del vehículo en carretera.
- m) Conducción del vehículo y maniobra de frenado en terreno plano.
- n) Conducción del vehículo y maniobra de frenado en pendiente en ascenso y en descenso.
- o) Maniobras de cruces y adelantamientos.
- p) Utilización señales lumínicas, corporales y acústicas, de acuerdo con las condiciones del vehículo y de la vía
- q) Utilización de calzadas.
- r) Utilización de carriles.
- s) Afrontar y utilizar las glorietas.
- t) Afrontar intersecciones.
- u) Respeto a las señales horizontales y las señales verticales.
- v) Distancia de reacción.
- w) Distancia de frenado.
- x) Maniobras de adelantamiento.
- y) Maniobras de reversa.
- z) Entrada y salida en curva.
- aa) Estacionamiento en perpendicular.
- ab) Estacionamiento en oblicuo.
- ac) Estacionamiento en línea.
- ad) Sistemas de asistencia de la seguridad

**SABERES ESENCIALES
OBLIGATORIOS ESPECÍFICOS****Para las categorías A1 y A2**

- a) Ubicación del conductor y maniobra de frenado de emergencia.
- b) Conducción y frenado con relación a la potencia del vehículo.
- c) Maniobras de destreza individual: Carreteo; circular sobre una franja de anchura limitada (25 cm); eslabon a baja velocidad; frenado de emergencia; zig zag a velocidad mínima de 30 km; sortear un obstáculo a velocidad mínima de 50 km; desplazamientos en ocho.
- d) Circulación en vía pública: interacción con señales de tránsito verticales y horizontales; distancia de seguridad; cambio de carril; velocidad de acuerdo con el tipo de vía, y giros en intersecciones.

Para las categorías C1

- a) Maniobras de destreza individual: Avance y detención; marcha atrás; parqueo en línea (en ambos sentidos); maniobra de reversa en curva para parqueo en perpendicular (en ambos sentidos); maniobra de cambio de sentido de la marcha en espacio limitado; arranque y cambio de carril en rampa.
- b) Circulación en vía pública: interacción con señales de tránsito verticales y horizontales; distancia de seguridad; cambio de carril; velocidad de acuerdo con el tipo de vía y giros en intersecciones.

Para las categorías B3 y C3

- a) Maniobras de destreza individual: Acople y desacople del semirremolque; marcha atrás en recta y curva; y estacionamiento para cargue y descargue en plataforma.
- b) Circulación en vía pública: interacción con señales de tránsito verticales y horizontales; distancia de seguridad; cambio de carril; velocidad de acuerdo con el tipo de vía y giros en intersecciones.

Para las categorías B1

- a) Maniobras de destreza individual: Avance y detención; marcha atrás; parqueo en línea (en ambos sentidos); maniobra de reversa en curva para parqueo en perpendicular (en ambos sentidos); maniobra de cambio de sentido de la marcha en espacio limitado; arranque y cambio de carril en rampa.
- b) Circulación en vía pública: interacción con señales de tránsito verticales y horizontales; distancia de seguridad; cambio de carril; velocidad de acuerdo con el tipo de vía y giros en intersecciones.

Para las categorías B2 y C2

- a) Maniobras de destreza individual: Marcha atrás en recta y curva; parada de vehículo para ascenso y descenso de pasajeros; estacionamiento para cargue y descargue en plataforma.
- b) Circulación en vía pública: interacción con señales de tránsito verticales y horizontales; distancia de seguridad; cambio de carril; velocidad de acuerdo con el tipo de vía y giros en intersecciones.

Anexo 1 “Contenidos curriculares para los cursos de formación de conductores e instructores que imparten los centros de enseñanza automovilística”, información tomada de la Resolución 9425 de 2022

2.4. CONTENIDOS BÁSICOS PARA LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE INSTRUCTORES EN TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN

OBJETIVO

Formar personas con aptitudes pedagógicas y un nivel de conocimiento suficiente para capacitar conductores que se movilicen por las vías sin poner en riesgo su vida y la de las demás.

DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN PARA INSTRUCTORES

El curso de formación para instructores de conducción está orientado a profundizar los conocimientos del curso de formación a conductores. Al mismo tiempo, el curso busca desarrollar las competencias pedagógicas en el instructor, con miras a que este pueda llevar a cabo el proceso de enseñanza por competencias dirigido a los aspirantes que buscan obtener la licencia de conducción.

De acuerdo con la estructura del programa, el instructor deberá desarrollar en sus estudiantes:

- a) Habilidad en el manejo adecuado y responsable del vehículo automotor.
- b) Uso de elementos de protección personal y uso de luces que aumenten la visibilidad de cada vehículo para disminuir el riesgo de accidentalidad.
- c) Supervisión del vehículo de manera preventiva para evitar posibles daños durante la movilidad.
- d) Adquisición de conocimiento sobre movilidad segura, manejo preventivo, normas de tránsito, señalización vial e infraestructura vial.
- e) Reconocimiento de las responsabilidades y derechos como conductor.
- f) Reparación, control y cambio de llantas o accesorios en casos de emergencia.
- g) Gestión efectiva ante las autoridades de tránsito para Los registros, seguros y documentos obligatorios.
- h) Procedimientos, responsabilidades y derechos en caso de accidentes de tránsito (sinistros viales).
- i) Medidas de seguridad vial y prevención de accidentes, reconociendo los principales factores de riesgo y su forma de mitigación.
- j) Promover el uso de manifiestos adecuados con una conducción preventiva y eficiente en el marco de una movilidad segura y sostenible.

Modulo I
de formación

SABERES
ESENCIALES OBLIGATORIOS

1. Adaptación al medio

- 1.a) El rol del instructor.
- 1.b) La pedagogía de adultos.
- 1.c) Técnicas de enseñanza de habilidades y destrezas.
- 1.d) Desarrollo de hábitos y valores para la movilidad segura en la conducción de vehículos automotores: gestión de la velocidad y gestión de la fatiga.
- 1.e) Manejo de grupos.
- 1.f) Manejo de medios audiovisuales y de comunicación en la enseñanza y aprendizaje.
- 1.g) Desarrollo de talleres teórico-prácticos.
- 1.h) El transporte como factor de desarrollo.
- 1.i) Ubicación del conductor en la vía y sus componentes.
- 1.j) Señalización vial e infraestructura vial.
- 1.k) Enfoque de Sistema Seguro y Visión Cero.
- 1.l) Normas del tránsito.
- 1.m) Autoridades, organismos de tránsito y organismos de apoyo al tránsito.
- 1.n) Factores que intervienen en el tránsito.
- 1.o) Las víctimas (lesionados y fallecidos en Colombia: análisis por medio de transporte, género, edad, territorio, época del año, día y hora de ocurrencia).

2. Ética, prevención de
conflictos y comunicación:

- 2.a) Usuarios vulnerables: peatones, ciclistas y motociclistas.
- 2.b) La vía y los vehículos: pirámide de la movilidad.
- 2.c) El rol del conductor.
- 2.d) Deberes y responsabilidades.
- 2.e) Infracciones y
- 2.f) Los Derechos Humanos.
- 2.g) Tránsito, transporte, movilidad y seguridad vial.
- 2.h) Accesibilidad y sus barreras (población con discapacidad y conducción).
- 2.i) El espacio público.
- 2.j) Principales factores de riesgo en la conducción de un vehículo automotor.
- 2.k) La responsabilidad social.
- 2.l) Autenticidad.
- 2.m) Creatividad.
- 2.n) Comunicación y diálogo.
- 2.o) Manejo preventivo.
- 2.p) Valores ciudadanos.
- 2.q) Compromiso ético y formación profesional integral.
- 2.r) Componentes de una formación profesional.
- 2.s) Orientaciones para formar un compromiso ético.
- 2.t) Compromiso con el medio ambiente.
- 2.u) Prevención y solución de conflictos.
- 2.v) Comunicación asertiva.
- 2.w) Circulación, permanencia y accesibilidad para todos.
- 2.x) Los Centros de Enseñanza Automovilística y su reglamentación.
- 2.y) Accesibilidad y sus barreras.
- 2.z) Seguridad vial de vehículos adaptados.

Modulo II de formación básica aplicada

SABERES ESENCIALES OBLIGATORIOS

1. Técnicas de enseñanza

- 1.a) Metodología y didácticas de preparación de sesiones de clase.
- 1.b) Técnicas de autocontrol (fatiga, ansiedad, estrés, tensión, manejo de situaciones).
- 1.c) Estrategias de enseñanza de conocimientos.
- 1.d) Estrategias de enseñanza para el desarrollo de habilidades y destrezas.
- 1.e) Diseño de instrumentos de planificación, seguimiento y evaluación en la enseñanza y aprendizaje.
- 1.f) Análisis y manejo de ambientes de formación para situaciones extremas o críticas.
- 1.g) Manejo de ayudas audiovisuales y medios de comunicación en la enseñanza y en el aprendizaje (TIC).

2. Técnicas de conducción

- 2.a) Componentes del vehículo.
- 2.b) Elementos de seguridad.
- 2.c) Inspección al vehículo.
- 2.d) Adaptación al vehículo.
- 2.e) Familiarización con los distintos controles.
- 2.f) Conceptos de velocidad.
- 2.g) Operación del control de velocidades o selección de velocidades.
- 2.h) conducción en perímetro urbano.
- 2.i) conducción en carretera.
- 2.j) Adaptación viso espacial al vehículo.
- 2.k) Manejo preventivo

3. Marco legal

- 3.a) Aspectos normativos del tránsito.
- 3.b) Documentos obligatorios.
- 3.c) Normas del Servicio de Transporte público.
- 3.d) Licencias, clasificación y requisitos
- 3.e) Código Nacional de Tránsito y sus reglamentaciones.
- 3.f) Procedimientos jurídicos
- 3.g) Actuación en caso de daños o perjuicios a terceros.
- 3.h) Los organismos de apoyo al tránsito y su reglamentación,
- 3.i) Normativa de seguridad y salud en el trabajo: riesgos biomecánicos actos inseguros, pausas activas, posturas ergonómicas, estrés, tensión, cansancio, somnolencia, alerta, riesgo, distracción, discapacidad física, uso de drogas y alcohol, riesgo público.
- 3.j) Normas ambientales.

- 3.k) Restricciones por ciudades.
- 3.l) Normas de salud ocupacional, ambientales y de convivencia.
- 3.m) Uso adecuado de Elementos de Protección Personal (EPP).

4. Mecánica y electrónica básica

- 4.a) Descripción del vehículo.
- 4.b) Partes esenciales y localización.
- 4.c) Accesorios del motor.
- 4.d) Cambia de aceite y llantas.
- 4.e) Lectura y acciones frente a los controles.
- 4.f) Funcionamiento y averías más frecuentes de:
 1. Sistemas de dirección, frenos y llantas.
 2. Sistema de alimentación e inyección.
 3. Sistema eléctrico
 4. Sistema de refrigeración.
 5. Sistema de lubricación.
 6. Sistema de suspensión, amortiguación y rodamiento.
 7. Sistema de transmisión.
 8. Control de emisión de gases.
 9. Luces alineación.

Modulo III de formación específica

SABERES ESENCIALES OBLIGATORIOS

Unidad práctica:

- 1.a) Operación técnica del vehículo en terreno plano.
- 1.b) Operación técnica del vehículo en terreno pendiente.
- 1.c) Operación técnica del vehículo en vía urbana.
- 1.d) Operación técnica del vehículo en carretera.
- 1.e) Operación técnica del vehículo en condiciones de lluvia, neblina y/o baja visibilidad.
- 1.f) Utilización de señales lumínicas, corporales y acústicas
- 1.g) Parqueo y estacionamiento.
- 1.h) Actuación en caso de accidentes de tránsito (Protocolo de intervención P.A.S. (Proteger, avisar y socorrer)).

Anexo 1 “Contenidos curriculares para los cursos de formación de conductores e instructores que imparten los centros de enseñanza automovilística”, información tomada de la Resolución 9425 de 2022

3. INSTRUCTORES Y CONDUCTORES EMBAJADORES DE LA CULTURA CIUDADANA Y EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL EN LA MOVILIDAD DE BOGOTÁ

3.1. LA CULTURA CIUDADANA

La cultura ciudadana es el pilar fundamental para promover comportamientos responsables, respetuosos y solidarios donde se promueven principios como el respeto por las leyes y los derechos de los demás, la tolerancia, la inclusión, el compromiso con el bien común y la responsabilidad social, es por esto que se hace necesario que los currículos de los Centros de Enseñanza Automovilística CEA y otros organismos de tránsito incluyan contenidos que fortalezcan estos principios, es esencial fortalecer temas que impulsen acciones educativas en cultura ciudadana para formar instructores y conductores conscientes de su papel en las vías y así tener una movilidad segura, responsable y eficiente.

La cultura Ciudadana es el pilar de la convivencia y del respeto en las relaciones e interacciones con las personas, al incluir estos temas a conductores, instructores y demás actores viales como peatones, ciclistas se promueve la empatía y se reduce la conflictividad en las vías mejorando así la convivencia en el espacio público.

La incorporación de la cultura ciudadana en estos espacios permite:

- Formar conductores conscientes y responsables.
- Reducir la accidentalidad y reincidencia en infracciones.
- Promover una movilidad segura, sostenible y respetuosa.

3.2. BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL

Más allá de las normas, la reglamentación y la señalización vial, se busca formar instructores y conductores capaces de moverse por las vías con conciencia, respeto y autorregulación transformando hábitos y comportamientos para que cada trayecto sea un acto de convivencia, donde se respeta al otro y se construye una movilidad más humana y armoniosa, dentro y fuera de la ciudad.

Enseñar a los conductores a manejar sus emociones es crucial para garantizar la seguridad vial y el bienestar personal, los diferentes factores como el tráfico, las imprudencias de otros usuarios, los retrasos o incluso problemas personales pueden generar estrés, frustración o ira, emociones que pueden llevar a decisiones impulsivas y peligrosas, porque conducir no solo implica habilidades técnicas, sino también un control emocional adecuado para enfrentar estas situaciones que se presentan en la vía.

Cuando un conductor aprende a gestionar sus emociones, es capaz de mantener la calma ante contratiempos, responder de manera racional y minimizar riesgos. Este control emocional no solo reduce la probabilidad de accidentes, sino que también promueve una convivencia más armónica en las vías, disminuyendo los episodios de agresividad vial. Además, fomenta un enfoque preventivo, ayudando a los conductores a anticipar y adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno. En definitiva, trabajar en la salud mental y el bienestar emocional de los conductores es una inversión en la seguridad y calidad de vida tanto de ellos mismos como de todos los usuarios de las vías.

3.3. ARTICULACIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA Y LA EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL

Al fortalecer estos temas de cultura ciudadana y la educación socioemocional, se logrará:

1. Abordar los comportamientos individuales desde una perspectiva educativa, transformando hábitos y comportamientos para que los conductores actúen de manera consciente, solidaria y responsable en las vías.
2. Cambio de paradigma: de la norma a la convicción
3. La importancia de las normas como un acuerdo social para la convivencia, combinando las habilidades técnicas, la educación socioemocional y los valores cívicos.
4. Se promoverá el respeto, la empatía y la responsabilidad con otros actores viales (peatones, ciclistas, motociclistas).
5. Promover la autorregulación
6. Se comprenderá que la vía es un espacio compartido donde cada actor tiene derechos y deberes y que todos (conductores, peatones, ciclistas)
7. Los cursos para reducción de comparendos son oportunidades para reeducar a los infractores y no solo para imponer sanciones económicas, este debe ser el espacio para reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones y adoptar comportamientos seguros.

8. Se fomentará el uso responsable de medios alternativos de transporte, como la bicicleta y el transporte público, así se promoverá una visión más amplia y sostenible de la movilidad.
9. Se comprenderá que los accidentes y la imprudencia generan enormes costos económicos para los sistemas de salud, la infraestructura y las familias.
10. Se abordará la relación con la autoridad, promoviendo el respeto hacia agentes de tránsito y las normas de movilidad, no como una imposición, sino como una medida de protección colectiva.
11. La siniestralidad se reduce significativamente cuando los conductores autorregulan su comportamiento, entendiendo las consecuencias de sus acciones.

La implementación de la cultura ciudadana y el bienestar socioemocional en la formación de instructores y conductores es esencial para transformar la movilidad en Bogotá hacia un modelo más seguro, responsable y armónico.

Al incorporar principios fundamentales en los currículos de enseñanza en los Centros de Enseñanza Automovilística CEA y otros organismos de tránsito, la empatía, la inclusión y la autorregulación emocional, se contribuye a la creación de una convivencia vial más respetuosa y se minimizan los comportamientos impulsivos y peligrosos que conducen a la siniestralidad, ya que el desarrollar talleres o actividades enfocados en la convivencia y el manejo de las emociones serán acciones preventivas que fortalecerán el buen desarrollo de la movilidad ante los retos del tráfico diario.

Este enfoque integral va más allá de la simple enseñanza de normas de tránsito; se trata de formar actores viales conscientes de su impacto en el entorno, capaces de tomar decisiones racionales y responsables.

El fortalecimiento de estos valores y habilidades tiene beneficios inmediatos en la seguridad vial, contribuyen a una ciudad más sostenible y consciente, donde la movilidad no se ve como un simple desplazamiento, sino como un acto colectivo de respeto y colaboración. Al promover un cambio de paradigma hacia el cumplimiento de las normas por convicción y no por temor, se logrará una mejora significativa en la calidad de vida de todos los ciudadanos, reduciendo los costos sociales, económicos y emocionales derivados de la imprudencia vial.

4. NOTICIAS Y ESTUDIOS

Es importante tener en cuenta las siguientes noticias y estudios que han sido publicados en diferentes medios y que dan a conocer la afectación de la salud mental de los conductores cuando se enfrentan a trancones y/o largas jornadas laborales.

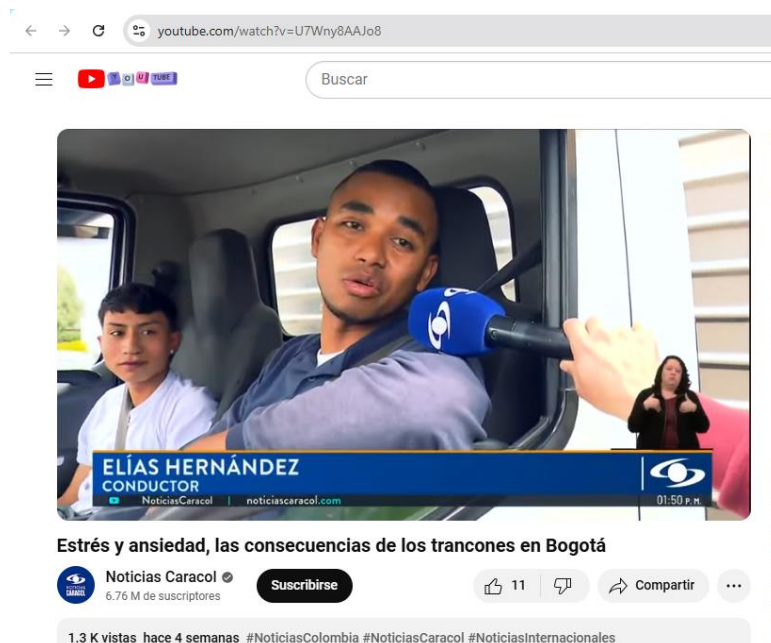
1. Transporte Público bajo estrés, Periodico, El Tiempo (10/02/2023)



<https://www.eltiempo.com/bogota/conductores-de-transporte-publico-bajo-estres-opinion-de-omar-orostegui-743368>

2. Estrés y ansiedad, las consecuencias de los trancones en Bogotá, Noticias Caracol, (8/12/2024)

El tiempo que permanecen los conductores y pasajeros dentro de sus vehículos ha comenzado a ocasionar el deterioro en su salud mental. Expertos explican las consecuencias de los eternos trancones.



<https://www.youtube.com/watch?v=U7Wny8AAJo8>

3. Indignante acto de intolerancia de Conductor en Bogotá, Sebastián David García Castro,
PERIODISTA EL TIEMPO 20.10.2023 06:43Actualizado: 20.10.2023 08:35

[Un episodio de intolerancia se vivió a las afueras de unos grados en el Movistar Arena, de Bogotá.](#) El conductor de un vehículo Renault, quien hacía fila para ingresar al parqueadero, reaccionó violentamente contra algunos de los asistentes que llegaban a la ceremonia.



4. Estudio: “Estrés al conducir”, Universidad del Bosque

Un estudio que realizó, la Universidad del Bosque, en el año 2023, con la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas liderada por el Docente Boris Cendales Ayala, reveló una amenaza menos visible pero preocupante: La relación entre el estrés al conducir y el aumento de comportamientos de conducción arriesgados en trabajadores colombianos.

La muestra analizó la conducta de 941 trabajadores de variadas industrias, con un promedio de edad de 37 años, de los cuales el 82 % eran hombres y el 18 % mujeres. Los resultados destacan que factores cotidianos, tales como el congestionamiento vehicular en horas pico, la presión por llegar a tiempo y las confrontaciones con otros conductores, incrementan la probabilidad de conductas peligrosas al conducir.

Los citados factores estresantes se asocian directamente con resultados negativos en salud, como fatiga y ansiedad, que a su vez propician errores y accidentes en las carreteras. "La evidencia sobre cómo el estrés al conducir impacta negativamente el rendimiento del conductor es abrumadora", indica el investigador, quien añade que **"los estados emocionales pueden incrementar exponencialmente el riesgo de sufrir accidentes"**.



<https://www.unbosque.edu.co/centro-informacion/bosque-contexto/estres-al-conducir-un-nuevo-riesgo-laboral-en-colombia>

5. ALCANCE DE LA INICIATIVA

De orden constitucional

Estos artículos proporcionan un marco constitucional que respalda la implementación de políticas y programas de educación vial y cultura ciudadana en Colombia, como parte de la responsabilidad del Estado en la promoción de la seguridad, la convivencia pacífica y el bienestar de la población.

Artículo 2: Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Artículo 67: La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.

Artículo 78: La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización.

Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.

El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las

organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos internos.

Artículo 95: La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.

Son deberes de la persona y del ciudadano:

1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios;
2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas;
3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales.
4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica;
5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país;
6. Propender al logro y mantenimiento de la paz;
7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia;
8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano;
9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad.

De orden Nacional

A nivel nacional, en Colombia existen varias normas y leyes que están directamente vinculadas con la educación vial y la cultura ciudadana. A continuación, las más relevantes:

Educación Vial

La norma jurídica más relevante como marco normativo para las iniciativas del tránsito, desde su componente técnico, es la Ley 769 de 2002 “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”, principalmente

Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre): Esta ley establece las normas generales para el tránsito de personas y vehículos en Colombia. En su artículo 56, se especifica la obligatoriedad de incluir la educación vial como un componente fundamental en la formación de los conductores, tanto en la teoría como en la práctica. Además, el artículo 15 promueve la educación vial como una asignatura obligatoria en los niveles de educación básica y media.

Decreto 1500 de 2009 (abril 29) por el cual se establecen los requisitos para la constitución, funcionamiento y habilitación de los Centros de Enseñanza Automovilística, se determina su clasificación y se dictan otras disposiciones. Nota: Reglamentado por la Resolución 3245 de 2009. M. de Transporte

Resolución 3245 de 2009 (Julio 21) [Compilada en la Resolución Única Compilatoria en materia de Tránsito del Ministerio de Transporte](#) Por la cual se reglamenta el Decreto 1500 de 2009 y se establecen requisitos para la habilitación de los Centros de Enseñanza Automovilística

Ley 1397 de 2010 Por medio de la cual se modifica la Ley 769 de 2002. art 15, 18, 19, 154.

Ley 1383 de 2010, modifica el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002) y fortalece las disposiciones sobre educación vial. Establece sanciones más estrictas para quienes infrinjan las normas de tránsito y exige a las escuelas de conducción garantizar una formación integral que incluya principios de seguridad vial y conducción defensiva. Los principios rectores de este código son: seguridad de los usuarios, la movilidad, la calidad, la oportunidad, el cubrimiento, la libertad de acceso, la plena identificación, libre circulación, educación y descentralización.

Ley 1503 de 2011, por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones. Esta ley establece que la educación vial es un derecho de todos los ciudadanos y un deber del Estado, y promueve la creación de planes estratégicos de seguridad vial en las entidades públicas y privadas. También fomenta la inclusión de la educación vial en todos los niveles educativos y la realización de campañas de sensibilización sobre la importancia de respetar las normas de tránsito.

Resolución 20223040009425 DE 2022 (Febrero 24) Por la cual se modifica y adiciona la Resolución [3245](#) de 2009 del Ministerio de Transporte "Por la cual se reglamenta el Decreto [1500](#) de 2009 y se establecen requisitos para la habilitación de los Centros de Enseñanza Automovilística"

Ley 2283 de 2023 (Enero 05) Por medio de la cual se modifica la Ley [769](#) de 2002, se reglamenta la actividad de los organismos de apoyo al tránsito, garantizando el buen funcionamiento de los Centros de Enseñanza Automovilística - CEA, como mecanismo de prevención y amparo de la siniestralidad vial, y se dictan otras disposiciones

Cultura Ciudadana

La Ley Nacional 2262 de 2022: Establece los parámetros generales para la creación de la política pública de Cultura Ciudadana en Colombia y desde su objetivo establece los lineamientos, buscando que la acción del gobierno armonice el progreso individual con la consecución del bien común.

Busca fortalecer la cultura ciudadana a través de la educación, la participación ciudadana, la responsabilidad institucional y el reconocimiento a las iniciativas que promuevan los valores cívicos y democráticos en la sociedad.

El alcance de esta política es crear condiciones institucionales, estratégicas, financieras, sociales y de democracia participativa, para el fomento de cambios voluntarios de conocimientos, actitudes, emociones, percepciones, hábitos y prácticas para alcanzar la convivencia democrática, la valoración y promoción de las diferencias, la construcción y apropiación social multiétnica y pluricultural del territorio, elevando el sentido de identidad y pertenencia ciudadana, la sostenibilidad de las formas de vida y el cuidado y respeto de lo público como un bien común.

Política Pública de Cultura Ciudadana 2019-2038: Esta política fue aprobada y adoptada en el marco del Consejo de Política Económica y Social de Distrito Capital a través del CONPES No. 10 de 2019 define que, la cultura ciudadana se entiende como el conjunto diverso de modos de ser, sentir, pensar y actuar en la ciudad mediado por el reconocimiento del otro (la ciudad, las personas u otras formas de vida) y el respeto a la diferencia, la construcción del tejido social, la convivencia, las sociabilidades y el desarrollo libre de proyectos de vida individuales y colectivos"

Reglamentos y Decretos

Resolución 12379 de 2012, Por la cual se adoptan los procedimientos y se establecen los requisitos para adelantar los trámites ante los organismos de tránsito, emitida por el Ministerio de Transporte.

Decreto 1344 de 1970, [Derogado por la Ley 769 de 2002](#), por el cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre.

De orden Distrital

En Bogotá existen acuerdos y normas que regulan y establecen lineamientos para las escuelas de conducción, con el fin de asegurar la calidad de la formación de los conductores y promover la seguridad vial.

Decreto 594 de 2015 (Diciembre 30) “Por el cual se adopta el Plan de Movilidad Escolar – PME para Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones”

Acuerdo 689 de 2017 Concejo de Bogotá, D.C. “Por medio del cual se implementan medidas para fortalecer las prácticas de eco conducción en el Distrito Capital”

Decreto 494 de 2023 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., por el cual se adopta el Plan Distrital de Seguridad Vial 2023-2032

A su vez el **Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027 "Bogotá Camina Segura"** establece lineamientos generales para promover la cultura ciudadana y el bienestar socioemocional en la ciudad. Este plan busca construir una ciudad donde prevalezca la confianza, el respeto y la libertad, fomentando entornos seguros y justos para todos los ciudadanos.

6. IMPACTO FISCAL

El Artículo 7 de la Ley 819 de 2003, establece:

“Artículo 7º. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas

los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, la presente iniciativa no genera un impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez, dentro del Plan Distrital de Desarrollo se contemplo la formulación de un Plan de Prevención y Atención Efectiva, Humanizada e Integral de salud mental, el cual deberá contener un enfoque poblacional en los actores viales, en efecto, dicha disposición debe contar con fuente de financiación por lo que, no se creará una nueva o está será modificada, por el contrario, con esta iniciativa se pretende fortalecer con lineamientos para su formulación y ejecución.

Cordialmente,

FERNANDO LÓPEZ GUTIÉRREZ

Autor principal- Concejal de Bogotá
Nuevo liberalismo

CRISTINA CALDERÓN RESTREPO

Concejal de Bogotá
Nuevo liberalismo

JUAN JAVIER BAENA MERLANO

Concejal de Bogotá
Nuevo liberalismo

JUAN MANUEL DÍAZ

Concejal de Bogotá
Nuevo liberalismo

JESUS DAVID ARAQUE MEJÍA

Concejal de Bogotá
Nuevo liberalismo

RICARDO CORREA MOJICA

Concejal de Bogotá
Nuevo liberalismo

JUAN DAVID QUINTERO RUBIO

Concejal de Bogotá
En Marcha

DAVID SAAVEDRA MURCIA

Concejal de Bogotá
En Marcha

PROYECTO DE ACUERDO NO 223 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL LOS CENTROS DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA -CEA- Y OTROS ORGANISMOS DE TRÁNSITO QUE DICTAN CURSOS SOBRE NORMAS DE TRÁNSITO EN BOGOTÁ DEBEN FORTALECER LA EDUCACIÓN VIAL EN CULTURA CIUDADANA Y EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL EN CONDUCTORES E INSTRUCTORES”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993.

ACUERDA

Artículo 1. Objeto. Con el fin de promover la cultura ciudadana, mejorar el bienestar socioemocional y fortalecer la educación vial, tanto de conductores como de instructores, la Administración Distrital, a través de la Secretaría de Educación, Secretaría de Movilidad y Secretaría de Cultura, ordenará a los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) y otros organismos de tránsito en Bogotá, fortalecer sus currículos con programas educativos enfocados en la formación integral en cultura ciudadana, el manejo de las emociones y el uso responsable de las vías con el fin de prevenir accidentes y lograr una movilidad más segura y sostenible.

Artículo 2. Responsabilidad. La administración distrital, a través de la Secretaría de Educación, en el marco de sus competencias, fortalezca en el registro de los programas que hacen los Centros de Enseñanza Automovilística CEA y otros organismos de tránsito que dictan cursos sobre normas de tránsito fortalecer en los currículos que se encuentran en el Anexo 1 “Contenidos curriculares para los cursos de formación de conductores e instructores que imparten los centros de enseñanza automovilística”, de la Resolución 9425 de 2022 los temas relacionados a la cultura ciudadana y el bienestar socioemocional de conductores e instructores.

Artículo 3. La ejecución de este Acuerdo se efectuará a través de la transversalidad de funciones de la Secretaría Distrital de Movilidad, la Secretaría Distrital de Salud, la

Secretaría Distrital de Educación, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, y la Secretaría Distrital de Planeación.

Artículo 5. En un término no mayor a seis (6) meses, desde la entrada en vigor del presente acuerdo, la Administración Distrital implementará lo acordado.

Artículo 4. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. Vigencia.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Presidente

Secretaria General de Organismo de Control

Carlos Fernando Galán Pachón

PROYECTO DE ACUERDO NO 224 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA DESCONGESTIÓN DE LOS CENTROS DE DETENCIÓN TRANSITORIA QUE ESTÁN BAJO LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

I. OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto de acuerdo tiene por objeto la adopción de medidas para la descongestión de los Centros de Detención Transitoria que están bajo la jurisdicción del Distrito Capital, con el fin de reducir el hacinamiento y asegurar el cumplimiento de los estándares mínimos de dignidad humana para la población reclusa en dichos centros.

II. SUSTENTO JURÍDICO

• DE ORDEN CONSTITUCIONAL

Que el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia establece que Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

Que el artículo 2° de la Constitución Política de Colombia precisa que “nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas **ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes**”.

Que el artículo 93° de la Constitución Política de Colombia, ordena que “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.”

Que el artículo 28 de la Constitución Política de Colombia, establece que: “toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.”

Que el *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos* estipula que “Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. (...) **Los procesados estarán separados de los condenados**, salvo en circunstancias excepcionales, y **serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas**”

- **DE ORDEN LEGAL**

LEY 65 DE 1993: “Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario” dispone en su artículo 17 la responsabilidad del Distrito Capital en la “creación, fusión o supresión, dirección, y organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para **las personas detenidas preventivamente** y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad, por orden de autoridad policiva.”

LEY 1709 DE 2014: “Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones.”

- **Artículo 12.** Modifícase el artículo 21 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 21. Cárceles y pabellones de detención preventiva. Las cárceles y pabellones de detención preventiva son establecimientos con un régimen de reclusión cerrado. Estos establecimientos están dirigidos exclusivamente a la atención de personas en detención preventiva en los términos **del artículo 17 de la Ley 65 de 1993**, los cuales están a cargo de las entidades territoriales. Podrán existir pabellones para detención preventiva en un establecimiento penitenciario para condenados, cuando así lo ameriten razones de seguridad, **siempre y cuando estos se encuentren separados adecuadamente de las demás secciones de dicho complejo y de las personas condenadas**. (negrita y subrayado fuera de texto)

Las entidades territoriales, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura **podrán realizar las gestiones pertinentes para la construcción** conjunta de ciudadelas judiciales con un centro de detención preventiva anexos a sus instalaciones, así como articular todo lo necesario para la construcción y el mantenimiento de estos complejos judiciales.

LEY 715 DE 2001: “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.”

- **Artículo 76.6.** En materia de centros de reclusión: Los municipios en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, **podrán apoyar la creación, fusión o**

supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad.

LEY 2197 DE 2022: “Por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones.”

- **Artículo 63.** Adiciónese un artículo 34 al título 11 de la Ley 65 de 1993, del siguiente tenor:
- **Artículo 34.** De la infraestructura carcelaria, su operación y mantenimiento. El Gobierno Nacional y **las entidades territoriales del orden departamental, municipal y distrital para efectos del diseño, construcción, dotación, operación o mantenimiento de la infraestructura carcelaria o penitenciaria podrá efectuar su desarrollo a través de esquemas de Asociación Publico Privadas, APP,** salvo en lo referente a los servicios de tratamiento penitenciario y la prestación de servicios de seguridad y vigilancia de población carcelaria.

LEY 906 DE 2004: “Por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”

- **Artículo 1.** Dignidad humana. Los intervinientes en el proceso penal serán tratados con el respeto debido a la dignidad humana.
- **Artículo 313.** Procedencia de la detención preventiva. Inc. 4. Cuando la persona haya sido capturada por conducta constitutiva de delito o contravención, dentro del lapso de los tres años anteriores, contados a partir de la nueva captura o imputación, siempre que no se haya producido la preclusión o absolución en el caso precedente.

LEY 599 DE 2000: “Por medio de la cual se expide el Código Penal”

- **Artículo 1.** Dignidad humana. El derecho penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana.
- **Artículo 3.** Principios de las sanciones penales. La imposición de la pena o de la medida de seguridad responderá a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad.

El principio de necesidad se entenderá en el marco de la prevención y conforme a las instituciones que la desarrollan.

- **Artículo 5.** Funciones de la medida de seguridad. En el momento de la ejecución de la medida de seguridad operan las funciones de protección, curación, tutela y rehabilitación.

- **JURISPRUDENCIA**

SENTENCIA T-153 DE 1998: Primera Declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucionales en el Sistema Penitenciario y Carcelario

SENTENCIA T-388 DE 2013: Segunda Declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucionales en el Sistema Penitenciario y Carcelario.

Sentencia T-762 DE 2015: Reafirmación del Estado de Cosas Inconstitucionales en el sistema Penitenciario y Carcelario.

Sentencia SU-122 DE 2022: Extensión del Estado de Cosas Inconstitucionales en los Centros de Detención Transitorios.

III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Los Centros Penitenciarios, Carcelarios y de Detención Transitoria son instituciones que tienen como presupuesto fundamental y constitucional garantizar la seguridad de los ciudadanos, así como también contribuir a la resocialización de las personas privadas de la libertad, esto implica que *“la persona privada de la libertad tenga una actividad al interior del establecimiento de reclusión y eventualmente reporte algunos beneficios económicos por el trabajo desarrollado, sino también para generar un puente hacia la vida en libertad, con la aprehensión de algún arte u oficio que le permita devengar recursos por fuera de los muros de la cárcel, desarrollando una actividad legal que lo aleje de la comisión de delitos”*¹⁶

No obstante, la realidad de estos centros es compleja y problemática. Hasta la fecha, la Corte Constitucional por medio de cuatro pronunciamientos, ha evidenciado vulneraciones sistemáticas a los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad, situación que derivó, en términos generales, en la declaratoria de un estado de cosas inconstitucionales del Sistema Carcelario y Penitenciario que aún persiste.

Frente a ello, será apremiante exponer las razones que derivaron en estos pronunciamientos, para posteriormente proponer una serie de medidas que contribuyan, desde el nivel distrital, a la superación de dicha problemática.

¹⁶ Hernández Jiménez, N., (2017). LA RESOCIALIZACIÓN COMO FIN DE LA PENA – una frustración en el sistema penitenciario y carcelario colombiano. Caderno CRH, 30(81), 539-559. <https://doi.org/10.1590/S0103-49792017000300010>

A continuación, se presentan brevemente los cuatro (4) pronunciamientos de la Corte Constitucional:

Sentencia T-153 de 1998.

En la sentencia referenciada, la Corte Constitucional realizó por primera vez un análisis exhaustivo de la situación en los centros penitenciarios y carcelarios del país. En esta oportunidad, el máximo órgano constitucional reconoció la necesidad de incrementar el personal de la guardia penitenciaria, con el objetivo de restaurar el orden y el cumplimiento de la ley, al interior de estos establecimientos. Lo anterior, como *Condicio sine qua non* para garantizar los derechos fundamentales de los reclusos y garantizar el proceso de resocialización al que están destinados durante la privación de su libertad.

Por otra parte, la Corte reconoció la falta de infraestructura adecuada para abordar el hacinamiento en los centros de reclusión y destacó que dicha situación no afectaba exclusivamente a las cárceles del orden nacional, sino que también comprometía a los establecimientos del orden distrital, municipal y departamental. Esta circunstancia impedía el traslado de los reclusos preventivos y condenados a las cárceles correspondientes.

Por lo anterior, la Corte Constitucional declaró que el estado de cosas que presentan las cárceles del país es inconstitucional y **ordenó a los Gobernadores Alcaldes, Concejos distritales y municipales, entre otras medidas, cumplir con la obligación de crear y mantener centros de reclusión propios.**

Sentencia T 388 de 2013

Luego de la declaratoria de 1998 y ante un aumento en la interposición de tutelas que evidenciaban una vulneración masiva, sistemática y generalizada en materia de derechos fundamentales a los reclusos, la Corte constitucional, por segunda ocasión, emite una declaratoria del estado de cosas inconstitucionales en el sistema penitenciario y carcelario. Este pronunciamiento tuvo como factores fundamentales y determinantes los siguientes:

“(i) los derechos constitucionales de las personas privadas de la libertad son violados de manera masiva y generalizada; (ii) las obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad han sido incumplidas de forma prolongada; (iii) el Sistema penitenciario y carcelario ha institucionalizado prácticas inconstitucionales; (iv) las autoridades encargadas no han adoptado las medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar efectivamente la vulneración de los derechos; (v) las soluciones a los problemas constatados en el Sistema penitenciario y carcelario, comprometen la intervención de varias entidades, requiere un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante; y, por último, (vi) si todas las personas privadas de la libertad acudieran a la acción de tutela, se produciría una congestión judicial mayor de la que ya existe actualmente.”

Sentencia T-762 de 2015.

A diferencia de las sentencias referenciadas anteriormente, en esta ocasión y luego de un examen del cumplimiento de las órdenes emitidas, el máximo tribunal constitucional reiteró el Estado de Cosas declarado al constatar que las situaciones fácticas demostradas en dicho pronunciamiento no habían sido superadas; subrayando así que el incumplimiento de dichas órdenes aún persistía.

Según la Corte, las características que contempla el sistema penitenciario y carcelario en el país- y que llevaron desde luego a su declaratoria- lejos de ser fenómenos aislados constituyen problemáticas estructurales que requieren soluciones de fondo y duraderas. Dificultades sistemáticas como el hacinamiento, son producto de la falta de políticas públicas y fortalecimiento institucional que permitan superar la “*desproporción entre las entradas y salidas de las personas privadas de la libertad*”. Asimismo, la construcción de instalaciones penitenciarias deficientes no contemplativas de un número de cupos considerables que, en todo caso, incumplen los estándares mínimos de subsistencia, dignidad y salubridad impiden indiscutiblemente la formulación de una política criminal que, además de cumplir con la responsabilidad del Estado con las personas privadas de la libertad, satisfaga los fines esenciales previstos en la Constitución Nacional

Finalmente, la Corte identificó la problemática de reclusión conjunta entre personas sindicadas y condenadas, atribuyendo como causa estructural la falta de articulación entre las entidades territoriales y el Ministerio de Justicia y del Derecho. En consecuencia, la Corte instó a los entes territoriales para iniciar “*todas las acciones administrativas, presupuestales y logísticas necesarias para involucrarse efectivamente en el proceso seguido por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, para cumplir con las obligaciones impuestas por la Ley 65 de 1993 y sus modificaciones.*”

Sentencia SU 122 DE 2022

En esta oportunidad la Corte Constitucional extendió el estado de cosas inconstitucionales del Sistema Penitenciario y Carcelario a los **Centros de Detención Transitoria**. (Inspecciones, Estaciones, Subestaciones de policía, Centros de Atención Inmediata -CAI- y Unidades de reacción Inmediata-URI-).

Esta sentencia constituye la piedra angular del presente proyecto de acuerdo. Mientras que, en los anteriores pronunciamientos el estudio se había centrado en examinar de fondo las vulneraciones de derechos fundamentales al interior de las cárceles y penitenciarias, en esta ocasión el máximo tribunal constitucional enfocó su análisis de constitucionalidad en las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de la libertad en los Centros de Detención Transitoria.

La Defensoría del Pueblo presentó a la Corte el siguiente informe que, al momento de la decisión, evidenció una desproporción entre la capacidad de las estaciones de policía y las URI para custodiar sindicados versus el total de la población reclusa en estos centros de detención Transitoria (Tabla 1).

Frente a ello, se estableció la necesidad de “*más cupos para la población privada de la libertad bajo detención preventiva lo que exige la identificación de más fuentes de financiación para que los entes territoriales puedan cumplir con sus obligaciones legales*”

Tipo de centro	Capacidad	Total PPL	Sobrepoblación	Hacinamiento
Estaciones de Policía	5.831	17.477	11.646	200%
URI	1.292	1.834	542	42%
Total:		19.311		

(Tabla

1)

Fuente: Defensoría del Pueblo, a partir de la Sentencia SU 122 de 2022

En consecuencia, la Corte ordenó establecer un plan de acción distribuido en 2 fases; transitoria y definitiva. Para la primera, el objetivo fundamental es disminuir el hacinamiento en los centros de atención transitoria de carácter urgente y de inmediato cumplimiento. Para la segunda fase, el propósito final es erradicar el uso de los centros de detención preventiva y fortalecer la infraestructura adecuada para responder a la capacidad de los sindicados. No obstante, aclaró que “*la ampliación de cupos carcelarios no contradice la regla de la excepcionalidad de la detención preventiva, puesto que, ante una situación de hacinamiento tan grave como la del Sistema Penitenciario y Carcelario, estas medidas son complementarias y resultan necesarias para atender la crisis. En ese sentido, como se demostró en el presente proceso, además de una aplicación excesiva de la detención preventiva, existe un déficit de infraestructura destinada a la custodia de personas detenidas preventivamente, por lo que se requiere de medidas en ambos frentes*”.

A continuación, se extraen las acciones ordenadas por la Corte Constitucional **a los entes territoriales** que tienen bajo su jurisdicción a los denominados Centros de Detención Transitorios para el cumplimiento del plan de acción ordenado.

PLAN DE ACCIÓN	OBJETIVO	ORDEN
FASE TRANSITORIA	<i>Disminuir y acabar con el hacinamiento en las inspecciones, estaciones y subestaciones de Policía, unidades de reacción inmediata y lugares similares. Esto con el fin de atender de forma inmediata la situación indigna en la que se encuentran las personas allí reclusas.</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de esta sentencia (...) se deberá garantizar que las personas privadas de la libertad en estos lugares cuenten con las condiciones mínimas de alimentación, acceso a baños, ventilación y luz solar suficientes; así como la separación tanto entre hombres y mujeres, como entre menores y mayores de edad. ● En el término máximo de un (1) año y medio siguiente a la notificación de esta providencia, dispongan de inmuebles, bien sea que estén bajo su dominio o a través del perfeccionamiento de contratos como el comodato o el arrendamiento, que cuenten con las condiciones de seguridad, salubridad, higiene y sanidad adecuadas, para trasladar temporalmente a personas reclusas en los denominados centros de detención transitoria y disminuir el hacinamiento.
FASE DEFINITIVA	<i>Eliminar de manera definitiva el uso de los denominados centros de detención transitoria y ampliar los cupos en los establecimientos carcelarios a nivel territorial y nacional, con condiciones adecuadas que aseguren los derechos de las personas procesadas.</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● En el término máximo de un (1) año, contado a partir de la notificación de la presente providencia, todas las entidades territoriales, especialmente los departamentos, el distrito capital y las capitales de departamento, establezcan una planeación de fuentes de financiación de gastos que incluya el aumento de cupos a favor de la población procesada (bajo detención preventiva). ● A la alcaldía mayor de Bogotá (...) de manera coordinada y dentro del plazo máximo de dos (2) años, siguientes a la notificación de esta sentencia, formulen proyectos para la construcción y/o adecuación de infraestructura carcelaria destinada a las personas con detención preventiva en establecimiento de reclusión.

(Tabla 2)

Fuente: Elaboración Propia, a partir de la Sentencia SU-122/2022.

Aunado a lo anterior, se indagó a la secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta sentencia.

Frente a la orden primera de la fase transitoria, la secretaría de Seguridad y Convivencia y Justicia, precisó que “aunque la administración distrital no opera las URI ni las estaciones de policía, ha solicitado a la MEBOG que, a través de su Oficina de Bienes Raíces, priorice la intervención de celdas, reconociendo que la Policía Metropolitana de Bogotá debe determinar las estaciones que requieren intervenciones inmediatas. La Secretaría Distrital informa que utiliza recursos del Fondo Cuenta para la Seguridad en la intervención y mantenimiento de equipamientos de seguridad bajo la responsabilidad de la MEBOG, como las estaciones de policía, y realiza mantenimientos en Estaciones de Policía a solicitud de la MEBOG.” Estas intervenciones efectuadas por la Secretaría de Seguridad, se han desarrollado desde el año 2019 hasta el 2023, cuya inversión ha sido en los siguientes valores:

2019

EQUIPAMIENTOS INTERVENIDOS	VALOR INTERVENCION	INVERSION SALAS RETENIDOS
ESTACION DE POLICIA BOSA	\$ 538.755.276,00	\$ 244.552.305,00
ESTACION DE POLICIA KENNEDY	\$ 572.469.447,00	\$ 207.170.687,00
ESTACION DE POLICIA ENGATIVA	\$ 552.343.622,00	\$ 403.041.148,00
ESTACION DE POLICIA SUBA	\$ 554.797.844,00	
ESTACIÓN DE POLICIA CANDELARIA	\$ 654.027.950,00	
Estacion Policia Sancristobal	\$ 266.009.381,00	
ESTACION DE POLICIA TUNJUEUITO	\$ 569.170.664,00	
Estacion De Policia Usaquen	\$ 16.538.273,00	
ESTACION DE POLICIA ANTONIO NARIÑO E	\$ 385.579.696,00	\$ 385.579.696,00
ESTACION DE POLICIA MARTIRES	\$ 719.397.724,00	\$ 719.397.724,00
ESTACION DE POLICIA TEUSAQUILLO	\$ 542.129.038,00	\$ 542.129.038,00
ESTACION DE POLICIA CIUDAD BOLIVAR	\$ 328.466.514,00	\$ 328.466.514,00
ESTACIÓN DE POLICIA SANTAFE	\$ 439.844.041,00	\$ 439.844.041,00
ESTACION DE POLICIA FONTIBON	\$ 19.879.402,00	\$ 19.879.402,00
ESTACION DE POLICIA PUENTE ARANDA	\$ 9.361.859,00	
TOTAL	\$ 6.168.770.731,00	\$ 3.290.060.555,00

2020

EQUIPAMIENTOS INTERVENIDOS	VALOR NTERVENCION	INVERSION SALAS RETENIDOS
ESTACION DE POLICIA CIUDAD BOLIVAR	\$ 1.231.347.388,42	
ESTACION DE POLICIA ANTONIO NARIÑO	\$ 617.735.768,32	
ESTACION DE POLICIA FONTIBON	\$ 537.100.153,20	\$ 35.816.821,00
ESTACION DE POLICIA RAFAEL URIBE URIBE	\$ 433.212.017,89	\$ 116.820.850,00
ESTACION DE POLICIA BOSA	\$ 14.607.343,21	
ESTACION DE POLICIA TUNJUEUITO	\$ 87.711.520,42	
ESTACION DE POLICIA PUENTE ARANDA	\$ 23.765.970,70	
ESTACION DE POLICIA USAQUEN	\$ 59.198.957,10	\$ 15.830.820,00
ESTACION DE POLICIA KENNEDY	\$ 7.231.907,07	
TOTAL	\$ 2.952.712.070,00	\$ 168.468.491,00

(Tabla 3)

Fuente: Respuesta a Derecho de Petición de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, 9- 02-2024

Para el año 2021 se suscribió el contrato de obra No. 1526, cuya ejecución finalizó el año anterior. La inversión para adecuar las estaciones de policía fue desagregada de la siguiente manera:

2021 a 2023 (contrato de mantenimiento No 1526-2021)

ESTACION DE POLICIA	INVERSIÓN
Candelaria	\$6.396.878
Fontibón	\$47.262.398
Kennedy	\$59.452.156
Barrios Unidos	\$616.433
Chapinero	\$1.587.659
Rafael Uribe	\$20.864.416
Usaquén	\$24.521.103
Tunjuelito	\$36.678.777
Santafé	\$29.470.710
Teusaquillo	\$1.946.258
Engativá	\$35.782.586
Ciudad Bolívar	\$32.494.778

Usme	\$20.319.484
Mártires	\$7.252.512
Antonio Nariño	\$4.325.232
Suba	\$19.030.228
San Cristóbal	\$2.588.273
Bosa	\$91.716.853
TOTAL	\$492.306.749

Fuente: Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Dirección de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Acceso a la justicia

(Tabla 4)

Fuente: Respuesta a Derecho de Petición de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, 9- 02-2024

De lo anterior, se puede inferir una disminución en la inversión destinada a mejorar la infraestructura de las Estaciones de Policía de la Ciudad de Bogotá durante los años 2021, 2022 y 2023, en comparación con los años anteriores. Esta situación es preocupante, ya que las condiciones de salubridad en estos centros continúan siendo deplorables y persiste el incumplimiento de las autoridades para mejorar las condiciones humanitarias mínimas.

Los esfuerzos económicos de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia para mejorar las condiciones de los sindicados en las estaciones de policía y reducir el hacinamiento no parecen reflejarse en las cifras de hacinamiento en los centros de detención transitoria. Estos últimos no muestran una disminución, situación que se constatará a mayor detalle en el siguiente apartado.

Finalmente, frente a las demás órdenes, de mediano y largo plazo dadas por la Corte, la administración distrital está trabajando en la gestión para cumplir con la orden, pero hasta el

momento **no se ha concretado ningún resultado tangible o específico en términos de su cumplimiento.**

HACINAMIENTO EN CENTROS DE DETENCIÓN TRANSITORIO EN BOGOTÁ

Según el último informe presentado por la Personería de Bogotá en el año 2023, los centros de detención transitorios bajo jurisdicción del distrito contaban con un hacinamiento del **169%**. Esta cifra corresponde a 3.217 personas privadas de la libertad, de las cuales 2.831 eran imputados y 386 condenados¹⁷. Lo anterior, permite concluir que existe un incumplimiento expreso a la Constitución, las normas internacionales y los pronunciamientos de la Corte Constitucional, no solo por la carencia de formulación de proyectos para la construcción y adecuación de la infraestructura necesaria para disminuir el hacinamiento, sino también por la falta de garantía de que los condenados permanezcan en las cárceles y centros penitenciarios, separados de los sindicados¹⁸.

En dicho informe también se destaca que las estaciones de policía con mayor porcentaje en los niveles de hacinamiento son Usaquén con 810%; Bosa 557%; Kennedy 493%; Usme 415%; y Ciudad Bolívar con 392%, lo cual ha propiciado la fuga de algunos de los sindicados.

No obstante lo anterior, según las cifras proporcionadas por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, a corte de 6 de febrero de 2024 se evidencia un hacinamiento del **144%** en las estaciones de policía y URI de Puente Aranda, respecto de los años anteriores. En consecuencia, se observa que a pesar de la inversión económica de la Secretaría, descrita en el capítulo anterior, no se ha impactado de manera significativa la problemática de hacinamiento de la ciudad.



¹⁷ Personería de Bogotá. (28 de agosto de 2023). Hacinamiento propicia la fuga de privados de la libertad en estaciones de policía de Bogotá. Recuperado de <https://www.personeriabogota.gov.co/sala-de-prensa/notas-de-prensa/item/1167-hacinamiento-propicia-la-fuga-de-privados-de-la-libertad-en-estaciones-de-policia-de-bogota>

¹⁸ Ley 1709 de 2014: “Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones. Art. 21.

(Gráfica 1)

Fuente: Respuesta a Derecho de Petición de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, 9- 02-2024

Ahora bien, se destaca que de esas 2.999 personas que se encuentran privadas de su libertad, 2.440 son sindicados, mientras que 559 ya cuentan con sentencia condenatoria. Frente a ello, se insiste en el incumplimiento de las autoridades a la normativa que establece la necesidad de que sindicados y condenados se encuentren separados.

Aunado en lo anterior, la Policía Metropolitana de Bogotá, remitió un comparativo de la capacidad instalada en las estaciones de policía y en la URI de Puente Aranda para albergar personas privadas de la libertad frente a la cantidad de personas que realmente se encuentran actualmente:

UNIDAD	CAPACIDAD PLL	REALIDAD	% HACINAMIENTO
COSEC 1	145	397	174%
E-1 USAQUEN	10	84	740%
E-2 CHAPINERO	15	0	-100%
E-11 SUBA	60	182	203%
E-12 BARRIOS UNIDOS	35	42	20%
E-13 TEUSAQUILLO	25	89	256%
COSEC 2	175	623	256%
E-4 SAN CRISTOBAL	35	113	223%
E-S USME	20	95	375%
E-6 TUNJUELTO	20	32	60%
E-18 RAFAEL URIBE URIBE	40	130	225%
E-19 CIUDAD BOLÍVAR	60	253	322%
COSEC 3	210	867	313%
E-7 BOSA	35	211	503%
E-8 KENNEDY	60	414	590%
E-9 FONTIBÓN	45	0	-100%
E-10 ENGATIVÁ	60	204	240%
E-22 TERMINAL	10	38	280%
COSEC 4	325	566	74%
E-3 SANTA FÉ	85	111	31%
E-14 MÁRTIRES	80	101	26%
E-15 ANTONIO NARIÑO	50	39	-22%
URI PUENTE ARANDA 3 PISO E-16	80	234	193%
E-17 CANDELARIA	30	81	170%
PUENTE ARANDA CELDAS 2 PISO	90	27	-70%
PUENTE ARANDA CELDAS 2 PISO SUIN	155	256	65%
PUENTE ARANDA CELDAS 1 PISO SUIN	127	204	61%
TOTAL	1227	2940	PORCENTAJE DE HACINAMIENTO TOTAL.

(Tabla 5)

Fuente: Elaboración propia, a partir de la respuesta de petición de la MEBOG, 22 de Feb. 2024

De estas cifras, es preocupante la situación de hacinamiento que se vive en las Estaciones de:

- Usaqué (740%),
- Kennedy (590%)
- Bosa (503%)
- Usme (375%)
- Ciudad Bolívar (322%)
- Teusaquillo (256%)
- Engativá (240%)
- Rafael Uribe Uribe (225%)
- San Cristóbal (223%)
- Suba (203%)

Toda vez que se encuentran por encima del ponderado general de hacinamiento de los centros de detención transitoria. Así mismo, estas localidades resultan ser las más grandes en términos de población, lo que implica una necesidad urgente de atender la problemática.

Además, según la Policía Metropolitana de Bogotá en respuesta a derecho de petición del 22 de febrero de 2024¹⁹, se constató que actualmente hay 379 policías extraídos del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC) destinados a la custodia de personas privadas de la libertad. Lo anterior no solo implica el uso de efectivos de la Policía Nacional en labores ajenas a sus funciones constitucionales y legales, sino también la disminución de estos efectivos para contribuir, desde las calles, a la crisis de seguridad que azota a la ciudad y la conformación de 190 cuadrantes.

Finalmente, luego de constatar que el problema de hacinamiento en los centros de detención transitorios en Bogotá no ha contado con los esfuerzos suficientes ni ha experimentado una reducción significativa que permita no solo la implementación de las medidas obligatorias establecidas por la Corte Constitucional, sino también garantizar materialmente el estricto cumplimiento de los estándares mínimos de derechos humanos y estándares internacionales, que exigen un cupo carcelario por cada 250 habitantes, y en este sentido, sumando los cupos que se tienen en las estaciones de policía, URI de Puente Aranda, cárcel distrital, centro especial de reclusión y establecimientos de reclusión del orden nacional: Modelo, Picota y Buen Pastor, Bogotá cuenta con 12.273 cupos, por lo cual el estándar se ubica en un cupo carcelario por cada 650 habitantes aproximadamente.

En consecuencia, resulta imperativo que el Concejo de Bogotá asuma la vocería y ordene las medidas pertinentes mediante de un acuerdo distrital para abordar y contribuir desde el Distrito Capital la superación de la violación sistemática de los derechos humanos que persiste luego de 26 años de la

¹⁹ Respuesta derecho de petición Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG) febrero 2024.

primera declaratoria del estado de cosas inconstitucionales en el Sistema Carcelario y Penitenciario, coadyuvando de esta manera a su levantamiento.

Diagnóstico en los Centros de Detención Transitoria.

Es necesario realizar visitas a los centros de detención transitoria por cuanto este ejercicio no solo permitirá arrojar un resultado sobre la calidad de vida de los privados de la libertad, sino también facilitará la identificación de los desafíos que enfrenta el Distrito de cara a la administración de los centros de detención para personas detenidas preventivamente²⁰. Así pues, a partir del análisis detallado de la capacidad de detención, las condiciones de vida de los reclusos, los costos asociados con la operación y el grado de cumplimiento de los estándares de derechos humanos, se podrá orientar eficazmente la planificación y construcción de la infraestructura necesaria, en aras de garantizar una respuesta adecuada a las demandas actuales y la creación de instalaciones que respeten y promuevan los derechos fundamentales de quienes se encuentran bajo detención preventiva.

Frente a ello, es necesario que la personería de Bogotá acompañe estas visitas con la finalidad de verificar la protección de los derechos humanos, el estado de las plantas físicas, el trato otorgado a los privados de la libertad, el estado higiénico y sanitario, las instalaciones de preparación de alimentos y su manipulación. En síntesis, en cumplimiento de su deber constitucional y legal²¹ verifiquen las condiciones dignas de reclusión.

Alianzas público-privadas como herramienta para abordar el hacinamiento

A pesar de que la Ley 2197 de 2022, en su artículo 64, otorgó la posibilidad de realizar los diseños, construcción y dotación de la infraestructura carcelaria por medio de asociaciones público-privadas, a la fecha del presente acuerdo, en el distrito capital no se han realizado acciones tendientes a la implementación de esta clase de esquemas como alternativas de financiación con el objetivo de reducir el hacinamiento y garantizar condiciones humanitarias. En palabras de Bedoya & Vásquez (2020) este tipo de asociaciones constituyen una *“solución viable y definitiva al hacinamiento carcelario, siempre y cuando se implemente un modelo que vaya acorde a las necesidades de nuestro país. Además, es un tipo de contrato que ha sido utilizado de manera exitosa en otros proyectos que buscan darle desarrollo al país, razón por la cual, (...) la infraestructura carcelaria no sería la excepción.”*²²

²⁰ Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2010). Medidas Privativas y No Privativas de la Libertad: El Sistema Penitenciario. Manual de Instrucciones para la Evaluación de la Justicia Penal. Viena. Recuperado de: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/The_Prison_System_Spanish.pdf

²¹ Art. 118 de la Constitución Política de Colombia; Art. 118 y 168 de la Ley 65 de 1993; resolución 993 de 2020 emitida por la Personería de Bogotá

²² Bedoya Cruz, M., & Vásquez Naranjo, M. (2020). La viabilidad de las asociaciones público-privadas para el tratamiento penitenciario en Colombia: Monografía de grado. Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de Abogado. Director: Andrés Felipe Duque Pedroza, Doctor en Derecho. Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín. Recuperado de: <https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/6339/La%20viabilidad%20de%20las%20asociaciones%20p%C3%BAblico-privadas%20para%20el%20tratamiento%20penitenciario%20en%20Colombia.pdf?sequence=1>

IV. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En compañía de la ciudadanía, se llevaron a cabo visitas a las estaciones de policía de Usaquén y Suba, donde se verificó la persistencia de un elevado nivel de hacinamiento, así como también la carencia de instalaciones que cumplan con las condiciones mínimas humanitarias. Además, se constató que uniformados de la Policía tenían a cargo la vigilancia de personas condenadas, quienes, de conformidad con la normativa interna, deberían estar bajo custodia del INPEC y separadas de aquellas privadas de la libertad preventivamente.



V. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y el alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según las disposiciones constitucionales y legales vigentes. En primer lugar, el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia establece que:

El Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el Artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993, principalmente en el numeral 1 que faculta al a Corporación para dictar normas así: DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”. Art. 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley: (...) 1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

Asimismo, el Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y

el alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según las disposiciones constitucionales y legales vigentes. En primer lugar, el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia establece que:
(...)

IV. IMPACTO FISCAL

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003:

“En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”.

Teniendo en cuenta lo anterior, hay que aclarar que el presente proyecto de acuerdo al dictar medidas generales para la descongestión de los Centros de Detención Transitorios que se encuentran bajo la jurisdicción del Distrito Capital, no genera impacto fiscal para las finanzas del Distrito. Se traza es una ruta de acción a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia para atender la problemática identificada.

V. RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

La inseguridad, el limitado acceso a la justicia, la vulneración de derechos humanos para los privados de la libertad, la inadecuada infraestructura y la ausencia de fortalecimiento institucional constituyen factores que dificultan el desarrollo sostenible de la ciudad de Bogotá.

Por lo tanto, el presente proyecto de acuerdo tiene como propósito contribuir en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente con el objetivo No. 16: “Paz, Justicia, e Instituciones Sólidas”²³. Este objetivo no solo busca proteger las garantías fundamentales de las personas privadas de la libertad propiciando un ambiente adecuado para su resocialización, sino también fortalecer las instituciones distritales para crear la capacidad de prevenir la reincidencia de aquellos en actividades delictivas.

²³ Objetivos de Desarrollo Sostenible; Organización de las Naciones Unidas. Recuperado de: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/>

Así las cosas, al establecer una serie de medidas que permitan fortalecer los centros de detención transitorios, con miras a reducir el hacinamiento, se implanta un enfoque integral al presente Proyecto de Acuerdo que pretende no solo abordar los desafíos actuales, sino también sentar las bases para un desarrollo sostenible y equitativo en la ciudad de Bogotá.

VI. RELACIÓN CON EL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO

El Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024, titulado "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI", fue aprobado por el Concejo de Bogotá mediante el acuerdo distrital 761 de 2020. En su artículo 15, se establecieron una serie de programas para ejecutar en concordancia con la política pública delineada en dicho acuerdo. Uno de los programas destacados es el Programa No. 47, que tiene como objetivo principal mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad y garantizar el pleno cumplimiento de sus derechos humanos.

En este contexto, el presente proyecto de acuerdo se enmarca y guarda una estrecha relación con el Plan Distrital de Desarrollo, ya que busca implementar medidas destinadas a contribuir significativamente a la disminución de las condiciones de hacinamiento en la ciudad de Bogotá. Como se ha señalado previamente, el hacinamiento persiste y experimenta un aumento gradual en las estaciones de policía y los Comandos de Atención Inmediata (CAI). Esta situación no solo vulnera los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, sino que también dificulta la labor de las autoridades penitenciarias y policiales.

Estas medidas no solo favorecen el cumplimiento del Plan Distrital de Desarrollo, sino que también facilitan la implementación de una estrategia específica orientada a recopilar información actual y específica sobre los niveles de hacinamiento en los Centros de Atención Inmediata. A partir de estos elementos, se espera que el Gobierno Distrital adopte los instrumentos jurídicos dispuestos por la ley para estudiar la viabilidad de fortalecer la infraestructura carcelaria, asegurando que cumpla con los estándares mínimos para el respeto de los derechos humanos.

Atentamente,

JULIÁN USCÁTEGUI PASTRANA
Partido Centro democrático

PROYECTO DE ACUERDO NO 224 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA DESCONGESTIÓN DE LOS CENTROS DE DETENCIÓN TRANSITORIA QUE ESTÁN BAJO LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”****EL CONCEJO DE BOGOTÁ**

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 1 del artículo 12 del Decreto-Ley 1421 de 1993.

Artículo 1: Objeto. El presente acuerdo tiene como objeto la adopción de medidas para la descongestión de los Centros de Detención Transitorios que se encuentran bajo la jurisdicción del Distrito Capital, buscando mejorar las condiciones de detención y fortalecer el sistema penitenciario de la ciudad de Bogotá D.C.

Artículo 2: Definición. Para efectos del presente acuerdo, se entenderá como Centro de Detención Transitoria (CDT), todos aquellos espacios físicos destinados para la detención preventiva de personas privadas de la libertad (PPL); capturadas y con medida de aseguramiento, ubicados en la ciudad de Bogotá D.C.

Artículo 3: Diagnóstico. La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, realizará una evaluación diagnóstica del estado de los Centros de Detención Transitoria ubicados en el Distrito Capital con el fin de identificar y abordar necesidades de infraestructura que contribuyan a la reducción del hacinamiento, atendiendo a los estándares internacionales vigentes.

Parágrafo: La evaluación deberá abordar los siguientes aspectos en particular, sin perjuicio de otros que se consideren pertinentes dentro del marco de la metodología técnica y específica que adopte la Administración Distrital:

- a. Capacidad total en cada CDT.
- b. Número total de PPL en cada CDT.
- c. Niveles de hacinamiento en cada CDT.
- d. Condiciones mínimas de habitabilidad en cada CDT.
- e. Estado de la infraestructura y mobiliario de cada CDT.
- f. Costo de operación de cada uno de los CDT.
- g. Número de custodios por turno en cada CDT.

Parágrafo Transitorio: El diagnóstico deberá realizarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación del presente acuerdo y contará con el acompañamiento de la Personería de Bogotá y la Secretaría Distrital de Salud, sin perjuicio de las demás entidades que la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia estime pertinente.

Artículo 4. Sistema Distrital de Información y Seguimiento al Hacinamiento en Centros de Detención Transitoria. La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia adelantará las gestiones para el diseño, implementación, mantenimiento y actualización de un Sistema Distrital de Información y Seguimiento al Hacinamiento en Centros de Detención Transitoria (SIDH-CDT). Este sistema, de acceso público y en tiempo real, permitirá el monitoreo continuo de las condiciones de hacinamiento y el cumplimiento de los derechos fundamentales de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) en Unidades de Reacción Inmediata (URI), estaciones de policía, centros de reclusión transitoria y cárceles distritales.

Parágrafo: Para garantizar la integralidad y la actualización permanente del SIDH-CDT, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia podrá suscribir convenios interadministrativos y acuerdos de intercambio de información con la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Policía Metropolitana de Bogotá, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y demás entidades que se consideren pertinentes.

Artículo 5: Plan Progresivo de Deshacinamiento Distrital. La administración Distrital, a través de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, dentro de los tres (3) meses siguientes a la evaluación que trata el artículo anterior, establecerá un Plan Progresivo de Deshacinamiento en los Centros de Detención Transitoria bajo la jurisdicción del Distrito Capital.

Parágrafo El Plan Progresivo de Deshacinamiento Distrital (PPDD) incluirá medidas para abordar las siguientes problemáticas, sin menoscabo de aquellas que se identifiquen en el marco de la evaluación diagnóstica.

- a. Traslado de personas condenadas a centros carcelarios.
- b. Vulneración a Derechos Fundamentales de los PPL.
- c. Condiciones precarias de salubridad al interior de los CDT.
- d. Extranjeros privados de la libertad no identificados.
- e. Violencia, motines e intento de fuga en los CDT.
- f. Personal inadecuado y no autorizado para la custodia de PPL.

Artículo 6: Sin perjuicio de las medidas que trata el artículo anterior, se exhorta a la Administración Distrital a la construcción de un nuevo centro de reclusión para aquellas personas privadas preventivamente de su libertad.

Artículo 7: La Administración Distrital diseñará, formulará e implementará una estrategia para constituir Alianzas Público-Privadas (APP) como instrumento para la vinculación de capital privado en la financiación de la infraestructura necesaria para disminuir el hacinamiento en los Centros de Detención Transitorios del Distrito Capital.

Artículo 8: La Alcaldía Mayor de Bogotá, en colaboración con entidades gubernamentales y privadas, promoverá y financiará programas preventivos destinados a abordar las causas subyacentes del comportamiento delictivo, con el fin de reducir la incidencia de delitos y, en consecuencia, la necesidad de detención preventiva.

Artículo 9: Mecanismos de Supervisión. La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, establecerá mecanismos de supervisión, monitoreo y seguimiento en aras de garantizar los derechos fundamentales de los sindicados durante su permanencia en los Centros de Detención Transitorios, incluyendo condiciones de alimentación, salubridad, higiene y sanidad.

Artículo 10: Informes Periódicos. La Alcaldía Mayor de Bogotá presentará un informe cada doce (12) meses al Concejo de Bogotá, detallando las acciones tomadas, los avances y resultados de cumplimiento a las disposiciones del presente acuerdo.

Artículo 11: Vigencia: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y Cúmplase

H.C JULIÁN USCÁTEGUI PASTRANA
Partido Centro Democrático

PROYECTO DE ACUERDO NO 225 DE 2025**PRIMER DEBATE**

“POR MEDIO DEL CUAL SE PROMUEVE LA CREACIÓN DE LA MESA PERMANENTE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE EXPERTOS POR LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ, D.C Y SE ESTABLECEN UNOS LINEAMIENTOS SOBRE LA MATERIA”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**I. OBJETO DEL PROYECTO**

Promover la generación de un espacio Distrital para la armonización de las Instancias y las acciones institucionales desarrolladas en los cerros orientales donde se involucre a los ciudadanos residentes de la ciudad y a expertos en el tema ambiental. Este espacio busca facilitarle al Comité Interinstitucional para la coordinación de la actuación administrativa del Distrito Capital en el manejo de los Cerros Orientales de Bogotá D.C., al Comité de Interlocución de los Cerros Orientales y a la organización que sustenta el rol de Veeduría ante el Tribunal que realiza el seguimiento y verificación de la Sentencia de los Cerros, el poder conocer en detalle de todos los avances en la materia y la realidad sobre las dificultades técnicas, jurídicas y administrativas para materializar los mismos. Igualmente, se busca que este espacio permita proyectar un plan de acción efectivo para la gestión Integral de los Cerros Orientales y encauzar la conservación y preservación de este vital patrimonio natural de la ciudad y la región.

II. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA.**CONSTITUCIÓN POLÍTICA**

ARTÍCULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (...).

ARTÍCULO 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

ARTÍCULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

ARTÍCULO 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.

ARTÍCULO 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.

ARTÍCULO 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.

Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.

ARTÍCULO 313. Corresponde a los concejos: (...)

9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio.

DECRETO - LEY 2811 DE 1974

ARTICULO 204. Se entiende por área forestal protectora la zona que debe ser conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales, para proteger estos mismos recursos u otros naturales renovables.

En el área forestal protectora debe prevalecer el efecto protector y sólo se permitirá la obtención de frutos secundarios del bosque.

ARTÍCULO 205. Se entiende por área forestal protectora - productora la zona que debe ser conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales para proteger los recursos naturales renovables y que, además, puede ser objeto de actividades de producción sujeta necesariamente al mantenimiento del efecto protector.

ARTICULO 206. Se denomina área de reserva forestal la zona de propiedad pública o privada reservada para destinarla exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilización racional de áreas forestales productoras, protectoras o productoras - protectoras.

ARTICULO 207. El área de reserva forestal sólo podrá destinarse al aprovechamiento racional permanente de los bosques que en ella existan o se establezcan y, en todo caso, deberá garantizarse la recuperación y supervivencia de los bosques.

En el caso, previamente determinado, en que no existan condiciones ecológicas, económicas o sociales que permitan garantizar la recuperación y supervivencia de los bosques, el concesionario o titular de permiso pagará la tasa adicional que se exige en los aprovechamientos forestales únicos.

Ley 9 de 1989, *Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones*

Artículo 5º.- Entiéndese por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su

naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses, individuales de los habitantes.

Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación y **preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad**, los necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general , por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyan, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo.

LEY 99 DE 1993, *Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.*

ARTÍCULO 65. FUNCIONES DE LOS MUNICIPIOS, DE LOS DISTRITOS Y DEL DISTRITO CAPITAL DE SANTAFE DE BOGOTA. Corresponde en materia ambiental a los municipios, y a los distritos con régimen constitucional especial, además de las funciones que les sean delegadas por la ley o de las que deleguen o transfieran a los alcaldes por el Ministerio del Medio Ambiente o por las Corporaciones Autónomas Regionales, las siguientes atribuciones especiales: (...)

2) Dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores, las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico del municipio;

ARTÍCULO 69. DEL DERECHO A INTERVENIR EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES. Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales.

LEY 165 DE 1994, *Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad Biológica", hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992.*

ARTÍCULO 6o. MEDIDAS GENERALES A LOS EFECTOS DE LA CONSERVACIÓN Y LA UTILIZACIÓN SOSTENIBLE. Cada Parte Contratante, con arreglo a sus condiciones y capacidades particulares:

a) Elaborará estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica o adaptará para ese fin las estrategias, planes o programas existentes, que habrán de reflejar, entre otras cosas, las medidas establecidas en el presente Convenio que sean pertinentes para la Parte Contratante interesada; y

b) Integrará, en la medida de lo posible y según proceda, la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica en los planes, programas y políticas sectoriales o intersectoriales.

ARTÍCULO 8o. CONSERVACIÓN IN SITU. Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:

a) Establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica;

- b) Cuando sea necesario, elaborará directrices para la selección, el establecimiento y la ordenación de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica;
- c) Reglamentará o administrará los recursos biológicos importantes para la conservación de la diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas protegidas, para garantizar su conservación y utilización sostenible;
- d) Promoverá la protección de ecosistemas y hábitat naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales;
- e) Promoverá un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en zonas adyacentes a áreas protegidas, con miras a aumentar la protección de esas zonas;
- f) Rehabilitará y restaurará ecosistemas degradados y promoverá la recuperación de especies amenazadas, entre otras cosas mediante la elaboración y la aplicación de planes u otras estrategias de ordenación;
- g) Establecerá o mantendrá medios para regular, administrar o controlar los riesgos derivados de la utilización y la liberación de organismos vivos modificados como resultado de la biotecnología que es probable tengan repercusiones ambientales adversas que puedan afectar a la conservación y a la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana;
- h) Impedirá que se introduzcan, controlará o erradicará las especies exóticas que amenacen a ecosistemas, hábitats o especies;
- i) Procurará establecer las condiciones necesarias para armonizar las utilidades actuales con la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes;
- j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos,

innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente;

k) Establecerá o mantendrá la legislación necesaria y/u otras disposiciones de reglamentación para la protección de especies y poblaciones amenazadas;

l) Cuando se haya determinado, de conformidad con el artículo 7o., un efecto adverso importante para la diversidad biológica, reglamentará u ordenará los procesos y categorías de actividades pertinentes; y

m) Cooperará en el suministro de apoyo financiero y de otra naturaleza para la conservación in situ a que se refieren los apartados a) a 1) de este artículo, particularmente a países en desarrollo.

Acuerdo 30 de 1976 Instituto de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente –INDERENA, *Por el cual se declaran y alindan unas áreas de reserva forestal y se delegan unas funciones.*

Artículo 1: Declarar como Area de Reserva Forestal Protectora a la zona denominada Bosque Oriental de Bogotá, ubicada en jurisdicción del Distrito Especial de Bogotá, y comprendida por los siguientes linderos generales: (...)

Resolución 076 de 1977 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, *Por la cual se aprueba un [Acuerdo](#) de la Junta Directiva del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -INDERENA-*

Artículo 1: Aprobar el Acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -INDERENA-, y autorizar la delegación de funciones allí contenida (...)

Resolución 463 de 2005 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, *Por medio de la cual se redelimita la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, se adopta su zonificación y reglamentación de usos y se establecen las determinantes para el ordenamiento y manejo de los Cerros Orientales de Bogotá.*

Artículo 1º. Aclarado por el art. 2, Resolución del Min. Ambiente 0519 de 2005. Redelimitar el Area de Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá,

declarada mediante el artículo 2º de la Resolución número 076 de 1977, ubicada en jurisdicción del Distrito Capital, con el fin de armonizar los elementos de orden ambiental y territorial para su adecuado manejo y administración, la cual quedará comprendida dentro de los siguientes límites indicados sobre la cartografía a escala 1:10.000 del IGAC, Plano número 1 que se incorpora a la presente resolución (...)

Decreto 1076 de 2015, *Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible*

ARTÍCULO 2.2.2.1.2.3. Las reservas forestales protectoras. Espacio geográfico en el que los ecosistemas de bosque mantienen su función, aunque su estructura y composición haya sido modificada y los valores naturales asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su preservación, uso sostenible, restauración, conocimiento y disfrute. Esta zona de propiedad pública o privada se reserva para destinarla al establecimiento o mantenimiento y utilización sostenible de los bosques y demás coberturas vegetales naturales.

La reserva, delimitación, alinderación, declaración y sustracción de las Reservas Forestales que alberguen ecosistemas estratégicos en la escala nacional, corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en cuyo caso se denominarán Reservas Forestales Protectoras Nacionales. La administración corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio.

La reserva, delimitación, alinderación, declaración, administración y sustracción de las Reservas Forestales que alberguen ecosistemas estratégicos en la escala regional, corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, en cuyo caso se denominarán Reservas Forestales Protectoras Regionales.

PARÁGRAFO 1. El uso sostenible en esta categoría, hace referencia a la obtención de los frutos secundarios del bosque en lo relacionado con las actividades de aprovechamiento forestal. No obstante, el régimen de usos deberá estar en consonancia con la finalidad del área protegida, donde deben prevalecer los valores naturales asociados al área y en tal sentido, el desarrollo de actividades públicas y privadas deberá realizarse conforme a dicha finalidad y según la regulación que para el efecto expida el Ministerio de Ambiente, y Desarrollo Sostenible.

PARÁGRAFO 2. Entiéndase por frutos secundarios del bosque los productos no maderables y los servicios generados por estos ecosistemas boscosos, entre ellos, las flores, los frutos, las fibras, las cortezas, las hojas, las semillas, las gomas, las resinas y los exudados.

Decreto 1648 de 2016 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial relacionado con la Tasa Compensatoria por la utilización permanente de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.

ARTÍCULO 1.- Adiciónese al Título 9, de la Parte 2, del libro 2, del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, un nuevo capítulo así:

CAPITULO 11

TASA COMPENSATORIA POR LA UTILIZACIÓN PERMANENTE DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ (...)

Resolución 1766 de 2016 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Por medio de la cual se adopta el Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá (Autoridad Ambiental de la Reserva: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR).

ARTÍCULO 2.- PLAN DE MANEJO. Adoptar el Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora "*Bosque Oriental de Bogotá*" elaborado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca "CAR", el cual hace parte integral de la presente resolución.

PARAGRAFO 1.- Las líneas estrategias y de proyectos, así como los procedimientos del componente estratégico hacen parte integral del Plan de Manejo que se Adopta. Los proyectos específicos al formar parte integral de las actividades de protección y conservación de la reserva, para su ejecución no requieren del trámite de sustracción de la reserva.

En todo caso, para la ejecución de proyectos específicos se deberán obtener las licencias, permisos, concesiones o autorizaciones a que haya lugar para el desarrollo de los mismos.

PARÁGRAFO 2.- El plan de manejo que se adopta en la presente resolución se encontrará disponible para consulta en la página web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Decreto Distrital 56 de 2005, *Por el cual se crea el Comité Interinstitucional para la coordinación de la actuación administrativa del Distrito Capital en el manejo de los Cerros Orientales de Bogotá D.C.*

ARTÍCULO 1.- Creación. Créase el Comité Interinstitucional para coordinación de la actuación de la Administración Distrital para el manejo de los Cerros Orientales. Dicho Comité se encargará de priorizar, articular y gestionar la ejecución de las acciones que deben realizar las diferentes Entidades Distritales involucradas, de acuerdo con sus competencias, para el manejo de los Cerros Orientales de Bogotá.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Integración. [Modificado por el art. 9, Decreto Distrital 327 de 2019.](#) <El nuevo texto es el siguiente> El Comité Interinstitucional para la Coordinación de la Actuación Administrativa para el Manejo de los Cerros Orientales estará integrado por un funcionario del nivel directivo con facultad de decisión de las siguientes entidades:

Secretaría Distrital de Gobierno.

Secretaría Distrital de Planeación.

Secretaría Distrital de Ambiente.

Secretaría Distrital de Hábitat

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.

Caja de la Vivienda Popular.

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.

El Instituto Distrital de Recreación y Deportes.

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá —ESP.

Parágrafo 1: Reuniones. El Comité Interinstitucional sesionará cada dos (2) meses, previa convocatoria de la Secretaría Técnica, quien podrá invitar a otras Entidades del Distrito Capital, así como a los Organismos de Control, cuando se estime necesaria su presencia.

Parágrafo 2: [Modificado por el art. 2, Decreto Distrital 234 de 2023.](#) <El nuevo texto es el siguiente> Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional estará a cargo del/la Secretario(a) Distrital de Planeación o su delegado. La Secretaría Técnica garantizará la elaboración y conservación de las actas correspondientes.

ARTÍCULO TERCERO.- Actividades. [Modificado por el art. 4, Decreto Distrital 222 de 2014.](#) Además de las funciones señaladas en el ordenamiento jurídico vigente y las precisadas por las diferentes normas para cada Entidad Distrital, le corresponde al comité realizar las siguientes actividades:

1. Establecer los mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan, dentro de la órbita de las competencias previstas para cada Entidad Distrital, la gestión de la problemática de los Cerros Orientales de Bogotá.
2. Recomendar la ejecución de medidas por parte de las diferentes entidades que tienen funciones con relación a los diferentes aspectos que generan impacto en los Cerros Orientales.
3. Definir los cronogramas para la realización de las acciones conjuntas y/o simultáneas que deba realizar cada una de las Entidades Distritales integrantes del Comité para la correcta ejecución del Plan de Mejoramiento de los Cerros Orientales de Bogotá.

4. Coordinar la participación del Distrito en el Plan de Ordenamiento y Manejo de los Cerros Orientales de Bogotá, POMCO, en lo que sea de su competencia para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 399 del POT.

5. Monitorear las actividades que adelantan las diferentes entidades Distritales y dar las recomendaciones que considere necesarias a cada una de ellas.

Decreto Distrital 122 de 2006, *Por el cual se adoptan medidas de defensa y protección de la Reserva Forestal Protectora "Bosque Oriental de Bogotá"*

ARTÍCULO 1. Comprometer a la Administración Distrital, a través de todas sus entidades y dependencias, en la defensa y protección de los Cerros Orientales de Bogotá, como un área de interés ecológico de la Nación y de la Ciudad.

Decreto Distrital 222 de 2014, *Por el cual se adoptan las medidas administrativas tendientes al cumplimiento de las órdenes impartidas dentro de los procesos de acción popular de radicados Nos. 25000232400020110074601 y 25000232500020050066203 y se dictan otras disposiciones.*

Artículo 1. - Ordenar a la Secretaria Distrital de Planeación, a la Secretaría Distrital de Ambiente, a la Secretaría Distrital del Hábitat, a la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría Distrital de Hacienda, a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAB-ESP, al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP, al Instituto Distrital de Recreación y Deporte, al FOPAE o entidad que haga sus veces, a la Caja de Vivienda Popular, al Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, a las Alcaldías Locales de Usaquén, Chapinero, Santafé, Usme y San Cristóbal, así como a las diversas entidades prestadoras de Servicios Públicos que operen en el Distrito, dar cumplimiento en el marco de sus funciones legalmente asignadas, a cada una de las órdenes impartidas a Bogotá Distrito Capital dentro de los procesos de Acción Popular radicados con los números 25000232400020110074601 y 25000232500020050066203.

Artículo 3.- Ordenar al Comité Interinstitucional para la Coordinación de la Actuación Administrativa del Distrito Capital en el manejo de los Cerros Orientales coordinar las acciones necesarias para el cabal cumplimiento de las sentencias dictadas en los procesos de Acción Popular radicados con los números 25000232400020110074601 y 25000232500020050066203.

Decreto Distrital 485 de 2015, “Por el cual se adopta el Plan de Manejo para el área de canteras, vegetación natural, pastos, plantaciones de bosques y agricultura que corresponde al área de ocupación pública prioritaria de la Franja de Adecuación, y se dictan otras disposiciones”

Artículo 1°. Adopción del Plan de Manejo. Adoptar el Plan de Manejo del área de canteras, vegetación natural, pastos, plantaciones de bosques y agricultura, que corresponde al área de ocupación pública prioritaria de la franja de adecuación de los Cerros Orientales de Bogotá D.C., incluyendo las decisiones de ordenamiento, las estrategias, los programas, proyectos y acciones inmediatas y estratégicas necesarias para conservar, preservar, rehabilitar y recuperar dicha área, así como determinar las acciones encaminadas a su ordenamiento, manejo integral y administración, las disposiciones normativas para el reconocimiento de edificaciones y los lineamientos aplicables a predios en el Área de Ocupación Pública Prioritaria, conforme a los términos y parámetros contenidos en los artículos siguientes.

Artículo 2°. Objetivo General. El objetivo general del Plan de Manejo es definir una estrategia de ordenamiento y gestión para el Área de Ocupación Pública Prioritaria de la franja de adecuación de los Cerros Orientales de Bogotá, D.C., mediante el diseño e implementación de acciones para el control de la expansión urbana y la contribución a la consolidación del borde urbano oriental de la ciudad, la valoración del patrimonio ambiental, el mejoramiento de condiciones socio económicas de los pobladores de la franja, la habilitación de una zona de aprovechamiento ecológico para su uso y disfrute, y el fortalecimiento de las condiciones de conectividad de la estructura ecológica principal; dando cumplimiento al artículo 5 de la Resolución 463 de 2005 y a la sentencia proferida dentro de la acción popular número 25000232500020050066203, mediante la consolidación de una zona de amortiguación reconocida, construida y apropiada por sus pobladores y la

ciudadanía en general, que armonice las dinámicas urbanas con la naturaleza de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.

Decreto Distrital 800 de 2018, *Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital [476](#) de 2015 “Por medio del cual se adoptan medidas para articular las acciones de prevención y control, legalización urbanística, mejoramiento integral y disposiciones relativas al procedimiento y se dictan otras disposiciones*

Artículo 1°. Modifíquese el artículo [1](#) del Decreto Distrital 476 de 2015, el cual quedará así:

(...)

Parágrafo 1°. *Los asentamientos humanos destinados a vivienda de interés social de origen o consolidación informal ubicados en suelo rural y de expansión susceptibles de ser legalizados, únicamente podrán serlo si cuentan con la orden de legalización del Concejo de Bogotá o del Alcalde Mayor del Distrito Capital, en calidad de delegatario de esta función.*

No serán objeto de legalización en Bogotá D.C. las áreas de los desarrollos humanos consolidados informalmente ubicados en zonas pertenecientes a la estructura ecológica principal, suelo de protección, áreas de reserva para la construcción de vías e infraestructura de servicios públicos, áreas de afectación para el desarrollo y funcionamiento de los sistemas generales, áreas de alta amenaza y/o alto riesgo no mitigable por remoción en masa y/o inundación.

Decreto Distrital 555 de 2022, *Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.*

Artículo 68. Parques de Borde. Son espacios abiertos que se localizan en los bordes urbanos y se configuran como espacios de transición y articulación entre los ambientes urbanos con áreas rurales y otros componentes de la Estructura Ecológica Principal. Los lineamientos para el diseño y construcción de los parques de borde se incorporarán en el Manual de Espacio Público a cargo de la Secretaría

Distrital de Planeación conforme a lo señalado en el componente urbano del presente Plan.

Se trata de espacios continuos o discontinuos, que tienen como objetivo generar una transición y articulación espacial de los tejidos urbanos del borde con las dinámicas rurales, y están destinados a aportar al mantenimiento de la integridad ecológica de los ecosistemas colindantes.

Se encuentran conformados por: (...)

2. Parque de Borde de los Cerros Orientales. Corresponde al Área de Ocupación Público - Prioritaria de la Franja de Adecuación de los Cerros Orientales establecida en la Resolución 463 de 2005 del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que será destinada a la conservación, al uso público, a actividades recreativas y a actividades de contemplación, observación y conservación, de conformidad con lo ordenado por la sentencia del Consejo de Estado del 5 de noviembre de 2013 (Ref.: 250002325000200500662 03). Adicionalmente, este Parque cumplirá con la función amortiguadora para el manejo y protección de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.

El régimen de usos del Parque de Borde de los Cerros Orientales es el establecido por el Decreto Distrital [485](#) de 2015 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

La administración y gestión de estas áreas está a cargo del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDRD, bajo los lineamientos de la Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de sus competencias.

Artículo 81. Estrategias en relación con la Estructura Integradora de Patrimonios. Son estrategias de la Estructura Integradora de Patrimonios las siguientes: (...)

6. Reconocimiento de la importancia de la relación de los cerros orientales y los conectores ecosistémicos, fortaleciendo estos elementos naturales y cosmogónicos como parte del patrimonio natural y paisaje característico del territorio.

Artículo 395. Piezas rurales. El territorio rural se ordena en piezas rurales atendiendo a sus particularidades. Las piezas rurales corresponden a las unidades espaciales caracterizadas con base en criterios biofísicos, sociales, económicos y funcionales y corresponden a: (...)

2. Pieza Cerros Orientales: Tiene como función principal la protección para la generación de servicios ecosistémicos y ambientales, dando conectividad a Bogotá con los municipios de la Calera, Choachí y Ubaque. Entre sus elementos más representativos, se encuentra la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, su Área de Ocupación Pública Prioritaria y el Parque Ecológico Distrital de Montaña Torca.

Artículo 426. Caminos y senderos de la red de recorrido de proximidad y cuidado rural. Los caminos y senderos rurales son los corredores o segmentos de conexión utilizados por peatonas y peatones en el área rural que serán de uso público. Hacen parte de esta red los caminos históricos constituidos por los caminos reales y de herradura y los senderos identificados con valores históricos o culturales.

Parágrafo 1. Las pautas de señalización, uso público, manejo y gestión de la pieza rural de Cerros Orientales que se superpone con el área de la Reserva Forestal del Bosque Oriental de Bogotá, se regirán por lo dispuesto en la Resolución 796 de 2019 de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, o aquella que la modifique o sustituya.

Artículo 477. Subdivisión predial en las áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales. Los predios ubicados en Áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales podrán subdividirse de acuerdo con la Unidad Agrícola Familiar (UAF) definida para el Distrito Capital según lo dispuesto en la Ley 160 de 1994. Hasta tanto se adopte la UAF para el Distrito Capital, por parte de la entidad competente, la unidad mínima para subdivisión predial aplicará únicamente para las siguientes piezas: (...)

Parágrafo 2. La Pieza Cerros Orientales se rige por lo establecido en los Planes de Manejo Ambiental o instrumentos de gestión y planeación de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, el Área de Ocupación Pública Prioritaria y el Parque Ecológico Distrital de Montaña Torca.

Resolución 223 de 2014 Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., *Por la cual se adopta el Plan de Acción para el cumplimiento de la sentencia proferida por el Consejo de Estado dentro del proceso de Acción Popular No. [2500023250002005066203](#)*

Artículo 1°.- Adoptar el Plan de Acción para el cumplimiento de la sentencia proferida por el Consejo de Estado dentro del proceso de Acción Popular No. [2500023250002005066203](#), que se adjunta al presente acuerdo.

Resolución 443 de 2014, “Por la cual se define la naturaleza, objetivo, composición, funciones y se dictan otras disposiciones relacionadas con el Comité de Interlocución de los Cerros Orientales”

Artículo 1°. Naturaleza.- El Comité de Interlocución de los Cerros Orientales, es una instancia participativa de gestión, asesoramiento, concertación, evaluación y seguimiento en la construcción de Pactos de Bordo. Su composición es mixta, cuenta con representación de entidades del orden Regional, Distrital y con la participación de grupos o asociaciones de los habitantes de la Franja de Adecuación y de la Reserva Forestal Protectora “*Bosque Oriental de Bogotá*”.

Artículo 2°. Objetivo.- Servir de instancia de coordinación interinstitucional y comunitaria para el diseño e implementación de Pactos de Bordo como herramientas de cogestión, cuya finalidad es detener y controlar la urbanización ilegal, así como el mejoramiento sostenible de los asentamientos localizados en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y en la Franja de Adecuación, conforme al Plan de Manejo Ambiental de esta área protegida, la sentencia de 05 de noviembre de 2013 y su aclaración dictadas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y el Plan de Manejo aplicable a la Franja de Adecuación.

Artículo 4°. Composición. El Comité de Interlocución de los Cerros Orientales estará integrado así:

3.1. Sector Público Regional:

- El Director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

3.2. Sector Público Distrital:

- El Secretario Distrital de Ambiente.
- El Secretario Distrital de Planeación.
- El Secretario Distrital de Hábitat.
- El Secretario Distrital de Gobierno, y
- El Director del IDPAC.

3.3. De la Sociedad Civil

Grupos o asociaciones de habitantes de los Cerros Orientales de Bogotá que suscribieron el “*ACTA DE COMPROMISO PARA LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE PACTOS DE BORDE*” suscrita de 26 de julio de 2013, o quienes hagan sus veces.

PARÁGRAFO: Las entidades del Sector Público Regional y Distrital que conforman el Comité de Interlocución, podrán delegar su participación, mediante acto administrativo, expedido conforme a las normas pertinentes.

Artículo 5°.- Funciones. Son funciones del Comité de Interlocución de Cerros Orientales, las siguientes:

1. Velar por el cumplimiento de lo pactado en “*ACTA DE COMPROMISO PARA LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE PACTOS DE BORDE*”.
2. Fortalecer la cooperación y la corresponsabilidad de los habitantes de los Cerros Orientales, para la gestión social, institucional, pública y privada para la suscripción de Pactos de Borde, en consonancia con el Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, el Plan de Ordenamiento Territorial, la sentencia de 05 de noviembre de 2013 y su aclaración dictadas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y el Plan de Manejo aplicable a la Franja de Adecuación.

3. Proponer lineamientos que conduzcan al control de la expansión urbana en la Franja de Adecuación y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.
4. Formular recomendaciones a las entidades del orden Nacional, Regional y Distrital respecto de la implementación de los planes, proyectos y programas en torno al manejo ambiental y social, en la Franja de Adecuación y en la Zona de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, que conduzcan a la protección de los valores ambientales y culturales de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.
5. Apoyar a las entidades Distritales en la identificación y/o diseño de espacios de participación, concertación e interlocución con los habitantes de la Franja de Adecuación y de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, que permita informar y/o consultar a la comunidad respecto a la implementación de las políticas Nacionales, Regionales y Distritales para el manejo de los Cerros Orientales, así como el cumplimiento de la sentencia de 05 de noviembre de 2013 y su aclaración dictadas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
6. Impulsar con las autoridades Regionales y Distritales procesos de concertación y articulación de los programas necesarios para la implementación y ejecución de los Pactos de Borde.
7. Apoyar la evaluación, seguimiento y monitoreo de la estrategia de construcción social de Pactos de Borde.
8. Diseñar e implementar el cronograma de actividades para la suscripción de Pactos de Borde.
9. Expedir su propio reglamento, atendiendo a los principios constitucionales de igualdad, participación, fomento a las prácticas democráticas y a lo establecido en el presente acto administrativo.

JURISPRUDENCIA.

Sentencia del Consejo de Estado 05 noviembre 2013 Fallo de la Acción Popular de los Cerros Orientales 250002325000200500662.

III. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA

El equipo del suscrito Concejal, junto al equipo de Respira realizó una revisión normativa, conceptual, cartografía y de actores entorno a los Cerros Orientales de Bogotá, utilizando insumos de orden normativo y administrativo de acceso público, y de esta forma realizar un acercamiento a una comprensión compleja sobre la concepción de la ciudad respecto de esta gran área natural. Este acercamiento basado en los elementos revisados, tiene la finalidad de visibilizar posibles dificultades, vacíos, conflictos y otros posibles desbalances en la gestión y manejo del área, con el fin de corregir el deterioro sostenido de un gran patrimonio natural con todo su potencial de servicios y soporte ecosistémico para la ciudad y la región. Así como también, proponer las acciones encaminadas al mejoramiento del tratamiento integral de los cerros por parte de la Administración de la ciudad.

A continuación, presentamos los elementos disonantes que deben ser incluidos y observados detenidamente para mejorar el modelo de gestión y manejo adecuado de los Cerros orientales de Bogotá.

1. **La Integralidad de los Cerros Orientales.** En la revisión general de la documentación, se observa que la institucionalidad tiene una visión y manejo compartimentado de los cerros orientales, lo cual se observa en la documentación revisada (Informe SDP). Para entenderlo, de acuerdo con la cartografía, es necesario saber que hablar de Cerros Orientales incluye: La Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá con un área de 13.224 hectáreas y una Franja de Adecuación comprendida con un área de 973 hectáreas, y a su vez esta Franja se divide en dos elementos importantes: un Área de Ocupación Pública Prioritaria - AOPP con 528 hectáreas y un Área de Consolidación de Borde Urbano - ACBU con 445 hectáreas (ambas conforman las 973 hectáreas de la franja de adecuación).

Esta precisión, nos permite indicar que la ciudad se concentra principalmente en las 528 hectáreas del AOPP. Si bien es necesario comprender los conceptos técnicos para la aplicación de las normas y el accionar de las instituciones frente a sus misiones, funciones, acciones y asignación de presupuestos, se percibe que hay una visión incompleta de los Cerros Orientales en su integralidad y se enfatizan los esfuerzos en el área de ocupación pública prioritaria, no se trata de restarle importancia al tema que además tiene un Plan de Manejo derivado de

una orden de judicial; este análisis propone que la ciudad y la Administración Distrital construyan una Visión integral de los Cerros orientales y desde allí planifique acciones de forma coordinada y armoniosa entre todos los actores correspondientes. Por lo tanto, se debe planear a la luz de una visión integral de los cerros sin perderse en las escalas del trabajo por la funcionalidad institucional, la ciudad debe recuperar la visión ampliada de los Cerros Orientales y corregir la mirada y los esfuerzos enfocados únicamente en una parte de este gran Patrimonio natural.

2. **Relación cerros y páramo.** Los Cerros Orientales de Bogotá albergan una diversidad de ecosistemas, incluyendo El Páramo como uno de los más importantes. Localizados en las zonas más altas de los cerros tienen un rol crucial en la regulación del ciclo del agua y del clima, la protección de la biodiversidad, la provisión de servicios ecosistémicos esenciales para la región contribuyendo también en la calidad del aire capturando carbono y liberando oxígeno.

La protección de los Cerros Orientales incide directamente en la presencia del ecosistema de páramo, es decir que el páramo depende de la protección de los cerros para su supervivencia, especialmente para mantener su capacidad de regulación hídrica y del clima. De la conservación de estos ecosistemas depende en gran medida garantizar la sostenibilidad ambiental de Bogotá.

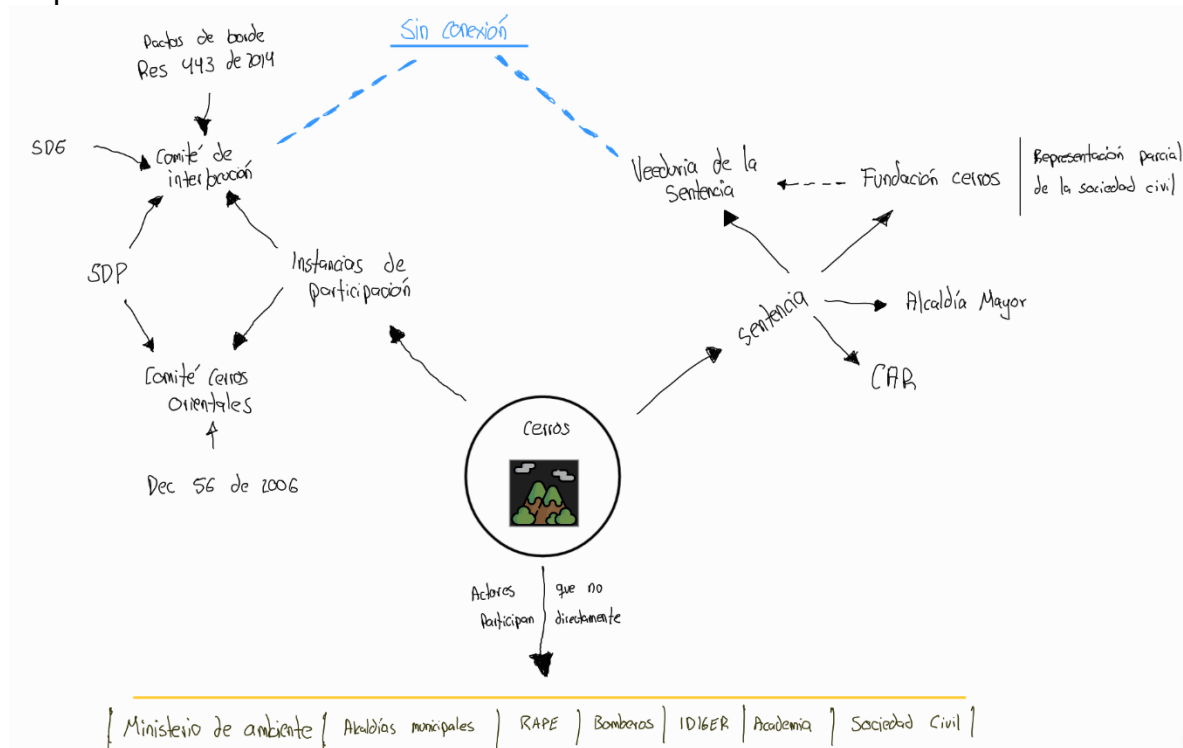
Los páramos de los Cerros Orientales se encuentran amenazados por la expansión urbana, la agricultura, la ganadería, la minería y la construcción de infraestructura. Estas actividades pueden causar deforestación, erosión del suelo, contaminación del agua y pérdida de biodiversidad.

3. **Sobre la Autoridad Ambiental.** En el manejo y gestión de los Cerros Orientales participan dos Autoridades Ambientales, la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR. En consecuencia, en todos los escenarios de participación y gestión de los Cerros Orientales es fundamental la presencia de la CAR, por la enorme jurisdicción que está bajo su responsabilidad, es decir en todos los espacios de participación como los Comités, en los trabajos de Inspección, Vigilancia y Control, en los Informes que se realizan desde la Secretaría Distrital de Planeación SDP y de la Alcaldía Mayor particularmente para la verificación de la Sentencia y en general en todos los espacios que la ciudad requiera desarrollar para la gestión de los Cerros.
4. **Implementación del Plan de Manejo Ambiental - PMA de la Reserva Forestal.** Es necesario que la Administración Distrital conozca en detalle el estado de la

implementación del PMA de la Reserva Forestal a cargo de la CAR, dentro de los documentos revisados no aparece esa importante información para conocer la efectividad y logros del plan contemplado en la Resolución 1766 de 2016 a 8 años de su aprobación. Este aspecto refuerza el anterior argumento, es necesario tener una visión integral de los Cerros Orientales, que supere la realidad indiscutible de las divisiones institucionales de acuerdo con su función y misión.

5. **Sobre los Pactos de Bordo.** Los Pactos son documentos suscritos entre algunas entidades Distritales y algunas organizaciones de la sociedad civil. Los documentos con sus correspondientes compromisos fueron suscritos en el año 2014. En la actualidad, es decir, una década después consideramos que ha pasado un tiempo prudencial para hacer una evaluación de cierre que permita la reformulación y actualización de sus contenidos. Para lo anterior, se deberá unificar la metodología de trabajo, revisión de los actores institucionales y comunitarios para la actualización de los pactos; así como también revisar las diferentes normas que hacen referencia a la herramienta Pactos de Bordo, por lo que será beneficiosa la unificación de criterios, algunas de las normas que los mencionan son: Decreto 485 de 2015, Decreto 222 de 2014, Resolución 1766 de 2016, el decreto 555 de 2021. Entre los actores institucionales involucrar al IDPAC por sus funciones y trabajo directo con las comunidades, importante integrarlo como un actor articulador frente a todos los que participan actualmente en el Comité de Interlocución encargado del seguimiento a los Pactos de Bordo en los Cerros Orientales.
6. **Estado del Arte de la Administración de los Cerros Orientales.** Verificadas las acciones institucionales en los Cerros Orientales, se enfatiza sobre las acciones en la Franja de Adecuación, en lo que corresponde al Área de Ocupación Pública Prioritaria – AOPP con base en el Plan de Manejo contemplado en el Decreto 485 de 2015. No obstante, ya se hizo énfasis sobre la necesidad de una visión ampliada de los Cerros Orientales, si bien el elemento fundamental sobre el cual se han desarrollado acciones en los Cerros es la Sentencia de los Cerros Orientales, es necesario conocer todas las piezas de trabajo interinstitucional, no solo en el AOPP de la Franja de Adecuación, se deben incluir las acciones en el Área de Consolidación de Bordo Urbano - ACBU, sino también en la Reserva Forestal y en las diferentes temáticas, como en los Pactos de Bordo, lo anterior para entrar en los detalles y determinar lo que es necesario continuar y lo que se debe planificar para una gestión integral de los cerros. Adicionalmente, el reciente POT trae elementos conceptuales e instrumentos que involucran a los Cerros Orientales y este proceso tiene una línea de tiempo para su implementación.

Mapa de actores



7. **Organizaciones de la sociedad civil.** Con el propósito de nutrir y diversificar la participación es importante que además de las organizaciones de la comunidad que habita en los cerros orientales y que integra el Comité de interlocución, se abra la convocatoria a otras organizaciones de la ciudad, justamente porque el área representa un importante patrimonio natural de escala Distrital y la participación ampliada diversificará y oxigenará la visión Distrital por parte de la ciudadana sobre los Cerros Orientales, potencializando los espacios de participación para nutrir también la gestión interinstitucional en la conservación y protección de los cerros.
8. **La defensa ciudadana de los Cerros Orientales.** Debe ser una misión de ciudad, que se suma a la intención de las organizaciones que hasta ahora participan en el Comité de Interlocución y a la organización que sustenta el rol de Veeduría ante el Tribunal que realiza el seguimiento y verificación de la Sentencia de los Cerros. Se observa que no hay un escenario que integre estas

organizaciones que han venido acompañando desde diferentes escenarios el cumplimiento a la Sentencia. Para lograr una visión de integral de los Cerros se debe ampliar y apoyar la conversación, el diálogo entre las organizaciones que participan en el Comité de Interlocución, la Organización que asume el Rol de Veedor ante el tribunal y nuevas organizaciones de la ciudadanía que se interesen en los Cerros orientales y no solamente enfocarse en los dos componentes de la Franja de Adecuación.

9. **Convocar a la Academia.** Sumado al propósito anterior, con la intención de ampliar la visión de ciudad y de región sobre la importancia de una gestión integral de los Cerros Orientales es importante convocar a la academia, a las Universidades para renovar, oxigenar y hasta brindar soporte a la Administración Distrital y a los escenarios de participación aportar elementos para la gestión y conservación de este importante Patrimonio Natural.
10. **Seguimiento ciudadano a la gestión de los Cerros orientales.** El Comité de Interlocución es un espacio combinado, donde participan organizaciones comunitarias de los cerros orientales y entidades Distritales, este espacio debe enfocarse en los Pactos de Borde, sin embargo, se ha desviado la atención frente al cumplimiento y seguimiento a la Sentencia de los Cerros Orientales, lo cual realiza formalmente el Tribunal en donde la representación de las organizaciones bajo el rol de Veeduría lo ejerce otra organización que está desvinculada del Comité de Interlocución y las organizaciones que sí participan en este último no tienen un espacio de diálogo y coordinación de agenda con esta veeduría, por lo tanto se requiere una organización o entendimiento de los roles para la armonización efectiva del seguimiento de la comunidad frente a las acciones institucionales en los Cerros orientales de forma integral y no solo en la Franja de Adecuación.

A modo de conclusión, este proyecto pretende generar un espacio Distrital para la armonización de las Instancias y las acciones institucionales desarrolladas en los cerros orientales, el espacio busca facilitar a la administración conocer en detalle de todos los avances y la realidad sobre las dificultades técnicas, jurídicas y administrativas que permita proyectar un plan de acción efectivo para la gestión Integral de los Cerros Orientales y encauzar la conservación y preservación de este vital patrimonio natural de la ciudad y la región.

Dentro del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”, estableció en el programa 5 de su primer

objetivo “Bogotá avanza en seguridad” que la Administración Distrital implementará en *el caso de los Cerros Orientales de Bogotá (...) el desarrollo de planes y acciones dirigidos a la atención de polígonos de riesgo de seguridad y convivencia, la prevención de éstos y su gestión. Adicionalmente, se dará cumplimiento a los fallos y/o sentencias que ordenan la organización y recuperación de los espacios que fortalezcan la economía social de la ciudad.*

Igualmente, en los proyectos estratégicos contenidos en el artículo 17 del Acuerdo Distrital 927 de 2024 se establece **17.9. Implementación de las órdenes contenidas en el fallo sobre Cerros Orientales dictado por el Consejo de Estado en 2013.**

En el párrafo del artículo 155 se establece que la Administración distrital, tomará las medidas para poner en marcha una estrategia para proteger y restaurar ecológicamente la franja de adecuación de los Cerros Orientales en el marco de la sentencia de los Cerros Orientales. En temas de seguridad, el artículo 170 se precisa que la administración distrital articulará las estrategias, planes, programas, proyectos y capacidades necesarias con el fin de garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana en los cerros orientales.

Conforme a lo anterior, se evidencia que este proyecto ayuda a desarrollar el vigente Plan Distrital de Desarrollo.

Además, en relación con los ODS formulados desde Naciones Unidas y, de manera específica, frente al objetivo número 15 *Vida de ecosistemas terrestres*, este proyecto al promover medidas para gestionar sosteniblemente los bosques, aporta al cumplimiento de la meta: “**15.4** Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible.

IV. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

En cuanto a la competencia que tiene el Concejo de Bogotá para aprobar esta iniciativa, esta se ampara en el Decreto Ley 1421 de 1993, que establece al Concejo de Bogotá como la suprema autoridad del Distrito Capital y habilitado para dictar este tipo de normas:

Decreto Ley 1421 de 1993

ARTICULO 3o. OBJETO. *El presente estatuto político, administrativo y fiscal tiene por objeto dotar al Distrito Capital de los instrumentos que le permitan cumplir las funciones y*

prestar los servicios a su cargo; promover el desarrollo integral de su territorio; y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

Las disposiciones del presente estatuto prevalecen sobre las normas legales de carácter general vigentes para las demás entidades territoriales.

Artículo 12: *Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley: Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.*

- 1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.*
- 7. Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente.*

Acuerdo 741 de 2019 “Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Concejo de Bogotá, Distrito Capital”.

“Artículo 65. Iniciativa. *Los proyectos de Acuerdo pueden ser presentados por los Concejales individualmente, a través de las Bancadas, de manera integrada con otros Concejales o bancadas y por el Alcalde Mayor, por medio de sus Secretarios, Jefes de Departamento Administrativo o Representantes Legales de las Entidades Descentralizadas.*

V. IMPACTO FISCAL

El Artículo 7 de la Ley 819 de 2003, señala respecto al impacto fiscal de las normas:

“ARTÍCULO 7. ANÁLISIS DEL IMPACTO FISCAL DE LAS NORMAS. *En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cualquier tiempo durante el respectivo trámite en el Congreso de la República, deberá rendir su concepto frente a la consistencia de lo dispuesto en el inciso anterior. En ningún caso este concepto podrá ir en contravía del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este informe será publicado en la Gaceta del Congreso. Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental, que planteen un gasto adicional o una*

reducción de ingresos, deberán contener la correspondiente fuente sustitutiva por disminución de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En las entidades territoriales, el trámite previsto en el inciso anterior será surtido ante la respectiva Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces”

Sobre el cumplimiento de esta norma, varios fallos de la Corte Constitucional, como la sentencia C-307 de 2004, reiterada por la sentencia C-502 de 2007, señalan:

“Las normas contenidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 constituyen un importante instrumento de racionalización de la actividad legislativa, con el fin de que ella se realice con conocimiento de causa de los costos fiscales que genera cada una de las leyes aprobadas por el Congreso de la República. También permiten que las leyes dictadas estén en armonía con la situación económica del país y con la política económica trazada por las autoridades correspondientes. Ello contribuye ciertamente a generar orden en las finanzas públicas, lo cual repercute favorablemente en la estabilidad macroeconómica del país. De la misma manera, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el mencionado art. 7° ha de tener una incidencia favorable en la aplicación efectiva de las leyes, ya que la aprobación de las mismas solamente se producirá después de conocerse su impacto fiscal previsible y las posibilidades de financiarlo. Ello indica que la aprobación de las leyes no estará acompañada de la permanente incertidumbre acerca de la posibilidad de cumplirlas o de desarrollar la política pública en ellas plasmada. (...) Es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda. Y en ese proceso de racionalidad legislativa la carga principal reposa en el Ministerio de Hacienda, que es el que cuenta con los datos, los equipos de funcionarios y la experticia en materia económica. Por lo tanto, en el caso de que los congresistas tramiten un proyecto incorporando estimativos erróneos sobre el impacto fiscal, sobre la manera de atender esos nuevos gastos o sobre la compatibilidad del proyecto con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, le corresponde al Ministro de Hacienda intervenir en el proceso legislativo para ilustrar al Congreso acerca de las consecuencias económicas del proyecto. Y el Congreso habrá de recibir y valorar el concepto emitido por el Ministerio. No obstante, la carga de demostrar y convencer a los congresistas acerca de la incompatibilidad de cierto proyecto con el Marco Fiscal de Mediano Plazo recae sobre el Ministro de Hacienda.”

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que lo establecido en este Acuerdo referente a promover la creación y funcionamiento de **la Mesa Permanente de participación ciudadana y de expertos por los cerros orientales de Bogotá, D.C** no genera impacto

fiscal por cuanto será la Administración Distrital, partir del diagnóstico realizado, quien definirá si es viable la creación de la Mesa y en dado caso quienes la conformarían. Además, contarán con la intervención de ciudadanos y expertos voluntarios, los cuales no recibirán contraprestación económica por su participación.

VI. CONCLUSIÓN

En mérito de lo expuesto y de conformidad con el Capítulo IX del Acuerdo 741 de 2019, nos permitimos presentar a su consideración el presente proyecto de acuerdo, para su trámite y aprobación.

Respetuosamente,

DAVID HERNANDO SAAVEDRA MURCIA
Concejal de Bogotá
Autor

JUAN JAVIER BAENA MERLANO
Concejal de Bogotá

JUAN MANUEL DÍAZ MARTÍNEZ
Concejal de Bogotá

CRISTINA CALDERÓN
Concejala de Bogotá

JESÚS DAVID ARAQUE MEJÍA
Concejal de Bogotá

FERNANDO LÓPEZ GUTIÉRREZ
Concejal de Bogotá

RICARDO ANDRÉS CORREA MOJICA
Concejal de Bogotá

JUAN DAVID QUINTERO
Concejal de Bogotá

PROYECTO DE ACUERDO NO 225 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE PROMUEVE LA CREACIÓN DE LA MESA PERMANENTE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE EXPERTOS POR LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ, D.C Y SE ESTABLECEN UNOS LINEAMIENTOS SOBRE LA MATERIA”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las previstas en los numerales 1 y 7 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993,

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. La administración Distrital definirá un plan de acción que establezca actividades de recopilación de información, análisis interinstitucional y de diagnóstico, que permita definir la necesidad de crear una Mesa Permanente de Participación por los cerros orientales de Bogotá, D.C.

ARTÍCULO 2. Dentro del plan de acción se incorporarán actividades para evaluar los siguientes temas:

- a. Analizar si actualmente existen los espacios idóneos para el fomento de la sinergia, cooperación y complementariedad entre la Administración Distrital, por medio del Comité de Interlocución de los Cerros Orientales, la organización que sustenta el rol de Veeduría ante el Tribunal que realiza el seguimiento de la Sentencia de los Cerros y los actores interesados.
- b. Determinar si actualmente se generan entornos de articulación, discusión y concertación tanto intersectorial como multisectorial, con un enfoque de gobernanza, con el fin de propiciar y construir acuerdos y compromisos entre los diversos sectores inmersos en el cuidado, protección y desarrollo de los cerros orientales, basándose en la evidencia científica y las experiencias específicas del territorio.

b. Verificar si actualmente existen espacios de participación para mejorar las condiciones ambientales, bajo un enfoque de desarrollo sostenible, en aras de proteger los recursos ambientales y a su vez la interacción con su población.

c. Precisar si actualmente existen espacios de participación interinstitucional y ciudadana para la evaluación del Plan Decenal de Descontaminación del Aire, así como en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del Plan de Gestión Integral de la Calidad del Aire de Bogotá, el seguimiento a los lineamientos del Plan Distrital de Desarrollo, la Política Nacional para el Mejoramiento de la Calidad del Aire, las recomendaciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud – OMS- y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

f. Determinar si actualmente es suficiente la articulación intersectorial para conocer y disminuir el riesgo ante posibles emergencias como incendios forestales y derrumbes (deslizamientos), y la comunicación de los canales y protocolos ante la respuesta a episodios excepcionales de emergencias.

g. Analizar si actualmente es eficiente el modelo de gobierno abierto, en relación con la temática de la protección y reforestación de los cerros orientales bajo los principios de la justicia participativa y distributiva.

PARÁGRAFO. En caso de que el plan de acción determine la viabilidad de la creación de la Mesa Permanente de participación ciudadana y de expertos por los cerros orientales de Bogotá, D.C., la Administración Distrital determinará el modo de ingreso y número de representantes de cada sector que participará asegurando que se cumplan criterios de representatividad.

ARTÍCULO 3. La Administración Distrital deberá generar y hacer público un informe semestral sobre los avances del plan de acción, hasta cuando se entregue el informe final con las conclusiones de las actividades realizadas.

ARTÍCULO 4. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BIBLIOGRAFIA

- Gómez, G. (2018). Los Cerros Orientales de Bogotá: Conservación y manejo sostenible en un paisaje urbano. Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- Rocha, C. (2016). La gestión ambiental en los Cerros Orientales de Bogotá: Políticas, actores y desafíos. Editorial Universidad Nacional de Colombia.
- Martínez, L. & Rodríguez, J. (2020). Cerros Orientales: Un patrimonio natural y cultural en riesgo. Editorial EcoCultura.
- Arenas, M. (2017). La intervención social y ambiental en los Cerros Orientales: Experiencias y resultados. Editorial Universidad de los Andes.
- García, S. & Sánchez, P. (2021). Los Cerros Orientales de Bogotá: Ecosistemas urbanos en peligro. Editorial Instituto de Investigación en Ecología Aplicada (IDEA).
- Arévalo, R. (2015). Participación ciudadana en la conservación de los Cerros Orientales: Un modelo para Bogotá. Editorial Universidad El Rosario.
- Jiménez, A. (Ed.) (2019). Las políticas públicas y el manejo del territorio en Bogotá: El caso de los Cerros Orientales. Editorial Tercer Milenio.
- Fajardo, C. & Gómez, R. (2014). Historia natural de los Cerros Orientales de Bogotá. Editorial Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Ríos, T. & Castro, E. (2013). Conservación en los Cerros Orientales: De la teoría a la acción. Editorial Planeta.
- Gutiérrez, M. & Gómez, L. (2022). Los Cerros Orientales y su rol en la sostenibilidad urbana de Bogotá. Editorial de la Universidad Nacional de Colombia.
- Constitución Política Colombiana.
- Decreto ley 2811 de 1974, Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
- Ley 9 de 1989, Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones.
- LEY 99 DE 1993, Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.
- LEY 165 DE 1994, Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad Biológica", hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992.
- Acuerdo 30 de 1976 Instituto de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente – INDERENA, Por el cual se declaran y alindan unas áreas de reserva forestal y se delegan unas funciones.

- Resolución 076 de 1977 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Por la cual se aprueba un Acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente –INDERENA.
- Resolución 463 de 2005 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Por medio de la cual se redelimita la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, se adopta su zonificación y reglamentación de usos y se establecen las determinantes para el ordenamiento y manejo de los Cerros Orientales de Bogotá.
- Decreto 1076 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- Decreto 1648 de 2016 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial relacionado con la Tasa Compensatoria por la utilización permanente de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.
- Resolución 1766 de 2016 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Por medio de la cual se adopta el Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá (Autoridad Ambiental de la Reserva: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR).
- Decreto Distrital 56 de 2005, Por el cual se crea el Comité Interinstitucional para la coordinación de la actuación administrativa del Distrito Capital en el manejo de los Cerros Orientales de Bogotá D.C.
- Decreto Distrital 122 de 2006, Por el cual se adoptan medidas de defensa y protección de la Reserva Forestal Protectora "Bosque Oriental de Bogotá.
- Decreto Distrital 222 de 2014, Por el cual se adoptan las medidas administrativas tendientes al cumplimiento de las órdenes impartidas dentro de los procesos de acción popular de radicados Nos. 25000232400020110074601 y 25000232500020050066203 y se dictan otras disposiciones.
- Decreto Distrital 485 de 2015, "Por el cual se adopta el Plan de Manejo para el área de canteras, vegetación natural, pastos, plantaciones de bosques y agricultura que corresponde al área de ocupación pública prioritaria de la Franja de Adecuación, y se dictan otras disposiciones".
- Decreto Distrital 800 de 2018, Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 476 de 2015 "Por medio del cual se adoptan medidas para articular las acciones de prevención y control, legalización urbanística, mejoramiento integral y disposiciones relativas al procedimiento y se dictan otras disposiciones
- Decreto Distrital 555 de 2022, Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.
- Resolución 223 de 2014 Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., Por la cual se adopta el Plan de Acción para el cumplimiento de la sentencia proferida por

el Consejo de Estado dentro del proceso de Acción Popular No. 2500023250002005066203.

- Resolución 443 de 2014, “Por la cual se define la naturaleza, objetivo, composición, funciones y se dictan otras disposiciones relacionadas con el Comité de Interlocución de los Cerros Orientales”.

PROYECTO DE ACUERDO NO 226 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE PRIORIZA LA PARTICIPACIÓN DE MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA EN USO DE BUEN RETIRO COMO REFERENTES DE SEGURIDAD EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ”

I. OBJETO DEL PROYECTO.

El objeto del presente proyecto de acuerdo es priorizar la participación de de miembros de la fuerza pública en uso de buen retiro como *Referentes de Seguridad* en las localidades de Bogotá. Este proyecto de acuerdo se alinea con las necesidades de fortalecimiento de la seguridad en Bogotá y busca aprovechar el potencial de los ex miembros de la fuerza pública para mejorar la calidad de vida de todos los bogotanos.

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La seguridad ciudadana es un pilar fundamental para el desarrollo y bienestar de nuestra ciudad. En este sentido, la figura del *Referente de Seguridad* en cada localidad se convierte en un eje central para la articulación de estrategias que promuevan la convivencia pacífica y la prevención del delito. Por ello, se propone un proyecto de acuerdo que priorice la participación de miembros de la fuerza pública en uso de buen retiro como referentes de seguridad en las localidades de Bogotá.

Lo anterior teniendo en cuenta que la descentralización de la seguridad permite una mayor cercanía y comprensión de las dinámicas locales, facilitando respuestas más efectivas y adaptadas a las necesidades específicas de cada comunidad. Así también, los miembros de la fuerza pública, en uno de buen retiro, poseen conocimientos y experiencias valiosas que, al ser aplicados en un contexto local, pueden contribuir significativamente a la seguridad ciudadana.

Adicionalmente, considerando que los retirados o veteranos de las fuerza pública, al integrarse como referentes de seguridad, aportan su experiencia, disciplina y liderazgo, fortaleciendo así las capacidades operativas y estratégicas de la seguridad local. Su transición a roles civiles representa una oportunidad para capitalizar sus habilidades en beneficio de la comunidad (Pita & Suárez, 2017; Brown & Densley, 2019).

La confianza ciudadana es esencial para una colaboración efectiva en la prevención del delito. Los miembros de la fuerza pública en uso de buen retiro, al asumir roles de liderazgo en seguridad, pueden mejorar la percepción de efectividad y transparencia, elementos clave para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad (Buil-Gil, Barberet & Aparicio, 2018; PNUD, 2013).

Contexto

La seguridad en Bogotá se ha convertido en un tema de discusión crítico, reflejando una crisis que se manifiesta en el aumento de delitos y la percepción de inseguridad entre los ciudadanos. Las cifras actualizadas del año 2023 y 2024 muestran un panorama desafiante que requiere una intervención experta y una estrategia integral que aborde las problemáticas específicas de cada localidad.

De esta manera, el panorama de la seguridad en el último año demostró un impacto significativo tanto en las cifras de delitos de alto impacto como en la percepción ciudadana. En el primer aspecto que refleja la situación de la seguridad en la ciudad, se puede evidenciar que durante el año 2023 hubo aumento en casos de al menos 6 delitos de alto impacto, dentro de los que se encuentran extorsión (28,3%), homicidios (6,6%), hurto a personas (9,6%), hurto a residencias (2,2%), hurto a automotores (8,9%) y hurto a motocicletas (4,1%). De esto, en 2024 se encontró que de dichos delitos el comportamiento en las localidades de Bogotá fue el siguiente:

Tabla 1. Delitos de alto impacto por localidad durante 2024.

Localidad	Extorsión	Homicidios	Hurto personas	Hurto residencias	Hurto automotores	Hurto motocicletas
Usaquén	117	47	8.573	621	118	143
Chapinero	105	18	10.924	292	68	81
Santa Fe	223	90	9.484	148	52	72
San Cristóbal	50	53	3.216	235	131	250
Usme	63	88	2.374	241	139	219
Tunjuelito	18	27	2.301	88	61	68
Bosa	113	118	5.297	316	191	484
Kennedy	290	174	11.874	650	983	927
Fontibón	147	37	8.02	313	138	169
Engativá	214	65	12.273	628	408	616
Suba	264	75	12.754	808	253	476
Barrios Unidos	85	21	5.102	219	131	134
Teusaquillo	96	11	7.502	304	136	142
Los Mártires	337	46	11.621	179	130	147
Antonio Nariño	29	14	2.225	74	128	137
Puente Aranda	119	25	5.569	257	436	249
Candelaria	31	4	1.787	39	14	8
Rafael Uribe Uribe	67	54	3.336	279	254	308
Ciudad Bolívar	129	236	4.696	319	295	604

Sumapaz		1				
Sin Localización			897	26	5	7
Total	2.497	1.204	129.825	6.036	4.071	5.241

Fuente: Elaboración propia a partir de la información consignada en el Tablero de “Análisis de datos Siedco” de la SDSCJ²⁴. (Fecha de consulta: 21 de enero de 2025).

En concordancia, en el año 2024, la Defensoría del Pueblo presentó la Alerta 4 por el aumento de la inseguridad en la ciudad relacionado con las “disputas por el control social y territorial entre estructuras locales de delincuencia, los cuales pueden tener acuerdos con grupos armados ilegales”²⁵, presentando que la violencia se incrementó en la ciudad por lo menos en 9 localidades entre las que se encuentran, Los Mártires, Santa Fe, Puente Aranda, Candelaria, Antonio Nariño, Tunjuelito, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos.

Por otro lado, en cuanto a la impresión que tienen los ciudadanos de la seguridad, según la Encuesta de Percepción Ciudadana 2024 de Bogotá Cómo Vamos²⁶, en el año 2023 empeoró la sensación de inseguridad tanto a nivel ciudad como a nivel barrial respecto a las 2 encuestas anteriores. En este sentido, en el año en cuestión, con respecto a la seguridad en general en Bogotá, se contó con un aumento del 15,1 puntos porcentuales de ciudadanos que se sienten “inseguros” en la ciudad, llegando a representar el 52,4% de los encuestados. Dicha percepción, según la referida medición de 2024²⁷, tuvo una muy pequeña reducción, apenas 4 puntos, estableciéndose en un 48%. Esto quiere decir, que de 10 personas en Bogotá, 5 se sienten inseguras. En términos porcentuales, no hubo mayor cambio.

²⁴ <https://analitica.scj.gov.co/analytics/saw.dll?Portal>

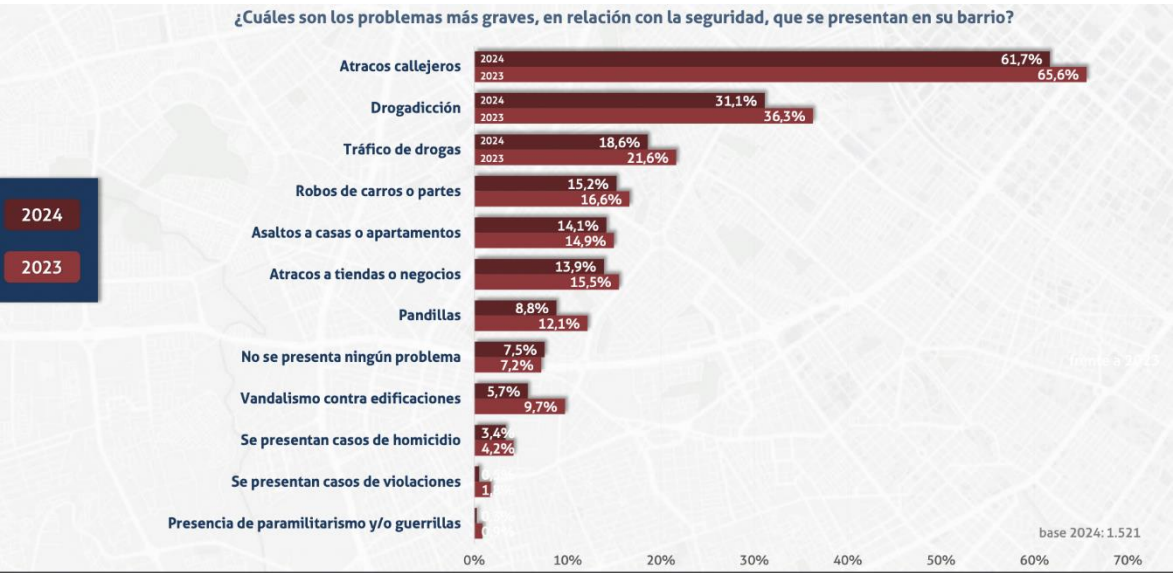
²⁵ <https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91902>

²⁶ https://bogotacomovamos.org/wp-content/uploads/2023/11/Encuesta-Percepcion-Ciudadana-2023_c.pdf

²⁷ <https://bogotacomovamos.org/wp-content/uploads/2024/12/Encuesta-de-Percepcion-Ciudadana-2024-presentacion.pdf>

Por otro lado, como se puede evidenciar en esta misma encuesta, con respecto al nivel más cercano a la ciudadanía, como lo es su barrio, históricamente los bogotanos se han sentido más seguros en este espacio, no obstante, a la pregunta “¿Qué tan seguro se siente en su barrio?” el 33,4% de los habitantes respondieron que se sentían inseguros en el 2023, esto representa un aumento de 8,8% con respecto al año 2022. Ahora bien, de acuerdo con la misma encuesta pero de 2024²⁸, la percepción de inseguridad de los bogotanos en sus barrios se mantuvo estable, presentó una reducción de un punto, ubicándose en 32%

Adicionalmente, se evidencia que dentro de los problemas que más han afectado este incremento de percepción de inseguridad en los barrios son los atracos callejeros, la drogadicción y el tráfico de drogas.



* Tomado de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2024 de Bogotá Cómo Vamos

Por lo anterior, para el presente Proyecto de Acuerdo, se realizó un corto estado del arte en el que se priorizaron las categorías de investigación de confianza en los miembros

²⁸<https://bogotacomovamos.org/wp-content/uploads/2024/12/Encuesta-de-Percepcion-Ciudadana-2024-presentacion.pdf>

retirados de la fuerza pública y el rol de estos en la seguridad local presentado a continuación.

Rol de los miembros de la fuerza pública en uso de buen retiro y la seguridad local

El papel de los retirados o veteranos en la seguridad local se refiere al aporte que pueden hacer estos miembros una vez se incorporan a las acciones en sus localidades y barrios. Estos, pueden aportar su experiencia, su formación, su disciplina, su liderazgo y su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana.

El IACP (2018)²⁹ destaca las ventajas y los beneficios de contratar a veteranos militares para la policía comunitaria, y proporciona ejemplos de buenas prácticas y recursos para facilitar su transición y desarrollo profesional. El informe señala que los veteranos pueden contribuir a la seguridad y la convivencia ciudadana con su experiencia, su formación, su disciplina, su liderazgo y su compromiso, y que se requiere una mayor colaboración entre las agencias policiales y las organizaciones de veteranos para apoyar su inserción y bienestar.

Confianza en la policía

La confianza en la policía es el grado de credibilidad, legitimidad y satisfacción que la ciudadanía tiene hacia la institución policial y sus miembros. Esta confianza se basa en la percepción que la ciudadanía tiene sobre la capacidad, la honestidad, la imparcialidad, la responsabilidad y la sensibilidad de la Policía para prevenir y combatir el delito, proteger y respetar los derechos humanos, y atender y resolver los problemas de convivencia ciudadana.

La confianza en la Policía es un factor clave para la seguridad y la convivencia ciudadana, ya que influye en el nivel de cooperación, denuncia, obediencia y apoyo que la ciudadanía brinda a la policía, así como en el nivel de respeto, confianza y compromiso que la policía brinda a la ciudadanía.

²⁹ International Association of Chiefs of Police (IACP). (2018). Veterans as Assets in Community Policing. IACP. <https://www.theiacp.org/sites/default/files/2018-08/Veterans%20as%20Assets%20in%20Community%20Policing.pdf>

De esta manera, la confianza en la policía se ve afectada negativamente por la victimización, la exposición a los medios de comunicación, la ideología política, el género y el nivel socioeconómico, y positivamente por la calidad de los servicios policiales y el grado de rendición de cuentas (Bergnam y Flom, 2012)³⁰.

Así, la confianza en la policía se ve afectada por la percepción de la eficacia, la legitimidad, la proximidad, la identificación y la reciprocidad de la policía, así como por la experiencia previa de victimización y contacto con la policía (Ávila Guerrero, Vera Jiménez, Martínez Ferrer y Bahena Rivera, 2016)³¹.

En esta vía, según Toloa et al (2022) citando a Martínez et al. (2018) y Nalla et al. (2018):

“cuando los ciudadanos se sienten seguros en sus barrios, también se sienten satisfechos con la labor de la policía y, por ende, hay un potencial para fortalecer esa relación de confianza; por el contrario, la población no confía en la policía al considerar que no tiene un buen desempeño en el desarrollo de sus funciones”.

López Portillo Vargas (2015)³² reflexiona sobre la reconciliación entre la policía y la sociedad, y propone que la ciudadanía se involucre y combata la indiferencia en el tema. El orador, que es un ex policía, comparte su experiencia personal y profesional, y plantea que la confianza en la policía se puede construir a partir de la comunicación, la educación, la participación y la transparencia.

Se espera que con este proyecto haya un impacto positivo en la seguridad local, pues como se dijo anteriormente, al encontrar perfiles en los que confluyen tanto la experiencia en la fuerza pública, como el rol en la vida civil, se pueden hallar puntos de encuentro entre los miembros de la Policía

³⁰ Bergman, M., & Flom, H. (2012). Determinantes de la confianza en la policía: una comparación entre Argentina y México. *Perfiles latinoamericanos*, 20(40), 97-122.

³¹ Ávila Guerrero, M. E., Vera Jiménez, J. A., Martínez Ferrer, B., & Bahena Rivera, A. (2016). Un análisis psicosocial de la confianza en los grupos policiales: el caso de Cuernavaca (México). *Perfiles latinoamericanos*, 24(47), 151-174.

³² López Portillo Vargas, E. (2015). Entré a la policía y me di de baja en la sociedad [Vídeo]. TEDx. <https://www.youtube.com/watch?v=7QY8Z2eXf9w>

que prestan servicios locales, la administración local y la ciudadanía, generando puntos de diálogo y confianza.

III. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA

Proyecto de Acuerdo 087 de 2024

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA INCENTIVAR LA INTEGRACIÓN DE LOS VETERANOS DE LA FUERZA PÚBLICA EN LOS FRENTE DE SEGURIDAD EN BOGOTÁ

Autor: H.C. Diana Diago Guaquetá

Estado: Archivado

IV. MARCO JURÍDICO

INTERNACIONAL

Declaración Universal de Derechos Humanos

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)

Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal.

1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal (...).

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 9.

1.Todo individuo tiene derecho a la libertad y la seguridad personales.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas.

16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.

16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuenciaas y representativas que respondan a las necesidades.

NACIONAL

Constitución Política de Colombia

Artículo 216. La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas.

La Ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas por la prestación del mismo.

Artículo 217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.

La Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio.

Artículo 218. La ley organizará el cuerpo de Policía.

La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario.

Ley 1861 de 2017

Por la cual se reglamenta el Servicio De Reclutamiento, Control De Reservas y la movilización, señala en el artículo 57 que “son reservas de la Fuerza Pública, todos los

hombres y mujeres reservistas de primera clase con orientación, instrucción y formación militar o policial; o de segunda clase que voluntariamente quieran ingresar, organizados dentro de una estructura estratégica, para satisfacer las necesidades misionales de la Fuerza Pública, con el propósito de atender las exigencias en la defensa y seguridad nacional, dando cumplimiento a los planes de movilización.”

Igualmente establece que, “hacen parte de esta organización de reservas los oficiales y suboficiales de la reserva activa, soldados profesionales en retiro temporal con pase a la reserva y quienes son reservistas de primera clase, modalidades que se encuentran desarrolladas en la presente ley y en los decretos de carrera de oficiales, suboficiales, soldados profesionales del Ejército y sus equivalentes en las demás Fuerzas y la Policía Nacional y los ciudadanos colombianos que reúnan los requisitos para su ingreso”.

Ley 1979 de 2019

Por medio de la cual se reconoce, rinde homenaje y se otorgan beneficios a los veteranos de la Fuerza Pública y se dictan otras disposiciones.

Dentro de su contenido legal, el **Artículo 1** señala que esta población ha “realizado sacrificios que van desde el enfrentamiento constante a peligros, daños físicos irreparables, hasta numerosas muertes, las cuales durante años han sido enfrentadas por las familias de estos héroes, lo que también los convierte en un actor relevante en el proceso de defensa del país”.

El **Artículo 2** fija como ámbito de aplicación al veterano, a quienes define como “todos los miembros de la Fuerza Pública con asignación de retiro, pensionados por invalidez y quienes ostenten la distinción de reservistas de honor. También son veteranos todos aquellos que hayan participado en nombre de la República de Colombia en conflictos internacionales. Así como, aquellos miembros de la Fuerza Pública que sean víctimas en los términos del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, por hechos ocurridos en servicio activo y en razón en ocasión del mismo”.

El anterior literal de este artículo fue declarado condicionalmente exequible por la **Sentencia C-116 de 2021**, en virtud del cual la Corte Constitucional advierte que “se excluyen de la definición de veteranos y de los beneficios correspondientes a los retirados que la fuerza pública cuya responsabilidad haya sido declarada en decisión que constituya cosa juzgada por autoridad administrativa o judicial en relación con graves violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad”.

De igual manera, el **Artículo 33** de la misma Ley establece que la reserva activa de la Policía Nacional “está conformada por el personal de Oficiales, Suboficiales, Nivel Ejecutivo, Patrulleros y Agentes retirados del servicio activo de la Policía Nacional y los Auxiliares de la Policía, estos últimos cuando hayan cumplido su servicio militar”.

Decreto 1345 de 2020

Por el cual se reglamenta la acreditación, se rinden honores en actos, ceremonias y eventos públicos, se reconocen beneficios en servicios financieros de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, en la liquidación en la pensión de invalidez y se dictan otras disposiciones.

"Por la cuál se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones."

Decreto Nacional 1499 de 2017

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015

Acuerdo Distrital 257 de 2006

Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones.

Acuerdo Distrital 637 de 2016

Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones.

Decreto Distrital 807 de 2019

Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.

Resolución 0673 de 2020

Por la cual se adopta el Plan Estratégico del Sector Administrativo de Gobierno.

Resolución 0673 de 2020

"En el 2024 Sector Gobierno tiene la misión de velar por la gobernabilidad Distrital y Local, por la generación de espacios y procesos sostenibles de participación de los ciudadanos y las organizaciones sociales, por la relación de la Administración Distrital con las corporaciones públicas de elección popular en los niveles local, distrital, regional y nacional; vigilar y promover el cumplimiento de los derechos constitucionales, así como de las normas relativas al espacio público que rigen en el Distrito Capital"

"Secretaria Distrital de Gobierno tiene por objeto "orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad

democrática en el ámbito distrital y local, mediante la garantía de los derechos humanos y constitucionales, la convivencia pacífica, el ejercicio de la ciudadanía, la promoción de la paz y la cultura democrática, el uso del espacio público, la promoción de la organización y de la participación ciudadana y la coordinación de las relaciones políticas de la Administración Distrital en sus distintos niveles".

Decreto Distrital 411 de 2016

Por medio del cual se modifica la Estructura Organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

“ARTÍCULO 5°. ALCALDÍAS LOCALES. Corresponde a las Alcaldías Locales el ejercicio las siguientes (sic) funciones:

(...) b) Promover la organización social y estimular la participación ciudadana en los procesos de la gestión pública local en el marco de las orientaciones distritales en la materia.(...)”

Acuerdo Distrital 740 de 2019

Alcaldía Local es una dependencia de la Secretaría Distrital de Gobierno, responsable de las competencias asignadas a los Alcaldes Locales, de conformidad en lo establecido en el numeral 6, del artículo 5 que especifica: “6. Promover la seguridad y convivencia ciudadana”.

DECRETO 079 DE 2018

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto Distrital 657 de 2011, en lo atinente con la reglamentación del Consejo Distrital de Seguridad y Convivencia y se dictan otras disposiciones.

Acuerdo 321 de 2008

Por el cual se establecen las Juntas Zonales de Seguridad y Convivencia Ciudadana y se dictan otras disposiciones.

V. IMPACTO FISCAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 7o de la ley 819 de 2003, la implementación de la presente iniciativa no genera impacto fiscal que afecte las finanzas del distrito en el mediano plazo, por lo que no genera erogaciones presupuestales adicionales a las ya establecidas.

VI. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

DECRETO 1421 DE 1993

ARTÍCULO 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

ARTÍCULO 13. Iniciativa. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales y el alcalde mayor por conducto de sus secretarios, jefes de departamento administrativo o representantes legales de las entidades descentralizadas. El personero, el contralor y las juntas administradoras los pueden presentar en materias relacionadas con sus atribuciones. De conformidad con la respectiva ley estatutaria, los ciudadanos y las organizaciones sociales podrán presentar proyectos de acuerdo sobre temas de interés comunitario.

Cordialmente,

ANDRÉS BARRIOS BERNAL

Concejal de Bogotá

PROYECTO DE ACUERDO NO 226 DE 2025**PRIMER DEBATE*****“POR MEDIO DEL CUAL SE PRIORIZA LA PARTICIPACIÓN DE MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA EN USO DE BUEN RETIRO COMO REFERENTES DE SEGURIDAD EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ”***

El Concejo de Bogotá en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, especialmente las contenidas en los numerales 1 y 7 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 y en concordancia con los artículos 25 y 313 de la Constitución Política de Colombia,

ACUERDA:

ARTÍCULO 1°. El objeto de este Acuerdo Distrital es priorizar la participación de miembros de la Fuerza Pública en uso de buen retiro como referentes de seguridad en las localidades de Bogotá, en concordancia con los principios de eficacia, eficiencia y equidad en la gestión de la seguridad ciudadana.

ARTÍCULO 2°. La Secretaría Distrital de Gobierno priorizará la identificación y selección de miembros de la Fuerza Pública en uso de buen retiro que cumplan con los requisitos de idoneidad, experiencia y compromiso con la seguridad y convivencia ciudadana, para ejercer como referentes de seguridad en las localidades de Bogotá.

ARTÍCULO 3°. La selección de los miembros de la Fuerza Pública en uso de buen retiro como referentes de seguridad en las localidades de Bogotá se llevará a cabo mediante un proceso que cumpla con los principios de igualdad, equidad, participación y transparencia, en el cual se evaluarán criterios objetivos como la experiencia y la formación, garantizando la idoneidad del personal seleccionado.

ARTÍCULO 4°. La Secretaría Distrital de Gobierno en coordinación con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia diseñarán e implementarán un programa de capacitación integral para los miembros de la Fuerza Pública en uso de buen retiro seleccionados como referentes de seguridad en las localidades de Bogotá.

ARTÍCULO 5°. Los miembros de la Fuerza Pública en uso de buen retiro seleccionados como referentes de seguridad trabajarán en coordinación con la Policía Metropolitana de

Bogotá (MEBOG) y demás Autoridades pertinentes con el fin de mejorar la seguridad y convivencia ciudadana en cada una de las localidades de Bogotá.

ARTÍCULO 6°. El presente Acuerdo Distrital rige a partir del momento de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PROYECTO DE ACUERDO NO 227 DE 2025

PRIMER DEBATE

"POR MEDIO DEL CUAL SE PROHÍBE LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE NUEVOS HORNOS CREMATORIOS EN LAS ZONAS DE PROXIMIDAD DEL DISTRITO CAPITAL, SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA EL TRASLADO PROGRESIVO DE LOS EXISTENTES EN ZONAS DE PROXIMIDAD Y OTRAS DISPOSICIONES"

"La conservación del ambiente no solo es considerada como un asunto de interés general, sino principalmente como un derecho internacional y local de rango constitucional, del cual son titulares todos los seres humanos, en conexidad con el ineludible deber del Estado de garantizar la vida de las personas en condiciones dignas, precaviendo cualquier injerencia nociva que atente contra su salud". Al efecto, la Constitución de 1991 impuso al Estado colombiano la obligación de asegurar las condiciones que permitan a las personas gozar de un ambiente sano, y dispuso el deber de todos de contribuir a tal fin, mediante la participación en la toma de decisiones ambientales y el ejercicio de acciones públicas y otras garantías individuales, entre otros".
Sentencia T-154/13

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La cremación es la destrucción por medio del calor, en un horno crematorio, de cadáveres, restos humanos y restos cadavéricos hasta su reducción a cenizas. Cualquier cadáver puede ser incinerado con independencia de la causa de la muerte, salvo los contaminados por radiaciones o productos radiactivos. La palabra crematorio tiene su origen en el latín *crematio, cremationem o cremationis* que significa quemar, incinerar³³. Esta práctica, que parece reciente en los esquemas sanitarios latinoamericanos, tiene de hecho un origen que data de la antigüedad y existen rastros históricos que demuestran que esta tradición se ha ido extendiendo a lo largo del mundo, con el aval de varias religiones.

En la actualidad, la cremación es también empleada para el tratamiento y disposición final de los cadáveres de animales domésticos o mascotas, presentando una reciente incorporación a las prácticas de las familias Colombianas.

A pesar de su larga aparición en la historia, la cremación no siempre ha contado con los esquemas tecnológicos que se pueden apreciar hoy en día. De hecho, esta práctica se enmarca dentro de los movimientos higienistas modernos, en donde médicos y políticos fijaron el camino de políticas urbanas tendientes a mejorar la salubridad de las viviendas y las familias en función de la prevención de enfermedades.

³³ http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252015000100016, consultada el 2 de febrero de 2021.

De acuerdo con Fernando Guerra³⁴, además de la defensa del higienismo a la práctica de la cremación, un fuerte movimiento internacional sumó esfuerzos para demostrar que este tratamiento hace parte de los pasos fundamentales para la consolidación de sociedades civilizadas, teniendo como primicia la necesidad de contar con infraestructuras salubres que permitieran el control de los residuos y las emisiones generadas, controlando así la aparición de bacterias, gusanos y otras enfermedades asociadas a las cremaciones a cielo abierto -como se dieron en sus inicios y aún se mantienen en las tradiciones Indias-.

De lo dicho, los impulsores de la cremación describieron no sólo los beneficios en tanto la rápida disposición de cuerpos y restos sin la generación de microhábitats como los que surgen en la inhumación, sino que además describieron el rito como la posibilidad de que el ser querido y afable estéticamente, no se exponga a la pérdida de su belleza en el proceso de descomposición.

José María Ramos Mejía, en su prólogo a *La cremación en América y particularmente en Argentina*, de José Penna³⁵, describe las angustias estéticas que llevaron a reforzar las ideas salubres de la cremación, en los siguientes términos:

“azul, verde, lívido, amarillo el rostro y las carnes de los miembros deformados y hasta en actitudes ridículas por la desigual descomposición de los músculos ; el rostro antes apacible y bello de un anciano de fisonomía dulcísima y amable, hinchado y brutalmente desfigurado por el edema final de la descomposición, la cara y el cuerpecito blanco y transparente de un niño querido con la carne perfumada por ese olor peculiar a las carnes lozanas de los niños, abultado como una vejiga, arrojando por la boca líquidos inmundos e inspirando la más atroz repugnancia al padre mismo”

Esta vasta reflexión que, por supuesto tiene diversas interpretaciones, llevó a que se modernizara la práctica de la cremación, buscando garantizar procesos higiénicos y salubres, que redijeran los riesgos de dispersión de materiales, descomposición no controlada y aparición de enfermedades asociadas a la inhumación, particularmente de cadáveres resultantes de enfermedades infecciosas como la tuberculosis o la fiebre tifoidea.

En 1873, el profesor Italiano Brunetti presentó por primera vez en Viena la cámara de cremación hecha por él mismo. El arquitecto Ramón F. Recondo, en su artículo *Arquitectura del crematorio. Función, estética y medio ambiente*³⁶, en un recorrido histórico por la arquitectura asociada a la incorporación de la cremación en los modelos urbanos, señaló que una vez presentada la cámara de cremación del profesor Brunetti, fueron varios los movimientos que se sumaron a su defensa, como la Sociedad de Cremación de Inglaterra fundada en 1874.

En el mismo recorrido, el arquitecto Recondo señala que el primer horno construido en Estados Unidos data de 1874 en Pensilvania, seguido en 1877 en [Salt Lake City \(Utah\)](#). Así mismo en

³⁴ <https://journals.openedition.org/amerika/5716?lang=es>. Consultada el 4 de febrero de 2021.

³⁵ Penna, José, *La cremación en América y particularmente en la Argentina*, Buenos Aires : El Censor, 1889.

³⁶ Recondo Pérez, Ramón Félix *La Arquitectura del Crematorio. Función, estética y medio ambiente*. Revista de Arquitectura e Ingeniería, vol. 7, núm. 2, 2013, pp. 1-26 Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de Matanzas Matanzas, Cuba

Europa la tendencia de la cremación fue creciente y en 1978 se construye el primer horno en Gotha (Alemania), a la par de la construcción de un equipamiento semejante en Woking (Inglaterra) en el mismo año. De esta manera, esta última ciudad referida, la primera cremación se dio ocho años después, en 1886.

La cremación, que inicialmente tuvo carácter de ilegal en muchos estados, fue declarada legal en Inglaterra y Gales, luego de que el doctor William Price fuera procesado por cremar a su hijo. La legislación formal siguió después con la autorización del Acta de Cremación de 1902 (dicha Acta no tuvo extensión legal en Irlanda) lo cual supuso requerimientos procesales antes de que una cremación pudiese ocurrir y restringir su práctica a lugares autorizados. Algunas iglesias [protestantes](#) comenzaron a aceptar la cremación, bajo la premisa racional del ser³⁷.

Casi ochenta años después, la iglesia Católica representada por el papa Pablo VI levantó la prohibición de cremar cadáveres en 193, dando lugar a permitir el rito de misa de cremación. Este “aval”, permitió que en las iglesias católicas se levantara cinerarios o “cenizarios” como se conocen en el argot popular, para que las familias guarden las cenizas de sus seres queridos, teniendo como requisito garantizar que las mismas provienen de prácticas higiénicas y vigiladas.

En Colombia, el primer horno crematorio llegó en 1980, más precisamente a Medellín y desde entonces el 65% de los fallecidos son cremados en esa ciudad. En Bogotá, la cremación supera en un 10% a la inhumación y en Cali, el 35 % de los cadáveres es incinerado³⁸. De acuerdo con la misma fuente, la cremación de un cadáver requiere 92 metros cúbicos de gas para lograr reducir el cuerpo a fragmentos de hueso y la duración promedio del procedimiento es entre 80 y 90 minutos, sin embargo, si el peso de la persona aumenta, este proceso puede tardar hasta 120 minutos. Otra cifra que llama la atención es que un sólo cuerpo cremado puede producir 27Kg de dióxido de carbono, que si bien es una molécula que no es ofensiva por naturaleza, liberada en grandes cantidades se puede convertir en veneno.³⁹

La anterior cifra, permitiría inferir que en un día de 24 horas (1.440 minutos), a un tiempo promedio de cremación de 90 minutos y un funcionamiento constante, pueden cremarse en acción individual 16 cadáveres, lo que significa 432 kg de Dióxido de carbono en un día.⁴⁰ Esta situación, implica que la excesiva liberación de CO₂, no sólo aumenta la crisis del cambio climático, por poner en desequilibrio la liberación de CO₂ con su absorción por los sistemas vegetales, sino que las altas cantidades se concentran en el ambiente, poniendo a disposición la inhalación de un gas venenoso.

En 2020, debido a la Pandemia derivada del COVID-19, la incineración (por tratarse de un método rápido y eficaz de disposición final), se convirtió en la alternativa de manejo frente al gran número

³⁷ Ibid.

³⁸ <https://www.laascension.com/crematorio>. Consultada el 3 de febrero de 2021.

³⁹ <https://www.dw.com/es/di%C3%B3xido-de-carbono-bendici%C3%B3n-y-maldici%C3%B3n/a-15119911>.

⁴⁰ Cálculos propios del autor.

de personas fallecidas en el mundo. De esta manera, los hornos crematorios de Bogotá y las demás ciudades, tuvieron funcionamientos constantes durante las 24 horas del día, o que significa que de los 13 hornos que existen en la ciudad, se estarían produciendo a diario 5.616 Kg de CO₂ para la ciudad.

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante señalar que, cremar en los centros urbanos presenta inconvenientes a corto y largo plazo para las comunidades aledañas, considerando que la capa vegetal absorbente de CO₂ es mínima, respecto de su producción. Así las cosas, cabe mencionar que la cremación, además de CO₂, contribuye a la producción de trazas de óxidos de carbono, azufre y nitrógeno, sumando al material particulado (PM 10 y PM_{2,5}) e hidrocarburos poli aromáticos, reconocidos dentro de la norma colombiana (Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente). Adriana López y Lorena Martínez⁴¹, señalan que: *“La contaminación por emisión de Material Particulado con Mercurio en ambiente extramural por fuentes específicas, ha sido estudiado por autores internacionales, como Gregg, quienes aseveran que los procesos de cremación emiten contaminantes atmosféricos por combustión –PM10-, combustión incompleta –CO- y por volatilización de metales preexistentes en el cuerpo a incinerar –Hg-. La combustión, es responsable de la emisión de la materia en forma de partículas incombustas del cajón y de los restos del organismo, resultantes de la cremación. El mercurio se incorpora al proceso contaminante porque está presente en el cuerpo que es incinerado. (Subraya fuera del texto)”*

De acuerdo con lo mencionado, la Resolución 1447 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social establece que las condiciones de diseño de cementerios en Colombia deben tener como premisa estar contruidos lejos de zonas comerciales, recreacionales y residenciales, conscientes de que en mayor o menor medida van a generar emisiones de sustancias potencialmente dañinas para el ser humano. Dicha afirmación, parece, sin embargo, no haber sido tenida en cuenta al momento de otorgar permisos de funcionamiento como el Horno recientemente (en relación con los demás de la ciudad) abierto en la localidad de Fontibón o para atender las constantes quejas de los residentes aledaños a sectores como el cementerio del sur o el apogeo.

La cremación, cualquiera sea la tecnología utilizada, descarga al ambiente dioxinas, furanos, cloruro de hidrógeno, mercurio, cadmio, plomo, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, y partículas de distinto diámetro. La responsabilidad de los crematorios en la emisión de dioxinas es de tal magnitud e importancia que el Convenio de Estocolmo para eliminar los más importantes Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) los incluye entre las fuentes a controlar (Convenio, Parte III, “Categoría de fuente”)⁴². En muchos países del mundo, un horno crematorio no

⁴¹ López A. & Martínez L. Evaluación de la concentración de mercurio en material Particulado pm₁₀ en siete ciudades del país. Universidad de la Salle 2008.

⁴² FUNAM FUNDACIÓN PARA LA DEFENSA DEL AMBIENTE ENVIRONMENT DEFENSE FOUNDATION. Informe sobre el impacto ambiental y sanitario de los hornos crematorios. Córdoba, Argentina. Febrero de 2005. Consultado en <http://gaialibrary.org/system/files/Informe%20sobre%20el%20impacto%20ambiental%20y%20sanitario%20de%20los%20hornos%200crematorios.pdf>.

puede operar en zona poblada. Como la deriva de sus descargas se extiende a grandes distancias en función del viento y otras variables, en España, por ejemplo, la franja mínima de protección que deben tener a su alrededor es de unos 5.000-10.000 metros⁴³.

La lógica descrita, sumada a las altas frecuencia de funcionamiento de los Hornos crematorios de las zonas céntricas y residenciales de Bogotá, llama a la preocupación, especialmente con el tratamiento dado a los cadáveres efecto del COVID 19. No obstante, el presente proyecto de acuerdo no busca de ninguna manera juzgar la cremación, que por demás resulta ser el proceso más sanitario de disposición final de restos y cuerpos humanos, sino evaluar las condiciones de funcionamiento en medio de las zonas residenciales o de proximidad de acuerdo con las disposiciones del Decreto Distrital 555 de 2021, de la capital del país.

Los efectos para la salud pueden traducirse en infecciones de tipo respiratorio que no han sido valoradas de manera integral y sistemática, pero que en virtud al principio de precaución adoptado por Colombia a partir de la Convención de Río de Janeiro e incorporado como principio en la Ley 99 de 1993, deben atenderse de manera inmediata a fin de prevenir un daño posterior, como sucede con materiales como el asbesto.

Es necesario que entidades como la UAESP, la Secretaria de Salud del Distrito y la Secretaria de Planeación, revisen los planes de manejo e impacto ambiental que tienen los operadores públicos y privados de los hornos, así como los impactos a la salud pública por la ubicación de estos equipamientos en zonas residenciales como en los casos de Fontibón, Cementerio del Sur y Cementerio del Norte. Es fundamental contar con un estudio de calidad de aire a las entidades competentes, y estudios científicos avalados por el Ministerio de Salud que certifiquen cuales son las afectaciones a la salud humana por el funcionamiento de hornos crematorios en zonas residenciales del Distrito Capital.

Es importante considerar que, si bien en Bogotá se ha dado prioridad a la ubicación de Hornos a las afueras de la ciudad, hoy en día existen instalaciones de cremación en el corazón de los barrios residenciales como Villa Mayor, Fontibón, Galicia, Nuevo Chile, Chapinero, entre otros.

Esta problemática fue abordada en las discusiones que pretendieron un pliego de modificaciones concertado al fallido proyecto de acuerdo 413 de 2021, en el que la administración dio el visto bueno al artículo numerado 174 dentro de la ponencia positiva con pliego unificado, presentado por el concejal Pedro Julián López y el autor de esta iniciativa. Así, es menester señalar que en su momento se comprendieron las razones que llevan a una disposición de esta naturaleza, que

43

<http://gaialibrary.org/system/files/Informe%20sobre%20el%20impacto%20ambiental%20y%20sanitario%20de%20los%20hornos%20crematorios.pdf>.

pretende especialmente proteger a las comunidades que, si bien hoy cuentan con cementerios en su entorno, se verían gravemente afectadas con la instalación de hornos crematorios, como en los casos de Usme, Bosa o Engativá.

I. OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto de acuerdo, tiene por objeto prohibir la instalación de hornos crematorios en las zonas identificadas como de proximidad de acuerdo con las disposiciones del decreto distrital 555 de 2021 o las que tengan calidades semejantes de acuerdo con la norma vigente en Bogotá, así como generar unos lineamientos que permitan el traslado progresivo de estas infraestructuras que hoy en día se encuentran en el corazón de los barrios del Distrito, a zonas de menor afectación para los seres humanos.

El proyecto pretende que la función de los diferentes sectores de la administración pública se articule para garantizar la disminución de las afectaciones al ambiente, especialmente en lo relacionado con el derecho fundamental a la salud de las personas que habitan las inmediaciones de los cementerios que efectúan cremaciones.

II. CONSIDERACIONES Y JUSTIFICACIÓN

La normativa nacional e internacional que protege los derechos al ambiente sano, la expedición de la Ley Estatutaria de la salud y las perspectivas de cuidado y prevención que el Distrito debe adelantar en el marco del acelerado proceso de calentamiento global, deben servir de insumo para la formulación de políticas locales que permitan mitigar el impacto de las actividades contaminantes como la cremación, que por demás deben ser complementarias a las normas de ordenamiento territorial. La necesidad de este proyecto de acuerdo, radica en que existen indicios sobre posibles daños a la salud humana aledaña a los hornos crematorios; como es el caso de los habitantes de Fontibón que manifiestan sufrir de irritaciones a la mucosa, picazón en la nariz y ardor en los ojos, desde que comenzó la operación del horno privado en el cementerio de ese sector.

De acuerdo con la información de soporte para la formulación de este proyecto, en la respuesta recibida de la Secretaría Distrital de Salud, sobre el cuestionamiento de si existen estudios científicos que determinen la afectación a la salud humana por la actividad de los hornos, mediante radicado No. 2020EE49803 de 26 de agosto de 2020 señaló que se han hecho **ENCUESTAS** aplicadas en el año 2014, y que a partir de ellas, se realizó un análisis descriptivo de zonas consideradas de menor y mayor exposición con respecto a la distancia de la emisión de los hornos crematorios del cementerio del norte, ubicados en la Localidad de Barrios Unidos. Estas encuestas, ofrecieron información únicamente de carácter **cualitativo sobre percepción de síntomas asociados a olores ofensivos** provenientes del cementerio.

En 2015, de acuerdo con la misma respuesta, se aplicó una **segunda encuesta** para verificar si existía variación en la percepción de las personas y se realizó un análisis descriptivo con iguales criterios de inclusión por zona de mayor y menor exposición. De igual forma en el año 2015 se realizó un análisis descriptivo de zonas consideradas de menor y mayor exposición con respecto a la distancia de la emisión de los hornos crematorios del cementerio Sur, ubicados en la Localidad de Antonio Nariño, teniendo en cuenta las mismas variables de 2014, y consecuentemente generando resultados semejantes.

Es alarmante que se califique como estudios a las encuestas que basan sus resultados única y exclusivamente en variables cualitativas provenientes de los comentarios de la comunidad; por tanto, es necesario que se realice trabajo de campo y/o estudios científicos y/o estudios médicos que determinen o alerten el daño a la salud humana a la población que habita en sectores residenciales cercanos a los hornos crematorios, para tomar las medidas necesarias de mitigación y corrección.

Resulta preocupante que la Secretaria Distrital de Ambiente, informó mediante respuesta a esta Unidad de Apoyo que, el cálculo de la altura del ducto del horno crematorio propiedad de la sociedad FUNDACIÓN JARDÍN CEMENTERIO DE FONTIBÓN presentado en el último estudio de emisiones, no se consideró consistente, por lo que se requirió a la sociedad presentar el nuevo cálculo y adecuar la altura del punto de descarga del ducto, sin reporte de novedades a la fecha.

En la misma respuesta, la SDA indica que respecto a la emisión de dioxinas, furanos y mercurio y, de acuerdo con la normativa vigente en materia de emisiones atmosféricas, los operadores de hornos crematorios **no están en la obligación de monitorear estos parámetros** ya que no están contemplados para este tipo de proceso de disposición final de cadáveres y restos humanos; no obstante la Organización Mundial de la Salud enfatiza que si bien las dioxinas son fundamentalmente subproductos de procesos industriales, también pueden producirse en procesos naturales como las erupciones volcánicas y los incendios forestales, así como comprobadamente son derivados del proceso de cremación de restos humanos.

Así las cosas, urge a esta Corporación, tomar medidas para proteger el ambiente y fundamentalmente la salud de los ciudadanos que se ven afectados diariamente por la actividad de la cremación.

Adicionalmente, pese a que durante el año 2021 presenté a través del debate adelantado a la proposición 667 de 2021, la grave situación de las personas que habitan los sectores aledaños a los hornos y se dejó plasmada la necesidad de incorporar la discusión en el marco del proyecto de revisión del POT, puede verse que ni en el documento de diagnóstico ni en los documentos técnicos de soporte se refleja esta problemática ni mucho menos se avanza en una reglamentación sobre

este tema, de acuerdo con la información que reposa en el portal web de la Secretaría Distrital de Planeación.

Ahora, de conformidad con la Resolución No. 5194 de 2010 del Ministerio de la Protección Social, *“por el cual se reglamenta la prestación de los servicios de cementerios, inhumación, exhumación y cremación de cadáveres”*, artículo 35 numerales 4 y 6, dentro de los requisitos básicos para que los hornos crematorios y/o cementerios empiecen su funcionamiento, deben contar previamente con la licencia de construcción emitida por la Curaduría Urbana, que a su vez debe tener en cuenta las disposiciones establecidas en la Ley 9 de 1979 y verificar que se cuente con los permisos ambientales correspondientes. En materia de ubicación, la misma disposición normativa resalta la exigencia de que dichos establecimientos deben ***“Ubicarse en los sitios destinados por el Plan de Ordenamiento Territorial, Esquema de Ordenamiento Territorial y Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT, del municipio o distrito, en todo caso alejados de industrias o actividades comerciales que produzcan olores desagradables o cualquier otro tipo de contaminación, aislados de focos de insalubridad y separados de viviendas, conjuntos residenciales, lugares de recreación, botaderos a cielo abierto, rellenos sanitarios, plantas de beneficio, plazas de mercado y colegios.*”**

Así, es importante señalar que en Bogotá funcionan trece (13) hornos crematorios ubicados en su mayoría en zonas residenciales; por ello es importante considerar que hubo un aumento en la demanda de este servicio y cambios en las condiciones de los cuerpos a cremar como parte de las medidas de control de propagación del virus COVID 19. El incremento en el recibo de cuerpos para disposición superó los 11500 que fueron tratados por el Concesionario Inversiones Monte Sacro Ltda. No obstante, a hoy se encuentra en mayor riesgo la operación e instalación de los mismos, teniendo en cuenta las recientes denuncias que hemos presentado sobre la corrupción en este servicio público.

Las cifras presentadas, implican que la población vecina de los hornos crematorios ha tenido que sostener y soportar su funcionamiento durante las 24 horas del día, generando afectaciones a la salud de niños y adultos mayores principalmente, quienes presentan cuadros clínicos que afectan la salud y pueden traducirse en problemas respiratorios asociados a la inhalación de los contaminantes que componen los humos de la cremación.

Es necesario señalar que si bien, el Distrito Capital hace seguimiento continuo a las emisiones generadas en el funcionamiento de los hornos crematorios, no ha sido tan claro el rol del control respecto de los efectos secundarios que traen dichas emisiones. De esta manera, no se ha planteado en los 17 años de vigencia del POT del Decreto 190 ni mucho menos en lo contenido en el Decreto 555 de 2021, una alternativa sobre el funcionamiento de estos equipamientos que quedaron absorbidos por las zonas residenciales en concordancia con el principio de precaución. Aún más, teniendo conocimiento de la densificación de algunos sectores de la ciudad como

Fontibón centro, se ha permitido la instalación y funcionamiento de un horno, en contravía de lo establecido en las normas regulatorias en materia de salud.

Esta reflexión, conduce necesariamente a que, en principio, en virtud de la preservación del ambiente y la salud, deban trasladarse los hornos existentes a zonas menos densas, con ocupaciones no residenciales, y lo segundo es que se debe prohibir la instalación de nuevas infraestructuras de esta naturaleza en el corazón de los barrios residenciales o con actividad comercial de Bogotá. Evidentemente, el traslado debe ser progresivo y debe estar en coherencia con las políticas de crecimiento regional que tiene proyectada la ciudad en concordancia con lo dispuesto en el POT vigente como parte del ejercicio de reglamentación y regulación. En este sentido, el ordenamiento de la ciudad, que requiere por supuesto una revisión completa de los planes maestros, debe estar en absoluta armonía con los límites territoriales dispuestos en la Resolución 5194 de 2010, expedida por el Ministerio de la Protección Social, o la norma que se encuentre vigente en esta materia.

Vale la pena indicar que la Personería de Bogotá a través de la Personería Delegada para la Protección del Ambiente y Asuntos Agrarios y Rurales, expresó en su informe sobre la Revisión a la Gestión Pública frente al control de las emisiones atmosféricas a las fuentes fijas de los hornos crematorios en la ciudad, que en relación con este tema, la Secretaría Distrital de Ambiente estaría incumpliendo con lo establecido en el Decreto Distrital 175 de 2009, pues evidenció las emisiones y analizó los efectos adversos para el ambiente de la ciudad.

De acuerdo con ese estudio, los contaminantes más frecuentes emitidos por hornos crematorios (fuentes fijas) son las dioxinas y furanos (compuestos químicos que raramente se dan espontáneamente en la naturaleza, exceptuando las que resultan de incendios de campos, maleza y bosques; ambas clases son compuestos orgánicos tricíclicos, clorosustituidos, y por lo tanto clasificados químicamente como hidrocarburos aromáticos halogenados) y los gases efecto invernadero (CO₂, CH₄, H₂O, NO₂) incluyendo el O₃ el cual puede tener presencia en la tropósfera debido a reacciones químicas en el ambiente por la producción de NO₂ y los cuales no alcanzan a diluirse por completo antes de llegar a la estratósfera.

Advirtió también la Personería de Bogotá, que las consecuencias por la presencia de estos gases retenidos en la troposfera dan lugar a fenómenos meteorológicos que atentan con la salud como es la inversión térmica, la cual se provoca por el calentamiento de la capa de gases retenidos y por efecto de temperatura y por ende cambio de densidad, los gases retenidos bajan y se convierten en el aire que respira la población de la ciudad de Bogotá.

A pesar de que la ciudad tiene unas condiciones topográficas y meteorológicas que contribuyen en la continua renovación del aire ya sea por el lavado con presencia de lluvias o la recirculación de corrientes de aire que chocan en los cerros orientales, no es alentador el reporte de la Organización

Mundial de salud - OMS, en el que afirma que el aire de la ciudad no cumple con las concentraciones permitidas de contaminantes que atentan con la salud del ser humano (PM10 y PM2,5).

Otro aspecto importante, es que, aunque son notorios los esfuerzos adelantados por el distrito, se percibe que están encaminados en la reducción de los contaminantes efecto invernadero más que al material particulado (PM), el cual como ya se ha mencionado, es generador de complicaciones de salud pública, con enfermedades de tipo cardiovascular, accidentes cerebrovasculares, neuropatía obstructiva crónica y cáncer de pulmón.

En el mismo informe la Personería resalta que según la Secretaria Distrital de Ambiente las enfermedades respiratorias son la principal causa de mortalidad infantil en el Distrito, lo cual resulta absolutamente preocupante, respecto de las situaciones descritas.

Lo que se halla curioso es que los estudios ambientales, no se hacen en articulación con los estudios sobre salud pública y, por lo tanto, tal como también lo señaló la personería, no se han formulado acciones sancionatorias ambientales, en tanto los hornos cumplen con la norma de máximos permitidos en emisiones atmosféricas. No obstante, la salud ha sido un criterio menospreciado en este análisis, pues no se tienen estudios claros que demuestren las afectaciones a la salud humana y tampoco se ha tenido en cuenta el principio de precaución que deberían tener las autoridades públicas en el proceso de autorización para el funcionamiento de estas estructuras.

Con lo anterior, es importante tener en cuenta que la operación de los hornos crematorios en horas de baja radiación (noche), conlleva a una baja velocidad del viento, y, por consiguiente, a una deficiente dilución del contaminante emitido a la atmósfera, lo que podría contribuir con el detrimento de la calidad del aire del distrito, por cuanto atenta contra el derecho constitucional a un ambiente sano.

Así las cosas, resulta fundamental señalar que los únicos problemas asociados a las emisiones generadas por los hornos, no son los máximos permitidos ni los olores ofensivos; hace falta un informe integral sobre los efectos adversos sobre las poblaciones aledañas, que más allá de la percepción, valore las condiciones reales de salud de la población en unos radios de afectación definidos en la norma urbana.

De acuerdo con todo lo expuesto y siendo insistentes con la aplicación imperiosa del principio de precaución en la materia de qué trata el presente proyecto de acuerdo, resulta fundamental resaltar que el Convenio sobre la Diversidad Biológica de Río de Janeiro de 1992 incluyó 27 principios generales, advirtiendo que, con el fin de proteger el ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución, conforme a sus capacidades, *“cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la*

degradación del medio ambiente” . Así mismo, este principio fue incorporado al ordenamiento jurídico colombiano a través del numeral 6° del artículo 1° de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, que lo definió: *“las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, **cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente**”*.

En el mismo sentido, en Sentencia C-293 de abril 23 de 2002 la Honorable Corte Constitucional, explicó que la autoridad ambiental es competente para aplicar el principio de precaución, mediante un acto administrativo motivado, en el caso de observarse *“un peligro de daño, que éste sea grave e irreversible, que exista un principio de certeza científica, así no sea esta absoluta, que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la degradación del medio ambiente”*. También, en sentencia T-299 de abril 3 de 2008, M. P. Jaime Córdoba Triviño, la Corte realizó un resumen completo de la jurisprudencia constitucional existente hasta ese momento sobre la relevancia, el alcance y la aplicación en el ordenamiento jurídico interno del mencionado principio, concluyendo:

*“(i) El Estado Colombiano manifestó su interés por aplicar el principio de precaución al suscribir la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; (ii) el principio hace parte del ordenamiento positivo, con rango legal, a partir de la expedición de la Ley 99 de 1993; (iii) esta decisión del legislativo no se opone a la constitución; por el contrario, es consistente con el principio de libre autodeterminación de los pueblos, y con los **deberes del Estado relativos a la protección del medio ambiente**; (iv) el Estado ha suscrito otros instrumentos internacionales, relativos al control de sustancias químicas en los que **se incluye el principio de precaución como una obligación que debe ser cumplida de conformidad con el principio de buena fe del derecho internacional**; (v)... el principio de precaución se encuentra constitucionalizado pues se desprende de la internacionalización de las relaciones ecológicas (art. 266 CP) y de los deberes de protección y prevención contenidos en los artículos 78, 79 y 80 de la Carta.”*

Así pues, el principio de precaución conlleva la adopción de medidas eficaces para precaver la degradación del ambiente y la afectación a la salud a corto, mediano y largo plazo, sin que pueda sacrificarse su aplicación en aras de la inmadurez científica. En este sentido, resulta necesario que el Concejo de Bogotá, como órgano competente para tomar medidas para la protección del ambiente y de la salud de los ciudadanos, adopte medidas urgentes para la prohibición de nuevos hornos crematorios en el interior de la ciudad, y tome medidas urgentes para el traslado progresivo de los ya existentes, hacia sectores no residenciales.

Adicionalmente, es necesario que la Corporación tenga en cuenta que actualmente funcionan en el

perímetro urbano, además de los cementerios operados por la UAESP, los cementerios de los municipios anexados como Bosa, Usme, Engativá, Usaquén y Suba que son susceptibles, de acuerdo con el Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios, que son susceptibles de la instalación de estas estructuras.

III. MARCO JURÍDICO

A. DE ORDEN INTERNACIONAL

- Convenio sobre la Diversidad Biológica de Río de Janeiro de 1992.

B. DE ORDEN CONSTITUCIONAL

- **Artículo 79.** Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
- **Artículo 94:** La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos.
- **Artículo 366.** El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.

C. DE ORDEN LEGAL Y NORMATIVO

- Ley 99 de 1993
- Resolución 619 de 1997 Ministerio del Medio Ambiente– “Por la cual se establecen parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas.”
- Resolución 601 de 2006 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible– “Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia.”
- **Resolución 1447 de 2009 Ministerio de Salud**– “Por la cual se reglamenta la prestación de los servicios de cementerios, inhumación, exhumación y cremación de cadáveres.”

- **Resolución 760 de 2010 Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo territorial**– “Por la cual se adopta el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas.”
- **Resolución 2153 de 2010 Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo territorial** - “Por la cual se ajusta el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, adoptado a través de la Resolución 760 de 2010 y se adoptan otras disposiciones”
- **Resolución 1632 de 2012 Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo territorial** - “por la cual se adiciona el numeral 4.5 al Capítulo 4 del Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, adoptado a través de la Resolución 760 de 2010 y ajustado por la Resolución 2153 de 2010 y se adoptan otras disposiciones”
- **Resolución 5194 de 2010 Ministerio de la Protección Social**– artículos 28, 35 – “Por la cual se reglamenta la prestación de los servicios de cementerios, inhumación, exhumación y cremación de cadáveres.”
- **Resolución 909 de 2008 Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo territorial** – “Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones.”
- **Resolución 2254 de 2017 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible**– “Por medio del cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan otras disposiciones”
- **Resolución 2267 de 2018 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible**– “Por la cual se modifica la Resolución 909 de 2008 y se adoptan otras disposiciones.”

NORMATIVIDAD DISTRITAL

- **Decreto Distrital 367 de 1995** – “por el cual se adopta el reglamento para la concesión de la administración, operación, mantenimiento de los cementerios y horno crematorio de propiedad del Distrito Capital.”
- **Decreto Distrital 201 de 1996** – “por el cual se modifica el Decreto número 367 del 7 de julio de 1995, por el cual se adopta el reglamento para la concesión de la administración, operación y mantenimiento de los cementerios y hornos crematorios de propiedad del Distrito Capital.”
- **Decreto Distrital 313 de 2006** - "Por el cual se adopta el Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios para el Distrito Capital -PMCSF- y se dictan otras disposiciones"
- **Decreto Distrital 521 de 2007**- “Modifica el Artículo 8 del Decreto 313 de 2006 y dicta disposiciones relacionadas con la conformación, estructura y funciones del Comité de

Seguimiento para el Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios para Bogotá Distrito Capital.”

- Decreto Distrital 109 de 2009 – **“Por el cual se establece la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Ambiente, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”**
- Decreto Distrital 175 de 2009 – “Por el cual se modifica el Decreto 109 de Marzo 16 de 2009”
- Decreto Distrital 784 de 2019 – que modifica el Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios para Bogotá Distrito Capital adoptado mediante el Decreto Distrital 313 de 2006, modificado por el Decreto 521 de 20017, y dicta otras disposiciones.
- Decreto 555 de 2021-Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá.

IV. COMPETENCIA DEL CONCEJO

El Decreto Ley 1421 expresa en el artículo 12, numeral 1, lo siguiente:

“Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.
(...)
7. Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente.

V. IMPACTO FISCAL

De conformidad con lo anterior y en cumplimiento del Artículo 7° de la Ley 819 de 2003, aclaramos que la presente iniciativa no genera un impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez que no se incrementará el Presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación, ya que las acciones deben estar enmarcadas en los proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo Distrital.

Cordialmente,

GERMÁN AUGUTO GARCÍA MAYA

Autor - Concejal de Bogotá

PROYECTO DE ACUERDO NO 227 DE 2025**PRIMER DEBATE**

"POR MEDIO DEL CUAL SE PROHÍBE LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE NUEVOS HORNOS CREMATORIOS EN LAS ZONAS DE PROXIMIDAD DEL DISTRITO CAPITAL, SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA EL TRASLADO PROGRESIVO DE LOS EXISTENTES EN ZONAS DE PROXIMIDAD Y OTRAS DISPOSICIONES"

EL CONCEJO DE BOGOTÁ

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 12 numerales 1 y 7.

ACUERDA

ARTÍCULO 1°. El Objeto del presente acuerdo es prohibir la construcción y funcionamiento de nuevos hornos crematorios en las zonas de proximidad del Distrito Capital, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Decreto Distrital 555 de 2021 o las que cumplan calidades semejantes de acuerdo con la normatividad vigente, así como generar lineamientos para el traslado progresivo de los existentes hacia zonas de menor impacto a la salud de los Bogotanos.

La prohibición de construcción y funcionamiento de nuevos hornos crematorios, está en coherencia con la legislación y normatividad vigente en materia de emisiones atmosféricas asociadas a la cremación de cuerpos y restos humanos en el territorio nacional, especialmente a las distancias que se deben guardar entre este tipo de equipamientos y las viviendas y áreas comerciales. De esta manera, el presente acuerdo contribuye a la regulación de los elementos reglamentados por el Ministerio de Salud y se encuentra en concordancia con la normativa internacional sobre la protección del medio ambiente y la salud, basados fundamentalmente en el principio de precaución.

ARTÍCULO 2°. El Distrito Capital a través de las entidades competentes deberá definir la ruta metodológica y el cronograma de traslado progresivo de los Hornos que actualmente operan en las áreas de proximidad establecidas en el Decreto 555 de 2021 para que, en un término no mayor a 15 años, dejen de operar estas estructuras que afectan la salud de los Bogotanos.

Para el cumplimiento de tal objetivo, se deberán tener en cuenta los siguientes lineamientos:

- a. Tener como principio fundamental el principio de precaución, en consideración a que la cremación es una actividad potencialmente peligrosa por causa de las emisiones generadas, en las inmediaciones de áreas residenciales.
- b. Establecer límites de distancia donde deben ubicarse los hornos crematorios respecto zonas de proximidad.
- c. Definir áreas para la ubicación de estos equipamientos, fijando la normatividad urbana y urbanística que permita mantener el control sobre las áreas perimetrales, evitando la consolidación de nuevos barrios que terminen absorbiendo las zonas de hornos crematorios.
- d. Definir áreas equidistantes para la instalación de nuevos hornos, de acuerdo con las necesidades generadas en todo el perímetro urbano de la ciudad.
- e. Proteger la salud de los habitantes de Bogotá como derecho fundamental.
- f. Formular estudios que permitan identificar el aumento o disminución de riesgos a la salud, derivados de la actividad de la cremación.
- g. Tener en cuenta los horarios y las condiciones climáticas para definir el funcionamiento de los hornos, considerando los estudios que permiten inferir menores afectaciones.
- h. Definir escalas de trabajo interinstitucional que permitan identificar las principales problemáticas asociadas al funcionamiento de hornos crematorios en el Distrito Capital, tales como estudios científicos liderados por la Secretaría Distrital de Salud, Secretaria Distrital de Ambiente y Secretaría del Hábitat para establecer la conveniencia de su funcionamiento en las áreas urbanas del Distrito Capital.
- i. Mantener coordinación permanente entre los sectores administrativos para buscar soluciones conjuntas a la crisis que se viene presentando en Distrito por el funcionamiento de los hornos crematorios en zonas urbanas.
- j. La ubicación de nuevos hornos crematorios deberá tener en cuenta las recomendaciones que para su funcionamiento establezca el Ministerio de Salud o quien haga sus veces, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame) u otros órganos asesores en salud, las Facultades de Medicina de las diferentes universidades de Bogotá, para que informen: i) qué incidencia y síntomas genera en la salud de una persona, en especial los menores de edad y adultos mayores, el polvillo o material particulado disperso en el aire, producido por el uso de los hornos crematorios las 24 horas del día o en los horarios programados para la operación; si existe presencia de **dioxinas, furanos y mercurio** y si generan afectación a la salud y cuáles son las consecuencias para la salud a largo, mediano y corto plazo de los habitantes del entorno de los hornos crematorios; y ii) si esta situación podría generar, de inmediato o a mediano o a largo plazo riesgos para la vida humana y su calidad, particularmente de las personas que residen en el contorno urbano.
- k. EL traslado de los hornos deberá contemplar escenarios de participación ciudadana en los sectores donde serán reubicados.
- l. El traslado deberá programarse en los próximos diez años y generar planes de reinstalación durante los próximos 15 años, teniendo como fecha máxima para el traslado total el 30 de junio de 2038.

ARTÍCULO 3°. La Secretaría Distrital Ambiente, Secretaria de Salud, UAESP, Secretaria de Planeación, Secretaria de Hábitat, o quienes hagan sus veces en la estructura administrativa del Distrito Capital, deberán garantizar desde su misionalidad el control, y seguimiento a los hornos crematorios que funcionan en las zonas de proximidad o con predominancia residencial, así como garantizar la formulación de los planes de traslado progresivo de los que ya están funcionando, procurando por el bienestar de las comunidades.

PARÁGRAFO PRIMERO. La Secretaría Distrital de Salud o quien haga sus veces, tendrá la responsabilidad específica de hacer estudios de carácter científico que permitan controlar los posibles impactos sobre la salud humana, derivados de la actividad de la cremación. Los estudios realizados, deberán generar un canal de alertas tempranas que activarán la actividad conjunta de las Secretarías de Ambiente y Hábitat o quien haga sus veces.

ARTÍCULO 5°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

PROYECTO DE ACUERDO NO 228 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA EL SANEAMIENTO DE OBLIGACIONES POR PAGAR EN LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL DEL DISTRITO CAPITAL Y EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ”****EXPOSICIÓN DE MOTIVOS****I. OBJETO DEL PROYECTO**

El presente Proyecto de Acuerdo tiene como objeto requerir a la Administración Distrital para que tome medidas que tiendan a generar el saneamiento de las obligaciones por pagar en los Fondos de Desarrollo Local del Distrito Capital y el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, promoviendo que se realice un estudio que analice las herramientas idóneas para lograr el mencionado saneamiento y se verifique la necesidad de la creación de comités asesores para cada uno de los Fondos de Desarrollo Local y el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, cuya finalidad sea generar recomendaciones, lineamientos y estrategias para que los Fondos tengan una salud financiera permanente conservando una cultura de pago oportuno, que incentive la participación de una mayor pluralidad de oferentes en los procesos de contratación pública con estas Entidades.

II. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA**Causas y consecuencias de la acumulación de obligaciones por pagar**

El atraso en los pagos que las entidades estatales deben hacer a sus proveedores y la acumulación de estas obligaciones pueden generar una serie de efectos negativos en la economía (Diamond y Schiller, 1993), por lo que para el Fondo Monetario Internacional -en adelante FMI-, las medidas de los gobiernos nacionales y subnacionales en materia de pago de estas obligaciones, se ha constituido en una prioridad (FMI, 2014).

Como lo plantea este organismo financiero internacional (Ibid, op. Cit), dentro de las principales consecuencias de esta práctica se encuentran las siguientes:

- **Caída del crecimiento económico:** a medida que se acumulan obligaciones por pagar, ya sea por parte de gobiernos nacionales o de otras entidades estatales subnacionales que tienen un peso fiscal relativo importante dentro de la estructura de ingresos y gastos públicos, se pueden configurar disminuciones importantes en materia de liquidez que terminan por reducir el flujo de recursos en las economías nacionales.
- **Encarecimiento del suministro de bienes y servicios:** si los atrasos en los pagos se constituyen en una práctica recurrente por parte de las entidades públicas que contratan con

privados, se puede generar un incentivo perverso que impulse a los proveedores a incrementar los precios. Esto con el fin de contrarrestar los faltantes de liquidez o posibles gastos extra, de orden jurídico, que se requieran para lograr el pago de las obligaciones por parte de las entidades públicas.

- **Disminución o interrupción de la prestación de servicios públicos:** el atraso en los pagos por parte de las entidades públicas a sus proveedores puede generar que la provisión de productos o servicios contratados sufra de alteraciones en materia de los cronogramas de entrega o hasta la misma suspensión de esta, ya que la falta de pago puede limitar, estructuralmente, la capacidad operativa de los proveedores. Derivado de esto, se puede poner en riesgo la entrega de bienes y servicios públicos esenciales, como los que pertenecen al sector de salud, ya sea nivel de suministros o de la operación misma de los profesionales del sector.
- **Mayor captación de rentas:** la generación de incumplimientos en los pagos, sobre todo cuando esto implica realizar trámites administrativos para contar con los recursos necesarios para ello en vigencias posteriores a las establecidas para realizar estas operaciones, puede generar prácticas que van en contra de las normas de gestión fiscal. Es decir, se puede abrir la puerta a colusiones entre proveedores y servidores públicos.
- **Alza en las tasas de interés:** los incumplimientos en los pagos de las entidades estatales a sus proveedores pueden derivar en la búsqueda de créditos, por parte de estos últimos, para enfrentar el impacto de la falta de liquidez. Esta situación puede generar que la demanda de dinero se aumente y, por ende, que el precio de este, expresado en incrementos de las tasas de interés cobradas por los bancos, crezca y termine por producir presiones inflacionarias.
- **Pérdida de confianza en la política fiscal:** la acumulación de obligaciones por pagar puede distorsionar de manera importante la información fiscal y financiera de las entidades públicas, ya que ocultaría la verdadera capacidad de gasto de las entidades al no contabilizarse de manera correcta el monto de las obligaciones que se dejaron de pagar y que deben ser cubiertas, sobre todo, en vigencias posteriores a las que les correspondían, según los cronogramas de pagos.
- **Costos fiscales de segundo orden:** el atraso en los pagos puede generar otro efecto perverso y es que los proveedores decidan contrarrestar parte del impacto financiero derivado de la reducción de ingresos por estos atrasos e incumplimientos, mediante una reducción en el pago de impuestos, lo que aumenta el efecto negativo, ya no sólo a nivel de los egresos, sino de los ingresos en la estructura fiscal de los estados.

Los anteriores elementos de análisis, aportados por el FMI (2014), nos permiten entender que el atraso en los pagos y la acumulación, vigencia a vigencia, de obligaciones por pagar (en adelante OPP), pueden constituirse en variables que afecten de manera muy negativa la salud fiscal del Distrito y de la economía de la Ciudad, por lo que avanzar en medidas que permitan la reducción

de la acumulación de estas OPP, se constituyen en acciones que pueden mejorar el estado de las finanzas públicas del Distrito y, al mismo tiempo, en variables que pueden impactar, positivamente, los niveles de liquidez en la economía de Bogotá.

Además, contar, entre otras, con estrategias y cronogramas técnicos de pago de OPP, puede disminuir el riesgo de colisión entre proveedores y servidores públicos, si estas medidas van acompañadas de los niveles de publicidad necesarios y el acompañamiento de corporaciones como el Concejo de Bogotá y entidades como los organismos de control que velan por el uso adecuado de los recursos públicos como la Contraloría General de la Nación, la Contraloría Distrital y la Veeduría Distrital.

Ahora bien, en relación con las causas que generan retrasos en los pagos y acumulación de OPP, el FMI (2014) advierte que factores como el mal diseño de los presupuestos de inversión genera incongruencias entre los gastos que se proponen ejecutar y la realidad de los ingresos de las entidades públicas.

Cuando esto sucede, se genera un desbalance que puede producir situaciones deficitarias si no se toman los correctivos necesarios para que los gastos sean iguales o menores a los ingresos.

Por otro lado, la ausencia de control de los compromisos se constituye, para el Fondo Monetario Internacional, en una de las causas que derivan en acumulación de OPP. Ello, debido a que, si no se realiza una verificación adecuada de las programaciones de pagos, entrada de los ingresos a caja y pago efectivo de las obligaciones, se entorpecen las verificaciones y certificaciones que se requieren para los pagos.

Debido a las dificultades propias de orden administrativos, cuando las OPP no se pagan a tiempo, se requerirán mayores tiempos y reprocesos para programar en el futuro los pagos. Esta situación termina, muchas veces, por generar la acumulación de las OPP aún más allá de la vigencia para la que estaban programados los pagos.

Además de lo anterior, para el FMI (2014), el atraso en los procesamientos de los pagos y el cumplimiento de los tiempos límites para ello se constituye en un factor que genera mayores acumulaciones de OPP. En parte, esto se puede deber a la falta de los equipos humanos necesarios para tramitar volúmenes de pagos que pueden ser bastante altos.

Esto va en contra de la celeridad de los procesos, pero, ello sumado a las inflexiones de los procesos de pago con cargo a los presupuestos en Colombia, agrava el problema y se generan condiciones que terminan por incrementar el riesgo de que una cuenta no pagada a tiempo se constituya en una OPP que debe ser cubierta en una vigencia posterior a la que debería cubrir, originalmente, el pago.

La morosidad deliberada, sumadas a las anteriores causas, se constituye en una de las principales causas del atraso y la acumulación de OPP. Según Irwin (2012), en algunos Estados se puede presentar el hecho de que las administraciones salientes, con la intención de mostrar niveles de saldo altos en efectivo, reduzcan los pagos en la última vigencia que les corresponde y trasladen, deliberadamente, las cuentas por pagar que les correspondían a las administraciones siguientes.

Esta causa puede ser particularmente dañina para las finanzas públicas de las entidades, pues si los ingresos futuros de las administraciones entrantes se ven afectados por elementos como un menor recaudo o un incremento súbito en los costos de prestación de bienes y servicios públicos, se pueden presentar graves problemas de liquidez y de capacidad real de pago por parte de las entidades públicas. Ello, sin duda, aumentaría aún más la generación de retrasos y traslado de OPP a vigencias posteriores, lo que sigue aumentando el problema.

Ahora bien, al pasar al análisis de las alternativas de mitigación y solución que desde el FMI se establecen para enfrentar el impacto fiscal de la acumulación de cuentas por cobrar, encontramos una serie de alternativas que los gobiernos pueden poner en marcha.

Inicialmente, para este organismo multilateral, el reforzamiento del marco legal y regulatorio aparece como uno de los elementos fundamentales. A partir de este fortalecimiento es posible establecer procedimientos de gestión correspondientes, específicamente, orientados a tramitar y saldar obligaciones por pagar que se hayan acumulado y correspondientes a vigencias anteriores (FMI, 2014).

Además de lo anterior, es vital mejorar el nivel de realismo del presupuesto, lo cual implica, entre otras, que los pagos derivados por las OPP acumuladas de vigencias anteriores, sí sean tenidos en cuenta dentro de los procesos de construcción de los presupuestos anuales (FMI, 2014).

Por otro lado, resulta vital mejorar los procesos de contabilización y reporte de información presupuestal (FMI, 2014). Esto es fundamental para que los procesos de planeación, ejecución y control de los presupuestos sean objetivos y, además, para que las acciones de control social sobre la actividad presupuestal puedan realizarse de mejor manera. Así, los niveles de confianza, por parte de la ciudadanía en las labores presupuestales, puede incrementarse y, por ende, los grados de gobernabilidad.

Como ejemplo en materia de medidas para evitar la acumulación de cuentas por pagar, el Gobierno de Portugal puso en marcha una serie de acciones tendientes a regularizar las cuentas por pagar que se habían acumulado en años anteriores. Estas medidas las resumió el Fondo Monetario Internacional de la siguiente manera (FMI, 2014):

“Marco jurídico y censo de atrasos. El gobierno sancionó legislación que: 1) especificaba que los pagos están en atraso cuando han transcurrido más de 90 días desde el vencimiento; 2) exigía la preparación de un informe anual con las facturas impagadas y clasificaba los atrasos de acuerdo con su tipología, y 3) establecía reglas generales y específicas para la definición de los atrasos y el proceso de regularización.

Declaración de atrasos. En junio de 2011 se inició un censo mensual que cubre todas las entidades del gobierno general. Los tres ámbitos que concentran más del 96% del total de atrasos son el sector de la salud, las administraciones locales y la administración regional de Madeira.

Transparencia. Considerada como un elemento fundamental de la estrategia, toda la información sobre los atrasos se publicó en la página web del ministerio de Hacienda y se actualiza todos los meses.

Control de compromisos. Antes de la regularización de los atrasos, el gobierno aprobó una ley que permitía nuevos compromisos únicamente si los recursos financieros apropiados se encontraban disponibles e introducidos en un sistema auxiliar. Para poner en práctica esta regla, por cada nuevo contrato con proveedores se asigna un número de compromiso que vincula un recurso presupuestario y financiero a ese gasto.

Estrategia de regularización. Cuatro reglas generales fijaron las prioridades de la regularización de atrasos: 1) la antigüedad de los pagos atrasados (las más antiguas se pagaron primero); 2) la acumulación de costos adicionales vinculados a los intereses por atrasos (se dio prioridad a los más costosos); 3) el riesgo de litigios judiciales que podrían tener un impacto financiero adicional, y 4) el impacto socioeconómico vinculado a los atrasos en el pago, como el riesgo de quiebra de los proveedores. Siguiendo estas reglas, cada entidad tuvo que preparar un plan de regularización de pagos que definía cómo y cuándo se remediaría el atraso.”

Como se puede ver, entonces, el problema de la acumulación de OPP se puede constituir en un factor que impacte de manera negativa la gestión presupuestal de las entidades públicas, la capacidad de provisión de bienes y servicios públicos por parte de estas e, incluso, esta acumulación puede generar efectos negativos en las economías nacionales. Por ello, resulta vital que, en materia de los Fondos de Desarrollo Local, se cuente, entre otras, con herramientas normativas que permitan gestionar de manera adecuada las OPP y tener presupuestos más reales que respondan a las necesidades de las localidades presentes en Bogotá.

Una aproximación a las OPP de los Fondos de Desarrollo Local en Bogotá

Los Fondos de Desarrollo Local (en adelante FDL) son una de las principales instancias para la provisión de bienes y servicios públicos en el Distrito y en su existencia se justifica, en gran parte, en que estos fondos tienen la capacidad de ejecutar inversiones públicas que van directamente enfocadas en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que habitan las 20 localidades de Bogotá.

Ahora bien, en los últimos años se ha venido presentando un fenómeno derivado de su gestión presupuestal y es que se han generado acumulaciones de OPP que afectan el normal desarrollo de la gestión presupuestal que estos deben desarrollar. En este sentido, a partir de datos consolidados por la Veeduría Distrital (2023), a continuación, se presentan algunos elementos de análisis que permiten tener una aproximación general al problema de la acumulación de OPP en los FDL de Bogotá.

Inicialmente, este ente de control distrital evidenció que, al 30 de septiembre de 2023, las obligaciones por pagar (OPP) por funcionamiento e inversión por parte de las localidades de Bogotá

eran de \$832.278 millones. Adicionalmente, se han generado compromisos totales por un valor de \$821.814 millones lo que equivale al 98.9% de los OPP. Sin embargo, de estos compromisos, solo se giraron, con corte al 30 de septiembre de 2023, \$449.175 millones, **correspondiente solo al 54% del total comprometido.**

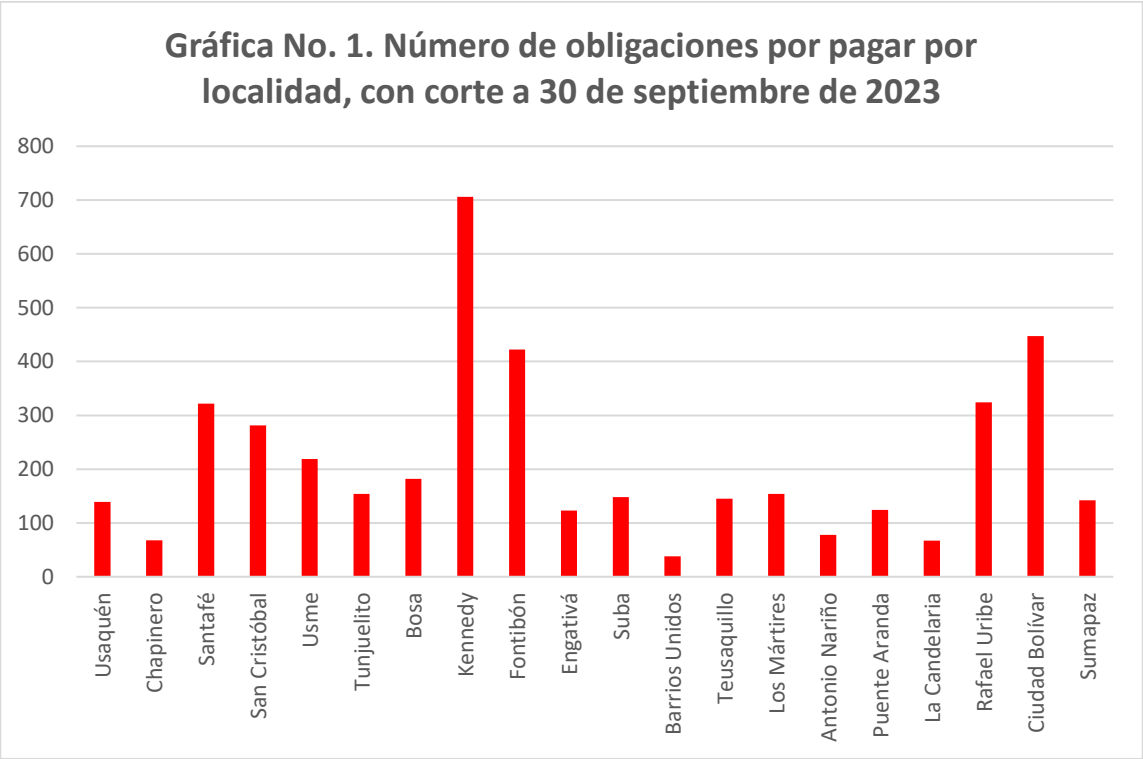
**Tabla 1. Valor de las Obligaciones por pagar con corte a 30 de septiembre de 2023
(Cifras en millones de pesos)**

Nº	Localidad	Obligaciones por pagar	Compromisos	Porcentaje Comp.	Giros	Porcentaje de Giros
1	Usaquén	10,544	10,447	99.1%	7,925	75.2%
2	Chapinero	19,85	19,651	99.0%	7,811	39.4%
3	Santafé	25,639	25,513	99.5%	10,411	40.6%
4	San Cristóbal	50,078	49,37	98.6%	29,892	59.7%
5	Usme	75,565	75,163	99.5%	31,245	41.3%
6	Tunjuelito	26,308	25,908	98.5%	12,369	47.0%
7	Bosa	62,762	61,527	98.0%	31,481	50.2%
8	Kennedy	91,008	89,079	97.9%	54,596	60.0%
9	Fontibón	53,36	53,217	99.7%	28,068	52.6%
10	Engativá	46,233	45,696	98.8%	31,797	68.8%
11	Suba	71,113	69,438	97.6%	47,25	66.4%
12	Barrios Unidos	13,131	13,021	99.2%	9,75	74.3%
13	Teusaquillo	17,459	17,303	99.1%	6,618	37.9%
14	Los Mártires	21,365	21,113	98.8%	4,394	20.6%
15	Antonio Nariño	15,087	14,928	98.9%	6,84	45.3%
16	Puente Aranda	23,155	23,082	99.7%	10,61	45.8%
17	La Candelaria	7,302	7,259	99.4%	3,684	50.5%
18	Rafael Uribe	54,135	53,555	98.9%	31,925	59.0%

19	Ciudad Bolívar	113,222	112,683	99.5%	65,921	58.2%
20	Sumapaz	33,963	33,86	99.7%	16,588	48.8%
-	Total	831,278	821,814	98.9%	449,175	54.0%

Fuente: Veeduría Distrital, 2023.

Además de lo anterior, si nos aproximamos a la cantidad de OPP con corte a 30 de septiembre de 2023, se puede observar -Gráfica No. 1-, que el número de obligaciones por pagar varía según la localidad. Casos como Kennedy, Ciudad Bolívar y Fontibón muestran grandes números de obligaciones; luego le siguen localidades como Santa Fe, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe (Veeduría Distrital, 2023).



Fuente: Veeduría Distrital, 2023

Ahora bien, al dar cuenta, lo calidad por localidad, de los giros de las OPP con corte a septiembre de 2023, podemos ver la siguiente clasificación:

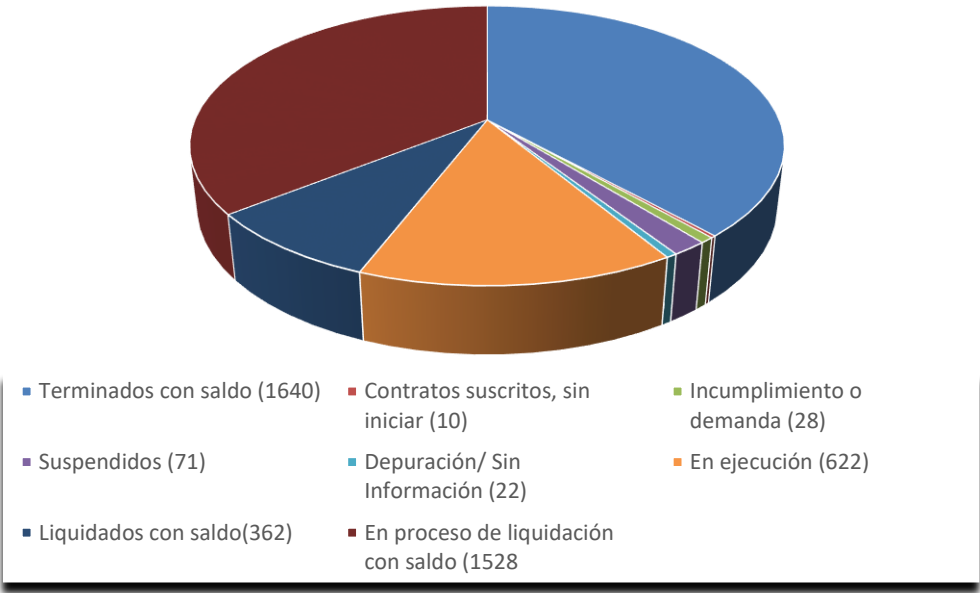
Tabla 2. Ranking de giros de las Obligaciones por pagar con corte a 30 de septiembre de 2023

No.	Localidad	Apropiación Disponible	Giros	% Giros	\$ por Girar	% por Girar
14	Los Mártires	21,365	4,394	21%	16,971	79%
13	Teusaquillo	17,459	6,618	38%	10,84	62%
2	Chapinero	19,85	7,811	39%	12,039	61%
3	Santafé	25,639	10,411	41%	15,228	59%
5	Usme	75,565	31,245	41%	44,32	59%
15	Antonio Nariño	15,087	6,84	45%	8,248	55%
16	Puente Aranda	23,155	10,61	46%	12,545	54%
6	Tunjuelito	26,308	12,369	47%	13,939	53%
20	Sumapaz	33,963	16,588	49%	17,375	51%
7	Bosa	62,762	31,481	50%	31,281	50%
17	La Candelaria	7,302	3,684	50%	3,618	50%
9	Fontibón	53,36	28,068	53%	25,292	47%
19	Ciudad Bolívar	113,222	65,921	58%	47,302	42%
18	Rafael Uribe	54,135	31,925	59%	22,209	41%
4	San Cristóbal	50,078	29,892	60%	20,187	40%
8	Kennedy	91,008	54,596	60%	36,411	40%
11	Suba	71,113	47,25	66%	23,863	34%
10	Engativá	46,233	31,797	69%	14,436	31%
12	Barrios Unidos	13,131	9,75	74%	3,38	26%
1	Usaquén	10,544	7,925	75%	2,619	25%
Documento	Total	831,278	449,175	54%	382,103	46%

Fuente: Veeduría Distrital, 2023

Así las cosas, hasta el mes de septiembre del 2023, las obligaciones por girar tenían un valor de \$382.103 millones para un total del 64% de la apropiación disponible. Además, a continuación, se puede observar el estado, a 30 de septiembre de 2023, de la cantidad de OPP según su estado.

Gráfico No. 2. Número de obligaciones por pagar de acuerdo con su estado, con corte a 30 de septiembre de 2023



Fuente: Veeduría Distrital, 2023.

Sumado a lo anterior, a continuación, se puede ver cómo, a corte del 30 de septiembre de 2023, se encontraban los saldos por girar de la OPP por cada una de las localidades.

Tabla 3. Distribución de los saldos por girar de las OPP por localidad, con corte a 30 de septiembre de 2023 (Cifras en millones de pesos)

No.	Localidad	No. OPP	Valor	Participación
19	Ciudad Bolívar	447	46.763	12,40%
5	Usme	219	43.919	11,70%

8	Kennedy	706	34.483	9,20%
7	Bosa	182	30.046	8,00%
9	Fontibón	422	25.410	6,70%
18	Rafael Uribe	324	25.240	6,70%
11	Suba	148	22.173	5,90%
4	San Cristóbal	281	19.550	5,20%
20	Sumapaz	142	17.262	4,60%
14	Los Mártires	154	16.720	4,40%
3	Santafé	322	15.110	4,00%
10	Engativá	123	13.899	3,70%
6	Tunjuelito	154	13.540	3,60%
16	Punta Aranda	124	12.472	3,30%
2	Chapinero	68	11.840	3,10%
13	Teusaquillo	145	10.666	2,80%
15	Antonio Nariño	78	8.132	2,20%
17	La Candelaria	67	3.601	1,00%
12	Barrios Unidos	38	3.271	0,90%
1	Usaquén	139	2.523	0,70%
Documento	Total	4.283	376.616	100,00%

Fuente: Veeduría Distrital, 2023.

De los datos anteriores se puede observar que, con corte al 30 de septiembre de 2023, la localidad de Ciudad Bolívar es la que cuenta con mayor representación (12,4%) con un total de 447 OPP con un valor de 46.763 millones de pesos hasta septiembre del 2023. Seguido de Usme (11,70%) con 219 OPP con un total de 43.919 millones de pesos y Kennedy (9,20%) con 706 OPP con un valor de 34.483 millones de pesos.

Usaquén es la localidad con menor representación (0,70%) con un total de 139 OPP de un valor de 2.523 millones de pesos. Seguida de Barrios Unidos (0,09%) con 38 OPP de un valor de 3.271 millones de pesos y La Candelaria (1,00%) con un total de 67 OPP con un total de 3.601 millones de pesos.

En síntesis, en materia de las OPP de los FDL, se evidencia una problemática que debe ser corregida por parte de estos con el acompañamiento de las entidades distritales pertinentes, ya que la acumulación progresiva de estas obligaciones puede generar un impacto fiscal negativo en las finanzas de estos fondos, afectando la capacidad de gestión y de provisión de bienes y servicios públicos por parte de las Alcaldías Locales. De no tomarse los correctivos necesarios, la acumulación de OPP también puede terminar en la generación de mayores costos para las finanzas del Distrito, ya que se pueden generar demandas, mayores costos y el correspondiente incremento del valor de estas obligaciones debido a cambios generados por factores como la inflación.

En este mismo sentido, contar con finanzas en los FDL donde la acumulación de OPP no se constituya en un limitante a la capacidad de gestión y prestación de bienes y servicios públicos, por parte de estos fondos, es un factor que incide, directamente, en la capacidad de ejecución de herramientas de orden programático centrales para la ciudad como los Planes Distritales de Desarrollo y lo Planes de Ordenamiento Territorial.

Ello, ya que a mayor acumulación de OPP en los FDL, mayores recursos necesarios para sanear esas obligaciones en el futuro y, por lo tanto, serían menores los recursos del Distrito para poder implementar los programas y proyectos que se incluyan dentro de los Planes Distritales de Desarrollo. Ahora bien, algo similar sucede con la posibilidad de ejecución del POT, pues las intervenciones sobre el suelo que requiere Bogotá para la implementación de esta herramienta de planeación territorial requieren de los recursos necesarios para que se den de manera adecuada, y la carga fiscal de las OPP termina por constituirse en un peso extra que limitaría la correcta ejecución de las acciones incluidas en el POT.

De manera más específica, el saneamiento de las OPP acumuladas por los FDL, mediante mecanismos como los que se proponen en este proyecto de acuerdo, guarda armonía con lo propuesto en el Plan Distrital de Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI 2020-2024”, en su Propósito 5 “Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente” y frente al logro de ciudad 30 (Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local), contenido dentro de este Propósito. En tanto unas finanzas locales con menores cargos generados por las OPP, estarán en mejores condiciones de ejecución.

Por otro lado, en relación con los ODS formulados desde Naciones Unidas y, de manera específica, frente al objetivo número 11 *Paz, Ciudades y Comunidades Sostenibles*, este proyecto de acuerdo, al propender por la consolidación de la estructura fiscal de los FDL y su capacidad de ejecución, por medio de la reducción de las cargas relativas a la acumulación de OPP, apunta a que Bogotá, desde sus principales entidades de orden local, cuente con mayor capacidad de reducir los niveles de desigualdad en cada una de las 20 localidades del Distrito en condiciones de sostenibilidad fiscal, la cual es fundamental para el avance de Bogotá como una ciudad sostenible en un sentido integral. En este sentido, a mayor sostenibilidad de los presupuestos de las alcaldías locales, mayor capacidad de inversión de los FDL en las localidades, lo cual redundará en un mejoramiento de la provisión de bienes y servicios en las comunidades. Esto, a su vez, puede generar un aumento en los niveles de calidad de vida de las personas y, por tanto, una reducción de actividades económicas ilegales que puedan ir en contra de la sostenibilidad social, económica y ambiental de la ciudad.

Finalmente, es importante destacar que si se logra con este Proyecto de Acuerdo que los Fondos de Desarrollo Local y el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz conserven unas finanzas organizadas y tengan una cultura de pago oportuno, se aportará a lograr de manera eficiente desarrollar las políticas incluidas en el Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”, así:

Artículo 61. Protección animal en los fondos de desarrollo local. Los Fondos de Desarrollo Local realizarán inversiones complementarias para la protección animal. La inversión estará dirigida a los animales vulnerables y se materializará en los servicios de brigadas médicas, urgencias veterinarias, esterilización canina y felina y apoyo a las autoridades de policía en

casos de maltrato animal. El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal trabajará articuladamente con las localidades para coordinar la intervención territorial, identificar puntos críticos y brindar lineamientos técnicos que propendan por la calidad de los servicios ofrecidos.

Artículo 92. Inversión en Desarrollo Económico a través de Fondos de Desarrollo Local en Bogotá. Los Fondos de Desarrollo Local en Bogotá, en coordinación con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico podrán destinar recursos orientados a iniciativas que promuevan el desarrollo económico del tejido productivo local de la ciudad. Lo anterior, basados en la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos propuestos, y fomentando la participación ciudadana en la identificación de necesidades económicas locales.

Artículo 259. Inversiones en estrategias de salud mental a través de los Fondos de Desarrollo Local. Los Fondos de Desarrollo Local, de acuerdo con las disposiciones establecidas para el componente de salud mental en el Plan Territorial de Salud 2024-2027, podrá realizar inversiones complementarias en materia de promoción y fortalecimiento de la salud mental en los entornos familiar y comunitario en el ámbito de su jurisdicción. Se priorizarán aquellas inversiones locales que apalanquen el desarrollo de estrategias relacionadas con la prevención de la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil, la promoción del autocuidado y el empoderamiento de los ciudadanos a través de herramientas de apoyo emocional y acompañamiento a personas que enfrentan escenarios de crisis.

III. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.

Artículo 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos:

1. Gobernarse por autoridades propias.
2. Ejercer las competencias que les correspondan.
3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
4. Participar en las rentas nacionales.

Artículo 322. Bogotá Capital de la república y del departamento de Cundinamarca, se organiza como distrito capital, y su régimen político, fiscal y administrativo, será el que determinen la constitución y las leyes especiales que para el mismo se dicten y las disposiciones vigentes para los municipios. Con base en las normas generales que establezca la Ley, el concejo a iniciativa del alcalde dividirá el territorio distrital en localidades, de acuerdo con las características sociales de sus habitantes, y hará el correspondiente reparto de competencias y funciones administrativas. A las autoridades distritales corresponderá garantizar el desarrollo armónico e integrado de la ciudad y la eficiente prestación de los servicios a cargo del distrito; a las locales, la gestión de los asuntos de su territorio.

DECRETO LEY 1421 DE 1993:

Artículo 60. objetivos y propósitos. La división territorial del Distrito Capital en localidades deberá garantizar:

(...)

3. Que a las localidades se pueda asignar el ejercicio de algunas funciones, la construcción de las obras y la prestación de los servicios cuando con ello se contribuya a la mejor prestación de dichos servicios, se promueva, su mejoramiento y progreso económico y social.

(...)

5. El adecuado desarrollo de las actividades económicas y sociales que se cumplan en cada una de ellas.

Artículo 86. Atribuciones. <Artículo modificado por el artículo [11](#) de la Ley 2116 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Corresponde a los alcaldes locales:

(...)

2. Administrar las alcaldías locales y los fondos de desarrollo local.

ACUERDO DISTRITAL 740 DE 2019, Por el cual se dictan normas en relación con la organización y el funcionamiento de las localidades de Bogotá, D.C.:

Artículo 1.- Las Localidades en las que se organiza el territorio del Distrito Capital, como Sector de la Estructura Administrativa, son divisiones de carácter territorial, cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectiva jurisdicción.

(...)

Artículo 5.- Competencias de los alcaldes locales. En consonancia con los principios de concurrencia, subsidiariedad, complementariedad y coordinación los Alcaldes Locales tienen las siguientes competencias que se desarrollarán en el ámbito local:

1. Administrar las alcaldías locales y los Fondos de Desarrollo Local.

(...)

artículo 8.- Naturaleza. En cada una de las localidades habrá un Fondo de Desarrollo Local con personería jurídica y patrimonio propio. Con cargo a los recursos del Fondo se financiarán las inversiones priorizadas en el Plan de Desarrollo Local, en concordancia con el Plan Distrital de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial. La denominación de los Fondos se acompañará del nombre de la respectiva localidad.

Parágrafo. En el caso del Fondo de Desarrollo de la Localidad de Sumapaz, se denominará Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz.

(...)

Artículo 11.- Representación legal y reglamento. El Alcalde Mayor de Bogotá D.C., será el representante legal de los Fondos de Desarrollo Local y ordenador del gasto, podrá delegar respecto de cada Fondo la totalidad o parte de dichas funciones, de conformidad con el artículo [40](#) del Decreto Ley 1421 de 1993. El Alcalde Mayor expedirá el reglamento de los Fondos de Desarrollo Local.

La vigilancia de la gestión fiscal de los Fondos de Desarrollo Local corresponde a la Contraloría Distrital.

(...)

Artículo 14.- Vigilancia y Control de las Juntas Administradoras Locales. Las Juntas Administradoras Locales realizarán la vigilancia y control sobre la inversión y ejecución de los recursos asignados al respectivo Fondo de Desarrollo Local.

Asimismo, en concordancia con lo establecido en el numeral [2](#) del artículo 69 del Decreto Ley 1421 de 1993, realizarán la vigilancia y control sobre la prestación de servicios distritales en su localidad. Para tal efecto, la Junta Administradora Local podrá convocar a los delegados o designados por los Sectores Administrativos de Coordinación y de las entidades adscritas o vinculadas a éstos, y su asistencia será de carácter obligatorio.

Parágrafo 1. La Administración Distrital a través de los Sectores Administrativos de Coordinación y las entidades adscritas o vinculadas a éstos, definirán los funcionarios delegados o designados para cada localidad, con el fin de atender las convocatorias

realizadas por las Juntas Administradoras Locales, de conformidad con las temáticas a abordar.

ARTÍCULO 15.- Representación y defensa judicial. La representación y defensa judicial de los Fondos Desarrollo Local estará a cargo de la administración distrital, conforme lo determine el Alcalde Mayor de Bogotá D. C.

DECRETO DISTRITAL 714 DE 1996, Por el cual se compilan el Acuerdo [24](#) de 1995 y Acuerdo [20](#) de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital:

(...)

Artículo 52º.- De las Disponibilidades Presupuestales. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos.

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento a estos actos administrativos.

En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes o en exceso del saldo disponible o sin la autorización previa del Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal -CONFIS- o por quien éste delegue, para comprometer vigencias futuras y la adquisición de compromisos con cargo a los recursos de crédito autorizado.

Para las modificaciones a las plantas de personal y las asignaciones salariales de las entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital que impliquen incremento en los costos actuales, será requisito esencial y previo la obtención de un certificado de viabilidad presupuestal expedido por la Dirección Distrital de Presupuesto, en que se garantice la posibilidad de atender estas modificaciones.

Cualquier compromiso que se adquiera con violación de estos preceptos creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones. (Acuerdo 24 de 1995, art. 47º)

DECRETO DISTRITAL 372 DE 2010, Por el cual se reglamenta el proceso presupuestal de los Fondos de Desarrollo Local - F.D.L.

(...)

Artículo 28º. Obligaciones por Pagar

Los gastos causados y debidamente registrados con cargo a los presupuestos de los F.D.L. que no se paguen en la vigencia respectiva deberán incluirse en el presupuesto del año siguiente como obligaciones por pagar. Toda Obligación por Pagar que no sea incluida en el presupuesto deberá ser financiada con cargo al proyecto o rubro que le dio origen, o en el evento en que cambiaran los proyectos incluidos en el POAI, a un proyecto o rubro con el que guarde afinidad.

En ningún caso los saldos liberados de Obligaciones por Pagar servirán para efectuar adiciones a otras obligaciones o pagos o para financiar nuevos compromisos. Toda adición a contratos de años anteriores se atenderá con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal en curso.

Artículo 29°. Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC-

Los giros para atender los gastos del Presupuesto de los F.D.L. se harán a través del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC. Este es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles con el fin de cumplir los compromisos que no pueden exceder del total del PAC de la vigencia, de acuerdo con el modelo establecido por la Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Tesorería.

La Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Tesorería llevará una programación de PAC independiente para cada Fondo de Desarrollo Local y establecerá los procedimientos pertinentes para su cabal ejecución.

Artículo 30°. Registro de Pagos

La Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Contabilidad llevará el registro contable de las transferencias de la Administración Central ordenadas para cada F.D.L., así como el registro de los pagos efectuados con cargo a cada uno de ellos.

(...)

Artículo 41°. Imputación de Decisiones Judiciales

El pago de providencias judiciales, sentencias, conciliaciones, transacciones, indemnizaciones, laudos arbitrales y tutelas, se atenderá con los recursos presupuestales de cada Localidad. Para tal efecto, se podrán hacer los traslados presupuestales requeridos de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Así mismo, se podrán pagar los gastos accesorios o administrativos que se generen como consecuencia del fallo de las providencias judiciales, sentencias, conciliaciones, transacciones, indemnizaciones, laudos arbitrales y tutelas.

Los gastos que se originen dentro de los procesos correspondientes serán atendidos con cargo a los rubros definidos en el Plan de Cuentas. Cuando las decisiones anteriormente señaladas se originen como consecuencia de la ejecución de proyectos de inversión, la disponibilidad presupuestal se expedirá por el mismo rubro o proyecto que originó la obligación principal. Las demás decisiones judiciales se atenderán por el rubro Sentencias Judiciales de Gastos Generales.

DECRETO DISTRITAL 411 DE 2016, Por medio del cual se modifica la Estructura Organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno

Artículo 2°. Modificado por el art. 1, Decreto Distrital 169 de 2023. <El nuevo texto es el siguiente> **ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.** Para el desarrollo de su objeto, la Secretaría Distrital de Gobierno tendrá la siguiente estructura organizacional:

1. DESPACHO DEL SECRETARIO DE GOBIERNO

1.1. Alcaldías Locales (...)

DECRETO DISTRITAL 768 DE 2019, Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo [740](#) de 2019 y se dictan otras disposiciones:

(...)

Artículo 4. Modificado por el art. 1, Decreto 168 de 2021. <El nuevo texto es el siguiente> **Funcionamiento.** La Alcaldía Local es la responsable de formular, ejecutar y hacer seguimiento a los proyectos de inversión en el marco del Plan de Desarrollo Local con cargo a los recursos del respectivo Fondo de Desarrollo Local, a través de la elaboración y ejecución del presupuesto, la gestión de proyectos de inversión y procesos contractuales, así como la ordenación de gastos y pagos, y la administración de bienes de propiedad del Fondo.

Parágrafo. El/la Alcalde/sa local será responsable de dar aplicación a los lineamientos establecidos por las secretarías cabezas de sector y por las entidades distritales competentes en la materia, para la formulación, ejecución y seguimiento a los proyectos de inversión.

Artículo 5. Recursos. Los Fondos de Desarrollo Local dispondrán de los recursos que le sean asignados de conformidad con lo establecido en el artículo [9](#) del Acuerdo 740 de 2019.

Parágrafo 1. Los Fondos de Desarrollo Local atenderán los lineamientos que definan de manera conjunta la Secretaría Distrital de Hacienda y la Secretaría Distrital de Planeación, para realizar de manera oportuna y adecuada la gestión presupuestal dentro del proceso de programación, ejecución, seguimiento y cierre presupuestal.

Parágrafo 2. Los Fondos de Desarrollo Local atenderán los lineamientos que establezca la Dirección Distrital de Tesorería para realizar de manera oportuna la proyección, elaboración y programación del Plan Anual Mensualizado de Caja – PAC, de la respectiva vigencia fiscal.

DECRETO DISTRITAL 192 DE 2021, Por medio del cual se reglamenta el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital y se dictan otras disposiciones:

Artículo 31°. [Modificado por el art. 3, Decreto Distrital 356 de 2022.](#) <El nuevo texto es el siguiente> **Pagos y compensaciones.** El ordenador del gasto con funciones de ordenación del pago, o el ordenador del pago y el responsable del presupuesto de las entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital y los Fondos de Desarrollo Local, remitirán a la Dirección Distrital de Tesorería los documentos que ordenan pagos (cuentas por pagar), compensaciones, pagos de carácter tributario y pagos de las demás obligaciones que requieran ser procesados a través de la Cuenta Única Distrital.

La Dirección Distrital de Tesorería efectuará la disposición y giro de los recursos, de conformidad con la respectiva orden recibida mediante diligenciamiento y aprobación en el sistema de información que la Secretaría Distrital de Hacienda establezca para el efecto.

Las ordenaciones de giros con las cuales no se ejecute presupuesto, como los giros de recursos recibidos por la Dirección Distrital de Tesorería en administración, giros para constituir inversiones, o giros de recursos de terceros, entre otros, deberán ser suscritas por el representante legal de la entidad o quien éste delegue.

Parágrafo 1°. Los servidores públicos que suscriban las órdenes de disposición de recursos de la Cuenta Única Distrital deberán registrar previamente sus firmas en la Dirección Distrital de Tesorería, a través de los mecanismos, formatos y procedimientos que ésta disponga.

En caso de modificación del registro de los servidores públicos, la respectiva entidad o dependencia responsable deberá informarlo y actualizar las firmas correspondientes en la Dirección Distrital de Tesorería, de acuerdo con los procedimientos que esta establezca.

Parágrafo 2°. La ordenación del gasto implica dos aspectos, asumir el compromiso y ordenar el pago, que serán ejercidos por el jefe de la entidad, o por el servidor público del nivel directivo a quien éste delegue, de manera conjunta o independiente.

La adquisición de compromisos con efectos presupuestales a nombre de la entidad ejecutora de recursos públicos distritales, deberá llevarse a cabo, de conformidad con las condiciones previstas en el artículo [52](#) del Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital, Decreto 714 de 1996.

La ordenación del pago es la instrucción dirigida a la Dirección Distrital de Tesorería de la Secretaría Distrital de Hacienda que contiene beneficiario, monto, momento y rubro presupuestal o programa que se afecta, para que esta proceda al giro de los recursos.

Artículo 33°. [Modificado por el art. 4, Decreto Distrital 356 de 2022.](#) <El nuevo texto es el siguiente> **Responsabilidad en el seguimiento y control de la ordenación de pagos y compensaciones.** Es responsabilidad del ordenador del gasto con funciones de ordenación del pago o el ordenador del pago y el responsable del presupuesto de las entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital y de los Fondos de Desarrollo Local, realizar el seguimiento y control de los documentos que ordenan pagos, compensaciones,

pagos de carácter tributario y demás obligaciones radicadas ante la Dirección Distrital de Tesorería, así como la aclaración oportuna de los rechazos que se presenten y la tramitación de la respectiva solicitud de anulación y/o reenvío en el Sistema de Información Financiera que la Dirección Distrital de Tesorería establezca para tal fin.

Cuando en el curso de una vigencia fiscal y antes del respectivo cierre contable, de conformidad con las normas, plazos y procedimientos propios de la operación Tesoral, la Dirección Distrital de Tesorería establezca que es imposible realizar la ejecución bancaria de una orden de pago, giro o compensación, en los precisos términos en los cuales dicha orden fue impartida por el ordenador, podrá dejarla sin efectos, una vez lo comunique a la entidad, operación que quedará registrada en el sistema de información. En tales eventos, será responsabilidad exclusiva de la entidad o dependencia ordenadora revisar oportunamente el estado de la orden en el sistema de información y, según el caso, enviar o no una nueva orden de giro debidamente ajustada, o adoptar las medidas administrativas, jurídicas y presupuestales tendientes al reconocimiento de los derechos sustanciales o a la respectiva depuración contable, según las normas aplicables a cada actuación.

La información requerida para cumplir con este seguimiento y control deberá ser puesta a disposición por la Dirección Distrital de Tesorería para ser consultada oportunamente por las entidades ordenadoras dependencias o unidades ejecutoras, mediante el sistema de información que la Secretaría Distrital de Hacienda establezca para el efecto.

Artículo 34°. [Modificado por el art. 5, Decreto Distrital 356 de 2022.](#) <El nuevo texto es el siguiente> **Legalidad, pertinencia y oportunidad.** La responsabilidad sobre la legalidad, pertinencia y oportunidad de todos los pagos, compensaciones, pagos de carácter tributario y demás obligaciones recae exclusivamente sobre las entidades, dependencias o unidades ejecutoras ordenadoras y sobre los servidores públicos que suscriban la respectiva orden o instrucción.

(...)

Artículo 37°. Reportes de pago. La Dirección Distrital de Tesorería de la Secretaría Distrital de Hacienda facilitará a través del Sistema de Información que para el efecto se establezca un reporte que muestre en forma detallada los pagos efectuados por cada entidad, con el fin de que cuenten con información y puedan ejercer el control y la conciliación de sus órdenes de pago.

(...)

Artículo 39°. Convenios interadministrativos de recaudo y de pagadurías delegadas. La Secretaría Distrital de Hacienda podrá celebrar con las entidades distritales los convenios interadministrativos que resulten necesarios para la recepción de los ingresos a favor del Distrito Capital y para la realización de pagos, en atención al volumen y complejidad de los mismos, en cuyo último caso la Dirección Distrital de Tesorería de la Secretaría Distrital de Hacienda transferirá los recursos correspondientes a la entidad con sujeción al Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC aprobado.

IV. COMPETENCIA DEL CONCEJO

Decreto Ley 1421 de 1993

Artículo 8. *Funciones generales. El Concejo es la suprema autoridad del Distrito Capital. En materia administrativa sus atribuciones son de carácter normativo. También le corresponde vigilar y controlar la gestión que cumplan las autoridades distritales.*

Artículo 12. *Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:*

1. *Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. (...)*

10. *Dictar las normas que garanticen la descentralización, la desconcentración y la participación y veeduría ciudadanas.*

16. *Dividir el territorio del Distrito en localidades, asignarles competencias y asegurar su funcionamiento y recursos.*

25. *Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes.*

V. IMPACTO FISCAL

Como lo establece el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, es obligatorio esclarecer el impacto fiscal que tienen las normas sobre las finanzas públicas, lo que significa medir la carga fiscal que estas pueden tener tanto en el presupuesto anual y en el Marco Fiscal de mediano Plazo que deben observar las diferentes entidades del Estado. Ahora bien, esto no significa que los instrumentos normativos que pueda aprobar el Concejo de Bogotá estén limitados por este hecho, pues como lo aclara la Sentencia C-911 de 2007, el impacto fiscal no se puede convertir en una limitación absoluta para que las corporaciones públicas cumplan con sus funciones legislativas o de orden normativo. En este sentido, la sentencia establece:

En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al Congreso reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que reside en el Congreso de la República, con lo cual se vulnera el principio de separación de las Ramas del Poder Público, en la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo.

(...) el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda.

Teniendo en cuenta el objeto del proyecto y cómo este se alcanzará, se considera que no se genera impacto fiscal y los recursos con los que cuentan las entidades del nivel central y descentralizado del Distrito son suficientes para su puesta en marcha.

Teniendo en cuenta especialmente que un estudio para analizar la viabilidad de la creación de los Comités asesores para el saneamiento de obligaciones por pagar en los Fondos de Desarrollo Local del Distrito Capital y el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz no genera un impacto fiscal ya que este puede ser realizado por los funcionarios con lo que ya cuenta el Distrito Capital.

VI. CONCLUSIÓN

En mérito de lo expuesto y de conformidad con el Capítulo IX del Acuerdo 741 de 2019, nos permitimos presentar a su consideración el presente proyecto de acuerdo, para su trámite y aprobación.

Respetuosamente,

DAVID HERNANDO SAAVEDRA MURCIA

Concejal de Bogotá

Autor

CRISTINA CALDERÓN RESTREPO

Concejala de Bogotá

JUAN MANUEL DÍAZ MARTÍNEZ

Concejal de Bogotá

JUAN JAVIER BAENA MERLANO

Concejal de Bogotá

JESÚS DAVID ARAQUE MEJÍA

Concejal de Bogotá

FERNANDO LÓPEZ GUTIÉRREZ

Concejal de Bogotá

RICARDO ANDRÉS CORREA MOJICA

Concejal de Bogotá

JUAN DAVID QUINTERO

Concejal de Bogotá

VII. ARTICULADO

PROYECTO DE ACUERDO NO 228 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA EL SANEAMIENTO DE OBLIGACIONES POR PAGAR EN LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL DEL DISTRITO CAPITAL Y EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ”****EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL**

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 1, 10, 16 y 25 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993.

ACUERDA:

ARTÍCULO 1.- ESTUDIO: La Administración Distrital realizará un estudio donde se analicen las herramientas idóneas para lograr el saneamiento de obligaciones por pagar en los Fondos de Desarrollo Local del Distrito Capital y el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz.

PARÁGRAFO: Uno de los componentes de este estudio deberá analizar la necesidad y pertinencia de crear los Comités para el saneamiento de obligaciones por pagar en los Fondos de Desarrollo Local del Distrito Capital y el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, como una instancia de participación ciudadana y de asesoramiento para generar recomendaciones, lineamientos y estrategias para lograr el saneamiento de las obligaciones por pagar acumuladas que tienen los Fondos de Desarrollo con sus proveedores.

ARTÍCULO 2.- CONFORMACIÓN: Para la realización de este estudio la Administración Distrital delegará funcionarios con los siguientes perfiles:

- Profesional Especializado con conocimientos en derecho, contabilidad o economía
- Profesional Especializado con conocimientos en contabilidad
- Profesional Universitario o Especializado con conocimientos en derecho, contabilidad o economía que represente cada una de las Alcaldías Locales.
- Profesional Universitario o Especializado con funciones de Contador (a) del Fondo de Desarrollo Local o Rural, según sea el caso.

PARÁGRAFO 1. Se podrá invitar a él (la) Jefe de la Oficina de Control Interno.

PARÁGRAFO 2. Se deberá invitar a las veedurías ciudadanas, contratistas, servidores públicos o particulares cuya opinión se estime pertinente para el estudio.

ARTÍCULO 3.- CONTENIDO: El estudio contendrá como mínimo los siguientes temas:

- a) Realizar el análisis de la composición de las obligaciones por pagar acumuladas en cabeza de los Fondos de Desarrollo Local o Rural, según sea el caso.
- b) Estudiar y evaluar el nivel de cumplimiento de las circulares expedidas por la Secretaría Distrital de Hacienda donde se establezcan lineamientos para el saneamiento de las Obligaciones por Pagar constituidas por los Fondos de Desarrollo Local.
- c) Precisar cuáles son las herramientas recomendadas para lograr el pronto saneamiento de obligaciones por pagar en los Fondos de Desarrollo Local del Distrito Capital y el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz.
- d) Establecer si la información recolectada y analizada sustenta la pertinencia de la creación de los Comités para el saneamiento de obligaciones por pagar en los Fondos de Desarrollo Local del Distrito Capital y el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz para mantener una salud financiera permanente conservando una cultura de pago oportuno y que incentive la participación de una mayor pluralidad de oferentes en los procesos de contratación pública con estas Entidades.

ARTÍCULO 4.- PLAZO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL ESTUDIO: La Administración Distrital tendrá un plazo de dos (2) años a partir de la entrada en vigencia de este Acuerdo para presentar las conclusiones del estudio. Sin embargo, deberá la Administración Distrital presentar de manera semestral ante el Concejo de Bogotá los avances realizados.

ARTÍCULO 5.- VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

I. BIBLIOGRAFIA

Diamond, J., y Schiller, C., 1993, "Government Arrears in Fiscal Adjustment Programs", En *How to Measure the Fiscal Deficit: Analytical and Methodological Issues*, ed. Mario I. Blejer y Adrienne Cheasty, págs. 113-143 (Washington: Fondo Monetario Internacional).

FMI (2014) Prevención y gestión de los atrasos en el pago de los gastos públicos. En, Notas técnicas y manuales 14/01. Washington: FMI.

Irwin, T. C., 2012, "Accounting Devices and Fiscal Illusions", Staff Discussion Note 12/02 (Washington, Fondo Monetario Internacional). <http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2012/sdn1202.pdf>.

Gobierno de Portugal, 2012, "Estratégia para a redução dos pagamentos em atraso há mais de 90 dias" (Lisboa: Ministerio de Hacienda).

http://www.portugal.gov.pt/media/579687/20120420_mef_estrategia_reducao_pagamento_atraso.pdf

Concejo de Bogotá, 2020. Acuerdo 761 de 2020 por medio del cual se Adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas y el Plan Plurianual de Inversiones para Bogotá D.C. “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”.

ONU, 2015. Objetivos de Desarrollo Sostenible. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/>

PROYECTO DE ACUERDO NO 229 DE 2025**PRIMER DEBATE****"POR EL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EN EL DISTRITO CAPITAL EL "CURSO PEDAGOGICO SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LA FAMILIA, DENTRO DEL MARCO DE LAS ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA EN EL CONTEXTO FAMILIAR Y DE GENERO"****1. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO.**

El presente proyecto de acuerdo, busca formalizar e institucionalizar para la ciudad de Bogotá el "CURSO PEDAGOGICO SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LA FAMILIA Y EL DEBER DE CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN" ordenadas por las comisarías de familia de Bogotá D.C., dentro del marco de las Acciones de Protección contra la violencia en el contexto familiar, en procura de cumplir con los siguientes:

OBJETIVOS GENERALES

1. Prevenir por medio de un curso pedagógico, desde la divulgación y promoción de los derechos, deberes y consecuencias legales, la ocurrencia o repetición de hechos de violencia en el contexto familiar y de género.
2. Fomentar en la ciudad y al interior de las familias, la cultura de la no violencia y propender por la paz, la unidad y la armonía en las relaciones familiares, en el Distrito capital.
3. Contribuir con la garantía y restablecimiento efectivos de los derechos de las mujeres de todas las edades y condiciones sociales, étnicas y culturales en el Distrito Capital, que pudieran resultar o corrieran el riesgo de ser víctimas de violencia en el contexto familiar, con ocasión de su género, dentro del marco de las acciones de protección adelantadas por las Comisarías de Familia.
4. Optimizar el funcionamiento y garantizar la perdurabilidad al servicio de la ciudad, del curso pedagógico que actualmente dicta la Personería de Bogotá.

5. Fomentar el reconocimiento y reivindicación social y familiar de los derechos de las mujeres como sujetos de especial protección constitucional.
6. Divulgar e implementar mecanismos pedagógicos que permitan a infractores e infractoras de la ley de violencia en el contexto familiar y de género, conocer las implicaciones, entender el deber de cumplimiento a las medidas de protección y aplicar las ordenes emanadas de acciones de protección proferidas por las comisarías de familia.

Sensibilizar a las familias, respecto de la importancia de construir una sociedad libre de estereotipos de genero malsanos y destructivos, a partir de la divulgación de una masculinidad positiva

2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Las mujeres como Sujetos de Especial Protección Constitucional y la Familia como núcleo fundamental de la sociedad.

Conforme al artículo 42 de la Constitución Política: “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad” indicando, además que “las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes”. Así mismo concluye, que “cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley.”

Por su parte los artículos 13 y 43 de nuestra referida Carta Magna, reconocen el mandato de igualdad ante la ley y prohíben toda forma de discriminación por razones de sexo; también establece que la mujer y el hombre gozan de iguales derechos y libertades. Sin perjuicio de lo anterior, la Convención de Belém Do Pará, suscrita por Colombia el 9 de junio de 1994 en Brasil, definió la violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

En este sentido y a partir de la promulgación de la Ley 248 de 1995, por medio de la cual se aprobó la antes mencionada Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, de Belem Do Para, nuestro ordenamiento legal, ha procurado garantizar derechos a las mujeres cuando aquellas sean víctimas de violencia y otros delitos, con ocasión de su género.

En desarrollo del pilar consagrado en el artículo 42 de la Constitución Colombiana, y teniendo en cuenta la perspectiva de género, respecto de la cual el Estado Colombiano suscribió el ya mencionado tratado internacional de Belem do Pará, se establecieron por medio de la Ley 294 de 1996, (modificada por la Ley 575 de 2000, 1257 de 2008, 2126 de 2021 y 2197 de 2022) las acciones de protección a favor de los diferentes miembros de la familia, con el fin de garantizar su armonía y unidad, prevenir y sancionar toda forma de violencia, así como garantizar el derecho a un ambiente libre de violencia en el contexto familiar.

En efecto, la Ley 1257 de 2008 por medio de la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra la mujer, y se modifica la Ley 294 de 1996 y 575 de 2000, se consagran derechos tales como el de la no confrontación de la mujer víctima, con su agresor y se toman medidas de atención. De otra parte, con la Ley 1542 de 2012, se fortalece la protección especial con perspectiva de género, al quitarle el carácter de querellables y desistibles a los delitos de violencia intrafamiliar y otras violencias contra la mujer; Por otro lado, la Ley 1719 de 2015, adopta medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, mientras que la Ley 1761 de 2015 o Ley Rosa Elvira Cely, crea el tipo penal de feminicidio en Colombia como un delito autónomo.

La Corte Constitucional, mediante fallo T-027 del 23 de enero de 2017, precisó que las mujeres son sujetos de especial protección constitucional debido a que presentan una situación de desventaja frente a los hombres, que se ha extendido a todos los ámbitos de la sociedad y especialmente al familiar. No obstante la abundante normatividad vigente, y el reconocimiento preferente de los derechos de la mujer como sujeto de especial protección, así como el desarrollo jurisprudencial en garantía del reconocimiento de un criterio diferencial y la aplicación de justicia con perspectivas de género, resulta evidente y altamente alarmante el incremento de los casos de violencia en el contexto familiar, donde las víctimas son mujeres de diferentes edades, tanto niñas, como mujeres adolescentes, o mujeres mayores de 18 años e incluso adultas mayores, donde en la mayoría de los casos, los agresores son hombres.

Confirma lo anterior el Comunicado 662 del 20 de junio de 2024, dado en la ciudad de Bogotá D.C., por la Defensoría del Pueblo, donde se denunciaron 47 feminicidios ocurridos en Colombia entre enero y mayo de 2024. En el mismo periodo, la entidad también registró 144 casos de tentativa de feminicidio, al tiempo que atendió 3710 casos de violencias basadas en género.⁴⁴

De otro lado, la secretaría Distrital de Integración Social, reveló el 1 de junio de 2024, en su página web, que entre enero y abril de 2024, se registraron 13.326 víctimas de violencia en

⁴⁴ <https://www.defensoria.gov.co/web/guest/-/defensor%C3%ADa>

el contexto familiar en la ciudad de Bogotá, de las cuales 9,443 fueron mujeres, lo que representa el 71% del total de las víctimas de violencia en el contexto familiar.

Del mismo modo, la Procuraduría General de la Nación, conforme a lo referido por Lina Muñoz Medina, en reporte de INFOBAE del 10 de Julio de 2024 “entre enero y abril de 2024, Colombia registró un alto índice de violencia intrafamiliar y de género; Medicina Legal reportó 177 homicidios de menores y 121 mujeres asesinadas”. La Procuraduría también destacó que la ciudad con mayor índice de casos de violencia intrafamiliar fue Bogotá, con 880 casos, seguida de Medellín, con 112.

Por su parte, la Personería de Bogotá, D. C., en publicación web del 13 de junio de 2024, indicó que, entre enero y mayo de este año, en garantía de derechos de mujeres presuntas víctimas de violencia de género en la ciudad, la Personería de Bogotá, elevó a las comisarías de familia 577 solicitudes de adopción de medidas de protección por riesgo latente de feminicidio. En artículo publicado en el diario digital PUBLIMETRO el 08 de agosto 2024, se indicó que en la personería de Bogotá se recibieron cerca de 3.400 quejas relacionadas con violencia intrafamiliar, de las cuales aproximadamente 2.600 involucraban derechos de niñas, adolescentes y mujeres.

Conforme a la Publicación antes mencionada, según las cifras aportadas por la Personería, hasta julio del año 2024, se habían registrado 14 casos de feminicidios en Bogotá y con los tres casos reportados los primeros días del mes de agosto, la cifra llegaría a 17 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en la Capital durante lo corrido de los primeros 8 meses del año 2024.

Es preocupante la creciente violencia contra las mujeres en la ciudad, y las estadísticas antes mencionadas reflejan la gravedad de la situación. En efecto, según cifras del Instituto Colombiano de Medicina Legal, en promedio en Bogotá son asesinadas por distintas causas 100 mujeres al año, a corte de mayo del presente año ya habían sido asesinadas 30 mujeres. Esto quiere decir que en promedio en nuestra ciudad cada 3 días muere una mujer. Según lo señalado por el referido Intuito, en Bogotá diariamente, 5 mujeres son víctimas de violencia intrafamiliar, cada dos horas ocurre un delito sexual, y cada hora, una mujer es víctima de violencia de pareja.

En igual sentido, según el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO), en 2023 se registraron 25 feminicidios en Bogotá, mientras que en lo corrido del año incluido el mes de agosto, ya contamos 17 mujeres asesinadas en 8 meses, lo que indica un promedio de 2 feminicidios por mes en el Distrito Capital.

Como lo he venido sosteniendo en distintos espacios, estas cifras son una llamada urgente a la acción. La violencia no solo se manifiesta en los feminicidios, sino en múltiples formas

que afectan a mujeres de todas las edades y condiciones, por lo que se requiere una respuesta más estructural y proactiva. Las mujeres de Bogotá necesitan respuestas concretas. Es hora de actuar con determinación para proteger y apoyar a todas las mujeres en nuestra ciudad desde lo estructural, y en la implementación de medidas preventivas masivas y efectivas.

Resulta también importante diseñar estrategias que equipen a las familias del Distrito Capital, de herramientas pedagógicas y preventivas en materia de violencia en el contexto familiar y de género, para abordar el problema desde sus raíces, o por lo menos evitar que se repitan y profundicen situaciones de violencia dentro de dicho contexto, lo cual puede ocurrir incluso existiendo una Medida de Protección provisional o definitiva dentro de una acción jurisdiccional por parte de una Comisaria de Familia o estando en curso una investigación penal por el presunto delito de violencia intrafamiliar u otro más grave, como por ejemplo tentativa de feminicidio.

La falta de conocimiento jurídico, sobre las consecuencias legales, familiares y económicas, derivadas de cometer o repetir acciones u omisiones que al tenor del artículo 5 de la Ley 2126 de 2021, puedan causar o resulten en daño o sufrimiento físico, psicológico, sexual, económico, o patrimonial a uno o más, de los miembros de un núcleo familiar, o el desconocimiento al interior del mismo sobre el deber de cumplir con todas y cada una de las ordenes emanadas de una Medida de protección decretada por una Comisaria de Familia, si bien no sirven de excusa legal al infractor o infractora, si puede ser una de las causas para que todas esas intervenciones y esfuerzos se pierdan, haciendo que los mismos hogares no puedan ser lugares seguros para que las familias vivan en paz y libres de violencia.

En virtud a lo anterior, resulta oportuno reconocer y procurar potenciar por medio de acuerdos distritales, esfuerzos de entidades públicas que no solo se limitan a cumplir sus deberes funcionales, sino que aportan formas de minimizar o prevenir hechos constitutivos de violencia por medio de campañas pedagógicas, como es el caso del curso pedagógico de la Personería de Bogotá con el concurso de la Secretaría Distrital de Integración Social por medio de las Comisarías de Familia.

3. ANTECEDENTES.

En primer lugar, es importante resaltar a manera de antecedente, que la referencia más próxima que encontramos en nuestro ordenamiento jurídico, respecto de un curso pedagógico, en garantía de derechos de víctimas Sujetos de Especial Protección Constitucional, se encuentra consagrado en el Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006 que en sus artículos 53 y 54 referentes a las medidas de restablecimiento de derechos de niñas niños y adolescentes, establece entre otras la amonestación con

asistencia obligatoria a curso pedagógico en la Defensoría del Pueblo, sobre los derechos de la niñez y la adolescencia.

El curso pedagógico antes referenciado, pero enfocado en los derechos de las mujeres y la familia, en el marco de la ley de violencia intrafamiliar, inspiró una iniciativa que surgió durante el año 2017 por parte de la entonces “Personería Delegada para la Protección de la Infancia, Adolescencia, Mujer, Adulto Mayor, familia y Personas en situación de discapacidad” Hoy día “Personería Delegada para la Familia y Sujetos de Especial Protección Constitucional” de la Personería de Bogotá D.C., dentro de su función de “promover y divulgar Derechos Humanos con enfoque diferencial y de Genero, contribuir a la prevención de la vulneración de los derechos y apoyar el fortalecimiento de una cultura de paz en el Distrito Capital”.

Dicha iniciativa que, consistió en diseñar e implementar un curso pedagógico que coadyuvase al cumplimiento de las acciones legales adelantadas por las Comisarias de Familia, se materializó en un “Acuerdo de Voluntades” suscrito el 30 de agosto de 2017, de un lado por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social, (Bajo cuya dirección administrativa se encuentran actualmente adscritas las comisarías de Familia) y de otro, por la Personería de Bogotá, (Que ejerce a través de la Personería delegada para la familia, el ministerio público, ante las Comisarias de Familia).

El objeto del acuerdo de voluntades, según quedó referenciado en dicho documento, consistía en “aunar acciones conjuntas que brindasen a la ciudadanía, la posibilidad de conocer información normativa y conceptual, en materia de violencia intrafamiliar”. De conformidad con el convenio actualmente vigente, basado en el principio de la coordinación institucional, se buscaba “potenciar la atención integral de los miembros de las familias afectadas por violencia intrafamiliar” en la ciudad de Bogotá.

La Personería de Bogotá, acordó ofrecer con su propio personal idóneo, en sus instalaciones, y certificando la asistencia, un curso pedagógico que abarcara temas de Derechos de las víctimas, perspectiva de género, acciones legales para su garantía, consecuencias jurídicas, y competencias institucionales. De otra parte, la SDIS, acordó que, por medio de las Comisarias de Familia, se remitiría al personal al curso pedagógico en tres casos:

1. Personas con conflictos familiares que puedan derivar en hechos de violencia intrafamiliar.
2. Personas involucradas en Medidas de protección, dentro de las acciones de seguimiento
3. Personas que muestren interés en conocer la temática para su orientación y profundización en el curso.

Según respuesta a petición de información la Personería delegada para la Familia, nos informa que, durante los últimos cuatro años, la personería de Bogotá, ha sensibilizado en derechos de la mujer y la familia y el deber de cumplimiento a las medidas de protección, a **ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PERSONAS** (11.557). Durante el 2021 y a raíz de la pandemia se activó el curso pedagógico de manera virtual, habiendo sensibilizado ese año a 1336 personas. Para el año 2022 se reactivó el curso en modalidad presencial, sensibilizando a 2627 personas. Durante el 2023 fueron sensibilizados 4436 personas, y de enero a julio de 2024, van 3158 personas sensibilizadas mediante la realización de su curso pedagógico.

Si bien, en los casos, en que se ordena o exhorta a tomar el curso pedagógico dentro del resuelve de un fallo definitivo a una medida de protección, parecería que dicho curso, cumpliera una función más sancionatoria, que preventiva; lo que en todo caso tendría justificación legal conforme a lo dispuesto por el literal N del artículo 5 de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo 60 de la Ley 2197 de 2022 que establece la posibilidad para que el comisario o comisaria de familia, ordene cualquier medida que considere pertinente para el cumplimiento de los objetivos de la ley de violencia en el contexto familiar, lo cierto es que, en dichos casos, si podría el curso pedagógico, prevenir la reincidencia en hechos de violencia y por tanto, contribuir a evitar futuros incidentes de incumplimiento a las medidas de protección y la imposición de las sanciones que esto conlleva.

Del mismo modo, en los demás casos en que se sugiera o solicite la participación en el curso, por parte de las comisarías de familia, sin que medie orden de protección previa, se hace evidente el carácter preventivo de un proyecto pedagógico, bajo la premisa en cuya virtud, conocer los deberes frente a los derechos ajenos, garantiza el respeto y ejercicio de los propios derechos.

Actualmente según se pudo establecer, no existe una base de datos que permita verificar qué comisaría de familia remite a la persona citada, ni el número del expediente, ni si se trató de una orden tomada dentro de una Medida de Protección, o una invitación dentro de una atención al conflicto etc., por lo que solo se cuenta con “una copia digitalizada de los asistentes a cada curso realizado de acuerdo al formato establecido por la entidad para el registro de asistencia a sensibilizaciones” lo que implica la necesidad de mejorar el sistema de información, recepción de solicitudes, verificación de asistencias, expedición de certificados o constancias, no solo para ofrecer un mejor servicio a la comunidad, sino para llevar un control paralelo con la SDIS o en el futuro con quien haga sus veces, que permita hacer un seguimiento efectivo arrojando estadísticas de cuantos de los citados al curso pedagógico reincidieron en conductas de violencia en el contexto familiar, y otros datos estadísticos que resulten pertinentes, conducentes y útiles, para la medición de la efectividad del curso pedagógico.

No obstante, un curso pedagógico de tal naturaleza, que alcanza cada mes y año, a un número tan significativo de ciudadanos, ciudadanas y por tanto a miles de familias en el distrito capital, puede aportar sin lugar a dudas, conocimiento jurídico básico que contribuya en la prevención de la violencia en el contexto familiar, desde la formación teórica legal aplicada con enfoque práctico. Por esta razón, resulta conveniente para la ciudad, que a través de un acuerdo del Concejo Distrital, se pueda garantizar la permanencia y optimización del curso pedagógico sobre los derechos de la mujer y la familia, ajustándola a criterios calificables y cuantificables de eficacia, eficiencia y efectividad, más allá de la mera voluntad de dos entidades públicas Distritales, que conforme al tenor del acuerdo suscrito desde el año 2017, pueden darlo por terminado o modificarlo en cualquier momento.

Es de anotar además, que existe la posibilidad que las Comisarías de Familia, así como dejaron de ser dependencias adscritas a la Secretaría de Gobierno, para pasar bajo la tutoría de la Secretaría Distrital de Integración Social, terminen como ha quedado planteado, siendo dependencias de la Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia, lo que seguramente por lo menos suspendería los términos de ejecución del acuerdo, ya que las Comisarias de familia tendrían en principio, que esperar la instrucción que sobre ese particular, emitiera la nueva Secretaría a cargo y la nueva dirección tendría que analizar si le dan o no continuidad al curso pedagógico.

Conforme al proyecto de acuerdo que ponemos a consideración del Honorable Concejo de Bogotá D.C., el “curso pedagógico sobre los derechos de la mujer y la familia y el deber de cumplimiento a las Medidas de protección” que actualmente dicta la Personería de Bogotá, pasaría, de ser una iniciativa loable en garantía de derechos, sujeta a la voluntad y arbitrio del mencionado ente de control y por ahora, la Secretaria Distrital de Integración Social, a convertirse en una institución de carácter permanente de la ciudad, en materia de divulgación, promoción y salvaguarda de derechos de las familias, el deber de cumplir con las ordenes emanadas de Acciones de Protección en materia de Violencia en el contexto familiar, y una herramienta idónea para la prevención de la violencia de género, desde la pedagogía jurídica.

4. MARCO JURÍDICO.

A. MARCO CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO 13. “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”

ARTÍCULO 42. “familia es el núcleo fundamental de la sociedad...

Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley...”.

ARTÍCULO 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia.”

B. MARCO LEGAL

Se relacionan dentro del marco legal, así:

- Ley 1257 de 2008 Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones.

ARTÍCULO 1o. “OBJETO DE LA LEY. La presente ley tiene por objeto la adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización.

ARTÍCULO 2o. “DEFINICIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado.

Para efectos de la presente ley, y de conformidad con lo estipulado en los Planes de Acción de las Conferencias de Viena, Cairo y Beijing, por violencia económica, se entiende cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Esta forma de violencia puede consolidarse en las relaciones de pareja, familiares, en las laborales o en las económicas.”

ARTÍCULO 3o. “CONCEPTO DE DAÑO CONTRA LA MUJER. Para interpretar esta ley, se establecen las siguientes definiciones de daño:

a) Daño psicológico: Consecuencia proveniente de la acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal.

b) Daño o sufrimiento físico: Riesgo o disminución de la integridad corporal de una persona.

c) Daño o sufrimiento sexual: Consecuencias que provienen de la acción consistente en obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente, se considerará daño o sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas.

d) Daño patrimonial: Pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer.

- Ley 294 de 1996, modificada por las leyes 575 de 2000, 1257 de 2008 y 2126 de 2021 y 2197 de 2022 por la cual se desarrolla el artículo 42, inciso 5o., de la Carta Política, mediante un tratamiento integral de las diferentes modalidades de violencia en la familia, a efecto de asegurar a ésta su armonía y unidad, y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar.

ARTÍCULO 5o. MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. <Artículo modificado por el artículo 60 de la Ley 2197 de 2022. El nuevo

texto es el siguiente:> Si la autoridad competente determina que el solicitante o un miembro del núcleo familiar ha sido víctima de violencia, emitirá mediante providencia motivada una medida definitiva de protección, en la cual ordenará al agresor abstenerse de realizar la conducta objeto de la queja, o cualquier otra similar contra la persona ofendida u otro miembro del núcleo familiar. El funcionario podrá imponer, además, según el caso, las siguientes medidas, sin perjuicio de las establecidas en el artículo 18* de la presente ley:

a) Ordenar...

n) Cualquiera otra medida necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.”

- Ley 1542 de 2012, fortalece la protección especial con perspectiva de género, al quitarle el carácter de querellables y desistibles a los delitos de violencia intrafamiliar y otras violencias contra la mujer.
- Ley 1719 de 2015, adopta medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual.
- Ley 1761 de 2015 o Ley Rosa Elvira Cely, crea el tipo penal de feminicidio en Colombia como un delito autónomo.
- Decreto 2734 de 2012 Artículo 18: Mujer víctima menor de 18 años de edad. En los casos que se presente violencia contra la mujer menor de 18 años de edad, deberá intervenir el Ministerio Público y el Defensor de Familia, de acuerdo con las competencias otorgadas por la Ley 1098 de 2006

C. NORMAS DISTRITALES.

Acuerdo Distrital 927 de 2024, del Concejo de Bogotá D.C. por medio del cual se aprobó el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del distrito capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura” en especial lo contenido en el Artículo 8, que adopta los Programas del objetivo estratégico “Bogotá avanza en seguridad” en cuyo numeral 2 establece: “Cero tolerancia a las violencias contra las mujeres y violencias basadas en género.” En cuya virtud Bogotá se compromete a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres, en todas sus diferencias y diversidades, especialmente, el derecho a una vida libre de violencias, asegurando su integridad mediante componentes de programas de

prevención, atención especializada, acceso a la justicia y articulación de acciones entre el orden distrital y nacional...”

D. JURISPRUDENCIA.

Sentencia T130 de 19 de abril de 2024 Reglas que rigen la Medida de Protección, Flexibilización de la Prueba y enfoque de género.

Sentencia T-027 del 23 de enero de 2017 La Corte Constitucional indica que las mujeres son sujetos de especial protección constitucional debido a que presentan una situación de desventaja frente a los hombres, que se ha extendido a todos los ámbitos de la sociedad y especialmente al familiar. La Sala Séptima de Revisión de Tutelas conoció la acción de tutela presentada por una mujer en contra de la decisión que le negó una medida de protección dentro de un proceso de violencia intrafamiliar, por haber existido agresiones mutuas entre la presunta víctima y el agresor. En esa ocasión, la Sala “recordó que las autoridades deben analizar los casos en los que se constata la existencia de agresiones mutuas a la luz del contexto de violencia estructural contra la mujer, de forma que negar una medida de protección por esta sola razón reproducía estereotipos de género”. En esa ocasión, la Corte tuteló los derechos invocados y dejó sin efecto la decisión cuestionada.

Sentencia T-184 de 2017, la Sala Primera de Revisión de Tutelas resolvió la demanda de amparo presentada contra un juzgado de familia que negó la solicitud de una mujer de no asistir a una audiencia donde su agresor iba a comparecer. En ese caso, la accionante consideró que dicha decisión vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a una vida libre de violencia. Al respecto, la Corte reiteró que “las mujeres víctimas de violencia tienen derecho a no ser confrontadas con su agresor y, por lo tanto, la negativa del Juzgado de Familia a proteger este derecho había configurado un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

Sentencia T-735 de 2017, la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas estudió la acción de tutela incoada en contra de una comisaría de familia que negó la solicitud de no comparecencia a la audiencia de pruebas y fallo, presentada por una mujer que alegaba ser víctima de violencia intrafamiliar. En el caso en comento, la autoridad accionada negó la petición con fundamento en que no se evidenciaba un comportamiento inadecuado o violento por parte del presunto agresor. En esa ocasión, la Corte también amparó el derecho fundamental al debido proceso de la accionante y ordenó rehacer las actuaciones. Para tales fines, señaló que la accionada incurrió “en un defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto y sustantivo, al interpretar que la Ley 1257 de 2008 y, en concreto, el derecho de las

mujeres a no ser confrontadas con su agresor no era aplicable a los procesos de violencia intrafamiliar tramitados conforme a la Ley 294 de 1996.

5. IMPACTO FISCAL.

A la vez, Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 7 de la ley 819 de 2002, la presente iniciativa es compatible con el marco fiscal a mediano plazo, ya que no genera gastos adicionales.

Por tanto, no puede afirmarse que esta iniciativa genera impacto fiscal toda vez que las acciones que propone este proyecto, implican desarrollar los mandatos del Acuerdo Distrital N° 927 del Concejo de Bogotá D.C. por medio del cual se aprobó el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del distrito capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura” en especial lo contenido en el Artículo 8, que adopta los Programas del objetivo estratégico “Bogotá avanza en seguridad” en cuyo numeral 2 establece: “Cero tolerancia a las violencias contra las mujeres y violencias basadas en género.” En cuya virtud Bogotá se compromete a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres, en todas sus diferencias y diversidades, especialmente, el derecho a una vida libre de violencias, asegurando su integridad mediante componentes de programas de prevención, atención especializada, acceso a la justicia y articulación de acciones entre el orden distrital y nacional...”

6. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

La competencia del Concejo de Bogotá, D.C. para aprobar esta iniciativa se sustenta jurídicamente en el numeral 1 del artículo 12 del Decreto 1421 de 1993, que establece:

Decreto ley 1421 de 1993 – estatuto orgánico de Bogotá D.C.

Artículo 12- atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

Cordialmente,

CLARA LUCIA SANDOVAL

Concejal de Bogotá

Partido Liberal Colombiano

PROYECTO DE ACUERDO NO 229 DE 2025

PRIMER DEBATE

PROYECTO DE ACUERDO No _____ DE 2025

"POR EL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EN EL DISTRITO CAPITAL EL "CURSO PEDAGOGICO SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LA FAMILIA, DENTRO DEL MARCO DE LAS ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA EN EL CONTEXTO FAMILIAR Y DE GENERO" "

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las otorgadas en la Constitución Política y en el Artículo 12, numeral 1º del Decreto Ley 1421 de 1993,

ACUERDA:

Artículo 1.- Objeto. El presente Acuerdo tiene por objeto dictar lineamientos e institucionalizar con carácter permanente al servicio de la ciudadanía, el curso pedagógico, sobre los derechos de las mujeres y la familia y el deber de cumplimiento a las medidas de protección ordenadas por las comisarías de familia del Distrito Capital y demás entidades competentes, dentro del marco de las acciones de prevención de ocurrencia o repetición de hechos de violencia en el contexto familiar y de género.

Artículo 2.- Para adoptar las medidas del presente Acuerdo, las cuales estarán en cabeza de la Personería de Bogotá D.C., tendrá en cuenta los siguientes lineamientos:

- a) Promover la habilitación de diferentes modalidades tales como: nocturno, virtual y semipresencial, para la atención de cursos pedagógicos sobre los derechos de las mujeres y la familia, dentro del marco de las acciones de prevención de ocurrencia o repetición de hechos de violencia en el contexto familiar y de género.
- b) Fomentar las acciones pertinentes para lograr la atención y participación de las personas interesadas de dichos cursos en las distintas modalidades.
- c) Propender por la disposición de medios electrónicos cuando excepcionalmente se solicite el curso de manera remota, por medio de herramientas tecnológicas, previa solicitud expresa de la persona interesada o autoridad competente y acreditando la imposibilidad física y material para comparecer presencialmente, ya sea por condiciones de salud, estar privado de la libertad o encontrarse residenciado fuera de la ciudad o el país

Artículo 3.- Acceso. Los ciudadanos y ciudadanas podrán acceder al curso pedagógico, en los siguientes casos:

- a) Por remisión de las comisarías de familia del Distrito capital y demás autoridades competentes, dentro del marco de las acciones de prevención y protección por violencia en el contexto familiar y de género.
- b) Por remisión de los y las Comisarías de Familia del Distrito Capital y demás autoridades competentes en los casos de “*atención integral en situación de riesgo de violencia en el contexto familiar*” que a criterio de la autoridad administrativa lo ameriten.
- c) Por iniciativa de la Personería de Bogotá, solicitud o invitación, dentro de campañas de promoción y divulgación de Derechos Humanos con enfoque diferencial y de Género, tendientes a contribuir a la prevención de la vulneración de los derechos y apoyar el fortalecimiento de una cultura de paz en el Distrito Capital.
- d) Por iniciativa ciudadana, cuando tengan interés de recibir capacitación en Derechos Humanos con enfoque diferencial y de género dentro de las acciones de prevención y protección por violencia en el contexto familiar y de género.

Artículo 4.- Ejecución. La Personería de Bogotá, dentro del marco de sus competencias reglamentará, diseñará los procedimientos, temáticas, certificaciones, convocatorias y mecanismos para optimizar la programación, divulgación y tiempo de respuesta, entre otros, a las solicitudes de los cursos pedagógicos establecidos en el presente acuerdo y demás circunstancias y detalles que redunden en su ejecución, bajo principios de celeridad, debida diligencia, respeto, y garantía a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.

Artículo 5. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

Dado en Bogotá, a los 25 días del mes de enero de 2025

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PROYECTO DE ACUERDO NO 230 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR EL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL “SELLO ZOOLIDARIO” COMO RECONOCIMIENTO A LAS EMPRESAS, ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO Y SERVICIOS QUE PROMUEVAN LA PROTECCIÓN Y EL BIENESTAR ANIMAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

1- OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente proyecto de acuerdo es institucionalizar el "SELLO ZOOLIDARIO" como un reconocimiento otorgado por el Distrito Capital a través del Instituto Distrital de Bienestar y Protección Animal **IDPYBA** a las empresas, establecimientos de comercio y servicios que implementen y promuevan políticas y prácticas enfocadas en la protección y bienestar animal.

Este sello busca incentivar y destacar públicamente a aquellas personas jurídicas que demuestren un compromiso sólido con el respeto y cuidado de los animales, fomentando una cultura de compasión y responsabilidad en la sociedad bogotana.

2- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Este sello busca promover un cambio cultural hacia el respeto y cuidado de los animales, reconociendo a aquellas entidades que se comprometen con la causa y adoptan políticas y prácticas que contribuyen al bienestar animal.

La protección y el bienestar animal son aspectos fundamentales de una sociedad ética y responsable, los animales, como seres sintientes, merecen vivir libres de sufrimiento y crueldad, promover prácticas que aseguren su bienestar no solo es una obligación moral, sino también una necesidad para construir una ciudad más justa y respetuosa con todas las formas de vida.

El "SELLO ZOOLIDARIO" busca incentivar a las empresas, establecimientos de comercio y servicios a adoptar y mantener políticas y prácticas que favorezcan el bienestar animal, al reconocer públicamente a aquellas entidades que demuestren un compromiso con la

protección animal, se espera motivar a otras a seguir su ejemplo y contribuir a la creación de una cultura de respeto y cuidado hacia los animales.

Para garantizar que el "SELLO ZOOLIDARIO" sea un reconocimiento serio y riguroso, se han establecido criterios claros y específicos para su obtención. Estos criterios incluyen la implementación de políticas de no maltrato, programas de adopción y rescate, prácticas de compra y venta responsables, campañas de educación y sensibilización, y la participación en actividades comunitarias relacionadas con la protección animal.

El "SELLO ZOOLIDARIO" representa un paso significativo hacia la construcción de una ciudad más compasiva y respetuosa con los animales. Al promover y reconocer las buenas prácticas en protección y bienestar animal, estamos fomentando una cultura de respeto y cuidado que beneficiará tanto a los animales como a los ciudadanos de Bogotá.

Para efectos de la interpretación del presente Acuerdo, se entenderá como empresas, establecimientos de comercio y servicios a aquellos que promuevan la protección y el bienestar animal, aquellos que realicen acciones que propendan por la eliminación de la crueldad animal en todas sus formas como el Abandono, Negligencia, Sobreexplotación, Abuso sexual, Maltrato físico y Maltrato emocional.

INICIATIVAS SIMILARES EN OTROS PAÍSES

1. Estados Unidos

a. Animal Welfare Approved (AWA): Un programa de certificación independiente que promueve el bienestar de los animales en las granjas. Los productos que llevan el sello AWA provienen de granjas que cumplen con estrictas normas de bienestar animal.

b. Certified Humane: Un programa de certificación que asegura que los animales de granja son criados bajo condiciones humanas. Las empresas certificadas cumplen con estándares específicos sobre el trato de los animales, alimentación, manejo y transporte.

2. Reino Unido

a. RSPCA Assured: Un esquema de certificación gestionado por la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA). El sello se otorga a productos de origen animal que cumplen con los estándares de bienestar de la RSPCA, garantizando un trato humanitario durante toda la vida del animal.

3. Australia

a. RSPCA Approved Farming Scheme: Similar al del Reino Unido, este programa certifica que los productos animales provienen de granjas que cumplen con los altos estándares de bienestar animal establecidos por la RSPCA Australia.

b. Australian Animal Welfare Certification System (AAWCS): Un sistema que certifica que los mataderos y las instalaciones de procesamiento de carne cumplen con los estándares de bienestar animal.

4. Alemania

a. Tierschutzlabel "Für Mehr Tierschutz": Un sello de bienestar animal otorgado por la organización alemana Tierschutzbund. Hay dos niveles de certificación (básico y premium) que indican diferentes grados de bienestar animal.

5. Suiza

a. Tierschutzlabel (Animal Welfare Label): Un programa respaldado por la organización Swiss Animal Protection (SAP). Certifica productos agrícolas que cumplen con altos estándares de bienestar animal, superiores a los mínimos legales.

6. Nueva Zelanda

a. SPCA Blue Tick: Un programa de certificación administrado por la Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA) de Nueva Zelanda. El sello se otorga a productos que cumplen con estrictos estándares de bienestar animal.

Conclusión

La institucionalización del "SELLO ZOOLIDARIO" se enmarca dentro de una tendencia global de promover el bienestar animal a través de sistemas de certificación y reconocimiento, estos programas no solo aseguran que los animales sean tratados de manera humana y ética, sino que también educan al público y fomentan una mayor conciencia sobre la importancia de la protección animal. Al implementar un programa similar en Bogotá, se alineará la ciudad con las mejores prácticas internacionales en bienestar animal.

3- MARCO JURÍDICO

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79, establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y la obligación del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente.

LEYES

1. **Ley 1774 de 2016**, en su artículo 1, reconoce a los animales como seres sintientes y establece medidas para su protección y bienestar.

Que es deber del Distrito Capital fomentar el respeto y la protección de los animales, promoviendo prácticas que contribuyan a su bienestar y evitando todo tipo de maltrato y crueldad

2. **Ley 84 de 1989** (Estatuto Nacional de Protección de los Animales)

Artículo 1. A partir de la promulgación de la presente Ley, los animales tendrán en todo el territorio nacional especial protección contra el sufrimiento y el dolor, causados directa o indirectamente por el hombre.

Artículo 2. Las disposiciones de la presente Ley, tienen por objeto:

- a) Prevenir y tratar el dolor y el sufrimiento de los animales;
 - b) Promover la salud y el bienestar de los animales, asegurándoles higiene, sanidad y condiciones apropiadas de existencia;
 - c) Erradicar y sancionar el maltrato y los actos de crueldad para con los animales;
 - d) Desarrollar programas educativos a través de medios de comunicación del Estado y de los establecimientos de educación oficiales y privados, que promuevan el respeto y el cuidado de los animales;
 - e) Desarrollar medidas efectivas para la preservación de la fauna silvestre.
3. **Ley 1801 de 2016** (Código Nacional de Policía y Convivencia)
 - a. Artículo 12: Establece la obligación de la protección de los animales y la convivencia responsable con ellos.
 - b. Artículo 101: Contempla medidas correctivas para las conductas que atenten contra la vida e integridad de los animales.

4- **Acuerdo 927 de 2024** – Plan de Desarrollo distrital - “Bogotá camina segura (2024-2027)”

Artículo 59. Fortalecimiento de las capacidades para el bienestar de los animales. Se fortalecerá el escuadrón anti-crueldad, las brigadas médicas, urgencias veterinarias y el centro de atención jurídica PYBA. Igualmente, en aras del entendimiento del impacto en pro del bienestar animal, del control de natalidad de perros y gatos, la Administración Distrital buscará alianzas estratégicas y convenios con actores claves para la atención de animales. Igualmente, teniendo en cuenta la necesidad de robustecer la toma de decisiones para la protección y el bienestar animal, se buscará la integración de sistemas de información para la gestión y análisis de la información y la realización de investigaciones estratégicas.

4. **Estrategia Mundial de Bienestar Animal de 2017** - Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) reconoce la importancia existente entre bienestar animal y el medio ambiente; fijando el objetivo de lograr "un mundo en el que el bienestar de los animales se respete, promueva y avance, de manera que complemente la búsqueda de la sanidad animal, el bienestar humano, el desarrollo socioeconómico y la sostenibilidad del medio ambiente".
5. **Sentencia C-666** la Corte Constitucional de Colombia señaló que, “(...) una concepción integral del ambiente incluye de forma necesaria a los animales, como parte del concepto de fauna que encuentra protección y garantía en la Carta Política. Desde esta visión, se excluye cualquier tipo de concepción meramente utilitarista “que valore a los animales exclusivamente en cuanto recurso, es decir, como elemento de explotación por parte de los seres humanos” (...). Fue así que la Corte Constitucional concluyó que existe un deber de protección animal en cualquiera de sus manifestaciones, dado el rango constitucional con el que cuentan en el ordenamiento jurídico colombiano.
6. **SU-016 de 2020.** Corte Constitucional de Colombia. En este pronunciamiento, la corporación destacó la protección de los animales silvestres como seres sintientes con valor propio y el reconocimiento de la prohibición constitucional al maltrato animal, donde, junto con el imperativo que garantice el bienestar animal, mantiene su postura en afirmar que los animales no son sujetos de derechos.
7. **Sentencia T-742 de 2023.** Corte Constitucional de Colombia. La corte se pronuncia respecto a que en el marco normativo de los animales, se ha tejido una jurisprudencia en la que se reconoce que “(..)(i) existe un deber de protección animal y, por lo tanto, de prohibición de maltrato; (ii) este deber no

solo involucra actos que tienen la potencialidad de poner en riesgo la diversidad y el equilibrio del ecosistema, sino que protege a los animales como sujetos individuales y sintientes; (iii) la protección, además, es diferencial y ponderada en atención al tipo de especie involucrada y (iv) el deber de protección animal tiene un contenido normativo vinculante indiscutible, cuya aplicación, tanto para el Legislador como para los jueces, exige de ejercicios de valoración de la razonabilidad y proporcionalidad (...)".

5- COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

La competencia del Concejo de Bogotá, D.C. para aprobar esta iniciativa se sustenta jurídicamente en el numeral 1 del artículo 12 del Decreto 1421 de 1993, que establece:

DECRETO LEY 1421 DE 1993 – ESTATUTO ORGÁNICO DE BOGOTÁ

ARTÍCULO 12- ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

6- IMPACTO FISCAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003: En cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto y que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivo, los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo".

Con la presente iniciativa se considera que no se compromete asignar apropiaciones presupuestales diferente a las inherentes al desarrollo de las funciones de las entidades enunciadas.

En conclusión, el impacto fiscal del presente proyecto de acuerdo en nada modifica el marco fiscal de mediano plazo presentado por la Administración Distrital.

Atentamente,

CLARA LUCÍA SANDOVAL MORENO

Concejal de Bogotá

Partido Liberal Colombia

PROYECTO DE ACUERDO NO 230 DE 2025

PRIMER DEBATE

PROYECTO DE ACUERDO No. De 2025

“POR EL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL “SELLO ZOOLIDARIO” COMO RECONOCIMIENTO A LAS EMPRESAS, ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO Y SERVICIOS QUE PROMUEVAN LA PROTECCIÓN Y EL BIENESTAR ANIMAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. POR EL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL "SELLO ZOOLIDARIO" como un reconocimiento a las empresas, establecimientos de comercio y servicios en la ciudad de Bogotá, que promuevan activamente la protección y el bienestar animal.

ARTÍCULO 2. EMPRESAS, ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO Y SERVICIOS QUE PROMUEVAN LA PROTECCIÓN Y EL BIENESTAR ANIMAL. Para los efectos de interpretación del presente Acuerdo, se entenderá como empresas, establecimientos de comercio y servicios que promuevan la protección y el bienestar animal aquellos que lleven a cabo acciones destinadas a eliminar la crueldad animal en todas sus formas, incluyendo el abandono, la negligencia, la sobreexplotación, el abuso sexual, el maltrato físico y el maltrato emocional.

ARTÍCULO 3. CRITERIOS Y REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL “SELLO ZOOLIDARIO” para otorgar el Sello Zoolidario se debe cumplir con uno o más de los

siguientes requisitos:

- a) Promover políticas de no maltrato y protección animal.
- b) Realizar y participar en campañas de educación y sensibilización sobre el bienestar animal.
- c) Participar y promover actividades comunitarias relacionadas con la protección animal.
- d) Permitir el ingreso de animales que acompañen a sus dueños cuando visiten estos sitios.
- e) Implementar programas de adopción y rescate de animales.
- f) Adecuar los establecimientos y espacios como amigables con los animales (Pet Friendly) dando cumplimiento a las normas sanitarias y de planeación

ARTÍCULO 4. IMPLEMENTACIÓN. Responsabilidades del Instituto Distrital de Bienestar y Protección Animal:

Dentro de los tres (3) meses siguientes a la promulgación del presente Acuerdo, la Administración Distrital, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en conjunto con el Concejo de la Ciudad, diseñará la imagen del “Sello Zoolidario”. Este sello será implementado por el Instituto de conformidad con lo establecido en este Acuerdo.

1. El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal será el encargado de la supervisión y evaluación del “Sello Zoolidario”. Esto incluye la recepción y procesamiento de solicitudes, la realización de inspecciones, la actualización de la base de datos y la emisión de los sellos.
2. Asimismo, el Instituto será responsable de comunicar a las empresas, establecimientos de comercio y servicios sobre cualquier modificación en los requisitos o procedimientos relacionados con el “Sello Zoolidario”.

ARTÍCULO 5. SEGUIMIENTO Y CONTROL. El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) hará seguimiento a las empresas, establecimientos de comercio y servicios acreditados con el “Sello Zoolidario” cumplan de forma permanente con las condiciones que les permitieron obtenerlo. Para tal fin, el IDPYBA podrá solicitar la información que considere necesaria. En caso de que no se cumplan las condiciones establecidas, el sello podrá ser revocado en cualquier momento.

ARTÍCULO 5. DIVULGACIÓN. La Administración Distrital, a través de las Secretarías de Desarrollo Económico, Ambiente, Gobierno y el Instituto Distrital de Bienestar y Protección Animal, se encargará de promover los requisitos y beneficios para obtener el “Sello

Zoolidario”.

Estas entidades deberán asegurarse de que la información sea ampliamente difundida, utilizando todos los medios de difusión disponibles para alcanzar a las empresas y establecimientos relacionados con la protección y bienestar animal.

ARTÍCULO 6. DURACIÓN DEL SELLO.

PARÁGRAFO 1.

El “Sello Zoolidario” se concederá por un término de tres (3) años contados a partir de la fecha de otorgamiento. Podrá ser renovado siempre y cuando se mantenga y se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Acuerdo.

PARÁGRAFO 2

La renovación del sello se hará a solicitud del establecimiento que ya ha sido acreditado con el Sello Zoolidario.

ARTÍCULO 7. PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN. El Instituto Distrital de Bienestar y Protección Animal proporcionará programas de capacitación y asistencia técnica a las empresas, establecimientos de comercio y servicios que deseen obtener el ‘Sello Zoolidario’. Estos programas estarán enfocados en la implementación de prácticas de bienestar animal y en la mejora continua de las condiciones de los animales bajo su cuidado

PARÁGRAFO. La Administración Distrital, a través del Instituto Distrital de Bienestar y Protección Animal, mantendrá actualizada la base de datos de las empresas, establecimientos de comercio y servicios acreditados con el “Sello Zoolidario”. Esta base de datos podrá ser consultada a través de la página web de la entidad.

ARTÍCULO 9. INCENTIVOS. El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, en coordinación con las entidades competentes, podrá crear incentivos no pecuniarios para fomentar la inscripción de los establecimientos al Sello Zoolidario.

PARÁGRAFO.

Dentro de los incentivos se fomentará la propaganda institucional en las páginas web de las entidades del Distrito y en sus redes sociales para que la ciudadanía y los establecimientos tengan conocimiento y apropiación del Sello Zoolidario

ARTÍCULO 10. INFORME. Anualmente el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal radicará un informe integral al Concejo de Bogotá sobre la implementación de las disposiciones del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 11. VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y Cúmplase

PROYECTO DE ACUERDO NO 231 DE 2025**PRIMER DEBATE****POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 253 DE 2006 «POR EL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL PROGRAMA BOGOTÁ BILINGÜE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES»****EXPOSICIÓN DE MOTIVOS****1. OBJETO**

La presente iniciativa tiene por objeto modificar el Acuerdo 253 de 2006, «Por el cual se Institucionaliza el Programa Bogotá Bilingüe y se dictan otras disposiciones», con el propósito de corregir y precisar el uso del término proyecto por programa. Esta modificación se fundamenta en la distinción entre ambos conceptos: un proyecto corresponde a actividades nuevas con inicio y fin definidos, objetivos específicos y resultados únicos, mientras que un programa agrupa proyectos relacionados que pueden ejecutarse de manera secuencial o paralela, proporcionando un marco más amplio y flexible.

Es importante señalar que, aunque el título del acuerdo utiliza correctamente el término programa, el artículo primero del mismo hace referencia a un proyecto, lo que genera una discrepancia que es necesario corregir.

Además, la modificación incorpora nuevos elementos y conceptos para fortalecer la aplicación y funcionalidad del acuerdo. En este sentido, busca fortalecer las competencias de los docentes del área de inglés y los estudiantes de educación media de las Instituciones Educativas Distritales en equidad, incentivar al estudio de la licenciatura en inglés, fomentar competencias bilingües en el sector empresarial de la ciudad y promover el empleo de los guías de turismo, como oportunidad laboral para los estudiantes.

2. ANTECEDENTES

El presente proyecto de acuerdo registra los siguientes antecedentes, en las vigencias 2022 a 2023 según los informes anuales titulados relación de proyectos de acuerdo - **GNV-FO-007**, Comisiones V04, publicados para dicho periodo que se encuentra en la red interna del Concejo de Bogotá:

Proyecto de Acuerdo	Nombre del Proyecto	Autores	Ponentes	Sentido de la Ponencia	Estado del Proyecto
365 de 2020	"Por el cual se modifica el Acuerdo 253 de 2006 que institucionaliza el programa Bogotá Bilingüe"	H.C. Fabián Andrés Puentes Sierra	H.C. Marco Fidel Acosta Rico y H.C. Carlos Fernando Galán Pachón (Coordinador)	PONENCIA POSITIVA H.C. MARCO ACOSTA RICO; PONENCIA POSITIVA CON MODIFICACIONES H.C. CARLOS FERNANDO GALÁN PACHÓN (Archivado)	ARCHIVADO
619 DE 2022	"Por el cual se modifica el Acuerdo 253 de 2006 que institucionaliza el programa Bogotá Bilingüe"	H.C. Fabián Andrés Puentes Sierra	NA	NA	ARCHIVADO
125 DE 2023	"Por el cual se modifica el Acuerdo 253 de 2006 que institucionaliza el programa Bogotá Bilingüe"	H.C. Fabián Andrés Puentes Sierra	H.C. Emel Rojas Castillo y H.C. Javier Alejandro Ospina Rodríguez (Coordinador)	NA	ARCHIVADO
347 DE 2023	"Por el cual se modifica el Acuerdo 253 de 2006 que institucionaliza el programa Bogotá Bilingüe"	H.C. Fabián Andrés Puentes Sierra	H.C. Emel Rojas Castillo y H.C. Javier Alejandro Ospina Rodríguez (Coordinador)	NA	ARCHIVADO
558 DE 2023	"Por el cual se modifica el Acuerdo 253 de 2006 que institucionaliza el"	H.C. Fabián Andrés Puentes Sierra	H.C. Emel Rojas Castillo y H.C. Javier Alejandro Ospina Rodríguez (Coordinador)	NA	ARCHIVADO

Proyecto de Acuerdo	Nombre del Proyecto	Autores	Ponentes	Sentido de la Ponencia	Estado del Proyecto
	programa Bogotá Bilingüe				

3. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El Cabildo Distrital es competente para estudiar la presente iniciativa con base en las normas que a continuación se citan:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA

El Concejo Distrital de Bogotá D.C. es competente de conformidad con el artículo 12 y 313:

“ARTÍCULO 12. ATRIBUCIONES: *Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley:*

- 1. *Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.*

ARTÍCULO 313. *Corresponde a los concejos:*

- 1. *Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio (...)*
- 10. *Las demás que la Constitución y la ley le asignen.”*

De igual manera, conforme al reglamento interno el Concejo es competente según el artículo 3 y 65:

ACUERDO No. 741 DE 2019

“ARTÍCULO 3. ATRIBUCIONES. *El Concejo de Bogotá, D.C., ejerce las atribuciones, funciones y competencias de conformidad con lo establecido en la Constitución Política, el Estatuto Orgánico para Bogotá, D.C., las leyes especiales, así como las conferidas a las Asambleas Departamentales en lo que fuere compatible con su régimen especial. En ausencia de las normas anteriores, se somete a las disposiciones constitucionales y legales vigentes para los municipios.*

ARTÍCULO 65. INICIATIVA. *Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los Concejales individualmente a través de las Bancadas de manera integrada con otros Concejales o Bancadas y por el Alcalde Mayor, por medio de sus Secretarios, Jefes de Departamento Administrativo o Representantes Legales de las Entidades Descentralizadas.”*

4. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA

BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD

Declaración Universal de Derechos Humanos

Artículo 26

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Artículo 13

1. Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.

Convención Sobre Los Derechos Del Niño Marco Constitucional

Artículo 29

1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:
2. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades;

Constitución Política de Colombia

Artículo 13. *Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin*

ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

Artículo 67. *La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura*

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.

MARCO LEGAL

Ley 115 de 1994, por la cual se expide la ley general de educación

Artículo 23. *Áreas Obligatorias y Fundamentales. Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que*

*necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional. Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios, son los siguientes: 7. Humanidades, lengua castellana e **idiomas extranjeros***". Subrayado y negritas nuestro.

Ley 1651 de 2013, «Por medio de la cual se modifican los artículos 13, 20, 21, 22, 30 y 38 de la Ley 115 de 1994 y se dictan otras disposiciones-ley de bilingüismo».

Mediante esta Ley se modificó la Ley 115 de 1994, en el sentido de establecer como un objetivo en todos los niveles de educación el de «*Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en una lengua extranjera*»⁴⁵ y «*El desarrollo de habilidades de conversación, lectura y escritura al menos en una lengua extranjera.*»⁴⁶

Acuerdo 253 de 2006, «Por el cual se Institucionaliza el Programa Bogotá Bilingüe y se dictan otras disposiciones»

Acuerdo que es objeto del presente proyecto. Este proyecto cuenta con 9 artículos, incluida su vigencia.

Plan Decenal de Educación 2016- 2026⁴⁷

Establece los criterios para la educación preescolar, básica y media referente al currículo, objetivo, metas y lineamientos para la educación superior, meta de currículos pertinentes, meta en formación y desarrollo profesional y meta en formación de los docentes de educación superior.

La educación cumple un papel fundamental en el proceso de desarrollo, tanto desde el punto de vista del crecimiento económico y la competitividad, como desde la perspectiva de ser un instrumento clave de política y protección social.

La medición de la calidad se centró en la aplicación de pruebas nacionales e internacionales. Pese a que se registró un ligero mejoramiento en todas las áreas, sólo una minoría, en el mejor de los casos el 13%, alcanzó niveles superiores en competencias básicas. En las pruebas

⁴⁵ Ley 1651 de 2013, artículo 2º, literal g.

⁴⁶ Ley 1651 de 2013, artículo 2º, literal m.

⁴⁷ https://www.mineduacion.gov.co/1759/articles-392916_recurso_1.pdf

internacionales PISA, TIMMS, y estudios SERCE ILLCE y PIRLS, el desempeño fue, en general, por debajo de la media

(Componentes y acciones 2019 – 2026) Cualificación del sistema educativo en los niveles de básica y media. Meta: se establece sobre los resultados en pruebas externas. (Saber, Pisa, TIMS, etc.)

Programa Nacional de Bilingüismo 2020- 2021⁴⁸

Según expresiones del Ministerio de Educación, el Programa Nacional de Bilingüismo en su objetivo ha buscado fortalecer la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras en los estudiantes en educación preescolar, básica y media. De igual forma, mediante la estrategia Inspiring Teachers, entre 2020 y 2021 se beneficiaron más de 4.800 docentes a través de diplomados y cursos de fortalecimiento de competencias pedagógicas en la enseñanza del inglés. Agrega que a través de otros programas desarrollados a través de plataformas virtuales muchos estudiantes fortalecen sus competencias en inglés a través del juego con la app.

Sistema de evaluación para la calidad educativa en el Idioma Inglés

De acuerdo con varias lecturas de documentos de diversas fuentes, se expresa que la Prueba Saber 11, no se enfoca de manera plena con el programa Colombia Bilingüe.

De acuerdo con LAURA ARELIS HERRERA MORENO, en su Trabajo de Fin de Máster en la Universidad de los Andes del 2018 manifestó que «los docentes de la institución consideran que la prueba Saber 11°

de Inglés propuesta por el ICFES no valora las cuatro habilidades del lenguaje, como lo propone el Programa Colombia Bilingüe, dado que evalúa solamente aspectos de lectura, vocabulario y manejo de formas gramaticales.», dejando claro que resulta difícil tener una comprensión clara de los avances el idioma Inglés de parte de los nuevos bachilleres.

JURISPRUDENCIA

Sentencia T 659 de 2010

La Corte Constitucional respecto del idioma inglés como requisito para graduarse, se refirió a las finalidades en el siguiente sentido:

⁴⁸ <https://educacionrindocuentas.mineducacion.gov.co/pilar-1-educacion-de-calidad/programa-nacional-de-bilinguismo/>

“(i) Pretende que sus estudiantes tengan el dominio de un idioma que en la actualidad reviste notable importancia para el acceso al conocimiento dentro del contexto de la globalización, buscando una mejor preparación académica. (ii). Se ajusta a los postulados de la educación como derecho-deber y además se encuentra en el marco de la autonomía universitaria, la cual permite a las instituciones educativas darse sus estatutos, planes de estudio y programas académicos; (iii). La jurisprudencia ya se ha pronunciado en eventos en los cuales algunos estudiantes pedían la exoneración del requisito del aprendizaje del idioma inglés. En esos casos la Corte destacó que en términos generales los entes universitarios están facultados para establecer este tipo de exigencia para la obtención de un título profesional”.

5. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA

5.1 LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL BILINGÜISMO EN COLOMBIA⁴⁹

La idea de institucionalizar el bilingüismo inició con el Programa Nacional de Bilingüismo 2004-2019, bajo tres objetivos: (i) fortalecer la competitividad mediante el aprendizaje de una segunda lengua, haciendo uso de las nuevas tecnologías; (ii) institucionalizar el bilingüismo como una política educativa que garantice mayores oportunidades laborales y educativas; (iii) responsabilidad del Estado en invertir en aprendizaje-enseñanza de la lengua extranjera.

El Programa de Bilingüismo Nacional estaba cimentado en tres pilares: Lengua, Comunicación y Cultura, en la que se buscó la comunicación de la lengua extranjera, pero preservando la cultura propia, y se fijaron como objetivos los siguientes niveles de competencia:

Población	Nivel de lengua
Docentes que enseñan inglés en la educación básica	B2
Docentes de educación básica primaria y docentes de otras áreas	A2
Estudiantes 11 grado	B1
Egresados de carreras en lenguas	B2-C 1
Egresados de educación superior	B2

Tomado de Altablero, el periódico de un país que educa y que se educa, bases para una nación bilingüe y competitiva, Altablero no. 37, octubre - diciembre 2005

5.1.2 Proyecto para el fortalecimiento del desarrollo de competencias en lenguas extranjeras.

⁴⁹<http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/colombiabilingue/1%20Modelo%20de%20implementaci%C3%B3n%20-%20Completo%20en%20espa%C3%B1ol.pdf>

Son múltiples los proyectos que buscan el fortalecimiento de competencias en lenguas extranjeras, se destacan:

- El de educación superior, procurando que los graduados alcancen el nivel B1 y B2 (2013)⁵⁰
- Formadores Nativos extranjeros, originado en el Programa de voluntarios del plan de bilingüismo del SENA
- El Programa de Educación Intercultural y Bilingüe, que busca proyectar las lenguas extranjeras y la visibilización de lenguas nativas y criollas como escenarios de diversidad e interdisciplinariedad, para la comunicación asertiva y construcción del conocimiento con un enfoque territorial y diferencial que aporte a la formación integral de nuestras niñas, niños y jóvenes.⁵¹

5.2 DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL BILINGÜISMO EN EL DISTRITO

A partir del Acuerdo Distrital 253 de 2006, que institucionaliza en Bilingüismo en Bogotá y que con este proyecto se busca reformar, no hemos conocido un documento que nos acredite la evolución positiva de los estudiantes del Distrito en el idioma inglés, por lo que se hace necesario que se acredite por parte de la Secretaría de Educación con elementos que prueben el avance en el conocimiento y manejo del idioma, garantizando las capacidades para desenvolverse en el manejo del mismo.

Mediante la institucionalización del proyecto Bogotá Bilingüe, los resultados debían verse reflejados en las pruebas saber; no obstante, de acuerdo con expresiones de los mismos docentes, tal como se indica en este documento, este examen no resulta capaz de ofrecer un indicador del conocimiento en el idioma. Así las cosas, debe acreditar la Secretaría de Educación la información fiable sobre los avances, retrocesos o estancamiento de los estudiantes en el idioma inglés.

Sin embargo, la Secretaría de Educación a través de su página web refiere la mejoría del manejo del idioma inglés en las instituciones educativas del Distrito. Afirma que, «*Por primera vez, 69 colegios distritales se ubicaron en las categorías A y A+, en 2023. Un aumento muy importante teniendo en cuenta que en 2022 fueron 57 y en 2021, 51.*».

5.2.2 PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO - BOGOTÁ BILINGÜE - CONCEJO DE BOGOTÁ (2024)

⁵⁰ (Nacional M. d.)

⁵¹ <https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Comunicados/414121:Revitalizacion-de-lenguas-nativas-en-proyectos-educativos-una-oportunidad-para-promover-y-fortalecer-su-uso>

En cuanto al articulado del Plan Distrital de Desarrollo se estableció lo siguiente:

Artículo	Texto
12.7 Programa 22. Bogotá, una ciudad de puertas abiertas al mundo.	El aprendizaje de una lengua extranjera será parte del programa, que además de fortalecer la calidad educativa, permitirá la competitividad para todos en la ciudad. Se lanzará un ambicioso proyecto que combinará diferentes estrategias para llegar tanto a estudiantes como a docentes. Se promoverán mayores y mejores oportunidades comunicativas aprovechando el uso de la tecnología y de distintos medios educativos que permita avanzar hacia una Bogotá Bilingüe como estrategia de competitividad. Se promoverá la inmersión lingüística, transformando las áreas urbanas y rurales de todos los sectores de Bogotá en entornos propicios para el turista.
Artículo 298. Inversiones con cargo al Sistema General de Regalías.	Los siguientes proyectos e iniciativas podrán ser susceptibles de financiación con cargo a los recursos de regalías del Distrito Capital durante la vigencia de este Plan de Desarrollo: 43. Programa de bilingüismo para el sector turístico de Bogotá

264.3. Objetivo 3. Las metas estratégicas correspondientes al objetivo 3.
“Bogotá confía en su potencial” son: 42 a la 51

ID	Objetivo	Nombre Indicador	Fuente de línea base	Año línea base	Valor de la línea base	Meta proyectada 2027
46	3 - Bogotá confía en su potencial	Porcentaje de evaluados que presentan resultados de aprendizaje en los niveles B1 o superior de inglés en las pruebas Saber 11	ICFES - Secretaría de Educación del Distrito	2023	9,0	35,0

5.4. DÍA DISTRITAL DEL BILINGÜISMO

La primera celebración de carácter oficial que tuvo el día del Lenguaje Inglés tuvo lugar en el año 2010, una iniciativa impulsada por la ONU para promover el uso igualitario de las seis lenguas que

se utilizan dentro de la organización y como una manera de celebrar el multilingüismo y la diversidad.⁵²

Aunque el inglés no es el lenguaje más hablado del mundo (por encima están el chino mandarín y nuestra lengua castellana), sí es el lenguaje oficial en más países que cualquiera, por lo que suele considerarse el “lenguaje mundial” no oficial del orbe. Además, es el lenguaje más influyente del mundo; un estudio publicado en el 2012 demostraba que el 80% de las publicaciones científicas existentes se publican en este lenguaje.⁵³

Por tal motivo se escoge el 23 de abril como día para celebrar el día del bilingüismo, día en que la Organización de las Naciones Unidas ONU también conmemora, celebrando el día de la lengua inglesa, cuyo objetivo es reconocer la riqueza cultural e histórica de cada uno de los idiomas oficiales de la ONU.

6. IMPACTO FISCAL

De conformidad con el Artículo 7 de la Ley 819 de 2003, los gastos que genere la presente iniciativa se entenderán incluidos en los presupuestos y en el Plan Operativo Anual de Inversión de la entidad competente.

Es relevante mencionar, para el caso en concreto que no obstante lo anterior, se cita como sustento un pronunciamiento de la Corte Constitucional, en la Sentencia C- 911 de 2007, en la cual se puntualizó que el impacto fiscal de las normas, no puede convertirse en óbice, para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa, es preciso aclarar que la iniciativa contempla que la aplicación de esta sea progresiva en el Distrito, de la siguiente manera:

“En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al Congreso reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que reside en el Congreso de la República, con lo cual se vulnera el principio de separación de las Ramas del Poder Público, en la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo.

Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la actividad legislativa del Congreso de la República conducirán a concederle una forma de poder de veto al ministro de Hacienda sobre las iniciativas de ley en el Parlamento

⁵² <http://www.un.org/es/sections/about-un/official-languages/>

⁵³ <https://www.researchtrends.com/issue-31-november-2012/the-language-of-future-scientific-communication/>

Es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda”

Con fundamento en los anteriores argumentos, consideramos que se cuenta con el presupuesto para el desarrollo y ejecución de la presente iniciativa.

Finalmente, ponemos a consideración del Honorable Concejo de la Ciudad, la presente iniciativa.

Atentamente,

SAMIR BEDOYA PIRAQUIVE

Concejal de Bogotá
Partido Político MIRA

FABIÁN ANDRÉS PUENTES SIERRA

Concejal de Bogotá
Partido Político MIRA
Vocero

PROYECTO DE ACUERDO NO 231 DE 2025

PRIMER DEBATE

PROYECTO DE ACUERDO No. _____ DE 2025

Por medio del cual se modifica el Acuerdo 253 de 2006 «Por el cual se Institucionaliza el Programa Bogotá Bilingüe y se dictan otras disposiciones»

El Concejo de Bogotá, D.C.,

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en particular las conferidas por los Artículos 313 y 322 de la Constitución Política y el Artículo 12 numeral 1 del Decreto Ley 1421 de 1993.

ACUERDA:

Artículo 1. Modifíquese el artículo 1 del Acuerdo Distrital 253 de 2006 el cual quedará así:

Artículo 1. Objeto. Institucionalizar el Programa "Bogotá Bilingüe", de tal forma que la ciudad logre ciudadanos capaces de comunicarse en el idioma inglés con estándares internacionalmente comparables, a fin de contribuir a que Bogotá y el país se inserten en la economía global y en los procesos de comunicación universal y de apertura cultural

Artículo 2. Adiciónese el literal d, e y f al Artículo 2 del Acuerdo 253 de 2006, el cual quedará así:

- a. Lograr una ciudad competitiva y atractiva para el turismo y la inversión internacional.
- b. Liderar una estrategia concertada entre los sectores público y privado para alcanzar niveles de dominio del idioma inglés en los niveles educativo, empresarial, de comunicaciones y urbano - institucional.
- c. Garantizar la competencia comunicativa bilingüe de los estudiantes y docentes de la ciudad, en todos sus niveles.
- d. Promover en los sectores estratégicos de las áreas urbanas y rurales del Distrito Capital, un espacio de utilización y comunicación en un segundo idioma como el inglés, entre los ciudadanos y los visitantes y/o turistas como parte de las estrategias definidas en este acuerdo.**
- e. Implementar señalización visual y auditiva en un segundo idioma como el inglés para orientar a los usuarios extranjeros en las zonas estratégicas y turísticas de la ciudad, al igual que en los establecimientos culturales, históricos y arquitectónicos de Bogotá.**
- f. Fortalecer la enseñanza de un segundo idioma como el inglés a los micro, pequeños y grandes empresarios, emprendedores y tenderos ubicados en puntos estratégicos de la**

ciudad, con el objetivo de impulsar su crecimiento económico, mejorar su competitividad y contribuir al desarrollo local.

Artículo 3. Modifíquese el literal f del Artículo 3 del Acuerdo 253 de 2006 el cual quedará así:

- a. Equidad:** Generar a través de la herramienta del idioma inglés, oportunidades para acceder al conocimiento en condiciones de equidad.
- b. Articulación:** La información y conocimiento en un entorno globalizado es una ventaja competitiva; por esta razón el dominio del idioma inglés deberá integrar el desarrollo económico, educativo y social, mediante las estrategias y planes que se realicen para tal efecto.
- c. Prospección y Visión Estratégica:** Diseñar para un horizonte de mediano y largo plazo, y en él se precisarán los planes, programas, proyectos y acciones específicas para su desarrollo.
- d. Contextualización:** El proyecto se desarrollará en concordancia con la Política Nacional de Bilingüismo y se articulará con los proyectos regionales que tengan que ver con ésta, teniendo en cuenta además las tendencias internacionales que surgen del proceso de globalización.
- e. Territorialización:** Brindará criterios para su aplicación incluyendo las áreas urbanas y rurales del Distrito Capital.
- f. Continuidad: Permanencia en la adopción de lineamientos estratégicos, programas, indicadores y herramientas que evalúen la ejecución, eficiencia e impacto del proyecto.**

Artículo 4. Adiciónese el literal g al Artículo 3 del Acuerdo 253 de 2006 el cual quedará así:

- a. Equidad:** Generar a través de la herramienta del idioma inglés, oportunidades para acceder al conocimiento en condiciones de equidad.
- b. Articulación:** La información y conocimiento en un entorno globalizado es una ventaja competitiva; por esta razón el dominio del idioma inglés deberá integrar el desarrollo económico, educativo y social, mediante las estrategias y planes que se realicen para tal efecto.
- c. Prospección y Visión Estratégica:** Diseñar para un horizonte de mediano y largo plazo, y en él se precisarán los planes, programas, proyectos y acciones específicas para su desarrollo.
- d. Contextualización:** El proyecto se desarrollará en concordancia con la Política Nacional de Bilingüismo y se articulará con los proyectos regionales que tengan que ver con ésta, teniendo en cuenta además las tendencias internacionales que surgen del proceso de globalización.
- e. Territorialización:** Brindará criterios para su aplicación incluyendo las áreas urbanas y rurales del Distrito Capital.

f. Continuidad: Permanencia en la adopción de lineamientos estratégicos, programas, indicadores y herramientas que evalúen la ejecución, eficiencia e impacto del proyecto.

g. Progresividad: Mejoramiento gradual y continuo de las habilidades comunicativas y los niveles del idioma inglés según el marco de referencia de reconocimiento internacional y las metas periódicas que para el efecto establezca el Comité Interinstitucional.

Artículo 5. Adiciónese un inciso al Artículo 4 del acuerdo 253 de 2006 el cual quedará así:

***Educativo:** En sus distintos niveles y ámbitos, desde preescolar, básica primaria y secundaria hasta educación superior.

***Empresarial:** Se tendrán en cuenta los sectores turístico y de servicios de alto valor agregado, y diferentes empresas industriales y comerciales para las cuales represente una ventaja competitiva el tener negocios internacionales.

***Urbano e Institucional:** En la Ciudad - Región, como un espacio de aprendizaje educativo y cultural, se concibe la señalización urbana y rural, el transporte, los museos abiertos, los parques, y demás escenarios públicos como sitios en los cuales se puede realizar un intercambio bilingüe.

***Medios de Comunicación:** Se les convocará para que apoyen todo el proceso con campañas de sensibilización, divulgación y publicidad del proyecto.

***Deportivo y Recreativo: Los sectores deportivos y recreativos, en todos sus niveles, fomentarán espacios de utilización y comunicación del idioma inglés tanto en sus usuarios como visitantes.**

Artículo 6. Modifíquese el Artículo 5 del Acuerdo 253 de 2006, el cual quedará así:

Artículo 5. Líneas de acción: Para el logro de los objetivos previstos en el presente acuerdo, **La Secretaría de Educación liderará la conformación y puesta en funcionamiento de un Comité Interinstitucional que estará integrado por la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Movilidad, Instituto Distrital de Turismo, Fondo de Desarrollo Turístico de Bogotá, entidades distritales, gremios, empresas industriales y comerciales del Estado, organizaciones, instituciones educativas reconocidas legalmente y la sociedad civil, en un término de 6 meses, y fijará metas a corto, mediano y largo plazo en la institucionalización del bilingüismo, para establecer un plan de acción para el cual deberá:**

- a. Establecer acciones conjuntas públicas y privadas que fomenten la práctica y generación de bienes y servicios bilingües, en la gestión e internacionalización del sector productivo en la

capital. **Con preeminencia del sector turístico para posicionar a Bogotá como una ciudad competitiva y atractiva para el turismo y la inversión internacional.**

- b. Promover acuerdos de trabajo conjunto sobre el uso y la utilización de la comunicación bilingüe en espacios urbanos, en servicios públicos **y privados** en el sector de comunicaciones, **y la creación de zonas de interacción bilingüe con la promoción de la participación de visitantes, turistas extranjeros y nacionales.**
- c. Contribuir con iniciativas propias o en alianzas conjuntas que incidan en el entorno bilingüe **de “Bogotá Región”.**
- d. Desarrollar estudios e investigaciones **periódicas en cada uno de los sectores estratégicos, para mejorar el nivel del idioma inglés y fomentar el** bilingüismo en la ciudad.
- e. **Capacitar** a los docentes vinculados a la Secretaría Distrital de Educación en idioma inglés **y su promoción como oportunidad laboral y educativa,** de conformidad con los proyectos que se realicen con fundamento en este programa y modificación, para las exigencias para su vinculación hacia el futuro.
- f. Estructurar un plan específico de capacitación permanente de los profesores del área de idiomas y demás docentes vinculados a la Secretaría de Educación **según estándares internacionales comparables,** hasta lograr un ambiente bilingüe, **que incluya espacios de interacción con angloparlantes extranjeros y/o nacionales mediante convenios con entidades públicas y privadas.**
- g. Estructurar e implementar un ambiente bilingüe en **las Instituciones Educativas Distritales en el sector urbano y rural, garantizando el acceso al idioma inglés como segunda lengua en condiciones de equidad, y promoviendo su uso como oportunidad laboral y educativa en el ámbito nacional e internacional.**
- h. Establecer sistemas que **en equidad** permitan la enseñanza gratuita del inglés para las personas de los estratos 1, 2 **y 3, mediante el uso de herramientas y plataformas virtuales, para facilitar el material pedagógico y didáctico en el desarrollo del segundo idioma.**
- i. **Implementar en el idioma inglés de manera progresiva y complementaria; la señalización vial, de evacuación, salvamento o socorro y de información de la oferta de servicios en el servicio de transporte público y en las entidades del Distrito que prestan servicios de turismo.**

- j. Estructurar oficinas de turismo en los puntos claves de la ciudad, para brindar una información detallada y completa de los bienes y servicios ofertados en idioma inglés, con espacios de comunicación entre los visitantes y turistas extranjeros y nacionales.
- k. Promover intercambios internacionales con docentes extranjeros que realicen actividades relacionadas con la enseñanza del inglés en los sectores estratégicos priorizados en este acuerdo.
- l. Promover el acceso a programas de Educación Superior relacionados con la enseñanza del inglés.
- m. Promover el acceso a programas de formación continua relacionada con el desarrollo de competencias de enseñanza bilingüe.
- n. Capacitar a los micronegocios y tenderos de zonas estratégicas de la ciudad en el uso del idioma inglés para incentivar el desarrollo económico y el intercambio cultural.

PARÁGRAFO 1°. Para la implementación de este artículo, la administración diseñará, elaborará, implementará y desarrollará los proyectos que de acuerdo con los estudios y necesidades requiera, para el logro de los objetivos de este programa y conforme estándares internacionales comparables.

PARÁGRAFO 2°. La Administración Distrital reglamentará lo relacionado con la organización y funciones del Comité Interinstitucional, así como los mecanismos de convocatoria, selección y designación.

Artículo 7. Modifíquese el Artículo 7 del Acuerdo 253 de 2006 el cual quedará así:

Artículo 7. Responsables. La ejecución del programa “Bogotá bilingüe” se hará bajo el liderazgo de la Secretaría de Educación en coordinación con la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y la Secretaría de Movilidad, y con las demás entidades distritales, además de las sociedades de economía mixta y del sector privado.

Artículo 8. Modifíquese el Artículo 8 del Acuerdo 253 de 2006 el cual quedará así:

Artículo 8. Promoción de campañas. La Secretaria Distrital de Educación, en asocio con la Secretaría Distrital de Gobierno y la Secretaría de Desarrollo Económico adelantará campañas pedagógicas en la ciudad, con el fin de que la ciudadanía, se haga partícipe de los

programas y proyectos que la administración adelante en virtud de este acuerdo, **incentivando al aprendizaje, fortalecimiento y continuidad en el estudio del idioma inglés, para mejorar las competencias e impulsar las labores de guía turística, intérprete y docencia.**

Artículo 9. Día del Bilingüismo. Institucionalizar el 23 de abril de cada año como el día del bilingüismo (**Bilingual Day**) en el Distrito de Bogotá como una jornada institucional, lúdica, recreativa y de interacción social que permita la celebración de este día en todas las instituciones y entidades públicas del Distrito.

Artículo 10. Comisión Permanente de Seguimiento al Programa Bogotá Bilingüe. El Concejo conformará una Comisión Permanente de Seguimiento al cumplimiento del Programa Bogotá Bilingüe, conformada por diez (10) concejales de diferentes Bancadas, la que se reunirá mínimo dos veces al año, encargada de verificar la ejecución y el cumplimiento del Programa Bogotá Bilingüe y dará las recomendaciones que se requieran a fin de la efectividad del programa. La Secretaría de Educación del Distrito presentará dos informes anuales de ejecución del programa a la Comisión, el primero, la última semana del mes de mayo y el segundo, la última semana del mes de noviembre.

Artículo 11. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga todas aquellas disposiciones que le sean contrarias.

PROYECTO DE ACUERDO NO 232 DE 2025**PRIMER DEBATE**

“POR MEDIO DEL CUAL SE PROMUEVE LA COOPERACIÓN SOCIAL ENTRE EL SECTOR INTERRELIGIOSO Y EL DISTRITO CAPITAL, SE CREA EL SISTEMA DISTRITAL DE LIBERTAD RELIGIOSA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**1. OBJETO**

Promover la cooperación social entre el sector interreligioso y el Distrito Capital y crear el Sistema Distrital de Libertad Religiosa en Bogotá. A partir de esto la ciudad de Bogotá asume compromisos permanentes para la cooperación entre las autoridades distritales, las entidades religiosas con personería jurídica y/o las organizaciones sociales del sector interreligioso, para contribuir a la libertad religiosa y de cultos.

2. INICIATIVA Y COMPETENCIA

En virtud de lo establecido en el Decreto Ley 1421 de 1993, el Concejo es competente para establecer lineamientos en los asuntos definidos en los siguientes artículos.

“Artículo. - 8. Funciones generales. El Concejo es la suprema autoridad del Distrito Capital. En materia administrativa sus atribuciones son de carácter normativo. También le corresponde vigilar y controlar la gestión que cumplan las autoridades distritales.” (...)

“Artículo 12º. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

1. *Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.*

(...)

25. *Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes.”*

3. CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD- MARCO NORMATIVO

El marco normativo nacional y distrital relacionado con las libertades de religión, culto y conciencia. La Constitución Política de 1991 en su artículo 19 contempla que *“Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”*.

En concordancia con el artículo constitucional, la Ley Estatutaria 133 de 1994 *“por la cual se desarrolla el Decreto de Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política”* menciona algunos componentes relevantes sobre este derecho y el rol del Estado como facilitador de la participación de iglesias y confesiones religiosas en la sociedad sin que esto implique que alguna iglesia o confesión religiosa sea oficial o estatal.

En términos de política pública, el Decreto 437 de 2018 *“Por el cual se adiciona el Capítulo 4 al Título 2 de la Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, denominado Política Pública Integral de Libertad Religiosa y de Cultos”*, reconoce el enfoque y la labor social del sector interreligioso en la sociedad colombiana mencionando que las entidades y organizaciones interreligiosas son agentes de cohesión social y reconstructores del tejido social, además, que su labor aporta al perdón, la reconciliación y la paz.

En el Decreto Distrital 093 de 2018 *“Por el cual se crea la Política Pública Distrital de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia, para el Distrito Capital”* el componente social también es de gran relevancia, se menciona al sector religioso como aliado estratégico para la puesta en marcha de las líneas de trabajo de la Plataforma Interreligiosa para la Acción Social; en el CONPES 12 D.C de 2019 que adopta el plan de acción de esta política pública, se contemplan productos de implementación de la política estrechamente relacionados con lo social y específicamente relacionados con el trabajo articulado y de cooperación que se puede dar entre el Estado y el sector interreligioso.

En el artículo 312 de ley 2294 de 2023 se crea el Sistema Nacional de Libertad Religiosa, de Cultos y Conciencia, Diálogo Social, Paz Total, Igualdad y No Estigmatización - SINALIBREC. Este es un avance importante en el nivel nacional, puesto que está conformado por las entidades públicas nacionales y territoriales relacionadas con los planes, programas y proyectos que tienen que ver con la implementación de la Política Pública Nacional de Libertad Religiosa, de Cultos y de Conciencia. Además, menciona la importancia de las instancias de participación del sector interreligioso como el Comité Nacional de Participación y Diálogo Social e Intersectorial de Libertad Religiosa, la Mesa Nacional del Sector Religioso, los Comités y las mesas territoriales de

libertad religiosa con el fin de promocionar el diálogo multi-temático y multisectorial.

El Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Camina Segura 2024-2027 adoptado mediante el Acuerdo 927 de 2024 contempla varias líneas de acción en materia de libertad religiosa, en este marco se destaca el artículo 101 que crea el Banco de Proyectos de Cooperación para la Libertad Religiosa, una iniciativa que será reglamentada por la administración distrital y que podrá ser financiada por diversas fuentes, entre ellas, recursos de inversión públicos y privados, donaciones o recursos de cooperación nacional e internacional.

4. ANTECEDENTES

Este proyecto de acuerdo fue presentado en marzo del año 2024 y fue desarchivado para las sesiones ordinarias de agosto y noviembre del mismo año:

Número	Título	Ponentes	Estado
202 de 2024	<i>“Por medio del cual se establecen lineamientos para promover la cooperación social entre el sector interreligioso y el Distrito Capital”</i>	N/A	Archivado
511 de 2024	<i>“Por medio del cual se establecen lineamientos para promover la cooperación social entre el sector interreligioso y el Distrito Capital”</i>	H.C. Julián Uscátegui Pastrana (Coordinador) - Ponencia positiva con modificaciones H.C. Clara Sandoval - Ponencia positiva sin modificaciones	Archivado
843 de 2024	<i>“Por medio del cual se establecen lineamientos para promover la cooperación social entre el sector interreligioso y el Distrito Capital”</i>	H.C. Julián Uscátegui Pastrana (Coordinador) - Ponencia positiva con modificaciones H.C. Clara Sandoval - Ponencia positiva sin modificaciones	Archivado

5. CONVENIENCIA

El proyecto tiene como propósito fortalecer las acciones relacionadas con la cooperación entre el Estado y las comunidades religiosas, especialmente, por el aporte social que estas realizan y por la contribución al cumplimiento de indicadores y metas clave para el Distrito Capital. El sector

interreligioso desarrolla iniciativas para el fortalecimiento del tejido social y acompañamiento psicoespiritual a la ciudadanía en general.

Promover la cooperación social entre el sector interreligioso y el Distrito Capital adquiere pertinencia, debido a su impacto en toda la ciudadanía y a los alcances que permiten el fortalecimiento del tejido social. Facilitar la cooperación social con el sector interreligioso puede potenciar las acciones que ya se están realizando y generar mayores impactos y beneficios para la ciudadanía en el Distrito Capital.

Las entidades religiosas, iglesias, denominaciones, confesiones, fundaciones y otro tipo de organizaciones del sector religioso se han constituido como aliados estratégicos del distrito capital para el fortalecimiento de acciones sociales, como lo demuestra el estudio *“Indagación empírica para el levantamiento de la línea base de la Política Pública Distrital de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia”*, el cual brinda un panorama sobre el hecho religioso en la ciudad con aportes de distintos académicos y profesores que conforman la Mesa Técnica de Universidades sobre el Hecho Religioso en Bogotá.

De acuerdo con lo anterior, se ha demostrado que el sector interreligioso realiza más de 1.7 millones de atenciones a la ciudadanía de forma mensual, equivalente aproximado a \$156 mil millones en inversión social mensual y \$1.8 billones anuales en acciones sociales y de atención psicoespiritual.

Las acciones de política pública están formuladas para crear alianzas estratégicas que generan mayores impactos y resultados en las actividades realizadas por parte de las entidades y organizaciones interreligiosas en seis componentes de acción:

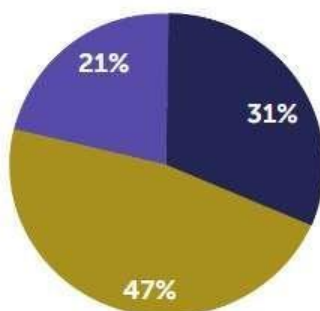
- a. Movimiento Interreligioso a favor de la Niñez
- b. Red Servir – atención Humanitaria y Migrante
- c. Red de Empleo y Emprendimiento
- d. Red Interreligiosa a favor de la Persona Mayor
- e. Red Interreligiosa por el Ambiente
- f. Red Joven

Cada uno de estos componentes de acción social agrupa entidades del sector religioso, sus talentos humanos asociados como voluntarios en todas las disciplinas del conocimiento, profesionales de la salud, expertos en acompañamiento espiritual, psicosocial y así mismo, otro tipo de recursos que se articulan para realizar labores sociales a diario en la ciudad.

Por citar un ejemplo, se menciona que, para el Distrito Capital el 78% de la ciudadanía considera “importante” o “muy importante” fomentar el diálogo interreligioso. Esto hace que las acciones de cooperación social del sector religioso sean de gran relevancia para la ciudad, con el fin de sumar los esfuerzos realizados por el Estado y el sector interreligioso a favor de la ciudadanía en términos sociales.

Figura 1. Importancia para la ciudad de fomentar el diálogo interreligioso y el respeto a las diferencias de credo.

■ Muy importante ■ Importante ■ No tiene relevancia



Fuente: Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia

4.1. Aporte social del sector Interreligioso¹.

El aporte del sector religioso, tiene como propósito fortalecer y potenciar aquellas iniciativas provenientes del sector interreligioso en Bogotá relacionadas con aspectos de fortalecimiento del tejido social y aporte psicoespiritual a la ciudadanía en general.

¹ Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia (2022). Estudio completo del aporte social del sector religioso. Link de consulta:

https://historico.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/imagenes/estudio_aporte_social_completo_sector_religioso.pdf

Por su parte, la Secretaría Distrital de Gobierno, a partir de los datos del registro de reapertura de lugares de culto de 2020, señala que el sector interreligioso en la ciudad de Bogotá cuenta con más de 2.000 lugares de culto distribuidos en todas las localidades. Secretaría Distrital de

Gobierno (2022). Estudio completo aporte social del sector religioso en Bogotá (Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia, 2022).

El artículo 67 del Acuerdo 761 de 2020, resalta la necesidad de emprender acciones que promuevan la articulación intersectorial, interinstitucional y territorial para la garantía y goce efectivo del ejercicio del derecho a la libertad religiosa, de cultos y conciencia en Bogotá, específicamente:

“Artículo 67. Aportes Sociales de las Entidades y Organizaciones del Sector Religioso. El Gobierno Distrital con la coordinación de la Secretaría Distrital de Gobierno, emprenderá acciones que promuevan la articulación intersectorial, interinstitucional y territorial para la garantía y goce efectivo del ejercicio del derecho a la libertad religiosa, de cultos y conciencia en Bogotá. Para tal efecto realizará las acciones que permitan caracterizar la labor social, cultural, educativa, de salud, de convivencia, de paz y reconciliación de las Entidades Religiosas y Organizaciones del Sector Religioso en el marco de la política pública de libertad religiosa y de cultos nacional y distrital, con el propósito que dichos aportes contribuyan al cumplimiento de las metas del presente Plan Distrital de Desarrollo”.

Este esfuerzo se ha visto reflejado, entre otros, en el fortalecimiento de los Comités de Libertad Religiosa creados mediante el Acuerdo 685 de 2017. Según datos de la Subdirección de Asuntos de Libertad y de Conciencia para la vigencia 2022 se encontraban creados, instalados y operando 19 comités y 1 comité creado en etapa de inscripción, evidenciando cubrimiento en todas las localidades de la ciudad.

Figura 2. Comités de Libertad Religiosa en las Localidades de Bogotá, con sus actos administrativos de creación.



Como se mencionó anteriormente, el sector interreligioso realiza más de 1.7 millones de atenciones a la ciudadanía de forma mensual, equivalente aproximado a \$156 mil millones en inversión social mensual y \$1.8 billones anuales en acciones sociales y de atención psicoespiritual.

La Subdirección de Asuntos de Libertad y de Conciencia de la Secretaría de Gobierno clasificó los aportes en tres categorías principales con el fin de describir las cifras presentadas, así:

a) Categoría Social

Esta categoría se compone de dieciocho (18) subcategorías que tienen como base la entrega de ayudas o realización de programas de capacitación y formación a todos los grupos poblacionales que son realizadas por el sector religioso. Es importante tener en cuenta que en un (1) mes se puede llegar a 1’586.499 atenciones o entrega de ayudas sociales, lo que equivale a \$ 124.072.381.272. El detalle de esta valoración del aporte del sector religioso, se presenta a continuación:

Tabla 1. Aporte del Sector Interreligioso, categoría social

CATEGORÍA: SOCIAL					
Atención	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	%	
Ayuda Humanitaria (mercados y elementos de primera necesidad)	575.137	\$ 87.500	\$ 50.324.487.500	41%	
Ayuda económica esporádica	15.449	\$ 160.000	\$ 2.471.840.000	2%	
Programas sociales en educación	83.140	\$ 116.415	\$ 9.678.743.100	8%	
Programas sociales en salud.	83.886	\$ 34.612	\$ 2.903.462.232	2%	
Programas deportivos y culturales	48.137	\$ 19.229	\$ 925.637.592	1%	
Atención al adulto mayor	7.329	\$ 125.000	\$ 916.125.000	1%	
Programas de formación religiosa para el ciudadano (diplomados, cursos, foros)	40.177	\$ 20.125	\$ 808.548.063	1%	
Programas enfocados a los jóvenes	31.037	\$ 9.101	\$ 282.461.252	0%	
Programas sociales en vivienda (Subsidios, Mejoramientos, entrega de vivienda)	616	\$ 9.161.250	\$ 5.643.330.000	5%	
Respuesta a emergencias y catástrofes	559.651	\$ 75.000	\$ 41.973.825.000	34%	
Programas para la Niñez	34.285	\$ 45.298	\$ 1.553.033.940	1%	
Desarrollo sostenible (Siembra de árboles, reciclaje, ambiente)	9.888	\$ 5.088	\$ 50.307.368	0%	
Programas de equidad de género	48.838	\$ 30.204	\$ 1.475.102.613	1%	
Programas de atención al migrante y a víctimas de desplazamiento forzado	10.235	\$ 87.500	\$ 895.562.500	1%	
Programa de atención a Población en situación de adicción	4.378	\$ 208.208	\$ 911.535.630	1%	
Programas de atención a población habitante de calle	4.224	\$ 123.571	\$ 521.965.789	0%	
Programas de atención a población en establecimiento carcelario	27.492	\$ 89.873	\$ 2.470.798.246	2%	
Programas de atención a población en condición de discapacidad	2.600	\$ 102.160	\$ 265.615.447	0%	
TOTAL	1.586.499		\$ 124.072.381.272	100%	

Fuente: Subdirección de Asuntos de Libertad y de Conciencia. Secretaría Distrital de Gobierno.

b) Categoría de empleabilidad

Esta categoría está conformada por tres (3) subcategorías que pretenden crear espacios y darle herramientas a cada uno de los beneficiados para la consecución de empleo. De igual manera, busca fomentar las distintas formas de emprendimiento. De esta manera las tres subcategorías de acciones de empleo y empleabilidad con 20.514 atenciones en promedio en el mes, lo cual representa un total de \$ 20.481.550.033.

Tabla 2. Aporte del Sector Interreligioso, categoría empleabilidad

CATEGORÍA: EMPLEABILIDAD					
Atención	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	%	
Programas de formación para el trabajo.	6.517	\$ 14.466	\$ 94.273.813	0,5%	
Gestión de bolsa de empleo.	7.219	\$ 7.380	\$ 53.276.220	0,3%	
Apoyo a emprendimientos (actividades de producción y comercialización)	6.778	\$ 3.000.000	\$ 20.334.000.000	99,3%	
TOTAL	20.514		\$ 20.481.550.033	100%	

Fuente: Subdirección de Asuntos de Libertad y de Conciencia. Secretaría Distrital de Gobierno.

c) Categoría Psicoespiritual

Esta categoría agrupa las ayudas psicoespirituales, labor que es de vital importancia para mantener una estabilidad dentro de la sociedad del Distrito Capital, específicamente de las comunidades que profesan alguna creencia religiosa. Está conformada por seis (6) subcategorías, lo que compone un total de 143.018 atenciones, lo que representaría inversiones alrededor de \$ 11.476.955.552.

Tabla 3. Aporte del Sector Interreligioso, categoría psicoespiritual.

Atención	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	%
Asistencia Espiritual en honras fúnebres / Duelos	7.830	\$ 100.000	\$ 783.000.000	7%
Asistencia Espiritual en situaciones de crisis personales.	23.257	\$ 80.000	\$ 1.860.560.000	16%
Asistencia Psicosocial	4.910	\$ 100.000	\$ 491.000.000	4%
Asistencia Espiritual en el fortalecimiento Familiar. (# de familias y ocasiones de atención)	25.294	\$ 120.000	\$ 3.035.280.000	26%
Formación en acciones de convivencia y respeto (Ética y Valores.)	33.208	\$ 20.125	\$ 668.311.000	6%
Acciones de promoción de paz, perdón y reconciliación.	48.519	\$ 95.608	\$ 4.638.804.552	40%
TOTAL	143.018		\$ 11.476.955.552	100%

Fuente: Subdirección de Asuntos de Libertad y de Conciencia. Secretaría Distrital de Gobierno.

6. IMPACTO FISCAL

De conformidad con el artículo 7° de la Ley 819 de 2003, establece lo siguiente: *Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.*

La presente iniciativa no genera impacto fiscal puesto que se encuentra en el marco de lo dispuesto en las metas del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Segura 2024-2027 además, todo lo relacionado con el Banco de Proyectos de Cooperación de Libertad Religiosa se encuentra incluido en el proyecto de Inversión 7988 “Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos y de libertad religiosa y de conciencia en Bogotá D.C.”.

Por lo anterior, los gastos que genere la presente iniciativa se entenderán incluidos en los

presupuestos y en el Plan Operativo Anual de Inversión de las entidades competentes. Es relevante mencionar, para el caso en concreto, que la Sentencia C-911 de 2007 de la Corte Constitucional puntualizó que el impacto fiscal de las normas no puede convertirse en óbice, para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa.

Atentamente,

BANCADA PARTIDO POLÍTICO MIRA

SAMIR BEDOYA PIRAQUIVE

Concejal de Bogotá

Partido Político MIRA

FABIÁN ANDRÉS PUENTES SIERRA

Concejal de Bogotá

Partido Político MIRA

PROYECTO DE ACUERDO NO 232 DE 2025

PRIMER DEBATE

PROYECTO DE ACUERDO No. DE 2025

“Por medio del cual se promueve la cooperación social entre el sector interreligioso y el Distrito Capital, se crea el Sistema Distrital de Libertad Religiosa y se dictan otras disposiciones”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D. C.

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confieren el artículo 12 de la Ley 1801 de 2016, y los numerales 1°, 8° y 18° del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993

ACUERDA:

Artículo 1. Objeto. Promover la cooperación social entre el sector interreligioso y el Distrito

Capital y crear el Sistema Distrital de Libertad Religiosa en Bogotá. A partir de esto la ciudad de Bogotá asume compromisos permanentes para la cooperación entre las autoridades distritales, las entidades religiosas con personería jurídica y/o las organizaciones sociales del sector interreligioso, para contribuir a la libertad religiosa y de cultos.

Artículo 2. Deberes del Distrito Capital. El Distrito Capital, en cabeza del Alcalde Mayor y de los secretarios distritales de Gobierno, Hacienda y Planeación, llevará a cabo las siguientes responsabilidades a nivel Distrital:

- a) Incorporar en los Planes de Desarrollo Distrital acciones y metas específicas relacionadas con cooperación social para la libertad religiosa.
- b) Implementar el Banco de Proyectos de Cooperación para la Libertad Religiosa como componente estratégico de la Política Pública Distrital de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia.
- c) Establecer líneas de inversión en los presupuestos participativos de la ciudad que se relacionen con la cooperación para la libertad religiosa y el fortalecimiento del aporte social del sector religioso, de conformidad con lo previsto en los artículos 90 a 93 de la Ley 1757 de 2015 y el Acuerdo Distrital 878 de 2023.
- d) Establecer, reconocer y asistir los espacios de diálogo social, interreligioso y multitemático para lo cual se facilitará la permanente atención e interlocución por parte de todas las entidades del nivel central y descentralizado del Distrito Capital con los líderes y representantes del sector religioso.
- e) Realizar rendición de cuentas sobre la implementación del Banco de Proyectos de Cooperación para la Libertad Religiosa ante la ciudadanía en general y los comités de libertad religiosa del Distrito Capital

Artículo 3. Promoción de proyectos de cooperación para la libertad religiosa. El Distrito Capital promoverá el desarrollo de la cooperación con el sector interreligioso y/o entidades religiosas con personería jurídica. La cooperación social para la ejecución de acciones sociales podrá desarrollarse en el marco de las siguientes líneas estratégicas:

- a) Atención social a comunidades vulnerables.
- b) Promoción de la asistencia espiritual en centros asistenciales y sociales.

- c) Generación de capacidades y emprendimiento comunitarios.
- d) Acciones de promoción del respeto frente a situaciones de victimización y hostigamiento por motivos de las creencias religiosas.
- e) Investigación sobre el hecho social religioso y acciones de divulgación para la promoción de los valores y los principios éticos y morales.
- f) Fortalecimiento de instancias de participación ciudadana del sector interreligioso
- g) Encuentros de especialistas académicos y fortalecimiento del diálogo social, interreligioso y multitemático para fomentar el respeto por la libertad religiosa, de cultos y conciencia en las localidades

Artículo 4. Principios de la cooperación para la libertad religiosa. La cooperación para la libertad religiosa entre el Distrito Capital y el sector interreligioso y/o entidades religiosas con personería jurídica tendrá los siguientes principios:

- a. Desarrollo comunitario:** promover el desarrollo comunitario en los contextos más vulnerables.
- b. Generación de capacidades y emprendimiento comunitarios:** fomentar capacidades propias de las comunidades y estimular el emprendimiento y sostenibilidad de las mismas.
- c. Participación ciudadana:** garantizar la participación ciudadana en la implementación de la cooperación social.
- d. Orientación a la libertad religiosa:** contribuir al desarrollo del derecho fundamental a la libertad religiosa como propósito principal.

Artículo 5. Sistema Distrital de Libertad Religiosa. Créase el Sistema Distrital de Libertad Religiosa que tendrá como propósito articular acciones interinstitucionales y promover la cooperación social con el sector interreligioso en Bogotá.

Artículo 6. Integración. El Sistema Distrital de Libertad Religiosa estará integrado por las siguientes entidades:

- 6.1 La Secretaría Distrital de Gobierno
- 6.2 La Secretaría General de la Alcaldía Mayor
- 6.3 El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
- 6.4 La Secretaría Distrital de Planeación

6.5 La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

6.6 La Secretaría Distrital de Educación

6.7 La Secretaría Distrital de Salud

6.8 La Secretaría Distrital de Integración Social

6.9 La Secretaría Distrital de Hacienda

6.10 Los Comités Locales de Libertad Religiosa

6.11 El Comité Distrital de Libertad Religiosa

Artículo 7. Reglamentación. El Gobierno Distrital reglamentará en un plazo de 6 meses el funcionamiento del Sistema Distrital de Libertad Religiosa y establecerá espacios de interlocución interinstitucionales y de diálogo con el sector interreligioso para tomar decisiones y desarrollar acciones que permitan la cooperación entre el Distrito Capital y las entidades religiosas con personería jurídica y/o las organizaciones sociales del sector interreligioso, para contribuir a la libertad religiosa y de cultos.

Artículo 8. Informes. La administración distrital presentará al Concejo de Bogotá un informe en el mes de julio de cada año sobre los avances en la implementación del presente acuerdo.

Artículo 9. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PROYECTO DE ACUERDO NO 233 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD, BIENESTAR Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES EN LAS ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO”****EXPOSICIÓN DE MOTIVOS****1. OBJETIVO DEL PROYECTO DE ACUERDO**

El objetivo de este proyecto de acuerdo es dictar lineamientos de seguridad y salud en el trabajo de todos los trabajadores del sistema, con el propósito de proteger su integridad, salud y bienestar, mejorando las condiciones laborales y promoviendo un entorno de trabajo seguro y digno.

El objetivo de este proyecto es establecer los lineamientos y normas jurídicas pertinentes en materia de seguridad y salud en el trabajo para todos los colaboradores del sistema TransMilenio, con el fin de garantizar la protección de su integridad física, psíquica y emocional, así como su bienestar general. A través de la implementación de estas disposiciones, se busca cumplir con las obligaciones legales establecidas en la normativa nacional e internacional en la materia, procurando la mejora continua de las condiciones laborales. Asimismo, se pretende promover un entorno de trabajo seguro, saludable y digno, que respete los derechos fundamentales de los trabajadores, conforme a lo dispuesto por la Constitución, las leyes laborales y los convenios internacionales suscritos en materia de seguridad y salud en el trabajo, garantizando la prevención de riesgos laborales y el cumplimiento de las obligaciones del empleador en cuanto a la creación de un ambiente adecuado y la protección de la vida y la salud de los empleados.

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO

El Sistema TransMilenio, como eje central de la movilidad urbana en Bogotá, no solo representa un espacio vital para la conectividad de millones de ciudadanos, sino también un entorno laboral para miles de trabajadores que, diariamente, desempeñan funciones críticas en las estaciones del sistema. Este proyecto de acuerdo tiene como propósito garantizar la adopción de lineamientos de seguridad y salud en el trabajo (SGST) para

dichos empleados, con el objetivo de proteger su integridad, mejorar sus condiciones laborales y fomentar un ambiente de trabajo seguro y digno.

Para justificar la necesidad de este proyecto, se consideran los siguientes referentes que amplían y fundamentan la problemática relacionada con la salud y el bienestar de los trabajadores del Sistema de TransMilenio:

2.1. Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2013-2021

En el año 2014 se expidió la Resolución 6045 por la cual se adoptó el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2013-2021.⁵⁴

Para la implementación de este Plan Nacional se contemplaron cuatro estrategias a saber:

1. Fomento de la transversalidad de la Seguridad y la Salud en el Trabajo en el conjunto de políticas públicas.
2. Fortalecimiento institucional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
3. Fortalecimiento de la promoción de la seguridad, de la salud de los trabajadores y la prevención de los riesgos laborales
4. Optimización y garantía del reconocimiento de las prestaciones al trabajador en el sistema general de riesgos laborales

Las metas en su conjunto están orientadas a:

1. Avanzar en la protección social de los trabajadores, en el marco de una cultura preventiva articulada con las políticas públicas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Fortalecer el Sistema General de Riesgos Laborales a través del diálogo tripartito y de acciones de inspección, vigilancia y control
3. Lograr la estructuración de Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en aras a lograr mejores resultados en prevención de accidentes y enfermedades laborales, propendiendo por un trabajo decente.
4. Fortalecer las acciones tendientes a la oportunidad de las prestaciones del Sistema General de Riesgos Laborales.

⁵⁴ <https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-laborales/plan-nacional-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-2013-2021>

Con respecto al seguimiento del plan se observa que el Sistema General de Riesgos Laborales de Colombia ha tenido desarrollos y avances importantes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2.2. Sistema de seguridad y salud en el trabajo.

El **Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST)** se define como el conjunto de principios, normas, procedimientos, estructuras y recursos destinados a la identificación, prevención, control y gestión de los riesgos laborales, con el fin de proteger la salud, seguridad e integridad física y psíquica de los trabajadores. Este sistema tiene como objetivo garantizar condiciones laborales seguras y saludables, promoviendo la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales, así como el bienestar general de los empleados. Está compuesto por políticas, estrategias y acciones que deben ser implementadas por el empleador, en cumplimiento con las normativas legales vigentes, las cuales establecen obligaciones tanto para los empleadores como para los trabajadores en cuanto a la protección y preservación de la salud en el ámbito laboral.

Al respecto, mediante Decreto 1072 de 2015 Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6, el Ministerio del Trabajo comprometido con las políticas de protección de los trabajadores colombianos y en desarrollo de las normas y convenios internacionales, estableció el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual debe ser implementado por todos los empleadores y consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales.⁵⁵

El sistema de gestión aplica a todos los empleadores públicos y privados, los trabajadores dependientes e independientes, los trabajadores cooperados, los trabajadores en misión, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales, las agremiaciones y asociaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral; las administradoras de riesgos laborales; la Policía Nacional en lo que corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las Fuerzas Militares.⁵⁶

⁵⁵ <https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-laborales/sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo>

⁵⁶ Ibid

Teniendo en cuenta estos principios del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo se hace indispensable que la entidad de TransMilenio debe ajustarse a estos lineamientos con el propósito de velar por la salud, el bienestar y la seguridad de sus trabajadores.

2.3. Objetivos de desarrollo sostenible

Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), fueron adoptados por las Naciones Unidas en 2015, reconocidos como objetivos globales para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el 2030 las personas gocen de paz y prosperidad.

En el marco de la necesidad de este proyecto de acuerdo, es importante tener en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), los cuales proporcionan un marco estratégico para abordar los desafíos globales y locales, mejora la calidad de vida de todas las personas y la perspectiva que tienen las personas en todo el mundo.

La Organización de las Naciones Unidas implementó 17 objetivos de desarrollo sostenible, los cuales están integrados, durante su desarrollo e implementación deben equilibrar la sostenibilidad social, ambiental y económica donde la creatividad, el conocimiento y los recursos financieros son necesarios para alcanzar los objetivos en todos sus aspectos.

Este proyecto de acuerdo se enfoca en cuatro de los objetivos de desarrollo sostenible⁵⁷:

Objetivo N° 3 Salud y bienestar: Su enfoque principal es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las personas a lo largo del ciclo de la vida, lograr un desarrollo sostenible, tiene un amplio vínculo con la seguridad y salud en el trabajo.

“Meta 3.4 Para el 2030 reducir las enfermedades no transmisibles. En el lugar de trabajo es un lugar clave para prevenir las enfermedades no transmisibles, para promover el bienestar de los trabajadores fomentando el equilibrio y prácticas correctas de vida en el área laboral”.

“Meta 3.9 Para el 2030 reducir significativamente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos, peligrosos, contaminación del aire, agua, suelo, ya que las muertes y enfermedades pueden estar relacionadas o tener su origen en el trabajo”.

La seguridad y salud en el trabajo están orientados a mitigar riesgos y prevenir accidentes y enfermedades laborales uniéndose con las mejores prácticas internacionales como lo indica el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (PNSST) que se concibe como la herramienta de gestión en virtud de la cual se priorizan las necesidades que actualmente

⁵⁷ Objetivos de desarrollo sostenible, página oficial de las Naciones Unidas 2024

tiene Colombia respecto del área de salubridad laboral, tal y como se estableció en la Ley 1562 de 2012, que trae consigo la transformación de un Sistema de Riesgos Laborales más justo, equitativo, y eficiente.

Objetivo N° 8. Trabajo decente y crecimiento económico: Pretende promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.

“Meta 8.3 Promover políticas enfocadas a el desarrollo de trabajos decentes, para fomentar el crecimiento de las empresas”

“Meta 8.5 Para el 2030 lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor”.

El apoyo de condiciones laborales óptimas y la protección de los derechos laborales, la implementación de los lineamientos de salud y seguridad en el trabajo, aporta a la reducción de costos relacionados con accidentes y enfermedades laborales, optimizando la productividad y garantizando la sostenibilidad del sistema de transporte.

Objetivo N° 9 Industria, Innovación e Infraestructura: Busca fomentar el crecimiento económico, mediante una industrialización sostenible tecnológica, promoviendo el progreso social y asegurando oportunidades para todas las personas.

“Meta 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos”.

Impulsa la implementación de tecnologías avanzadas para la gestión de la seguridad laboral, monitorización y gestión de riesgos son aspectos importantes para fortalecer el sistema de Transmilenio en este aspecto, mejorando su eficiencia operativa.

Objetivo N° 11 Ciudades y comunidades sostenibles: Pretende que las ciudades y la humanidad sean participativas, seguras, resilientes y sostenibles.

Promueve el desarrollo con ciudades sostenibles mediante espacios de trabajo seguros y saludables garantizando el bienestar de los trabajadores, mejorando su bienestar integral.

“Meta 11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las

necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad

2.4 La importancia de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Algunas de las razones más importantes para implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sistema de TransMilenio son: garantizar la protección de la integridad física y mental de los trabajadores, promoviendo un entorno laboral seguro y saludable; cumplir con las normativas legales y regulaciones nacionales e internacionales en materia de seguridad y salud laboral, evitando sanciones y responsabilidades legales; reducir el riesgo de accidentes laborales y enfermedades ocupacionales, lo que contribuye a una mayor productividad y eficiencia del sistema; y fomentar una cultura organizacional orientada al bienestar integral de los empleados, mejorando su calidad de vida laboral y satisfacción:

La Protección de la salud y seguridad de los empleados: El objetivo principal del SG-SST es prevenir accidentes, enfermedades laborales y proteger a los empleados de cualquier riesgo o daño relacionado con su trabajo.

Cumplimiento legal: En Colombia, la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 1072 de 2015 establecen la obligación de las empresas de gestionar la seguridad y salud en el trabajo, al no cumplirlas puede llevar a sanciones económicas y legales.

Reducción de costos: Implementar medidas de seguridad y salud en el trabajo ayuda a disminuir los costos asociados con accidentes laborales, enfermedades profesionales, incapacidades y demandas legales.

Mejora el clima laboral: Un ambiente de trabajo seguro y saludable genera un mayor bienestar entre los empleados, lo que a su vez se traduce en una mayor satisfacción laboral, reducción del estrés y aumento de la motivación y el compromiso.

Incremento de la productividad: Trabajadores que se sienten seguros en su entorno laboral son más eficientes y productivos. El SG-SST minimiza el tiempo perdido por accidentes o enfermedades laborales, lo que contribuye a una mejor operatividad de la empresa.

Fortalece la imagen: Las organizaciones que invierten en la seguridad y salud de sus empleados suelen ser vistas de manera positiva por los clientes, inversionistas y la comunidad en general, lo que puede mejorar su reputación y competitividad en el mercado.

Promoción de una cultura preventiva: Un SG-SST no solo responde a incidentes, sino que crea una cultura de prevención, donde todos los empleados, desde la alta dirección hasta los operativos, están comprometidos con identificar y controlar los riesgos antes de que ocurran accidentes.

Para gestionar el sistema de seguridad y salud en el trabajo en una organización es importante considerar con respecto a su implementación los siguientes aspectos:

1. Política
2. Organización
3. Planificación y aplicación
4. Evaluación
5. Adopción de medidas en pro de mejoras
6. Control de los riesgos
7. Accidentes e investigaciones
8. Lugares de trabajo con múltiples empleadores
9. Elección de la persona que puede ayudar al empleador en el cumplimiento de sus obligaciones
10. Celebración de consultas con los trabajadores
11. Capacitación e información
12. Supervisión
13. Primeros auxilios
14. Señales de seguridad

3. La EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A

La Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TransMilenio S.A. es una entidad pública encargada de operar y gestionar el sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá, Colombia. Fue creada con el objetivo de proporcionar una solución eficiente, sostenible y accesible al problema del tráfico y la movilidad en la capital,

TransMilenio se implementó como una forma de mejorar la calidad del transporte público, mediante el uso de carriles exclusivos para buses articulados y bi-articulados, que permiten un tránsito más ágil y eficiente, reduciendo los tiempos de desplazamiento y mejorando la capacidad de transporte en comparación con los vehículos convencionales.

La empresa es responsable de la operación, gestión y mantenimiento de esta infraestructura, que incluye no solo los buses, sino también las estaciones y el sistema de control y seguridad. A través de su modelo de gestión, TransMilenio S.A. busca brindar un servicio de transporte público seguro, económico y con estándares de calidad para los habitantes de Bogotá.

Además, como entidad pública, TransMilenio S.A. trabaja en colaboración con otras autoridades de la ciudad, como la Secretaría de Movilidad, para promover una movilidad sostenible y contribuir a la mejora del sistema de transporte urbano.

Según la página web de Transmilenio 2024 en 1967, Bogotá disponía de 2,679 autobuses que transportaban aproximadamente 1.6 millones de pasajeros al día. En ese momento, con una población de poco más de un millón de personas y una extensión de 8,000 hectáreas, el servicio era relativamente eficiente y cómodo. Sin embargo, con el crecimiento de la ciudad, que superó los cinco millones de habitantes y se expandió a más de 30,000 hectáreas, el número de vehículos también aumentó a más de 20,000, generando una desorganización, ineficiencia, incomodidad y contaminación.

Entre las décadas de 1960 y 1990, el transporte público en Bogotá estuvo principalmente en manos de empresarios privados, caracterizado por una gestión desorganizada, incómoda y costosa. Para finales de los años 90, el sistema colapsó debido al crecimiento urbano, el aumento de la población y la expansión del parque automotor, mientras que la infraestructura vial seguía siendo obsoleta. Las soluciones propuestas por varias administraciones no resultaron efectivas, hasta que el alcalde Enrique Peñalosa (1998-2000) impulsó un plan para crear un sistema de transporte masivo fundamentado en corredores troncales especializados y en la construcción de infraestructuras adicionales para el servicio público.

De acuerdo con estudios realizados durante la primera administración de Antanas Mockus por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), se determinó que la construcción de un metro no era viable a corto plazo debido a su alto costo. En su lugar, se propuso el Sistema Transmilenio, fundamentado en cuatro pilares: un servicio seguro y moderno, cumplimiento de los tiempos, igualdad entre ciudadanos y estándares internacionales. A pesar de los desafíos y la oposición, el Concejo de Bogotá aprobó el proyecto en 1999, estableciendo la Empresa de Transporte de Tercer Milenio, TRANSMILENIO S.A.

TRANSMILENIO S.A. es la entidad responsable de gestionar el Sistema, coordinando a los distintos actores, y planificando, gestionando y controlando el servicio de transporte masivo urbano de pasajeros. Su objetivo es garantizar una prestación eficiente y continua del servicio. El 18 de diciembre de 2000 se inauguró la primera ruta con 14 autobuses que operaban en la troncal de la Caracas, desde la calle 86. Durante este período, también se pusieron en funcionamiento las troncales: Autonorte, Calle 80 y Caracas.

Durante el segundo mandato del Alcalde Antanas Mockus (2001-2003), el plan de desarrollo "Bogotá para vivir todos del mismo lado" incluyó el objetivo de reducir en un 20%

los tiempos de desplazamiento en la ciudad. Entre los proyectos prioritarios se encontraban tres nuevas troncales de transporte masivo: Américas, NQS y Avenida Suba⁵⁸.

Los beneficios del Sistema Transmilenio para la ciudad y sus habitantes son claros: ha reducido la contaminación y mejorado la seguridad; ha transformado áreas que estaban muy deterioradas; ha disminuido los accidentes, reducido los tiempos de viaje y aumentado la calidad de vida de los ciudadanos.

Cifras del Sistema (versión 2024, corte julio)

Infraestructura en el Sistema TransMilenio

El sistema de transmilenio hasta el periodo de julio 2024 cuenta con 3.500 puntos de acceso donde los usuarios pueden comprar su pasaje y acceder al servicio de transporte, 18 ascensores dispuestos para el uso prioritario de personas en situación de discapacidad, embarazadas o personas con movilidad reducida, 22 baños para más de 25 mil trabajadores, 40 puntos de personalización que tienen como finalidad registrar la tarjeta por nombre y acceder a varios beneficios, 4.915 puntos de recarga ubicados en las principales taquillas de las estaciones de Transmilenio, puntos de recarga en droguerías, papelerías y otros establecimientos.

ITEM	CANTIDAD
Puntos de acceso	3.500
Ascensores	18
Baños	22
Puntos de personalización	40
Puntos de recarga	4.915

Nota: La tabla representa la infraestructura del sistema de Transmilenio con cifras.
Tomado de la página oficial de Transmilenio (2024).

Personal del Sistema TransMilenio

El sistema de Transmilenio cuenta con más de 25.000 trabajadores de los cuales 23.059 son conductores divididos en operadores troncales y zonales, 1776 personal de recaudo Bogotá ubicado en las taquillas, 190 trabajadores realizando labores de servicios generales, 200 gestores de convivencia se encargan de interactuar con los ciudadanos, realizar acompañamiento e identificación de problemáticas en el sistema, 465 anfitriones los cuales

⁵⁸ Historia del sistema de transporte Transmilenio, página oficial del sistema de transporte Transmilenio 2024

se encargan de apoyar la operación y dar información a los usuarios y 922 guardas de seguridad, estos trabajadores se encargan de vigilar y proteger los bienes e inmuebles.



Nota: La figura representa el personal que conforma el sistema de Transmilenio. Tomado de la página oficial de Transmilenio (2024).

2.6 PROBLEMÁTICA DE SALUD Y BIENESTAR EN LOS FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN EN ESTACIONES DE TRANSMILENIO

Actualmente, el sistema de transporte de Transmilenio cuenta con 138 estaciones. De estas, solo 22 tienen servicio de baño para funcionarios, los puntos se relacionan a continuación: ⁵⁹

⁵⁹ Respuesta derecho de petición RAD 2024-ER-37654TMSA

#	PORTAL/ESTAC	UBICACIÓN
1	Portal 20 de julio	Acceso peatonal principal
		Zona administrativa
2	Portal 80	Zona administrativa
3	Portal Américas	Zona Administrativa - Acceso
		Zona Administrativa
4	Portal el Dorado	Plataforma troncal costado oriental
		Plataforma troncal costado occidental
		Plataforma alimentadores -
		Plataforma alimentadores -
		Zona administrativa
5	Portal Norte	Zona Administrativa
6	Portal Suba	Zona Administrativa piso 1
		Zona Administrativa piso 2
		Zona Administrativa - alojamiento
7	Portal Sur	Zona administrativa Piso 1
		Zona administrativa Piso 2
8	Portal Tunal	Zona administrativa
		Zona administrativa Piso 1
		Zona administrativa Piso 2
		Plataforma 1
9	Portal Usme	Acceso peatonal principal
		VAcceso peatonal principal
		Túnel
10	San Diego	Acceso peatonal constado nor - occidental
		Acceso peatonal constado nor – oriental

11	Bicentenario	Acceso peatonal elevado
		Intermedio piso 1
12	Molinos	Zona de integración
13	Pepe Sierra	Taquilla externa
14	Virrey	Taquilla externa
15	Calle 127	Taquilla externa
16	San Mateo	Zona de integración
		Zona de integración
17	Suba Av.	Acceso costado norte
	Boyacá	
18	Ricaurte	Acceso peatonal Entre Calle 13 y NQS
19	Banderas	Zona Administrativa
20	General	General
	Santander	Santander
21	Av. 1° de Mayo	Intermedia
22	Museo	Costado Sur
	Nacional	

Teniendo en cuenta lo relacionado en el informe anterior se puede observar una grave problemática que están enfrentando los trabajadores como personal de taquilla, de vigilancia y de orientación que cumplen sus funciones en las diferentes estaciones del servicio de TransMilenio, las cuáles no cuentan con servicios mínimos para atender las necesidades físico sanitarias durante las extensas jornadas de trabajo, los trabajadores deben aguantar sus necesidades por largos periodos o recurrir a alternativas indignas, ya que no pueden dejar sus puestos de trabajo solos.

De las 138 estaciones, 116 no cuentan con baños para trabajadores. Esto afecta significativamente a los empleados, quienes no tienen acceso a este servicio tan esencial, generando malas condiciones laborales, afectando su salud y colocando en riesgo la calidad del servicio.

Si bien la infraestructura inicial de TransMilenio no contemplaba baños para los trabajadores de vigilancia, recaudo y aseo, actualmente se hace necesario y prioritario pensar en el bienestar y la salud de los empleados; aunque estos servicios sean contratados por terceros como RECAUDO BOGOTÁ están obligados a tener acuerdos con predios comerciales cercanos a las estaciones, en los cuales el personal tiene acceso al servicio de baño. Así mismo, Recaudo Bogotá debe fijar tiempo de receso en las actividades

de su personal, de acuerdo con los turnos y es controlado por TransMilenio con auditorías de inspección y seguimiento verificando que cumpla con estas obligaciones.⁶⁰

El ministerio de trabajo y seguridad social en su resolución 2400 de 1979 del ministerio del trabajo establece algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo, la constitución Política y toda la normatividad referente a la Seguridad y Salud en el trabajo establecen que todos los establecimientos de servicio público deben garantizar el servicio sanitario para sus trabajadores.

2.7. ALGUNAS DENUNCIAS POR FALTA DE GARANTÍAS DE LAS CONDICIONES LABORALES PARA LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DE TRANSMILENIO

En años recientes, TransMilenio ha enfrentado diversas quejas y denuncias sobre el incumplimiento de condiciones laborales adecuadas, creando un ambiente laboral poco seguro y estresante para sus trabajadores. Estas denuncias indican problemas como horarios excesivos, falta de pausas activas y deficiencias en las políticas de salud y seguridad.

En algunas ocasiones la empresa Transmilenio ha sido multada por el ministerio de trabajo, acumulando sanciones por más de 1,000 salarios mínimos, debido a la falta de servicios sanitarios. Estas multas se deben al incumplimiento de la Ley 1562 de 2012, “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional”.

El estado y los organismos de control exigen una mejora continua en las condiciones laborales de todas las empresas, incluyendo la provisión de servicios sanitarios adecuados para los empleados, protegiéndolos de riesgos que puedan afectar significativamente su salud emocional, física y un ambiente laboral denso.

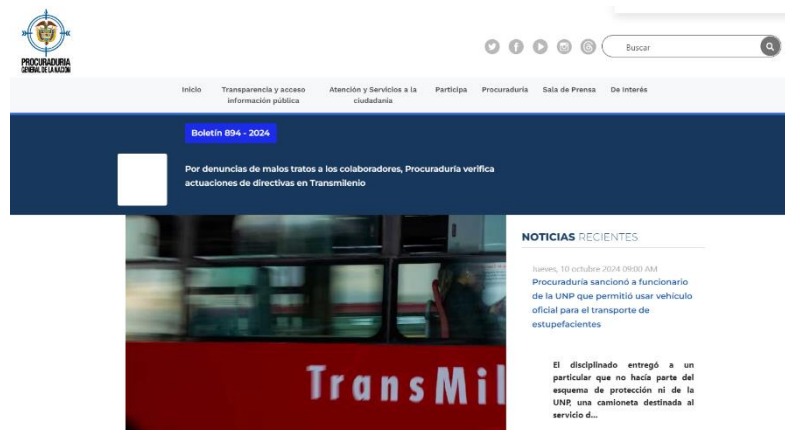
Ante estas denuncias e investigaciones Transmilenio se manifiesta diciendo que la infraestructura inicial no contemplaba baños, toda vez que las estaciones son de paso para los usuarios, pero no contemplaron que no era un espacio de paso para sus trabajadores.

Ahora bien, para los trabajadores de vigilancia, recaudo Bogotá y aseo; las empresas están en la obligación de hacer acuerdos en el sector para permitir el uso de baños a sus empleados, tienen convenios con empresas y comerciantes aledaños a la estación que puedan suplir el servicio de baños. Resaltan que los nuevos diseños de troncales, adicionan el espacio de baños para dichos trabajadores en las taquillas externalizadas, teniendo en cuenta los turnos.

⁶⁰ <https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/151335/banos-en-portales-y-estaciones-de-transmilenio/>

A continuación se relacionan las denuncias más relevantes:

- La Procuraduría General de la Nación de Colombia⁶¹ ha solicitado a Transmilenio S.A. que informe sobre las denuncias relacionadas con el desconocimiento de los derechos laborales de sus empleados. Estas quejas incluyen la falta de rutas de transporte adecuadas, la inexistencia de instalaciones sanitarias y posibles despidos injustificados. La Procuraduría busca esclarecer la situación y ha dado un plazo de cinco días hábiles para que Transmilenio comunique las acciones tomadas en respuesta a estas preocupaciones. Fecha: Bogotá, D. C., 9 de agosto de 2024 (@PGN_COL).



Nota: Imagen sobre trabajadores de Transmilenio denuncian condiciones laborales precarias y prácticas injustas. Tomado de denuncia de la Procuraduría 2024

- Según noticia de RCN radio 2024⁶², los trabajadores de TransMilenio han presentado graves denuncias sobre condiciones laborales que consideran precarias e injustas, afectando tanto su integridad personal como profesional. Un aspecto crítico es la falta de transporte para los empleados que inician sus labores a las 3:30 a.m. y finalizan a las 11:15 p.m., exponiéndose a riesgos al desplazarse a esas horas. Además, denuncian la inexistencia de baños adecuados y sanciones arbitrarias que les afectan económicamente, con despidos injustificados en ocasiones. Expertos en derecho laboral han pedido una revisión de estas prácticas para mejorar las condiciones de trabajo. FECHA: Publicado: 20 de febrero de 2024, 3:55 AM

⁶¹ <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/por-denuncias-malos-tratos-colaboradores-procuraduria-verifica-actuaciones-directivas-transmilenio.aspx>

⁶² <https://www.rcnradio.com/bogota/trabajadores-de-transmilenio-denuncian-condiciones-laborales-precarias-y-practicas-injustas>



Nota: Imagen sobre trabajadores de Transmilenio denuncian condiciones laborales precarias y prácticas injustas. Tomado de denuncia Rcn Radio 2024

- Según Infobae 2024 ⁶³, los trabajadores de TransMilenio han denunciado condiciones laborales, destacando problemas como la falta de rutas de transporte en horarios nocturnos, ausencia de baños adecuados y despidos injustificados. Estas quejas han sido presentadas por empleados de las estaciones, quienes deben arriesgarse al movilizarse en horas tempranas y tardías sin garantías de seguridad, mientras que los sindicatos han exigido mejoras en las condiciones laborales y el respeto de los derechos de los trabajadores. FECHA: 20/02/2024



⁶³ <https://www.infobae.com/colombia/2024/02/20/trabajadores-de-transmilenio-denunciaron-el-sistema-nos-toca-arriesgarnos-para-movilizarlos/>

Nota: Imagen sobre trabajadores de Transmilenio denuncian condiciones laborales precarias y prácticas injustas. Tomado de denuncia Infobae 2024

- Según la W Radio 2024⁶⁴, guardias de seguridad de TransMilenio han denunciado maltrato laboral, señalando condiciones inadecuadas, como la falta de tiempo suficiente para descansar, ausencia de baños y acoso sexual. Aseguran que deben comer en condiciones insalubres y enfrentan represalias si exceden su tiempo de descanso. Algunos guardias se ven obligados a trabajar hasta 60 horas semanales sin relevo, lo que afecta su dignidad y bienestar. La Procuraduría investiga estas denuncias, mientras que TransMilenio responde que ha mejorado la vigilancia mediante nuevos contratos.FECHA: 12/08/2024

3. Sustento jurídico

De orden constitucional

Derechos fundamentales:

Artículo 11. “El derecho a la vida es inviolable”.

Artículo 13. “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley”.

Artículo 17. “Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas”.

Artículo 25. “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.

Artículo 26. “Toda persona es libre de escoger profesión u oficio”.

Artículo 39. “Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado”.

Derechos colectivos:

Artículo 43. “La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación”.

⁶⁴ <https://www.wradio.com.co/2024/08/12/guardias-de-seguridad-de-transmilenio-denuncian-maltrato-laboral-en-estaciones/>

Artículo 48. “La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley”.

Artículo 49. “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado”.

Artículo 53. “El Congreso expedirá el estatuto del trabajo”.

Artículo 54. “Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud”.

Artículo 57. “La ley podrá establecer los estímulos y los medios para que los trabajadores participen en la gestión de las empresas”.

Artículo 79. “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”.

Sustento de orden Legal y Distrital

Decreto 1295 de 1994

"Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales". **Modificado por la ley 1562 del 2012.** "Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional".

ARTÍCULO 2. “Objetivos del Sistema General de Riesgos Profesionales.

El Sistema General de Riesgos Profesionales tiene los siguientes objetivos:

a) Establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados de la organización del trabajo que puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo tales como los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y de seguridad”.

ARTÍCULO 3. “Campo de aplicación.

El Sistema General de Riesgos Profesionales, con las excepciones previstas en el artículo 279 de la ley 100 de 1993, se aplica a todas las empresas que funcionen en el territorio nacional, y a los trabajadores, contratistas, subcontratistas, de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, y del sector privado en general”.

ARTÍCULO 56. “Responsables de la prevención de riesgos profesionales.

La Prevención de Riesgos Profesionales es responsabilidad de los empleadores.

Corresponde al Gobierno Nacional expedir las normas reglamentarias técnicas tendientes a garantizar la seguridad de los trabajadores y de la

población en general, en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Igualmente le corresponde ejercer la vigilancia y

control de todas las actividades, para la prevención de los riesgos profesionales.

Los empleadores, además de la obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el programa de salud ocupacional según lo establecido

en las normas vigentes, son responsables de los riesgos originados en su ambiente de trabajo. Las entidades administradoras de riesgos

profesionales, por delegación del estado, ejercen la vigilancia y control en la prevención de los riesgos profesionales de las empresas que tengan

afiliadas, a las cuales deberán asesorar en el diseño del programa permanente de salud ocupacional”.

ARTÍCULO 57. “Supervisión y control de los sitios de trabajo.

Corresponde al Ministerio de Trabajo a través de su Dirección Técnica de Riesgos Profesionales, la supervisión, vigilancia y fiscalización de la prevención de riesgos profesionales en todas las empresas, tendientes a la aplicación del programa permanente de salud ocupacional”.

ARTÍCULO 58. “Medidas especiales de prevención.

Sin detrimento del cumplimiento de las normas de salud ocupacional vigentes, todas las empresas están obligadas a adoptar y poner en práctica las medidas especiales de prevención de riesgos profesionales”.

ARTÍCULO 91. Sanciones. Modificado por el art. 115, Decreto Ley 2150 de 1995. Le corresponde al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, a través del Director Técnico de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, imponer las siguientes sanciones, frente a las cuales no opera el recurso de apelación. La competencia aquí prevista puede asumirla el Ministro de Trabajo y Seguridad Social.

Decreto 1072 de 2015

ARTÍCULO 2.2.4.6.3. “Seguridad y salud en el trabajo (SST). La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones”.

Código sustantivo del trabajo

ARTÍCULO 7o. OBLIGATORIEDAD DEL TRABAJO. “El trabajo es socialmente obligatorio”.

ARTÍCULO 9o. PROTECCIÓN AL TRABAJO. “El trabajo goza de la protección del Estado, en la forma prevista en la Constitución Nacional y las leyes. Los funcionarios públicos están obligados a prestar a los trabajadores una debida y oportuna protección para la garantía y eficacia de sus derechos, de acuerdo con sus atribuciones”.

ARTÍCULO 11. DERECHO AL TRABAJO. “Toda persona tiene derecho al trabajo y goza de libertad para escoger profesión u oficio, dentro de las normas prescritas por la Constitución y la Ley”.

Resolución 2400 de 1979 Ministerio del Trabajo

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo

CAPÍTULO II**OBLIGACIONES DE LOS PATRONOS**

ARTÍCULO 2o. “Son obligaciones del Patrono:

- a). Dar cumplimiento a lo establecido en la presente Resolución, y demás normas legales en Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, elaborar su propia reglamentación, y hacer cumplir a los trabajadores las obligaciones de Salud Ocupacional que les correspondan.
- b). Proveer y mantener el medio ambiente ocupacional en adecuadas condiciones de higiene y seguridad, de acuerdo a las normas establecidas en la presente Resolución”.

4. IMPACTO FISCAL

De acuerdo con la Ley 819 de 1993 en su artículo 7, “Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo”. El presente proyecto de acuerdo no presenta un impacto fiscal, por tanto, ponemos a consideración del Honorable Concejo de Bogotá D.C., la presente iniciativa.

5. CONCLUSIÓN

Con la implementación de este “proyecto de acuerdo que busca mejorar las condiciones de seguridad, bienestar y salud en el trabajo para los trabajadores en las estaciones del sistema transmilenio” se dará solución a una problemática grave que afecta la dignidad, la salud y la calidad del servicio en las estaciones de transmilenio.

Adicional se cumplirá con las normas de salud y seguridad en el Trabajo (SG-SST) creando así un ambiente más seguro, se reducirán los accidentes y enfermedades ocupacionales, se garantizará el cumplimiento de normativas legales, se fomentará una cultura de prevención y se contribuirá a un clima laboral positivo que aumente la satisfacción y motivación de los empleados.

Además, este acuerdo refleja la responsabilidad institucional de TransMilenio hacia el bienestar de su personal, fortaleciendo su imagen y la confianza de la comunidad.

Cordialmente,

FERNANDO LÓPEZ GUTIÉRREZ
Autor Principal - Concejal de Bogotá
Nuevo liberalismo

CRISTINA CALDERÓN RESTREPO
Concejal de Bogotá
Nuevo liberalismo

JUAN JAVIER BAENA MERLANO
Concejal de Bogotá
Nuevo liberalismo

JUAN MANUEL DÍAZ
Concejal de Bogotá
Nuevo liberalismo

JESUS DAVID ARAQUE MEJÍA

Concejal de Bogotá
Nuevo liberalismo

RICARDO CORREA MOJICA

Concejal de Bogotá
Nuevo liberalismo

JUAN DAVID QUINTERO RUBIO

Concejal de Bogotá
En Marcha

DAVID SAAVEDRA MURCIA

Concejal de Bogotá
En Marcha

PROYECTO DE ACUERDO NO 233 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA IMPLEMENTAR LOS LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LOS EMPLEADOS DEL SISTEMA TRANSMILENIO UBICADOS EN LAS ESTACIONES DE TRANSMILENIO”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y, en especial de las que le confiere el numeral 1 y 25 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993.

ACUERDA:

Artículo 1. Objeto. La Administración Distrital, a través de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio, "Transmilenio", implementará lineamientos de seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores del sistema, con el objetivo de proteger su integridad, salud y bienestar, mejorar las condiciones laborales y promover un entorno de trabajo seguro y digno.

Parágrafo. La Administración Distrital, a través de las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1562 de 2012, promoverá programas, campañas y actividades de educación y prevención orientadas a fomentar estilos de vida y trabajo saludables, contribuyendo al bienestar integral de los trabajadores del sistema.

Artículo 2. Responsabilidades. La administración distrital, a través de TransMilenio, y demás entidades competentes, en el marco de sus competencias, establecerá los lineamientos en seguridad y salud laboral en temas de la implementación y/o acuerdos con establecimientos de comercio para que los trabajadores utilicen baño en condiciones seguras y dignas.

Parágrafo 1. A su vez incluir la capacitación continua de todos sus empleados en las estaciones para fomentar una cultura de prevención y autocuidado, la realización de evaluaciones periódicas de riesgos laborales para identificar peligros y establecer medidas preventivas, y el monitoreo constante de la efectividad de estos lineamientos para asegurar mejoras continuas en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

Artículo 3. La Administración distrital promoverá la firma de convenios entre la Administración Distrital y las Administradoras de Riesgos Laborales (ARLs) para fortalecer los servicios orientados a mejorar el clima laboral y reducir los riesgos físicos y mentales en el trabajo.

Los lineamientos que rijan los convenios deberán considerar programas de prevención de riesgos psicosociales, con foco en estrés, acoso laboral y violencia intrafamiliar; desarrollar estrategias para mejorar el clima organizacional y prevenir el agotamiento laboral; realizar evaluaciones periódicas de riesgos físicos y psicosociales; ofrecer capacitaciones en salud mental y seguridad laboral a empleadores y trabajadores. e. Promover actividades que favorezcan la salud física y mental, como pausas activas y programas de bienestar.

Artículo 4. En un término no mayor a seis (6) meses, desde la entrada en vigor del presente acuerdo, la Administración Distrital implementará lo acordado.

Artículo 5. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C., a los ____ días del mes de ____ del año 2025

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Presidente

Secretaria General de Organismo de Control

Carlos Fernando Galán Pachón
Alcalde de Bogotá

PROYECTO DE ACUERDO NO 234 DE 2025**PRIMER DEBATE**

“POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA Y SE FORTALECEN POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD, EN EL MARCO DE LA SENTENCIA C-127 DE 2023...”

1. OBJETO DEL PROYECTO

La presente iniciativa tiene por objeto institucionalizar y fortalecer políticas públicas para la atención, prevención y consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos de la ciudad.

2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS***2.1 Análisis y definición del problema******2.1.1 Aproximación a la problemática del consumo de sustancias prohibidas en espacios públicos***

El uso de espacios públicos para el consumo de sustancias psicoactivas puede resultar perjudicial para el bienestar y seguridad de la comunidad en general, especialmente niñas, niños, adolescentes, jóvenes y población vulnerable. En primer lugar, estas sustancias pueden afectar la percepción y el juicio de quien las consume, lo que puede llevar a desarrollar comportamientos peligrosos e irresponsables, generando una atmósfera insegura para los demás, en particular para aquellos que no deseen estar expuestos a este tipo de actividad. De lo anterior, se puede resaltar que, efectivamente se debe trabajar con enfoque en la mitigación del daño o riesgo porque no estamos del todo alejados de la realidad en cuanto a que este tipo de sustancias nos han acompañado desde tiempos pasados, por ende resulta difícil erradicarla de raíz.

Asimismo, el consumo de sustancias en espacios públicos puede ser un catalizador para actividades ilegales, como venta o tráfico de estupefacientes, creando un riesgo para quienes pretenden gozar de su derecho a un ambiente sano que permita su desarrollo adecuado y seguro. Por lo que, las autoridades distritales tienen como obligación propiciar espacios públicos como parques recreacionales y polideportivos para el disfrute y goce de los niños, niñas y adolescentes, y personas con especial protección estableciendo zonas de esparcimiento libres del consumo de sustancias psicoactivas, con el fin de brindar a la comunidad sitios propicios para su recreación.

Es importante asegurarse de que los niños, niñas y adolescentes y comunidad en general, tengan un entorno seguro y saludable que les permita crecer y desarrollarse correctamente. Para garantizar esto, es necesario proteger las zonas alrededor de los centros educativos, parques y espacios públicos de mayor concurrencia por los habitantes de las mismas, pero aún más para las personas que tienen especial protección, sin desconocer el derecho a la igualdad, protegiendo así la vida, la integridad física, la salud, el principio de interés superior del menor y evitando el desarrollo de factores de riesgo.

De acuerdo con el informe mundial sobre las Drogas 2024 de UNODC: LOS DAÑOS DEL PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS SIGUEN AUMENTANDO EN MEDIO DE LA EXPANSIÓN DEL CONSUMO Y LOS MERCADOS DE DROGAS, “en el año 2022, 1 de cada 18 de personas, habrían consumido drogas, aumentando en un 20% más que el decenio anterior. La prevención debe ser la respuesta de primera línea al consumo de drogas. Las intervenciones eficaces abordan las condiciones subyacentes que contribuyen al consumo de drogas, como la falta de conexión con la familia o la comunidad, la inestabilidad, la inseguridad, los traumas, la mala crianza, las normas sociales negativas, el consumo de drogas entre iguales o en la familia” (UNODC, 2024)⁶⁵, de modo que, la disponibilidad de las sustancias psicoactivas o el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos es un factor de riesgo social que puede incidir en el uso temprano de las mismas, por parte de la población juvenil y generar graves consecuencias a nivel físico y psicológico.

De acuerdo al informe, la doctora Ghada Waly, Directora Ejecutiva de UNODC, afirma que “la producción, el tráfico y el uso de drogas siguen exacerbando la inestabilidad y la desigualdad, al tiempo que causan daños incalculables a la salud, la seguridad y el bienestar de las personas”, lo que refiere a la problemática que generan las drogas a nivel mundial, pues estas logran generar una obstaculización en el avance de una sociedad sana, desde la paz y la justicia hasta la salud y los derechos humanos, el medio ambiente y la igualdad. Del mismo modo, las consecuencias microsociales, es decir, las relaciones interpersonales y de entorno que tiene el consumidor, relacionadas a la familia, la escuela y el trabajo, se han visto afectadas afectando el rendimiento escolar y laboral, así mismo, las consecuencias macrosociales, las cuales nos representa un entorno de mayor espectro relacionado con aspectos socioeconómicos, políticos y culturas, lo que significa que el consumo de sustancias prohibidas en espacios públicos colisionó de múltiples

⁶⁵ Delegación de la Unión Europea en México, & Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2024). Informe mundial sobre las drogas: LOS DAÑOS DEL PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS SIGUEN AUMENTANDO EN MEDIO DE LA EXPANSIÓN DEL CONSUMO Y LOS MERCADOS DE DROGA. Recuperado de: https://www.unodc.org/ipomex/es/noticias/junio-2024/informe-mundial-sobre-las-drogas-2024-de-unodc_-los-daos-del-problema-mundial-de-las-drogas-siguen-aumentando-en-medio-de-la-expansion-del-consumo-y-los-mercados-de-drogas.html

maneras en la sociedad, por cuanto el espacio público se propende para uso exclusivo de la colectividad o comunidad en general.

De la anterior premisa podemos destacar que, si los espacios públicos donde la mayoría de las personas los usan para esparcimiento y ocio, son escenarios de consumo de sustancias no permitidas, esto afectará las relaciones sociales y alteraría la naturaleza del espacio público, para la cual fue construido; si tomamos como ejemplo los parques, zonas verdes, coliseos, polideportivos etc, perderán en sí, su destinación por considerar que se están prestando para otros escenarios. Cabe resaltar que el consumo de sustancias no permitidas en espacios públicos conlleva en muchas ocasiones al incremento de la inseguridad ciudadana, a la venta o tráfico de estupefacientes, al consumo temprano de sustancias, entre otros, lo cual implica un riesgo para la población en general.

DEFINICIONES. Para los efectos del presente Acuerdo, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

Consumo de sustancias psicoactivas: Es toda sustancia introducida en el organismo por cualquier vía de administración *“ingerida, fumada, inhalada, inyectada, entre otras) que genera alteración del funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y modifica la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento. Su consumo puede crear consumo problemático o dependencia. (Ministerio de Salud y Protección Social, s. f.)”*

Espacio público: *Conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes. (Secretaría de Planeación, s. f.)*

Personas protegidas constitucionalmente: La Corte Constitucional ha definido aquellas personas que, debido a condiciones particulares, a saber: físicas, psicológicas o sociales, merecen un amparo reforzado en aras de lograr una igualdad real y efectiva. *(Ministerio de Justicia y del Derecho, s. f. Sentencias: T-293 de 2017, T-208 de 2017 y Sentencia T-335 de 2019 Corte Constitucional. Constitución Política de Colombia 1991, artículos; 13,44.)*

1. Niños, niñas y adolescentes
2. Adultos Mayores
3. Población LGTBIQ+
4. Mujeres cabeza de familia
5. Personas en condición de discapacidad
6. Personas desplazadas por la violencia y aquellas que se encuentran en extrema pobreza

Prevención de consumo de sustancias psicoactivas: Son el conjunto de acciones dirigidas a identificar, evitar, reducir, o regular el consumo de sustancias psicoactivas que generan riesgo para la salud o alteraciones en el funcionamiento familiar y social. (Ministerio de Salud y Protección Social, s. f.-a)

2.1.2 Bogotá

El Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá D.C. 2022⁶⁶, aclaran que el tamaño de muestra para 2016 fue de 6.369 y de 10.912, en el 2022. La población representada alcanzaba a 5.8 millones de personas y en la muestra actual representa alrededor de 6 millones de personas. Hay proporciones similares entre mujeres 47.3% y hombres 52.7% en la población representada, como se vé reflejada en la siguiente tabla.

Tabla 130 Distribución de las muestras y población representada de los estudios 2016 y 2022 según edad

Edad	Tamaños de muestra		Población representada			
	2016	2022	2016		2022	
	N	N	N	%	N	N
12-24	1.528	2.191	1.648.751	28.39	2.191	1.315.182
25-34	1.381	2.203	1.295.691	22.31	2.203	1.238.908
35-44	1.062	1.862	1.149.115	19.79	1.862	1.208.579
45-65	2.398	4.656	1.714.168	29.52	4.656	2.735.716
Total	6.369	10.912	5.807.725	100	10.912	6.498.374

Fuente: Alcaldía de Bogotá - Secretaría Distrital de Salud y UNODC, 2022. Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá, D.C. 2022, pág. 145

El consumo global se incrementó en el periodo bajo análisis, pasando la prevalencia de vida del 15.61% para el año 2016 al 19.31% para el año 2024. El consumo reciente, es decir, el último mes se extiende del 2.93% al 4.5%.

El consumo de cualquier sustancia ilícita aumenta tanto en hombres —de 7.59% a 8.50%, como en mujeres —de 1.95% a 3.94%— y también en todos los grupos etarios. El aumento significativo en grupos de edad se encuentra en las personas de 12 a 24 años que pasan de 8.23% a 13.82% y en las personas de 25 a 34 años pasando de 5.49% a 10.44%, como se aprecia en la siguiente tabla.

⁶⁶ Alcaldía de Bogotá - Secretaría Distrital de Salud, Este estudio fue realizado por la Alcaldía de Bogotá – Secretaría Distrital de Salud y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur. (2022). Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá, D.C. Recuperado de: https://www.unodc.org/documents/colombia/2023/septiembre-9/ESTUDIO_DE_CONSUMO_DE_SUSTANCIAS_PSICOACTIVAS_BOGOTA_2022.pdf

Tabla 143 Prevalencia de consumo del último año de cualquier sustancia ilícita según sexo, edad y estrato en los estudios 2016 y 2022 (%)

Variable		Año estudio	
		2016	2022
Sexo	Hombres	759*	8.39
	Mujeres	1.95*	3.92
Edad	12-24	8.23*	13.54
	25-34	5.49	10.44
	35-44	4.21*	5.22
	45-65	0.74*	0.93
Estrato	1	6.17*	4.62
	2	5.53*	4.12
	3	2.98	6.31
	4-5-6	5.34	12.39
Total		2.54	6.09

*n<0.05

Fuente: Alcaldía de Bogotá - Secretaría Distrital de Salud y UNODC, 2022. Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá, D.C. 2022, pág. 157

En el caso de los estratos, los incrementos significativos se encuentran en los estratos 4, 5 y 6, pasando de 5.34% a 13.04% y decreciendo cerca de dos 2 puntos porcentuales en el caso del estrato 1.

La prevalencia del consumo de cualquier sustancia ilícita es más alta en hombres que en mujeres; en la prevalencia de vida la diferencia es de 13.06%, en el año de 4.56% y en el mes de 4.91%.

Tabla 38 Indicadores de consumo de cualquier sustancia ilícita según sexo (%)

Sexo	Prevalencia (%)		
	Vida*	Año**	Mes**
Hombres	24.77	8.50	6.0
Mujeres	14.17	3.94	3.08
Total	19.31	6.16	4.50

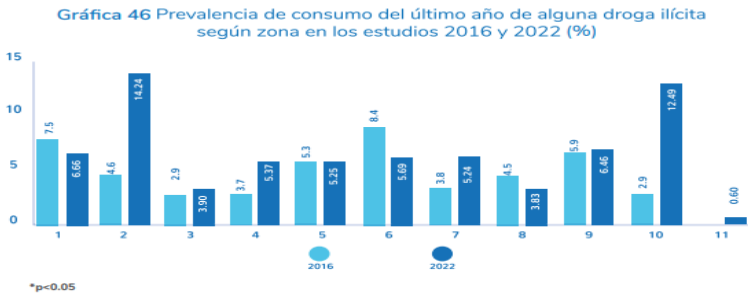
* La prevalencia de vida incluye las siguientes sustancias: inhalables, dick, popper, marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína, metanfetamina, metadona sin prescripción médica, analgésicos opiáceos sin prescripción, LSD, hongos, yagé o cacao sabanero, ketamina, GHB y 2CB.

** Las prevalencias de año y mes incluyen las siguientes sustancias: inhalables, dick, marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, y heroína.

Fuente:

Alcaldía de Bogotá - Secretaría Distrital de Salud y UNODC, 2022. Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá, D.C. 2022, pág. 68

De igual forma, el estudio en mención demuestra las tasas de consumo de sustancias prohibida en las zonas de Bogotá D.C estudiadas, registrando que la prevalencia más alta de consumo en el año 2022 se registra en la zona 2, esto es, Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo, seguida de la zona 10, Usaquén, con prevalencias de 14.24% y 12.49%, respectivamente, como se puede ver en la siguiente gráfica.



Zona 1 Centro oriente: Santa Fe, Los Mártires y La Candelaria. Zona 2 Norte: Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo. Zona 3 Suroccidente: Kennedy, Bosa y Puente Aranda. Zona 4 Occidente: Engativá y Fontibón. Zona 5 Suba: Suba. Zona 6 Ciudad Bolívar: Ciudad Bolívar. Zona 7 Usme: Usme. Zona 8 Tunjuelito: Tunjuelito. Zona 9 Rafael Uribe: Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño y San Cristóbal. Zona 10 Usaquén: Usaquén. Zona 11 Sumapaz: Sumapaz.

Fuente: Alcaldía de Bogotá - Secretaría Distrital de Salud y UNODC, 2022. *Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá, D.C. 2022*, pág. 72

En cuanto a la condición socioeconómica, el estudio realizado en el 2022 se puede inferir que, respecto del consumo del último año de sustancias ilícitas y estratos socioeconómicos, se observa un mayor frecuencia de consumo en los estratos 4, 5 y 6, representados por un 13.04% de prevalencia, siendo el estrato 1 y 2 la menor tasa con un 4.49% y 4.43%.

Los estratos 1 y 2 también se distinguen, claro que la diferencia no es significativa en el peso que tienen estos usuarios consumidores en relación con el estrato socioeconómico del cual hacen parte, esto quiere decir que el uso de sustancias no permitidas afecta en mayor medida a estos grupos sociales que están en situación de mayor vulnerabilidad social y económica, y, por ende, con mayores dificultades acceder a una atención sanitaria integral.

En los estratos 4, 5 y 6 se encuentra el mayor crecimiento de consumo, con un estimado de 127.315 casos, mientras que en el estrato 3, se cuenta con un estimado de 140.896 casos, finalizando con los estratos 1 y 2 con un estimado de 32.183 y 99.690 casos respectivamente. Son alrededor de 400.117 casos los que requieren algún tipo de atención o contención con este tipo de problemática.

Tabla 41 Consumo reciente (prevalencia* y número de consumidores de último año) de cualquier sustancia ilícita e intervalos del 95% de confianza según estrato socioeconómico

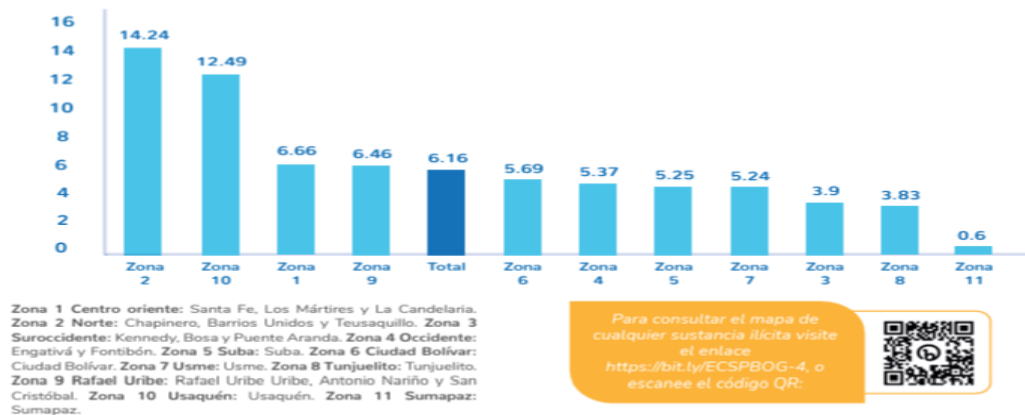
Estrato socioeconómico	Prevalencia (%)			Número de casos		
	Estimación	I. de C.		Estimación	I. de C.	
1	4.49	3.01	5.97	32.183	21.586	42.780
2	4.43	3.27	5.59	99.690	73.586	125.794
3	5.52	3.46	7.58	140.896	88.233	193.559
4, 5 y 6	13.04	7.39	18.69	127.315	72.117	182.513
Total	6.16	4.91	7.41	400.117	318.714	481.520

*Prevalencia de último año incluye las siguientes drogas: marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, inhalables, dick y heroína.

Fuente: Alcaldía de Bogotá - Secretaría Distrital de Salud y UNODC, 2022. *Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá, D.C. 2022*, pág. 69

El consumo de sustancias psicoactivas ilícitas en el último año por zonas se distribuye de acuerdo con la tabla, siendo las zonas 2 y 10 las que tienen las tasas más altas, y la 11 la más baja.

Gráfica 12 Prevalencia de consumo del último año de cualquier sustancia ilícita según zona



Fuente: Alcaldía de Bogotá - Secretaría Distrital de Salud y UNODC, 2022. *Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá, D.C. 2022*, pág. 70

2.2 Impacto del consumo de sustancias en la salud pública y en el bienestar social

De acuerdo con la Ley 1566 de 2012⁶⁷, se reconoce que el consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas lícitas o ilícitas compete a un asunto de salud pública en donde se engloba el bienestar de la familia, la comunidad y los individuos y, es por esto que son estas poblaciones a las que se le deben dar mayor prioridad con base en los principios de proporcionalidad, razonabilidad, goce de un ambiente sano e interés superior del menor. Así tal, la salud pública es una responsabilidad por parte del Estado y autoridades distritales para la protección de la salud como un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario y que, por medio de la mitigación del consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos, se puede contribuir al bienestar social e individual y brindar atención integral a quien consume, y generar iniciativas de prevención del consumo a la comunidad en general.

De esta manera, de acuerdo a la Guía práctica “EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, UN ASUNTO DE SALUD PÚBLICA”, la salud pública está integrada “*por el conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera integrada, la salud de la población por medio de acciones de*

⁶⁷ LEY 1566 DE 2012: por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio nacional «entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción a sustancias» psicoactivas. (2012). Función Pública. Recuperado de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=48678>

salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectivas, ya que sus resultados se constituyen en indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país (...)” (Ministerio de Salud y Protección Social & UNODC, 2013)⁶⁸, permitiendo inferir que, el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos genera entonces desequilibrio y afectaciones a nivel social en cuanto integra el ámbito de salud pública y puede causar graves consecuencias tanto para el consumidor como para la comunidad en general, en especial, niños, niñas y adolescentes.

Ahora bien, el consumo de sustancias lícitas o ilícitas en espacios públicos tiene efectos negativos en la sociedad y la salud individual y colectiva. Para mitigar el impacto que esta situación genera, debemos implementar políticas públicas con el objetivo principal de prevenir el uso indebido de estas sustancias en espacios públicos además de abordar la problemática, dándole así una percepción más amplia, por cuanto conlleva también a unas consecuencias sociales.

Por lo anterior, es necesario implementar esta medida de prohibición de sustancias en espacios públicos por cuanto la población de especial protección, en especial los niños se encuentran en una etapa vulnerable de aprendizaje debido a la desinformación en cuanto a todo el tema del consumo de drogas. Es por esta razón que se hace urgente una medida regular el tema del consumo en espacios públicos debido a que en esta etapa tienden a absorber o imitar todo lo que a su alrededor ven, de ahí los consumidores a temprana edad.

2.3 Estrategia

Este proyecto pretende fortalecer políticas públicas que permitan que todas las personas tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano, a la recreación y a la práctica del deporte, a la salud, entre otros derechos, delimitando entonces la restricción del consumo de sustancias psicoactivas en estos espacios públicos, implementando principios como interés superior del menor, proporcionalidad y razonabilidad y teniendo un enfoque de derechos humanos y salud pública.

2.3.1 Perímetros

Teniendo en cuenta que los principales escenarios con mayor concurrencia para el esparcimiento infantil y familiar son los parques, centros culturales, deportivos y recreativos en la Ciudad de Bogotá, el Distrito deberá tomar las medidas necesarias para garantizar el pleno goce de sus derechos fundamentales, como lo contempla el artículo 44 de la carta política, promoviendo la no realización de actividades que puedan incitar a los niños, niñas adolescentes y comunidad especialmente protegida al consumo de sustancias prohibidas, así como la plena tranquilidad de

⁶⁸ Ministerio de Salud y Protección Social & Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2013). EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, UN ASUNTO DE SALUD PÚBLICA. En *Guía práctica para entender los derechos en salud y la atención integral de las personas que consumen sustancias psicoactivas*. Recuperado de <https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Publicaciones/Publicaciones/CO031052013-Cartilla.pdf>

que en estas zonas de esparcimiento familiar no se verán expuestos a temas de inseguridad que puedan atentar contra sus propios derechos, por parte de las personas que lleven a cabo el consumo de estas sustancias en los entornos anteriormente mencionados.

Este proyecto pretende dar la implementación adecuada a través del fortalecimiento de lo ya establecido en el Decreto 825 de 2019⁶⁹, hoy vigente, donde se estipulan los parámetros permitidos para el consumo de sustancias psicoactivas y no permitidas en espacios públicos, así:

Artículo 2.- Perímetro para restricción: Se establece en doscientos (200) metros el perímetro circundante del área o lugares abiertos al público o zona del espacio público, en el que no se permitirá el consumo, porte, facilitamiento, distribución, ofrecimiento o comercialización de sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, durante las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días a la semana. Los equipamientos (entornos) que comprenderán el perímetro circundante en el que operará la restricción, son:

- 1. Instituciones de Educación formal y de educación para el trabajo y desarrollo humano público y privado ubicado en Bogotá, Distrito Capital: jardines infantiles; establecimientos educativos en sus niveles: preescolar, básica primaria y básica secundaria y media; Instituciones de Educación Superior; Centros de Atención para Población Vinculada al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.*
- 2. Estadios, coliseos y centros deportivos*
- 3. Parques: Para efecto del presente decreto, de conformidad con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, se entiende por parques los siguientes: 1. Parques de escala regional; 2. Parques de escala metropolitana; 3. Parques de escala zonal; 4. Parques de escala vecinal y 5. Parques de bolsillo.*
- 4. Plazas y plazoletas: entendidas estas como elementos estructurantes del espacio público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 246 y 266 del POT.*
- 5. Sistema de Transporte masivo, así como estaciones y lugares de acceso al mismo*
- 6. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas y privadas.*
- 7. Instituciones de Protección Social de naturaleza pública (...)*

Parágrafo 2.- Tampoco se permitirá el consumo, porte, distribución, ofrecimiento o comercialización de sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el interior de centros deportivos y en parques. (...)

Igualmente, con la oportuna colaboración del Distrito, en cabeza de la Alcaldía Mayor de Bogotá y dadas sus facultades de acuerdo a lo otorgado en las normas “*Que el numeral 1 del artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993*”⁷⁰, establecen como atribuciones del Alcalde Mayor, “*Hacer cumplir la*

⁶⁹ ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C. (2019). *Decreto 825 de 2019*. Recuperado de <https://scj.gov.co/sites/default/files/marco-legal/Decreto%20825%20de%202019.pdf>

⁷⁰ *Decreto Ley 1421 de 1993 - Gestor Normativo*. (1993, 21 de julio). Función Pública. Recuperado de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=106394>

Constitución, la ley, los decretos del Gobierno Nacional y los acuerdos del Concejo", así como entidades competentes y Alcaldías locales, el presente proyecto busca promover e institucionalizar lo reglamentado en cuanto a los límites de consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos, fortaleciendo la regulación de los perímetros de este consumo para la protección de los derechos fundamentales de la comunidad.

2.3.2 Disfrute y uso del espacio público en Bogotá

El espacio público es definido por el artículo 139 de la Ley 1801 de 2016⁷¹ como *"El conjunto de muebles e inmuebles públicos, bienes de uso público (...), destinados por su naturaleza, usos o afectación, a la satisfacción de necesidades colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de todas las personas en el territorio nacional."*, de modo que, es en el espacio público donde un niño, niña o adolescente se reconoce como ciudadano y aprende a ser parte de la sociedad y su funcionamiento, puesto que, estos lugares son elementos esenciales para la mejora de la calidad de la vida de las personas y del ambiente en la ciudad.

De esta manera, considerando que son los niños, niñas y adolescentes quienes permanentemente se desplazan en lugares como colegios, parques y alrededores de estos, acompañados en su mayoría por adultos o personas mayores, son las autoridades nacionales y locales las que deben garantizar que esta comunidad goce de un espacio público sano que posibilite su desarrollo adecuado y seguro, *evitando la realización de actividades que puedan inducirlos al consumo de sustancias psicoactivas y prohibidas en dichos escenarios, o verse expuestos a situaciones que atenten contra sus derechos, por parte de quienes desarrollan el consumo de tales sustancias*⁷² en los espacios públicos delimitados, en consecuencia, este proyecto busca la preservación de estas zonas para que la población constitucionalmente protegida y la comunidad en general puedan disfrutar de sus derechos a la vida, la salud, la educación, la cultura y la recreación, entre otros, sin que se vea afectada su protección Constitucional de la prevalencia de sus derechos sobre los de los demás.

Así, este proyecto busca fomentar el uso y goce del espacio público a través de la reglamentación sobre el consumo de sustancias psicoactivas en estos espacios, teniendo en cuenta que, cada espacio público es cambiante y se ha ido transformando conforme ha avanzado la ciudad, ajustándose a las necesidades de la población, entre ellas, de las personas de especial protección constitucional, en los cuales podemos encontrar parques, zonas verdes, zonas de recreación y deporte, plazoletas, entre otras muchas que, en especial para los niños y niñas forman parte de la infancia, siendo estos espacios públicos los lugares idóneos para la realización de actividades de

⁷¹ Congreso de la República. (2016, 29 julio). *Ley 1801 de 2016*. Secretaría del Senado. Recuperado de http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1801_2016.html

⁷² ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C. (2019). *Decreto 825 de 2019*. Recuperado de <https://scj.gov.co/sites/default/files/marco-legal/Decreto%20825%20de%202019.pdf>

recreación, deporte y desarrollo de identidad por parte de los menores, con el fin de garantizarles el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales expresamente señalados en el artículo 44⁷³ de la Constitución Política, el cual determina que *“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.”*

2.3.3 Atención y prevención del consumo

Que de acuerdo con el Decreto 825 de 2019⁷⁴, *el Estado representado por medio de sus diferentes autoridades y agentes, tiene la obligación de hacer prevalecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes sobre los de los demás, cuando quiera que se pretende dictar disposiciones relacionadas con la protección de los derechos de los menores, entre ellos, la vida, la salud, la educación, la cultura, la recreación, etc.*

Para centrarnos en la adecuada atención y por ende la óptima prevención del consumo de sustancias psicoactivas y no permitidas, debemos centrar nuestra atención en la problemática social y más aún a nivel Distrital, donde vemos como se degrada el entorno social en el que nos movemos, dado que esta “enfermedad” que aqueja a las personas y a la sociedad misma, va generando riesgos, no solo en entornos públicos sino también en temas de salud, y relaciones interpersonales. Estos hábitos de consumo afectan las actividades diarias como el trabajo y estudio, así como el patrimonio económico de la persona consumidora. Es por estas razones que se debe implementar en el Distrito, no solo medidas correctivas para el buen uso de los espacios públicos en cuanto al consumo de sustancias no permitidas en los mismos, sino también es importante adoptar programas de educación y prevención para que más niños y jóvenes desistan de la idea de probar dichas sustancias, así como también promover en los ya consumidores hábitos y actividades que les permita salir del problema de consumo en el que ya se encuentran.

2.3.3.1 Medida correctiva

Las medidas correctivas, son acciones impuestas por las autoridades de Policía a toda persona que incurra en comportamientos contrarios a la convivencia o el incumplimiento de los deberes específicos de convivencia. Las medidas correctivas tienen por objeto disuadir, prevenir, superar,

⁷³ Constitución Política 1 de 1991 Asamblea Nacional Constituyente - Gestor Normativo. (s. f.). Función Pública. Recuperado de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125>

⁷⁴ ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C. (2019). Decreto 825 de 2019. Recuperado de <https://scj.gov.co/sites/default/files/marco-legal/Decreto%20825%20de%202019.pdf>

*resarcir, procurar, educar, proteger o restablecer la convivencia.*⁷⁵ Partiendo de la premisa anterior debemos implementar estos mecanismos con el fin de que la causa sea analizando de manera eficaz, permitiendo llegar al punto que detona esta problemática en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas y no permitidas en espacios públicos. De tal manera es importante que las medidas correctivas implementadas vayan encaminadas a educar a la sociedad, pero también a incentivar el buen uso de nuestros espacios públicos.

2.3.3.2 Seguimiento y monitoreo

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 89.3 de la Ley 1098 de 2006 se establece que la Policía de Infancia y Adolescencia deberá *“adelantar labores de vigilancia y control en los lugares de recreación y deporte y demás espacios públicos en donde habitualmente concurren niños, niñas y adolescentes y a la entrada de los establecimientos educativos de su jurisdicción”*⁷⁶, de esta misma manera, esta labor se desarrollará en coadyuvancia con las gestiones adelantadas por las entidades competentes en el desarrollo de sus funciones para garantizar y preservar, así como cumplir el objeto de este proyecto.

Asimismo, de acuerdo con la Sentencia C-127 de 2023 *“La restricción aplica, además de la protección del espacio público, en garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y conforme a la regulación que expidan las autoridades que ejercen poder de policía en todos los niveles, en el ámbito de sus competencias, con base en los principios pro infans, de proporcionalidad, razonabilidad y autonomía territorial, en los términos de la presente providencia. Lo anterior teniendo en cuenta que una es la atribución que corresponde a los alcaldes en cuanto a definir, razonable y proporcionadamente, las áreas del espacio público en las que por motivos de interés público se ejerce la prohibición de consumo de sustancias psicoactivas, y otra la propia de las entidades de representación popular territoriales, para establecer regulaciones subsidiarias o residuales que definan las condiciones a nivel local, para la aplicación de la restricción, en garantía del derecho de los menores de edad.”*⁷⁷, de forma que el monitoreo y seguimiento del presente proyecto podrá ser llevado a cabo por cualquier autoridad competente.

2.3.3.3 Campañas educativas

Algunos de los adolescentes hoy en día, son incitados al consumo de cigarrillos y también de sustancias alucinógenas, esto frecuentemente sucede en los entornos que los rodean y se produce

⁷⁵ *Términos claves que todo ciudadano debe conocer: Medidas Correctivas.* (s. f.). Secretaría de seguridad, convivencia y justicia. Recuperado de <https://scj.gov.co/es/c/C3%B3digo-policia/c/C3%B3digo-nacional-seguridad-y-convivencia-ciudadana#:~:text=Medidas%20Correctivas%3A%20Las%20medidas%20correctivas,los%20deberes%20espec%C3%ADficos%20de%20convivencia.>

⁷⁶ *Código de la infancia y adolescencia Ley 1098 de 2006.* (s. f.). ICBF. Recuperado de <https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/codigoinfancialey1098.pdf>

⁷⁷ Sentencia C-127 de 2023. (2023). *Corte Constitucional.* <https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2023/C-127-23.htm>

*por medio de insinuaciones de otros jóvenes que por ignorancia se dejan llevar por factores generados del consumismo social y en otros casos por la moda*⁷⁸

Con el fin de mitigar esta problemática social el Distrito con el apoyo de los distintos entes competentes, deberá implementar campañas que permitan a los niños, niñas y adolescentes determinar que existen riesgos por el consumo de estas sustancias, además las campañas empleadas deberán propender a los menores el buen uso de su tiempo libre, así como también la toma de sus propias decisiones en cuanto a la incitación de dichas sustancias.

2.4 Principios. El presente proyecto de acuerdo está dirigido bajo los siguientes principios:

Concurrencia: En el marco de sus respectivas competencias y misiones, debe realizarse una articulación entre el Gobierno Nacional y el Distrito Capital en la implementación del presente programa.

Coordinación: Las entidades distritales deberán coordinar sus actuaciones para el pleno cumplimiento del presente programa, garantizando los derechos de la comunidad, de acuerdo con las competencias y atribuciones legales.

Equidad: Reconocer e integrar cada sector poblacional por medio del proceso de formulación de las políticas públicas tendientes a un abordaje del fenómeno de las sustancias psicoactivas en espacios públicos que articulen los derechos de la comunidad en general y la salud pública.

Razonabilidad y Proporcionalidad: El principio de razonabilidad se ha convertido en un criterio metodológico efectivo para la aplicación jurídica, en especial, cuando se trata de los derechos fundamentales. Asimismo, se trata de determinar hasta qué punto resulta constitucionalmente admisible una intervención estatal, o lo que es lo mismo, cual es el grado de intervención compatible con el respeto a los derechos⁷⁹, de forma que se busca garantizar el libre desarrollo de la personalidad.

3. ANÁLISIS JURÍDICO DE LA INICIATIVA

Este proyecto busca fortalecer políticas públicas para la atención, prevención y consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos de la ciudad, con el fin de promover las garantías necesarias y adecuada protección a las personas protegidas constitucionalmente (niños, niñas, adolescentes, adultos mayores). De igual forma, busca que la comunidad en general acceda de

⁷⁸ Campañas de prevención al consumo de alucinógenos en niños, niñas y adolescentes en Bolívar. (2019, 6 julio). Policía Nacional de Colombia. Recuperado de <https://www.policia.gov.co/noticia/campanas-prevencion-al-consumo-alucinogenos-ninos-ninas-y-adolescentes-bolivar-0>

⁷⁹ RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD: PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES PARA DETENER EL ABUSO DEL PODER DEL ESTADO. (2020). Universidad Santo Tomás. Recuperado de <https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/27460/Razonabilidad%20y%20proporcionalidad%20principios%20constitucionales%20para%20detener%20el%20abuso%20del%20poder%20del%20estado.pdf?sequence=1>

manera libre a los espacios públicos y puedan hacer uso del derecho al goce de un ambiente sano, seguro y adecuado para el desarrollo de sus actividades de recreación, descanso, entre otras, procurando el cuidado integral de la salud individual y de la comunidad, sin vulnerar el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las personas consumidoras, promoviendo la atención y prevención del consumo de sustancias psicoactivas, por medio de seguimiento, monitoreo, medidas correctivas y campañas educativas.

Aunado a lo anterior, se exponen las normas de carácter internacional, constitucionales, legales, jurisprudencia, decretos y resoluciones que fundamentan la viabilidad jurídica de este Proyecto de Acuerdo, que institucionaliza y fortalece políticas públicas para la atención, prevención y consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos de la ciudad.

3.1. Instrumentos internacionales

Mediante la Ley 13 de 1974, se aprueba la “Convención Única sobre estupefacientes” de 1961 y su Protocolo de modificaciones de 1972 de la Organización de las Naciones Unidas, que, de acuerdo con la Resolución 003 de 2022:

El Estado Colombiano reconoce el uso médico y científico de los estupefacientes y su necesaria condición de agentes mitigadores del dolor por lo que resulta indispensable mantener un delicado equilibrio entre su disponibilidad y el control de los mismos para evitar la desviación a mercados ilícitos dadas las graves consecuencias que genera su abuso en la salud pública, por lo que se asume el compromiso de cooperación y fiscalización internacional.

3.2. Normas constitucionales:

La Constitución Política de Colombia de 1991 acoge el modelo de Estado Social de Derecho, sobre el cual versan múltiples obligaciones que son responsabilidad del Estado en beneficio de la ciudadanía, así:

El artículo 49 de la Carta Política determina que *“Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad (...)*

La ley restringirá el consumo y comercialización de cannabis o sus derivados en entornos escolares y reglamentará el porte y consumo de cannabis y sus derivados en espacios públicos, recreativos, en espacios privados y públicos abiertos al público, comunes, zonas comunes, en establecimientos carcelarios y de rehabilitación, entre otros.

Así mismo, el Estado atenderá con un enfoque de derechos humanos a toda la población con una relación problemática con sustancias psicoactivas y a su familia y/o redes de apoyo, garantizando

su tratamiento y rehabilitación; y así prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y, por consiguiente, de la comunidad, y desarrollará de manera permanente campañas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas y sus efectos nocivos, así como estrategias de reducción de riesgos y daños en favor de los consumidores que tienen relación problemática o dependiente con sustancias psicoactivas.”

Asimismo, el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece como fines esenciales del Estado, entre otros, *“servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta; así como asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, siendo obligación de las autoridades de la República, proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”*

De la misma manera el artículo 44 de la carta magna establece: *“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.”*

Se debe destacar que la iniciativa busca proteger tanto los derechos de los niños, como ya se mencionó en el artículo 44 de la constitución política de Colombia, pero también brindar garantías y protección a las personas que constitucionalmente se encuentran protegidas (niños, niñas, adolescentes, adultos mayores) Artículo 46. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria.” y la comunidad en general.

3.3. Jurisprudencia

El presente proyecto encuentra sustento en la **Sentencia C-127-23 (27 de abril)**, a través de la cual, la Corte mantiene la restricción del consumo de sustancias psicoactivas, incluso la dosis mínima, en parques y en espacios públicos, para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, conforme a la regulación que expidan las autoridades locales competentes, determinando que el gobierno nacional deberá proferir un protocolo de aplicación que garantice los derechos fundamentales, así:

i) la exequibilidad de la conducta porte, en el entendido de que esta restricción no se aplica cuando se trata del porte con fines de consumo propio o de dosis medicada; ii) la exequibilidad condicionada del comportamiento de consumo, en los espacios establecidos en las normas, para que la restricción aplique, además, en garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y conforme a la

regulación que expidan las autoridades que ejercen poder de policía en todos los niveles, en el ámbito de sus competencias, con base en los principios pro infans (interés superior del menor), de proporcionalidad, razonabilidad y autonomía territorial, en los términos de la presente providencia.

“(...) En relación con la conducta de consumo, la Sala consideró que la medida busca la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, particularmente, la aplicación del principio de precaución frente a riesgos prohibidos, como el consumo de sustancias psicoactivas. (...)”

De igual forma, esta sentencia ordena:

“Al Gobierno nacional que, si no lo ha hecho, dentro de los 3 meses contados a partir de la notificación de esta decisión, expida un protocolo de aplicación de las normas estudiadas por la Corte. Aquel, deberá enfatizar en: i) la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; ii) el respeto por los derechos fundamentales de los consumidores; iii) la razonabilidad y la proporcionalidad de la actuación policiva para sancionar el porte y el consumo propio y con fines médicos de sustancias psicoactivas en los parques o zonas o áreas del espacio público determinadas por los concejos distritales y municipales en los planes o esquemas de ordenamiento territorial; iv) el respeto por la autonomía territorial y el autogobierno; v) la protección del carácter diverso y plural de la nación; y, vi) la observancia del debido proceso, la aplicación de los procedimientos sancionatorios y la necesidad y carga de la prueba que siempre recae en el funcionario que impone la sanción (...)”

Por lo tanto, en la misma sentencia la Corte Constitucional dio vía libre para que los concejos distritales y municipales sean los responsables de implementar las condiciones bajo las cuales debe aplicarse esta medida, ya que son ellos, los directos conocedores de la situación que enfrenta su ente territorial y las necesidades de los mismos.

En esta sentencia queda claro principalmente que *“El propósito de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es una finalidad constitucional imperiosa. En efecto, el artículo 44 superior establece que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos. También, cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento. Finalmente, consagra que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. De esta forma, la medida estudiada cumple con propósitos que configuran fines legítimos, importantes e imperiosos para la Constitución, pues pretende proteger a los niños frente al consumo y porte de sustancias psicoactivas en espacios públicos como los parques, que son frecuentados por ellos”.*

3.4. Normas con fuerza de ley

El presente proyecto tiene como sustento en las medidas necesarias que se deben tomar para que la comunidad en general, goce de un espacio público sano, para su esparcimiento, esto por medio de la Ley 1801 del 29 de julio de 2016, artículo 34 y 140, que establece:

ARTÍCULO 34. Comportamientos que afectan la convivencia en los establecimientos educativos relacionados con consumo de sustancias. Los siguientes comportamientos afectan la convivencia en los establecimientos educativos y por lo tanto no deben efectuarse:

4. Tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expender bebidas alcohólicas, sustancias prohibidas en el espacio público o lugares abiertos al público dentro del perímetro circundante de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la presente ley.

ARTÍCULO 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y por lo tanto no deben efectuarse.

7. Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.

(Expresiones subrayadas, declaradas INEXEQUIBLES mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-253 de 2019)

(Expresiones subrayadas, declaradas INHIBIDAS para emitir un pronunciamiento, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-489 de 2019)

8. Portar sustancias prohibidas en el espacio público.

14. Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas del espacio público, tales como zonas históricas o declaradas de interés cultural, u otras establecidas por motivos de interés público, que sean definidas por el alcalde del municipio. La delimitación de estas áreas o zonas debe obedecer a principios de razonabilidad y proporcionalidad.

(Numeral 14, adicionado por el Art. 3 de la Ley 2000 de 2019)

PARÁGRAFO 1. Las empresas de servicios públicos pueden ocupar de manera temporal el espacio público para la instalación o mantenimiento de redes y equipamientos, con el respeto de las

calidades ambientales y paisajísticas del lugar, y la respectiva licencia de intervención expedida por la autoridad competente.

PARÁGRAFO 2. Quien incurra en uno o más de los comportamientos señalados será objeto de la aplicación de las siguientes medidas, sin perjuicio de la responsabilidad penal que se genere bajo el Título XIII del Código Penal.

Del mismo modo, la Ley 2000 de 2019 *“por medio de la cual se modifica el Código Nacional de Policía y Convivencia y el Código de la infancia y la Adolescencia en materia de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas en lugares con presencia de menores de edad y se dictan otras disposiciones.”*, la cual, tiene como objeto:

establecer parámetros de vigilancia del consumo y porte de sustancias psicoactivas en lugares habitualmente concurridos por menores de edad como entornos escolares y espacio público.

Asimismo, la Ley 1566 de 2012 *Por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio nacional “entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas”, determina que:*

Le compete al Estado controlar y disminuir “el consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas es un asunto de salud pública y bienestar de la familia, la comunidad y los individuos.”

Por otro lado, el artículo 2° de la Ley 1098 de 2006 *“Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”*, señala como objeto de dicho código: *“(..) establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado ”.*

A su vez, el artículo 8° ídem se refiere al interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes, definiendo este como:

“el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes” , y, en relación con el artículo mencionado, el artículo 9 íbidem, menciona la prevalencia de los derechos de los menores, determinando que:

“En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de

estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona.”

3.5. Decretos

El Decreto Nacional 1504 de 1998 *Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial*, determina a través de sus disposiciones que:

Artículo 1.- Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. En el cumplimiento de la función pública del urbanismo. (...)

Artículo 2.- El espacio público es el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de los habitantes.

Del mismo modo, el Decreto 825 de 2019 *"Por medio del cual se establecen los perímetros y zonas para la restricción del porte, consumo, facilitamiento, distribución, ofrecimiento y comercialización de sustancias psicoactivas, de conformidad con lo previsto en los artículos 2 y 3 de la ley 2000 de 2019, modificatorios parcialmente de los artículos 34 y 140 de la Ley 1801 de 2016, y se dictan otras disposiciones."*, estipula:

"la necesidad de proporcionar a nuestros menores las mejores condiciones para su desarrollo integral, de tal forma que permita que ellos crezcan en un ambiente propicio para ejercer de modo pleno sus derechos (...)"

3.6. Resoluciones

Este proyecto cuenta con sustento jurídico mediante la Resolución 089 de 2019 *"Por la cual se adopta la política integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas"*, a través de la cual se determina que:

"teniendo en cuenta la complejidad de la problemática que plantea el consumo de sustancias psicoactivas. la cual, trasciende a la salud mental y genera un impacto a nivel sanitario, económico y social, se hace necesario adoptar la Política Integral de Prevención y Atención al Consumo de Sustancias Psicoactivas"

4. COMPETENCIA

El Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según artículo 313 de la Constitución Política numeral 1 que estipula lo siguiente:

*“ARTÍCULO 313. Corresponde a los Concejos: 1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio (...)”*⁸⁰

Asimismo, esta Corporación es competente de acuerdo al artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 - Estatuto Orgánico de Bogotá -, numerales 1 y 25, que determinan:

“Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

(...)

*25. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes”*⁸¹

Del mismo modo, el Concejo tiene competencia de acuerdo a la Ley 136 de 1994, la cual establece en su parágrafo 2 del artículo 32 que:

*“Aquellas funciones normativas del municipio para las cuales no se haya señalado si la competencia corresponde a los alcaldes o los concejos, se entenderá asignada a estas corporaciones, siempre y cuando no contraríen la Constitución y la ley”*⁸²

En esa misma línea, el Concejo tiene competencia para expedir normas relacionadas con el sustento del presente proyecto, puesto que, de acuerdo a la Sentencia C-127-23 (27 de abril), M.P. Juan Carlos Cortés González, Expediente: D-14771AC, el Alto Tribunal determinó que el protocolo de aplicación de políticas públicas relacionadas al consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos debe enfatizar en:

“ (...) iii) la razonabilidad y la proporcionalidad de la actuación policiva para sancionar el porte y el consumo propio y con fines médicos de sustancias psicoactivas en los parques o zonas

⁸⁰ Artículo 313 Constitución Política de Colombia. (1991). Recuperado de <https://www.constitucioncolombia.com/titulo-11/capitulo-3/articulo-313>

⁸¹ Decreto Ley 1421 de 1993. (1993). Función Pública. Recuperado de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=106394>

⁸² Ley 136 de 1994. (1994). Función Pública. Recuperado de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=329>

o áreas del espacio público **determinadas por los concejos distritales y municipales en los planes o esquemas de ordenamiento territorial (...)**⁸³

Igualmente, para la implementación del presente proyecto es competente la Secretaría Distrital de Integración Social, por cuanto en el marco de sus competencias y de acuerdo al Decreto 607 de 2007⁸⁴ artículos 1 y 2, se establece lo siguiente:

Artículo 1°. Objeto. *La secretaría distrital de integración social, tiene por objeto orientar y liderar la formulación y el desarrollo de políticas de promoción, prevención, protección, restablecimiento y garantía de los derechos de los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, con especial énfasis en la prestación de servicios sociales básicos para quienes enfrentan una mayor situación de pobreza y vulnerabilidad. Así como, prestar servicios sociales básicos de atención a aquellos grupos poblacionales que además de sus condiciones de pobreza se encuentran en riesgo social, vulneración manifiesta o en situación de exclusión social.*

Artículo 2°. Funciones. *La Secretaría Distrital de Integración Social, tendrá las siguientes funciones básicas:*

a) Formular, orientar y desarrollar políticas sociales, en coordinación con otros sectores, organismos o entidades, para los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, en especial de aquellos en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad y promover estrategias que permitan el desarrollo de sus capacidades.

b) Dirigir la ejecución de planes, programas y proyectos de restablecimiento, prevención, protección y promoción de derechos de las personas, familias y comunidades, en especial aquellas de mayor situación de pobreza y vulnerabilidad.

c) Establecer objetivos y estrategias de corto, mediano y largo plazo, para asegurar la prestación de servicios básicos de bienestar social y familiar a la población objeto.

A su vez, para la ejecución de este proyecto, es competencia de las Alcaldías Locales, de acuerdo al Artículo Tercero del Decreto 153 de 2010⁸⁵ y el artículo 86 del Decreto 1421 de 1993⁸⁶, que determinan lo siguiente:

⁸³ Corte Constitucional. (2023). Sentencia C-127-23 (27 de abril). *COMUNICADO 13* 26 y 27 de abril, 10-20. Recuperado de <https://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/Comunicado%2013%20Abril%2026%20y%2027%20de%202023.pdf>

⁸⁴ *DECRETO 607 DE 2007.* (2007, 28 diciembre). Recuperado de <https://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/polpublicas/LGBT/Decreto%20607%20de%202007%20ESTRUCTURA%20SDIS%2026%2008%2010.pdf>

⁸⁵ *DECRETO 153 DE 2010.* (2010, 21 abril). Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Recuperado de <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=39356>

⁸⁶ *Decreto Ley 1421 de 1993.* (1993, 21 julio). Función Pública. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=106394>

“Artículo Tercero-. Alcaldías Locales. Son funciones de las Alcaldías Locales:

b. Garantizar el desarrollo armónico e integrado de la Localidad.

d. Las establecidas en el Decreto Ley 1421 de 1993.

e. Las demás que le sean asignadas o delegadas y que correspondan a la naturaleza de las Localidades. (...)”

“ARTÍCULO 86. Atribuciones. Corresponde a los alcaldes locales:

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, las demás normas nacionales aplicables los acuerdos distritales y locales y las decisiones de las autoridades distritales.

3. Articular y coordinar en sus respectivas localidades las políticas distritales de cada sector a través del trabajo conjunto con su gabinete local.

4. Reglamentar los respectivos acuerdos locales.

9. Dictar los actos y ejecutar las operaciones necesarias para la protección, recuperación y conservación del espacio público, el patrimonio cultural, arquitectónico e histórico, los monumentos de la localidad, los recursos naturales y el ambiente, con sujeción a la ley, a las normas nacionales aplicables, y a los acuerdos distritales y locales.

17. Desarrollar acciones que promuevan los derechos de las mujeres, desde los enfoques de género, de derechos, diferencial y territorial.

20. Ejercer las demás funciones que les asignen la Constitución y la ley, los acuerdos distritales y los decretos del alcalde mayor. (...)”

5. IMPACTO FISCAL

La Ley 819 de 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones” determina:

“Artículo 7º. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”.

En consideración a lo anterior, esta iniciativa **no tendría un impacto fiscal** en razón a que la misma no genera la obligatoriedad de gastos, ni implica la apropiación de recursos adicionales a los sectores y entidades responsables de su implementación y, por el contrario, promueve la atención y prevención del consumo de sustancias psicoactivas, la preservación del espacio público y la protección a personas protegidas constitucionalmente y comunidad en general.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

6.1 Delegación de la Unión Europea en México, & Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2024). Informe mundial sobre las drogas: LOS DAÑOS DEL PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS SIGUEN AUMENTANDO EN MEDIO DE LA EXPANSIÓN DEL CONSUMO Y LOS MERCADOS DE DROGA. Recuperado de: <https://www.unodc.org/lpomex/es/noticias/junio-2024/informe-mundial-sobre-las-drogas-2024-de-unodc-los-daos-del-problema-mundial-de-las-drogas-siguen-aumentando-en-medio-de-la-expansion-del-consumo-y-los-mercados-de-drogas.html>

6.2 Alcaldía de Bogotá - Secretaría Distrital de Salud, Este estudio fue realizado por la Alcaldía de Bogotá – Secretaría Distrital de Salud y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur. (2022). Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá, D.C. Recuperado de: https://www.unodc.org/documents/colombia/2023/septiembre-9/ESTUDIO_DE_CONSUMO_DE_SUSTANCIAS_PSICOACTIVAS_BOGOTA_2022.pdf

6.3 LEY 1566 DE 2012: *por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio nacional «entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción a sustancias» psicoactivas.* (2012). Función Pública. Recuperado de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=48678>

6.4 Ministerio de Salud y Protección Social & Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2013). EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, UN ASUNTO DE SALUD PÚBLICA. En *Guía práctica para entender los derechos en salud y la atención integral de las personas que consumen sustancias psicoactivas.* Recuperado de <https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Publicaciones/Publicaciones/CO031052013-Cartilla.pdf>

6.5 ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C. (2019). *Decreto 825 de 2019.* Recuperado de <https://scj.gov.co/sites/default/files/marco-legal/Decreto%20825%20de%202019.pdf>

6.6 *Decreto Ley 1421 de 1993 - Gestor Normativo.* (1993, 21 de julio). Función Pública. Recuperado de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=106394>

6.7 Congreso de la República. (2016, 29 julio). *Ley 1801 de 2016.* Secretaria del Senado. Recuperado de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1801_2016.html

6.8 ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C. (2019). *Decreto 825 de 2019.* Recuperado de <https://scj.gov.co/sites/default/files/marco-legal/Decreto%20825%20de%202019.pdf>

6.9 Constitución Política 1 de 1991 Asamblea Nacional Constituyente - Gestor Normativo. (s. f.). Función Pública. Recuperado de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125>

6.10 ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C. (2019). *Decreto 825 de 2019*. Recuperado de <https://scj.gov.co/sites/default/files/marco-legal/Decreto%20825%20de%202019.pdf>

6.11 *Términos claves que todo ciudadano debe conocer: Medidas Correctivas*. (s. f.). Secretaría de seguridad, convivencia y justicia. Recuperado de <https://scj.gov.co/es/c%C3%B3digo-policial/c%C3%B3digo-nacional-seguridad-y-convivencia-ciudadana#:~:text=Medidas%20Correctivas%3A%20Las%20medidas%20correctivas,los%20deberes%20espec%C3%ADficos%20de%20convivencia>.

6.12 Código de la infancia y adolescencia Ley 1098 de 2006. (s. f.). ICBF. Recuperado de <https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/codigoinfancialey1098.pdf>

6.13 Sentencia C-127 de 2023. (2023). Corte Constitucional. <https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2023/C-127-23.htm>

Campañas de prevención al consumo de alucinógenos en niños, niñas y adolescentes en Bolívar. (2019, 6 julio). Policía Nacional de Colombia. Recuperado de <https://www.policia.gov.co/noticia/campanas-prevencion-al-consumo-alucinogenos-ninos-ninas-y-adolescentes-bolivar-0>

6.14 *DECRETO 607 DE 2007*. (2007, 28 diciembre). Recuperado de <https://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/polpublicas/LGBT/Decreto%20607%20de%202007%20ESTRUCTURA%20SDIS%2026%2008%2010.pdf>

6.15 *DECRETO 153 DE 2010*. (2010, 21 abril). Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Recuperado de <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=39356>

6.16 *Decreto Ley 1421 de 1993*. (1993, 21 julio). Función Pública. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=106394>

6.17 Ministerio de Salud y Protección Social. (s. f.). *Prevención del consumo de sustancias psicoactivas (SPA)*. Recuperado de <https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/SMental/Paginas/convivencia-desarrollo-humano-sustancias-psicoactivas.aspx#:~:text=Es%20toda%20sustancia%20que%20introducida,o%20los%20procesos%20de%20pensamiento>.

6.18 Ministerio de Salud y Protección Social. (s. f.). *Prevención del consumo de sustancias psicoactivas (SPA)*. Recuperado de <https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/SMental/Paginas/convivencia-desarrollo-humano-sustancias->

[psicoactivas.aspx#:~:text=Es%20toda%20sustancia%20que%20introducida,o%20los%20procesos%20de%20pensamiento.](#)

6.19 Secretaria de Planeación. (s. f.). *Espacio Público*. Recuperado de [https://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/taller-del-espacio-publico/generalidades#:~:text=Definici%C3%B3n,intereses%2C%20individuales%20de%20los%20habitantes.](https://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/taller-del-espacio-publico/generalidades#:~:text=Definici%C3%B3n,intereses%2C%20individuales%20de%20los%20habitantes)

6.20 Ministerio de Justicia y del Derecho. (s. f.). *SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL*. Recuperado de <https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/conexion-justicia/Documents/Infografias/InfografiaComisarios/INFOGRAFIA%20SUJETOS%20DE%20ESPECIAL%20PROTECCION%20CONSTITUCIONAL.pdf>

6.21 Ministerio de Salud y Protección Social. (s. f.-a). *ABECÉ de la prevención y atención al consumo de sustancias psicoactivas*.

6.22 Instituto para la Economía Social. (s. f.). *ENFOQUE POBLACIONAL EN POLÍTICAS PÚBLICAS Ciclo vital y generacional*. Recuperado de https://www.ipes.gov.co/images/informes/transparencia/politicas_publicas/toma_decisiones/BOLETIN%20DE%20POLITICAS%20PUBLICAS%20POBLACIONAL%20DE%20ENFOQUE%20DIFERENCIAL%20-%201.pdf

6.23 DANE - *Enfoque diferencial e interseccional*. (s. f.). Recuperado de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/enfoque-diferencial-e-interseccional>

Cordialmente,

DARÍO FERNANDO CEPEDA PEÑA
Concejal de Bogotá D.C.
Partido Liberal.

PROYECTO DE ACUERDO NO 234 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA Y SE FORTALECEN POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD EN EL MARCO DE LA SENTENCIA C-127 DE 2023...”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial, las conferidas por artículo 313 de la Constitución Política numeral 1, al artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 - Estatuto Orgánico de Bogotá -, numerales 1 y 25, Ley 136 de 1994, la cual establece en su parágrafo 2 del artículo 32, Sentencia C-127-23

ACUERDA:

ARTÍCULO 1: OBJETO: La presente iniciativa tiene por objeto institucionalizar y fortalecer políticas públicas para la atención, prevención y consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos de la ciudad.

ARTÍCULO 2. FINALIDADES. Son finalidades del presente proyecto

2.1. Promover políticas públicas que permitan a la comunidad en general, el adecuado uso de los espacios públicos, con el fin de que estos sean exclusivamente aprovechables para el objeto de su creación.

2.2. Ofrecer programas educativos que le permitan a la población consumidora el libre desarrollo de su personalidad en cuanto a su ejercicio en espacios aptos para este tipo de acciones. Lo anterior con el fin de concientizarlos sobre los espacios de esparcimiento familiar que no son los apropiados debido al gran flujo de niños, adultos mayores y comunidad en general.

2.3. Ofrecer acompañamiento psicosocial con el cual la población consumidora de sustancias psicoactivas, puedan acceder a programas enfocados a la prevención y la resocialización dando como prioridad el conocimiento al uso adecuado y sin exceso de estas sustancias.

3.4. Las demás que la Administración Distrital considere pertinentes y congruentes con los objetivos del programa y que sean definidas en la reglamentación.

ARTÍCULO 3. ENFOQUES. La implementación del presente proyecto se hará teniendo en cuenta, los siguientes enfoques:

3.1. Enfoque de derechos humanos: Toda acción tendiente a prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos debe estar orientada por el respeto de los derechos humanos,

mediante políticas públicas que protejan el derecho a la vida, a la salud, al goce de un ambiente sano, al libre desarrollo de la personalidad, a la integridad física y al cuidado.

3.2 Enfoque poblacional: El ciclo vital o de vida es un enfoque, poblacional que permite entender y atender las dificultades por las que atraviesan los individuos, en este caso, brindar atención al cuidado de población constitucionalmente protegida para el pleno goce de sus derechos y desarrollar prevención en cuanto al consumo de sustancias en espacios públicos que puedan afectar la integridad de la comunidad.

3.3 Enfoque para la salud pública: Mitigación del impacto en temas de salud, tanto física como mental, producido por el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos, así como la respectiva planificación para tratar el tema, que, para el caso del presente proyecto, resulta de vital urgencia.

4.4 Enfoque interseccional y diferencial: Reconocimiento de grupos poblacionales con características particulares en razón de su edad o etapa del ciclo vital, entre otras características; para promover la visibilización de situaciones de vida particulares y brechas existentes, y guiar la toma de decisiones públicas que permitan garantizar sus derechos en cuanto al goce de un ambiente sano y la prevención del consumo de sustancias en el espacio público.

ARTÍCULO 4. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL. La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Seguridad, promoverá la coordinación entre los Sectores Centrales, Secretaria de Educación, Secretaria de Integración Social, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, las Localidades en colaboración con las Alcaldías Locales, y demás entidades competentes, para la reglamentación, implementación, evaluación y acompañamiento del presente proyecto.

ARTICULO 5. FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN. Las entidades Distritales vinculadas y las demás que por competencia de sustracción normativa tengan asignadas funciones en temas relacionados con la prevención y atención de consumo de sustancias psicoactivas, deberán formular un plan de acción en el marco de la Sentencia C-127 de 2023 y el artículo 140 de la Ley 1801 de 2016, en el cual deberá tener metas y líneas de intervención.

ARTICULO 6. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PROYECTO DE ACUERDO NO 235 DE 2025**PRIMER DEBATE**

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA DESCONGESTIÓN DE EXPEDIENTES EN LAS INSPECCIONES DE POLICÍA DE BOGOTÁ, SE PROPENDE POR SU FORTALECIMIENTO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.”

I. OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto de acuerdo tiene como objetivo establecer lineamientos para la descongestión de expedientes en las Inspecciones de Policía de Bogotá y su fortalecimiento, con el fin de agilizar los procesos jurídico- policivos, garantizando la pronta y efectiva resolución de los casos.

II. SUSTENTO JURÍDICO**• DE ORDEN CONSTITUCIONAL**

Que el **artículo 1° de la Constitución Política de Colombia** establece que Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

Que el **artículo 2 de la Constitución Política de Colombia** precisa que Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Que el **artículo 209 de la Constitución Política de Colombia** establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Que **el artículo 322 de la Constitución Política** de Colombia establece que Bogotá, Capital de la República, se organiza como Distrito Capital.

Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determinen la Constitución, las leyes especiales que para el mismo se dicten y las disposiciones vigentes para los municipios.

Con base en las normas generales que establezca la ley, el concejo a iniciativa del alcalde, dividirá el territorio distrital en localidades, de acuerdo con las características sociales de sus habitantes, y hará el correspondiente reparto de competencias y funciones administrativas. A las autoridades distritales corresponderá garantizar el desarrollo armónico e integrado de la ciudad y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito; a las locales, la gestión de los asuntos propios de su territorio.”

- **DE ORDEN LEGAL**

LEY 1801 DE 2016: “ Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.”

- **Numeral 13 Artículo 205:** Corresponde al Alcalde (...) Tener en la planta de personal de la administración distrital o municipal, los cargos de inspectores y corregidores de Policía necesarios para la aplicación de este Código.
- **Parágrafo 2 Artículo 206:** Cada alcaldía tendrá el número de inspectores de Policía que el Alcalde considere necesario, para una rápida y cumplida prestación de la función de Policía en el municipio.

Habrán inspecciones de Policía permanentes durante veinticuatro (24) horas en las ciudades capitales de departamento, en los distritos, y en los municipios que tengan una población superior a los cien mil habitantes.

- **DE ORDEN DISTRITAL**

ACUERDO 735 DE 2019 : “Por el cual se dictan normas sobre competencias y atribuciones de las Autoridades Distritales de Policía”

- **Artículo 7:** El Alcalde Mayor de Bogotá determinará el número de Inspecciones de Policía que considere necesario para una oportuna, rápida y cumplida prestación de la función de Policía en el Distrito Capital.
- **Parágrafo 2 Art 7:** El Alcalde Mayor de Bogotá podrá establecer Inspecciones de Policía para la atención de asuntos prioritarios, atendiendo criterios de interés general que impacten la convivencia ciudadana.

DECRETO DISTRITAL 033 DE 2021: “Por el cual se fija el número de Inspecciones de Policía en el Distrito Capital, se establece su competencia territorial y denominación, y se dictan otras disposiciones”

- **Artículo 1:** Fijar en doscientos veintitrés (223) el número de Inspecciones de Policía en el Distrito Capital, operadas por doscientos veintiséis (226) inspectores como autoridad de Policía.
- **Parágrafo 1 Artículo. 4:** Las Inspecciones de Policía que integran el Factor Localidad, estarán adscritas a la Alcaldía Local respectiva, cumpliendo las funciones establecidas en la Ley.

III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

En la actualidad, la ciudad de Bogotá enfrenta diversos desafíos relacionados con la intolerancia, seguridad, convivencia y, en general, con el incumplimiento de la ley, los cuales han sido identificados como causas fundamentales y originarias de violencia. Ante esta situación, la promoción de la convivencia ciudadana se ha establecido como un objetivo prioritario para el Estado y se materializa por medio de expedición de políticas públicas y de normatividad que permitan prevenir y sancionar aquellas conductas que atenten contra el orden público, conminando a los ciudadanos al cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales.

Frente a la necesidad de lograr consolidar una sociedad cívica, surge el derecho policivo en el ordenamiento jurídico colombiano como una herramienta clave encargada de “*establecer el conjunto de reglas jurídicas que garantizan los valores colectivos a partir de la búsqueda de los principios esenciales constitucionales*”. Estos valores han propiciado un cambio significativo en la naturaleza de la norma policiva, que anteriormente se centraba en la limitación de los derechos y libertades públicas y que ahora se orienta hacia su garantía y materialización efectiva⁸⁷.

Este cambio se ve reflejado en la promulgación de la **Ley 1801 de 2016**, más conocida como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que establece y distingue **CINCO** aspectos fundamentales: el poder de policía, el poder subsidiario de policía y el poder residual de policía, así como la función y la actividad de policía:

El poder de policía, como lo define el artículo 11, se refiere a la facultad del Congreso de la República para expedir normas generales que regulen aspectos relacionados con la libertad, los derechos constitucionales y la convivencia, con el fin de establecer medios y medidas correctivas en caso de incumplimiento.

⁸⁷ Convivencia Y Cultura Ciudadana: Dos Pilares Fundamentales Del Derecho Policivo. María de Jesus Illera (2005). Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/851/85102310.pdf>

Por su parte, **el poder subsidiario de policía**, según lo establecido en el artículo 12, faculta a las asambleas departamentales y al Concejo Distrital de Bogotá para dictar normas en materias no reservadas legalmente, sin exceder las limitaciones impuestas por el legislador y respetando los derechos y deberes establecidos por ley.

Finalmente, **el poder residual de policía**, contemplado en el artículo 13, permite a los Concejos Distritales y Municipales reglamentar comportamientos no regulados por la ley o los reglamentos departamentales de policía, siempre y cuando se ciñan a los medios, procedimientos y medidas correctivas establecidas en la ley.

Por otro lado, **la función de policía**, descrita en el artículo 16, es la facultad de hacer cumplir las disposiciones establecidas en ejercicio del poder de policía a través de reglamentos generales y acciones apropiadas para garantizar la convivencia. Asimismo, el artículo 198 de la ley establece las autoridades competentes para ejercer la función de policía, que incluyen al Presidente de la República, los gobernadores, los alcaldes distritales o municipales, **los inspectores de policía** y corregidores, así como las autoridades especiales y el personal uniformado de la Policía Nacional.

En última instancia, **la actividad de policía** consiste en la ejecución de medidas correctivas por parte del personal uniformado de la Policía Nacional, conforme a las atribuciones conferidas por la Constitución, las leyes y los reglamentos, con el objetivo de preservar la convivencia y restaurar los comportamientos que la alteren.

En este sentido, el presente proyecto de acuerdo se enfocará en adoptar nuevas medidas que contribuyan al cumplimiento y materialización de la **función de policía que ejercen los inspectores**. Lo anterior, de conformidad con la facultad que ostenta el Concejo Distrital para expedir normativa en el marco del poder subsidiario de policía, sin exceder las limitaciones establecidas en el artículo 12 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

● INSPECTORES DE POLICÍA-NATURALEZA JURÍDICA

Los inspectores de policía actúan como autoridades de apoyo en todo el territorio nacional. Su tarea primordial consiste en fomentar la convivencia pacífica en la comunidad, interviniendo para mediar y resolver los conflictos que surgen en la sociedad, aplicando las normativa establecida y las disposiciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. (Concepto 209911 de 2022, Función Pública)⁸⁸

Adicionalmente, las inspecciones de policía desempeñan un papel crucial en la protección y garantía de los derechos humanos, facilitan los procesos de conciliación y contribuyen con la descongestión

⁸⁸ Concepto 209911 de 2022 Departamento Administrativo de la Función Pública. Recuperado de: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=196302#:~:text=Los%20empleados%20p%C3%ABlicos%20a%20que,disfrute%20del%20respectivo%20per%C3%ADodo%20vacacional.>

del sistema judicial (López, 2002)⁸⁹. Frente a este último aspecto, es importante resaltar que los inspectores de policía tienen competencia en diversos asuntos vinculados con la convivencia ciudadana, lo que les permite intervenir y solucionar disputas previniendo que los ciudadanos accedan a la justicia ordinaria y se aumente su congestión.

No obstante, es esencial abordar el desafío que representa la congestión de expedientes al interior de las inspecciones de policía, aspecto que será profundizado en el siguiente apartado, especialmente enfocado en la realidad específica de las inspecciones en el Distrito Capital y a las conductas reiterativas que afectan la seguridad y convivencia ciudadana .

- **PANORAMA ACTUAL DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA EN BOGOTÁ Y PRINCIPALES CONDUCTAS REITERATIVAS.**

Actualmente, en Bogotá existen 126 inspecciones de Policía, pero solo 86 de estas están adscritas a cada una de las localidades de la ciudad. Estas inspecciones ejercen su competencia dentro del territorio correspondiente y están adscritas a la Alcaldía Local de su jurisdicción, desempeñando las funciones que les confiere la ley

A continuación, se presenta un cuadro que muestra el número de inspecciones de Policía en cada localidad y la cantidad de expedientes acumulados en cada una de ellas:

⁸⁹ Análisis Del Inspector De Policía En El Sistema Jurídico Colombiano: Régimen Jurídico En La Ley 1801 De 2016, Iván Camilo López Pinzón. Recuperado de: <https://bdigital.uxternado.edu.co/server/api/core/bitstreams/417d3c4f-27f7-4b8d-9bf7-c89604672034/content>

Localidad	Inspecciones	Expedientes
Usaquén	5	63.502
Chapinero	4	44.949
Santa Fe	5	122.564
San Cristóbal	4	29.604
Usme	4	54.961
Tunjuelito	3	55.379
Bosa	4	91.421
Kennedy	7	111.690
Fontibón	4	35.310
Engativá	7	81.979
Suba	7	117.241
Barrios Unidos	4	46.751
Teusaquillo	4	39.936
Los Mártires	3	74.550
Antonio Nariño	3	15.718
Puente Aranda	5	36.405
La Candelaria	1	23.879
Rafael Uribe Uribe	4	63.256
Ciudad Bolívar	5	103.249
Sumapaz	3	5
Total	86	1.212.344¹

Fuente: Respuesta de la Secretaría Distrital de Gobierno a la proposición 563 del 2024.

De esta información, se destaca que las localidades con mayor número de expedientes no necesariamente son aquellas que cuentan con el mayor número de inspecciones de Policía. Por ejemplo, las localidades de Bosa y Los Mártires cuentan solo con 4 y 3 inspecciones de policía cada una, pero tienen una cantidad amplia de expedientes acumulados: 91.421 y 74.550 respectivamente. Mientras tanto, localidades como Usaquén, que cuenta con 5 inspecciones, tienen solo 63.000 expedientes represados.

Por otro lado, localidades como San Cristóbal y Puente Aranda, con un bajo número de expedientes (29.604 y 36.405 respectivamente), tienen una asignación de inspecciones que resulta más alta (4 y 5) en comparación con su carga. También es el caso de Antonio Nariño que para 15.718 expedientes cuenta con 3 inspecciones.

Además, se deben sumar los expedientes de las restantes 40 inspecciones de policía que, por razones de competencia, están a cargo de la Secretaría de Gobierno. Estas incluyen los centros de traslado de protección, de atención al ciudadano y de atención prioritaria, que en total suman 190,341 expedientes activos.

Lo anterior permite concluir que, en total, sin contar Sumapaz ni aquellos procesos que se resuelven bajo el marco jurídico del Decreto 01 de 1986 y de la Ley 1437 de 2011, actualmente en la ciudad de Bogotá existen cerca de 1.402.685 expedientes

Por otra parte, es importante aclarar que estos procesos policivos se desarrollan dentro del marco normativo establecido por la Ley 1801 de 2016. No obstante, aún existen procesos vigentes que se rigen por dos marcos normativos anteriores a la entrada en vigencia del Código Nacional de Policía: el Decreto 01 de 1984 y la Ley 1437 de 2011. Según estos marcos, los alcaldes locales tienen la competencia para emitir fallos en primera instancia en dichos procesos. A continuación, se presentan las cifras de los procesos que actualmente cada alcaldía local tiene pendiente de fallo desagregado por temática.

LOCALIDAD	ALCALDIA	DECRETO 01/1984			LEY 1437/2011			Total general
		COMERCIO	E.PUBLICO	OBRAS	COMERCIO	E.PUBLICO	OBRAS	
01	Usaquen	532	142	507	463	119	864	2.627
02	Chapinero	149	85	240	139	44	346	1.003
03	Santa Fe	2	50	9	8	17	23	109
04	San Cristobal	146	175	188	68	75	693	1.345
05	Usme	25	136	399	68	136	570	1.334
06	Tunjuelito	5	8	18	21	64	15	131
07	Bosa	2	15	49	83	16	33	198
08	Kennedy	151	1.371	155	559	676	108	3.020
09	Fontibón	344	121	168	103	14	195	945
10	Engativá	578	714	967	414	55	890	3.618
11	Suba	1.062	776	386	658	285	996	4.163
12	Barrios Unidos	94	23	117	249	11	771	1.265
13	Teusaquillo	284	57	207	919	42	901	2.410
14	Martires	8	40	31	69	3	106	257
15	Antonio Nariño	68	59	101	76	16	497	817
16	Puente Aranda	49	121	113	272	147	534	1.236
17	La Candelaria	1		8	4		20	33
18	Rafael Uribe	45	78	179	287	556	403	1.548
19	Ciudad Bolívar	11	694	82	65	149	33	1.034
20	Sumapaz							
Total general		3.556	4.665	3.924	4.525	2.425	7.998	27.093

La necesidad de emitir estos fallos radica principalmente en que las problemáticas no resueltas durante tanto tiempo tienden a generar nuevas querellas. Esto incide directamente en el aumento de procesos, ahora bajo el marco normativo del Código Nacional de Policía, lo que congestiona aún más las inspecciones de policía en cada localidad.

Por otra parte, y en relación con las conductas reiterativas que han contribuido al incremento de expedientes, se detalla a continuación el total de casos iniciados durante el periodo comprendido

entre 2020 y 2023, de acuerdo con las estadísticas proporcionadas por la Secretaría Distrital de Gobierno.

Top 10 de querellas y comparendos del código 1801 de 2016

ARTÍCULO	TOTAL (comparendo+ querellas)	CONDUCTA
27.6.	378.118	Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio.
146.12.	127.159	Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios distintos a las puertas designadas para el efecto.
146.7.	117.490	Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades.
35.2.	114.756	Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.
140.13.	90.126	Fijar en espacio público propaganda, avisos o pasacalles, pancartas, pendones, vallas o banderolas, sin el debido permiso o incumpliendo las condiciones establecidas en la normatividad vigente.
140.4.	34.532	Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes

95.1.	24.645	Comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil con reporte de hurto y/o extravío en la base de datos negativa de que trata el artículo 106 de la Ley 1453 de 2011 o equipo terminal móvil cuyo número de identificación físico o electrónico haya sido reprogramado, remarcado, modificado o suprimido.
140.14	21.875	Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas del espacio público, tales como zonas históricas o declaradas de interés cultural, u otras establecidas por motivos de interés público, que sean definidas por el alcalde del municipio. La delimitación de estas áreas o zonas debe obedecer a principios de razonabilidad y proporcionalidad.
140.8.	20.710	Portar sustancias prohibidas en el espacio público.
35.1.	20.354	Irrespetar a las autoridades de Policía

Fuente: Elaboración Propia a partir de la Respuesta de la Secretaría Distrital de Gobierno a la proposición 095 del 2024

El análisis muestra el top 10 de las infracciones más frecuentes en Bogotá, destacando problemas clave en seguridad, transporte y uso del espacio público. Portar armas o sustancias peligrosas (378.118 casos) lidera, reflejando una preocupación significativa en términos de seguridad ciudadana. Le siguen conductas relacionadas con el transporte público, como ingresar por lugares indebidos (127.159 casos) y evadir el pago del servicio (117.490 casos), lo que pone en evidencia desafíos en la gestión y el respeto al sistema de transporte. Además, se reportan infracciones en el cumplimiento de órdenes de la Policía (114.756 casos) y en el uso del espacio público, como instalar propaganda sin permiso (90.126 casos) y ocupaciones indebidas (34.532 casos.). En conjunto, estas infracciones son un reflejo de las principales problemáticas que enfrenta la ciudad en términos de convivencia, seguridad y gestión del espacio urbano.

Finalmente, es importante precisar que, mediante el Decreto 033 de 2021, estableció un total de 223 inspecciones de policía, incluyendo aquellas creadas específicamente para funciones de descongestión en virtud del Decreto 346 de 2020.

En línea con el propósito de cumplir con el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2023 y alcanzar la meta de descongestionar el 60% de las actuaciones de policía pendientes de fallo en primera instancia,

la Administración Distrital liderada por Claudia López implementó la creación de 320 empleos temporales, distribuidos de la siguiente manera:

- 100 inspectores de policía,
- 10 profesionales universitarios, y
- 210 auxiliares administrativos.

No obstante, estos cargos fueron de carácter temporal y su gestión culminó el 30 de junio de 2024. Como consecuencia, actualmente en Bogotá operan solo 126 inspecciones de policía de las 223 que estuvieron en funcionamiento durante la administración de Claudia López, lo que representa una reducción del 43,50% en el número de inspectores.

Esta situación agrava la congestión de expedientes, afectando la eficiencia en la resolución de casos y debilitando la capacidad de respuesta institucional. A la fecha, se desconoce la estrategia de la actual administración distrital para abordar y resolver los expedientes represados, lo que genera incertidumbre sobre la gestión y continuidad de los procesos pendientes.

IV. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En colaboración con la ciudadanía, se han desarrollado diversos espacios participativos en las diferentes localidades de Bogotá. A través de estos encuentros, se ha logrado identificar y agrupar las principales problemáticas que aquejan a la ciudad, gracias al aporte de los ciudadanos y su compromiso en la búsqueda de soluciones.

En este proceso, se ha puesto de manifiesto el profundo malestar de la comunidad hacia las instituciones judiciales de la capital. Los términos "demorados" y "complejos" son utilizados para describir la alta congestión que enfrentan las inspecciones de policía, debido a la gran cantidad de expedientes que deben manejar a diario como consecuencia de los problemas de seguridad y convivencia que afectan a la comunidad.

En su mayoría, las quejas de la ciudadanía, recaen las problemáticas de convivencia, tales como ruido, riñas, consumo y venta de estupefacientes, oferta de servicios sexuales pagos, que se desprenden del funcionamiento ilegal de establecimientos de alto impacto en zonas residenciales, decretadas por el Plan de Ordenamiento Territorial. Situaciones como estas, son competencia de las inspecciones de policía, las cuales no son resultas a tiempo, afectando profundamente la calidad de vida de los bogotanos.



V. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el Artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993, principalmente en el numeral 1 que faculta al a Corporación para dictar normas así: DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”. Art. 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley: (...) 1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

Asimismo, el Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y el alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

IV. IMPACTO FISCAL

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003:

“En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la

exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”.

Teniendo en cuenta lo anterior, hay que aclarar que el presente proyecto de acuerdo al dictar medidas generales para la descongestión de las inspecciones de policía del Distrito Capital, no genera impacto fiscal para las finanzas del Distrito. Se traza es una ruta de acción a la Secretaría Distrital de Gobierno para atender la problemática identificada.

V. RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

El limitado acceso a la justicia, la alta congestión de expedientes en las inspecciones de policía y la ausencia de fortalecimiento institucional constituyen graves obstáculos que dificultan el desarrollo sostenible de Bogotá como ciudad. Por lo tanto, el presente proyecto de acuerdo además del propósito establecido, pretende aportar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente alineándose con el ODS 16: "Paz, Justicia e Instituciones Sólidas". Este objetivo apunta a promover sociedades pacíficas e inclusivas mediante el fortalecimiento del Estado de derecho, garantizando el acceso igualitario a la justicia para todos los ciudadanos, sin discriminación alguna. Además, busca crear instituciones eficaces, responsables, transparentes y garantes del debido proceso a todos los niveles.

Al descongestionar los expedientes y fortalecer las Inspecciones de Policía de Bogotá, este proyecto sienta las bases para consolidar la ley, mejorar la eficiencia en la administración de justicia y restablecer la confianza ciudadana en las instituciones. Contribuyendo directamente a construir una sociedad más pacífica, segura e inclusiva, donde los conflictos se resuelvan por vías legales y legítimas. De esta manera, se allana el camino hacia el desarrollo sostenible de la ciudad, al tiempo que se promueve la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la transparencia en las instituciones públicas.

VI. RELACIÓN CON EL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO

La administración distrital ha identificado la acumulación crítica de expedientes en las inspecciones de policía de Bogotá, reconociendo los obstáculos que esto representa para garantizar la pronta resolución de conflictos. En respuesta, el plan Distrital de Desarrollo ha establecido la meta de **emitir 1.608.200 fallos de fondo en primera instancia para los expedientes relacionados con comportamientos contrarios a la convivencia, conforme al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana**. Este objetivo se enmarca dentro del programa “*Diálogo social y cultura ciudadana para la convivencia pacífica y la recuperación de la confianza*”, que contempla reducir el número de expedientes represados en las estaciones de policía, facilitando así la aplicación efectiva del Código de Policía.

Durante el cuatrienio anterior, se implementó un plan de fortalecimiento institucional que incluyó la asignación de recursos y la contratación de 673 funcionarios especializados para las plantas de

inspecciones de policía y corregidores, con un plazo estimado de 2,5 años. Sin embargo, según lo expuesto en la parte motiva del presente proyecto de acuerdo, estas medidas no han logrado descongestionar satisfactoriamente las inspecciones de policía.

En consecuencia, este proyecto propone lineamientos claros y específicos que serán fundamentales para alcanzar la meta establecida en el Plan Distrital de Desarrollo. Se presentan medidas estratégicas orientadas al fortalecimiento de las inspecciones de policía, las cuales son esenciales para abordar y resolver la problemática de congestión de expedientes previamente identificada.

PROYECTO DE ACUERDO NO 235 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA DESCONGESTIÓN DE EXPEDIENTES EN LAS INSPECCIONES DE POLICÍA DE BOGOTÁ, SE PROPENDE POR EL FORTALECIMIENTO A LOS INSPECTORES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL,

En uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el numeral 1, del artículo 12 y del Decreto 1421 de 1993,

ACUERDA:

Artículo 1. Objeto. El presente acuerdo tiene como objeto establecer lineamientos para la descongestión de expedientes en las Inspecciones de Policía de Bogotá y su fortalecimiento, con el fin de agilizar los procesos jurídico-policivos, garantizando la pronta y efectiva resolución de los casos.

Artículo 2. Metodología de Clasificación de Expedientes. La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaria de Gobierno, propenderá por la construcción y elaboración de una metodología de clasificación de expedientes que permita identificar, clasificar y priorizar expedientes activos para fortalecer la resolución de procesos contravencionales.

Artículo 3. Inspecciones de Descongestión Transitorias. La Secretaría Distrital de Gobierno adelantará los estudios pertinentes para la creación de inspecciones de descongestión de carácter transitorio en el Distrito. Estas inspecciones operarán hasta que se logre una reducción significativa y sostenible del represamiento de procesos en las inspecciones de policía de competencia territorial, según criterios técnicos que serán definidos por la misma Secretaría.

Artículo 4. Tecnologías de Información. La Administración Distrital impulsará la implementación de tecnologías de información en las Inspecciones de Policía, con el fin de agilizar los procesos de documentación, seguimiento y control de expedientes.

Artículo 5. Priorización de trámites administrativos. La Administración Distrital dará prioridad a los trámites administrativos relacionados con las actuaciones jurídicas propias del proceso único de Policía.

Artículo 6. Capacitaciones. La Administración Distrital, a través de la Secretaría de Gobierno Distrital, deberá llevar a cabo un proceso de fortalecimiento del personal de las Inspecciones de Policía, proporcionando capacitación continua, actualización en normativa vigente y garantizando condiciones laborales adecuadas para su desempeño eficiente.

Artículo 7. Estudio, ampliación y reubicación de las Inspecciones de Policía. Con el fin de mejorar la eficiencia y capacidad de respuesta de las Inspecciones de Policía en el Distrito Capital, la Administración distrital en cabeza de la Secretaría Distrital de Gobierno realizará un estudio para evaluar la distribución actual de inspecciones y la carga de expedientes acumulados. Basado en los resultados, se propenderá por aumentar el número de inspecciones en las localidades con alta acumulación de expedientes o su reubicación.

Artículo 8. Fomento a Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos. La Administración Distrital deberá fomentar la implementación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos tales como la conciliación y la mediación, con el propósito de propender a la solución expedita de controversias y reducir la carga de expedientes.

Artículo 9. Gestión de expedientes previos. Con el fin de descongestionar los procesos policivos y administrativos, la administración distrital propenderá por fallar los expedientes previos a la entrada en vigencia de la Ley 1801 de 2016 en un plazo no mayor a los 2 años contados a partir de la expedición del presente acuerdo.

Artículo 10. Reglamentación e implementación. La Administración reglamentará e iniciará la implementación de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de su entrada en vigencia.

Artículo 11. Vigencia: El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su promulgación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

H.C JULIÁN USCÁTEGUI PASTRANA
Partido Centro Democrático

PROYECTO DE ACUERDO NO 236 DE 2025**PRIMER DEBATE****" POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTAN LAS CASAS DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL – PYBA – Y CENTROS DE ATENCIÓN PRIORIZADA EN CADA LOCALIDAD DE BOGOTÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"****1. OBJETIVO**

El presente proyecto de acuerdo tiene como objeto establecer Casas de Protección Y Bienestar Animal -PYBA- y centros de Atención Priorizada gratuita en cada localidad de Bogotá, para los animales pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3. Así como también para los animales de calle o sin tenedor aparente.

Lo anterior con la finalidad de fomentar la tenencia responsable de animales de compañía, mejorar la salud pública, controlar la población de animales y ofrecer una atención médica veterinaria que contribuya al bienestar animal en la ciudad.

2. ANTECEDENTES

El presente proyecto se presentó en la vigencia del 2024 con el No. 779 de 2024.

3. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La problemática de la sobrepoblación de animales de compañía, especialmente perros y gatos, es una realidad que afecta a muchas ciudades del mundo, incluyendo Bogotá. La falta de control en la reproducción de estos animales conlleva a situaciones de abandono, sufrimiento animal y problemas de salud pública. Por otra parte, en Bogotá, se estima que hay una alta cantidad de animales en situación de calle, lo que incrementa los riesgos de enfermedades zoonóticas y genera conflictos en la convivencia ciudadana.

Según la OMS, la sobrepoblación de animales de calle representa un desafío significativo para la salud pública y el bienestar animal. La esterilización ayuda a prevenir el nacimiento de animales no deseados, lo que a su vez reduce la cantidad de animales abandonados y la presión sobre los refugios. En sus directrices, la OMS recomienda programas de control de la

natalidad animal, conocidos como programas ABC (Animal Birth Control), que incluyen la captura, esterilización, vacunación y liberación de animales de calle.⁹⁰

La esterilización también tiene beneficios significativos para la salud de los animales. Estudios han demostrado que la esterilización reduce el riesgo de varias enfermedades graves. Por ejemplo:

- **Cáncer de mama:** Las hembras esterilizadas tienen un riesgo significativamente menor de desarrollar cáncer de mama, especialmente si la esterilización se realiza antes del primer celo.
- **Cáncer de próstata:** Los machos esterilizados tienen un menor riesgo de desarrollar problemas prostáticos y cáncer testicular.
- **Piómetra:** La esterilización elimina el riesgo de piómetra, una infección uterina potencialmente mortal en hembras.

Además de los beneficios médicos, la esterilización también puede mejorar el comportamiento de los animales. Los animales esterilizados tienden a ser menos agresivos y menos propensos a comportamientos territoriales, como el marcaje con orina y las peleas. Esto no solo mejora su bienestar, sino que también facilita la convivencia con otros animales y con los humanos⁹¹.

Impacto en la Salud Pública

Reducir la cantidad de animales de calle mediante la esterilización también tiene un impacto positivo en la salud pública. Los animales de calle pueden ser portadores de enfermedades zoonóticas, como la rabia, que pueden transmitirse a los humanos. La reducción de la población de animales de calle disminuye el riesgo de brotes de estas enfermedades. La OMS subraya que la vacunación y esterilización de perros de calle son componentes esenciales de los programas de control de la rabia.

Por otro lado, la literatura académica calcula que, para tener un control poblacional efectivo, se debe esterilizar anualmente un número de animales correspondiente al 10 % del estimativo poblacional de la vigencia, con el fin de evitar el crecimiento exponencial de la población animal. Dado lo anterior, si no se logra una cobertura aproximada del 10 % anual del programa de esterilizaciones de perros y gatos en el Distrito, existe el riesgo de mantener altos niveles de población de animales en situación de calle.

⁹⁰ La Coalición Internacional para el Manejo de Animales de Compañía (ICAM). (2019). Guía para monitorear y evaluar las intervenciones de manejo de poblaciones caninas. <https://www.icam-coalition.org/wp-content/uploads/2019/09/ICAM-ManejoHumanitario-2020.06.21.pdf>

⁹¹ Cáceres, Cintia R. (2019). Técnicas quirúrgicas de esterilización en pequeños animales, los beneficios en la salud de las mascotas y el control poblacional de animales callejeros. Trabajo final de grado. Universidad Nacional de Río Negro. <http://rid.unrn.edu.ar:8080/bitstream/20.500.12049/2477/1/C%20a1ceres%20Romina%20-%202019%20.pdf>

En este mismo sentido, con la creación del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), se implementó el programa de esterilizaciones, cuyo único objetivo ha sido esterilizar a los animales de estratos 1, 2 y 3 y sin tenedor responsable, lo que ha evitado el crecimiento exponencial de esta población. Las cifras desde su creación han evidenciado la efectividad y el impacto positivo de este programa en Bogotá. El programa no solo ha tenido un impacto positivo en la salud y el bienestar animal, sino también en términos económicos y sociales. La disminución de la población de animales de calle ha reducido los costos asociados con el manejo de estos animales, incluyendo los gastos en salud pública y el control de zoonosis. Además, ha promovido una mayor conciencia sobre la tenencia responsable de animales de compañía y el bienestar animal en la comunidad.

Así mismo, el programa de esterilizaciones del IDPYBA ha demostrado ser una medida efectiva y ética para controlar la población animal en Bogotá, evidenciando su impacto positivo a través de cifras concretas y beneficios observados. La continuación y fortalecimiento de este programa son esenciales para mantener y mejorar los logros alcanzados en términos de salud pública, bienestar animal y calidad de vida para todos los habitantes de la ciudad.

Tabla 1. Número de animales esterilizados por el programa de esterilizaciones del Distrito

2020	2021	2022	2023
15.679	62.963	88.763	27.470

Beneficios de la Esterilización de Animales

1. Control de la Población Animal:

La esterilización es una medida efectiva para controlar la sobrepoblación de animales compañía. Según la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA), la esterilización ayuda a prevenir el nacimiento de animales no deseados, lo que reduce significativamente la cantidad de animales que terminan en refugios o en situación de calle.

Un estudio publicado en el *Journal of the American Veterinary Medical Association* demostró que las campañas de esterilización masiva pueden reducir la población de animales de calle en más del 80% en un período de diez años.

2. Mejora de la Salud Animal:

La esterilización reduce el riesgo de ciertos tipos de cáncer y enfermedades reproductivas en los animales. Por ejemplo, las hembras esterilizadas tienen menos probabilidades de

desarrollar cáncer de mama y piómetra (infección uterina), mientras que los machos esterilizados tienen menos riesgo de cáncer testicular y problemas prostáticos.

Un artículo en *The Veterinary Journal* destaca que la esterilización también puede reducir comportamientos agresivos y territoriales en los animales, mejorando así su bienestar y la convivencia con humanos y otros animales.

3. Impacto en la Salud Pública:

La reducción de la población de animales de calle disminuye el riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas, como la rabia y la leptospirosis, que pueden ser transmitidas de animales a humanos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las campañas de esterilización son una parte integral de los programas de control de rabia en áreas endémicas.

Además, la disminución de animales de calle reduce la incidencia de mordeduras y accidentes de tráfico relacionados con animales, lo que a su vez reduce los costos de atención médica y otros gastos relacionados para la comunidad.

4. Beneficios Económicos:

Aunque la implementación de programas de esterilización requiere una inversión inicial, a largo plazo se traduce en ahorros significativos para los municipios. Un estudio realizado por el *International Society for Infectious Diseases* señala que los programas de esterilización pueden reducir los costos de gestión de animales de calle y refugios en más del 50% en comparación con la captura y eutanasia de animales.

Un análisis del *Journal of Applied Animal Welfare Science* también indica que las campañas de esterilización pueden ser más costo-efectivas que las medidas de control tradicionales, al reducir la necesidad de captura, transporte, y manejo de animales de calle.

Experiencias exitosas de estaciones permanentes de esterilizaciones de animales en otros Países.

Varios países han adoptado la estrategia de establecer estaciones permanentes de esterilización para animales. Estas estaciones permanentes son instalaciones permanentes donde se realizan procedimientos de esterilización de manera continua, facilitando el acceso a estos servicios tanto para tenedores de animales de compañía como para animales de calle.

o sin tenedor aparente. A continuación se presentan algunos ejemplos de países que han implementado esta estrategia:

a. España

En España, ciudades como Madrid y Barcelona han establecido estaciones permanentes de esterilización para controlar la población de animales de calle. Estos centros permanentes ofrecen servicios de esterilización gratuitos o a bajo costo, y están dirigidos por el ayuntamiento en colaboración con organizaciones de bienestar animal. Estas iniciativas han ayudado a reducir la sobrepoblación de animales y a promover la tenencia responsable de animales de compañía.

b. Estados Unidos

En los Estados Unidos, muchas ciudades y condados han implementado clínicas de esterilización fijas como parte de sus programas de control de población animal. Un ejemplo destacado es el programa de la Sociedad Protectora de Animales de San Francisco, que opera una clínica de esterilización fija y realiza miles de esterilizaciones cada año. Estas clínicas están diseñadas para ser accesibles y asequibles, especialmente para comunidades de bajos ingresos.

c. México

En México, la Ciudad de México ha establecido estaciones permanentes de esterilización en varias delegaciones. Estas clínicas permanentes realizan esterilizaciones gratuitas para perros y gatos de la comunidad. El programa ha sido muy exitoso en reducir la población de animales de calle y en promover la salud y el bienestar animal en la ciudad.

d. Argentina

En Argentina, la ciudad de Buenos Aires cuenta con un programa de esterilización masiva que incluye estaciones permanentes de esterilización. Estos centros están distribuidos en diferentes barrios y ofrecen servicios gratuitos de esterilización para animales de compañía y calle. La iniciativa ha sido clave para controlar la población animal y mejorar la convivencia entre animales y humanos en la ciudad.

e. India

En India, varias ciudades han adoptado el modelo de estaciones permanentes de esterilización como parte de sus programas de control de población de perros de calle. En ciudades como Jaipur y Chennai, los centros de esterilización permanentes juegan un papel crucial en la implementación de programas de control de natalidad animal (ABC - Animal Birth Control).

Ventajas de las estaciones permanentes de esterilización

1. **Accesibilidad Continua:** Al ser instalaciones permanentes, las estaciones permanentes de esterilización ofrecen servicios continuos, facilitando el acceso de la comunidad en cualquier momento del año.
2. **Reducción de la Sobrecarga en Refugios:** Al controlar la población animal, se reduce la cantidad de animales que terminan en refugios, aliviando la presión sobre estos servicios.
3. **Mejora de la Salud Pública:** La combinación de esterilización y vacunación en estos centros ayuda a prevenir la propagación de enfermedades zoonóticas.
4. **Conciencia y Educación:** Las estaciones permanentes de esterilización sirven como centros de educación para la comunidad, promoviendo la tenencia responsable de animales y el bienestar.

Una meta ambiciosa “Bogotá Camina Segura”

Por último, es importante mencionar que el Acuerdo 927 de 2024 – ***“Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del distrito capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”***, establece como meta esterilizar 320.000 perros y gatos durante el cuatrienio. Para alcanzar este objetivo, es esencial ampliar la capacidad de atención mediante la implementación de Casas de Protección Y Bienestar Animal -PYBA- y centros de Atención Priorizada gratuita en cada localidad de Bogotá.

Estos centros facilitarán el acceso a los servicios para comunidades de estratos 1, 2 y 3, además de atender animales de calle o sin tenedor aparente. Al crear estos espacios, se responderá de manera efectiva a la problemática de la sobrepoblación de animales, que afecta tanto la salud pública como la convivencia en la ciudad.

La implementación de estos centros permanentes de esterilización representa una gran apuesta no solo para contribuir a la meta del gobierno de esterilizar 320.000 animales, sino

también para superarla. Al establecer dichos puntos accesibles en cada localidad, se espera facilitar un aumento significativo en el número de esterilizaciones realizadas, lo que redundará en un control más efectivo de la población animal. Esta estrategia no solo aborda una necesidad urgente en la ciudad, sino que también promoverá un cambio cultural hacia la tenencia responsable y el bienestar animal, posicionando a Bogotá como un referente en la protección y el bienestar de los animales.

Otras medidas de Protección y Bienestar Animal

Teniendo en cuenta que el presente proyecto tuvo ponencia positiva con modificaciones en la vigencia de 2024, se tomaron algunos aportes pertinentes de los ponentes para incorporar en el presente proyecto de acuerdo, como los siguientes:

En América Latina, Chile ha desarrollado el Programa Nacional de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC), el cual incluye la esterilización gratuita de mascotas, la instalación de microchips para identificación y programas de educación para la ciudadanía. Este programa ha sido clave en la reducción de animales abandonados y en el control de la población de animales domésticos⁹².

Estos ejemplos internacionales subrayan la importancia de una coordinación efectiva entre diferentes instituciones y la participación activa de la comunidad en los programas de bienestar animal. El éxito de estas iniciativas depende en gran medida de la colaboración entre el gobierno local, organizaciones no gubernamentales, y la sociedad civil, así como del monitoreo y la evaluación constante del programa para asegurar su efectividad y sostenibilidad a largo plazo.

En el caso de Colombia, se han venido implementando políticas como:

1. La promoción e implementación de jornadas de vacunación y desparasitación internas y externas tanto para los animales de compañía como para los animales silvestres y de producción.

⁹² Kathimerini Cyprus English, 2024. "Netherlands makes history as the first country to wipe out stray dogs". Tomado de: <https://knews.kathimerini.com.cy/en/news/netherlands-makes-history-as-the-first-country-to-wipe-out-stray-dogs#:~:text=In%20a%20landmark%20achievement%2C%20the,benchmark%20in%20animal%20welfare%20practices>.

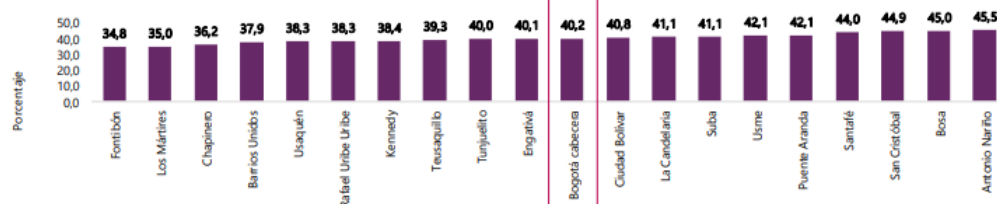
2. La educación y concientización a los tenedores pues es vital que los mismos se informen de los riesgos asociados con ciertos entornos y las medidas preventivas que se pueden adoptar para la protección tanto de la salud animal como la salud humana.

La importancia de microchip en los animales de compañía

En las últimas décadas la población colombiana ha mantenido una tendencia al alza respecto del número de familias que han optado por adoptar una mascota en su hogar, los cuales terminan ocupando un lugar importante en los mismo, tanto que se terminan considerando como un miembro más de las familias.

Ejemplo de ello se encuentra en la encuesta multipropósitos realizada por DANE, en donde se indaga por la tenencia de mascotas. Indicando que el 40,2% de los hogares de Bogotá dijeron tener mascota, el 65,8% de ellos tienen perro y el 43,7%, gato. En la cabecera de los municipios la tenencia llegó a 59,7% en Cota, donde el 75,5% tienen perro y el 45,1%, gatos⁹³.

Hogares con por lo menos una mascota (perro, gato u otro) (%)
Bogotá localidad urbana
2021



Fuente: DANE, EM 2021.

Bajo ese contexto y con la relevancia que tienen actualmente, se ha venido originando un importante desafío que consiste en poder implementar la tenencia responsable de estos animales de compañía y evitar situaciones potencialmente riesgosas como el abandono o la pérdida, secuestro y/o robo de estos animales. Este que resulta pertinente la presente iniciativa que busca entre otras cosas fortalecer e implementar la cultura de implantación del microchip de identificación de animales, que permita tener entre otras cosas la plena identificación a todos los animales de compañía del distrito que cuenten con este dispositivo, de modo que se puedan robustecer las redes de Identificación Animal que existan en el distrito capital y nivel nacional, así, como lo han hecho países de Europa obteniendo los mejores resultados en la protección de los animales.

⁹³ Dane, Encuesta Multipropósitos, Bogotá D.C., 1 julio de 2022 véase en:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/multi/Comunicado_EM_2021.pdf

Al respecto vale la pena señalar que el Instituto Distrital de protección y bienestar animal ha indicado que *“Es un dispositivo imperceptible para el animal, no le causa ningún dolor ni tampoco puede desarrollar posibles alergias ni otros efectos secundarios”*. Motivo por el cual, se ha venido implementando el Programa de la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal – PPDYBA denominado “ciudadano de 4 patas”, el cual permite identificar, registrar y realizar seguimiento a los animales de compañía que habitan la ciudad.

Algunos de los beneficios de este programa son:

- a. Aumentar la posibilidad de encontrar animales en casos de pérdida.
- b. Llevar un registro de los animales que sean encontrados sin cuidador/tenedor en espacio público.
- c. Desestimular el hurto y posterior venta de caninos y felinos.
- d. Mantener actualizada la información de valoración base de cada animal activo dentro del sistema.
- e. colaborar con las autoridades respectivas para penalizar el abandono y/o posible maltrato de animales de compañía.

En virtud de lo anterior consideramos que las casas de protección animal será una herramienta que ayuda tanto a la prevención como al tratamiento de enfermedades zoonóticas en el distrito así como también prestará una atención primaria a los animales de compañía y fomenta la tenencia responsable por parte de los tenedores o cuidadores. Finalmente, estas casas podrán servir de puente articulador con otros programas que contribuyan a mejorar la salud animal tales como las jornadas de esterilización en las localidades y el programa que busca fomentar el uso de microchips en los animales de compañía, con el fin de evitar el abandono de los mismos.

4. MARCO JURÍDICO

Esta iniciativa se encuentra respalda en la Constitución Política de Colombia de 1991:

Fundamento Constitucional

Artículo 79: *“Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.”*⁹⁴

⁹⁴ Artículo 79, Constitución Política Colombiana

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125>

Artículo 95, numeral 8: "La protección de los recursos naturales y del ambiente es una obligación de las personas y del Estado."⁹⁵

Fundamento Legal

Ley 84 de 1989 *"Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia"*⁹⁶.

Ley 1774 de 2016 - *"por medio de la cual se modifican el código civil, la ley 84 de 1989, el código penal, el código de procedimiento penal y se dictan otras disposiciones"* cuyo señala que *"Los animales son seres sintientes no son cosas"*⁹⁷

Ley 746 de 2002 *"Por la cual se regula la tenencia y registro de perros potencialmente peligrosos", la cual tiene como objeto regular la tenencia de ejemplares caninos en las zonas urbanas y rurales del territorio nacional, con el fin de proteger la integridad de las personas, la salubridad pública y el bienestar del propio ejemplar canino*⁹⁸.

Normas distritales

Decreto 242 De 2015 *"Por el cual se adopta la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal 2014-2038 y se dictan otras disposiciones"* en el artículo 9 plantea:

(...) Eje 2. Respuesta institucional para la protección y el bienestar animal

Línea de acción 2.1. Fortalecimiento de la Gestión. Propender por que las instituciones tengan el talento humano idóneo mediante la capacitación adecuada y cuenten con los recursos: económicos, físicos y tecnológicos suficientes para el desarrollo de sus competencias; garantizando la coordinación entre las instituciones involucradas en la atención y manejo de los animales en el Distrito Capital.

**Construcción, mejoramiento y dotación de la infraestructura apropiada para la atención, protección y bienestar de la fauna en el Distrito Capital.*

**Planeación, fortalecimiento y consolidación de estrategias de control, seguimiento e inspección interinstitucionales, en favor de la protección y bienestar de los animales silvestres y de compañía.*

**Fortalecimiento de las estrategias preventivas ante situaciones que amenacen la salud pública o el bienestar de los animales*⁹⁹. (...)

⁹⁵ Artículo 95, Constitución Política Colombiana

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125>

⁹⁶ Ley 84 de 1989, <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8242>

⁹⁷ Ley 1774 de 2016, <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=68135>

⁹⁸ Ley 746 de 2002, <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5515>

⁹⁹ Artículo 9, Decreto 242 De 2015, <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62072>

y cuyo artículo 11 señala:

(...) Artículo 11°. Responsables. Serán responsables de la implementación de la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal 2014-2038, las entidades del Sector Central, el Sector Descentralizado, funcionalmente o por servicios, y el Sector de las Localidades del Distrito Capital¹⁰⁰.(...)

Acuerdo 927 de 2024 – Plan de Desarrollo distrital - “Bogotá camina segura (2024-2027)” en el Artículo 59.

(...) Artículo 59. Fortalecimiento de las capacidades para el bienestar de los animales. Se fortalecerá el escuadrón anti-crueldad, las brigadas médicas, urgencias veterinarias y el centro de atención jurídica PYBA. Igualmente, en aras del entendimiento del impacto en pro del bienestar animal, del control de natalidad de perros y gatos, la Administración Distrital buscará alianzas estratégicas y convenios con actores claves para la atención de animales. Igualmente, teniendo en cuenta la necesidad de robustecer la toma de decisiones para la protección y el bienestar animal, se buscará la integración de sistemas de información para la gestión y análisis de la información y la realización de investigaciones estratégicas¹⁰¹.(...)

y cuyo artículo 61 señala:

(...) Artículo 61. Protección animal en los fondos de desarrollo local. Los Fondos de Desarrollo Local realizarán inversiones complementarias para la protección animal. La inversión estará dirigida a los animales vulnerables y se materializa en los servicios de brigadas médicas, urgencias veterinarias, esterilización canina y felina y apoyo a las autoridades de policía en casos de maltrato animal. El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal trabajará articuladamente con las localidades para coordinar la intervención territorial, identificar puntos críticos y brindar lineamientos técnicos que propendan por la calidad de los servicios ofrecidos¹⁰². (...)

5. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

¹⁰⁰ Artículo 11, Decreto 242 De 2015, <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62072>

¹⁰¹ Artículo 59, Acuerdo 927 de 2024 https://www.movilidadbogota.gov.co/web/sites/default/files/Paginas/16-07-2024/acuerdo_no._927_de_2024.pdf

¹⁰² Artículo 61, Acuerdo 927 de 2024 https://www.movilidadbogota.gov.co/web/sites/default/files/Paginas/16-07-2024/acuerdo_no._927_de_2024.pdf

El Concejo de Bogotá es competente para expedir el presente Proyecto de Acuerdo en atención a lo dispuesto en los numerales 1 y 9 del artículo 313 de la Constitución Política.

Decreto-Ley 1421 de 1993; “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá”.

ARTÍCULO 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

(...).

7. Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente.

6. IMPACTO FISCAL

Teniendo en cuenta el Artículo 7 de la Ley 819 de 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”.

Artículo 7. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. (...) En las entidades territoriales, el trámite previsto en el inciso anterior será surtido ante la respectiva Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces.”

De conformidad con la anterior norma el presente Proyecto de Acuerdo no genera un impacto fiscal adicional, debido a que sus acciones para implementar estas actividades se encuentran contempladas en los programas y metas del Acuerdo 927 de 2024 – “*Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del distrito capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”*”.

Con base en los anteriores argumentos, presento a consideración del Concejo de la ciudad el proyecto de Acuerdo “*POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTAN LAS CASAS DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL – PYBA – Y CENTROS DE ATENCIÓN PRIORIZADA EN CADA LOCALIDAD DE BOGOTÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES*”

Cordialmente,

Clara Lucia Sandoval Moreno

Concejal de Bogotá

PROYECTO DE ACUERDO NO 236 DE 2025

PRIMER DEBATE

" POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTAN LAS CASAS DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL – PYBA – Y CENTROS DE ATENCIÓN PRIORIZADA EN CADA LOCALIDAD DE BOGOTÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confieren los numerales 1 y 9 del Artículo 313 de la Constitución y los numerales 1 y 7 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993.

ACUERDA

Artículo 1. Objeto.

Establecer Casas de Protección Y Bienestar Animal -PYBA- y Centros de Atención Priorizada gratuita en cada localidad de Bogotá, para los animales pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3. Así como también para los animales de calle o sin tenedor aparente.

Lo anterior con la finalidad de fomentar la tenencia responsable de animales de compañía, mejorar la salud pública, controlar la población de animales y ofrecer una atención médica veterinaria que contribuya al bienestar animal en la ciudad.

Artículo 2. Implementación de Casas de Protección Y Bienestar Animal -PYBA- y Centros de Atención Priorizada. Los Fondos de Desarrollo Local adecuarán e implementarán un punto fijo en la localidad, para ubicar Casas de Protección Y Bienestar Animal -PYBA- y Centros de Atención Priorizada donde se brindará atención prioritaria médico veterinaria de primer nivel gratuita y se promoverán campañas de educación y sensibilización sobre protección y bienestar animal abordando temas como la tenencia responsable de animales de compañía, la prevención del maltrato animal, entre otros.

Parágrafo: los sujetos de atención gratuita serán los animales de compañía pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, así como también los animales de calle o sin tenedor aparente. Para los estratos 4, 5 y 6 se brindarán los servicios con una tarifa diferencial.

Artículo 3. Esterilizaciones. Las Casas de Protección Y Bienestar Animal -PYBA- y Centros de Atención Priorizada realizarán procedimientos de esterilización quirúrgica. Para tal fin, los Fondos de desarrollo Local podrán adecuar las instalaciones de las casas PYBA, conforme a

los requerimientos sanitarios dispuestos en la ley para realizar intervenciones quirúrgicas o en su defecto podrá contar con el apoyo de una estación móvil de esterilización donde se realizarán las intervenciones.

Parágrafo: Las esterilizaciones realizadas en las estaciones móviles se realizarán como mínimo una vez al mes y podrán ser beneficiarios de éstas los animales de compañía de estratos 1, 2 y 3, así como también, los animales sin tenedor de manera gratuita. Para los estratos 4, 5 y 6 se brindarán los servicios con una tarifa diferencial.

Artículo 4. Servicios Veterinarios: Las Casas de Protección y Bienestar Animal - PYBA- y Centros de Atención Priorizada prestarán servicios de atención médica veterinaria de primer nivel que incluya brigadas médicas, vacunación, desparasitación y la aplicación de tratamientos contra pulgas y garrapatas, contribuyendo al bienestar animal.

Parágrafo: En las Casas de Protección y Bienestar Animal -PYBA- y Centros de Atención Priorizada se implementará el servicio de implantación de Microchip y el respectivo diligenciamiento de datos en la plataforma, dando cumplimiento al programa Ciudadanos de 4 Patas, coordinado por el Instituto Distrital de Bienestar y Protección Animal (IDPYBA).

Artículo 5. Funciones de las Casas de Protección y Bienestar Animal - PYBA - y los Centros de Atención Priorizada: las Casas de Protección y Bienestar Animal - PYBA - y los Centros de Atención Priorizada tendrán las siguientes funciones:

1. Realización de esterilizaciones: Realizar procedimientos de esterilización quirúrgica en animales de calle o sin tenedor aparente. Así como también, de aquellos pertenecientes a estratos 1, 2 y 3. Estas se podrán realizar en las casas PYBA cuando las instalaciones cumplan con requisitos sanitarios o en su defecto se realizarán con apoyo de puntos móviles quirúrgicos.
2. Atención Médica Veterinaria: Proporcionar servicios veterinarios básicos, incluyendo vacunación, desparasitación y tratamientos contra pulgas y garrapatas, además de atención prioritaria médica veterinaria de primer nivel.
3. Educación y Sensibilización: Promover campañas de educación y sensibilización sobre protección y bienestar animal abordando temas como la tenencia responsable de animales de compañía, la prevención del maltrato animal entre otros.

4. La promoción e implantación del Microchip de identificación para animales de compañía y el respectivo diligenciamiento de datos en la plataforma.
5. Recopilación de Datos: Llevar un registro de las atenciones primarias realizadas y de la población animal atendida en las Casas de Protección y Bienestar Animal - PYBA - y los Centros de Atención Priorizada, para informar sobre el impacto del programa.
6. Colaboración con Refugios: Establecer alianzas con refugios y organizaciones de bienestar animal para facilitar la adopción de animales sin tenedor.
7. Promoción de la Salud Pública: Implementar protocolos de vacunación y prevención de enfermedades zoonóticas en la población animal atendida.
8. Salubridad: mantener las instalaciones bajo los estándares de sanidad y bienestar necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades.

Artículo 6. Coordinación Interinstitucional: Se establecerán mecanismos de coordinación entre el IDPYBA, Los Fondos de Desarrollo Local, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno y otras entidades involucradas para garantizar la correcta implementación del presente Acuerdo.

Artículo 7. Monitoreo y Evaluación: El IDPYBA llevará a cabo un seguimiento y evaluación anual del programa, presentando informes sobre la cantidad de atenciones primarias realizadas, la población animal atendida y el impacto en la población animal.

Artículo 8. Vigencia: El presente acuerdo rige a partir de su publicación.

Publíquese y Cúmplase

PROYECTO DE ACUERDO NO 237 DE 2025

PRIMER DEBATE

"POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN MEDIDAS PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL TEJO COMO DISCIPLINA DEPORTIVA, MOTOR ECONÓMICO Y EXPRESIÓN CULTURAL EN EL DISTRITO CAPITAL"

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO

El presente proyecto de acuerdo tiene por objeto establecer medidas para la promoción y fomento del tejo, tanto en su dimensión deportiva como en su valor patrimonial en el Distrito Capital.

II. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA

El presente Proyecto de Acuerdo se encuentra fundamentado en las siguientes disposiciones legales:

Del orden Constitucional:

Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.

Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Artículo 52. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano.

El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social.

Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre.

Artículo 67. *La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.*

Artículo 70. *El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.*

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.

Artículo 71. *La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.*

Artículo 72. *El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles.*

Bloque de Constitucionalidad.

Declaración Universal de Derechos Humanos:

Artículo 22. *Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a (...) la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.*

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Artículo 3: *Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto.*

Artículo 15: 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:

a) Participar en la vida cultural

(...)

2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.

(...)

De orden legal:

Ley 613 de 2000 “ Por la cual se declara a la disciplina del tejo como deporte nacional y se dictan otras disposiciones”

Artículo 1º. Declárese la disciplina deportiva del tejo como deporte nacional en todo el territorio. Su divulgación y fomento estará a cargo del Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte.

[...]

Artículo 3º. El Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte como máximo organismo planificador y rector, fijará los propósitos, estrategias y orientaciones para el desarrollo del tejo; promoverá y regulará la participación del sector privado, asociado o no, en esta disciplina deportiva; dará asistencia técnica a los entes departamentales, distritales y municipales para la formulación de planes deportivos y la ejecución de proyectos relacionados con este deporte.

Ley 1947 de 2019, “Por medio del cual se declara el juego al turmequé (tejo) como patrimonio cultural inmaterial de la nación y se dictan otras disposiciones.”

Artículo 1. OBJETO. Declarar las manifestaciones y expresiones culturales y deportivas del juego al turmequé (tejo) como patrimonio cultural inmaterial de la nación.

ARTÍCULO 4. AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL. Autorícese al Gobierno nacional, departamental y municipal la destinación de las apropiaciones presupuestales necesarias para la ejecución de las siguientes acciones, obras e intervenciones de interés social y de utilidad pública:

1. Garantizar la protección, rescate, promoción y difusión de la manifestación cultural y deportiva del juego al turmequé (tejo).

2. *Promocionar el juego al turmequé (tejo), para fortalecer el sentido de pertenencia, arraigo e identidad nacional en sus manifestaciones culturales y deportivas.*

3. *Promover la investigación, historia, y el rescate y difusión de las tradiciones del juego al turmequé (tejo), para que perduren en el tiempo y se transmitan de generación en generación.*

4. *Construir y dotar escenarios con infraestructura y espacios adecuados en cada uno de los departamentos que cuenten con liga registrada y vigente ante la Federación Colombiana de Tejo (Fedetejo) para realizar eventos y olimpiadas nacionales e internacionales del juego al turmequé (tejo)*

De orden Distrital:

Acuerdo Distrital 257 de 2006. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

Artículo 90. Misión del Sector Cultura, Recreación y Deporte. El Sector Cultura, Recreación y Deporte tiene como misión garantizar las condiciones para el ejercicio efectivo, progresivo y sostenible de los derechos a la cultura, a la recreación y al deporte de los habitantes del Distrito Capital, así como fortalecer los campos cultural, artístico, patrimonial y deportivo.

Para los correspondientes efectos se entenderá la cultura como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan el conglomerado humano que habita en el Distrito Capital y a sus distintos sectores y comunidades y que engloba además de las artes y las letras los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y bajo el reconocimiento de que la cultura es por su propia naturaleza, dinámica y cambiante.

III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

SINOPSIS HISTÓRICA DEL TEJO

El origen del tejo, o *turmequé*, como lo conocían nuestros antepasados, se remonta a hace más de 500 años en el altiplano cundiboyacense, territorio ancestral de los muisca, quienes fueron los pioneros de este deporte. Originalmente, la práctica del tejo no era accesible para todos; solo los caciques tenían acceso a él¹⁰³, y usualmente lo practicaban durante fiestas ceremoniales.¹⁰⁴

¹⁰³<https://bogotachirriada.com/historia-y-reglas-del-juego-de-tejo/?srsltid=AfmBOopO5-q72Y7SGESa2gtNC91IWRGab7YUbnVVjHnyJRfFz0jX4uWv>

¹⁰⁴ [Del oro al hierro explosivo, así es el tejo en Bogotá](#)

Según la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (s.f.),¹⁰⁵ El tejo se practicaba con mayor intensidad en Turmequé, municipio actual de Boyacá. Este municipio, durante la época de la Conquista, era un importante centro de desarrollo económico para los pueblos indígenas, un lugar de encuentro para la comercialización de productos, el intercambio de bienes y servicios, entre otras actividades económicas que incidían en el desarrollo del pueblo muisca. Además, Turmequé se caracterizaba por ser epicentro de actividades deportivas, entre ellas el tejo, razón por la cual este último también es conocido con ese nombre.

Este deporte se practica actualmente con un disco de acero; sin embargo, en aquel entonces se utilizaba un disco de oro llamado *zepguagoscua*, adquirido mediante trueque con otras comunidades, el cual *“simbolizaba el sol, representaba uno de sus dioses, (...) asimismo, hacen una veneración al sol ya que, al lanzar el tejo, este hace el mismo movimiento que el sol recorre, nace en el oriente y se oculta en el occidente, es el mismo movimiento parabólico”*¹⁰⁶.

Por otra parte, existen algunos mitos en torno al tejo, como la creencia de que inicialmente este deporte consistía en acertar el tejo en un hueco en la tierra, y que posteriormente, con la llegada de los españoles, se introdujo la pólvora o las mechas que explotan al ser alcanzadas por el tejo¹⁰⁷. Sin embargo, esto último no está comprobado. Lo que sí es cierto es que el tejo, o turmequé, no solo se constituye como una tradición cultural y deportiva de nuestro país, convirtiéndolo en el único deporte autóctono de Colombia,¹⁰⁸ sino también, en la actualidad, se puede abordar desde una dimensión que incide positivamente en la economía del país.

A continuación, se profundizará en estas tres dimensiones desde las cuales se puede abordar el tejo:

1. Dimensión Deportiva

Desde su declaración como deporte nacional, el tejo ha contado con la supervisión del Ministerio del Deporte, a través de Coldeportes, que actúa como la máxima autoridad en el seguimiento y regulación de esta disciplina. Este organismo ha establecido las reglas generales para su práctica, promoviendo un proceso de transformación que permitió al tejo evolucionar de un juego tradicional a una disciplina formal.

Esta evolución ha facilitado su integración en todos los sectores de la sociedad, abarcando desde las zonas rurales y las periferias urbanas hasta las élites de las grandes ciudades, consolidándose así como

¹⁰⁵ [Tejo | Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte](#)

¹⁰⁶ *ibidem*

¹⁰⁷ *ibidem*

¹⁰⁸ *ibidem*

un símbolo del deporte nacional. Tal como lo señala Rodríguez (2013)¹⁰⁹, este posicionamiento refleja el alcance y la trascendencia cultural del tejo en Colombia:

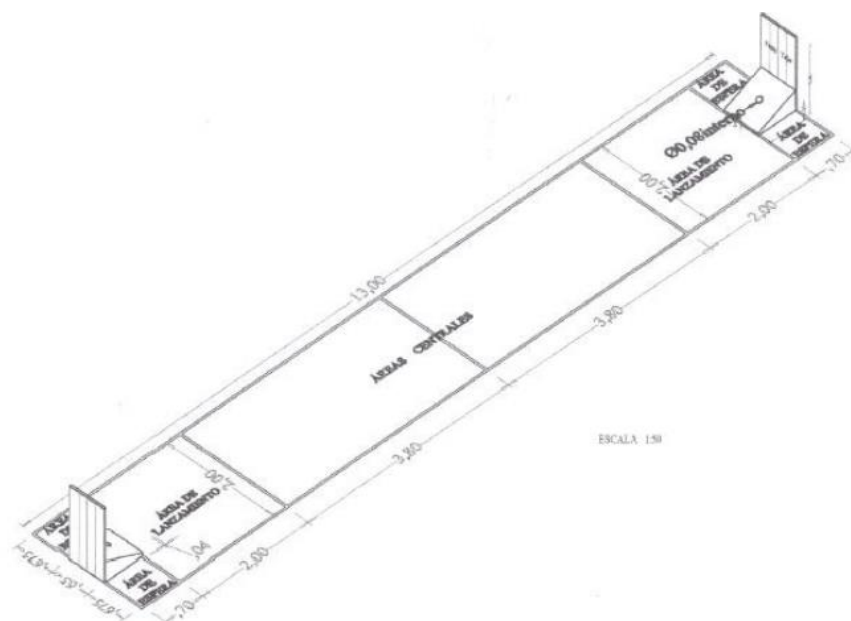
Las élites consideraron que las disciplinas deportivas poseían todos estos atributos que ayudarían a superar dichas dificultades, tal vez, por los manuales deportivos (reglas) que poseen, el manejo del cuerpo en público, la disciplina que exige, el juego de roles que se impone, las normas que se inculcan, el control de sus emociones y la creciente idea de civilidad que representaba. (p. 6)

En este contexto, se establecieron reglamentos deportivos que definen la práctica del tejo o turmequé. Este deporte consiste en lanzar un disco metálico, conocido como tejo, hacia un área denominada "bocin", ubicada en el extremo opuesto del campo de juego. El bocin está formada por una circunferencia metálica rodeada de pequeñas cargas de pólvora llamadas "mechas", que se colocan sobre una caja de greda. El tejo, como único elemento del juego, combina habilidad, precisión y la expectativa de conseguir la explosión generada por el impacto a las mechas, que simboliza el éxito de un buen lanzamiento.

En las competencias, los jugadores pueden participar en modalidades de equipos, duplas o individual. Cada partido se desarrolla en dos periodos de nueve entradas, con un descanso de cinco minutos entre ellos. El equipo que acumule la mayor cantidad de puntos al finalizar las 18 entradas es declarado ganador. Durante el juego, los equipos tienen derecho a solicitar un tiempo técnico de un minuto por periodo.

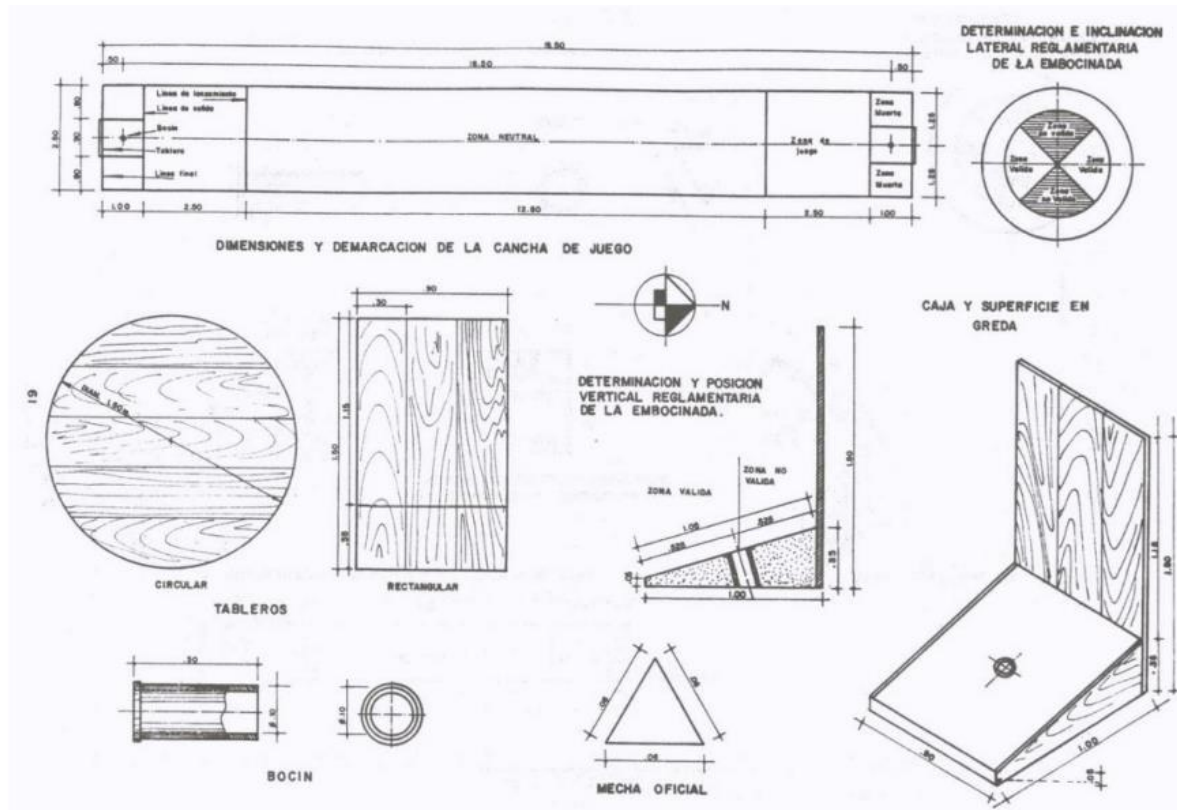
El sistema de puntuación está diseñado para reflejar la destreza de los jugadores. Las principales figuras son la "moñona", que otorga 9 puntos cuando el tejo golpea la bocin y hace explotar una mecha simultáneamente; la "embocinada", que vale 6 puntos cuando el tejo cae dentro de la bocin sin detonar una mecha; la "mecha", que otorga 3 puntos al explotar una de estas cargas de pólvora; y la "mano", que concede 1 punto al jugador cuyo tejo queda más cerca del bocin sin realizar ninguna figura.

¹⁰⁹ **G.A. Rodríguez (2013).** El juego de Tejo ¿Un símbolo nacional o un proyecto inconcluso? Revista Historia Y MEMORIA, núm. 7. pp. 169-198 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.



Fuente: reglamento de los intercolegiados nacionales de Min. Deporte

El campo de juego tiene dimensiones reglamentarias que varían según la categoría. Para los adultos, la longitud total es de 19.50 metros, con áreas de lanzamiento específicas: 3.50 metros para mujeres y 2.50 metros para hombres. En el caso del Ponytejo, el área de juego mide 13 metros de largo por 2 metros de ancho, lo que lo adapta a las necesidades de los jugadores más jóvenes. El peso de los tejos también está regulado, oscilando entre 1.125 y 1.625 gramos en la categoría regular y hasta 750 gramos en el Ponytejo.



Fuente: reglamento de los intercolegiados nacionales de Min. Deporte

Los deportistas deben cumplir con un código de presentación que incluye el uso de un uniforme oficial numerado, compuesto por una camiseta, pantalón deportivo y calzado adecuado. Además, antes de iniciar un partido, todos los jugadores están obligados a calibrar sus tejos para garantizar la equidad en el juego.

En caso de empate en el marcador final, se aplican criterios específicos para determinar al ganador. Primero, se considera la cantidad de figuras realizadas en orden descendente (moñonas, embocinadas y mechas). Si persiste el empate, se analizan los puntos a favor, los puntos en contra y la diferencia entre ambos. De continuar la igualdad, el desempate se define mediante sorteo.

Este reglamento es avalado por el ministerio del deporte y diseñado para competencias como los Juegos Intercolegiados Nacionales, refleja la importancia de estandarizar el deporte del tejo, promoviendo la práctica justa y organizada de esta disciplina que es parte integral de la cultura colombiana.

2. Dimensión Cultural

El tejo se puede analizar desde un punto de vista cultural, no solo por el origen histórico antes mencionado, sino también por la permanencia de esta actividad deportiva en el tiempo. A lo largo de los siglos, el tejo evolucionó y se adaptó, pero nunca desapareció. Pasó de ser una práctica indígena a un juego popular entre diferentes clases sociales, especialmente en las zonas rurales y los barrios populares de la ciudad. Esta continuidad a lo largo del tiempo ha fortalecido su presencia en la identidad cultural colombiana.

Adicionalmente, el tejo en nuestra cultura no sólo es concebido como un juego, sino también un espacio de encuentro social. Las canchas de tejo son lugares donde los ciudadanos se reúnen a compartir, socializar y pasar un buen rato. Se convierte en un punto de encuentro intergeneracional donde se transmiten historias, costumbres y tradiciones.

Por otra parte, desde el Congreso de la República se han hecho esfuerzos para visibilizar y proteger la práctica del tejo en nuestro país. Inicialmente con la Ley 613 de 2000¹¹⁰ se declaró la disciplina deportiva del tejo como deporte nacional en todo el territorio y encargó al Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte¹¹¹ su divulgación, fomento y asistencia técnica a los entes territoriales para la formulación de planes deportivos y la ejecución de proyectos relacionados con este deporte.¹¹²

Con posterioridad, el tejo fue declarado patrimonio cultural inmaterial de la nación con la expedición de la ley 1947 de 2019¹¹³. Con esta declaratoria no sólo se engrandeció una tradición cultural profundamente arraigada que ha evolucionado hacia una disciplina formal, sino que también fortaleció económicamente la creación de asociaciones, ligas y federaciones. Actualmente, La Federación Colombiana de Tejo cuenta con 34 equipos, 79 miembros activos y más de 20 actividades anuales y se ha consolidado como un organismo clave para la promoción de este deporte en el ámbito nacional. Esta organización reúne a deportistas de regiones como Tolima, Valle del Cauca, Boyacá, el Eje Cafetero, Cundinamarca y Meta. Además, Bogotá ha sido escenario de eventos de gran envergadura, como el "Encuentro Mundial de Tejo", donde participaron delegaciones de países como Japón, India, Perú, España, Reino Unido, Canadá y Venezuela, demostrando la creciente internacionalización de esta práctica.

Finalmente, el tejo ha trascendido su carácter deportivo para convertirse en un símbolo patrimonial del país. Un ejemplo destacado es el monumento al cacique Turmequé, ubicado en el parque principal del municipio de Turmequé, en Boyacá, reconocido como la cuna mundial de este deporte. Esta obra, creada por el maestro Omar Santamaría¹¹⁴, tiene cuatro metros de ancho y quince de alto, y rinde homenaje tanto a la historia indígena como a la relevancia del tejo en la identidad nacional. Estas iniciativas no solo refuerzan la importancia del deporte, sino que también lo posicionan como un centro turístico cultural.

¹¹⁰ [Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad \[LEY 0613 2000\]](#)

¹¹¹ El Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte fue creado a través del Decreto 2743 de 1968. Hoy se conoce como el Ministerio del Deporte.

¹¹² Art 2 y Art 4, Ley 613 de 2000.

¹¹³ [Ley 1947 de 2019 - Gestor Normativo - Función Pública](#)

¹¹⁴ Monumento al Cacique Turmequé. <https://situr.boyaca.gov.co/cacique-turmeque/>



Archivos multimedia Wikipedia: Homenaje al cacique Turmequé

3. Dimensión Económica

En primer lugar, como deporte competitivo, el tejo dinamiza la economía a través de la organización de torneos locales y nacionales, que generan ingresos por inscripciones, boletos y patrocinadores. Además, fomenta el desarrollo de infraestructura deportiva, como clubes y escenarios especializados, que son esenciales para su práctica y promoción. Asimismo, el tejo atrae a turistas interesados en conocer y vivir esta tradición, lo que incrementa el flujo de visitantes y su gasto en la ciudad, impulsando tanto el turismo como los sectores asociados.

En segundo lugar, los establecimientos comerciales asociados al tejo, como canchas y chicherías, constituyen un motor importante para la economía local. Estos negocios no solo generan ingresos por la oferta del juego, sino también por el consumo de alimentos y bebidas que suelen complementar la experiencia. La modernización de algunos de estos espacios, que incorporan tecnología y conceptos gastronómicos innovadores, ha permitido atraer a nuevos públicos y diversificar su base de clientes. Además, estos establecimientos impulsan microempresas proveedoras de insumos como arcilla, mechas explosivas y equipos deportivos, fortaleciendo cadenas de valor locales.

En este contexto, el primer Mundial de Tejo realizado en Colombia en 2023 marcó un hito histórico. Este evento contó con la participación de más de siete establecimientos de comercio dedicados a la promoción del deporte, como las canchas “Tejo la Embajada,” “Tejo Turmequé,” y “Tejo Ancestral,” entre otros. A través de la ampliación de la red de establecimientos y la inclusión de clubes como “Club Tejo la 76” y “Club Social y Deportivo el Porvenir Norte,” se busca fortalecer la economía popular que gira en torno al tejo, atrayendo a un número creciente de turistas interesados en experiencias deportivas tradicionales.

El Mundial de Tejo evidencia un creciente interés extranjero en este deporte autóctono colombiano, destacándose como un potencial atractivo turístico. Según cifras del Observatorio de Turismo de Bogotá, en diciembre de 2024, la capital recibió alrededor de 1.163.823 turistas, de los cuales el 12,4% eran internacionales, reflejando un incremento de flujos internacionales del 21,9% respecto a 2023.¹¹⁵ Este aumento de visitantes no solo reafirma el interés cultural por Colombia, sino que también impulsa la economía local al incentivar experiencias turísticas únicas, como la práctica del tejo¹¹⁶. Promover este deporte autóctono se consolida como una estrategia clave para ofrecer a los turistas internacionales una experiencia auténtica y representativa de la cultura colombiana.

El Ministerio de Cultura de Colombia respalda la importancia del tejo al señalar que alrededor del 90% de la población colombiana ha practicado este deporte en algún momento de su vida (VOA, 2023)¹¹⁷. Además, según un artículo de El Tiempo (2018)¹¹⁸, existen 24 ligas de tejo registradas ante la Federación Colombiana de Tejo y más de 70,000 canchas artesanales en todo el país, lo que subraya su amplia distribución y relevancia cultural.

Este tipo de eventos y estrategias no solo fomentan el desarrollo de la economía local, sino que también refuerzan el reconocimiento internacional de un deporte profundamente arraigado en la identidad colombiana. De esta manera, el tejo se convierte en un puente entre lo autóctono y lo global, contribuyendo al posicionamiento de Colombia como un destino turístico cultural y económicamente dinámico.

IV. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

El tejo, como deporte autóctono de Colombia, se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 8: **Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos** al fomentar actividades productivas y el emprendimiento local mediante la priorización de espacios formales para su práctica como canchas ,y, con la promoción de actividades productivas en establecimientos comerciales dedicados a su práctica.

¹¹⁵ Información extraída de la página oficial del Instituto Distrital de Turismo (IDT) <https://www.idt.gov.co/es/bogota-recibio-mas-de-11-millones-de-turistas-en-diciembre-de-2024>

¹¹⁶ Extraído de nota del espectador 2023. **Mundial de Tejo en Bogotá 2023: fechas, lugares y todo lo que debe saber:** https://www.elspectador.com/deportes/mundial-de-tejo-en-bogota-2023-fechas-lugares-y-todo-lo-que-debe-saber/?utm_source=chatgpt.com

¹¹⁷ Extraído de la nota de VOA la Voz de América. El tejo, deporte nacional de Colombia, mezcla explosiones, cerveza y comida. <https://www.vozdeamerica.com/a/tejo-deporte-nacional-colombia-mezcla-explosiones-cerveza-y-comida/7233686.html>

¹¹⁸ Extraído de la nota del tiempo. Existen 24 ligas de tejo registradas ante la Federación Colombiana de Tejo y más de 70,000. <https://www.eltiempo.com/deportes/otros-deportes/historias-datos-y-curiosidades-sobre-el-tejo-277078#:~:text=Datos%20curiosos%20sobre%20el%20tejo%3A&text=Ligas%20y%20canchas%3A%20Seg%C3%BA%20la,canchas%20artesanales%20para%20su%20pr%C3%A1ctica%E2%80%9D>

“8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra” (ODS, s, f.)

Estos escenarios no solo generan empleos decentes, sino que también impulsan la creatividad e innovación al incorporar elementos culturales y turísticos que atraen tanto a nacionales como a extranjeros. Además, apoyar el desarrollo de estas iniciativas puede contribuir a la formalización y el crecimiento de microempresas vinculadas al deporte.

V. RELACIÓN CON EL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO “BOGOTÁ CAMINA SEGURA 2024-2027”

Según el Plan Distrital de Desarrollo, formalizado a través del Acuerdo Distrital 927 de 2024, la presente iniciativa se relaciona con el **Programa 15. Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural:**

Promover que las artes, la cultura, la recreación, el deporte y la actividad física sean parte fundamental de la vida cotidiana de la ciudadanía, garantizando los derechos culturales para el reconocimiento, apropiación, intercambio, innovación y conjugación de las dimensiones artísticas, creativas y deportivas desde los enfoques: diferencial, de género y territorial, hacia la construcción de una ciudad cuidadora, sostenible, incluyente, innovadora, consciente y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía al ampliar el acceso a la práctica y disfrute del arte y la cultura, la recreación, el deporte y la actividad física como parte de su cotidianidad en condiciones de equidad y diversidad, y potenciar a los creadores del Centro que quieran expresarse y ver en el arte y la cultura como una forma de vida. (...)

Su relación radica en la responsabilidad del Distrito en fomentar el reconocimiento, la apropiación, el intercambio, la innovación y la integración de las dimensiones artísticas, creativas y deportivas de la práctica del tejo en Bogotá. Esto se materializa mediante la priorización de canchas de tejo en la planificación y creación de espacios deportivos en Bogotá D.C. Asimismo, dotar a la ciudadanía de las herramientas necesarias para apoyar iniciativas que promuevan esta disciplina.

“Artículo 120. Sistema Distrital de Turismo. La Secretaría de Desarrollo Económico reglamentará el Sistema Distrital de Turismo en armonía con el Plan de Ordenamiento Territorial, como esquema que permita generar acciones y proyectos interinstitucionales para la consolidación de Bogotá Región como destino líder en Colombia y Latinoamérica.”

La estrecha relación de la cultura colombiana con los extranjeros, sumada a su creciente interés por visitar la capital, impulsa a la administración a desarrollar acciones y proyectos interinstitucionales que permitan consolidar la disciplina del tejo a nivel internacional. Un ejemplo de ello es el “mundial

de tejo” que parte de iniciativas privadas. El Sistema Distrital de Turismo debe impulsar estas iniciativas conforme al artículo 120 del Plan de Desarrollo 2024 - 2027.

VI. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y el alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según las disposiciones constitucionales y legales vigentes. En primer lugar, el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia establece que:

El Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el Artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993, principalmente en el numeral 1 que faculta al a Corporación para dictar normas así: DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”. Art. 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley:

(...) 1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

Asimismo, el Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y el alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

VII. IMPACTO FISCAL

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003:

“En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”.

La promoción del tejo como disciplina deportiva preserva valores culturales y fomenta el desarrollo económico mediante lineamientos específicos para la Administración Distrital, sin generar gastos adicionales para el Distrito. Estas acciones fortalecen el reconocimiento del tejo como deporte profesional mediante la adecuación de escenarios deportivos existentes. Además, se impulsa como una actividad económica que promueve la formalidad y brinda asistencia técnica a pequeños emprendedores. La implementación de estas medidas, enfocadas en el reconocimiento y la

profesionalización tanto deportiva como económica, reafirma el carácter del tejo como patrimonio cultural e inmaterial a nivel nacional y distrital.

Atentamente,

JULIÁN USCÁTEGUI PASTRANA
Concejal de Bogotá D.C.
Centro Democrático

PROYECTO DE ACUERDO NO 237 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN MEDIDAS PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL TEJO COMO DISCIPLINA DEPORTIVA, MOTOR ECONÓMICO Y EXPRESIÓN CULTURAL EN EL DISTRITO CAPITAL”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 1 del artículo 12 del Decreto-Ley 1421 de 1993.

ACUERDA

Artículo 1. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer medidas para la promoción y fomento del tejo en su dimensiones deportiva, económica y cultural en el Distrito Capital.

Artículo 2. La Administración Distrital, a través del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), priorizará la adecuación y creación de campos de tejo en los escenarios deportivos propios o administrados por este, que cumplan con las condiciones técnicas y de viabilidad, siguiendo los lineamientos técnicos establecidos por la Federación Nacional de Tejo para tal efecto.

Artículo 3. El Instituto Distrital de Turismo (IDT) implementará estrategias para fomentar el turismo cultural nacional e internacional mediante la práctica y promoción del tejo, declarado como patrimonio cultural inmaterial en la Ley 1947 de 2019, incluyendo su incorporación en las rutas turísticas del Distrito, la ejecución de campañas de sensibilización que resalten su historia, tradición y vínculo con la identidad nacional del tejo, y la articulación con asociaciones deportivas, culturales y empresas para la preservación y promoción de esta práctica como una actividad turística inclusiva y representativa del patrimonio cultural inmaterial.

Artículo 4. La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, en articulación con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, promoverá la capacitación y el acompañamiento técnico para la formulación e implementación de proyectos productivos ciudadanos con relación a esta disciplina.

Artículo 5. La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico implementará una estrategia integral orientada a la realización de acciones de focalización, sensibilización y capacitaciones especializadas en gestión empresarial para emprendimientos relacionados con esta disciplina. Asimismo, promoverá la implementación de incentivos y otras medidas que la Secretaría considere pertinentes, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad y el fortalecimiento de este sector.

Artículo 6. Informes. La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte entregará un informe al Concejo de Bogotá relacionando el seguimiento e impacto de las orientaciones y medidas contenidas en el presente Acuerdo, que evidencien avances de su cumplimiento. Dicho informe, se presentará ante el Concejo de Bogotá D.C. cada 23 de agosto.

Artículo 7. Vigencia. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su promulgación.

Publíquese y Cúmplase

JULIÁN USCÁTEGUI PASTRANA

Concejal de Bogotá

Partido Centro Democrático

PROYECTO DE ACUERDO NO 238 DE 2025

PRIMER DEBATE

POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO DISTRITAL 138 DE 2004 “POR MEDIO DEL CUAL SE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. OBJETIVO

El presente proyecto de acuerdo tiene por objeto modificar el Acuerdo Distrital 138 de 2004 “Por medio del cual se regula el funcionamiento de los establecimientos públicos y privados que prestan el servicio de educación inicial”, con el fin de determinar claramente las competencias de la Secretaría Distrital de Integración Social y la Secretaría de Educación del Distrito en cuanto a la expedición de las licencias de funcionamiento y registros, así como frente a la labor de inspección, vigilancia y control de los jardines infantiles privados en Bogotá.

II. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA

Una vez revisada la información que reposa en las bases de datos del Concejo de Bogotá, se encontró que la iniciativa no cuenta con antecedente alguno.

Cabe señalar que esta iniciativa es producto de la preocupación y las denuncias interpuestas por las operadoras y propietarias de un gran número de jardines infantiles en Bogotá, por cuenta de la dificultad e imposibilidad que han encontrado a la hora de formalizar y certificar sus establecimientos, como consecuencia de la confusión jurídica que se presenta en la normatividad vigente que rige y regula la operación y prestación del servicio de los jardines infantiles privados del Distrito Capital.

Es así como se adelantaron cuatro mesas de trabajo entre las operadoras de los jardines infantiles con el concejal Armando Gutiérrez González y su Unidad de Apoyo Normativo, autores de la presente iniciativa, junto con la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), la Secretaría de Educación del Distrito (SED), el Ministerio de Educación, la Personería de Bogotá y la Veeduría Distrital. En estas reuniones se acordó que el concejal Gutiérrez presentaría una propuesta normativa con el fin de

dirimir el conflicto de competencias que existe entre las SDIS y SED con relación a los jardines infantiles del Distrito Capital.

El día 22 de enero de 2025, se adelantó una mesa con los equipos de los asesores de la concejala María Clara Name y la concejala Rocío Dussán Pérez, en la cual se reconoció que esta problemática sigue vigente, especialmente en jardines privados que prestan el servicio educativo a niños entre 0 y 6 años de edad, debido a que la modalidad de la prestación del servicio se divide de acuerdo a la edad: de 3 a 6 años educación formal que se rige por la Ley de Educación, y de 0 a 3 años como educación inicial, que se rige a partir de la política De Cero a Siempre y su normatividad. Por lo tanto, a un mismo jardín infantil puede visitarlo tanto la SDIS como la SED para la verificación de cumplimiento de requisitos, dificultando en la práctica la habilitación de estos espacios y la obtención del REI (Registro de Educación Inicial), del cual se hablará más adelante; además se piden requisitos a veces contradictorios para su funcionamiento.

Es importante para la ciudad de Bogotá que se cuente con suficiente infraestructura para la prestación de servicios de educación a los niños y niñas en sus primeros años de vida, permitiendo a los privados operar mediante una regulación clara para el funcionamiento, así como para el cumplimiento de los estándares de calidad. A la fecha, tanto la SED como la SDIS no han dirimido este conflicto como tampoco han oficializado unos estándares de calidad conjuntos. Además, tan solo un 10% de los jardines infantiles cuentan con el REI.

III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO

La Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, dio lugar a la creación de la educación preescolar. Según el artículo 15: “La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas”¹.

Esta Ley dio lugar a la expedición del Decreto 1860 de 1994, en cuyo Artículo 6 se establece que la educación preescolar está dirigida a las niñas y niños menores de seis años, que ocurre antes de iniciar la educación básica y se compone de tres grados, siendo los dos primeros una etapa previa a la escolarización obligatoria y un tercer grado es obligatorio.

¹ Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia. Recuperado de:
<http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Fundamentos-politicos-tecnicos-gestion-de-cero-a-siempre.pdf>

Posteriormente, la Ley 1804 de 2016 “Por la cual se establece la política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones” determina lo siguiente:

“ARTÍCULO 5°. La educación inicial. La educación inicial es un derecho de los niños y niñas menores de seis (6) años de edad. Se concibe como un proceso educativo y pedagógico intencional, permanente y estructurado, a través del cual los niños y las niñas desarrollan su potencial, capacidades y habilidades en el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, contando con la familia como actor central de dicho proceso.

Su orientación política y técnica, así como su reglamentación estarán a cargo del Ministerio de Educación Nacional y se hará de acuerdo con los principios de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre.

La reglamentación será de obligatorio cumplimiento para toda la oferta oficial y privada, nacional y territorial y definirá los aspectos relativos a la prestación, inspección, vigilancia y control de este derecho y proceso”.

De acuerdo con lo anterior, la definición de educación inicial no permite diferenciar a las instituciones de atención integral a la primera infancia de las de educación preescolar. Por el contrario, teniendo en cuenta que el curso de vida de la primera infancia va desde los 0 a menores de 6 años, los niños y niñas en ese rango de edades están en la primera infancia, independientemente de que estén matriculados en establecimientos con nivel formal de educación preescolar (educación formal) o con enfoque de atención inicial en la primera infancia (AIPI).

Por otro lado, el artículo 17 de la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, establece:

“ARTÍCULO 17.- Grado obligatorio. El nivel de educación preescolar comprende, como mínimo, un (1) grado obligatorio en los establecimientos educativos estatales para niños menores de seis (6) años de edad”.

La disposición anterior conlleva a corroborar que la educación inicial es un servicio genérico de atención a las niñas y niños que están en el curso de vida de la primera infancia y que dentro de la misma se encuentra comprendido el nivel de educación

preescolar, pero no permite una diferenciación clara entre este último y el enfoque de atención integral a la primera infancia.

Sin embargo, según las normas aplicables a la educación preescolar y a la educación con enfoque de atención integral a la primera infancia se pueden establecer claras diferencias entre unas y otras. Es relevante que las mismas queden expresadas en el articulado, teniendo en cuenta lo siguiente:

Tabla 1 Diferencias entre Educación inicial con nivel Preescolar y Educación inicial con Enfoque AIPI

Educación inicial con nivel Preescolar	Educación inicial con Enfoque AIPI
Es educación formal	No es educación formal

El artículo 18 de la Ley 115 de 1994 establece que la educación preescolar tiene un enfoque lineal, por grados y necesariamente basado en la aplicación de herramientas pedagógicas, indicando:

“ARTÍCULO 18.- Ampliación de la atención. El nivel de educación preescolar de tres grados se generaliza en instituciones educativas del Estado o en las instituciones que establezcan programas para la prestación de este servicio, de acuerdo con la programación que determinen las entidades territoriales en sus respectivos planes de desarrollo”.

El enfoque AIPI, por el contrario, no responde a una educación lineal y secuencial por grados, sino más flexible, dando cabida a circunstancias específicas que pueden motivar que la estadía de los niños en este tipo de establecimientos de educación inicial se prolongue por más de tres años, pero en todo caso hasta antes de cumplir seis años. Sobre el particular, la Ley 1804 de 2016, Política de Cero a Siempre, establece:

“ARTÍCULO 4. Definiciones. Para efectos de la presente ley se presentan dos tipos de definiciones basadas en los acuerdos y desarrollos conceptuales de la política: conceptos propios de la primera infancia, y conceptos relativos a la gestión de la política.

Conceptos propios de la primera infancia:

a) Desarrollo integral. El desarrollo integral en tanto derecho, conforme a lo expresado por la Ley 1098 de 2006 en su artículo 29, es el fin y propósito principal de esta política. Entiéndase por desarrollo integral el proceso singular de transformaciones y cambios de tipo cualitativo y cuantitativo mediante el cual el sujeto dispone de sus características, capacidades, cualidades y potencialidades para estructurar progresivamente su identidad y su autonomía.

El desarrollo integral no se sucede de manera lineal, secuencial, acumulativa, siempre ascendente, homogénea, prescriptiva e idéntica para todos los niños y las niñas, sino que se expresa de manera particular en cada uno. La interacción con una amplia variedad de actores, contextos y condiciones es significativa para el potenciamiento de las capacidades y de la autonomía progresiva. El desarrollo ocurre a lo largo de todo el ciclo vital y requiere de acciones de política pública que lo promuevan más allá de la primera infancia”.

En los jardines infantiles con enfoque AIPI se tienen en cuenta los siguientes factores:

La posibilidad de que no haya cupo en los jardines con educación preescolar, en contraste con la necesidad de garantizar a los niños afectados su derecho a la educación inicial, por lo cual se puede ampliar su permanencia más de 3 años.

Los horarios flexibles diurnos y nocturnos, que facilitan la vida de las familias en condición de vulnerabilidad, por lo cual se apoya su decisión de permitir que los niños permanezcan más de 3 años.

La aplicación del enfoque diferencial de etnoeducación, el cual parte del reconocimiento de su cosmovisión y

cosmogonía respecto al desarrollo y procesos de crianza de los niños y niñas de las comunidades indígenas.

Los requisitos para la expedición de la licencia de funcionamiento son los establecidos en el artículo 2.3.2.1.4. del Decreto Nacional 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, que establece:

“Artículo 2.3.2.1.4. Solicitud. Para obtener la licencia de funcionamiento, el interesado deberá presentar a la secretaría de educación de la entidad territorial certificada, con no menos de seis (6) meses de antelación a la fecha de iniciación de labores, una solicitud acompañada de la propuesta de Proyecto Educativo Institucional (PEI) y del concepto de uso del suelo de los inmuebles de la planta física propuesta, expedido por la autoridad competente en el municipio o distrito. La propuesta de PEI deberá contener por lo menos la siguiente información:

- a). Nombre propuesto para el establecimiento educativo, de acuerdo con la reglamentación vigente, número de sedes, ubicación y dirección de cada una y su destinación, niveles, ciclos y grados que ofrecerá, propuesta de calendario y de duración en horas de la jornada, número de alumnos que proyecta atender, especificación de título en media académica, técnica o ambas si el establecimiento ofrecerá este nivel;
- b). Estudio de la población objetivo a que va dirigido el servicio, y sus requerimientos educativos;
- c). Especificación de los fines del establecimiento educativo;
- d). Oferta o proyección de oferta de al menos un nivel y ciclo completo de educación preescolar, básica y media;
- e). Lineamientos generales del currículo y del plan de estudios, en desarrollo de lo establecido en el Capítulo I del Título II de la Ley 115 de 1994;
- f). Indicación de la organización administrativa y el sistema de gestión, incluyendo los principios, métodos y cultura administrativa, el diseño organizacional y las estrategias de evaluación de la gestión y de desarrollo del personal;
- g). Relación de cargos y perfiles del rector y del personal directivo, docente y administrativo;
- h). Descripción de los medios educativos, soportes y recursos pedagógicos que se utilizarán, de acuerdo con el tipo de educación ofrecido, acompañada de la respectiva justificación;
- i). Descripción de la planta física y de la dotación básica; plano general de las sedes del establecimiento; especificación de estándares o criterios adoptados para definir las condiciones de la planta física y de la dotación básica;
- j). Propuesta de tarifas para cada uno de los grados que se ofrecerán durante el primer año de operación, acompañada de estudio de costos, proyecciones financieras y presupuestos para un período no inferior a cinco años;
- k). Servicios adicionales o complementarios al servicio público educativo que ofrecerá el establecimiento, tales como alimentación, transporte, alojamiento, escuela de padres o actividades extracurriculares, y
- l). Formularios de autoevaluación y clasificación de establecimientos educativos privados adoptados por el Ministerio de Educación Nacional para la definición de tarifas, diligenciados en lo pertinente.

Parágrafo. Para obtener la licencia de funcionamiento en las modalidades condicional o definitiva, el interesado deberá presentar, además, la solicitud acompañada de los requisitos enunciados en el artículo anterior, según el caso”.

En concordancia con el Decreto Distrital 057 de 2009, se expidió la Resolución No. 325 de 2009 “Por medio de la cual se reglamenta parcialmente el Decreto 057 de 2009, respecto de la Asesoría, Inspección, Vigilancia y Control de la Educación Inicial, desde el Enfoque de Atención Integral a la Primera Infancia”, la cual establece:

“ARTÍCULO 21. LINEAMIENTOS Y ESTÁNDARES TÉCNICOS. Harán parte de esta Resolución los lineamientos y estándares definidos para el proceso pedagógico, nutrición, salubridad, talento humano, ambientes adecuados y seguros y proceso administrativo para el mejoramiento continuo, los cuales constan en las directrices para la prestación del servicio”.

Cabe resaltar que según las diferencias en el Régimen Especial las competencias y el enfoque de la atención, la Secretaría Distrital de Integración Social puede establecer requisitos diferenciados, aunque no menos exigentes para el otorgamiento del Registro de Educación Inicial.

Diferenciación entre la licencia de funcionamiento y el Registro de Educación Inicial:

- **La licencia de funcionamiento de los establecimientos que presten un servicio de educación formal con nivel preescolar debe expedirla la Secretaría de Educación.**

Se debe tener en cuenta que el artículo 193 de la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación establece:

“Artículo 193°.- *Requisitos de constitución de los establecimientos educativos privados.* De conformidad con el artículo 68 de la Constitución Política, los particulares podrán fundar establecimientos educativos con el lleno de los siguientes requisitos:

- a. Tener licencia de funcionamiento que autorice la prestación del servicio educativo, expedida por la Secretaría de Educación departamental o distrital, o el organismo que haga sus veces según el caso, y
- b. Presentar ante la Secretaría de Educación respectiva un Proyecto Educativo Institucional que responda a las necesidades de la comunidad educativa de la región de acuerdo con el artículo 78 de esta Ley”.

En desarrollo de esa disposición, el Decreto Nacional 3433 de 2008, compilado mediante el Decreto Nacional 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación establece:

“Artículo 2.3.2.1.1. *Ámbito de aplicación.* Las disposiciones del presente Capítulo aplican a los particulares que promuevan la fundación y puesta en funcionamiento de establecimientos educativos para prestar el servicio público de educación formal, en los niveles de preescolar, básica y media”.
(Decreto 3433 de 2008, artículo 1).

“Artículo 2.3.2.1.2. *Licencia de funcionamiento.* Licencia de funcionamiento es el acto administrativo motivado de reconocimiento oficial por medio del cual la secretaría de educación de una entidad territorial certificada autoriza la apertura y operación de un establecimiento educativo privado dentro de su jurisdicción.

Debe especificar el nombre, razón social o denominación del propietario del establecimiento educativo, quien será el titular de la licencia, Número de Identificación DANE y nombre completo del establecimiento educativo,

ubicación de su planta física, niveles, ciclos y modalidades que ofrecerá,

número máximo de estudiantes que puede atender y tarifas de matrícula y pensión para los grados que ofrecerá durante el primer año de funcionamiento”.
(Decreto 3433 de 2008, artículo 2)

“Artículo 2.3.2.1.3. Alcance, efectos y modalidades de la licencia de funcionamiento. La secretaría de educación respectiva podrá otorgar la licencia de funcionamiento en la modalidad definitiva, condicional o provisional, según el caso. Será expedida a nombre del propietario, quien se entenderá autorizado para prestar el servicio en las condiciones señaladas en el respectivo acto administrativo”.

Según lo anterior, es claro que le compete a la SED y no a la SDIS expedir las licencias de funcionamiento de los establecimientos de educación formal.

- **El Registro de Educación Inicial de los establecimientos que presten un servicio con enfoque de atención inicial a la primera infancia debe expedirlo la Secretaría Distrital de Integración Social.**

Los requisitos de funcionamiento de los establecimientos de educación inicial que no tienen nivel de educación preescolar no han sido reglamentados en el nivel nacional.

Por el contrario, en el nivel distrital el artículo 38, numeral 6 del Decreto Ley 1421 de 1993, Estatuto Orgánico de Bogotá, establece:

“ARTÍCULO 38. Atribuciones. Son atribuciones del alcalde mayor:

1a Hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del Gobierno Nacional y los acuerdos del Concejo.

(...) 4a Ejercer la potestad reglamentaria, expidiendo los decretos, órdenes y resoluciones necesarios para asegurar la debida ejecución de los acuerdos. (...)

6a Distribuir los negocios según su naturaleza entre las secretarías, los departamentos administrativos y las entidades descentralizadas”.

Con base en esa función del Alcalde Mayor, expidió el Decreto Distrital 607 de 2007, que determina la estructura, objeto y funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social, que en el artículo 2° dispone:

“Artículo 2°. Funciones. La Secretaría Distrital de Integración Social, tendrá las siguientes funciones básicas:

(...)

- e) Ejercer las funciones de certificación, registro y control asignadas al Departamento Administrativo Bienestar Social en las disposiciones vigentes y

las que le sean asignadas en virtud de normas nacionales o distritales”.

En desarrollo de lo anterior, el Alcalde Mayor expidió el Decreto Distrital 057 de 2009 "Por el cual se reglamenta el Acuerdo 138 de 2004, se regula la inspección, vigilancia y control de las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, que presten el servicio de Educación Inicial en el Distrito Capital, a niñas y niños entre los cero (0) y menores de seis (6) años de edad y se deroga parcialmente el Decreto Distrital 243 de 2006"

“ARTÍCULO 5°. DEL REGISTRO Y CONTROL DE LAS INSTITUCIONES QUE PRESTAN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL. En virtud de las

funciones de registro y control establecidas en el Acuerdo 138 de 2004, la Secretaría Distrital de Integración Social expedirá a través de la Subsecretaría Distrital de Integración Social el Registro de Educación Inicial (R.E.I.) a las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, que presten el servicio de atención integral en el Distrito Capital, a niñas y niños entre los cero (0) y menores de seis (6) años de edad que cumplan a cabalidad con los estándares de calidad para la prestación del servicio de educación inicial definidos en el Acuerdo 138 de 2004 y la reglamentación expedida por la Secretaría Distrital de Integración Social.

Las labores de control a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto serán ejercidas a través de la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría Distrital de Integración Social.

PARÁGRAFO: El registro será obligatorio para todas las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, que presten el servicio de atención integral en el Distrito Capital, a niñas y niños entre los cero (0) y menores de seis (6) años de edad”

Según lo anterior, es claro que le compete a la SDIS y no a la SED expedir el Registro de Educación Inicial.

IV. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA

Con la expedición del acuerdo 138 de 2004 se empezó a regular el funcionamiento de los establecimientos públicos y privados que prestan el servicio de educación inicial en Bogotá; en su ARTÍCULO SEGUNDO, el antes llamado Departamento Administrativo de Bienestar Social, DABS, ahora la Secretaría Distrital de Integración Social, SDIS, empezó a ser la entidad encargada de expedir y revocar

la licencia de funcionamiento y controlar la adecuada operación de las instituciones de

que trata el artículo primero del presente acuerdo. Seguidamente en su PARÁGRAFO PRIMERO determina que la SED expedirá las licencias de funcionamiento para las instituciones de educación preescolar, con ello buscando ambientes adecuados y seguros, donde la vulnerabilidad de la primera infancia es el objeto principal para el desarrollo del legislador distrital, adecuando reglas para un espacio protegido, estandarizado, medido, regulado y controlado. Adicional a ello se integran factores de atención integral, con factores de nutrición y salubridad, donde el comer forma parte de la práctica pedagógica.

Cabe resaltar que la producción normativa relacionada con la atención de la primera infancia ha venido evolucionando, con la expedición de varias normas, adecuando el desarrollo filosófico y jurídico hacia la protección de los niños, niñas y adolescentes, como la Ley 1098 de 2006 (Código de primera infancia y adolescencia), la Ley 1804 de 2016 (la cual se establece la política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre), normas que establecieron un concepto integral en la regulación de los establecimientos que prestan el servicio de educación inicial, dirigido a niños y niñas de 0 a 6 años. Con ello, se introdujeron nuevos criterios y factores de calidad en la prestación del servicio, con un enfoque técnico, social y de derechos, lo que inevitablemente lleva a revisar los marcos generales de las normas de educación y cómo éstas establecen sus criterios de adecuación y disposición para el establecimiento de instituciones que prestan el servicio de educación inicial (jardines infantiles).

Por lo anterior, y obedeciendo lo establecido en el código de procedimiento administrativo, esta función debe operar en virtud de lo dictado en el decreto 3433 de 2008, el cual configuró el manual de la Secretaría de Educación para el proceso de licencias de funcionamiento de establecimientos de educación inicial, y dejó la potestad técnica a esta Secretaría para expedir los permisos de funcionamiento.

Ahora bien, respecto al proceso integral y de calidad que deben seguir los establecimientos de educación inicial, el Acuerdo 138 de 2004 reglamentado por el Decreto 057 de 2009, determinó la necesidad de implementar el principio de coordinación administrativa entre la dos entidades rectoras encargadas de la atención y garantía de los derechos de los niños y niñas en el Distrito Capital, labor encargada fundamentalmente desde el ámbito social a la SDIS, y desde el ámbito educativo a la SED; por ello, se emitió la resolución conjunta 3421 y 1326 de 2010, por la cual se unifica el proceso de regulación, inspección y vigilancia de los establecimientos dedicados a la educación inicial en Bogotá.

Específicamente el Artículo 14 de la Resolución conjunta determina la competencia de la Secretaría de Educación para la autorización mediante licencia de

funcionamiento para operar, a los establecimientos QUE PRESTEN O DESEEN PRESTAR SIMULTÁNEAMENTE EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, ello en virtud del Artículo 3 del Decreto Reglamentario 3433 de 2008, expedido por el Ministerio de Educación Nacional, que define el alcance, efectos y modalidades de la licencia de funcionamiento, donde determina que es la secretaría de educación respectiva del ente territorial la que podrá otorgar la licencia de funcionamiento en la modalidad definitiva, condicional o provisional, según el caso.

Por tanto, el proceso rector para determinar la viabilidad de la operación de los establecimientos de educación inicial en el Distrito Capital es de competencia de la SED. No obstante, ello ha venido presentando una serie de contradicciones entre la SDIS y la SED; la controversia reza sobre lo dispuesto en el acuerdo 138 de 2004 y su respectivo Decreto Reglamentario 057 de 2009. Para efectos de dar claridad a tal controversia, se expone que el Acuerdo 138 de 2004, es el eje rector y base de las emisiones de los actos administrativos en el Distrito Capital, ello por la naturaleza de su procedencia: el Concejo Distrital, que por mandato del Decreto Ley 1421 que le da su categoría especial, y dota al cabildo de una competencia reglamentaria al nivel de las asambleas departamentales, asimismo la constitución política en su “ARTÍCULO 313; determina que corresponde a los concejos: “Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio”.

Dado lo anterior, todos los decretos reglamentarios para la regulación, inspección y vigilancia de los establecimientos de educación inicial deben obedecer a lo dispuesto en el Acuerdo Distrital 138 de 2004, el cual integra de manera adecuada lo determinado por el marco legal nacional para la atención a la primera infancia, como la Ley de Cero a Siempre y el Código de Infancia y Adolescencia, los cuales categorizan a NIÑOS Y NIÑAS como sujetos de especial protección, y por ende su atención debe darse desde un marco integral de carácter social, con garantía real de derechos. Ciertamente es, que el Acuerdo Distrital, en su Artículo 2, determina tales fundamentos legales para su protección, y la atención integral a ellos, donde dispone que es el DABS, hoy SDIS, quien determina los elementos de calidad y de atención con un énfasis social, en los términos que dispone la Ley 1098 de 2006, en su artículo 209 que determina:

“El objetivo general de la inspección, vigilancia y control en los términos de la misma, es asegurar que las autoridades competentes cumplan sus funciones en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal para: Garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y su contexto familiar. Asegurar que reciban la protección integral necesaria para el restablecimiento de sus derechos.” (Cursiva extratexto).

Asimismo, el decreto reglamentario 057 de 2009 integra los fundamentos que el

Acuerdo 138 de 2004 dispone para tal fin. El citado Decreto en su Artículo 5°, expone la condición necesaria para la viabilidad de la operación de jardines infantiles, a través del registro y control de las instituciones que prestan el servicio de educación inicial.

“En virtud de las funciones de registro y control establecidas en el Acuerdo 138 de 2004, la SDIS expedirá a través de la Subsecretaría Distrital de Integración Social el Registro de Educación Inicial (R.E.I) a las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, que presten el servicio de atención integral en el Distrito Capital, a niñas y niños entre los cero (0) y menores de seis (6) años de edad que cumplan a cabalidad con los estándares de calidad para la prestación del servicio de educación inicial definidos en el Acuerdo 138 de 2004 y la reglamentación expedida por la Secretaría Distrital de Integración Social”.

Así las cosas, el panorama legal no es claro para el funcionamiento de los jardines infantiles del Distrito Capital, la normatividad distrital adolece de una claridad funcional de sus actos administrativos; toda vez que, al tenor de la jerarquía jurídica los decretos priman sobre las resoluciones, para este caso, el decreto 057 de 2009, que determina la necesidad de adecuar lineamientos técnicos necesarios de atención integral, y dar fe del cumplimiento de estos mediante el REI (registro de educación inicial). Desde la SED se han emitido órdenes para cerrar jardines infantiles, algunos de ellos con la facultad legal que les otorga tener el cumplimiento de los requisitos mínimos, donde tener el aval de la SDIS, debería ser el principal factor vinculante para tener licencia de funcionamiento.

Por lo tanto, el presente proyecto de acuerdo busca tipificar de manera lineal, el proceso para la correcta adecuación de los permisos de funcionamiento de los jardines infantiles del Distrito Capital, acorde a las normas reglamentarias para ello, respetando en todo momento la prevalencia que tienen los derechos de los niños y niñas sobre cualquier otra pretensión; ello significa que se adecúa la normatividad, respetando los requisitos esenciales que exige la ley para la prestación del servicio de educación inicial en el distrito capital.

Adicionalmente, busca aportar al cumplimiento del cuarto objetivo de desarrollo sostenible (ODS) educación de calidad, la cual es clave para alcanzar otros objetivos de desarrollo sostenible y romper el ciclo de la pobreza, por cuanto ayuda a reducir las desigualdades, permite una vida más saludable y sostenible y contribuye al desarrollo de sociedades más tolerantes y pacíficas. Específicamente la iniciativa apunta a la siguiente meta: “De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la

primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria”².

V. MARCO JURÍDICO

MARCO INTERNACIONAL

Artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, adoptada por Colombia mediante Ley 16 de 1972, establece que: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.”

Numeral 3 del artículo 3 de la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño, aprobada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991. El Estado colombiano se compromete a asegurar “que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.”

Convención americana de derechos humanos, artículo 19 que: “1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. “2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.”

Opinión consultiva 17 de 2002 de la Corte Interamericana de Derechos humanos: indica que, de conformidad con la normativa contemporánea del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en la cual se enmarca el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los niños son titulares de derechos y no sólo objeto de protección; y además que: “2) (...) La expresión “interés superior del niño”, consagrada en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus

² <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/>

derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. “3) El principio de igualdad recogido en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no impide la adopción de reglas y medidas específicas en relación con los niños, los cuales requieren un trato diferente en función de sus condiciones especiales. Este trato debe orientarse a la protección de los derechos e intereses de los niños (...) “6.) Para la atención a los niños, el Estado debe valerse de instituciones que dispongan de personal adecuado, instalaciones suficientes, medios idóneos y experiencia probada en este género de tareas (...) “8.) La verdadera y plena protección de los niños significa que éstos puedan disfrutar ampliamente de todos sus derechos, entre ellos los económicos, sociales y culturales, que les asignan diversos instrumentos internacionales. Los Estados Partes en los tratados internacionales de derechos humanos tienen la obligación de adoptar medidas positivas para asegurar la protección de todos los derechos del niño. “9.) Que los Estados Partes en la Convención Americana tienen el deber, conforme a los artículos 19 y 17, en relación con el artículo 1.1 de la misma, de tomar todas las medidas positivas que aseguren la protección a los niños contra malos tratos, sea en su relación con las autoridades públicas, o en las relaciones inter-individuales o con entes no estatales”.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Artículo 44 de la Constitución Política. Establece la prevalencia de los derechos de los niños frente a los derechos de los demás, y manifiesta que corresponde a la familia, a la sociedad y al Estado asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.

Artículo 67 de la Constitución Política. Establece que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; que el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la misma, y que corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia con el fin de velar por su calidad, garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

LEYES

Ley 12 de 1991. Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, señala en el artículo 27 que los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social; en el artículo 28, el reconocimiento del derecho del niño a la educación, y en el artículo 29, que la educación del niño deberá estar encaminada

a desarrollar su personalidad, sus aptitudes y su capacidad mental y física hasta el

máximo de sus posibilidades

Ley 115 de 1994. La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad.

Ley estatutaria 1618 de 2013. Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, establece que todos los niños y niñas con discapacidad deben gozar plenamente de sus derechos en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas; y que el Gobierno nacional, los gobiernos departamentales y municipales, a través de las instancias y organismos responsables, deberán integrar a todas las políticas y estrategias de atención y protección de la primera infancia, mecanismos especiales de inclusión para el ejercicio de los derechos de los niños y niñas con discapacidad.

Ley 1098 de 2006. Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, establece la educación inicial como un derecho impostergable de la primera infancia que hace parte del derecho al desarrollo integral; primera infancia entendida como el momento del ciclo vital que comprende la franja poblacional que va de los cero a los seis años de edad, en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano, y desde la cual los niños y las niñas son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales y en la Constitución Política

Ley 1804 de agosto 02 de 2016. Por la cual se establece la política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones.

DECRETOS

Decreto 3433 de 2008. Por el cual se reglamenta la expedición de licencias de funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por particulares para prestar el servicio público educativo en los niveles de preescolar, básica y media.

Decreto reglamentario 057 de 2009 “Por el cual se reglamenta el Acuerdo 138 de 2004, se regula la inspección, vigilancia y control de las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, que prestan el servicio de Educación Inicial en el Distrito Capital, a niños y niñas entre los cero (0) y menores de seis (6) años de edad y se deroga parcialmente el Decreto Distrital 243 de 2006”

Decreto 1075 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”

ACUERDOS

Acuerdo 138 de 2004 “por medio del cual se regula el funcionamiento de los establecimientos públicos y privados que prestan el servicio de educación inicial”.

RESOLUCIONES

Resolución conjunta 3421 y 1326 de 2010, por la cual se unifica el proceso de regulación, inspección y vigilancia de los establecimientos dedicados a la educación inicial en Bogotá.

Resolución 2151 del 7 de diciembre de 2021 “Por medio de la cual se definen los procesos y procedimientos de asesoría técnica, inscripción, registro, certificación, inspección, vigilancia y control que requieren las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, que presten o deseen prestar el servicio de Educación inicial desde el enfoque de Atención Integral a la Primera Infancia (AIPI) en el Distrito Capital”.

VI. COMPETENCIA CONCEJO DE BOGOTÁ

El Concejo de Bogotá D.C. es competente para estudiar, tramitar y promulgar la presente iniciativa, conforme las atribuciones reconocidas en la Constitución Política y el Estatuto Orgánico de Bogotá D.C., a saber:

Artículo 313 numeral 1 de la Constitución Política:

“ARTICULO 313. Corresponde a los concejos:

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. [...]”.

Artículo 12 numeral 1 del Decreto Ley 1421 de 1993:

“ARTÍCULO 12. ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. [...]”.

23. Ejercer de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del presente estatuto, las atribuciones que la Constitución y las leyes asignen a las asambleas departamentales.

VII. IMPACTO FISCAL

Teniendo en cuenta los mandatos de la ley 819 de 2003 Artículo 7º. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto

de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. El presente proyecto de acuerdo NO genera impacto fiscal, ya que no compromete apropiaciones presupuestales para su implementación. El proyecto no genera nuevos gastos tributarios.

Además, lo propuesto en el proyecto de acuerdo se alinea con las metas del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”, específicamente con el objetivo 3 “Bogotá Confía en su potencial”:

ID	Objetivo	Nombre Indicador	Fuente de línea base	Año línea base	Valor de la línea base	Meta proyectada 2027
42	3 - Bogotá confía en su potencial	Número de niños y niñas de 0 a 5 años atendidos con servicios de primera infancia en el marco de la atención integral	Sistema Integrado de Matrícula - SIMAT	2023	135.000	165.000

VIII. PLIEGO MODIFICATORIO:

ARTICULADO ORIGINAL ACUERDO 138 DE 2004	PROPUESTA ARTICULADO
<p>ACUERDO 138 DE 2004 (diciembre 28)</p> <p>"Por medio del cual se regula el funcionamiento de los establecimientos públicos y privados que prestan el servicio de educación inicial"</p> <p>EL CONCEJO DE BOGOTÁ D. C. En desarrollo del artículo 44 de la Constitución Política y de las facultades legales, en especial las conferidas en el Decreto Ley 1421 de 1993. ACUERDA</p>	<p>SIN MODIFICACIONES</p>

ARTÍCULO PRIMERO. - Las instituciones públicas y privadas que presten el servicio de educación inicial a los niños y las niñas de cero (0) a menores de seis (6) años, en la ciudad de Bogotá, requerirán licencia de funcionamiento, que se les concederá previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente acuerdo.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para los efectos de este Acuerdo se entenderá por educación inicial, la orientada al desarrollo infantil y que brinde atención y cuidado a los niños y niñas de las edades indicadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Todos los establecimientos públicos y privados, que atiendan niños y niñas en educación inicial, de edades entre cero y menores de seis años, se denominarán e identificarán como JARDINES INFANTILES.

PROPUESTA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 1 DEL ACUERDO 138 DE 2004

Se propone convertir este artículo en dos para mayor precisión:

ARTÍCULO 1. Modifíquese el artículo 1 del Acuerdo Distrital 138 de 2004, el cual quedará así:

ARTÍCULO 1. OBJETO. El presente acuerdo tiene como propósito regular la inscripción, el registro y el funcionamiento de los establecimientos públicos y privados que prestan el servicio educativo en el marco de la educación inicial bajo el enfoque de Atención Integral a la Primera Infancia -AIPI-.

	<p>ARTÍCULO NUEVO</p> <p>ARTÍCULO 2. DEFINICIONES: Para efectos del presente Acuerdo y su reglamentación se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:</p> <ul style="list-style-type: none">• Educación inicial: La educación inicial es un derecho de los niños y niñas menores de seis (6) años de edad. Se concibe como un proceso educativo y pedagógico intencional, permanente y estructurado, a través del cual los niños y las niñas desarrollan su potencial, capacidades y habilidades en el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, contando con la familia como actor central de dicho proceso. Su orientación política y técnica, así como su reglamentación está a cargo del Ministerio de Educación Nacional y se hará de acuerdo con los principios de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre.• Educación formal: Aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados títulos. La educación formal se integra por tres niveles: Preescolar, educación básica (primaria y secundaria) y educación media.• Educación Preescolar: La educación preescolar corresponde a la ofrecida para el desarrollo de los niños y niñas en los aspectos biológico, cognoscitivo, psicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas. Comprende los grados de prejardín, jardín y transición.• Enfoque Atención Integral a la Primera Infancia - AIPI:- Es aquel dirigido a niños y niñas entre los cero y los seis años, que tiene por objeto garantizar las condiciones para fortalecer sus procesos de desarrollo integral a través de los estructurantes de la atención
--	--

	<p>integral: el cuidado y la crianza, la salud, la alimentación y la nutrición; la educación inicial; la recreación; el ejercicio de la ciudadanía y la participación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de Información y Registro de los Servicios Sociales (SIRSS): Es la herramienta para el registro de los establecimientos que tengan a su cargo o deseen prestar servicios sociales que han sido reglamentados por el Distrito Capital. • Certificado de calidad: Se entenderá como certificado de calidad aquel que se obtiene por parte de un establecimiento que presta el servicio de educación inicial bajo el enfoque de Atención Integral a la Primera Infancia -AIPI-, al cumplir la totalidad de los requisitos indispensables y básicos para su funcionamiento. • Inspección: Es la facultad de solicitar y/o verificar información o documentos en poder de las entidades sujetas a control. • Vigilancia: Seguimiento y evaluación de las actividades de la entidad vigilada. • Control: Corresponde a la posibilidad de que la autoridad ponga en marcha correctivos, lo cual puede producir la revocatoria de la decisión del controlado o la imposición de sanciones.
<p>ARTÍCULO SEGUNDO PROPUESTO POR EL CONCEJO DE BOGOTÁ. El Departamento Administrativo de Bienestar Social DABS, será la entidad encargada de expedir y revocar la licencia de funcionamiento y controlar la adecuada operación de las instituciones de que trata el artículo primero del presente acuerdo.</p> <p>PARÁGRAFO: La Secretaría de Educación Distrital expedirá las licencias de funcionamiento para las instituciones de educación preescolar.</p>	<p>PROPUESTA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO 138 DE 2004.</p> <p>ARTÍCULO 3. Modifíquese el artículo 2 del Acuerdo Distrital 138 de 2004, el cual quedará así:</p> <p>ARTÍCULO 2. INSCRIPCIÓN, LICENCIA Y FUNCIONAMIENTO. Para la adecuada operación de los establecimientos que prestan el servicio de educación inicial bajo el enfoque de Atención Integral a la Primera Infancia -AIPI- del que trata el artículo 1º del presente acuerdo, la Administración Distrital, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, llevará a cabo las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> Expedir y cancelar el número de inscripción en el Sistema de Información y Registro de Servicios Sociales -SIRSS-. Expedir y revocar el Certificado de Calidad en la Atención Integral a la Primera Infancia -AIPI-. Expedir y revocar la licencia de funcionamiento y controlar la adecuada operación de las instituciones de que trata el artículo primero del presente acuerdo. Expedir y revocar el Certificado de Alta Calidad en la Atención Integral a la Primera Infancia -AIPI-. <p>Parágrafo 1. La Secretaría Distrital de Integración Social será la encargada de definir los estándares de calidad básicos e indispensables para la operación del servicio. Así mismo, determinará los estándares requeridos para lograr la</p>

	<p>certificación de calidad y de alta calidad a corto, mediano y largo plazo.</p> <p>Parágrafo 2. Conforme con lo dispuesto en el Decreto 1075 de 2015, la Secretaría de Educación del Distrito expedirá las licencias de funcionamiento para las instituciones y/o establecimientos que presten sus servicios bajo el ámbito de educación formal en el nivel preescolar.</p> <p>Parágrafo 3. Las instituciones o establecimientos que presten simultáneamente el servicio de educación inicial bajo el enfoque de Atención Integral a la Primera Infancia - AIPI- y bajo la educación formal en uno o más grados del preescolar, serán regulados y vigilados de manera conjunta y articulada por la Secretaría de Educación del Distrito y la Secretaría Distrital de Integración Social.</p>
<p>ARTÍCULO TERCERO. La expedición de la licencia de funcionamiento de que trata el artículo primero del presente acuerdo, exigirá que se reúnan las condiciones relacionadas con niveles de atención, ubicación, infraestructura, proceso pedagógico, proceso nutricional, recurso humano y seguridad y salubridad, que se indican a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Niveles. Los Jardines Infantiles deberán atender a los niños y niñas según su edad, con criterios pedagógicos diferenciados, en los siguientes niveles: <ol style="list-style-type: none"> a. Materno: De cero a menor de un año b. Caminadores: De uno a menor de dos años. c. Párvulos: De dos a menor de tres años. d. Prejardín: De tres a menor de cuatro años. e. Jardín: De cuatro a menor de seis años. 2. Ubicación. Sin perjuicio de lo establecido en el POT, en especial de lo contenido en el artículo noveno, los Jardines Infantiles no podrán estar ubicados en los puntos de concentración de riesgo definidos por la Administración Distrital. 3. Infraestructura. Además de dar aplicación a las normas establecidas por el ICONTEC en NSR -98, NTC 4595 Y NTC 9596 y a lo contemplado en la Ley 400 de 1997, Decretos 33 de 1998 y 34 de 1999, los Jardines Infantiles deberán cumplir con las siguientes especificaciones: <ol style="list-style-type: none"> a. Dos metros cuadrados construidos por niño o niña atendidos. b. Edificación que cuente con patio interior o que se encuentre cerca de un parque o zona verde. c. Adecuación de escaleras con pasamanos y protección del acceso a escaleras. d. Mínimo una unidad sanitaria por cada 20 niños o niñas. e. Mínimo una unidad sanitaria para los adultos. f. La cocina o área de preparación de alimentos debe estar aislada de los salones de actividades de niños y niñas. Sus condiciones de seguridad deberán estar certificadas por el Cuerpo de Bomberos. g. No se permitirá el uso de combustibles líquidos. h. Si la edificación es de dos pisos, los niños y niñas de párvulos, prejardín y jardín deberán ubicarse en el primer piso. 	SIN MODIFICACIÓN

i. Si el inmueble cuenta con terraza, en ningún caso esta podrá ser habilitada como zona de recreo o actividades de los niños o niñas de párvulos, prejardín y jardín.

4. Proceso pedagógico. El proceso pedagógico garantizará el cuidado calificado, el ejercicio de los derechos y deberes de los niños y las niñas y la promoción del desarrollo infantil.

5. Proceso nutricional. Todos los Jardines Infantiles deberán garantizar un adecuado nivel nutricional mediante el suministro de complementación alimentaria. Deberán adelantar vigilancia nutricional y promoverán buenos hábitos alimenticios y de vida saludable. En todos los casos las minutas patrón las definirá el DABS, de acuerdo con los parámetros establecidos por la Secretaría de Salud en lo que a requerimientos nutricionales se refiere.

6. Seguridad y salubridad: Los Jardines Infantiles desarrollarán actividades y destinarán recursos a la protección de la integridad física de los niños y las niñas y demás integrantes del Jardín Infantil. El Jardín Infantil deberá observar todo lo dispuesto en el Decreto 332 de 2004 "por el cual se organiza el régimen y el sistema para la prevención y atención de emergencias en Bogotá y se dictan otras disposiciones", en especial lo contenido en el artículo decimosexto, relacionado con la responsabilidad de realizar o exigir análisis de riesgos, planes de contingencia y medidas de prevención y mitigación obligatorios.

7. Recurso humano: Los Jardines Infantiles privados garantizarán que las personas que desarrollan actividades en los mismos, sean vinculadas de conformidad con las disposiciones legales.

a. Se tendrá como mínimo por cada 20 niños o niñas, un licenciado en pedagogía infantil, licenciado en preescolar, tecnólogo en preescolar, normalista superior y/o bachiller pedagógico o formación afín.

b. Los jardines infantiles adoptarán las medidas necesarias que garanticen

la idoneidad de las personas que se vinculen en actividades administrativas y pedagógicas, cocina, celaduría y otros, las cuales deberán observar respeto por el buen trato y la dignidad de los niños y las niñas.

c. Por lo menos un profesional del jardín infantil deberá hacer curso de primeros auxilios en una entidad de reconocida idoneidad.

d. Los jardines infantiles existentes que a la fecha de la reglamentación de este acuerdo no cuenten con la calificación técnica exigida, deberán en el término de un año formar al personal mediante un curso de atención integral al preescolar.

PARÁGRAFO 1: Los Jardines que tengan nivel de materno, deberán contar con un espacio diferenciado y adecuado para la atención de los niños y las niñas de ese nivel. De igual manera, con el personal idóneo para el servicio.

PARÁGRAFO 2: El Jardín infantil deberá contar con un directorio de instituciones para la atención de emergencias. Así mismo, deberá informar a las autoridades locales de la existencia de la institución: La alcaldía local, la personería local, el hospital, la estación de policía y la estación de bomberos; estas instituciones deberán establecer una agenda de trabajo y protocolos de emergencia.

ARTÍCULO CUARTO.- Las entidades del Gobierno Distrital y del orden nacional con jurisdicción en Bogotá, no podrán construir infraestructura para la atención protección y	PROPUESTA DE SUPRESIÓN DEL ARTÍCULO CUARTO DEL ACUERDO 138 DE 2004.
cuidado de niños menores de seis años, con estándares de calidad inferiores a los definidos en el convenio tripartito celebrado entre las Cajas de Compensación Familiar, el ICBF y el DABS, que creó la Red de Jardines Sociales del Distrito.	ARTÍCULO 4. Se propone suprimir el Artículo 4 del Acuerdo Distrital 138 de 2004, toda vez que la regulación aquí definida es para estricto cumplimiento de instituciones o establecimientos tanto públicos como privados que presten el servicio de educación inicial en el Distrito Capital.
ARTÍCULO QUINTO. A partir de la reglamentación del presente acuerdo, los jardines infantiles que operan en Bogotá tendrán el término de un año para tramitar la licencia de funcionamiento. La administración distrital establecerá estímulos para los jardines infantiles de los estratos 1 y 2 que den cumplimiento a lo preceptuado en este Acuerdo.	PROPUESTA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO QUINTO DEL ACUERDO 138 DE 2004. ARTÍCULO 5. Modifíquese el artículo 5 del Acuerdo Distrital 138 de 2004, el cual quedará así: ARTÍCULO 5. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. Los establecimientos que actualmente prestan el servicio de educación inicial bajo el enfoque Atención Integral a la Primera Infancia -AIPI- tendrán un plazo máximo de 12 meses a partir de la expedición del presente acuerdo para obtener el certificado de Calidad y de Alta Calidad. Los establecimientos nuevos que entren en operación a partir de la expedición del presente acuerdo y que presten el servicio de educación inicial bajo el enfoque AIPI tendrán un plazo de 18 meses, contados a partir de su inscripción en el SIRSS, para obtener el certificado de Calidad y de Alta Calidad.
ARTÍCULO SEXTO. Exceptuase de lo previsto en el presente acuerdo, los Hogares Comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (HOBIS). El Alcalde Mayor de Bogotá en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de acuerdo con la ley, establecerá los requisitos mínimos para el adecuado funcionamiento de los Hogares de Bienestar Familiar (HOBIS) que funcionan en Bogotá.	SIN MODIFICACIÓN
	ARTÍCULO NUEVO ARTÍCULO 6. INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL. Para efectos del seguimiento en la calidad del servicio de educación inicial en Bogotá D.C., las funciones de inspección, vigilancia y control se ejercerán de la siguiente forma: <ul style="list-style-type: none"> • La Secretaría Distrital de Integración Social ejercerá las funciones de inspección, vigilancia y control para servicios con el enfoque exclusivo de Atención Integral para la Primera Infancia –AIPI. • La Secretaría de Educación del Distrito ejercerá las funciones de inspección, vigilancia y control para las instituciones que atiendan bajo el enfoque de Educación Formal. • Ambas secretarías ejercerán la inspección, vigilancia y control conjunta a los establecimientos que presten simultáneamente el servicio de educación inicial con enfoque AIPI y educación formal en los grados de preescolar y más niveles.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El presente acuerdo rige a partir de la fecha de publicación.	SIN MODIFICACIÓN

Cordialmente,

ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

Concejal de Bogotá Partido Liberal colombiano

ROCÍO DUSSÁN PÉREZ

Concejala de Bogotá

Partido Polo Democrático Alternativo

MARÍA CLARA NAME

Concejala de Bogotá Partido Alianza Verde

PROYECTO DE ACUERDO NO 238 DE 2025

PRIMER DEBATE

POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO DISTRITAL 138 DE 2004 “POR MEDIO DEL CUAL SE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución Política y en especial las atribuciones constitucionales y legales, conferidas en el numeral 1o del artículo 313 de la Constitución Política y el numeral 1o del Decreto Ley 1421 de 1993

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. Modifíquese el artículo 1 del Acuerdo Distrital 138 de 2004, el cual quedará así:

ARTÍCULO 1. OBJETO. El presente acuerdo tiene como propósito regular la inscripción, el registro y el funcionamiento de los establecimientos públicos y privados que prestan el servicio educativo en el marco de la educación inicial bajo el enfoque de Atención Integral a la Primera Infancia -AIPI-.

ARTÍCULO 2. Créese un artículo nuevo, el cual quedará de la siguiente manera:

ARTÍCULO 2. DEFINICIONES: Para efectos del presente Acuerdo y su reglamentación se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

Educación inicial: La educación inicial es un derecho de los niños y niñas menores de seis (6) años de edad. Se concibe como un proceso educativo y pedagógico intencional, permanente y estructurado, a través del cual los niños y las niñas desarrollan su potencial, capacidades y habilidades en el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, contando con la familia como actor central de dicho proceso. Su orientación política y técnica, así como su reglamentación está a cargo del Ministerio de Educación Nacional y se hará de acuerdo con los principios de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre.

Educación formal: Aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas

curriculares progresivas, y conducente a grados títulos. La educación formal se integra por tres niveles: Preescolar, educación básica (primaria y secundaria) y educación media.

Educación Preescolar: La educación preescolar corresponde a la ofrecida para el desarrollo de los niños y niñas en los aspectos biológico, cognoscitivo, psicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas. Comprende los grados de prejardín, jardín y transición.

Enfoque Atención Integral a la Primera Infancia -AIPI-: Es aquel dirigido a niños y niñas entre los cero y los seis años, que tiene por objeto garantizar las condiciones para fortalecer sus procesos de desarrollo integral a través de los estructurantes de la atención integral: el cuidado y la crianza, la salud, la alimentación y la nutrición; la educación inicial; la recreación; el ejercicio de la ciudadanía y la participación.

Sistema de Información y Registro de los Servicios Sociales (SIRSS): Es la herramienta para el registro de los establecimientos que tengan a su cargo o deseen prestar servicios sociales que han sido reglamentados por el Distrito Capital.

Certificado de calidad: Se entenderá como certificado de calidad aquel que se obtiene por parte de un establecimiento que presta el servicio de educación inicial bajo el enfoque de Atención Integral a la Primera Infancia - AIPI-, al cumplir la totalidad de los requisitos indispensables y básicos para su funcionamiento.

Inspección: Es la facultad de solicitar y/o verificar información o documentos en poder de las entidades sujetas a control.

Vigilancia: Seguimiento y evaluación de las actividades de la entidad vigilada.

Control: Corresponde a la posibilidad de que la autoridad ponga en marcha correctivos, lo cual puede producir la revocatoria de la decisión del controlado o la imposición de sanciones.

ARTÍCULO 3. Modifíquese el artículo 2 del Acuerdo Distrital 138 de 2004, el cual quedará de la siguiente manera:

ARTÍCULO 2. INSCRIPCIÓN, LICENCIA Y FUNCIONAMIENTO. Para la adecuada operación de los establecimientos que prestan el servicio de educación inicial bajo el enfoque de Atención Integral a la Primera Infancia -AIPI- del que trata el artículo 1º del presente acuerdo, la Administración Distrital, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, llevará a cabo las siguientes acciones:

- i) Expedir y cancelar el número de inscripción en el Sistema de Información y Registro de Servicios Sociales -SIRSS-.
- ii) Expedir y revocar el Certificado de Calidad en la Atención Integral a la Primera Infancia -AIPI-.
- iii) Expedir y revocar la licencia de funcionamiento y controlar la adecuada operación de las instituciones de que trata el artículo primero del presente acuerdo.
- iv) Expedir y revocar el Certificado de Alta Calidad en la Atención Integral a la Primera Infancia -AIPI-.

Parágrafo 1. La Secretaría Distrital de Integración Social será la encargada de definir los estándares de calidad básicos e indispensables para la operación del servicio. Así mismo, determinará los estándares requeridos para lograr la certificación de calidad y de alta calidad a corto, mediano y largo plazo.

Parágrafo 2. Conforme con lo dispuesto en el Decreto 1075 de 2015, la Secretaría de Educación del Distrito expedirá las licencias de funcionamiento para las instituciones y/o establecimientos que presten sus servicios bajo el ámbito de educación formal en el nivel preescolar.

Parágrafo 3. Las instituciones o establecimientos que presten simultáneamente el servicio de educación inicial bajo el enfoque de Atención Integral a la Primera Infancia -AIPI- y bajo la educación formal en uno o más grados del preescolar, serán regulados y vigilados de manera conjunta y articulada por la Secretaría de Educación del Distrito y la Secretaría Distrital de Integración Social.

ARTÍCULO 4. Se propone suprimir el Artículo 4 del Acuerdo Distrital 138 de 2004, toda vez que la regulación aquí definida es para estricto cumplimiento de instituciones o establecimientos tanto públicos como privados que presten el servicio de educación inicial en el Distrito Capital.

ARTÍCULO 5. Modifíquese el artículo 5 del Acuerdo Distrital 138 de 2004, el cual

quedará así:

ARTÍCULO 5. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. Los establecimientos que actualmente prestan el servicio de educación inicial bajo el enfoque Atención Integral a la Primera Infancia -AIPI- tendrán un plazo máximo de 12 meses a partir de la expedición del presente acuerdo para obtener el certificado de Calidad y de Alta Calidad. Los establecimientos nuevos que entren en operación a partir de la expedición del presente acuerdo y que presten el servicio de educación inicial bajo el enfoque AIPI tendrán un plazo de 18 meses, contados a partir de su inscripción en el SIRSS, para obtener el certificado de Calidad y de Alta Calidad.

ARTÍCULO 6. Créese un artículo nuevo, el cual quedará de la siguiente manera:

ARTÍCULO 6. INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL. Para efectos del seguimiento en la calidad del servicio de educación inicial en Bogotá D.C., las funciones de inspección, vigilancia y control se ejercerán de la siguiente forma:

- La Secretaría Distrital de Integración Social ejercerá las funciones de inspección, vigilancia y control para servicios con el enfoque exclusivo de Atención Integral para la Primera Infancia –AIPI.
- La Secretaría de Educación del Distrito ejercerá las funciones de inspección, vigilancia y control para las instituciones que atiendan bajo el enfoque de Educación Formal.
- Ambas secretarías ejercerán la inspección, vigilancia y control conjunta a los establecimientos que presten simultáneamente el servicio de educación inicial con enfoque AIPI y educación formal en los grados de preescolar y más niveles.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PROYECTO DE ACUERDO NO 239 DE 2025**PRIMER DEBATE****"POR EL CUAL SE IMPLEMENTAN LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACIÓN DE CARTERA A CARGO DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL (IPES) EN BENEFICIO DE VIVANDEROS, VIVANDERAS Y COMERCIANTES DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLAZAS DE MERCADO, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"****1. OBJETO DEL PROYECTO**

El objeto del presente Acuerdo es adoptar las disposiciones del Artículo 121 y 270 del Plan Distrital de Desarrollo que busca garantizar “la eficiencia institucional en materia de depuración y saneamiento de la cartera a su cargo y el fortalecimiento del sistema distrital de plazas de mercado, así como la ejecución del Manual PA04-MN- 002 del IPES, en lo que tiene que ver con la depuración de cartera de los vivanderos y vivanderas de Bogotá, respecto a las deudas que tienen con la Administración Distrital por el uso y destinación del espacio público en las distintas plazas distritales de mercado.

2. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa no cuenta con antecedentes y es presentada por primera vez para su estudio y aprobación a la Corporación. No obstante, resulta pertinente señalar que existen iniciativas relacionadas con la materia objeto de estudio, como se detalla a continuación:

- Acuerdo Distrital 257 de 2006 Concejo de Bogotá D.C. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”

El Artículo 79 que trata sobre las funciones del Instituto para la Economía Social (IPES), establece un marco normativo que incorpora de manera explícita a las plazas de mercado del Distrito Capital como parte de sus competencias fundamentales. Según el literal d, se otorga al IPES la función de administrar las plazas de mercado en articulación con políticas públicas transversales, tales como el desarrollo económico, la promoción cultural y el ordenamiento del espacio público; fortaleciendo así su rol como actor clave en la economía social del Distrito Capital en concordancia con la política de abastecimiento alimentario distrital, reconociendo su importancia estratégica como centros de distribución y acceso a alimentos para la población.

- Acuerdo Distrital 877 de 2023 Concejo de Bogotá D.C. “Por medio del cual se formulan lineamientos para la política pública para las plazas distritales de mercado del distrito capital y se dictan otras disposiciones”

El Artículo 6 establece un mecanismo para la regularización y manejo de la cartera de los vivanderos en las Plazas Distritales de Mercado, al facultar a la Administración Distrital para diseñar e implementar convenios o planes de pago que permitan a los deudores legalizar el uso de los

espacios que ocupan. Este artículo reconoce la importancia de facilitar procesos de formalización contractual o administrativa, promoviendo la inclusión de los vivanderos en la economía formal mediante alternativas que consideren su capacidad de pago.

3. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente Acuerdo, pretende motivar e incentivar la economía social de los vivanderos , vivanderas y comerciantes, a través de una serie de estímulos, prerrogativas, condonaciones y medidas que depuren la cartera que se tiene por el uso y destinación del espacio público en las distintas plazas de mercado (cupos, locales, mostradores, restaurantes, bodegas etc); esto, en atención a que, de manera reiterada, dichos comerciantes denunciaron que “...durante la pandemia, la mayoría (...) no recibieron ningún tipo de ayuda”

En Bogotá D.C., existen 19 plazas de mercado que se discriminan así:

- Plaza de mercado 12 de octubre. Calle 72 #39-62 - Barrios Unidos.
- Plaza de mercado 20 de Julio. Carrera 6 #24-60 Sur- San Cristóbal.
- Plaza de mercado 7 de agosto. Calle 66 #23-30 - Barrios Unidos.
- Plaza de mercado Boyacá. Calle 68B #73A-44 - Engativá.
- Plaza de mercado El Carmen. Diagonal 49A #29-15 sur - Tunjuelito.
- Plaza de mercado Fontibón. Carrera 103 #26-71- Fontibón.
- Plaza de mercado Kennedy. Calle 42S #81A-50- Kennedy.
- Plaza de mercado La Concordia. Calle 14 #1-40- Candelaria.
- Plaza de mercado La Perseverancia. Carrera 5A #30-30 -Santa Fe.
- Plaza de mercado Las Cruces. Calle 1AF #4-60- Santa Fe.
- Plaza de mercado Las Ferias. Calle 74B #69Q-35- Engativá.
- Plaza de mercado Lucero. Carrera 17F #69A-50 Sur- Ciudad Bolívar.
- Plaza de mercado Quirigua. Calle 90 #91-51- Engativá.
- Plaza de mercado Restrepo. Carrera 19 #18-51 Sur- Antonio Nariño.
- Plaza de mercado Samper Mendoza. Carrera 25 #22A-13- Mártires.
- Plaza de mercado San Benito. Carrera 17 #56A-18 Sur - Tunjuelito.
- Plaza de mercado San Carlos. Carrera 19C #50A-90 Sur- Tunjuelito.
- Plaza de mercado Santander. Calle 26 Sur #30-51 -Antonio Nariño.
- Plaza de mercado Trinidad Galán. Carrera 60 #5-00. Puente Aranda.

La población de las plazas de mercado, según el Decreto 546 de 2022, se componen por agricultores, indígenas campesinos y artesanos; ello, sin contar que muchos tienen su residencia y/ domicilio en lugares circunvecinos que los ata no solo por su actividad u oficio, sino porque encuentran un arraigo con el sector en donde se encuentran cada una de las plazas de mercado distribuidas en las 20 localidades de la ciudad en donde se “...reúnen 3.999 puestos aproximadamente, de los cuales 3.077 están ocupados (77 %)”

Dada la importancia económica, pero, más de carácter social de la actividad que desarrollan los vivanderos, resulta claro, en la sabiduría del Concejo, que se deben tomar medidas para superar las obligaciones que en la actualidad presentan los comerciantes de las plazas de mercado con el Distrito; no hacerlo, implicaría una protesta que afectaría a todas las localidades en el orden social,

de movilidad, de abastecimiento de alimentos y seguridad alimentaria, económica y, en general, de orden público.

La actualidad económica de los vivanderos post pandemia, no es para nada halagüeña. Las medidas del gobierno nacional y distrital para la reactivación económica, luego de la recesión, los bloqueos y los paros, no fueron efectivas; esto, en atención a que las medidas, la gran mayoría, estuvieron dirigidas a las medianas y pequeñas empresas, no así para los comerciantes de las plazas de mercado, quienes, por costumbre, ni siquiera se encuentran en el panorama mercantil ya que no se encuentran registrados en la cámara de comercio de la ciudad, ni tienen certificados de existencia y representación legal de sus negocios, pues en muchos casos, sus locales no presentan razón social o nombre comercial.

Así por ejemplo, el programa Unidos por Colombia, del Fondo Nacional de Garantías (FNG), en el año 2021, logró llegar, en un año, a más de 616.000 empresas y trabajadores independientes, y, pese a contar con ocho líneas para respaldar las necesidades de los empresarios y trabajadores independientes, (...) y contar con liquidez para asumir los gastos de personal, costos fijos (arriendo, servicios públicos, etc.), entre otras obligaciones, no se tuvo en cuenta la población de comerciantes o vivanderos de las plazas de mercado

El Decreto 1422 dictó que entre el 15 y el 30 de noviembre se adelanta el pago de la prima de Navidad en el sector público, Gobierno Central; mediante el Decreto 444 del 21 de marzo de 2020, el Gobierno nacional creó el Fondo para la Mitigación de la Emergencia (FOME), buscó efectuar apoyos de liquidez al sector financiero; invertir en instrumentos de capital o deuda emitidos por empresas y entregar directamente financiamiento a empresas; proveer liquidez a la nación, ¿y, los vivanderos?, el Decreto 562 creó una inversión obligatoria temporal en títulos de deuda pública interna denominados Títulos de Solidaridad (TDS), cuyos recursos serán destinados a conjurar las consecuencias de la crisis: decreto sastre, hecho a la medida de los banqueros para endeudar al Estado.

En suma, el total de recursos que el Gobierno destinó para conjurar la crisis de la Covid-19 se resumen en la siguiente tabla:

Comoquiera que ninguno de los incentivos para la reactivación económica recayó en los vivanderos, se hace necesario crear uno que verse sobre las deudas que en la actualidad tiene este grupo de comerciantes con el Distrito en cabeza del IPES, en relación con los retrasos en el pago de “arriendos” que muchos tienen o en otros casos, aún sin título, pero que conservan la tenencia, han generado obligación por el uso de esos cupos, locales o bodegas en las distintas plazas, a través del denominado “Contrato de uso administrativo y aprovechamiento económico regulado”.

Dichas deudas son consideradas al tenor de lo dispuesto por la ley 1066 de 2006, que fijó normas para la normalización de la cartera pública, como deudas de carácter no tributario. En ese sentido, cada entidad está obligada a identificar los bienes, derechos y obligaciones que afecten el patrimonio público y a recopilar la documentación suficiente y pertinente para su correspondiente depuración, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016, que determinó la obligación de todas las entidades territoriales de adelantar el proceso de depuración contable, con base en lo cual la Contaduría General de la Nación, mediante las resoluciones 193

de 2016 y 107 de 2017 , emitió los lineamientos por seguir en los procesos de depuración contable para entidades públicas, señalando el procedimiento para la evaluación del control interno contable vigente.

Asimismo, esta propuesta se sustenta básicamente en la Sentencia C-511 de 1996 que permite las medidas exonerativas de orden económico o fiscal en casos excepcionales y en la Ley 901 de 2004 que establece las condiciones en que las entidades públicas pueden llevar a cabo depuración de saldos contables; donde la Sentencia C-511 de 1996 determina que "Las amnistías o saneamientos consagrados, en principio son inconstitucionales. Lo anterior no es óbice para que, en situaciones excepcionales, puedan adoptarse medidas exonerativas de orden económico o fiscal debidamente justificadas que contrarresten los efectos negativos que puedan gravar de una manera crítica al fisco, reducir sustancialmente la capacidad contributiva de sus deudores o deprimir determinados sectores de la producción."

PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL

Bajo ese panorama, el Plan de Desarrollo Distrital vigente, estableció en su artículo 270 la obligación de las entidades distritales de depurar su cartera de cualquier índole y en cualquiera de sus etapas de cobro, con fundamento, entre otros, en la eficiencia resultante de la relación costo-beneficio, así:

"Artículo 270. Depuración de cartera. En términos de eficiencia institucional y siguiendo los criterios legales vigentes, en materia de prescripción, remisión de deudas, pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo o por la inexistencia probada del deudor o su insolvencia demostrada, en virtud de los cuales no sea posible ejercer los derechos de cobro o bien porque la relación costo-beneficio al realizar su cobro no resulta eficiente, las entidades distritales deberán realizar acciones de depuración y saneamiento de la cartera a su cargo de cualquier índole en cualquiera de las etapas del cobro persuasivo y coactivo, mediante el castigo de la misma, realizando un informe detallado de las causales por las cuales se depura y las excluirá de la gestión."

A su vez, en su Artículo 121, el Plan de Desarrollo plantea el fortalecimiento del Sistema Distrital de Plazas de Mercado, implementando acciones y gestiones encaminadas a la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial y la identidad cultural en la ciudad y de fortalecimiento de los procesos organizativos para el desarrollo sostenible y sustentable de estos espacios.

PROCEDIMIENTO PARA LA DEPURACIÓN DE CARTERA

El Instituto Para La Economía Social – IPES, mediante el documento "Código: PR-125" del 30 de diciembre de 2020, definió "...el procedimiento para la depuración de la cartera con el fin de dejar como disponible para el cobro únicamente aquellas acreencias con mayores posibilidades de recuperación, en una relación costo-beneficio, en los términos que autoriza la ley."; esto, con fundamento en el Manual de Recaudo y Gestión de Cartera.

En dicho documento se definió el Contrato de uso administrativo y aprovechamiento económico regulado, así: "Acuerdo de voluntades generador de derechos y obligaciones entre el comerciante en plaza de mercado distrital y el IPES, mediante el cual se le otorga al comerciante el uso de puesto, local o bodega existente y debidamente identificado, con destino a la venta de víveres,

alimentos y demás especies permitidas en el presente reglamento y en el respectivo contrato.” Y, en dicho procedimiento, se fijó la ruta para la depuración de cartera en el IPES:

Visto así el procedimiento, resulta procedente adoptar y/o adecuar la depuración de cartera de que trata el nuevo Plan de Desarrollo Distrital, adoptado por el distrito en el Acuerdo 927 de 2024 a lo ya establecido en el Manual de Recaudo y Gestión de Cartera PA04-MN- 002 del IPES y el propio documento “Código: PR-125” del 30 de diciembre de 2.020 habida cuenta que la reactivación económica es una realidad que no ha fenecido y, comoquiera que los vivanderos, aún cuentan con obligaciones que vienen cobrándose desde hace ya varios años, lo propio es sanear la cartera que el IPES tiene con estos comerciantes y, con ello, otorgar un alivio eficaz que contribuya de manera real al desarrollo económica y la reactivación de la economía de los vivanderos para tal efecto, el presente Acuerdo dicta los lineamientos que regulen la extinción de todas las obligaciones contenidas en los contratos de uso administrativo y aprovechamiento económico suscritos por vivanderos, vivanderas y comerciantes con el distrito a través del IPES; esto, en atención a que el recaudo, normalización y cobro de cartera se hace inane en la medida que la capacidad de pago de dicho grupo poblacional hace que se haga imposible la satisfacción de los créditos que se desprenden del uso o tenencia de los cupos, locales o bodegas que fueron entregados en virtud de la celebración de los contratos de uso administrativo y aprovechamiento económico de igual modo, será obligación que todos vivanderos, vivanderas y comerciantes, a partir del presente acuerdo cuenten con contratos de uso administrativo y aprovechamiento económico; en ese entendido, no será admisible el uso y goce y/o tenencia de ningún cupo, local y/o bodega que no tenga justo título para poderlo explotar en las distintas plazas de mercado mencionadas con antelación.

Por esta razón, es importante tener en cuenta, además, que, en el año 2020, se expidió la Resolución 267 «por medio de la cual se deroga la Resolución 018 de 2017 y la Resolución 620 de 2019; y se expide el reglamento Administrativo, Operativo y de Mantenimiento de las Plazas de Mercado del Distrito Capital de Bogotá».

Esta norma produjo un profundo rechazo entre las vivanderas, vivanderos y comerciantes de las plazas de mercado, por un lado, porque no contó con una adecuada socialización y, por el otro, por no permitir la participación incidente y por desconocer abiertamente las particularidades, tradición y esencia de las plazas, permitiendo su comercialización abierta, por ejemplo, para que grandes grupos económicos accedieran a ellas.

Resistencia que ocasionó la negativa a suscribir los contratos de uso administrativo y aprovechamiento económico que se les pretendían imponer, pese a la presión y amenaza de recuperación del espacio público por parte de la Administración por vía policiva. Esto, debido a que la consecuencia de estas resoluciones fue el aumento desmedido de los costos para el uso y aprovechamiento del espacio público de casi imposible cumplimiento haciéndolos impagables, lo cual vienen sufriendo hoy en día muchas de las personas que sí suscribieron dicho contrato.

Esto venía de la mano con la cantidad de papeles y requisitos para acceder a un módulo, en especial para las personas que son sujetos de especial protección constitucional (madres solteras, personas en situación de discapacidad, adultos mayores, etc.); La mencionada resolución fue rechazada en ese sentido, ya que solo una persona o empresa con bastante solvencia podría cumplir con esos requisitos. Además, se permitía incluso la prestación de servicios financieros en las plazas de

mercado, lo cual hacía como estaba formulado que muchas de las personas que históricamente han estado en estos espacios debieran salir.

Por lo anterior, durante el final del periodo de la Alcaldía de Claudia López y el comienzo del mandato de Carlos Fernando Galán se desarrolla una negociación, con cierta resistencia por parte de la Administración habida cuenta de las restricciones de orden normativo que se establecen en el Decreto 493 de 2023, es decir, el reglamento para el uso y aprovechamiento del espacio público. Pues bien, este año se expidió una nueva norma que lo reemplaza, el Decreto 315 de 2024 y, en nuestra opinión, su redacción abre una ventana de oportunidad de la siguiente manera:

Dado que el artículo 19 de este decreto le ordena a cada una de las entidades gestoras del espacio público expedir un protocolo en el que se regulen las particularidades de cada espacio, se rompe el encierro normativo que había generado el Decreto 493 de 2023 y la expedición de este nuevo protocolo, mandado que fuera reiterado en el artículo 34 de la norma, y se convierte en una nueva oportunidad de concertación con las vivanderas, vivanderos y comerciantes de las plazas.

En el artículo 7 se establece que las autorizaciones de aprovechamiento económico del espacio público deben velar porque cada elemento de este se utilice para los propósitos para los que fue destinado. Ese mandato se reitera como deber de las entidades gestoras en el numeral 18.6 del artículo 18.

Por lo menos hay una barrera en principios normativos frente a la pretensión de la administración pasada de abrir las plazas de mercado a grandes conglomerados económicos.

El artículo 20 de la norma establece que en el protocolo que cada entidad expida se puede reglamentar de manera autónoma el término de duración de la autorización de aprovechamiento del espacio público, con lo que se supera una de las principales barreras que establecía la anterior regulación: la duración máxima de 1 año.

Otro escollo que se había presentado en el diálogo entre las y los comerciantes y la Administración eran las variables que hacían parte de la fórmula de retribución, lo cual eleva el costo de arrendamiento de los módulos en las plazas. Ahora, el artículo 29 le da absoluta libertad a cada entidad gestora para definir esa fórmula, más aún, el artículo 33 establece la posibilidad de formular retribuciones diferenciales en las plazas de mercado.

Situaciones que se están gestando en un espacio de negociación con las vivanderos, vivanderos y comerciantes y del cual se prevé la generación de un instrumento de normalización que subsane las irregularidades históricas en la relación entre las y los comerciantes y la administración.

Así las cosas, es importante que se articule la presente iniciativa, con la concertación de dicho protocolo y de esta manera se facilite el tránsito a la total formalización.

4. MARCO JURÍDICO DE LA INICIATIVA

MARCO INTERNACIONAL

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

ODS 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Meta 8.3 “Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros”.

CONVENIOS INTERNACIONALES DEL TRABAJO - Adoptados por la Ley 23 de 1967 “Por la cual se aprueban varios Convenios Internacionales del Trabajo, adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo en las Reuniones 14ª (1930), 23ª (1937), 30ª (1947), 40ª (1957) y 45ª (1961)”

La Organización Internacional del Trabajo -O.I.T.-, ha procurado generar en los Estados miembros un entorno normativo dedicado a proteger la economía informal, donde determina que esta se tenga en cuenta junto con las categorías de trabajadores que no son empleados, afirmando que la administración del trabajo debería abarcarlos progresivamente. El artículo 7º del mencionado Convenio establece:

“A fin de satisfacer las necesidades del mayor número posible de trabajadores, cuando lo exijan las condiciones nacionales, y en la medida en que la administración del trabajo no haya abarcado ya estas actividades, todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá promover, gradualmente si fuera necesario, la ampliación de las funciones del sistema de administración del trabajo, a fin de incluir actividades, que se llevarían a cabo en colaboración con otros organismos competentes, relativas a las condiciones de trabajo y de vida profesional de determinadas categorías de trabajadores que, a efectos jurídicos, no se pueden considerar personas en situación de empleo, tales como:

(...)

(d) las personas que trabajan según pautas establecidas por la costumbre o las tradiciones comunitarias.”

Dicho esto, la Corte Constitucional de Colombia hace una interpretación de acuerdo con el derecho al trabajo del que deben gozar los vendedores informales, y determina lo siguiente:

“(…) las actividades de subsistencia de los vendedores informales, pretermitiendo la calidad de sujetos de especial protección por su condición de vulnerabilidad económica, sin que se advierta una justificación suficiente para el establecimiento de medidas policiales discriminatorias que desconocen la jurisprudencia constitucional.

(...)

La ponderación entre el derecho al espacio público y el derecho al trabajo de los vendedores informales supone tener en cuenta que estos son considerados sujetos de especial protección debido a la condición de vulnerabilidad social y económica.”

MARCO NACIONAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Artículo 1. “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.

Artículo 13. “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

(...)”.

Artículo 25. “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.”

Artículo 88. “La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.

(...)”

Artículo 209. “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.

Artículo 313. “Corresponde a los concejos.

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio.
2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas.

(...)”

Artículo 334. “(...) El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores

ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones (...).

La sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público, dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica.”

LEYES

Ley 29 de 1963

“Por la cual se derogan unas exenciones de impuestos”

Artículo 1. “Los patrimonios y las rentas de los Municipios y del Distrito Especial de Bogotá son de su propiedad exclusiva y gozan de las mismas garantías que los de los particulares. En consecuencia, sólo los Concejos Municipales y el Concejo Distrital podrán decretar exenciones o exoneraciones de los impuestos o contribuciones que por la Constitución, la ley y las ordenanzas les corresponden (...)”

Ley 14 de 1983

“Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”

Artículo 38. “Los municipios sólo podrán otorgar exenciones de impuestos municipales por plazo limitado, que en ningún caso excederá de diez años, todo de conformidad con los planes de desarrollo municipal.”

Ley 901 de 2004

“Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 716 de 2001, prorrogada y modificada por la Ley 863 de 2003 y se modifican algunas de sus disposiciones”

Artículo 4. Depuración de saldos contables. “Las entidades públicas llevarán a cabo las gestiones necesarias que permitan depurar los valores contables que resulten de la actuación anterior, cuando corresponda a alguna de las siguientes condiciones:

(...)

f) Cuando evaluada y establecida la relación costo beneficio resulte más oneroso adelantar el proceso de que se trate;

(...)

Parágrafo 1°. Para efectos del cumplimiento de lo dispuesto en esta ley, las entidades podrán contratar la realización del proceso de depuración contable con contadores públicos, firmas de contadores o con universidades que tengan facultad de contaduría pública debidamente reconocida por el Gobierno Nacional.

(...)"

Ley 1066 de 2006

"Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones"

Artículo 2. "Obligaciones de las entidades públicas que tengan cartera a su favor. Cada una de las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado y que dentro de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos del nivel nacional o territorial deberán:

1. Establecer mediante normatividad de carácter general, por parte de la máxima autoridad o representante legal de la entidad pública, el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, el cual deberá incluir las condiciones relativas a la celebración de acuerdos de pago.

(...)"

Artículo 19. "Para efecto de los procesos de saneamiento contable de las cuentas por cobrar, de cartera y asimiladas, las entidades públicas destinatarias de la presente ley, podrán contratar con firmas auditoras de reconocida experiencia y que cumplan con los parámetros que para tal efecto defina el Gobierno Nacional, para que estas revisen, validen y emitan concepto sobre la gestión adelantada frente a cada obligación y, en consecuencia, sobre la procedencia de adoptar las recomendaciones de saneamiento".

DECRETOS

Decreto 4473 de 2006

"Por el cual se reglamenta la Ley 1066 de 2006"

Artículo 1. Reglamento interno del recaudo de cartera. "El reglamento interno previsto en el numeral 1 del artículo 2° de la Ley 1066 de 2006, deberá ser expedido a través de normatividad de carácter general, en el orden nacional y territorial por los representantes legales de cada entidad".

Artículo 2. Contenido mínimo del reglamento interno del recaudo de cartera. "El Reglamento Interno del Recaudo de Cartera a que hace referencia el artículo 1° del presente decreto deberá contener como mínimo los siguientes aspectos:

1. Funcionario competente para adelantar el trámite de recaudo de cartera en la etapa persuasiva y coactiva, de acuerdo con la estructura funcional interna de la entidad.
2. Establecimiento de las etapas del recaudo de cartera, persuasiva y coactiva.

3. Determinación de los criterios para la clasificación de la cartera sujeta al procedimiento de cobro coactivo, en términos relativos a la cuantía, antigüedad, naturaleza de la obligación y condiciones particulares del deudor entre otras”.

RESOLUCIONES

Resolución 193 de 2016

“Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable”

Artículo 1. “Incorpórese, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable, con el fin de medir la efectividad de las acciones mínimas de control que deben realizar los responsables de la información financiera de las entidades públicas y garantizar, razonablemente, la producción de información financiera con las características fundamentales de relevancia y representación fiel, definidas en el marco conceptual del marco normativo que le sea aplicable a la entidad, de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública. El Procedimiento para la evaluación del control interno contable quedará como se indica en el anexo de la presente Resolución”.

MARCO DISTRITAL

DECRETOS

Decreto 397 de 2011

“Por el cual se establece el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”

Artículo 4. Competencias para ordenar la depuración contable y saneamiento de cartera. “Para ordenar la depuración contable y saneamiento de cartera y en los casos en que se determine su difícil cobro o cuando se compruebe que la relación costo-beneficio para la determinación y/o cobro sea desfavorable para las finanzas distritales en el Sector Central y en las Localidades, son competentes los siguientes servidores, conforme a la estructura de cada entidad u organismo:

(...)

c) En las entidades de la Administración Central, la competencia funcional para ordenar la depuración contable y saneamiento de cartera originada en conceptos diferentes a impuestos distritales es de los (as) Secretarios (as) de Despacho, los (as) Directores (as) de Departamento Administrativo y de Unidades Administrativas Especiales sin personería jurídica o sus delegados del nivel directivo, previo análisis y recomendación del Comité que para el efecto se conforme”.

Decreto 556 de 2021

“Por medio del cual se adopta el Plan Maestro de Acciones Judiciales para la Recuperación del Patrimonio del Distrito Capital”

Artículo 20. Responsabilidades de los Comités de Conciliación de las entidades y organismos distritales. “Los Comités de Conciliación de las entidades y organismos distritales, en el marco de las funciones de diseñar las políticas generales para la orientación de la defensa de los intereses de la entidad y fijar directrices institucionales para la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, tales como la transacción y la conciliación (...)”

Decreto 315 de 2024

“Por medio del cual se reglamentan los artículos 147 y 549 del Decreto Distrital 555 de 2021, en lo que tiene que ver con el aprovechamiento económico del espacio público y la explotación económica de la infraestructura pública en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones”

Artículo 1. Objeto. “Reglamentar el aprovechamiento económico del Espacio Público y la explotación económica de la infraestructura pública en el Distrital Capital, así como, prevenir su ocupación indebida, con el propósito de garantizar su integridad, y asegurar su uso, goce, disfrute y beneficio por parte de la ciudadanía, en consonancia con los principios de acceso universal e igualdad de oportunidades, a través de:

1.1 El aprovechamiento de los elementos constitutivos y complementarios del espacio público, de acuerdo con su funcionalidad y en concordancia con la misión de las respectivas entidades distritales.

1.2 El marco regulatorio de aprovechamiento económico por parte de particulares en el espacio público en el Distrito Capital”.

Artículo 34. Del aprovechamiento económico en el sistema Distrital de Plazas de Mercado. “El Instituto Para la Economía Social -IPES- como administrador y gestor del espacio público de las Plazas Distritales de Mercado del Distrito Capital, expedirá el protocolo el cual contendrá las actividades autorizadas, la fórmula de retribución, los plazos, la forma de interlocución con los aprovechadores y el reglamento administrativo y operativo”.

Artículo 35. Normalización de uso y aprovechamiento en las Plazas Distritales de Mercado. “En el protocolo de aprovechamiento del espacio público de las Plazas Distritales de Mercado, el Instituto Para la Economía Social - IPES incorporará un capítulo específico sobre normalización del uso y aprovechamiento económico de los comerciantes que a la fecha del presente decreto no cuenten con autorización de uso y aprovechamiento, en el que establecerá un plazo máximo para tramitar y culminar la expedición de la autorización del uso y aprovechamiento que propenda por la normalización de la ocupación, sin perjuicio de la protección y conservación del espacio público y del cumplimiento de las obligaciones pendientes por parte de los comerciantes que ocupan irregularmente el espacio público”.

ACUERDOS

Acuerdo 257 de 2006

“Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”

Artículo 76. Transformación del Fondo de Ventas Populares en el Instituto para la Economía Social - IPES. “Transfórmese el Fondo de Ventas Populares - FVP el cual en adelante se denominará Instituto para la Economía Social - IPES establecimiento público del orden distrital, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico”.

Artículo 79. Funciones del Instituto para la Economía Social - IPES. “De conformidad con lo establecido en el artículo anterior adicionase los Acuerdos 25 de 1972 y 04 de 1975 con las siguientes funciones:

a. “Definir, diseñar y ejecutar programas, en concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas por el Gobierno Distrital, dirigidos a otorgar alternativas para los sectores de la economía informal a través de la formación de capital humano, el acceso al crédito, la inserción en los mercados de bienes y servicios y la reubicación de las actividades comerciales o de servicios.

b. Gestionar la consecución de recursos con entidades públicas, empresas privadas, fundaciones u Organizaciones No Gubernamentales - ONGs nacionales e internacionales para ampliar la capacidad de gestión de la entidad y fortalecer la ejecución de los programas y proyectos.

(...)”

Acuerdo 927 de 2024

“Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”

Artículo 270. Depuración de cartera. “En términos de eficiencia institucional y siguiendo los criterios legales vigentes, en materia de prescripción, remisión de deudas, pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo o por la inexistencia probada del deudor o su insolvencia demostrada, en virtud de los cuales no sea posible ejercer los derechos de cobro o bien porque la relación costo-beneficio al realizar su cobro no resulta eficiente, las entidades distritales deberán realizar acciones de depuración y saneamiento de la cartera a su cargo de cualquier índole en cualquiera de las etapas del cobro persuasivo y coactivo, mediante el castigo de la misma, realizando un informe detallado de las causales por las cuales se depura y las excluirá de la gestión”.

JURISPRUDENCIA

Sentencia No. T-772-03. (4 de septiembre de 2003). Expediente T-728123. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa.

En el marco del conflicto que ha tenido el Estado respecto a la obligación de conservar el espacio público al tiempo que los derechos de los vendedores informales, la Corte se pronunció respecto a este deber estatal, haciendo su interpretación en un contexto de desempleo elevado, desplazamiento masivo y altas tasas de pobreza e indigencia; donde en un contexto de pobreza tan grave como el que aqueja a la capital, junto con la ausencia de oportunidades en el sector formal, las personas se ven obligadas a utilizar las vías, plazas y parques públicos, comercializando artículos de la más diversa índole, para así satisfacer sus propias necesidades básicas y las de sus familias.

“Por lo tanto, en aplicación del principio del Estado Social de Derecho y en el contexto de las condiciones sociales y económicas actuales de la capital, las autoridades distritales competentes están en el deber constitucional de incorporar, como parte integrante de dichas políticas, programas o medidas de recuperación del espacio público, un componente obligatorio de provisión de alternativas económicas para quienes dependen del comercio informal para su sustento vital, el cual se debe haber formulado con base en una evaluación y un seguimiento previos y detallados de las condiciones sociales y económicas reales y cambiantes de la capital, con miras a asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales a medida que cambia el contexto dentro del cual se van a implementar, de tal manera que exista correspondencia entre tales políticas, programas y medidas y las dimensiones y características del problema social a resolver. En ausencia de este componente, que se debe ofrecer en principio a todos los comerciantes afectados en forma previa a su desalojo, la política, programa o medida correspondiente será ostensiblemente lesiva de los mandatos constitucionales -es decir, inadmisibles por su carácter desproporcionado-.”

En dicho pronunciamiento, se evidencia que la Corte Constitucional se ocupó de explicar el concepto de Estado Social de Derecho y sus relaciones con el valor de la dignidad humana e igualdad, donde la constitución política impone un deber positivo de actuación a las autoridades, el cual consistente en luchar por la erradicación de las desigualdades sociales existentes, hasta el máximo de sus posibilidades y con el grado más alto de diligencia.

Es así que, cuando el grupo afectado con las medidas de protección del espacio público está integrado por vendedores informales, considerados como un sector social vulnerable debido a sus condiciones socio económicas, las autoridades deben prever medidas complementarias encaminadas a mitigar los efectos negativos de su decisión, de manera tal que estas no acaben por empeorar la situación material de quienes ya están en circunstancias extremas de subsistencia.

5. COMPETENCIA

El Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y el alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según las disposiciones constitucionales y legales vigentes. En primer lugar, el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia establece que:

Artículo 313. “Corresponde a los Concejos:

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio (...).”

En segundo lugar, el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 - Estatuto Orgánico de Bogotá - estipula que:

Artículo 12. Atribuciones. “Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito

(...)

23. Ejercer de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º del presente estatuto, las atribuciones que la Constitución y las leyes asignen a las asambleas departamentales.

(...)”.

6. IMPACTO FISCAL

El presente Acuerdo, no impacta fiscalmente las finanzas, el presupuesto y, en general, la economía del distrito, en medida que las obligaciones y los créditos que se espera su recaudo, están sometidos a una expectativa que el distrito, en puridad, no tiene certeza de su recaudo y, con todo, se ajusta al Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Camina Segura”

Cordialmente,

EMEL ROJAS CASTILLO

Concejal de Bogotá

Partido Nueva Fuerza Democrática

HEIDY LORENA SÁNCHEZ BARRETO

Concejala de Bogotá

Partido Unión Patriótica

ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

Concejal de Bogotá

Partido Liberal

DONKA ATANSSOVA IAKIMOVA

Concejala de Bogotá

Partido Polo Democrático

FABIÁN PUENTES SIERRA

SAMIR BEDOYA PIRAQUIVE

Concejal de Bogotá
Partido Mira

Concejal de Bogotá
Partido Mira

7. ARTICULADO

PROYECTO DE ACUERDO NO 239 DE 2025

PRIMER DEBATE

"POR EL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACIÓN DE CARTERA A CARGO DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL (IPES) EN BENEFICIO DE VIVANDEROS, VIVANDERAS Y COMERCIANTES DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLAZAS DE MERCADO, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las conferidas por el Decreto Ley 1421 de 1993, Artículo 12, numerales 1 y 23., en concordancia con los Artículos 13, 19 y 313 de la Constitución Política, Artículo 8 de la Ley Estatutaria 133 de 1994 y el Decreto Reglamentario 354 de 1998;

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. OBJETO. Establecer los lineamientos para que el Instituto Para la Economía Social (IPES) adelante medidas dirigidas a la condonación de todas las obligaciones derivadas por el uso o tenencia de los cupos, locales, bodegas, establecimientos de comercio y, en general, cualquier espacio destinado para la venta de bienes, productos y servicios que se comercialicen en todas las plazas distritales de mercado de la ciudad en favor de los vivanderos y comerciantes.

PARÁGRAFO: La Administración Distrital, a través del Instituto para la Economía Social (IPES), desarrollará los criterios para el uso y aprovechamiento del espacio público en las Plazas Distritales de Mercado. Dichos criterios deberán incluir una variable social que contemple de manera prioritaria las necesidades y condiciones socioeconómicas de los comerciantes y vivanderos, promoviendo su inclusión y sostenibilidad económica, conforme a lo establecido en el Decreto 315 de 2024 en su artículo 34.

ARTÍCULO 2. LINEAMIENTOS. Conforme al Manual de Recaudo y Gestión de Cartera PA04-MN-002, el IPES propenderá por implementar medidas destinadas a garantizar la depuración de toda la cartera en la que esté ejerciendo acciones de cobro persuasivo o coactivo y, en general todos los procesos que estén inmersos dentro de las causales de depuración, todas aquellas acreencias derivadas de títulos ejecutivos o derechos de crédito en favor del Distrito y en contra de los vivanderos y comerciantes de las plazas distritales de mercado.

ARTÍCULO 3. INCENTIVOS. El IPES creará un mecanismo de incentivo para que los vivanderos, vivanderas y comerciantes que actualmente no tengan relación formal para el uso, aprovechamiento o explotación de sus cupos, locales y bodegas, deberán suscribirlos contratos de uso administrativo y aprovechamiento económico.

ARTÍCULO 4. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación, otorgando a la Administración un plazo no mayor a doce (12) meses, contados a partir de la expedición del presente Acuerdo, para adelantar las gestiones necesarias para su ejecución.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PROYECTO DE ACUERDO NO 240 DE 2025**PRIMER DEBATE*****“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA FORTALECER LAS ACCIONES EN SALUD PÚBLICA EN ESTABLECIMIENTOS DE PREPARACIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL DISTRITO CAPITAL”*****1. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO**

El presente proyecto de acuerdo tiene como objeto adoptar medidas que permitan el fortalecimiento de las acciones en salud pública para prevenir y minimizar los riesgos en la proliferación y transmisión de enfermedades por alimentos, permitiendo a los ciudadanos visualizar y conocer el concepto sanitario emitido por la Secretaría Distrital de Salud de los establecimientos dedicados a la preparación y consumo de alimentos.

2. MARCO NORMATIVO**MARCO INTERNACIONAL****OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE****ODS 3. Salud y Bienestar**

Meta 3.9. Para 2030 reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo.

ODS 6. Agua limpia y saneamiento

Meta 6.2. De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos (...).

CONSTITUCIÓN POLÍTICA

ARTÍCULO 49. *La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los*

habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad (...).

ARTICULO 78. *La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización.*

Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.

La Ley 09 de 1979 “Por la cual se dictan Medidas Sanitarias”

“(...) ARTICULO 156. Para los efectos del saneamiento de las edificaciones, éstas se clasifican en:

- a) Viviendas permanentes;*
- b) Establecimientos de vivienda transitoria;*
- c) Establecimientos educativos y cuartelarios;*
- d) Establecimientos de espectáculo público;*
- e) Establecimientos de diversión pública;*
- f) Establecimientos industriales;*
- g) Establecimientos comerciales;*
- h) Establecimientos carcelarios;*
- i) Establecimientos hospitalarios y similares.*

PARAGRAFO. Cuando en este capítulo se exprese: edificación o edificaciones, se hace referencia a todos los anteriormente clasificados.”

(...)

COCINA.

ARTÍCULO 172.- *En las cocinas todas las instalaciones deberán cumplir con las normas de seguridad exigidas por el Ministerio de Salud o la entidad delegada.*

ARTÍCULO 173.- *El área y la dotación de la cocina deberán garantizar el cumplimiento de los requisitos sanitarios mínimos y estarán de acuerdo con los servicios que preste la edificación.*

ARTÍCULO 174.- *Se prohíbe el almacenamiento de sustancias peligrosas en cocinas o espacios donde se almacenen, manipulen o sirvan alimentos”*

(...)

DE LA LIMPIEZA GENERAL DE LAS EDIFICACIONES.

ARTÍCULO 207.- Toda edificación deberá mantenerse en buen estado de presentación y limpieza, para evitar problemas higiénico-sanitarios.

ARTÍCULO 208.- La utilización de toda edificación desocupada, requiere previo acondicionamiento sanitario para su uso en los términos de esta Ley y sus reglamentaciones.

ARTÍCULO 209.- En todas las edificaciones se prohíbe realizar actividades que afecten o puedan afectar el bienestar o la salud de los vecinos o de la comunidad a la cual se pertenece.

ARTÍCULO 210.- El Ministerio de Salud o la entidad delegada reglamentará los aspectos relacionados con la protección de la salud en todo tipo de establecimiento.”

(...)

DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.

ARTÍCULO 233.- Las disposiciones de esta Ley aplicables a edificaciones para establecimientos comerciales se aplicarán también a las áreas de otros establecimientos que hagan comercio de una u otra forma.

(...)

TÍTULO V

Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 2278 de 1982, Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 2742 de 1991, Reglamentado parcialmente por Resolución del Min. Salud 604 de 1993

ALIMENTOS

OBJETO.

ARTÍCULO 243.- En este título se establecen las normas específicas a que deberán sujetarse:

a. Los alimentos, aditivos, bebidas o materias primas correspondientes o las mismas que se produzcan, manipulen, elaboren, transformen, fraccionen, conserven, almacenen, transporten, expendan, consuman, importen o exporten;

b. Los establecimientos industriales y comerciales en que se realice cualquiera de las actividades mencionadas en este artículo, y

c. El personal y el transporte relacionado con ellos.

PARÁGRAFO.- En la expresión bebidas se incluyen las alcohólicas, analcohólicas no alimenticias, estimulantes y otras que el Ministerio de Salud determine.

REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO.

NOTA: (El presente Título V lo reglamentó el Decreto Nacional 547 de 1996. Publicado D.O. No. 42.748.

ARTÍCULO 244.- Para instalación y funcionamiento de establecimientos industriales o comerciales, relacionados con alimentos o bebidas, se requerirá licencia sanitaria expedida conforme a lo establecido en esta Ley.

ARTÍCULO 245.- Los establecimientos comerciales e industriales a la vez, cumplirán con las regulaciones establecidas para uno y otro.

ARTÍCULO 246.- Solamente los establecimientos que tengan licencia sanitaria podrán elaborar, producir, transformar, fraccionar, manipular, almacenar, expender, importar o exportar alimentos o bebidas.

ARTÍCULO 247.- Para realizar en un mismo establecimiento actividades de producción, elaboración, transformación, fraccionamiento, conservación, almacenamiento, expendio, consumo de alimentos o bebidas y de otros productos diferentes a éstos, se requiere autorización previa del Ministerio de Salud o de la autoridad delegada al efecto.

PARÁGRAFO. Cada área destinada a una de las actividades mencionadas en este artículo, cumplirá con las normas señaladas para la actividad que realiza.

ARTÍCULO 248.- Los establecimientos industriales deberán estar ubicados en lugares aislados de cualquier foco de insalubridad y separados convenientemente de conjuntos de viviendas.

ARTÍCULO 249.- Los establecimientos industriales o comerciales a que se refiere este título, cumplirán con los requisitos establecidos en la presente Ley y, además, las siguientes:

a. Contar con espacio suficiente que permita su correcto funcionamiento y mantener en forma higiénica las dependencias y los productos;

b. Los pisos de las áreas de producción o envasado, serán de material impermeable, lavable, no poroso ni absorbente, los muros se recubrirán con materiales de características similares hasta una altura adecuada;

c. La unión de los muros con los pisos y techos se hará en forma tal que permita la limpieza;

d. Cada una de las áreas tendrá la ventilación e iluminación adecuadas y contará con los servicios sanitarios, vestideros y demás dependencias conexas, conforme a lo establecido en la presente Ley y sus reglamentaciones.

ARTÍCULO 250.- *El Ministerio de Salud establecerá los plazos para que los establecimientos industriales y comerciales existentes, a que se refiere este título se ajusten a los requisitos establecidos en la presente Ley y sus reglamentaciones.*

DE LOS EQUIPOS Y UTENSILIOS.

ARTÍCULO 251.- *El material, diseño, acabado e instalación de los equipos y utensilios deberán permitir la fácil limpieza, desinfección y mantenimiento higiénico de los mismos, y de las áreas adyacentes. Tanto los equipos como los utensilios se mantendrán en buen estado de higiene y conservación y deberán desinfectarse cuantas veces sea necesario para evitar problemas higiénico-sanitarios.*

ARTÍCULO 252.- *Todas las superficies que estén en contacto directo con alimentos o bebidas deberán ser atóxicas e inalterables en condiciones de usos.*

ARTÍCULO 253.- *Las conexiones y los mecanismos de equipos que requieran lubricación, estarán contruidos de manera que el lubricante no entre en contacto con los alimentos o bebidas ni con las superficies que estén en contacto con éstos.*

ARTÍCULO 254.- *La limpieza, lavado y desinfección de equipos y utensilios que tengan contacto con alimentos o bebidas, se hará en tal forma y con implementos o productos que no generen ni dejen sustancias peligrosas durante su uso.*

PARÁGRAFO.- *El uso de lubricantes, utensilios, equipos y productos de limpieza, lavado y desinfección se ajustarán a las normas que para tal efecto establezca el Ministerio de Salud.*

DE LAS OPERACIONES DE ELABORACIÓN, PROCESO Y EXPENDIO.

ARTÍCULO 255.- *Para la elaboración de alimentos y bebidas se deberán utilizar materias primas cuyas condiciones higiénico-sanitarias permitan su correcto procesamiento. Las materias primas cumplirán con lo estipulado en la presente Ley, su reglamentación y demás normas vigentes.*

ARTÍCULO 256.- Las materias primas, envases, empaques, envolturas y productos terminados para alimentos y bebidas se almacenarán en forma que se evite su contaminación y se asegure su correcta conservación.

PARÁGRAFO.- Los depósitos de materias primas y productos terminados para alimentos y bebidas ocuparán espacios independientes, salvo en aquellos casos en que a juicio del Ministerio de Salud o de la autoridad delegada no se presenten peligros de contaminación para los productos.

ARTÍCULO 257.- Las zonas donde se reciban o almacenen materias primas estarán separadas de las que se destinan a la preparación o envasado del producto final. La autoridad sanitaria competente podrá eximir del cumplimiento de este requisito a los establecimientos en los cuales no exista peligro de contaminación para los productos.

ARTÍCULO 258.- No se permitirá reutilizar alimentos, bebidas, sobrantes de salmuera, jugos, salsas, aceites o similares, salvo en aquellos casos que el Ministerio de Salud o la autoridad delegada lo autorice porque no trae riesgos para la salud del consumidor.

ARTÍCULO 259.- Los establecimientos a que se refiere este título, los equipos, las bebidas, alimentos y materias primas deben protegerse contra las plagas.

Los plaguicidas y los sistemas de aplicación que se utilicen para el control de plagas en alimentos y bebidas cumplirán con la reglamentación que al efecto dicte el Ministerio de Salud.

Las reglamentaciones sobre materias primas agrícolas se establecerán conjuntamente con el Ministerio de Agricultura.

ARTÍCULO 260.- Se prohíbe el almacenamiento de sustancias peligrosas en cocinas o espacios en que se elaboren, produzcan, almacenen o envasen alimentos o bebidas.

ARTÍCULO 261.- En los establecimientos comerciales las actividades relacionadas con alimentos o bebidas, como fraccionamiento, elaboración, almacenamiento, empaque y expendio, deben efectuarse en áreas que no ofrezcan peligro de contaminación para los productos.

ARTÍCULO 262.- En los establecimientos comerciales o industriales a que se refiere este título, los espacios destinados a vivienda o dormitorio deberán estar totalmente separados de los dedicados a las actividades propias de los establecimientos.

ARTÍCULO 263.- Los establecimientos en que se produzcan, elaboren, transformen, fraccionen, expendan, consuman o almacenen productos de fácil descomposición contarán con equipos de refrigeración adecuados y suficientes.

ARTÍCULO 264.- Los establecimientos a que se refiere este título deberán disponer de agua y elementos para lavado y desinfección de sus equipos y utensilios en cantidad y calidad suficientes para mantener sus condiciones adecuadas de higiene y limpieza.

ARTÍCULO 265.- En los establecimientos a que se refiere este título se prohíbe la entrada de personas desprovistas de los implementos de protección adecuados a las áreas de procesamiento, para evitar la contaminación de los alimentos o bebidas.

PARÁGRAFO.- No se deberá permitir la presencia de animales en las áreas donde se realice alguna de las actividades a que se refiere este título.

(...)

ARTÍCULO 289.- Los alimentos que no requieran de empaque o envase se almacenarán en forma que se evite su contaminación o alteración, para evitar riesgos higiénico-sanitarios al consumidor.

PARÁGRAFO.- En el expendio de los alimentos a que se refiere este artículo se deberán tener elementos de protección, como gabinetes o vitrinas, adecuados, fáciles de lavar y de desinfectar. Además, deberá disponerse de utensilios apropiados para su manipulación.

ARTÍCULO 290.- Cuando los establecimientos comerciales de alimentos o bebidas no cuenten con agua y equipos, en cantidad y calidad suficientes para el lavado y desinfección, los utensilios que se utilicen deberán ser desechables con el primer uso.

ARTÍCULO 291.- En los establecimientos comerciales en que se sirvan alimentos o bebidas, no se permitirá el empleo de utensilios de comedor deteriorados. Las jarras o recipientes que contengan alimentos o bebidas deberán estar provistas de tapa para evitar contaminación.

PARÁGRAFO.- La autoridad sanitaria que encuentre en uso utensilios deteriorados en los términos de este artículo, procederá al decomiso e inutilización inmediatos.

ARTÍCULO 292.- Cuando en un establecimiento comercial, además de las actividades a que se refiere este capítulo, se realicen otras sobre productos no comestibles, deben separarse y sus productos almacenarse independientemente para evitar contaminación de los alimentos o bebidas.

ARTÍCULO 293.- Sólo se permitirá la cocción de alimentos por contacto directo con la llama, cuando en dicha operación no se produzca contaminación de los alimentos o cualquier otro fenómeno adverso para la salud.

ARTÍCULO 294.- El Ministerio de Salud establecerá los requisitos que deben cumplir los establecimientos comerciales, temporales, o ambulantes, para la venta de alimentos o bebidas y las condiciones de ésta.

(...)

ARTÍCULO 304.- No se consideran aptos para el consumo humano los alimentos o bebidas alterados, adulterados, falsificados, contaminados o los que por otras características anormales puedan afectar la salud del consumidor.

ARTÍCULO 305.- Se prohíbe la tenencia o expendio de alimentos o bebidas no aptos para el consumo humano. El Ministerio de Salud o su autoridad delegada deberá proceder al decomiso y destino final de estos productos. (...)"

Ley 715 de 2001 "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros."

"44. 3.5. Ejercer vigilancia y control sanitario en su jurisdicción, sobre los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que puedan generar riesgos para la población, tales como establecimientos educativos, hospitales, cárceles, cuarteles, albergues, guarderías, ancianatos, puertos, aeropuertos y terminales terrestres, transporte público, piscinas, estadios, coliseos, gimnasios, bares, tabernas, supermercados y similares, plazas de mercado, de abasto público y plantas de sacrificio de animales, entre otros"

43.3.8. Ejecutar las acciones de inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo del ambiente que afectan la salud humana, y de control de vectores y zoonosis de competencia del sector salud, en coordinación con las autoridades ambientales, en los corregimientos departamentales y en los municipios de categorías 4, 5 y 6 de su jurisdicción.

44.3.3.1. Vigilar y controlar en su jurisdicción, la calidad, producción, comercialización y distribución de alimentos para consumo humano, con prioridad en los de alto riesgo epidemiológico, así como los de materia prima para consumo animal que representen riesgo para la salud humana.

Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana"

“(…) ARTÍCULO 87. Requisitos para cumplir actividades económicas. Es obligatorio, para el ejercicio de cualquier actividad: comercial, industrial, de servicios, social, cultural, de recreación, de entretenimiento, de diversión; con o sin ánimo de lucro, o que, siendo privadas, trasciendan a lo público; que se desarrolle o no a través de establecimientos abiertos o cerrados al público, además de los requisitos previstos en normas especiales, cumplir previamente a la iniciación de la actividad económica los siguientes requisitos:

1. Las normas referentes al uso del suelo, destinación o finalidad para la que fue construida la edificación y su ubicación.
2. Mantener vigente la matrícula mercantil de la Cámara de Comercio de la respectiva jurisdicción donde se desarrolle la actividad.
3. La comunicación de la apertura del establecimiento, al comandante de estación o subestación de Policía del lugar donde funciona el mismo, por el medio más expedito o idóneo, que para tal efecto establezca la Policía Nacional.
4. Para la comercialización de equipos terminales móviles se deberá contar con el permiso o autorización expedido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o su delegado.

Durante la ejecución de la actividad económica deberá cumplirse con los siguientes requisitos:

1. Las normas referentes a los niveles de intensidad auditiva.
2. Cumplir con los horarios establecidos para la actividad económica desarrollada.
- 3. Las condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales determinadas en el régimen de Policía.**
4. El objeto registrado en la matrícula mercantil y no desarrollar otra actividad diferente.
5. Para aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales causantes de pago, protegidas por las disposiciones legales vigentes sobre derechos de autor, mantener y presentar el comprobante de pago al día. (...)”

(Negrilla fuera de texto Original)

RESOLUCIONES DEL NIVEL NACIONAL

Resolución 2674 del 22 de julio de 2013 *“Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto Ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones”*, expedida por el Ministerio de Salud.

Resolución 2016041871 de 2016 *“Por la cual se establecen los lineamientos para obtener Autorización Sanitaria Provisional por parte de los establecimientos que realizan las actividades de almacenamiento y expendio de carne y/o productos cárnicos comestibles, así como la Inscripción, Inspección, Vigilancia y Control del transporte de carne y/o productos cárnicos comestibles”* expedida por el INVIMA

Resolución 1229 de 2013 *“Por la cual se establece el modelo de inspección, vigilancia y control sanitario para los productos de uso y consumo humano”*, expedida por el Ministerio de Salud.

ACUERDOS DISTRITALES

ACUERDO 927 de 2024 *“Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”*

OBJETIVO 2

5.2. Bogotá confía en su bienestar: Bogotá ha de ser el sitio donde sus habitantes quieran estar y puedan desarrollar todo su potencial. Una ciudad que sea la misma para todas y todos sus habitantes. Bien-estar es la posibilidad efectiva que tiene la ciudadanía de elegir sobre lo que quiere ser y hacer en la ciudad de Bogotá. Para lograr ese cometido es necesario impulsar el acceso equitativo e incluyente y de calidad a la educación, a la salud, a los servicios de cuidado, a la cultura, la recreación, el deporte y la actividad física. Así mismo, hay que garantizar la protección de la niñez, disponibilidad y acceso a alimentos de calidad y a soluciones habitacionales.

10.4. Programa 10. Salud Pública Integrada e Integral.

En salud se articula el bien-estar, la intersectorialidad y diversas acciones que involucran al sector salud.

Esta quedó definida como “una estrategia eminentemente social que trasciende al sector salud, dado que requiere de la transectorialidad e intersectorialidad con el objetivo común **de identificación de riesgos individuales, familiares y colectivos de la población, de acuerdo con la caracterización de los determinantes sociales de la salud que afectan el bienestar**. Esta estrategia implica activar las respuestas intersectoriales y realizar un seguimiento continuo de las mismas. Para lo anterior, el sector salud pondrá a disposición de los diferentes sectores de la administración la caracterización territorial, así como la identificación de riesgo, con el fin de priorizar la implementación de respuestas sociales”.

La AP Social eleva la Atención Primaria en Salud, a la máxima expresión de gobernanza en todas las políticas y todos los sectores, ubicando la intersectorialidad, la gestión del riesgo y la interoperabilidad de todas las fuentes de información para la toma de decisiones.

RESOLUCIÓN DISTRITAL

Resolución 1361 de 2023 *Secretaría Distrital de Salud “Por la cual se adopta la clasificación de establecimientos y/o servicios de bajo riesgo higiénico-sanitario en Bogotá D.C”.*

JURISPRUDENCIA

Sentencia C-313 de 2014:

La Corte Constitucional reconoció que el derecho a la salud tiene un carácter fundamental y autónomo. Esto implica que el Estado debe garantizar condiciones adecuadas en todos los ámbitos, incluyendo los establecimientos de preparación y consumo de alimentos.

Sentencia C-915 de 2010:

Se reafirmó la obligación estatal de controlar la calidad e inocuidad de los alimentos, asegurando que los ciudadanos tengan acceso a productos seguros y aptos para el consumo.

Sentencia T-760 de 2008:

La Corte reiteró la importancia de la salud pública como una obligación del Estado y subrayó la necesidad de fortalecer las medidas de vigilancia y control sanitario.

La normatividad que regula la inocuidad de los alimentos y las condiciones de los establecimientos gastronómicos se fundamenta en estos principios constitucionales y ha dado lugar a leyes y decretos como:

Requisitos sanitarios para establecimientos de alimentos en Bogotá: La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá dispone de una guía que detalla los requisitos sanitarios para la creación y operación de negocios de alimentos en la ciudad. Incluye aspectos como documentación necesaria, condiciones locativas, manejo de personal manipulador y control de materias primas e insumos.

Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 007: Establece los requisitos sanitarios que deben cumplir los establecimientos de la industria gastronómica, incluyendo restaurantes, para garantizar la inocuidad de los alimentos y la protección de la salud de los consumidores.

Guía de Inocuidad de Alimentos para Establecimientos Gastronómicos: El Ministerio de Salud y Protección Social ofrece una guía que proporciona lineamientos para garantizar la inocuidad de los alimentos en establecimientos gastronómicos, abarcando desde la selección de materias primas hasta la manipulación y servicio de los alimentos.

Normograma Sanitario de Alimentos y Bebidas: El Ministerio de Salud y Protección Social ofrece un compendio de la normativa sanitaria aplicable a alimentos y bebidas, incluyendo leyes, decretos y resoluciones relevantes para el sector.

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El Artículo 32 de la Ley 1122 de 2007 define la *salud pública* como “el conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera integrada, la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva, ya que sus resultados se constituyen en indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país. Dichas acciones se realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la participación responsable de todos los sectores de la comunidad”¹¹⁹.

Las Secretarías de Salud tienen a su cargo la gestión de la salud pública y la responsabilidad de implementar, ejecutar y fortalecer los procesos de Inspección, Vigilancia y Control Sanitario – IVCS -, con el fin de identificar, eliminar o minimizar riesgos, daños e impactos negativos para la salud humana por el uso o consumo de bienes y servicios,

¹¹⁹ <https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/paginas/salud-publica.aspx>

donde, de acuerdo con lo estipulado en este Proyecto de Acuerdo, sería lo concerniente a preparación y consumo de alimentos.

El proceso de IVCS es la herramienta a través de la cual se realiza la verificación de los sujetos de Inspección, Vigilancia y Control Sanitario, con el fin de determinar que sus características cumplan con los estándares y requisitos establecidos en los marcos regulatorios vigentes, el resultado de la inspección sanitaria origina una certificación o concepto sanitario favorable o la aplicación de medidas de control.

En el caso de Bogotá, la competencia del proceso de Inspección, Vigilancia y Control Sanitario – IVCS se ejecuta por medio de la realización de visitas en las cuales la autoridad sanitaria emite un concepto que da constancia del trabajo de verificación presencial y técnico a los establecimientos donde se examina que las condiciones higiénico sanitarias propias del funcionamiento del establecimiento y de la actividad desarrollada, se encuentran dentro de los parámetros de la normatividad vigente, así:

CONCEPTO	PUNTUACION
Favorable	Se emite cuando el objeto de IVC sanitario obtiene porcentaje de cumplimiento entre el 95 y 100% y su funcionamiento u operación no genera riesgos sanitarios a la salud pública.
Favorable con requerimientos	Se emite cuando, el objeto de IVC no cumple totalmente con los requisitos y condiciones sanitarias, pero no representa o constituye un riesgo inminente para la salud pública o la seguridad sanitaria. La calificación del acta se encuentra entre el 50 al 94 % del cumplimiento
Desfavorable	Se emite cuando el objeto de IVC, No cumple con los requisitos y condiciones sanitarias establecidas en el marco normativo sanitario obteniendo una calificación menor o igual a 49% y constituye un riesgo inminente para la salud pública.

Fuente: Modelo de IVC en Salud Ambiental. Ministerio de Salud y Protección Social.

Es pertinente señalar que el Concepto Sanitario que expide la Secretaría de Salud a través de sus Subredes Integradas de Servicios de Salud a establecimientos de comercio abiertos al público de venta y preparación de alimentos, es resultado de la evaluación que realice en la visita de inspección sanitaria y la situación encontrada frente al nivel de cumplimiento de las condiciones que la ley establece, es decir que no tiene un término de caducidad, es gratuito y se mantiene vigente hasta tanto la entidad expida otro que lo reemplace.

Las visitas que realizan las autoridades sanitarias, se realizan por los siguientes motivos:

- **Programación:** Planeación en marco del mapa de riesgos sanitarios más relevantes de la jurisdicción, así como de aquellos objetos de inspección, vigilancia y control sanitario que se lleguen a priorizar.
- **Solicitud del interesado:** Es la solicitud que realiza el propietario o representante del establecimiento u objeto de IVC.
- **Asociada a peticiones, quejas y reclamos:** PQRS radicados en la Secretaria de Salud.
- **Solicitud oficial:** Solicitud realizada por una entidad gubernamental territorial o nacional.
- **Evento de Interés en Salud Pública:** Evento que se haya presentado en el establecimiento que puede afectar la salud pública.
- **Solicitud de práctica de pruebas/procesos sancionatorios administrativos:** Ley 9 de 1979 y Decreto 780 de 2016 establece el marco normativo frente a los resultados de realización de visitas de inspección sanitaria para la obtención del concepto sanitario, respecto al incumplimiento de las normas sanitarias que generen riesgo a la salud pública, las autoridades sanitarias podrán aplicar medidas de seguridad e iniciar un proceso sancionatorio, así:

“Artículo 576º.- Podrán aplicarse como medidas de seguridad encaminadas a proteger la salud pública, las siguientes:

- *Clausura temporal del establecimiento, que podrá ser total o parcial;*
- *La suspensión parcial o total de trabajos o de servicios;*
- *El decomiso de objetos y productos;*
- *La destrucción o desnaturalización de artículos o productos, si es el caso, y*
- *La congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de productos y objetos, mientras se toma una decisión definitiva al respecto.*

Parágrafo. - Las medidas a que se refiere este artículo serán de inmediata ejecución, tendrán carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar”.

“Artículo 577º.- Teniendo en cuenta la gravedad del hecho y mediante resolución motivada, la violación de las disposiciones de esta Ley, será sancionada por la entidad encargada de hacerlas cumplir con alguna o algunas de las siguientes sanciones:

- a. *Amonestación.*
- b. *Multas sucesivas hasta por una suma equivalente a 10.000 salarios diarios mínimos legales al máximo valor vigente en el momento de dictarse la respectiva resolución.*
- c. *Decomiso de productos.*
- d. *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia.*
- e. *Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio respectivo”.*

Por otra parte, es importante tener en cuenta que el artículo 87 de la Ley 1801 de 2016 determina como *“obligatorio, para el ejercicio de cualquier actividad: comercial, industrial, de servicios, social, cultural, de recreación, de entretenimiento, de diversión; con o sin ánimo de lucro, o que siendo privadas, trasciendan a lo público; que se desarrolle o no a través de establecimientos abiertos o cerrados al público, además de los requisitos previstos en normas especiales (...)”*, cumplir con el lleno de requisitos: 3. *Las condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales determinadas en el régimen de Policía.*

En la actualidad se encuentra implementada en el Distrito la línea de alimentos sanos y seguros de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, quienes están encargadas de la ejecución de la estrategia **“Programa Restaurantes 1A”** cuyo objetivo es el de *“promover la calidad nutricional e inocuidad de los alimentos en los restaurantes de tipo popular del Distrito Capital, con el fin de proteger la salud pública y los derechos de los consumidores”*.

La distinción que otorga el programa “Restaurantes 1A” se expide por un año a los establecimientos que implementan buenas prácticas de manufactura, cumpliendo las condiciones sanitarias, calidad e inocuidad de los alimentos preparados por el restaurante, ofertados con menús balanceados y variados.

Dentro de los beneficios que brinda la distinción restaurante 1A, se encuentra el enfoque de calidad e inocuidad del programa, que genera la posibilidad de brindar a la comunidad alimentos sanos y seguros, contribuyendo en la generación de bienestar y mitigando la presencia de enfermedades en la población. Tener dicha distinción les representa a los establecimientos participantes:

- Aumento en la satisfacción de los clientes al consumir no solo alimentos inocuos, sino menús balanceados, variados y sanos.
- Reconocimiento del restaurante por asegurar la inocuidad de los alimentos que se procesan y expenden.

- Incremento del número de clientes, pues el restaurante brinda más confianza al cumplir con los requisitos de la normatividad sanitaria vigente.
- Reducción de pérdidas y desperdicios, con la adecuada manipulación de los alimentos y materias primas¹²⁰.

Es así que, el propósito de este Proyecto de Acuerdo radica en fomentar el cumplimiento de las condiciones sanitarias, así como la calidad e inocuidad de los alimentos preparados en los restaurantes. Sin embargo, como se mencionó previamente, esta medida está dirigida exclusivamente a los **restaurantes de tipo popular del Distrito Capital**, excluyendo a otros establecimientos dedicados a la preparación y consumo de alimentos que también están sujetos a este tipo de control. Además, no se trata de una medida permanente, sino de una estrategia o programa cuya continuidad dependerá de la voluntad de la administración y del direccionamiento estratégico vigente.

Es pertinente hacer referencia a los resultados documentados en el **Informe Anual Sistema Unificado Distrital de Inspección, Vigilancia y Control – SUDIVC 2023** en donde se encuentra la gestión de las entidades que conforman este sistema entre las que se encuentra la Secretaría Distrital de Salud.

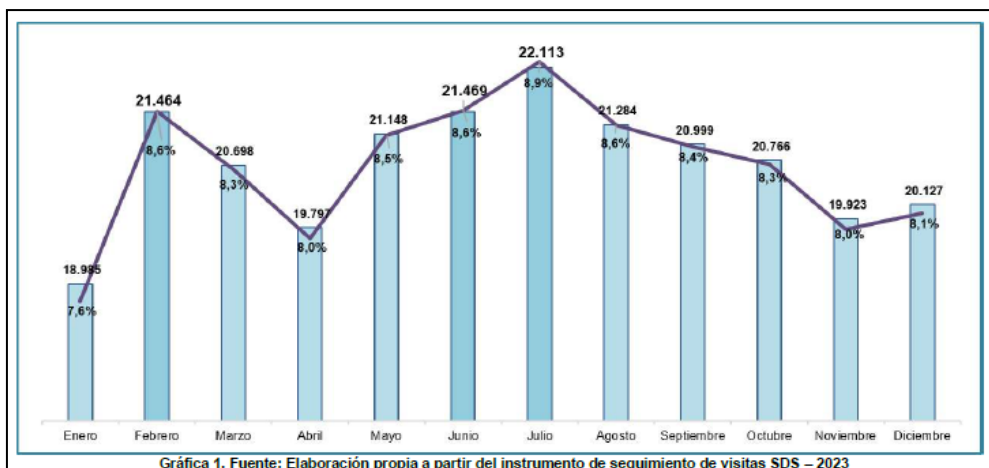
En relación con las visitas de inspección, vigilancia y control, la entidad reportó un total de 248.773 visitas durante la vigencia 2023. Es importante aclarar que esta información se tomó a partir del reporte Censo visitas ene_dic2023_ReqSUDIVC, remitido por la entidad. Teniendo en cuenta lo anterior, se presentaron las siguientes diferencias:

Reporte Censo visitas enero - diciembre 2023	248.773
Visitas realizadas y facturadas por las Subredes Integradas de Servicios de Salud	232.431
Diferencia	16.342

Fuente: Informe Anual Sistema Unificado Distrital de Inspección, Vigilancia y Control – SUDIVC 2023

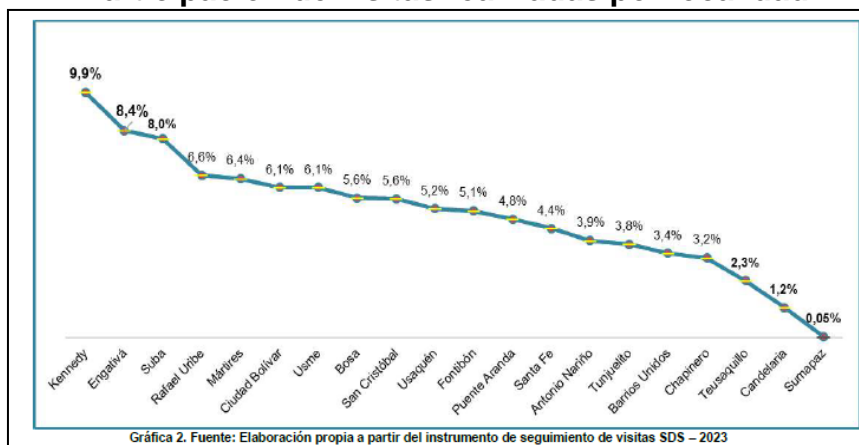
Participación visitas realizadas por mes

¹²⁰ <https://bogota.gov.co/servicios/guia-de-tramites-y-servicios/programa-restaurantes-1a>



Fuente: Informe Anual Sistema Unificado Distrital de Inspección, Vigilancia y Control – SUDIVC 2023

Participación de visitas realizadas por localidad



Fuente: Informe Anual Sistema Unificado Distrital de Inspección, Vigilancia y Control – SUDIVC 2023

De las 226 actividades económicas reportadas, las diez actividades que presentaron mayor número de visitas durante la vigencia fueron:

Visitas por tipo de establecimiento

Tipo de establecimiento	Visitas realizadas
Restaurante	34.449
Peluquerías	13.767
Comidas rápidas	13.197
Expendio de carne y productos cárnicos comestibles	11.428
Expendio de bebidas alcohólicas	9.733
Tiendas	9.509
Cafetería	7.813
Panadería	7.670
Bares, cantinas, discotecas y tabernas; salas de baile, donde se expendan y consuma licor	7.623
Minimercado	6.971
Almacén	6.805
Comercio de prendas de vestir	5.384
Droguería	4.703
Cigarrerías	4.478
Talleres de mecánica de automóviles	4.337
Ferretería	4.316
Hogar de bienestar	3.636
Expendio de frutas y verduras	3.133
Distribuidor de cosméticos	2.886
Pet shop	2.740
Clinicas y consultorios veterinarios	2.342
Depósito de alimentos	2.247
Bodega de reciclaje	2.073
Talleres de mecánica de motocicletas	2.057
Profesionales independientes de la salud (actividades de la práctica odontológica)	1.946
Comercio de calzado y artículos de cuero	1.924
Fábricas de muebles	1.784
Cacharrerías y/o misceláneas	1.762
Supermercado intermedio	1.663
Impresión, tipografías y litografías	1.649

Tabla 2. Fuente instrumento de seguimiento de visitas SDS – 2023

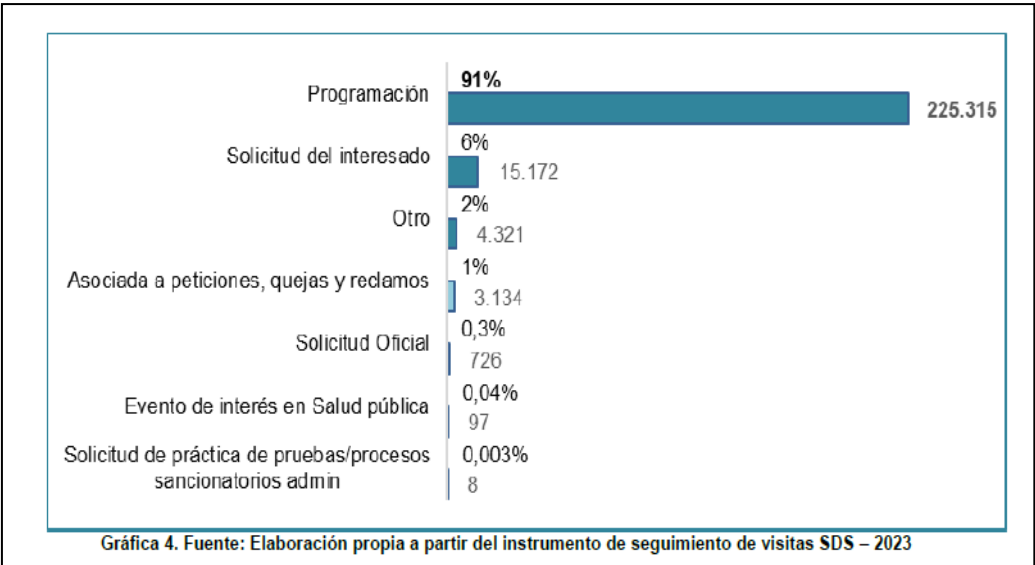
Fuente: Informe Anual Sistema Unificado Distrital de Inspección, Vigilancia y Control – SUDIVC 2023

Visitas por actividad económica

Código CIU	Descripción	Visitas realizadas
5611	Expendio a la mesa de comidas preparadas	47.451
4711	Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco	26.743
5630	Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento	17.356
9602	Peluquería y otros tratamientos de belleza	15.046
4723	Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados	13.159
4719	Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (viveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco	10.286
4773	Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados	8.721
5613	Expendio de comidas preparadas en cafeterías	7.839
1081	Elaboración de productos de panadería	7.668
4520	Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	7.268
Total		161.537

Tabla 1. Fuente instrumento de seguimiento de visitas SDS – 2023

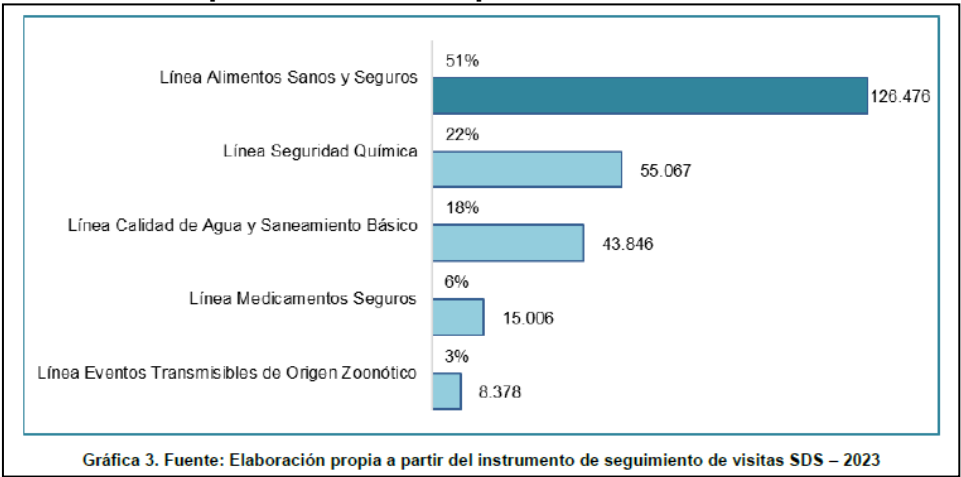
Visitas por tipo de acción y participación por motivo de visita



Fuente: Informe Anual Sistema Unificado Distrital de Inspección, Vigilancia y Control – SUDIVC 2023

De las cinco líneas de intervención con las cuales se realizan acciones de inspección, vigilancia y control, podemos observar que la línea que presentó mayor participación durante 2023 fue la de “Alimentos sanos y seguros” con el 51% que corresponde a 126.476 visitas; seguida de la línea de “Seguridad química” con el 22% correspondiente a 55.067 visitas.

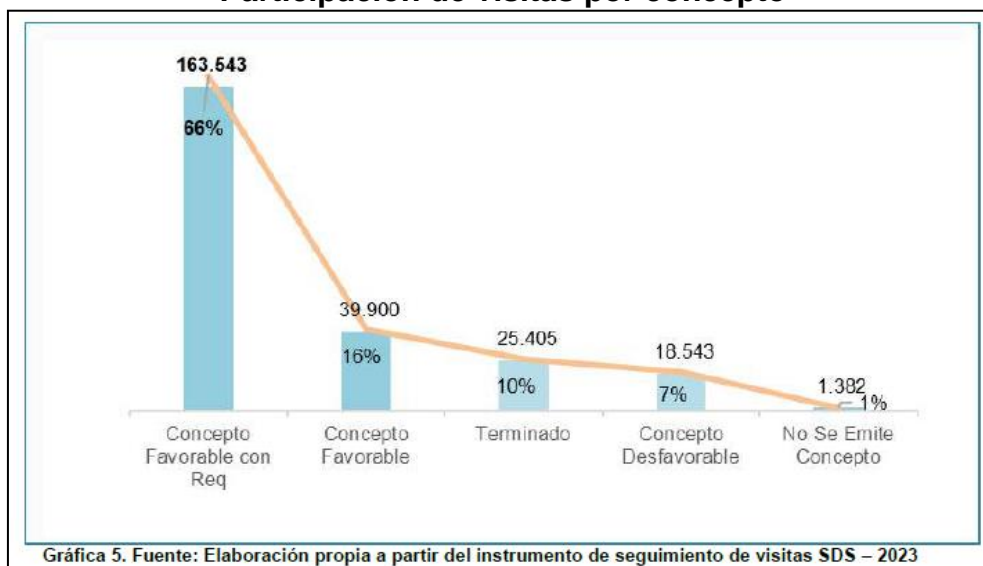
Participación de visitas por línea de intervención



Fuente: Informe Anual Sistema Unificado Distrital de Inspección, Vigilancia y Control – SUDIVC 2023

La participación por visitas más representativa se evidenció en las visitas programadas por la entidad con el 91%, correspondiente a 225.315; el 6% se generaron por solicitud del interesado con 15.172 y el 2% corresponde a otros tipos de solicitud con 4.321 visitas.

Participación de visitas por concepto



Gráfica 5. Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de seguimiento de visitas SDS – 2023

Fuente: Informe Anual Sistema Unificado Distrital de Inspección, Vigilancia y Control – SUDIVC 2023

El 66% de las visitas presentó concepto favorable con requerimientos, el 16% presentaron concepto favorable y en el 10% de las visitas realizadas se evidenció que los establecimientos no existían, por lo cual en el informe se indica que se considera la visita como terminada; el 7% de las visitas realizadas presentaron concepto desfavorable y corresponde a 18.543 visitas.

El informe indica que 243.411 visitas no presentaron ningún tipo de medida, estas corresponden al 98% y para 5.362 visitas se aplicó algún tipo de medida así:

Tipo de medida aplicada

Tipo de medida	Visitas realizadas	% Participación
Sin medida	243.411	98%
Clausura temporal total	4.036	2%
Destrucción	302	0,12%
Clausura temporal total, Destrucción	253	0,10%
Clausura temporal parcial	195	0,08%
Suspensión parcial de trabajos o servicios	163	0,07%
Suspensión total de trabajos o servicios	150	0,06%
Decomiso	114	0,05%
Clausura temporal total, Decomiso	61	0,02%
Suspensión parcial de trabajos o servicios, Destrucción	24	0,01%
Clausura temporal parcial, Destrucción	12	0,005%
Suspensión total de trabajos o servicios, Destrucción	12	0,005%
Congelación	10	0,004%
Suspensión parcial de trabajos o servicios, Decomiso	9	0,004%
Suspensión total de trabajos o servicios, Decomiso	9	0,004%
Clausura temporal parcial, Decomiso	5	0,002%
Clausura temporal total, Congelación	5	0,002%
Clausura temporal parcial, Congelación	1	0,0004%
Suspensión parcial de trabajos o servicios, Congelación	1	0,0004%
Total	248.773	100%

Tabla 5. Fuente instrumento de seguimiento de visitas SDS – 2023

Fuente: Informe Anual Sistema Unificado Distrital de Inspección, Vigilancia y Control – SUDIVC 2023

El contexto que nos proporcionan los resultados de este informe hace evidente la necesidad de adoptar medidas que vayan en dirección de minimizar los riesgos, daños e impactos negativos para la salud, cuando el 73% de los conceptos sanitarios emitidos a establecimientos objeto de IVC por parte de la Secretaría de Salud obtuvieron concepto favorable con requerimiento (66%) o concepto desfavorable (16%).

Las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA), se definen como el síndrome originado por la ingestión de alimentos y/o agua, que contienen agentes etiológicos que afecten la salud del consumidor a nivel individual o colectivo, estas se clasifican en infecciones, intoxicaciones o infecciones mediadas por toxinas y constituyen un importante problema de salud pública debido al incremento en su ocurrencia, nuevas formas de transmisión, el aumento de la resistencia de los patógenos a los antimicrobianos y el impacto socioeconómico que ocasionan, por este motivo las acciones de vigilancia epidemiológica; inspección, vigilancia y control sanitario; y gestión del conocimiento en salud cobran relevancia.

Proporcionar a los consumidores y clientes de establecimientos dedicados a la preparación y consumo de alimentos la información referente al tipo de concepto emitido por la

Secretaría de Salud en desarrollo del proceso de Inspección, Vigilancia y Control Sanitario, será un factor que le permita a los clientes y consumidores tomar decisiones frente a los riesgos a los cuales puede verse expuesto y a su vez será una medida que permita que los establecimientos esforcen por cumplir con los estándares y requisitos establecidos en los marcos regulatorios vigentes con el fin de obtener una certificación o concepto sanitario favorable.

También resulta clave, luego de analizar estas cifras, que la propia ciudadanía realice peticiones y quejas cuando se evidencien situaciones que pongan en riesgo la salubridad y la salud de los ciudadanos.

Actualmente la Secretaría de Salud cuenta en su página web con un medio de consulta del *Listado de Concepto Sanitario Favorables* para establecimientos: prestadoras de servicio de abastecimiento de agua potable para el consumo humano, medicamentos y dispositivos médicos, productos químicos, industria y belleza y veterinarias y clínicas veterinarias, siendo fundamental la incorporación de los establecimientos dedicados a la preparación y consumo de alimentos¹²¹.

¹²¹ <https://saludambiental.saludcapital.gov.co/favorables>



Agua y saneamiento básico

Calidad del agua y saneamiento básico

Establecimientos con Concepto Favorable

Consulte aquí empresas prestadoras de servicio de abastecimiento de agua potable para el consumo humano. Que cumplen al 100% con la norma sanitaria y cuentan con concepto favorable por parte de la Secretaría de Salud.

Listado de vehículos que transportan agua potable.

Consulte aquí el listado de vehículos que prestan servicios funerarios y cuentan con concepto sanitario favorable emitido por la Secretaría de salud

Listado de vehículos que prestan servicios funerarios.

Consulte aquí las instituciones prestadoras de servicios sociales de protección a la persona mayor, emitido en la última visita.

Instituciones prestadoras de servicios sociales de protección a la persona mayor con concepto favorable

Hoteles

Moteles

Funerarias, salas de velación y laboratorios

Medicamentos y tecnologías en salud

Medicamentos seguros

Medicamentos y dispositivos médicos

Consulte aquí los establecimientos farmacéuticos ubicados en la ciudad de Bogotá, que cumplen al 100% con la norma sanitaria y cuentan con concepto favorable por parte de la Secretaría de Salud, emitido en la última visita de Inspección Vigilancia y Control.

Establecimientos farmacéuticos distribuidores mayoristas con concepto favorable.

Establecimientos farmacéuticos distribuidores minoristas con concepto favorable.

Establecimientos distribuidores de cosméticos con concepto favorable.

Establecimientos farmacéuticos distribuidores minoristas de medicamentos de control especial (DMCE) con concepto favorable.

Tiendas naturistas y farmacias homeopáticas con concepto favorable.

Establecimientos comercializadores dispositivos médicos con concepto favorable.

Vehículos Transportadores de Medicamentos.

Ópticas (con y sin consultorio) con concepto favorable.

Productos químicos, industria y belleza

Seguridad química

Productos Químicos, Industria y Belleza

Consulte aquí las empresas de control de plagas, lavado y desinfección de tanques y descontaminación ambiental y el listado de vehículos transportadores de plaguicidas que cumplen al 100% con la norma sanitaria y cuentan con concepto favorable por parte de la Secretaría de Salud.

Listado de empresas aplicadoras de plaguicidas con concepto sanitario favorable.

Listado de empresas aplicadoras de plaguicidas con concepto sanitario favorable.

Listado de vehículos transportadores de plaguicidas con concepto sanitario favorable.

Consulte aquí los asistentes técnicos autorizados por la Secretaría de Salud para las empresas de control de plagas en Bogotá.

Consulte aquí los asistentes técnicos autorizados por la Secretaría de Salud para las empresas de control de plagas en Bogotá.

Consulte aquí las empresas almacenadoras y/o aprovechadoras de materiales como bolsas de suero, registradas bajo la resolución 482 de 2009 y su concepto sanitario.

Listado de empresas de control de plagas, lavado y desinfección de tanques de agua potable y descontaminación ambiental con concepto sanitario favorable.

4. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

NUEVA YORK

El Departamento de Salud revisa alrededor de 24.000 restaurantes por año para controlar el cumplimiento de las normas municipales y estatales de seguridad alimentaria. Desde julio del 2010, el Departamento de Salud ha exigido a los restaurantes que exhiban la calificación de letras con los resultados de las inspecciones sanitarias. Los restaurantes que tienen entre 0 y 13 puntos obtienen una A, los que tienen entre 14 y 27 puntos reciben una B y los

que tienen 28 o más reciben una C. Los resultados de la inspección son publicados en el sitio web del Departamento de Salud.

El puntaje de un restaurante depende de qué tan bien cumpla con los requisitos de la ciudad y del estado en cuanto a seguridad alimentaria. Los inspectores revisan la manipulación de los alimentos, la temperatura de los alimentos, la higiene personal, el mantenimiento de las instalaciones y del equipo y el control de plagas. Con cada infracción se obtiene un determinado número de puntos. Al final de la inspección, el inspector suma los puntos y este número es el puntaje de inspección del restaurante; cuanto más bajo sea el puntaje, mejor.

Los puntos por una infracción en particular dependen del riesgo de salud que representen para el público. Las infracciones se dividen en tres categorías:

- Un riesgo de salud para el público, como no mantener la comida a la temperatura correcta, resulta en un mínimo de 7 puntos. Si la infracción no se puede corregir antes de que finalice la inspección, el Departamento de Salud puede cerrar el restaurante hasta que esto se corrija.
- Una infracción crítica, por ejemplo, servir comida cruda como ensalada sin lavarla primero adecuadamente, implica un mínimo de 5 puntos.
- Una infracción general, como no desinfectar adecuadamente los utensilios de cocina, recibe al menos 2 puntos. Los inspectores asignan puntajes adicionales para reflejar el alcance de la infracción.
- Un nivel de condición de una infracción puede ir desde 1 (alcance mínimo) hasta 5 (alcance máximo). Por ejemplo, la presencia de un alimento contaminado es una infracción de nivel de condición 1, lo que genera 7 puntos. La presencia de cuatro o más alimentos contaminados es una infracción de nivel de condición 4, lo que genera 10 puntos.

5. IMPACTO FISCAL DEL PROYECTO.

El artículo 7° de la Ley 819 de 2003 *“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”*, establece que el impacto fiscal de todo Proyecto de Acuerdo debe ser explícito y compatible

con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, debiendo incluirse en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costos.

Sin embargo, debe considerarse lo establecido en la Sentencia C-911 de 2007 de la Corte Constitucional, que alude en lo referente al impacto fiscal de las normas el cual no puede convertirse en impedimento para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa en los siguientes términos:

“Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la actividad legislativa del Congreso de la República conducirían a concederle una forma de poder de veto al Ministro de Hacienda sobre las iniciativas de ley en el Parlamento. Es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda”.

MARIA CLARA NAME RAMIREZ

Honorable Concejal de Bogotá
Partido Alianza Verde

ANDRÉS ERNESTO GARCÍA VARGAS

Honorable Concejal de Bogotá
Partido Alianza Verde

ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

Honorable Concejal de Bogotá
Partido Liberal

PROYECTO DE ACUERDO NO 240 DE 2025**PRIMER DEBATE*****“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA FORTALECER LAS ACCIONES EN SALUD PÚBLICA EN ESTABLECIMIENTOS DE PREPARACIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL DISTRITO CAPITAL”*****EL CONCEJO DE BOGOTÁ D. C.*****En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el numeral 1º del artículo 12 del Decreto – Ley 1421 de 1993*****ACUERDA**

ARTÍCULO 1. La Secretaría Distrital de Salud incorporará dentro del aplicativo y/o plataforma de consulta de Conceptos Sanitarios en su página Web, los conceptos emitidos a establecimientos dedicados a la preparación y consumo de alimentos.

ARTÍCULO 2. La Secretaría Distrital de Salud habilitará canales que permitan a los ciudadanos denunciar y poner en conocimiento a la Secretaría de Salud, los establecimientos que presenten potenciales riesgos sanitarios para que se inicien los respectivos procesos de inspección vigilancia y control.

ARTÍCULO 3. La Secretaría Distrital de Salud realizará campañas de sensibilización para que los proveedores y productores de bienes y servicios, objeto de este Acuerdo, garanticen la seguridad sanitaria, a través del cumplimiento de los requisitos sanitarios bajo estándares de calidad e inocuidad.

ARTÍCULO 4. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CUMPLÁSE

PROYECTO DE ACUERDO NO 241 DE 2025**PRIMER DEBATE*****“POR EL CUAL SE PROMUEVE EL USO RESPONSABLE Y ÉTICO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL POSICIONANDO A BOGOTÁ D.C. COMO CIUDAD LÍDER EN LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS”*****I. OBJETO DEL PROYECTO.**

El objetivo central de este proyecto de acuerdo es promover el uso responsable y ético de la Inteligencia Artificial (IA). Para ello, se propone establecer lineamientos a nivel distrital que aseguren y fomenten la adecuada implementación de los sistemas de IA que se están adoptando en las entidades públicas de Bogotá. Esta iniciativa surge como una respuesta a los desafíos que presenta la rápida adopción de tecnologías emergentes en el entorno urbano y social, garantizando que su desarrollo y utilización se realicen en armonía con los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como con los principios de sostenibilidad, transparencia y equidad.

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Inteligencia Artificial está revolucionando la forma en que las ciudades administran sus recursos, brindan servicios y toman decisiones. No obstante, su integración también presenta desafíos significativos, como la discriminación algorítmica, la invasión de la privacidad, la falta de transparencia, el aumento de las disparidades y los sesgos sociales. Ante esta realidad, esta iniciativa busca también establecer un marco ético que permita mitigar estos riesgos y maximizar los beneficios de la inteligencia artificial en beneficio de toda la ciudadanía.

Los lineamientos que se presentan en esta iniciativa tiene como objetivo asegurar que la Inteligencia Artificial se utilice como una herramienta en pro del bienestar común,

respetando los derechos fundamentales y promoviendo valores esenciales como la transparencia, la equidad y la justicia social. A través de su labor, el lineamiento propondrá fomentar la confianza en el uso de la IA, empoderar a los ciudadanos y fortalecer la gobernanza tecnológica en Bogotá.

En síntesis, este proyecto de acuerdo refleja el compromiso que debe tener la ciudad con un desarrollo tecnológico ético, inclusivo y sostenible. El desarrollo de estos lineamientos no solo posicionará a la ciudad como un referente en la regulación responsable de la Inteligencia Artificial, sino que también contribuirá a la construcción de una sociedad más justa y equitativa en la era digital.

JUSTIFICACIÓN

Que la ciudad capital de Colombia cuente con unos lineamientos que promuevan el uso ético y responsable de la Inteligencia Artificial representa una medida fundamental para asegurar que los sistemas de IA respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos, fomenten la equidad y prevengan la aparición de sesgos o discriminación. Esta iniciativa no solo aborda los retos éticos y sociales que plantea la tecnología, sino que también establece un marco que permite maximizar los beneficios de esta, al tiempo que se mitigan sus posibles riesgos.

La presente iniciativa se alinea directamente con el Programa 35 “Bogotá Ciudad Inteligente” del Plan de Desarrollo 2024-2027, el cual establece como prioridad la adopción y promoción de soluciones basadas en inteligencia artificial (IA). Esta iniciativa constituye un marco habilitante fundamental para materializar dicho programa, pues establece las salvaguardas y lineamientos necesarios para que la implementación de estas tecnologías se realice de manera responsable, transparente y centrada en el ciudadano, garantizando que el proceso de transformación digital de la ciudad proteja los derechos fundamentales mientras se aprovecha el potencial de la IA para mejorar la eficiencia administrativa, la toma de decisiones y la interacción con los diferentes actores de la ciudad.

En concordancia con el actual Marco Ético para la Inteligencia Artificial en Colombia, esta iniciativa adopta principios fundamentales como la transparencia y explicación, privacidad, control humano de las decisiones, seguridad, responsabilidad, no discriminación, inclusión, prevalencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y beneficio social.

Según *AI Governance in 2023*, de la OCDE (2023), más de 60 países han desarrollado estrategias nacionales de IA que incluyen consideraciones éticas, destacando:

- La Unión Europea con "AI Act" (2023), primer marco regulatorio integral sobre IA.
- Helsinki Implementó "AI Register" en 2020, el primer registro público de sistemas de IA gubernamentales.
- Barcelona estableció la "Oficina de Algoritmos y Datos" (2021), que supervisa el uso ético de la IA.

La rápida adopción de la inteligencia artificial presenta desafíos importantes que demandan una intervención ética y regulatoria. Sin un marco adecuado, la IA puede:

- Discriminar a grupos vulnerables debido a sesgos en los algoritmos, pues a pesar de su avance técnico, los algoritmos de IA dependen de los datos con los que son entrenados. Si estos datos incorporan sesgos históricos, como la discriminación por género, raza o estatus socioeconómico, los sistemas tienden a perpetuar y amplificar esas desigualdades (Floridi, 2019). Estas distorsiones pueden afectar decisiones críticas, como la aprobación de créditos, el proceso de selección de empleo o la asignación de recursos públicos.
- Comprometer la privacidad de los ciudadanos por medio del uso no autorizado de datos personales, ya que con frecuencia, los sistemas de IA recopilan y procesan enormes cantidades de información personal sin el consentimiento informado de los usuarios. Esto no solo infringe derechos fundamentales, sino que también expone a las personas a riesgos significativos, como el robo de identidad o la explotación comercial de su información (OECD, 2021).

- Generar desconfianza en la población al implementar sistemas poco transparentes o mal explicados. La falta de claridad sobre el funcionamiento de los algoritmos de IA puede cultivar percepciones negativas entre los ciudadanos. Cuando las personas no comprenden cómo y por qué se toman determinadas decisiones automatizadas, es probable que desconfíen de estas tecnologías y de las instituciones que las utilizan (Russell y Norvig, 2021).
- Propiciar la exclusión social al diseñar soluciones tecnológicas que no tengan en cuenta la diversidad cultural y económica de la población. La IA implementada sin considerar esta diversidad puede dejar fuera a comunidades marginadas. Por ejemplo, tecnologías que no reconocen acentos regionales o que no son accesibles para personas con discapacidades pueden reforzar las barreras de exclusión, perpetuando desigualdades estructurales (Eubanks, 2018).

CONTEXTO NACIONAL.

Colombia, a través del CONPES 3975 de 2019 "Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial", establece la necesidad de desarrollar marcos éticos para el uso de la IA. En línea con esta política, el gobierno colombiano, ha incluido la creación de 73 Microcentros de aprendizaje de IA en 27 municipios y el desarrollo de una nueva política nacional de IA con seis objetivos estratégicos.

La creciente digitalización y el uso masivo de datos han propiciado un entorno donde la IA se convierte en una herramienta esencial. Sin embargo, esta rápida adopción a menudo carece de la supervisión ética necesaria. La falta de regulación puede provocar violaciones a derechos fundamentales, un aumento en las desigualdades, la exclusión de comunidades vulnerables y una disminución de la confianza en las instituciones públicas. En cambio, la creación de un Comité Ético puede generar múltiples beneficios, como la mejora en la calidad de los servicios públicos y el fortalecimiento del tejido social.

Por último, teniendo en cuenta el objeto de este proyecto es un uso ético y responsable de la IA por parte de las entidades de la administración, el mismo generará una mejor gestión y transparencia de los datos que maneje. Esto es muy importante pues alinea esta iniciativa con los ODS, en tanto el objetivo 16, denominado como *Paz, Justicia e Instituciones Sólidas*, vemos que la meta 16.6 pretende “*Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes*”.

III. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA

A la fecha no hay proyectos de acuerdo en este sentido

IV. MARCO JURÍDICO

MARCO NORMATIVO

NACIONAL

1. Constitución Política de Colombia:

- **“Artículo 13.** *Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.*”
- **“Artículo 15.** *Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.*”

- **“Artículo 20.** *Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.*

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.”

2. **Ley 1341 de 2009 “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC-, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones”**

“Artículo 2. Principios orientadores: *La investigación, el fomento, la promoción y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son una política de Estado que involucra a todos los sectores y niveles de la administración pública y de la sociedad, para contribuir al desarrollo educativo, cultural, económico, social y político e incrementar la productividad, la competitividad, el respeto a los Derechos Humanos inherentes y la inclusión social.*

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deben servir al interés general y es deber del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades, a todos los habitantes del territorio nacional.

Son principios orientadores de la presente ley:

1. **Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.** *El Estado y en general todos los agentes del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deberán colaborar, dentro del marco de sus obligaciones, para priorizar el acceso y uso a las*

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la producción de bienes y servicios, en condiciones no discriminatorias en la conectividad, la educación, los contenidos y la competitividad. En el cumplimiento de este principio el Estado promoverá prioritariamente el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la población pobre y vulnerable, en zonas rurales y apartadas del país.

(...)

3. Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”

***Artículo 1°. Objeto.** La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma.*

4. Decreto 1263 de 2022 “Por el cual se adiciona el Título 22 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de definir lineamientos y estándares aplicables a la Transformación Digital Pública”

***“Artículo 2.2.23.1.2. Definiciones.** Para la interpretación del presente título, las expresiones aquí utilizadas deben ser entendidas con el significado que a continuación se indica:*

(...)

3.1 Transformación Digital: *Corresponde al proceso de explotación de tecnologías digitales que tiene la capacidad de crear nuevas formas de hacer las cosas en todos los sectores de la administración pública, generando nuevos modelos de desarrollo, procesos y la creación de productos y servicios, que a su vez produce valor, principalmente a través de la digitalización que representa la conversión de datos y procesos análogos hacia formatos que pueden ser entendidos y procesados por máquinas.*

3.2. Inteligencia artificial: *Corresponde a un campo de la informática dedicado a resolver problemas cognitivos comúnmente asociados con la inteligencia humana o seres inteligentes, entendidos como aquellos que pueden adaptarse a situaciones cambiantes. Su base es el desarrollo de sistemas informáticos, la disponibilidad de datos y los algoritmos.”*

5. Documento CONPES 3995 del 01 de julio 2020 “Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital”:

“El presente documento CONPES formula una política nacional que tiene como objetivo establecer medidas para ampliar la confianza digital y mejorar la seguridad digital de manera que Colombia sea una sociedad incluyente y competitiva en el futuro digital. Para alcanzar este objetivo, en primer lugar, se fortalecerán las capacidades en seguridad digital de los ciudadanos, del sector público y del sector privado del país; en segundo lugar, se actualizará el marco de gobernanza en materia de seguridad digital para aumentar su grado de desarrollo y finalmente, se

analizará la adopción de modelos, estándares y marcos de trabajo en materia de seguridad digital, con énfasis en nuevas tecnologías.”

6. Documento CONPES 3975 del 08 de noviembre de 2019 “Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial”

“El presente documento CONPES formula una política nacional para la transformación digital e inteligencia artificial. Esta política tiene como objetivo potenciar la generación de valor social y económico en el país a través del uso estratégico de tecnologías digitales en el sector público y el sector privado, para impulsar la productividad y favorecer el bienestar de los ciudadanos, así como generar los habilitadores transversales para la transformación digital sectorial, de manera que Colombia pueda aprovechar las oportunidades y enfrentar los retos relacionados con la Cuarta Revolución Industrial (4RI).”

7. Directiva Presidencial 03 de 2021 “Lineamientos para el uso de servicios en la nube, inteligencia artificial, seguridad digital y gestión de datos”

“2. Inteligencia Artificial (IA):

2.1. El uso de sistemas de IA deberá propender por el crecimiento inclusivo, el desarrollo sostenible y el bienestar de los ciudadanos. La IA debe mejorar la calidad de vida de los colombianos.

2.2. En caso de implementar proyectos de IA, deberán informar sobre sus avances, dentro de los respectivos informes anuales de rendición de cuentas.

2.3. Fomentar la participación de los funcionarios públicos en cursos, capacitaciones o programas de talento dirigidos a generar mayor conocimiento y capacidades sobre IA, su implementación, características y funcionalidades, dando cumplimiento a las directrices de austeridad en el gasto.

2.4. Facilitar la realización de sandboxes regulatorios en IA en el marco de la coordinación y articulación interinstitucional.

2.5. Efectuar el desarrollo de los Proyectos de IA en el marco de la coordinación interinstitucional y en apoyo a la cooperación internacional que surja en la materia, permitiendo el intercambio de información y el seguimiento a las recomendaciones, con sujeción a las funciones asignadas y a la normativa aplicable.

2.6. En el marco de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones", informar a la ciudadanía cuando estén implementando un proyecto que incorpore sistemas de IA y el propósito de su uso, brindando información clara y actualizada, con el fin de asegurar el conocimiento de esta tecnología y las características de los proyectos.

2.7. Formular y desarrollar proyectos de IA, dando cumplimiento a las recomendaciones y principios éticos en la materia.

2.8. Desplegar los sistemas de IA sobre la base de sus funciones, el contexto y en consonancia con el estado de la técnica. Para este fin implementarán medidas que permitan demostrar de forma activa su diligencia y cuidado en la implementación de estos sistemas.

2.9. Según sus roles, el contexto y su capacidad para actuar, aplicar un enfoque sistemático de gestión de riesgos en cada fase del ciclo de vida del sistema de IA para abordar los riesgos relacionados con los sistemas de IA y su implementación, reduciendo cualquier riesgo de discriminación, entre otras posibles afectaciones.

2.10. Documentar los procesos y las decisiones adoptadas durante el ciclo de vida del sistema de IA, para permitir el análisis de sus resultados, teniendo en cuenta el contexto y siendo coherente con el estado de la técnica. (...)”

V. IMPACTO FISCAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 7° de la ley 819 de 2003, la implementación de la presente iniciativa no genera impacto fiscal que afecte las finanzas del distrito en el mediano plazo, por lo que no genera erogaciones presupuestales adicionales a las ya establecidas.

VI. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

DECRETO 1421 DE 1993

ARTÍCULO 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

ARTÍCULO 13. Iniciativa. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales y el alcalde mayor por conducto de sus secretarios, jefes de departamento administrativo o representantes legales de las entidades descentralizadas. El personero, el contralor y las juntas administradoras los pueden presentar en materias relacionadas con sus atribuciones. De conformidad con la respectiva ley estatutaria, los ciudadanos y las organizaciones sociales podrán presentar proyectos de acuerdo sobre temas de interés comunitario.

Cordialmente,

ANDRÉS BARRIOS BERNAL

Concejal de Bogotá

PROYECTO DE ACUERDO NO 241 DE 2025

**PRIMER DEBATE
PROYECTO DE ACUERDO ____ DE 2025**

“Por el cual se promueve el uso responsable y ético de la Inteligencia Artificial posicionando a Bogotá D.C. como ciudad líder en la implementación de nuevas tecnologías”

El Concejo de Bogotá en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, especialmente las contenidas en los numeral 1 y 7 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de

1993 y en concordancia con los artículos 25 y 313 de la Constitución Política de Colombia,

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. Establecer los lineamientos que garanticen y promuevan el uso responsable y ético de la inteligencia artificial posicionando a Bogotá como una ciudad líder en la implementación de nuevas tecnologías.

ARTÍCULO 2. La implementación y reglamentación de los lineamientos deberá ser liderada por la Secretaría General, la Alta Consejería para las TIC y la Secretaría Distrital de Gobierno, en conjunto con las demás entidades distritales que sean necesarias.

Parágrafo. Las anteriores entidades reglamentarán los procedimientos y brindarán la asesoría necesaria para la activación y la garantía de la aplicación de los lineamientos en un lapso no mayor a seis (6) meses desde la sanción de este Acuerdo Distrital.

ARTÍCULO 3. Líneas de Acción. Los lineamientos se orientarán según los principios y disposiciones del Marco Ético para la Inteligencia Artificial en Colombia vigente. Las líneas de acción comprenderán, como mínimo, los siguientes aspectos:

1. Establecer un lineamiento obligatorio para el uso responsable de sistemas de Inteligencia Artificial Generativa (ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini, Perplexity, etc.) en entidades distritales, prohibiendo expresamente el ingreso de datos personales, información confidencial o sensible de la ciudadanía.
2. Establecer un código de conducta distrital para el uso de IA que defina claramente qué prácticas están permitidas y cuáles prohibidas en todas las entidades del distrito.
3. Desarrollar lineamientos específicos para el uso de IA en sectores críticos como salud, educación y seguridad, con énfasis en la protección de derechos fundamentales.
4. Crear un sistema de registro y monitoreo del uso de herramientas de IA en las entidades distritales, donde se documente qué herramientas se utilizan, para qué propósitos y qué tipo de información se procesa.

5. Implementar un proceso de verificación humana obligatoria para todas las respuestas o contenidos generados por IA que vayan a ser utilizados en comunicaciones oficiales o servicios ciudadanos.
6. Desarrollar un programa de capacitación obligatoria para funcionarios públicos sobre el uso ético y responsable de herramientas de IA, incluyendo mejores prácticas, riesgos de seguridad y protección de datos.
7. Incluir mecanismos específicos para el manejo de datos sensibles en sistemas de IA, como la anonimización.
8. Establecer la obligatoriedad de etiquetar todo contenido generado por IA (imágenes, videos, textos, voces, etc.) que sea utilizado en comunicaciones oficiales o servicios públicos.
9. Crear un canal de denuncias ciudadanas para reportar el uso inadecuado de IA en entidades distritales o posibles violaciones al lineamiento ético.
10. Desarrollar guías específicas para el uso de IA en la automatización de procesos administrativos, estableciendo qué decisiones no pueden ser delegadas a sistemas automatizados.
11. Definir lineamientos para la contratación de servicios que incluyan IA, exigiendo a proveedores garantías de transparencia, seguridad y protección de datos.
12. Implementar laboratorios de innovación ciudadana en las alcaldías locales donde se brinde capacitación gratuita sobre el uso y desarrollo de soluciones tecnológicas usando IA de manera ética y responsable.
13. Implementar talleres prácticos en colegios distritales sobre el uso ético de IA generativa, adaptados a diferentes niveles educativos y orientados a desarrollar pensamiento crítico en los estudiantes.

14. Establecer un programa de certificación distrital en uso ético de IA para docentes de colegios públicos, que les permita guiar adecuadamente a los estudiantes en el uso de estas herramientas.
15. Establecer la obligatoriedad de incluir en los manuales de funciones y contratos las responsabilidades específicas sobre el uso ético y responsable de la IA y las consecuencias que conllevan el incumplimiento.

ARTÍCULO 4. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PROYECTO DE ACUERDO NO 242 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y LA PLANTA DE EMPLEOS DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C., Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

1. OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto de Acuerdo tiene como objeto modernizar y modificar la estructura organizacional y la planta de personal de la Personería de Bogotá D.C., teniendo en cuenta que, desde la última reforma integral de la estructura organizacional de la Personería de Bogotá, D.C., fue adelantada mediante el Acuerdo 755 de 2019, han transcurrido alrededor de cinco (5) años. Durante ese período la entidad, así como la misma ciudad, han evolucionado, y por la misma razón, tienen nuevas necesidades para dar respuesta a los requerimientos de los Capitalinos.

La Entidad ha identificado la necesidad urgente de una modernización y una mejora de su capacidad institucional interna, con el rediseño de los siguientes aspectos organizacionales:

- ✓ **Rediseñar y modernizar la estructura interna de la Entidad**, con la creación de nuevas dependencias, cargos, así como la reorganización y actualización de funciones.
- ✓ **Fortalecimiento y formalización de la planta de personal administrativa** de la Personería de Bogotá, con la creación de empleos del nivel directivo, asesor, profesional, técnico y asistencial que permitan mejorar la capacidad de respuesta interna de las áreas, de acuerdo con las necesidades identificadas y la carga laboral.
- ✓ **Actualización integral del manual específico de funciones y competencias laborales**. El manual es un instrumento estratégico para la gestión del personal que se debe rediseñar con base en la nueva estructura y generar un único acto administrativo que permita la administración de la planta global.
- ✓ **Nivelación salarial**: Actualmente la escala salarial presenta una evidente discordancia entre los grados de Profesional Universitario que recibe una remuneración superior a la de un Profesional Especializado. Este hecho podría ser considerado una contravención a los principios de equidad y progresividad en materia salarial.
- ✓ **Disminución de la dispersión de la escala salarial de la Entidad**: En los acuerdos

realizados por la administración distrital, con las organizaciones sindicales se estableció que, en cumplimiento del principio de progresividad, se contemplará entre otros aspectos, el estudio correspondiente al achatamiento de la escala salarial de la planta de personal de las Entidades. Para ello, se debe contar con la descripción de cargos, el perfil de competencias y la formación académica requerida. La escala salarial debe nacer de una estrategia de manejo del personal que sirva para atraer, motivar o retener el talento humano de la Entidad.

- ✓ **Costo total del rediseño:** Costos de la planta propuesta

2. JUSTIFICACIÓN

Las consideraciones técnicas y económicas de la segunda fase del proyecto de fortalecimiento organizacional adelantado por la Personería de Bogotá D.C, cuya primera fase se concretó con la expedición del Acuerdo 755 de 2019, se actualizó teniendo en cuenta tanto las necesidades institucionales, como las requeridas para garantizar la óptima atención de los grupos de interés, enfocándose en el servicio a la ciudadanía, pilar transversal a la misionalidad de la Entidad.

La presente propuesta se encuentra armonizada con el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”; se orienta a garantizar una mejor experiencia de servicio a los grupos de interés, fortaleciendo la articulación intersectorial, la toma de decisiones y la cultura de conocimiento; en función de una mayor eficiencia y eficacia que garanticen la entrega de bienes y servicios de calidad a la ciudadanía.

La modernización de la estructura y la planta de personal de la Entidad responde a las dinámicas y a los cambios de la ciudad, que ha tenido un incremento considerable en su población durante las últimas décadas, lo que ha conllevado a cambios normativos que afectan la interacción con la ciudadanía, buscando garantizar una gestión pública más cercana, caracterizada por esquemas de operación articulados, ofreciendo servicios de manera integral, con presencia del gobierno abierto en el territorio, bajo un marco de transparencia e integridad.

A través de una estructura robusta que genere mayor capacidad institucional, se avanza hacia la coordinación efectiva de las dependencias de la Entidad; el desarrollo de alianzas para el intercambio y transferencia de conocimientos técnicos permite mejorar la interacción de la Entidad en contacto permanente con la ciudadanía, generando confianza, evitando retrasos y sobre costos, mejorando la capacidad de reacción ante imprevistos sociales, económicos, ambientales, culturales y territoriales propios de los procesos bajo competencia de la Personería de Bogotá, D.C.

Normativamente, el presente documento se enmarca y da estricto cumplimiento al artículo

46 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 228 del Decreto Ley 019 de 2012; La Ley 1437 de 2011, el Decreto 1083 de 2015 (Artículo 2.2.12.3); el Decreto Distrital 151 de 2024; el Decreto Distrital 643 de 2023; y particularmente la Resolución 269 de 2019 del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.

La segunda fase del proyecto de fortalecimiento institucional de la Personería de Bogotá, en particular el incremento de la planta de empleos se funda entre otras, en las necesidades, derivadas de: a) La expedición Decreto Distrital 033 de 2021, que aumentó la cantidad de Inspecciones de Policía en el Distrito; b) las funciones y responsabilidades que el Código de Policía y Convivencia le asigna a las Personerías que no se alcanzaron a cubrir con la ampliación de planta de 2019; c) la previsión de una nueva división político administrativa del distrito, contemplada en el POT de Bogotá (Decreto Distrital 555 de 2021); y d) la necesidad de cubrir todos los sectores en los que se prestan servicios al ciudadano en la administración distrital y que requieren de la garantía de derechos.

Por lo anterior, la propuesta de ampliación de planta completa la Fase 1 concretada con el Acuerdo Distrital 755 de 2019 que buscó integrar las atribuciones y competencias que por norma habían sido establecidos a la personería desde la expedición del Acuerdo 34 de 1993, y que no se había incluido en las normas de estructura de la Personería como lo son: (i) competencias de Veeduría frente al sistema de seguridad social en salud, (ii) la vigilancia y atención a población desplazada, (iii) seguimiento a curadurías urbanas, (iv) la intervención del ministerio público en el proceso penal cuando sea requerido en el marco de sus funciones, (v) realizar veeduría sobre el cumplimiento de la política de familia, (vi) ejercer ministerio público ante diligencias por infracciones a normas de tránsito, (vii) intervenciones en procesos de restablecimiento de derechos y actuaciones en cuanto a la ley de infancia y adolescencia, (viii) las competencias asignadas en el código nacional de policía y convivencia ciudadana ejerciendo ministerio público a la actividad o a los procedimientos de policía, (ix) así como hacer parte de la conformación de consejos de Seguridad y Convivencia.

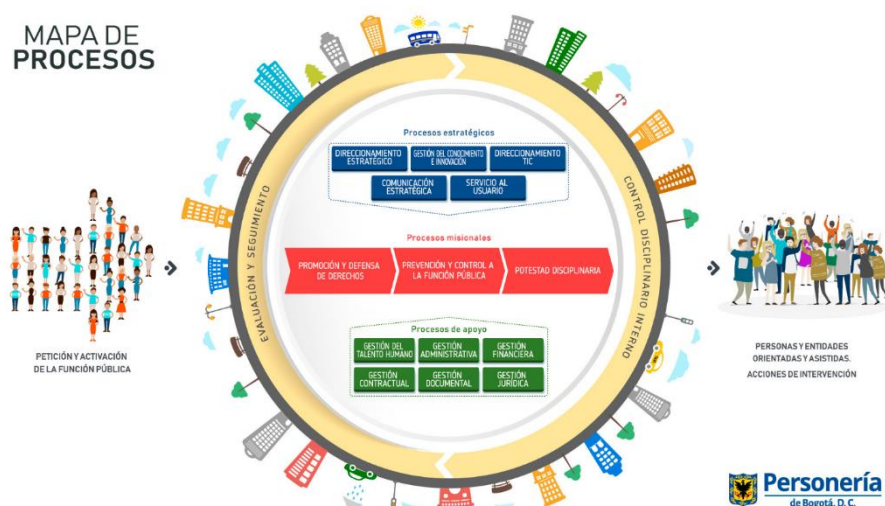
Una de las características más importantes de la presente propuesta es el fortalecimiento de la gestión de las Personerías Locales y el fortalecimiento del proceso misional del eje de Ministerio Público, asignando recurso humano a las delegadas. A partir de la profesionalización del recurso humano asignado y la reducción de las actuales sobrecargas de trabajo, derivadas del aumento de las problemáticas locales y su consecuente aumento de demandas ciudadanas.

Así las cosas, el proyecto de acuerdo que a continuación se presenta enfatizó en la revisión de la prestación del servicio de la Personería de Bogotá, nuevas competencias, su entorno externo, sus procesos y su revisión de cargas laborales y perfiles como puntos de partida para mostrar las justificaciones técnicas que evidencian la necesidad de realizar una ampliación y un cambio organizacional entorno a la planta de personal vigente.

3. REDISEÑAR Y MODERNIZAR LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA ENTIDAD.

3.1. Modificación de la Estructura y Creación de Nuevas Dependencias

Acorde con el mapa de procesos de la Entidad y a partir del diagnóstico y estudio técnico realizado por la Personería de Bogotá, D.C., se plantea la creación de las siguientes dependencias, ubicadas en los procesos estratégicos, misionales y de apoyo a la gestión, como se muestra a continuación:



3.1.1. PROCESOS ESTRATÉGICOS: Nuevas dependencias

- ✓ Personería delegada para el Relacionamiento con el Ciudadano y Asuntos Locales
- ✓ Personería Local Usaqué II
- ✓ Personería Local Chapinero II
- ✓ Personería Local San Cristóbal II
- ✓ Personería Local Bosa II
- ✓ Personería Local Kennedy II
- ✓ Personería Local Fontibón II
- ✓ Personería Local Engativá II
- ✓ Personería Local Suba II
- ✓ Personería Local Rafael Uribe II
- ✓ Personería Local Ciudad Bolívar II
- ✓ Dirección para la Orientación y Asistencia a las personas
- ✓ Dirección para la Asistencia en Asuntos Jurisdiccionales
- ✓ Subdirección de Ingeniería de Software, bases de datos y seguridad
- ✓ Subdirección de Infraestructura Redes y Soporte

- ✓ Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales

3.1.2. PROCESOS MISIONALES: Nuevas dependencias

- ✓ Personería delegada para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos II
- ✓ Personería delegada para el Sector de Gestión Pública y Gobierno
- ✓ Personería delegada para el Sector de Gestión Jurídica
- ✓ Personería delegada para el Sector Hacienda
- ✓ Personería delegada para el Sector Movilidad
- ✓ Personería delegada para el Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo
- ✓ Personería delegada para el Sector Planeación
- ✓ Personería delegada para el Sector Educación
- ✓ Personería delegada para el Sector Cultura, Recreación y Deporte
- ✓ Personería delegada para el Sector Hábitat
- ✓ Personería delegada para el Sector Mujeres
- ✓ Personería delegada para el Sector Integración Social
- ✓ Personería delegada para para Instrucción Disciplinaria I
- ✓ Personería delegada para para Instrucción Disciplinaria II
- ✓ Personería delegada para para Instrucción Disciplinaria III
- ✓ Personería delegada para Juzgamiento Disciplinario I
- ✓ Personería delegada para Juzgamiento Disciplinario II

3.1.3. PROCESOS DE APOYO: Nuevas dependencias

- ✓ Subdirección de Administración de Personal
- ✓ Subdirección de Gestión Documental

La necesidad de crear estas nuevas dependencias se justifica de la siguiente manera:

- ✓ Personería delegada para el Relacionamiento con el Ciudadano y Asuntos Locales
- ✓ Dirección para la Orientación y Asistencia a las personas
- ✓ Dirección para la Asistencia en Asuntos Jurisdiccionales
- ✓ Personería Local Usaquén II
- ✓ Personería Local Chapinero II
- ✓ Personería Local San Cristóbal II
- ✓ Personería Local Bosa II
- ✓ Personería Local Kennedy II
- ✓ Personería Local Fontibón II
- ✓ Personería Local Engativá II
- ✓ Personería Local Suba II
- ✓ Personería Local Rafael Uribe II
- ✓ Personería Local Ciudad Bolívar II

La supresión de la Personería Delegada para la Coordinación de Personerías Locales, nace a partir de las necesidades del ciudadano que requiere de manera integral todos los servicios a disposición en las Personerías Locales, de manera articulada y estratégica. En la actualidad, algunos de los servicios que presta la entidad, funcionan en el Centro de Atención al Ciudadano (C.A.C), como los son el centro de conciliación y las Personerías Delegadas para Asuntos Jurisdiccionales y Orientación y Asistencia a las Personas. En dicho contexto, es necesario suprimir tal dependencia, en aras de crear una nueva en la que se fortalezca la oferta de los servicios que presta este órgano de control de manera integral y llegar a la mayor cantidad de ciudadanos en las diferentes localidades del distrito, bajo un liderazgo que articule la totalidad de los servicios. En la actualidad, la coordinación únicamente atiende las 20 personerías locales, encontrándose que el ejercicio y la dinámica propia de la Personería no están llegando en adecuada forma a las localidades, ya que, con nuestra actual estructura, al interesado le toca desplazarse hasta el nivel central. La nueva articulación permitirá que de la mano de las tecnologías el acceso a nuestros servicios sea de mayor eficiencia y oportunidad.

Dentro de la planeación estratégica institucional se crea la línea “La Personería de Bogotá es: Cercana a la Ciudadanía” la cual busca promover la participación ciudadana y la articulación interinstitucional para garantizar la protección de los derechos y el interés público, es por ello, que se requiere crear La Personería Delegada para el Relacionamento con el ciudadano y Asuntos Locales, que articulará las políticas, estrategias y atención integral a la ciudadana en los diferentes puntos de atención en el territorio y a través de los diferentes canales.

El Relacionamento con el Ciudadano y Asuntos Locales se constituye en uno de los principales frentes de trabajo de la Personería de Bogotá, D.C., considerándose como uno de los procesos estratégicos. El relacionamiento con el ciudadano no se limita a una sola área de la Entidad, dentro del proceso interactúan varias dependencias ya que los servicios que se brindan a la ciudadanía abarcan de manera transversal todos los procesos tanto estratégicos como misionales, desde la centralización en la alta dirección como en las funciones descentralizadas, especialmente en lo local.

Según el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) la ciudadanía y en general los habitantes del Distrito Capital de Bogotá, se constituyen en el grupo de valor a los cuales va dirigida la misionalidad de nuestra Entidad.

El relacionamiento con el ciudadano involucra a toda la Entidad, el ejercicio de la promoción y defensa de derechos y de la prevención y control a la función pública comprende y opera a través de mecanismos participativos como las audiencias, mesas de trabajo, comités, consejos, eventos, y cualquier otro acompañamiento que requiera la ciudadanía para fortalecerla, lo que le da una dimensión transversal a la responsabilidad que tenemos con todas las partes interesadas y las cuales se formulan y ajustan en el plan de participación de la Personería de Bogotá, D.C.

Para que este acompañamiento sea eficiente, la ciudadanía debe tener acceso oportuno a información confiable, debe estar organizada y las entidades vigiladas deben llevar a cabo ejercicios de rendición de cuentas, entre otros aspectos.

En este sentido, resulta necesario realizar actividades de acompañamiento técnico para fortalecer la participación ciudadana, generando como resultado incrementar el éxito del control social, cuyo objetivo consiste que las autoridades y entidades sobre las que se ejerce control desarrollen buenas prácticas y busquen mecanismos para minimizar los riesgos, incrementando así la transparencia, disponibilidad y confiabilidad de la información generada, lo cual debería redundar en una disminución de los hechos irregulares y casos de corrupción.

Así mismo, la Personería de Bogotá, D. C., se proyecta como Entidad efectiva, oportuna, resolutive y cercana a la ciudadanía, con un talento humano competente haciendo uso de las tecnologías de la información de última generación y comprometida con los objetivos de desarrollo sostenible.

Para el cumplimiento de estos objetivos, se hace necesario articular las actividades de todas las dependencias, que permitan incrementar la participación, en los diferentes escenarios donde intervenimos como entidad, con el fin de evitar procesos repetitivos, lograr articular y armonizar adecuadamente los esfuerzos y recursos.

Aunado a lo anterior, el artículo 17 de la Ley 2052 de 2020, señala que “(…) *en la Nación, los Departamentos, Distritos y Municipios con población superior a 100.000 habitantes, se deberá crear dentro de su planta de personal existente una dependencia o entidad única de relación con el ciudadano que se encargará de liderar al interior de la entidad la implementación de las políticas que incidan en la relación Estado Ciudadano definidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (...)*”, por lo que se hace necesario crear la Personería Delegada para el Relacionamiento con el Ciudadano y Asuntos Locales que lidere al interior de la Entidad el servicio a la ciudadanía, concebido como un proceso estratégico.

De cara a la ciudadanía, las Personerías Delegadas para Asuntos Jurisdiccionales, Orientación y Asistencia a las personas, la Dirección de Conciliación y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, las Personerías Locales, articularan el cumplimiento de su función de servicio a la ciudadanía, a través de la Personería delegada para el Relacionamiento con el Ciudadano y Asuntos Locales, la cual fijará las políticas de atención y participación ciudadana, las que serán ejecutadas a través de los diversos canales de atención.

Actualmente la Entidad atiende un gran número de usuarios en las Personerías delegadas

para Orientación y Asistencia a las Personas y para Asuntos Jurisdiccionales, cifras que se detallan en el estudio técnico que acompaña esta propuesta de modernización y rediseño institucional, la primera con la atención directa a la ciudadanía a través del Centro de Atención a la Comunidad (CAC) y la segunda con la atención de asuntos constitucionales (tutelas, acciones populares, de grupo, etc).

La atención al ciudadano a través de canales accesibles a la ciudadanía y el fortalecimiento de las áreas de atención se encamina a la formulación de estrategias de habilidades y competencias en los grupos de valor y servidores públicos para la optimización de la relación con la ciudadanía. De acuerdo con lo anterior, se pretende dar a conocer a la ciudadanía en general, las formas de acceder a los diferentes procesos de la Personería de Bogotá, D.C., brindar la articulación de las políticas de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Racionalización de Trámites, Participación Ciudadana que incluye la Rendición de Cuentas y Servicio al Ciudadano acorde a los lineamientos de la Ley 2052 de 2020.

Desde lo local podemos afirmar que es la base de la vida ciudadana, con este esquema de cercanía con el ciudadano, confluyen los poderes públicos del Estado que deben estar abiertos a la iniciativa y la participación ciudadana, las Personerías Locales son la representación de la Entidad más próxima a la ciudadanía, a través de ellas se procura la solución de sus requerimientos como entidad de control.

Las estadísticas, que forman parte del estudio técnico de este proyecto de acuerdo, indican que existen localidades con problemáticas disímiles, Bogotá se divide en 20 localidades y 112 UPZ, según el censo de 2018, la población total ascendió a 7.412.566, de los cuales el 99,7%, se concentró en la cabecera municipal y en los centros poblados y rural disperso el 0,3% restante.

Municipios como Soacha, presentan una población de 806,253 habitantes, incluso inferior a las de localidades como Suba con 1.252.675 y Kennedy con 1.060.016 habitantes, lo que conlleva a que las localidades se deben fortalecer, aunado al hecho de que algunas de ellas presentan represamiento de procesos y otras mayores problemáticas con violencia intrafamiliar.

Es así como se plantea la creación de 10 localidades adicionales que ayuden a fortalecer la gestión de la Entidad desde lo local, con miras a brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

- ✓ **Subdirección de Ingeniería de Software, bases de datos y seguridad**
- ✓ **Subdirección de Infraestructura, Redes y Soporte**

En el marco de la transformación digital para mejorar la relación Estado-ciudadano, se hace indispensable el fortalecimiento de la Dirección de Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones de la Personería de Bogotá, D.C., con la creación de 2 subdirecciones encargadas del software, hardware y la seguridad de la información.

La especialización de estas 2 nuevas áreas (i) Ingeniería de Software, bases de datos y seguridad y (ii) de Infraestructura, Redes y Soporte, permitirá que al interior de la Entidad se brinden servicios adecuados, tanto para la atención al ciudadano, como el soporte para la prestación de estos, en armonía con el componente de transformación digital, siguiendo los estándares que para tal efecto defina el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

Al igual que las entidades vigiladas, la Personería de Bogotá, D.C., también debe ser competitiva desde el punto de vista de las comunicaciones y la información, para lograr un mayor acercamiento a la ciudadanía a través de la implementación de diversos canales de atención.

Se prevé reorganizar la Dirección de TIC, con la creación de 2 subdirecciones (i) Ingeniería de Software, bases de datos y seguridad y (ii) de Infraestructura, Redes y Soporte, que se encarguen de la racionalización, digitalización, automatización, trámites en línea, revisión, compilación y formularios únicos, entre otros, dispuestos para la atención a la ciudadanía, labor que debe ser transparente para el usuario, por lo que el apoyo a las diferentes dependencias que brindan servicios a la comunidad, debe ser atendido desde labores de software, bases de datos, seguridad de la información, Infraestructura, redes y soporte.

✓ **Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales**

Surge una nueva necesidad en la Personería de Bogotá, orientada a la creación de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales a través de la cual se busca articular procesos e iniciativas que faciliten la cooperación con instituciones homólogas o afines a nivel nacional e internacional, especialmente en materia de derechos humanos, alineados con la misión, visión y objetivos estratégicos e institucionales que agreguen valor a la misionalidad.

Fortalecer las relaciones nacionales e internacionales a través de la suscripción, consolidación y renovación de convenios, facilita el relacionamiento con pares para la planeación, diseño y ejecución de proyectos de cooperación internacional, igualmente articula y sintetiza las tendencias recientes y pertinentes en el campo de la internacionalización en cumplimiento de la misión, la visión, objetivos estratégicos y políticas institucionales.

✓ **Propuesta para la modificación de funciones de la Dirección de Gestión del Conocimiento e Innovación**

La Dirección de Gestión del Conocimiento e Innovación, como responsable de un proceso estratégico, fortalece de manera transversal a las demás dependencias, buscando promover la generación, conservación y transferencia del conocimiento que resulta valioso para la Entidad para fortalecer la toma de decisiones informadas, optimizar los procesos internos y externos, facilitar el aprendizaje continuo y la adaptación al cambio, así como incentivar la creación de nuevas ideas que permitan mejorar la calidad de los servicios y la experiencia de la ciudadanía.

La Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación establecida en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la Función Pública tiene como propósito facilitar el aprendizaje y la adaptación de las entidades a los cambios y a la evolución de su entorno, a través de la gestión de un conocimiento colectivo y de vanguardia, que permita generar productos/servicios adecuados a las necesidades de los ciudadanos y, además, propicie su transformación en entidades que a través de su dinámica, faciliten la innovación institucional en el marco de un Estado eficiente y productivo.¹²²

Con el propósito de dar cumplimiento a esta política y al objetivo del MIPG “Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua”, se propone realizar una modificación a las funciones de la Dirección de Gestión del Conocimiento y la Innovación de la Personería de Bogotá, D.C., establecidas en el Acuerdo 755 de 2019 del Concejo de Bogotá, D.C.

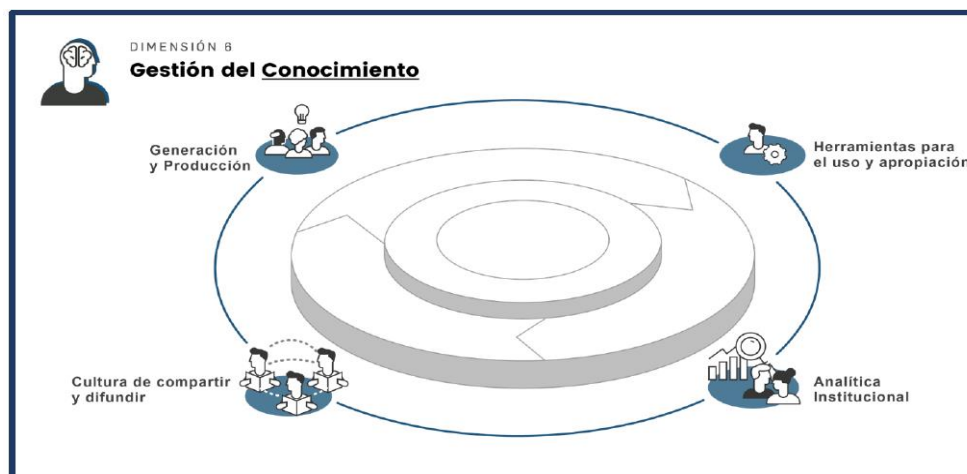
Actualmente, las funciones se encuentran constituidas de la siguiente manera:

1. Promover la investigación al interior de la Entidad con el fin de apoyar el cumplimiento de su misión, objetivos y funciones.
2. Promover el desarrollo de mecanismos de innovación para generar soluciones orientadas a mejorar la gestión de los procesos institucionales.
3. Realizar los estudios y preparar las recomendaciones de mejores prácticas que tengan por objeto la promoción y defensa de derechos, la prevención y control a la función pública y el ejercicio de la potestad disciplinaria.

¹²² Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (2023). Versión 5. Departamento Administrativo de la Función Pública. Recuperado de: https://www1.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/2023-03-21_Manual_operativo_mipg_5V.pdf/dbe560cc-e81d-bd7b-b23f-075184e029c6?t=1679509602732

4. Orientar el desarrollo de estudios e investigaciones sobre temas que incidan en la operación de los diferentes procesos y/o que sean solicitados por el despacho del o la Personero de Bogotá.
5. Dirigir y apoyar la ejecución de investigaciones académicas y sus publicaciones, y elaborar los pronunciamientos a que haya lugar producto de los resultados de investigación.
6. Organizar metodológicamente las investigaciones en gestión del conocimiento e innovación sobre temas de interés de la Entidad.
7. Orientar el uso, aprovechamiento y disponibilidad de la información producida como resultado de la gestión del conocimiento de la Entidad.
8. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Estas funciones, aunque contribuyen con el desarrollo y el fortalecimiento de la línea de investigación, de las capacidades en gestión del conocimiento y la promoción de una cultura de la innovación, no se encuentran estructuradas de acuerdo con las acciones establecidas en los cuatro ejes de acción de la Sexta Dimensión del MIPG – Gestión del Conocimiento y la Innovación.



Fuente: Función Pública. 2017

De acuerdo con lo anterior, se propone realizar una transformación de las funciones, de la siguiente forma:

1. Promover la investigación al interior de la Entidad con el fin de apoyar el cumplimiento de su misión, objetivos y funciones, y generar nuevos conocimientos que fortalezcan la gestión institucional.

- 2. Incentivar la generación, el aseguramiento y la transferencia de conocimiento, a través del intercambio de experiencias, habilidades, buenas prácticas y lecciones aprendidas para fortalecer la toma de decisiones y el mejoramiento institucional.
- 3. Orientar el uso, aprovechamiento y disponibilidad de la información producida como resultado de la gestión del conocimiento de la Entidad.
- 4. Promover el diseño y la presentación de propuestas y/o iniciativas de innovación para generar soluciones orientadas a mejorar la gestión de los procesos institucionales.
- 5. Recopilar, analizar y visualizar datos institucionales de manera efectiva para apoyar decisiones informadas y estratégicas.
- 6. Identificar y gestionar alianzas estratégicas con instituciones públicas o privadas que permitan fortalecer la colaboración y el intercambio de conocimientos, en articulación con las demás dependencias de la Entidad.

Justificación Técnica:

La anterior propuesta permitirá, además de generar valor a partir del conocimiento organizacional, tomar decisiones basadas en evidencia y consolidar una cultura de la innovación mediante el desarrollo de desafíos de innovación, contribuir al cumplimiento del tercer objetivo estratégico y de calidad de la Entidad *Fomentar una cultura de gestión del conocimiento, la innovación y la investigación como instrumentos transversales a través de la incorporación de herramientas de uso y apropiación y la consolidación de alianzas*, a partir de su articulación con los ejes de acción del MIPG, tal como se describe a continuación:

Ejes de acción	Funciones
Generación y producción	Promover la investigación al interior de la Entidad con el fin de apoyar el cumplimiento de su misión, objetivos y funciones, y generar nuevos conocimientos que fortalezcan la gestión institucional.
Generación y producción Cultura de compartir y difundir Herramientas para el uso y apropiación	Incentivar la generación, el aseguramiento y la transferencia de conocimiento, a través del intercambio de experiencias, habilidades, buenas prácticas y lecciones aprendidas para fortalecer la toma de decisiones y el mejoramiento institucional.

Herramientas para el uso y apropiación Cultura de compartir y difundir	Orientar el uso, aprovechamiento y disponibilidad de la información producida como resultado de la gestión del conocimiento de la Entidad.
Generación y producción	Promover el diseño y la presentación de propuestas y/o iniciativas de innovación para generar soluciones orientadas a mejorar la gestión de los procesos institucionales.
Analítica institucional Cultura de compartir y difundir Herramientas de uso y apropiación	Recopilar, analizar y visualizar datos institucionales de manera efectiva para apoyar decisiones informadas y estratégicas.
Generación y producción Cultura de compartir y difundir	Identificar y gestionar alianzas estratégicas con instituciones públicas o privadas que permitan fortalecer la colaboración y el intercambio de conocimientos, en articulación con las demás dependencias de la Entidad.

La articulación estratégica de la DGCI con las demás dependencias es primordial para promover, identificar y gestionar iniciativas que permitan optimizar los procesos, mejorar la toma de decisiones y responder de manera eficaz a las demandas de la ciudadanía.

A partir de la implementación de las funciones propuestas, se facilitaría la colaboración entre los equipos de trabajo de las áreas misionales, estratégicas, de apoyo y de evaluación, al generar espacios que propendan por la transferencia de información, buenas prácticas y lecciones aprendidas.

Por otra parte, al impulsar la innovación, como parte de la cultura institucional, se motiva a los funcionarios(as) y colaboradores(as) a proponer iniciativas novedosas que contribuyan a la transformación de la Entidad, mediante el desarrollo de retos de innovación que tengan como eje central a la ciudadanía y al público interno.

Con la investigación, como fuente de generación de conocimiento, se busca que los servidores públicos comprendan, profundicen y propongan soluciones a las necesidades de los ciudadanos(as), buscando tanto identificar problemáticas sociales, ambientales y de otra índole como revisar la pertinencia de las políticas públicas existentes.

Adicionalmente, desde la investigación y la gestión de los datos se fortalece la transparencia y el proceso de rendición de cuentas de la Entidad, al basar las decisiones

en evidencia; lo que posibilita una mayor objetividad, reducción de la incertidumbre y mayor confianza por parte de los públicos de interés.

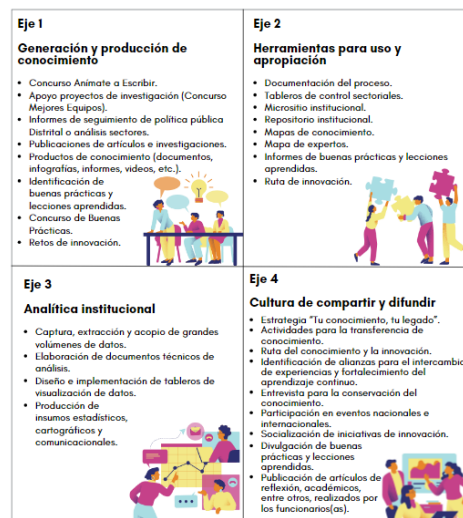
Por otra parte, las funciones propuestas responden al modelo de gestión adoptado por la Entidad, puesto que se toma como referencia la Política 6 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG: *Gestión del conocimiento y la innovación*.

Este modelo fue adoptado por la Personería de Bogotá, D. C., mediante la Resolución 008 de 2019.

Asimismo, se hace alusión a la Resolución 250 de 2023, por medio de la cual se actualiza e implementan las disposiciones internas relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en la Personería de Bogotá, D.C.

MIPG opera a través de la puesta en marcha de siete dimensiones que, a su vez, agrupan políticas, prácticas, herramientas o instrumentos que deben ser puestas en marcha de manera articulada e intercomunicada. Estas dimensiones recogen los aspectos más importantes de las prácticas y procesos que adelantan las entidades públicas para transformar insumos en resultados que produzcan los impactos deseados, esto es, una gestión y un desempeño institucional que generan valor público.¹²³

En este sentido, se trabajará con base en la siguiente estructura que complementa actividades, ejes de acción y nuevas funciones de la DGCI:



¹²³ ¿Qué es el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG? – Personería de Bogotá, D.C., tomado de <https://intranet.personeriabogota.gov.co/es/mipg/mapa-de-procesos/gestion-del-conocimiento-e-innovacion/category/4-2-gestion-del-conocimiento-e-innovacion>

✓ **Personería Delegada para la Misionalidad**

La Personería de Bogotá, D.C., enfoca sus actuaciones dentro del marco de la calidad basado en criterios de oportunidad, responsabilidad, innovación, transparencia y uso adecuado de los recursos naturales, bajo el proceso de mejoramiento continuo del servicio que presta la entidad.

Con el fin articular las Personerías delegadas que ejercen la función constitucional del Ministerio Público y el control a la gestión pública, se proyecta la creación de la Personería Delegada para la Misionalidad que tendrá a su cargo la formulación de las políticas, planes, directrices, procesos y procedimientos necesarios para el ejercicio propio de las competencias de las mencionadas delegadas.

La Delegada para la Misionalidad tendrá, entre otras, la función de dirigir, orientar y controlar el cumplimiento de las políticas, planes, directrices, procesos y procedimientos establecidos para el ejercicio propio de las competencias de las delegadas que cumplen la función de Ministerio Público y control a la función pública.

Personería delegada para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos II

La Secretaría General del Concejo de Bogotá D.C., por la Bancada del Partido Político Movimiento Alternativo Indígena y Social-MAIS, radicó el Proyecto de Acuerdo 336 de 2023: “*Por medio del cual se crea la Personería Delegada para Asuntos Étnicos de Bogotá y se dictan otras disposiciones.*”, el que tiene por objeto modificar la estructura organizacional de la Personería de Bogotá D.C., con el fin de crear la Personería Delegada de Asuntos Étnicos, para la Defensa, Protección y Promoción de los derechos de los Pueblos y Comunidades Étnicas, sujetos de especial protección constitucional, a través de acciones que propendan por su garantía.

Una vez analizado el proyecto de acuerdo, se considera que la Personería de Bogotá, D.C., diseña y promueve estrategias para que las entidades de la administración distrital den aplicación a los programas y proyectos sobre derechos humanos, dirigidos a la población LGBTI, indígenas, afros, ROM, habitante de calle, migrantes y trabajadores(as) sexuales y demás población vulnerable, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.

La población colombiana se compone un 87% de blancos y mestizos, un 9% de afrocolombianos (negros, mulatos, palenqueros y raizales), un 4% de indígenas y una cantidad mínima de gitanos (población Rom).

Como lo señala la Secretaria de Salud de Bogotá, (...) “*Los enfoques poblacional, diferencial, étnico, de género y de interseccionalidad tienen como objetivo común la disminución de inequidades y garantizar el goce efectivo de derechos por parte de todos los ciudadanos, independientemente de su grupo socioeconómico, identidad, condición o pertenencia*”¹²⁴.

Crear una Personería delegada solamente para Asuntos Étnicos generaría la necesidad de crear una Personería Delegada para cada grupo poblacional del distrito capital, (población LGBTI, indígenas, afros, ROM, habitante de calle, migrantes y trabajadores(as) sexuales y demás población vulnerable), los cuales están a cargo, de la Personería Delegada para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos.

A través de esta Personería Delegada se efectúa el seguimiento al cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos destinados a la promoción y defensa de los derechos humanos y derecho internacional humanitario, se verifica el cumplimiento de las acciones de promoción de derechos humanos con enfoque diferencia y énfasis en sujetos de especial protección constitucional entre los cuales se encuentran las etnias, se ejercen las funciones de agentes del Ministerio Público en los procesos y actuaciones de personas privadas de la libertad en el Distrito Capital atendiendo las normas de competencia.

De otra parte también se orienta en derechos humanos y derecho internacional humanitario dentro del marco normativo nacional e internacional, se reciben y tramitan las peticiones que se presenten contra los (as) servidores(as) públicos(as) del Distrito Capital, en relación con conductas u omisiones que puedan constituir violación de los derechos humanos y derecho internacional humanitario, se solicitan las investigaciones disciplinarias y penales que se deriven de dichas actuaciones, ante las autoridades competentes, se divulga y promueve el conocimiento de la Constitución Política en el Distrito, adelantando sensibilizaciones, programas de promoción y prevención sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario, entre otras tantas funciones.

Como se puede observar la cobertura de la Personería Delegada para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos es amplia y por ello se propone que, en lugar de crear una delegada para asuntos étnicos, se refuerza a la delegada de derechos humanos y sus funciones sean compartidas con una delegada orientada igualmente a la promoción y defensa de los derechos humanos de todos los grupos poblacionales especiales.

Así las cosas, se sugiere crear la Personería Delegada para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos I y II, las cuales atenderían grupos poblacionales diferentes, como se muestra a continuación:

¹²⁴ GUÍA PARA LA APROPIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE POBLACIONAL, DIFERENCIAL Y DE GÉNERO - 2021

Personería Delegada para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos I	Personería Delegada para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos II
población LGBTI, indígenas, afros, ROM, habitante de calle, migrantes y trabajadores(as) sexuales y demás población vulnerable	Personas privadas de la libertad en el Distrito Capital (URIS, Estaciones de policía, CTP)

Con esta distribución de funciones entre las dos Personerías delegadas para la defensa y protección de los derechos humanos, se busca descongestionar esta dependencia, con el fin de enfocar los esfuerzos en los grupos de especial protección constitucional.

- ✓ **Personería delegada para los Sectores de Gestión Pública Gobierno**
- ✓ **Personería delegada para el Sector de Gestión Jurídica**
- ✓ **Personería delegada para el Sector Hacienda**
- ✓ **Personería delegada para el Sector Movilidad**
- ✓ **Personería delegada para el Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo**
- ✓ **Personería delegada para el Sector Planeación**
- ✓ **Personería delegada para el Sector Educación**
- ✓ **Personería delegada para el Sector Cultura, Recreación y Deporte**
- ✓ **Personería delegada para el Sector Hábitat**
- ✓ **Personería delegada para el Sector Mujeres**
- ✓ **Personería delegada para el Sector Integración Social**

La estructura administrativa del Distrito Capital de Bogotá, se encuentra conformada por 15 sectores, que ejercen sus funciones basados en los principios de la función administrativa distrital, en consonancia con el interés general de la ciudadanía y los fines del Estado Social de Derecho, fundamentados en los principios constitucionales y legales de democratización y control social de la Administración Pública Distrital, moralidad, transparencia, publicidad, igualdad, imparcialidad, efectividad, economía, celeridad y buena fe, así como a los principios de distribución de competencias, coordinación, concurrencia, subsidiaridad y complementariedad.

Al igual que las autoridades distritales desarrollan sus actuaciones observando los principios enunciados, la Personería de Bogotá, D.C., busca desarrollar su función bajo la misma estructura del distrito capital, con el fin de garantizar la efectividad y materialización de los derechos de todos los ciudadanos del Distrito Capital, para lo cual plantea que las delegadas de prevención y control a la función pública, tengan una estructura igual a la del distrito para la realización de las tareas misionales, en concordancia con el Plan de Desarrollo de Bogotá y el Plan de Ordenamiento Territorial.

En la actualidad la Personería cuenta con 9 delegadas que agrupan los 15 sectores a saber: Personería Delegada para los sectores Gestión Pública, Gestión Jurídica y Gobierno; Personería Delegada para los sectores Hacienda y Desarrollo Económico, Industria y Turismo; Personería Delegada para los sectores Planeación y Movilidad; Personería Delegada para los sectores Educación y Cultura, Recreación y Deporte; Personería Delegada para el Sector Salud; Personería delegada para el Sector Ambiente; Personería delegada para el Sector Hábitat; Personería Delegada para los sectores Mujeres e Integración Social y Personería Delegada para el Sector Seguridad, Convivencia y Justicia.

Desagregar los sectores, conforme a la estructura del distrito, permitirá la realización de las funciones propias de la Entidad con delegadas especializadas, en cada uno de los sectores.

Teniendo en cuenta que Bogotá, la capital del país, está organizada en 15 sectores que tienen a su cargo responsabilidades específicas en áreas como la salud, la educación, la seguridad, el transporte, el medio ambiente, entre otras, se hace indispensable que el ente de control responda a los cambios que ello implica.

A modo de ejemplo el sector de la mujer se encuentra unido con el sector de integración social, los cuales manejan problemáticas distintas. El sector mujer busca entre otras cosas abordar desigualdades y promover la igualdad de género, siendo este un tema de importancia y relevancia en nuestro país. Este sector viene generando necesidades específicas, las mujeres enfrentan desafíos únicos, como la violencia de género, la discriminación laboral, la falta de acceso a servicios de salud y la carga desproporcionada del cuidado de los hijos y los ancianos. Se observa que la mujer busca empoderarse para tomar decisiones sobre sus propias vidas, incluyendo su educación, su carrera y su salud.

La Personería de Bogotá, D.C., como defensora de derechos humanos, vela por que los derechos de las mujeres se materialicen, busca promover la igualdad de género en todos los aspectos de la sociedad, incluyendo la política, la economía y la cultura, igualmente apoya a las mujeres que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, como las mujeres refugiadas, las mujeres con discapacidad y las mujeres que han sido víctimas de violencia, para lo cual vela que los recursos dispuestos para ello sean empleados en los planes y programas generados por el distrito para que las mujeres puedan alcanzar su máximo potencial.

Así mismo, se plantea separar la Personería delegada que tiene a cargo los sectores de Gestión Pública, Gestión Jurídica y Gobierno, dada las problemáticas tan disimiles que se manejan en cada uno de estos sectores.

No obstante, dada la volumetría de los mismos, solo se escinde el Sector Gobierno para crear la Personería Delegada para este sector.

La Personería de Bogotá D.C., en la arquitectura institucional del Distrito tiene un rol fundamental en su papel como órgano de control y agente activo en el ejercicio de Ministerio Público en intervenciones y actuaciones administrativas y policivas que garanticen el correcto ejercicio del debido proceso, la protección del patrimonio público y del interés general.

Dicho rol, ejercido a través de sus agentes de ministerio público fue fortalecido con la adopción del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016), donde se les faculta a realizar gestiones y ejecutar procedimientos ante las Alcaldías Locales e Inspecciones de Policía del Distrito, de cada localidad. Cabe aclarar que las inspecciones de policía se clasifican según su competencia territorial, donde algunas son del ámbito local y ejecutan actividades adscritas a la Alcaldías Locales y otras del ámbito Distrital que tendrán competencia en todo el Distrito Capital y estarán adscritas a la Dirección para la Gestión Policiva de la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá.

Este incremento de casi el 100% en cuanto al número de inspecciones de policía en Bogotá hizo parte de la reorganización y fortalecimiento de la seguridad que realizó la ciudad para cumplir los nuevos retos del Código de Policía que tenían como objetivo descongestionar el sistema, principalmente en actuaciones que nacen del procedimiento verbal inmediato y que por su naturaleza requieren una disposición continua (casi a diario) en varios temas claves de la ciudad como es el caso de la protección y bienestar animal, medioambiente, infracciones en el transporte masivo e infracciones urbanísticas.

El incremento en el número de Inspecciones de Policía en el Distrito Capital, operadas por doscientos veintiséis (226) inspectores como autoridad de Policía, genera una amplia demanda de requerimientos que se ven reflejados en la intervención de la Personería de Bogotá, como quedo ampliamente explicado en el estudio técnico que acompaña este documento.

Igual situación se presenta en las delegadas de los Sectores que se proyecta desagregar, se plantea la creación de 5 Personerías delegadas ya que algunas de las existentes se conservan y otras cambian de nomenclatura, como se observa a continuación:

DEPENDENCIAS			
SUPRIMIR	NOVEDAD	CREAR	NOVEDAD
Personería delegada para los sectores Gestión Pública, Gestión Jurídica y Gobierno	Dejar unidos los Sectores de Gestión Pública y Jurídica y separar el Sector Gobierno	Personería delegada para los Sectores Gestión Pública y Jurídica	Delegada nueva

		Personería delegada el Sector Gestión Gobierno	Cambia de nomenclatura
Personería delegada para el Sector Mujeres e Integración Social	Separar el Sector de Mujeres e Integración Social	Personería delegada para el sector Mujer	Cambia de nomenclatura
		Personería delegada para el sector Integración Social	Delegada nueva
Personería delegada para el Sector Educación, cultura, recreación y deporte	Separar los sectores Educación y Cultura, recreación y deporte	Personería delegada para el Sector Educación	Cambia de nomenclatura
		Personería delegada para el Sector Cultura, Recreación y deporte	Delegada nueva
Personería delegada para el Sector Hacienda y Desarrollo Económico, Industria y Turismo	Separar los Sectores Hacienda y Desarrollo Económico, Industria y Turismo	Personería delegada para el sector Hacienda	Cambia de nomenclatura
		Personería delegada para el sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo	Delegada nueva
Personería delegada para el Sector Planeación y Movilidad	Separar los sectores Planeación y Movilidad	Personería delegada para el sector Planeación	Cambia de nomenclatura
		Personería delegada para el sector Movilidad	Delegada nueva
Personería delegada para el Sector Salud	No se modifica	Personería delegada para el Sector Salud	Conserva nomenclatura
Personería delegada para el Sector Ambiente	No se modifica	Personería delegada para el Sector Ambiente	Conserva nomenclatura
Personería delegada para el Sector Hábitat	No se modifica	Personería delegada para el Sector Hábitat	Conserva nomenclatura
Personería delegada para el Sector Seguridad, Convivencia y Justicia	No se modifica	Personería delegada para el Sector Seguridad, Convivencia y Justicia	Conserva nomenclatura

- ✓ **Personería delegada para para Instrucción Disciplinaria I**
- ✓ **Personería delegada para para Instrucción Disciplinaria II**
- ✓ **Personería delegada para para Instrucción Disciplinaria III**
- ✓ **Personería delegada para Juzgamiento Disciplinario I**
- ✓ **Personería delegada para Juzgamiento Disciplinario II**

Corresponde a la Personería de Bogotá, D.C., como parte integrante del Ministerio Público, por expreso mandato del artículo 118 de la Constitución Política, la guarda y promoción de

los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas en el Distrito Capital.

El artículo 100 del Decreto Ley 1421 de 1993, al establecer las atribuciones del(a) Personero(a) de Bogotá D.C., como veedor ciudadano, le otorga la potestad disciplinaria, la cual se traduce en la capacidad de efectuar las investigaciones correspondientes y proferir los fallos sancionatorios que fueren del caso, frente a la conducta oficial de los servidores públicos del Distrito Capital.

Actualmente el eje disciplinario de la Personería de Bogotá, D.C., se encuentra organizado bajo estructura de 4 Personerías delegadas que ejercen la función de la potestad disciplinaria, sin embargo, en cumplimiento de las disposiciones legales,¹²⁵ es necesario que la Entidad modifique su planta de personal a efectos de garantizar la separación de los roles de instrucción y juzgamiento (que deben ser independientes) en sus procesos disciplinarios.

De acuerdo con el artículo 225 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 39 de la Ley 2094 de 2021, la etapa de instrucción culmina con la notificación del pliego de cargos y una vez surtida dicha actuación procesal se debe remitir el expediente al funcionario que tenga a su cargo la etapa de juzgamiento.

Dentro de este contexto, la Entidad se encuentra ante la imperiosa necesidad de separar las funciones de instrucción y juzgamiento, con la creación de 3 Personerías delegadas para Instrucción y 2 de Juzgamiento, como se plantea en el presente proyecto de Acuerdo.

✓ **Subdirección de Administración del Talento Humano**

De conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera y se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Igualmente se señala que los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público y el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

El artículo 27 de la Ley 909 de 2004, señala que “(...) *la carrera administrativa es un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer; estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la*

¹²⁵ Ley 2094 de 2021

permanencia en los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad, sin discriminación alguna”.

MIPG concibe al talento humano como el activo más importante con el que cuentan las entidades, que facilita la gestión y el logro de los objetivos y resultados; teniendo en cuenta estas disposiciones y el número de funcionarios de carrera con que cuenta la Entidad (911), se hace indispensable crear la Subdirección de Administración de Talento Humano dependiente de la Dirección de Talento Humano, orientada a (i) dirigir la aplicación de los componentes de la carrera administrativa en la Personería de Bogotá, D.C., (ii) adelantar los procesos y trámites que en materia de carrera administrativa deban surtirse ante las instancias competentes, (iii) coordinar la implementación y aplicación de los sistemas de evaluación del desempeño de acuerdo con la normatividad y procedimientos establecidos, (iv) coordinar la elaboración de la Oferta Pública de Empleo de Carrera vacantes que se proveerán por concurso de méritos, ante la instancia competente, (v) coordinar la elaboración de los estudios para la identificación de los perfiles ocupacionales requeridos por la Personería de Bogotá, D.C., para el cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales, (vi) realizar los procesos de encargos a funcionarios inscritos en carrera administrativa, de acuerdo con la normatividad vigente (vii) rendir los informes que en materia de administración de carrera administrativa requiera el organismo de vigilancia y control competente.

✓ **Subdirección de Nómina y Gestión de la Información del Talento Humano**

Se hace indispensable modificar la denominación de la Subdirección de Gestión del Talento Humano, para alinearla con su actividad funcional.

Es así como se plantea modificar el nombre de la Subdirección de Gestión del Talento Humano por Subdirección de Nómina y Gestión de la Información del Talento Humano.

✓ **Subdirección de Gestión Documental**

El Archivo General de la Nación, ha realizado una serie de visitas administrativas, generando hallazgos relacionados con la organización y levantamiento de inventario de los Archivos de Gestión de la Personería de Bogotá, D.C., razón por la cual se formula un Plan de Mejoramiento Archivístico.

Como resultado de la visita de seguimiento se formulan recomendaciones estructuradas a partir de los cuatro Componentes del Modelo Integral de Gestión Documental y Archivos, MIGDA1: (i) Estratégico, (ii) Documental, (iii) Tecnológico y (iv) Cultura Archivística, en los cuales se destacan los avances de la Entidad, así como las recomendaciones orientadas a formular acciones que le permitan seguir avanzando en la implementación del Sistema de Gestión de Documentos de Archivo (SGDA).

Teniendo en cuenta que se trata de una situación recurrente, se sugiere organizar el grupo de Gestión Documental de manera permanente, para que la Entidad cuente con su proceso de gestión documental organizado, actualizado y en cumplimiento de la normatividad vigente en materia archivística y con ello evitar hallazgos por parte de los entes de control.

Actualmente la gestión documental se encuentra a cargo de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos, por lo que se genera la necesidad de separar las funciones propias de cada área y asignar el talento humano necesario, especializado, que, para el caso de la gestión documental, será creado, entre otros, en el nivel técnico.

En consecuencia, la nueva estructura será como se expone a continuación:

1 DESPACHO DEL PERSONERO DE BOGOTÁ D.C.

- 1.1 Dirección de Planeación
- 1.2 Oficina de Control Interno
- 1.3 Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC
 - 1.3.1 Subdirección de Ingeniería de Software, Bases de Datos y Seguridad
 - 1.3.2 Subdirección de Infraestructura, Redes y Soporte
- 1.4 Personería Delegada para la Segunda Instancia
- 1.5 Dirección de Gestión del Conocimiento e Innovación
- 1.6 Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales
- 1.7 Oficina Asesora de Comunicaciones
- 1.8 Oficina Asesora Jurídica
- 1.9 Personería Delegada para el Relacionamento con el Ciudadano y Asuntos Locales
 - 1.9.1 Dirección de Asuntos Jurisdiccionales
 - 1.9.2 Dirección de Orientación y Asistencia a las Personas
 - 1.9.3 Dirección de Conciliación y Mecanismos alternativos de Solución de Conflictos
 - 1.9.4 Personerías Locales

2. **PERSONERIA AUXILIAR**

2.1 Oficina de Control Interno Disciplinario

2.2 Personería Delegada para la Misionalidad

2.2.1 Personerías Delegadas para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos I y II

2.2.2 Personería Delegada para la Familia y Sujetos de Especial Protección Constitucional

2.2.3 Personería Delegada para la Defensa y protección de Víctimas del Conflicto Armado Interno

2.2.4 Personería Delegada para Defensa y Protección de los Derechos del Consumidor

2.2.5 Personerías Delegadas para Asuntos Penales I y II

2.2.6 Personería Delegada para Asuntos Policivos y Civiles

2.2.7 Personería Delegada para el Sector Salud

2.2.8 Personería Delegada para Sector Ambiente

2.2.9 Personería Delegada para el Sector Hábitat

2.2.10 Personería Delegada para el Sector Gestión Jurídica

2.2.11 Personería Delegada para los Sectores Gestión pública y Gobierno

2.2.12 Personería Delegada para el Sector Mujer

2.2.13 Personería Delegada para el Sector Integración Social

2.2.14 Personería Delegada para el Sector Educación

2.2.15 Personería Delegada para los Sectores Cultura, Recreación y Deporte

2.2.16 Personería Delegada para el Sector Hacienda

2.2.17 Personería Delegada para los Sectores Desarrollo Económico, Industria y Turismo

2.2.18 Personería Delegada para el Sector Movilidad

2.2.19 Personería Delegada para los Sectores Seguridad, Convivencia y Justicia

2.2.20 Personería Delegada para el Sector Planeación

2.3 Personerías Delegadas de Instrucción Disciplinaria I - II - III

2.4 Personerías Delegadas para Juzgamiento Disciplinario I - II

2.5 Dirección de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico

3 SECRETARIA GENERAL

3.1 Dirección de Talento Humano

3.1.1 Subdirección de Desarrollo del Talento Humano

3.1.2 Subdirección de Nómina y Gestión de la Información del Talento Humano

3.1.3 Subdirección de Administración del Talento Humano

3.2 Dirección Administrativa y Financiera

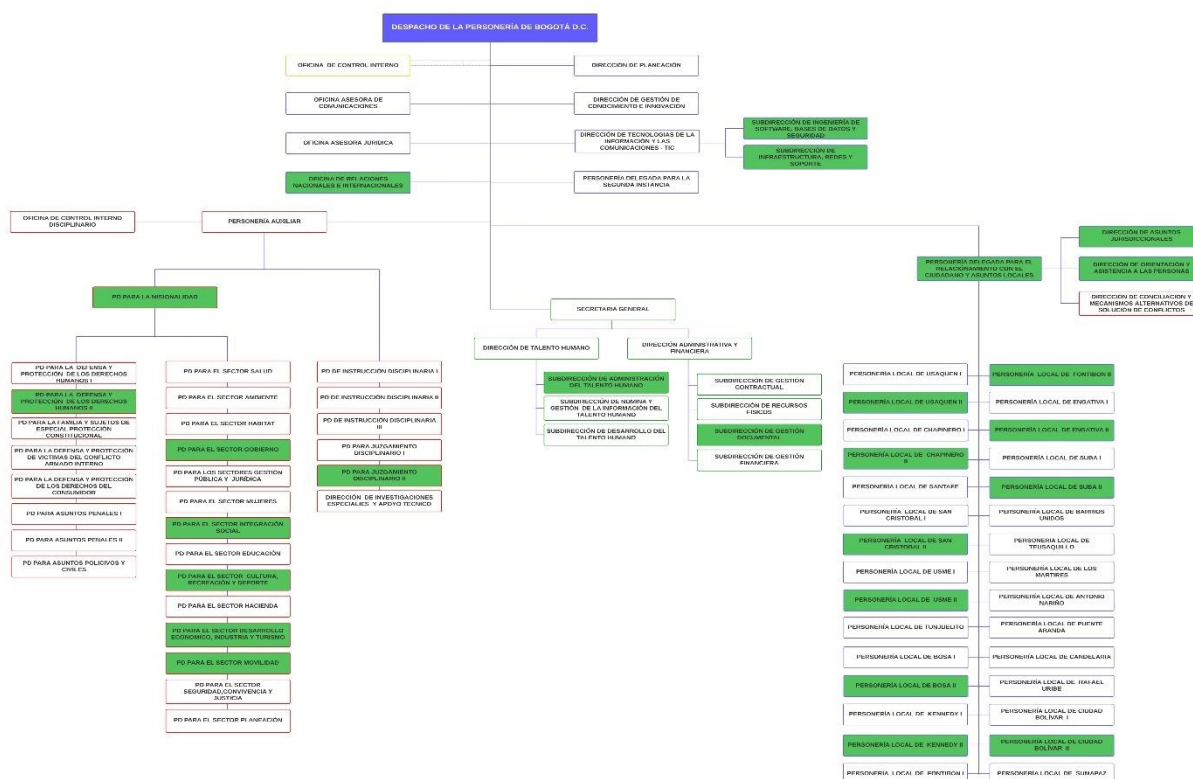
3.2.1 Subdirección de Gestión Contractual

3.2.2 Subdirección de Recursos Físicos

3.2.3 Subdirección de Gestión Documental

3.2.4 Subdirección de Gestión Financiera

La estructura propuesta se encuentra contenida en el siguiente organigrama, de esta manera, las nuevas dependencias que se crearán son las indicadas en color verde.



Gráfica Nuevo Organigrama. Fuente: Elaboración Propia

FORTALECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL

La creación de estas nuevas dependencias es esencial para el correcto funcionamiento de la Personería de Bogotá, ya que permitirán mejorar su capacidad de gestión administrativa, tecnológica y de interacción ciudadana.

La estructura actual no responde a las necesidades de la Personería de Bogotá, ni a las exigencias legales como ha quedado ampliamente explicado, en este documento y en el estudio técnico que hace parte del proceso de modernización y rediseño institucional.

4.1. Ampliación y Profesionalización de la Planta de Personal

Además de la creación de nuevas dependencias, dentro del rediseño organizacional se plantea una ampliación y profesionalización de la planta de personal. De acuerdo con el resultado del estudio de cargas laborales realizado en el 2023, el diagnóstico organizacional y la estructura propuesta, se requiere un fortalecimiento de la planta de personal, especialmente en el nivel profesional¹²⁶.

Actualmente, la Personería de Bogotá D.C., determina su funcionamiento a luz del Acuerdo 755 de 2019¹²⁷, dicho acuerdo señala que la Personería de Bogotá D.C., cuenta con 1002 empleos y 64 dependencias que funcionan en pro de la misionalidad de la Entidad y las directrices legales vigentes, constituyéndose este Acuerdo en la primera fase del rediseño institucional que requiere este órgano de control.

La modernización de la estructura y la planta de personal de la Entidad responde a las dinámicas y a los cambios de la ciudad, que ha tenido un incremento considerable en su población durante las últimas décadas, lo que ha conllevado a cambios normativos que afectan la interacción con la ciudadanía, buscando garantizar una gestión pública más cercana, caracterizada por esquemas de operación articulados, ofreciendo servicios de manera integral, con presencia del gobierno abierto en el territorio, bajo un marco de transparencia e integridad.

A través de una estructura robusta que genere mayor capacidad institucional, se avanza hacia la coordinación efectiva de las dependencias de la Entidad. El desarrollo de alianzas para el intercambio y transferencia de conocimientos técnicos permite mejorar la interacción de la Entidad en contacto permanente con la ciudadanía, generando confianza, evitando retrasos y sobre costos, mejorando la capacidad de reacción ante imprevistos

¹²⁶ Ver matriz de cargas de trabajo que hace parte del estudio técnico.

¹²⁷ Acuerdo 755 de 2019 “Por el cual se modifica la estructura organizacional, la planta de empleos de la Personería de Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones”

sociales, económicos, ambientales, culturales y territoriales propios de los procesos bajo competencia de la Personería de Bogotá, D.C.

Normativamente, el presente estudio se enmarca y da estricto cumplimiento al artículo 46 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 228 del Decreto Ley 019 de 2012; La Ley 1437 de 2011, el Decreto 1083 de 2015 (Artículo 2.2.12.3); el Decreto Distrital 151 de 2024; el Decreto Distrital 643 de 2023; y particularmente la Resolución 269 de 2019 del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.

La segunda fase del proyecto de fortalecimiento institucional de la Personería de Bogotá, en particular el incremento de la planta de empleos se funda entre otras, en las necesidades, derivadas de: a) La expedición Decreto Distrital 033 de 2021, que aumentó la cantidad de Inspecciones de Policía en el Distrito; b) las funciones y responsabilidades que el Código de Policía y Convivencia le asigna a las Personerías que no se alcanzaron a cubrir con la ampliación de planta de 2019; c) la previsión de una nueva división político administrativa del distrito, contemplada en el POT de Bogotá (Decreto Distrital 555 de 2021); y d) la necesidad de cubrir todos los sectores en los que se prestan servicios al ciudadano en la administración distrital y que requieren de la garantía de derechos.

Por lo anterior, la propuesta de ampliación de planta completa la Fase 1 concretada con el Acuerdo Distrital 755 de 2019 que buscó integrar las atribuciones y competencias que por norma habían sido establecidos a la personería desde la expedición del Acuerdo 34 de 1993, y que no se había incluido en las normas de estructura de la Personería como lo son: (i) competencias de Veeduría frente al sistema de seguridad social en salud, (ii) la vigilancia y atención a población desplazada, (iii) seguimiento a curadurías urbanas, (iv) la intervención del ministerio público en el proceso penal cuando sea requerido en el marco de sus funciones, (v) realizar veeduría sobre el cumplimiento de la política de familia, (vi) ejercer ministerio público ante diligencias por infracciones a normas de tránsito, (vii) intervenciones en procesos de restablecimiento de derechos y actuaciones en cuanto a la ley de infancia y adolescencia, (viii) las competencias asignadas en el código nacional de policía y convivencia ciudadana ejerciendo ministerio público a la actividad o a los procedimientos de policía, (ix) así como hacer parte de la conformación de consejos de Seguridad y Convivencia.

Una de las características más importantes de la presente propuesta es el fortalecimiento de la gestión de relacionamiento con el ciudadano, de las Personerías Locales y el fortalecimiento del proceso misional del eje de Ministerio Público, asignando recurso humano a las delegadas. A partir de la profesionalización del recurso humano asignado y la reducción de las actuales sobrecargas de trabajo, derivadas del aumento de las problemáticas locales y su consecuente aumento de demandas ciudadanas.

Así las cosas, el proyecto de acuerdo que se presenta enfatizó en la revisión de la

prestación del servicio de la Personería de Bogotá, D.C., constituyéndose en un proceso estratégico, nuevas competencias, su entorno externo, sus procesos y su revisión de cargas laborales y perfiles como puntos de partida para mostrar las justificaciones técnicas que evidencian la necesidad de realizar una ampliación y un cambio organizacional entorno a la planta de personal vigente y que se encuentran contempladas en el estudio técnico correspondiente.

4.2. Modificación a la Escala Salarial de la Personería de Bogotá:

Mediante Acuerdo 183 de 2005, se ajustó y modificó la planta de personal de la Personería de Bogotá, D.C., al Sistema de Nomenclatura y Clasificación de Empleos, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 785 de 2005, y se ajustaron las tablas de grados de asignación básica en armonía con dicho sistema, entre otros, como se resume en el siguiente cuadro:

Planta y Grados Salariales adoptados en el Acuerdo 183 de 2005

NIVEL PROFESIONAL			
EMPLEOS	DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CÓDIGO	GRADO
5	Líder de Programa	206	08
233	Profesional Especializado	222	07
15	Profesional Especializado	222	06
52	Profesional Especializado	222	05
15	Profesional Especializado	222	04
15	Profesional Especializado	222	03
32	Profesional Especializado	222	02
59	Profesional Universitario	219	01
NIVEL ASISTENCIAL			
EMPLEOS	DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CÓDIGO	GRADO
7	Auxiliar Administrativo	407	7
25	Auxiliar Administrativo	407	6
20	Auxiliar Administrativo	407	5
20	Auxiliar Administrativo	407	4
76	Auxiliar Administrativo	407	3
21	Auxiliar Administrativo	407	2
98	Secretario	440	7
15	Secretario	440	5
15	Secretario	440	4

20	Secretario	440	3
16	Conductor Mecánico	482	7
12	Conductor	480	2
40	Auxiliar de Servicios Generales	470	1

Como se puede observar, existe una notoria dispersión de la escala salarial, especialmente para los grados asistencial y profesional, por lo que el presente proyecto de plantea la necesidad de reducir la dispersión en los mencionados niveles.

Mediante el Decreto Distrital 039 de 2024 se fijó el incremento salarial para los empleados públicos de la Personería de Bogotá, en once punto cero ocho por ciento (11.08%), para los niveles jerárquicos: asistencial, técnico y profesional y diez punto sesenta y ocho por ciento (10.68%), para los niveles jerárquicos: asesor y directivo.

Posterior al precitado Decreto Distrital, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 293 del 5 de marzo 2024¹²⁸, el cual en su artículo 7 fija los límites máximos salariales para los empleados públicos de las entidades territoriales, correspondientes al año 2024.

“ARTÍCULO 7. Límite máximo salarial mensual para empleados públicos de entidades territoriales. El límite máximo de la asignación básica mensual de los empleados públicos de las entidades territoriales para el año 2024 queda determinado así:

*Límite máximo salarial mensual para empleados públicos de entidades territoriales 2024
Decreto 293 de 2024*

NIVEL JERÁRQUICO SISTEMA GENERAL	LÍMITE MÁXIMO ASIGNACIÓN BÁSICA MENSUAL
Directivo	20.209.206
Asesor	16.153.855
Profesional	11.284.768
Técnico	4.183.337
Asistencial	4.141.829

Mediante el Decreto Distrital 151 de 2024 se resolvió modificar el artículo 2° del Decreto Distrital 039 de 2024, el cual estableció:

“Artículo 2°. - Incremento Asignaciones Básicas. A partir del 1° de enero de 2024, las asignaciones básicas mensuales de los empleados públicos de la Personería de Bogotá, D.C., serán ajustadas al once punto cero ocho por ciento (11.08%), para los niveles jerárquicos: asistencial, técnico y profesional y diez punto sesenta y ocho por ciento (10.68%) para los niveles jerárquicos: asesor y directivo, siempre que dicha asignación no supere los límites máximos establecidos en el Decreto Nacional 293 de 2024,

¹²⁸ Por el cual se fijan los límites máximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia prestacional

evento en el cual el porcentaje de incremento podrá ser inferior al determinado y se ajustará proporcionalmente.

En consecuencia, las asignaciones básicas serán las siguientes:

Asignaciones básicas mensuales de los empleados públicos de la Personería de Bogotá, D.C 2024

GRADO SALARIAL	DIRECTIVO	ASESOR	PROFESIONAL	TÉCNICO	ASISTENCIAL
01	9.206.065	9.206.065	5.738.447		3.770.348
02	10.390.866		5.040.585		4.141.329
03	13.131.967		5.040.810		4.141.429
04	13.783.934		5.041.039		4.141.529
05	16.174.924		5.128.026		4.141.629
06			5.256.516		4.141.729
07			5.618.635		4.141.829
08			9.189.837		

Como se observa en la tabla anterior, entre los grados de los empleos del nivel asistencial, existe a penas una diferencia de cien pesos (\$100); esta proximidad en los montos salariales dificulta la definición precisa de niveles de responsabilidad y de requisitos mínimos progresivos, por tanto, la presente propuesta contempla una revisión y simplificación de dicha escala, a fin de optimizar la gestión administrativa y clarificar los deberes y expectativas asociados a cada grado dentro del Nivel Asistencial, por lo que se considera procedente disminuir su dispersión a dos (2) grados, uno que corresponda a los empleos de Auxiliar Administrativo 407-01, donde se incorporarán los 20 funcionarios que ocupan el empleo de Auxiliar de Servicios Generales, suprimido y otro de Auxiliar Administrativo 407-02 que recoge a los auxiliares administrativos del grado 2 al 7. Igual situación se plantea con el cargo de secretario, donde se creará el empleo de Secretario 440 grado 02, en el que se incorporarán los grados 3, 4, 5 y 7 existentes.

La asignación básica para este empleo será la máxima establecida en el Decreto Distrital 151 de 2024.

En el Nivel Profesional, la escala salarial actual contiene 8 grados (7 de profesional especializado y 1 de profesional Universitario), en la que, en el caso de los profesionales especializados, no solo se observa una diferencia salarial de \$657,00 y \$229,00 en los grados 2 a 4, respectivamente sino que, además, el Profesional Universitario 219 -01, al que se le exigen menos requisitos de formación y experiencia profesional, cuenta con una asignación básica salarial superior a la de los profesionales especializados.

Desde vigencias anteriores, los salarios de los empleos del nivel profesional de la Personería de Bogotá, D.C., presentan un desequilibrio, contradiciendo criterios de equidad, progresividad y proporcionalidad, observándose que las asignaciones básicas de los profesionales universitarios son superiores a las de los profesionales especializados,

diferencia salarial que no tiene fundamento; por tanto, se hace indispensable subsanar dichas diferencias salariales, más aún cuando las actuales asignaciones básicas del nivel profesional, se encuentran por debajo de los límites máximos establecidos en el Decreto 293 del 5 de marzo 2024, aún vigente.

Como alternativa de solución se propone mantener el grado de Profesional Universitario 219 – 01, incorporar a los empleos de Profesional Especializado Código 222 Grados 02, 03 y 04 en un nuevo Profesional Especializado Código 222 Grado 02, que recoja los 62 cargos que hacen parte de estos grados, adoptando para ellos nuevos requisitos; así mismo, incorporar a los empleos de Profesional Especializado Código 222 Grados 05, 06 y 07 en un nuevo Profesional Especializado Código 222 Grado 03, que recoja los 300 empleos que hacen parte de estos cargos, con nuevos requisitos y suprimir el Profesional Especializado Código 222 Grado 08 y crear un nuevo Profesional Especializado Código 222 Grado 04, con 40 empleos y nuevos requisitos.

Con lo anterior, no solamente se propone reducir la dispersión salarial, sino adoptar una nueva escala de grados salariales, en valores del año 2024, para la planta de personal de la Personería de Bogotá, D.C., en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Ley 785 de 2005.

Esta propuesta busca ajustar las asignaciones básicas de los servidores de los niveles asistencial y profesional de la Personería de Bogotá públicos para garantizar una remuneración justa y equitativa, teniendo en cuenta factores como la experiencia, el desempeño y las responsabilidades del cargo y reducir las disparidades salariales y asegurar que todos los empleados públicos reciban una compensación adecuada por su trabajo.

El Artículo 53 de la Constitución Política señala principios mínimos fundamentales e igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; determinando que no se puede menoscabar los derechos de los trabajadores.

De conformidad con las previsiones de la Ley 1474 de 2011, es deber de la administración asignar una remuneración justa y proporcional al trabajo, a efecto que los resultados sean cada vez más satisfactorios en términos de los beneficios del control fiscal.

El Artículo 2º de la Ley 4º de 1992 señala que, para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes objetivos y criterios:

“(…)

- a. *El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales;*
- b. *El respeto a la carrera administrativa y la ampliación de su cobertura;*
- c. *La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios por parte del Estado y de las condiciones de trabajo;*
- d. *La modernización, tecnificación y eficiencia de la administración pública;*
- e. *La utilización eficiente del recurso humano;*
- f. *La competitividad, entendida como la capacidad de ajustarse a las condiciones predominantes en las actividades laborales;*
- g. *La obligación del Estado de propiciar una capacitación continua del personal a su servicio;*
- h. *La sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal;*
- i. *La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las limitaciones presupuestales para cada organismo o entidad;*
- j. *El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño;*
- k. *El establecimiento de rangos de remuneración para los cargos de los niveles profesional, asesor, ejecutivo y directivo de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva y de la Organización Electoral;*
- l. *La adopción de sistemas de evaluación y promoción basados en pruebas generales y/o específicas. En el diseño de estos sistemas se tendrán en cuenta como criterios, la equidad, productividad, eficiencia, desempeño y la antigüedad”.*

De manera específica, respecto al régimen salarial de los servidores públicos del nivel territorial, así se pronunció el Consejo de Estado:

“Como ya se anotó corresponde al Congreso de la República dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos –Art 150.19 e) de la Constitución Política-. Dentro de este orden de ideas, el Gobierno señala el límite máximo salarial de los empleados públicos del orden territorial, guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional –par. Art. 12 de la Ley 4º de 1992. (Se subraya). Adviértase cómo el Constituyente fue claro al señalar que el régimen salarial de los empleados públicos lo determina el Gobierno Nacional, estableciendo una competencia general sobre la materia. Ahora bien, indefectiblemente forman parte del régimen de los factores salariales y su monto, de suerte que al no estar atribuida la potestad de fijarlos a las autoridades seccionales o locales

mencionadas, tal retribución recae en aquel. Las escalas de remuneración constituyen tan solo uno de los elementos salariales, mas no puede considerarse que todos estos puedan incluirse en aquellas”.

El incumplimiento del principio de “*igual trabajo, igual salario*” puede ocasionar un riesgo jurídico, lo que conlleva una carga administrativa y financiera significativa para la entidad y generar precedentes judiciales que modificarían de facto la política salarial de la Entidad, obligando a igualar las remuneraciones para cargos equivalentes.

En aras de la viabilidad presupuestal del proyecto y a efecto de disminuir la inequidad salarial, se propone adoptar la siguiente tabla de grados de asignación básica, en valores del año 2024, para la planta de personal de la Personería de Bogotá, D.C., en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Ley 785 de 2005.

Escala Salarial Propuesta

GRADO	DIRECTIVO	ASESOR	PROFESIONAL	TECNICO	ASISTENCIAL
1	\$9.206.065	\$9.206.065	\$5.738.447	\$4.183.337	\$3.770.348
2	\$10.390.866	\$10.390.866	\$5.818.871		\$4.141.829
3	\$13.131.967		\$5.899.567		
4	\$13.783.934		\$5.980.263		
5	\$16.174.924				

En síntesis, los empleos del nivel profesional y del nivel asistencial de la planta actual serán incorporados en los siguientes nuevos grados salariales:

AJUSTE A LA ESCALA DE GRADOS SALARIALES PROPUESTA

NIVEL PROFESIONAL

NOMENCLATURA ACTUAL			NOMENCLATURA PROPUESTA		
DENOMINACION	CODIGO	GRADO	DENOMINACION	CODIGO	GRADO
Profesional Especializado	222	7	Profesional Especializado	222	03
Profesional Especializado	222	6			
Profesional Especializado	222	5			
Profesional Especializado	222	4	Profesional Especializado	222	02
Profesional Especializado	222	3			
Profesional Especializado	222	2			

NIVEL ASISTENCIAL

NOMENCLATURA ACTUAL			NOMENCLATURA PROPUESTA		
DENOMINACION	CODIGO	GRADO	DENOMINACION	CODIGO	GRADO

Secretario	440	7	Secretario	440	02
Secretario	440	5			
Secretario	440	4			
Secretario	440	3			
Auxiliar Administrativo	407	7	Auxiliar Administrativo	407	02
Auxiliar Administrativo	407	6			
Auxiliar Administrativo	407	5			
Auxiliar Administrativo	407	4			
Auxiliar Administrativo	407	3			
Auxiliar Administrativo	407	2			
Conductor Mecánico	482	7	Conductor Mecánico	482	02

4.3. Planta Transitoria

Teniendo en cuenta que la Personería de Bogotá, D.C., ofertó empleos tanto del nivel profesional como asistencial en el Proceso de Selección 2544 de 2023 – Distrito Capital 6, mediante Acuerdo CNSC 109 del 20 de diciembre del 2023, modificado por el Acuerdo 148 del 3 de julio de 2024, en las modalidades de abierto y en ascenso, en aras de salvaguardar los derechos de las personas que se inscribieron en los mismos, y en cumplimiento del Artículo 44 de la Ley 909, los Artículos 2.2.11.2.1 y 2.2.11.2.2. del Decreto 1083 de 2015, el Artículo 28 del Decreto Ley 760 de 2005, se mantendrá una planta transitoria, hasta que las respectivas listas de elegibles conformadas pierdan vigencia para los siguientes empleos de la planta actual.

Una vez vencida la vigencia de las listas de elegibles, estos empleos se suprimirán y los titulares de los empleos, que ostenten derechos de carrera, serán incorporados en la planta de empleos de la Personería de Bogotá, D.C.

Planta Transitoria Propuesta

DENOMINACIÓN	CÓDIGO	GRADO	EMPLEOS OFERTADOS EN D6 CNSC	# de OPEC	MODALIDAD	DEPENDENCIA OFERTADA
Profesional Especializado	222	7	2	220786	Ascenso	Personería Delegada para la Protección de Víctimas del Conflicto Armado Interno
Profesional Especializado	222	7	1	220787	Ascenso	Oficina Asesora Jurídica
Profesional Especializado	222	7	1	220788	Ascenso	Dirección de Talento Humano

DENOMINACIÓN	CÓDIGO	GRADO	EMPLEOS OFERTADOS EN D6 CNSC	# de OPEC	MODALIDAD	DEPENDENCIA OFERTADA
Profesional Especializado	222	7	1	220789	Ascenso	Dirección Administrativa y Financiera
Profesional Especializado	222	7	1	220791	Ascenso	Personerías Delegadas para Asuntos Penales I y II
Profesional Especializado	222	7	1	220792	Ascenso	Dirección de Conciliación y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos
Profesional Especializado	222	7	1	220810	Abierto	Subdirección de Desarrollo del Talento Humano
Profesional Especializado	222	7	1	220812	Abierto	Personería Delegada para la Familia y Sujetos de Especial Protección Constitucional
Profesional Especializado	222	6	1	220798	Abierto	Personería Delegada Coordinación de Prevención y Control a la Función Pública
Profesional Especializado	222	6	1	220802	Abierto	Personería Delegada para La Orientación y Asistencia a las Personas
Profesional Especializado	222	6	1	220807	Abierto	Secretaría General
Profesional Especializado	222	5	1	220793	Ascenso	Subdirección de Gestión del Talento Humano
Profesional Especializado	222	5	1	220794	Ascenso	Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos
Profesional Especializado	222	5	1	220800	Abierto	Dirección de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico
Profesional Especializado	222	5	1	220808	Abierto	Oficina de Control Interno
Profesional Especializado	222	4	1	220801	Abierto	Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos
Profesional Especializado	222	2	1	220795	Ascenso	Personería Delegada para La Orientación y Asistencia a las Personas
Profesional Especializado	222	2	1	220796	Ascenso	Personería Delegada para La Coordinación de Potestad Disciplinaria
Profesional Especializado	222	2	1	220809	Abierto	Subdirección de Gestión del Talento Humano
Profesional Universitario	219	1	1	220797	Ascenso	Subdirección de Gestión del Talento Humano
Secretario	440	7	2	220784	Ascenso	Todas las Dependencias
Secretario	440	5	1	220785	Ascenso	Todas las Dependencias
Secretario	440	5	3	220805	Abierto	Todas las Dependencias
Auxiliar Administrativo	407	5	2	220806	Abierto	Todas las Dependencias

DENOMINACIÓN	CÓDIGO	GRADO	EMPLEOS OFERTADOS EN D6 CNSC	# de OPEC	MODALIDAD	DEPENDENCIA OFERTADA
Conductor Mecánico	482	7	1	220799	Abierto	Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos
Auxiliar Servicios Generales	470	1	5	220803	Abierto	Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos
Auxiliar Servicios Generales	470	1	15	220804	Abierto	Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos
TOTAL EMPLEOS OFERTADOS EN DISTRITO 6			50			

Relación Empleos por Incorporar en la nueva nomenclatura

**TOTAL EMPLEOS MENOS PLANTA TRANSITORIA -
NOMENCLATURA ACTUAL**

NIVEL PROFESIONAL					
DENOMINACION	CODIGO	GRADO	TOTAL Empleos Ac. 755 / 2019	Empleos en Concursos D6 CNSC. Planta Transitoria	TOTAL EMPLEOS PARA INCORPORACION
Profesional Especializado	222	7	233	9	224
Profesional Especializado	222	6	15	3	12
Profesional Especializado	222	5	52	4	48
Profesional Especializado	222	4	15	1	14
Profesional Especializado	222	3	15	0	15
Profesional Especializado	222	2	32	3	0
Profesional Universitario	219	1	164	1	0
TOTAL EMPLEOS NIVEL PROFESIONAL			526	21	313

**TOTAL EMPLEOS PARA
INCORPORACION -
NOMENCLATURA PROPUESTA**

NIVEL PROFESIONAL			
DENOMINACION	CODIGO	GRADO	TOTAL EMPLEOS PARA INCORPORACION
Profesional Especializado	222	03	284
Profesional Especializado	222	02	29
Profesional Universitario	219	01	0
TOTAL EMPLEOS NIVEL PROFESIONAL			313

Los empleos de Profesional Universitario 219 – 01 conservarán su nomenclatura actual; los empleos de Profesional Especializado 222 – 02 solo tendrán modificaciones en su

manual de funciones, por tanto, estos empleos no serán objeto de incorporación.

NIVEL ASISTENCIAL						NIVEL ASISTENCIAL			
DENOMINACION	CODIGO	GRADO	TOTAL Empleos Ac. 755 / 2019	TOTAL Empleos en Concurso D6 CNSC Planta Transitoria	TOTAL EMPLEOS PARA INCORPORACION	DENOMINACION	CODIGO	GRADO	TOTAL EMPLEOS PARA INCORPORACION
Secretario	440	7	98	2	96	Secretario	440	02	142
Secretario	440	5	15	4	11				
Secretario	440	4	15	0	15				
Secretario	440	3	20	0	20				
Auxiliar Administrativo	407	7	7	0	7	Auxiliar Administrativo	407	02	146
Auxiliar Administrativo	407	6	25	0	25				
Auxiliar Administrativo	407	5	20	2	18				
Auxiliar Administrativo	407	4	20	0	20				
Auxiliar Administrativo	407	3	76	0	76				
Auxiliar Administrativo	407	2	21	0	0				
Conductor Mecánico	482	7	16	1	15	Conductor Mecánico	482	02	15
Conductor	480	2	12	0	0	Conductor	480	2	0
Auxiliar Servicios Generales	470	1	40	20	20	Auxiliar Servicios Generales	470	1	20
TOTAL EMPLEOS NIVEL ASISTENCIAL			385	29	323	TOTAL EMPLEOS NIVEL ASISTENCIAL			323

Los empleos de Auxiliar Administrativo 407 – 02 y Conductor 480 – 02 solo tendrán modificaciones en su manual de funciones, por tanto, esto empleos no serán objeto de incorporación; de los cuarenta (40) empleos de Auxiliar de Servicios Generales 470 -01, veinte (20) serán suprimidos para crearlos como Auxiliar Administrativo 407 – 01, los cuales si requieren Incorporación.

4.4. Planta Actual

La Planta de Personal vigente de la Personería de Bogotá, adoptada mediante Acuerdo 755 de 2019 es la siguiente:

PLANTA ACTUAL

ACUERDO 755 DE 2019

DESPACHO DEL PERSONERO			
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CÓDIGO	GRADO	No. DE CARGOS
Personero	15	6	1
Asesor	105	1	25
Total Despacho			26

NIVEL DIRECTIVO			
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CÓDIGO	GRADO	No. DE CARGOS
Personero Auxiliar	17	5	1
Secretario General de Organismo de Control	73	4	1
Personero Delegado Coordinador	40	4	4
Personero Delegado	40	3	23
Director Técnico	9	2	2
Director Operativo	9	2	5
Subdirector	70	1	5
Jefe de Oficina	6	2	2
Personero Local de Bogotá	43	1	20
Total Nivel Directivo			63

NIVEL ASESOR			
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CÓDIGO	GRADO	No. DE CARGOS
Jefe de Oficina Asesora de Jurídica	115	1	1
Jefe de Oficina Asesora de Prensa	115	1	1
Total Nivel Asesor			2

NIVEL PROFESIONAL			
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CÓDIGO	GRADO	No. DE CARGOS
Profesional Especializado	222	7	233
Profesional Especializado	222	6	15
Profesional Especializado	222	5	52
Profesional Especializado	222	4	15
Profesional Especializado	222	3	15
Profesional Especializado	222	2	32
Profesional Universitario	219	1	164
Total Profesional			526

NIVEL ASISTENCIAL			
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CÓDIGO	GRADO	No. DE CARGOS
Auxiliar Administrativo	407	7	7
Auxiliar Administrativo	407	6	25
Auxiliar Administrativo	407	5	20
Auxiliar Administrativo	407	4	20
Auxiliar Administrativo	407	3	76
Auxiliar Administrativo	407	2	21
Secretario	440	7	98
Secretario	440	5	15
Secretario	440	4	15
Secretario	440	3	20
Conductor Mecánico	482	7	16
Conductor	480	2	12
Auxiliar de Servicios Generales	470	1	40
Total Nivel Asistencial			385

TOTAL CARGOS PLANTA DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.		1002	
--	--	------	--

4.5. Empleos por Suprimir

Dentro del rediseño de la Entidad, se propone la supresión de los siguientes empleos.

4.5.1. Supresión Empleos del Nivel Directivo

De acuerdo con las modificaciones propuestas a la estructura organizacional, se propone suprimir los siguientes empleos del nivel Directivo:

EMPLEOS POR SUPRIMIR			
NIVEL DIRECTIVO			
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CÓDIGO	GRADO	No. DE CARGOS
Personero Delegado Coordinador	40	4	4
Personero Delegado	40	3	2
Total Empleos por Suprimir Nivel Directivos			6

4.5.2. Empleos por transformar mediante incorporación

En atención a la necesidad de modernizar la administración, mejorar la eficiencia y ajustar la planta de personal a las necesidades actuales de la Personería de Bogotá, se hace necesario suprimir los veinte (20) empleos de Auxiliar de Servicios Generales 470 – 01 de carrera administrativa no ofertados en procesos de selección y crearlos como Auxiliar Administrativo 407 – 01, como se aprecia a continuación:

Empleos por suprimir y crear en el Nivel Asistencial

NOMENCLATURA ACTUAL				NOMENCLATURA PROPUESTA			
NIVEL ASISTENCIAL				NIVEL ASISTENCIAL			
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CÓDIGO	GRADO	No. DE CARGOS	DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CÓDIGO	GRADO	No. DE CARGOS
Auxiliar de Servicios Generales	470	1	20	Auxiliar Administrativo	407	1	20

4.6. Empleos por crear

De acuerdo con el estudio técnico del rediseño institucional se hace necesario ajustar la planta de personal a las necesidades actuales de la Personería de Bogotá en aras de modernizar la administración, mejorar la eficiencia y asegurar que la estructura de la planta de personal esté alineada con las necesidades actuales y el desarrollo de la Entidad, de la siguiente manera:

PROPUESTA CARGOS A CREAR

DESPACHO DEL PERSONERO			
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CÓDIGO	GRADO	No. DE CARGOS
Asesor	105	1	10
Asesor	105	2	2
Secretario	440	2	2
Conductor Mecánico	482	2	2
Total			16

NIVEL DIRECTIVO			
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CÓDIGO	GRADO	No. DE CARGOS
Personero Delegado	40	3	9
Director Técnico	9	2	2
Subdirector	70	1	4
Jefe de Oficina	6	2	1
Personero Local de Bogotá	43	1	10
Total			26

NIVEL PROFESIONAL			
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CÓDIGO	GRADO	No. DE CARGOS
Profesional Especializado	222	4	40
Profesional Universitario	219	1	115
Total			155

NIVEL TECNICO			
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CÓDIGO	GRADO	No. DE CARGOS
Técnico Administrativo	367	1	14
Total			14

Total		
TOTAL CARGOS A CREAR PLANTA DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.	211	

Esta ampliación permitirá distribuir de manera eficiente las cargas laborales, asignando funciones acordes con el nivel de formación y especialización del personal.

4.7. Planta Propuesta

De acuerdo con lo anterior, y conforme al objeto, la estructura organizacional y funciones, la planta de personal de la Personería de Bogotá, D.C. estará conformada de la siguiente manera:

PLANTA DE PERSONAL PROPUESTA

DESPACHO DEL PERSONERO				
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CÓDIGO	GRADO	No. DE CARGOS	NATURALEZA
Personero	15	6	1	LNR
Asesor	105	1	35	LNR
Asesor	105	2	2	LNR
Secretario	440	2	2	LNR
Conductor Mecánico	482	2	2	LNR
Planta Total Despacho del Personero			42	

NIVEL DIRECTIVO				
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CÓDIGO	GRADO	No. DE CARGOS	NATURALEZA
Personero Auxiliar	17	5	1	LNR
Secretario General de Organismo de Control	73	4	1	LNR
Personero Delegado	40	3	30	LNR
Director Técnico	9	2	4	LNR

Director Operativo	9	2	5	LNR
Subdirector	70	1	9	LNR
Jefe de Oficina	6	2	3	LNR
Personero Local de Bogotá	43	1	30	LNR
Planta Total Nivel Directivo			83	

NIVEL ASESOR				
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CÓDIGO	GRADO	No. DE CARGOS	NATURALEZA
Jefe de Oficina Asesora Jurídica	115	1	1	LNR
Jefe de Oficina Asesora de Prensa	115	1	1	LNR
Planta Total Nivel Asesor			2	

NIVEL PROFESIONAL				
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CÓDIGO	GRADO	No. DE CARGOS	NATURALEZA
Profesional Especializado	222	4	40	PCA
Profesional Especializado	222	3	284	PCA
Profesional Especializado	222	2	58	PCA
Profesional Universitario	219	1	278	PCA
Planta Total Nivel Profesional			660	

PLANTA TRANSITORIA NIVEL PROFESIONAL (Conservan Nomenclatura del Acuerdo 755 de 2019)				
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CÓDIGO	GRADO	No. DE CARGOS	NATURALEZA
Profesional Especializado	222	7	9	PCA
Profesional Especializado	222	6	3	PCA
Profesional Especializado	222	5	4	PCA
Profesional Especializado	222	4	1	PCA
Profesional Especializado	222	2	3	PCA
Profesional Universitario	219	1	1	PCA
TOTAL PLANTA TRANSITORIA NIVEL PROFESIONAL			21	

NIVEL TÉCNICO				
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CÓDIGO	GRADO	No. DE CARGOS	NATURALEZA
Técnico Administrativo	367	1	14	PCA
Planta Total Nivel Técnico			14	

NIVEL ASISTENCIAL				
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CÓDIGO	GRADO	No. DE CARGOS	NATURALEZA
Auxiliar Administrativo	407	2	167	PCA
Auxiliar Administrativo	407	1	20	PCA
Secretario	440	2	142	PCA
Conductor Mecánico	482	2	15	PCA
Conductor	480	2	12	PCA
Planta Total Nivel Asistencial			356	

PLANTA TRANSITORIA NIVEL ASISTENCIAL (Conservan Nomenclatura del Acuerdo 755 de 2019)				
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CÓDIGO	GRADO	No. DE CARGOS	NATURALEZA
Secretario	440	7	2	PCA
Secretario	440	5	4	PCA
Auxiliar Administrativo	407	5	2	PCA
Conductor Mecánico	482	7	1	PCA
Auxiliar Servicios Generales	470	1	5	PCA
Auxiliar Servicios Generales	470	1	15	PCA
TOTAL PLANTA TRANSITORIA NIVEL ASISTENCIAL			29	

TOTAL CARGOS PLANTA DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.	1207
--	-------------

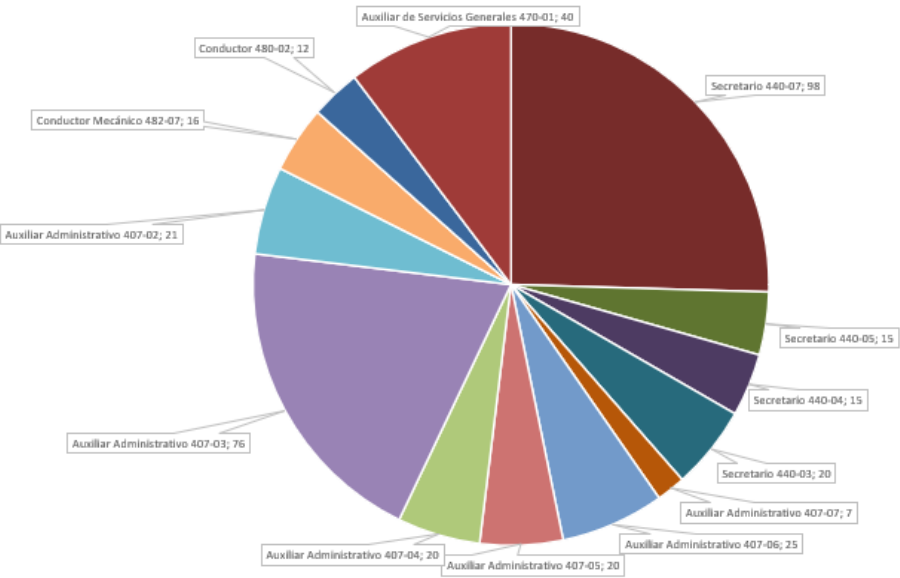
El 60% de los empleos propuestos estarán orientados al primer empleo, lo cual favorecerá la implementación de políticas de trabajo decente y digno, promoviendo oportunidades

laborales para los jóvenes.

La creación de empleos del nivel profesional, técnico y asistencial, permitirá a la Entidad ponerse a la vanguardia en la formalización laboral, generando empleos en condiciones de igualdad frente a quienes se encuentran vinculados como servidores públicos, con criterios meritocráticos y con vocación de permanencia, se busca dignificar el empleo público a través de la formalización en equidad, buscando retribuir a la ciudadanía la mejor y más eficaz prestación de los servicios, con continuidad y calidad.

De las 385 personas que ocupan cargos asistenciales, 156 tienen formación profesional y de estas 22 cuentan con encargo, los funcionarios profesionalizados se encuentran capacitados para asumir funciones que actualmente son desarrolladas por contratistas.

EMPLEOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA: por códigos y grados - nivel asistencial



Gráfica 2. Empleos de nivel asistencial. Fuente: Elaboración Propia

4.8. Sustento Presupuestal y Eficiencia en la Gestión del Gasto

El rediseño institucional implica no solo una reestructuración de la planta de personal, sino también la implementación de una estrategia eficiente de gestión del gasto, que garantice la viabilidad financiera del proyecto. Este sustento presupuestal ha sido cuidadosamente diseñado para asegurar su viabilidad financiera a largo plazo, optimizando el uso de los

recursos disponibles y promoviendo la formalización laboral dentro de la Entidad.

Para llevar a cabo este rediseño, la Personería de Bogotá realizó la supresión de 4 empleos del nivel directivo: (i) 4 de Personeros Delegada para coordinación (040-04) y (ii) 2 Personerías delegadas (040-03) y 20 auxiliares de servicios generales, que serán transformados en 20 empleos de Auxiliar Administrativo Código 407, grado 01, a costo cero.

Con el rediseño de la planta de personal y la creación de 211 empleos (26 del nivel directivo, 12 del nivel asesor, 155 del nivel profesional, 14 del nivel técnico y 4 del nivel asistencial), se busca, entre otras cosas, subsanar el hecho de que algunas funciones esenciales y recurrentes para el correcto funcionamiento de la Entidad estén siendo actualmente desempeñadas por asistenciales y en otros casos por contratistas, tal es el caso de las funciones de gestión documental que están siendo realizadas por 20 contratistas, lo que permite a la Entidad formalizar estos empleos.

En cuanto al impacto financiero específico de la creación de los 211 nuevos empleos y la reducción de la dispersión de la planta global de la Personería de Bogotá, D.C., se ha proyectado un incremento anual a precios 2024 de \$41.749.601.673 incluida la reducción de gastos por la supresión de algunos empleos.

Adicionalmente, conforme a lo establecido en el Decreto Distrital 062 de 2024¹²⁹, la contratación de bienes y servicios requeridos para el correcto funcionamiento de la Personería de Bogotá, D.C., se realizará bajo criterios de austeridad y eficiencia. Desde la programación del presupuesto para la vigencia 2025, se priorizará la adquisición de aquellos servicios y bienes que sean necesarios para el cumplimiento de las funciones de la Entidad, contribuyendo a una gestión presupuestal responsable y sostenible, como se analiza en el componente financiero.

4.9. Modificación a la planta de personal de la Personería de Bogotá:

Para la modificación de la planta de personal de la Personería de Bogotá, D.C., se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:

- ✓ De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.12.2 del Decreto 1083 de 2015, la modificación de la planta de empleos de la Personería de Bogotá, D.C., está fundada en las necesidades del servicio y en la modernización de la Entidad, de acuerdo con las conclusiones del estudio técnico realizado y que forma parte de esta exposición de motivos. Igualmente, como se estableció, se generó la necesidad de

¹²⁹ Decreto 062 de 2024 "Por el cual se ordena implementar medidas de austeridad y eficiencia del gasto público en las entidades y organismos de la administración distrital"

crear y suprimir algunos empleos, con ocasión de la supresión, fusión y creación de dependencias, así como la modificación de sus funciones.

- ✓ Otro aspecto que conlleva a la modificación de la planta de empleos es la redistribución de funciones y cargas de trabajo, conforme a las conclusiones arrojadas en el estudio de cargas laborales realizado por la Entidad en la vigencia 2023 y que soporta el presente proyecto de modernización y rediseño institucional.
- ✓ Aunado a lo anterior, como se ha mencionado, la Personería busca posicionarse como una Entidad competitiva frente a los cambios tecnológicos, ya que así lo exige la misma ciudadanía, cuando accede a los servicios, no solo de manera presencial, sino también virtual y al prestar los mismos de manera descentralizada, con la implementación de nuevos modelos de trabajo, que generan nuevos retos en temas de conectividad, mantenimiento y sostenimiento de los sistemas de información en general.

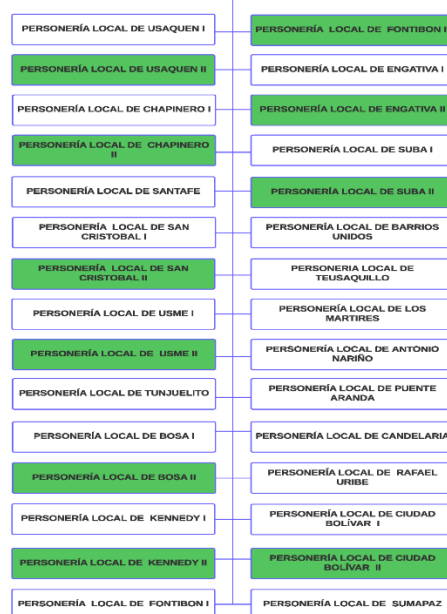
Con todo ello, la entidad debe propender por el mejoramiento de los niveles de eficacia, eficiencia, economía y celeridad para mejorar los estándares de calidad y que ello se vea reflejado en la prestación de mejores servicios a la ciudadanía.

- ✓ Con la creación de empleos del nivel profesional, técnico y asistencial, la entidad realizara esfuerzos para reducir en un 20% el número de contratos de prestación de servicios profesionales. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no se puede prescindir en su totalidad de estos, debido a que el estudio de cargas laborales arrojó la necesidad de crear 491 empleos de los cuales solo se están creando 173 (155 del nivel profesional, 14 técnicos y 4 asistenciales).
- ✓ En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.1.5.2 del Decreto 1083 de 2015, con el rediseño propuesto en cerca del sesenta por ciento (60%) de los nuevos empleos, no se exige experiencia profesional para el nivel profesional, con el fin de viabilizar la vinculación al servicio público de los jóvenes entre 18 y 28 años.
- ✓ A la luz del numeral 2 del Artículo 2.2.12.1.2.2 del Decreto 1083 de 2015, no se hace necesario realizar el estudio de los cargos de los cuales son titulares los servidores públicos que se encuentran en alguno de los grupos de protección especial, teniendo en cuenta que, si bien se suprimen empleos, los funcionarios que los ocupan serán incorporados a los empleos creados con otra nomenclatura, ya que ello obedece a la necesidad de optimizar la escala salarial y reducir la dispersión de grados salariales de los empleos de los niveles asistencia, técnico y profesional.
- ✓ Para la ampliación y profesionalización de la planta, también se proyecta la creación de diez (10) empleos del nivel asesor código 105-01 y dos (2) Código 105-02, todos ellos adscritos al despacho del señor Personero de Bogotá, D.C., orientados a asesorar al despacho, los primeros en temas misionales y los segundos en relación con temas estratégicos para el funcionamiento de la Entidad.
- ✓ Con el Acuerdo 755 de 2019, la Personería ejecutó la primera parte del rediseño

institucional de la época, señalando que, conforme al estudio de cargas realizado en el año 2018, quedaría pendiente la segunda fase del mencionado rediseño, el cual tendría como punto de partida la creación de 115 empleos del nivel profesional universitario código 219 grado 01.

- ✓ Para el presente proyecto de modernización y rediseño institucional también de tuvo en cuenta, la existencia de 40 empleos de Auxiliar de Servicios Generales. Como se observa en el estudio técnico, para la supresión de 20 empleos de Auxiliar de Servicios Generales, solo se suprimirían aquellos que están siendo ocupados por funcionarios con derechos de carrera administrativa, los cuales serán incorporados en el empleo de Auxiliar Administrativo 407 grado 01, toda vez que los restantes 20 fueron reportados dentro de la convocatoria Distrito 06 y están siendo ocupados por funcionarios vinculados en provisionalidad y solo podrán ser suprimidos hasta cuando la lista de elegibles pierda vigencia, esto es dos o tres años y no a la finalización del periodo de prueba.
- ✓ Así mismo, del estudio técnico realizado, se pudo establecer la necesidad de reforzar las Personerías Locales, ello obedece a que algunas de estas dependencias manejan población superior a un millón de personas, así mismo un elevado volumen de procesos y en otros casos las temáticas como violencia intrafamiliar, hacen que la función se torne inmanejable para una sola Personería Local, por lo que en el presente proyecto se plantea la necesidad de ampliar el número de locales en 10 adicionales, para un total de 30 distribuidas de la siguiente manera:

Propuesta Personerías Locales



Nota: Las casillas en verde corresponden a las Personerías Locales Nuevas

- ✓ Con relación a la modificación de la escala salarial se modificará la denominación de los empleos del nivel profesional y asistencial, los cuales serán suprimidos. Teniendo en cuenta que se está modificando la nomenclatura, la escala salarial, los requisitos, estos serán creados nuevamente y los funcionarios incorporados en los nuevos empleos como se muestra a continuación.

4. ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DEL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES.

El artículo 122 de la Constitución Política señala que no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento.

En desarrollo de este precepto constitucional, el literal c) del artículo 15 de la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública, determinan que las entidades deben expedir sus manuales específicos de funciones, requisitos mínimos y competencias laborales, teniendo en cuenta el contenido funcional, y las competencias comportamentales comunes y específicas de los empleos que conforman las plantas de personal.

A partir de las modificaciones surgidas con ocasión del presente proyecto de modernización y rediseño institucional, es preciso adecuar el manual específico de funciones y competencias laborales de la Personería de Bogotá, D.C., a las modificaciones de orden legal y reglamentario, para asegurar que las funciones y competencias laborales de los empleos públicos estén alineadas con el objeto, estructura y objetivos institucionales y que los(as) servidores(as) públicos(as) que los desempeñen, ajusten sus actuaciones a ese marco normativo general que es vinculante, tanto para la Entidad como para ellos, atendiendo a la dinámica propia del funcionamiento de la Entidad y a las necesidades del servicio que esta presta.

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe modificar el manual específico de funciones y competencias laborales de la Personería de Bogotá, D.C., de conformidad con lo previsto por el inciso segundo del artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015, el que se adoptará mediante resolución interna expedida por la Entidad, de acuerdo con las disposiciones contenidas en dicha norma.

Las fichas del Manual Específico de Funciones de los empleos que hacen parte de concursos vigentes no entraran en vigor hasta que las listas de elegibles correspondientes hayan perdido su vigencia.

5. COSTO TOTAL DEL REDISEÑO

6.1. Costos de la planta propuesta

En este capítulo se relacionan los costos asociados a la creación de 938 cargos en la planta de personal y supresión de 733, resultante del análisis, para una semi suma de 205 empleos nuevos, en los niveles requeridos de la nueva estructura propuesta. Son estimaciones a partir de las asignaciones para 2024 y proyectadas para el año 2025 mediante supuestos macroeconómicos establecidos por la Secretaría de Hacienda. Estas estimaciones incorporan conceptos de asignación básica salarial, elementos salariales asociados, prestaciones sociales, aportes patronales al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

Igualmente se incorporan las proyecciones de costos del aplanamiento de la planta, acorde con las dinámicas de modernización y la orientación a corregir la disparidad presentada en la escala salarial para los cargos de profesional especializado, cuya asignación es inferior a la de profesional universitario.

Proyección costos por creación de cargos:

CARGO	CODIGO	GRADO	SUELDO ACTUAL 2024	TOTAL ANUAL POR CARGO (incluye todos los conceptos)	NÚMERO CARGOS PROPUESTOS	TOTAL
Personero Delegado	040	03	13.131.967	605.069.280	9	5.445.623.520
Personero Local	043	01	9.206.065	395.954.927	10	3.959.549.270
Director	009	02	10.390.866	446.913.504	2	893.827.008
Subdirector	070	01	9.206.065	395.954.927	4	1.583.819.708
Asesor	105	01	9.206.065	339.477.652	10	3.394.776.520
Asesor	105	02	10.390.866	480.731.906	2	961.463.812
Jefe de Oficina	006	02	10.390.866	446.913.504	1	446.913.504
Profesional Especializado	222	02	5.818.871	214.573.379	62	13.275.618.918
Profesional Especializado	222	03	5.899.567	217.549.033	300	64.882.417.953
Profesional Especializado	222	04	5.980.263	183.837.022	40	7.353.480.880
Profesional Universitario	219	01	5.738.447	118.759.330	115	13.657.322.950
Técnico administrativo	367	01	4.183.337	86.575.831	14	1.212.061.634
Auxiliar Administrativo	470	01	3.770.348	78.028.872	20	1.560.577.440
Auxiliar Administrativo	407	02	4.141.829	85.716.769	169	14.486.133.961
Secretario	440	02	4.141.829	85.716.769	150	12.857.515.350
Conductor mecánico	482	02	4.141.829	85.716.769	18	1.542.901.842
Conductor	480	02	4.141.829	85.716.769	12	1.028.601.228

		TOTALES			938	148.542.605.498
--	--	---------	--	--	-----	-----------------

Fuente: Elaboración propia con base en la Guía de liquidación de nómina de la Personería de Bogotá.

Aquí se aprecian los costos asociados a la creación de cargos, por cada uno de los niveles, calculados con base en las asignaciones básicas de 2024 y que incluyen todos los conceptos asociados a la nómina.

En la nueva estructura se propone prescindir de los cargos de coordinación y dos de personerías delegadas, lo cual representa unos recursos libres para apalancar la creación de nuevos cargos, así como la supresión de servicios generales que serán incorporados como auxiliares administrativos, con la misma asignación:

Proyección de reducción de costos por supresión de cargos

COSTO ANUAL SUPRESION DE EMPLEOS (a precios de 2024)						
CARGO	CODIGO	GRADO	SUELDO ACTUAL 2024	TOTAL ANUAL POR CARGO (incluye todos los conceptos)	NÚMERO CARGOS PROPUESTOS	TOTAL
Personero Delegado Coordinación	040	04	13.783.934	592.985.392	4	2.371.941.568
Personero Delegado	040	03	13.131.967	565.299.026	2	1.130.598.052
Profesional Especializado	222	07	5.618.635	207.189.591	233	47.991.995.499
Profesional Especializado	222	06	5.256.516	193.836.259	15	2.907.543.885
Profesional Especializado	222	05	5.128.026	189.098.121	52	9.759.258.720
Profesional Especializado	222	04	5.041.039	185.890.401	15	2.776.257.521
Profesional Especializado	222	03	5.040.810	185.882.019	15	2.788.230.285
Profesional Especializado	222	02	5.040.585	185.873.766	32	5.935.863.108
Auxiliar Administrativo	407	07	4.141.829	85.716.769	7	600.017.383
Auxiliar Administrativo	407	06	4.141.729	85.714.660	25	2.142.866.500
Auxiliar Administrativo	407	05	4.141.629	85.712.650	20	1.714.253.000
Auxiliar Administrativo	407	04	4.141.529	85.710.540	20	1.714.210.800
Auxiliar Administrativo	407	03	4.141.429	85.708.528	76	6.513.848.128
Auxiliar Administrativo	407	02	4.141.329	85.706.420	21	1.799.834.820
Secretario	440	07	4.141.829	85.716.769	98	8.400.243.362
Secretario	440	05	4.141.629	85.712.650	15	1.285.689.750
Secretario	440	04	4.141.529	85.710.540	15	1.285.658.100
Secretario	440	03	4.141.429	85.708.528	20	1.714.170.560
Conductor mecánico	482	07	4.141.829	85.716.769	16	1.371.468.304
Conductor	480	02	4.141.329	85.706.420	12	1.028.477.040

Auxiliar de servicios generales	470	01	3.770.348	78.028.872	20	1.560.577.440
				Totales	733	106.793.003.825

Fuente: Elaboración propia con base en la Guía de liquidación de nómina de la Personería de Bogotá.

Como resultado de las anteriores estimaciones, se presenta a continuación un resumen de las cifras vinculadas a la creación y supresión de cargos, a precios de 2024:

Resumen de proyección costos para la reorganización 2024

COSTO ANUAL CREACION Y SUPRESION DE EMPLEOS 2024	
CONCEPTOS	VALOR
Incremento anual creación a precios 2024	148.542.605.498
Disminución por supresión a precios 2024	-106.793.003.825
Incremento anual a precios 2024	41.749.601.673

Las proyecciones fueron realizadas teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Las asignaciones básicas salariales corresponden a las establecidas para el año 2024 mediante Decreto 151 del 30 de abril 2024, con base en las que se incorporan los conceptos de gasto asociados a la nómina. Las estimaciones para los cargos a proveer se realizan bajo el supuesto de vinculación de servidores públicos que no traen antigüedad ni del Distrito, ni de la entidad y la clasificación del riesgo laboral corresponde a nivel 1 (0,522%).

La distribución por renglones del presupuesto se refleja en la siguiente tabla:

Resumen de proyección costos por renglones del presupuesto 2024

RUBRO	VALOR CREACION DE EMPLEOS	VALOR SUPRESION DE EMPLEOS	VALOR EFECTO NETO 2024
SUELDO	60.003.979.428	42.634.034.844	17.369.944.584
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6.526.351.848	4.730.716.187	1.795.635.661
PRIMA TÉCNICA	20.033.916.686	14.847.406.434	5.186.510.252
BONIFICACION POR SERVICIOS	1.952.432.691	1.392.590.815	559.841.876
PRIMA VACAC.	4.077.747.879	2.934.132.183	1.143.615.696
PRIMA SEMESTRAL	8.939.043.012	6.433.208.170	2.505.834.842
PRIMA DE NAVIDAD	8.495.308.112	6.112.775.698	2.382.532.414
BONIFICACION POR RECREACIÓN	333.355.441	236.855.749	96.499.692
CESANTIAS FONDOS	9.203.250.185	6.622.173.691	2.581.076.494

INTERESES	1.104.390.026	794.660.894	309.729.132
APORTES SALUD	7.559.449.400	5.439.478.600	2.119.970.800
APORTES PENSION	10.674.454.600	7.679.256.900	2.995.197.700
RIESGOS LABORALES	463.993.900	333.916.000	130.077.900
CAJA DE COMPENSACIÓN	4.077.747.879	2.934.132.183	1.143.615.696
ESAP	509.718.348	366.766.644	142.951.704
ICBF	3.058.310.746	2.200.599.198	857.711.548
SENA	509.718.348	366.766.644	142.951.704
INSTITUTOS TECNICOS MES LABORADO	1.019.436.969	733.532.991	285.903.978
Total	148.542.605.498	106.793.003.825	41.749.601.673

6.2. Metodología de estimación de costos de la nivelación y aplanamiento en la planta propuesta para 2025

El presupuesto de apropiaciones para 2025 se proyectó con un incremento del 6% frente al de 2024, de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Secretaría de Hacienda Distrital en el Anexo 1 de la Circular externa – Anteproyecto de Presupuesto para la vigencia 2025: Supuestos Macroeconómicos, criterios y aspectos a considerar.

De manera simultánea a la creación y supresión de cargos, se efectuaron estimaciones de los costos asociados a los componentes del proyecto que buscan corregir la anormalidad detectada, teniendo en cuenta que los cargos de Profesional Especializado que se proveen después de la entrada en vigencia del Decreto 1498 de 2022, no perciben gastos de representación, lo que deja en evidencia que actualmente un Profesional Universitario percibe más asignación básica que un Profesional Especializado grado 02, en contravía del precepto que a mayor responsabilidad de un empleo mayor remuneración debe percibir, ocasionando que se baje el interés por la demanda de estos empleos en el mercado laboral, teniendo en cuenta que hay profesionales de menor nivel percibiendo una remuneración más alta. Realizar un ajuste en la escala salarial que mejore las disparidades que ocasiona esta condición actual, se compagina con la necesidad de aplanar la planta de personal eliminando empleos en grados que, siendo equivalentes, presentan diferencias exiguas en la asignación básica y desestimulan el ascenso de los servidores públicos que los ocupan, particularmente en el nivel asistencial.

Se excluyen de las proyecciones los cargos que se encuentran ofertados en la convocatoria Distrito 6 que adelanta la Comisión Nacional del Servicio Civil, los cuales no podrán ser suprimidos ni incorporados sino hasta seis (6) meses después de aprobado su periodo de prueba.

6.3. Aporte del ahorro en otros rubros para el presupuesto para 2025

La Personería de Bogotá D.C. adelanta gestiones para contribuir a las políticas de austeridad en el uso de los recursos públicos y que generen ahorros que contribuyan a los propósitos de modernización prioritaria, en el propósito de fortalecer las capacidades institucionales para atender de manera efectiva, oportuna, resolutiva y cercana las necesidades de la ciudadanía.

Con el traslado del Centro de Atención a la Comunidad (CAC) de la Personería de Bogotá a su nueva sede, se proyecta un ahorro en los gastos de funcionamiento por concepto de arrendamientos en una suma por \$2.242.141.861. Igualmente, el traslado conlleva una disminución por concepto de servicios públicos que para el año 2025 se estima en \$70.000.000.

La creación de empleos en los niveles profesional y técnico conlleva una disminución del número de contratistas, en aquellas actividades que generan tendencia a la continuidad de contratos de servicios profesionales y servicios de apoyo a la gestión, que se estima en aproximadamente en cuarenta contratistas, y que generan un ahorro de \$1.900.000.000.

Ahorros proyectados para 2025

CONCEPTOS	VALOR
Ahorro anual por cánones de arrendamiento	2.254.141.861
Ahorro anual por servicios públicos	70.000.000
Ahorro anual en ordenes de prestación de servicios	1.900.000.000
TOTAL AHOORO EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.224.141.861

El monto total de ahorros proyectado para 2025 se constituye en una fuente para la financiación de la reorganización, que con las estimaciones presupuestales para la vigencia 2025, presentan el siguiente resumen:

Resumen de proyección costos para la reorganización 2024

CONCEPTOS	VALOR
Incremento anual creación a precios 2024	148.542.605.498
Disminución por supresión a precios 2024	-106.793.003.825
Incremento anual a precios 2024	41.749.601.673
Apropiación Estimada 2025	241.728.591.460
Efecto en el presupuesto 2025 (*)	44.254.577.773
Ahorros proyectados 2025	-4.224.141.861
Incremento neto en el presupuesto para 2025	40.030.435.912

Incremento porcentual	16,56%
-----------------------	--------

(*) Secretaría de Hacienda Distrital – Anexo 1 CIRCULAR EXTERNA – Anteproyecto de Presupuesto para la vigencia 2025: Supuestos Macroeconómicos, criterios y aspectos a considerar.

El monto de los recursos que se deberán adicionar al presupuesto de gastos de funcionamiento de la Personería de Bogotá para la vigencia 2025, representan un incremento del 16,56% frente a las posibles cifras de apropiación para dicha vigencia.

Para este estudio se excluyeron estimaciones de los gastos generales que puedan asociarse a la reorganización, como son los correspondientes a provisión de espacios físicos, elementos materiales y tecnológicos, así como materiales y servicios públicos. El proyecto sustentado en estas cifras no requiere ajustarse al decreto de austeridad, en razón a que la entidad afectada hace parte de los órganos de control y vigilancia a los que el Decreto 062 de 2024 excluye de su ámbito de aplicación.

6. MARCO LEGAL

A continuación, se presenta el marco normativo que aplica a la Personería de Bogotá, desde lo general y las normas relacionadas con el marco técnico y sobre rediseño organizacional y asuntos de gestión del talento humano.

El ejercicio misional de la Personería de Bogotá, D.C., se desarrolla con sujeción a las siguientes normas generales:

- **Constitución Política de Colombia:** El artículo 118 de la Constitución Política de Colombia establece que el Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del ministerio público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. Al Ministerio Público corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas.
- **Ley 136 de 1994:** Por medio de esta ley se estableció el Régimen para los Distritos Especiales, como es el caso de la ciudad de Bogotá. Establece lo relacionado con el ordenamiento territorial, las funciones generales y atribuciones de la Personería de Bogotá. D.C.
- **Decreto Ley 1421 de 1993:** Dicta el régimen especial para el Distrito Capital. En el título VI se establece la organización y funcionamiento de la Personería de Bogotá, elección y calidades, inhabilidades faltas absolutas y temporales, entre otros temas.

- **Acuerdo 755 de 2019:** Este acuerdo crea nuevas dependencias para garantizar el ejercicio y ejecución de las funciones y responsabilidades misionales, definidas en la Constitución Política, la ley y los acuerdos distritales para la Personería de Bogotá D.C., dentro del ámbito de acción de sus competencias específicas, como órgano de control en la defensa y protección de los derechos humanos.
- **Ley 909 de 2009:** Cuyo objeto es la regulación del sistema de empleo público y el establecimiento de los principios básicos que deben regular el ejercicio de la gerencia pública.
- **Decreto Nacional 785 de 2005:** El Decreto 785 de 2005, regula el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004, como es el caso de la Personería de Bogotá, D.C.
- **Decreto Nacional 1083 de 2015:** Con base en este decreto se sustenta toda la gestión del talento humano de la Personería de Bogotá, D.C., en lo que atañe al ingreso, permanencia, desarrollo y retiro de los empleados públicos.
- **Decreto Nacional 815 de 2018:** Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, único reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con las competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos.

En los capítulos correspondientes a la estructura y planta de personal se especificarán los cambios de estas normas específicas y la propuesta de modificaciones.

7. COMPETENCIA DEL CONCEJO

De conformidad con el artículo 313 de la Constitución Política, el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 y la Ley 909 de 2004, el Concejo de Bogotá, D.C. es competente para *“(…) determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta (…)”*.

8. IMPACTO FISCAL

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, el impacto fiscal de cualquier proyecto de acuerdo que ordene gasto deberá hacerse explícito y ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, para lo cual, en la respectiva exposición de motivos

deberán incluirse expresamente los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para financiar dicho costo.

En esa medida, en atención a que el presente proyecto de acuerdo contempla modificar la estructura organizacional y el aumento de 211 cargos en la planta de personal de la Personería de Bogotá D.C., generando una afectación presupuestal para la siguiente vigencia fiscal, la cual fue calculada en \$44.254.577.773.

Cordialmente,

GLORIA INÉS BOHORQUEZ TORRES

Personera Auxiliar

En funciones de Personera de Bogotá, D.C

PROYECTO DE ACUERDO NO 242 DE 2025

PRIMER DEBATE

"POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, LA PLANTA DE EMPLEOS DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C., Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, que le confiere el artículo 313 de la Constitución Política y el numeral 15 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, y

CONSIDERANDO

Que mediante el Acuerdo 34 de 1933 modificado por los Acuerdos Distritales 182, 183 de 2005; 514 de 2012 y 755 de 2019 del Concejo de Bogotá, D. C., se organiza la Personería de Bogotá, se establece su estructura básica, se señalan las funciones de sus dependencias y la planta de personal.

Que la Personería de Bogotá, D. C., adelantó los análisis técnicos que sustentan el rediseño de su estructura organizacional interna, con el propósito de optimizar el cumplimiento de sus funciones legales y dar cumplimiento a su objeto misional.

Que de acuerdo con el artículo 2.2.12.2 del Decreto Nacional 1083 de 2015, la modificación de una planta de empleos debe fundarse en las necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración, siempre que las conclusiones del estudio técnico de la misma deriven en la creación o supresión de empleos con ocasión, entre otras causas de:

"(...) 4) supresión, fusión o creación de dependencias o modificación de sus funciones, 5) mejoramiento o introducción de procesos, producción de bienes o prestación de servicios, 6) redistribución de funciones y cargas de trabajo, y (...) 10) mejoramiento de los niveles de eficacia, eficiencia, economía y celeridad de las entidades públicas".

Que la Personería de Bogotá, D. C., presentó al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital el estudio técnico de que trata el artículo 46 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 228 del Decreto-Ley 019 de 2012 y los artículos 2.2.12.1 a 2.2.12.3 del Decreto Nacional 1083 de 2015, para efectos de modernizar, modificar su estructura y planta de personal, y con base en este, el Departamento emitió concepto técnico favorable mediante número de radicado 2-2024-18605 del 27 de diciembre de 2024, de conformidad con las facultades otorgadas por el artículo 6° del Acuerdo Distrital 199 de 2005 (Anexo 1).

Que la Dirección Distrital de Presupuesto de la Secretaría Distrital de Hacienda, expidió viabilidad presupuestal mediante oficio radicado 2025EE016641O1 del 29 de enero de 2025, para la modernización, modificación de la estructura organizacional y la planta de personal de la Personería de Bogotá D.C. (Anexo 2)

En mérito de lo expuesto,

A C U E R D A:

CAPÍTULO I

NATURALEZA, MISIÓN, OBJETIVOS Y FUNCIONES GENERALES DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ D. C.

Artículo 1. Naturaleza. De conformidad con los artículos 117 y 118 de la Constitución Política y los artículos 5 y 99, 100 y 101 del Decreto Ley 1421 de 1993, la Personería de Bogotá, D. C. es un organismo de control y vigilancia que ejerce el Ministerio Público en el Distrito Capital, en los términos previstos en la Constitución Política, las leyes y los acuerdos distritales.

Artículo 2. Misión. Como órgano de control, la Personería de Bogotá, D. C., ejerce funciones de Ministerio Público, defensor de los derechos humanos que vigila la conducta de los servidores públicos, actuando de manera oportuna y resolutive para garantizar el respeto de los derechos fundamentales, el cumplimiento de las funciones misionales y la normatividad vigente y el buen funcionamiento de las instituciones públicas en beneficio de las partes interesadas.

Artículo 3. Objetivos estratégicos y de la calidad. De acuerdo con la Constitución Política, el Decreto Ley 1421 de 1993 y demás normas relacionadas, son objetivos estratégicos y de la calidad de la Personería de Bogotá, D. C., los siguientes:

1. Fortalecer la promoción de derechos, la prevención y control a la función pública y la potestad disciplinaria con enfoque territorial que contribuya al desarrollo sostenible.
2. Promover la participación ciudadana y la articulación interinstitucional para garantizar la protección de los derechos y el interés general.
3. Fomentar una cultura de gestión del conocimiento, la innovación y la investigación como instrumentos transversales a través de la incorporación de herramientas de uso y apropiación y la consolidación de alianzas.

4. Fortalecer las capacidades institucionales a través de la modernización y la transformación tecnológica de la Personería de Bogotá, D. C.

Artículo 4. Funciones generales. Para el cumplimiento de su misión y de sus objetivos, en desarrollo de las disposiciones consagradas en la Constitución Política, el Decreto Ley 1421 de 1993 y de las fuentes de funciones adicionales para la Personería, resultantes de la **Ley 1448 de 2011** (de víctimas), la **Ley 1480 de 2011** (del consumidor) y la **Ley 1551 de 2012** (modificatoria de la Ley 136 de 1994), le corresponde a la Personería de Bogotá, D. C., la función de defensa, protección y promoción de los derechos humanos, función de veeduría, función de Ministerio Público y la función de vigilar la conducta oficial de los servidores públicos del Distrito Capital.

Artículo 5. Autonomía administrativa. En ejercicio de su autonomía administrativa le corresponde a la Personería de Bogotá, D. C., definir todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones en armonía con los principios consagrados en la Constitución, las leyes y en este Acuerdo.

Artículo 6. Autonomía presupuestal. La Personería de Bogotá, D. C., tendrá autonomía para el manejo y la administración de su presupuesto en concordancia con el Decreto 714 de 1996 del orden Distrital y demás disposiciones legales que en esta materia le sean aplicables.

CAPÍTULO II

SUPRESIÓN, MODIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE DENOMINACIÓN Y CREACIÓN DE DEPENDENCIAS, CARGOS Y FUNCIONES

SUPRESIÓN

Artículo 7. Supresión de Personerías Delegadas. Suprímase de la Estructura Organizacional de la Personería de Bogotá, Distrito Capital, las siguientes Personerías delegadas:

1. Personería Delegada para la Coordinación de Gestión de las Personerías Locales.
2. Personería Delegada para la Coordinación de Prevención y Control a la Función Pública.
3. Personería Delegada para la Coordinación de Potestad Disciplinaria.
4. Personería Delegada para la Coordinación del Ministerio Público y los Derechos Humanos.
5. Personería Delegada para la Orientación y Asistencia a las Personas.
6. Personería Delegada para la Asistencia en Asuntos Jurisdiccionales.

MODIFICACIÓN

Artículo 8. Modificación de Denominación de Dependencias. Modifíquese la denominación de las siguientes dependencias de la Personería de Bogotá, D. C.:

- ✓ La Personería Delegada para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos, se denominará Personería Delegada para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos I.
- ✓ La Personería Delegada para los sectores Gestión Pública, Gestión Jurídica y Gobierno, se denominará Personería Delegada para el Sector Gestión Pública y Gobierno.
- ✓ La Personería Delegada para los sectores Mujeres e Integración Social, se denominará Personería Delegada para el Sector Mujeres.
- ✓ La Personería Delegada para los sectores Educación, Cultura, Recreación y Deporte, se denominará Personería Delegada para el Sector Educación.
- ✓ La Personería Delegada para los sectores Hacienda y Desarrollo Económico, Industria y Turismo, se denominará Personería Delegada para el Sector Hacienda.
- ✓ La Personería Delegada para los sectores Planeación y Movilidad, se denominará Personería Delegada para el Sector Planeación.
- ✓ La Personería Delegada para la Potestad Disciplinaria I, se denominará Personería Delegada para Instrucción Disciplinaria I.
- ✓ La Personería Delegada para la Potestad Disciplinaria II, se denominará Personería Delegada para Instrucción Disciplinaria II.
- ✓ La Personería Delegada para la Potestad Disciplinaria III, se denominará Personería Delegada para Instrucción Disciplinaria III.
- ✓ La Personería Delegada para la Potestad Disciplinaria IV, se denominará Personería Delegada para Juzgamiento Disciplinario I.
- ✓ La Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos, se denominará Subdirección de Recursos Físicos dependiente de la Dirección Administrativa y Financiera.

CREACIÓN DE DEPENDENCIAS

Artículo 9. Objetivo de la creación de dependencias y de sus funciones. El objetivo de la creación de las nuevas dependencias es garantizar el ejercicio y ejecución de las funciones y responsabilidades misionales, definidas en la Constitución Política, la ley y los acuerdos distritales para la Personería de Bogotá D.C., dentro del ámbito de acción de sus competencias específicas, como órgano de control en la defensa y protección de los derechos humanos.

CREACIÓN DE DEPENDENCIAS DE PROCESOS ESTRATÉGICOS

Artículo 10. Creación de la Personería Delegada para el Relacionamento con el Ciudadano y Asuntos Locales¹³⁰. Crear la Personería Delegada para el Relacionamento con el Ciudadano y Asuntos Locales, dependiente del Despacho del (de la) Personero (a).

Artículo 11. Funciones de la Personería Delegada para el Relacionamento con el Ciudadano y Asuntos Locales. Son funciones de la Personería Delegada para el Relacionamento con el Ciudadano y Asuntos Locales las siguientes:

Funciones de la Personería Delegada para el Relacionamento con el Ciudadano y Asuntos Locales. Son funciones de la Personería Delegada para el Relacionamento con el Ciudadano y Asuntos Locales las siguientes:

1. Liderar la formulación, implementación y evaluación de la estrategia integral de servicio de conformidad con la caracterización de los grupos de interés de la Personería Distrital y el cumplimiento de la normatividad vigente
2. Liderar y coordinar al interior de la entidad la relación Estado - ciudadano, de conformidad con la normatividad vigente.
3. Emitir las directrices de los canales de atención al ciudadano y evaluar de manera sistemática los indicadores, de acuerdo con sus necesidades y expectativas en el marco de sus deberes y derechos, conforme a la normatividad vigente.
4. Formular los proyectos y gestionar los recursos para el desarrollo de iniciativas y acciones que permitan acceder de manera integral a la oferta de servicios de la entidad.

¹³⁰ Ley 2052 de 2020, Artículo 17.

5. Implementar estrategias para fortalecer la cultura de servicio, en la Personería de Bogotá, D. C.
6. Medir la percepción y la satisfacción del usuario frente a la experiencia durante la prestación de servicios, con el fin de contar con información de valor que permita fortalecer y mejorar el servicio.
7. Retroalimentar de manera sistemática a la alta dirección sobre las oportunidades de mejora identificadas a partir del análisis de las consultas, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones que se reciben en la entidad.
8. Supervisar la gestión y definir los lineamientos de la Dirección de Asistencia y Orientación a las Personas, Dirección de Asuntos Jurisdiccionales, Dirección de Conciliaciones y personerías locales.
9. Dirigir y orientar a las personerías locales en el ejercicio de sus competencias y en el cumplimiento de las políticas, proyectos y procesos para garantizar el ejercicio de la misión, objetivos y funciones de la Personería.
10. Dirigir la promoción y defensa de los derechos humanos, en las personerías locales.
11. Dirigir, controlar y aprobar los informes de gestión de las personerías locales y emitir las directrices para el ejercicio de la prevención y control a la función pública a nivel local.
12. Dirigir la ejecución de las políticas, comisiones y decisiones que emita el Despacho.
13. Proponer las políticas específicas, directrices y comunicaciones al despacho desde y para las Direcciones de Orientación y Asistencia a las Personas, Asuntos Jurisdiccionales, Conciliaciones y las personerías locales.
14. Liderar y articular con las dependencias de la entidad los procesos de elección de las convocatorias que le sean asignadas por el despacho del (de la) personero(a) de Bogotá, D. C.
15. Liderar el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana.
16. Dirigir la articulación entre la Dirección de Asuntos Jurisdiccionales, la Dirección para la Orientación y Asistencia a las personas y las personerías locales, actuaciones que permitan proteger de manera oportuna los derechos de los ciudadanos.

17. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 12. Creación de la Dirección para la Orientación y Asistencia a las personas.

Crear la Dirección para la Orientación y Asistencia a las personas, dependiente de la Personería Delegada para el Relacionamento con el Ciudadano y Asuntos Locales.

Artículo 13. Funciones de la Dirección para la Orientación y Asistencia a las Personas. La Dirección para la Orientación y Asistencia a las Personas, tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Orientación a las personas en los trámites relacionados con la protección y garantía de sus derechos y libertades, ante entidades públicas y privadas de todos los órdenes, conforme a los protocolos de atención señalados por la Entidad.
2. Informar a las personas sobre la competencia de la Personería de Bogotá, D. C., y entidades públicas distritales.
3. Prestar la atención personalizada e inmediata a las peticiones y solicitudes que se hagan de manera presencial, escrita, electrónica y vía telefónica.
4. Liderar el seguimiento a las peticiones presentadas por las personas, con la pretensión de que se garantice el ejercicio del derecho constitucional de petición ante una entidad pública u organización e instituciones privadas.
5. Verificar el cumplimiento de los lineamientos frente a las peticiones y quejas escritas cuya decisión corresponde a una entidad pública, distinta de la Personería de Bogotá, D. C., o un ente de carácter particular, de acuerdo con la normatividad.
6. Verificar que se cumplan los términos del derecho de petición, a través del seguimiento ante terceros.
7. Orientar a los ciudadanos y usuarios sobre los trámites, peticiones, quejas y reclamos ante las diferentes entidades, para coadyuvar al ejercicio de sus derechos.
8. Articular con la Dirección de Asuntos Jurisdiccionales y las personerías locales, actuaciones que permitan proteger de manera oportuna los derechos de los ciudadanos.
9. Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados por el personero delegado para el relacionamiento con el ciudadano y los asuntos locales.
10. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 14. Creación de la Dirección para la Asistencia en Asuntos Jurisdiccionales.

Crear la Dirección para la Asistencia en Asuntos Jurisdiccionales, dependiente de la Personería Delegada para el Relacionamento con el Ciudadano y Asuntos Locales.

Artículo 15. Funciones de la Dirección para la Asistencia en Asuntos Jurisdiccionales. La Dirección para la Asistencia en Asuntos Jurisdiccionales, tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Dar las directrices en la elaboración de las acciones de tutela, impugnaciones y desacatos que soliciten las personas como mecanismo de defensa de sus derechos fundamentales.
2. Elaborar las acciones de cumplimiento cuando las personas lo requieran para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos.
3. Asistir en la elaboración de acciones populares y de grupo, cuando estos sean requeridos por las personas para la defensa de los derechos colectivos.
4. Intervenir como agente oficioso en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, para la defensa del orden jurídico, el patrimonio público Distrital, o los derechos y garantías fundamentales de las personas que no estén en condiciones de promover su propia defensa, y en aquellos casos que cuenten con delegación especial por parte de la o el personero de Bogotá, D. C.
5. Vigilar el cumplimiento de las sentencias de tutela incumplidas cuando sean solicitadas.
6. Participar en los comités y audiencias de verificación de cumplimiento de sentencias judiciales de las acciones populares donde se designe a la Personería de Bogotá, D. C., como integrante.
7. Articular con la Dirección de Orientación y Asistencia a las Personas y las personerías locales, actuaciones que permitan proteger de manera oportuna los derechos de los ciudadanos.
8. Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados por el personero delegado para el relacionamento con el ciudadano y los asuntos locales.
9. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 16. Creación de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales. Crear la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales, dependiente del despacho del (de la) personero (a).

Artículo 17. Funciones de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales. La Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales, tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Dirigir y coordinar el diseño y ejecución del Plan de Relaciones Interinstitucionales de la Personería de Bogotá, D. C.
2. Asistir al Personero Distrital, en el relacionamiento estratégico con aliados internacionales, nacionales y comunidades organizadas, públicos y privados para contribuir al desarrollo de programas misionales de la Personería Distrital.
3. Coordinar, con las dependencias de la Personería Distrital, las alianzas con actores nacionales e internacionales, públicos y privados para fortalecer, promover e impulsar programas, proyectos e iniciativas de la Personería Distrital.
4. Formular e implementar estrategias orientadas hacia la consolidación de aliados nacionales, internacionales, públicos y privados.
5. Definir e implementar estrategias de gestión de alianzas, convenios, programas y proyectos con aliados internacionales, nacionales, públicos y privados, con el fin de gestionar cooperación técnica y de recursos que contribuyan a las iniciativas de la Personería Distrital.
6. Acompañar la formalización, puesta en marcha, evaluación y seguimiento de los programas, proyectos e iniciativas derivados de las alianzas gestionadas con actores internacionales, nacionales, públicos y privados.
7. Articular las relaciones entre la Personería Distrital, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC- Colombia), en el marco de los lineamientos establecidos por la entidad.
8. Acompañar y hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Personería Distrital en la protección de derechos en el marco de tratados, mecanismos, organizaciones y escenarios bilaterales y multilaterales.
9. Promover y coordinar la participación de la Personería Distrital en la definición global y regional de criterios y lineamientos en materia de protección de derechos que contribuyan a posicionar los temas priorizados por la Personería en la agenda pública local y nacional.

10. Formular y consolidar en coordinación con las dependencias, los instrumentos de información en materia de la protección de derechos que se desprenden del relacionamiento y participación de la Personería Distrital en instancias nacionales, internacionales, públicas y privadas.
11. Representar a la Personería Distrital en comisiones, consejos directivos y demás instancias de carácter internacional, intersectorial e interinstitucional conforme a la naturaleza de la Oficina y según la delegación.
12. Identificar y socializar ante las dependencias de la Personería Distrital las convocatorias y oportunidades de cooperación que contribuyan al alcance de las metas de la entidad y al fortalecimiento de sus capacidades institucionales.
13. Acompañar la formalización, puesta en marcha, evaluación y seguimiento de los programas, proyectos e iniciativas derivados de las alianzas gestionadas con actores internacionales, nacionales, públicos y privados.
14. Orientar la recepción y gestión de donaciones en el marco de las iniciativas de la Personería Distrital en función del cumplimiento de sus objetivos estratégicos.
15. Recopilar y registrar de manera sistemática, periódica y continua, la información correspondiente a las fuentes de cooperación internacional y nacional, pública o privada, a fin de facilitar la identificación y el seguimiento de oportunidades.
16. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 18. Modificación de las funciones de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicación DTIC. La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicación DTIC, tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Analizar y orientar la formulación de planes, programas y proyectos de la gestión de tecnologías de la información, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
2. Coordinar y orientar con las subdirecciones en la proyección de adquisición, implementación, instalación, tenencia y actualización de tecnologías de la información y las comunicaciones, para el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad, apoyando técnicamente la selección y contratación de estos.
3. Orientar y dirigir las políticas, planes, programas, proyectos, servicios y actividades en materia informática y equipos para el debido funcionamiento de la Personería de Bogotá.

4. Coordinar y dirigir con las subdirecciones los lineamientos sobre la implementación, desarrollo y administración de los recursos de hardware, del software y los medios telemáticos para el cumplimiento de los objetivos y la misión de la Personería de Bogotá.
5. Coordinar con todas las áreas y dependencias la aplicación a todo nivel de la organización de los estándares, buenas prácticas y principios para el manejo y seguridad de la información, logrando la mejora continua en los procesos tecnológicos y del manejo de la información de la Personería de Bogotá.
6. Dirigir y coordinar con las subdirecciones y demás dependencias la elaboración del plan institucional en materia de tecnología e información, de acuerdo con la normatividad y requerimientos establecidos.
7. Analizar, estudiar y gestionar acuerdos, convenios u otros con entidades para compartir información y mejorar la eficiencia y eficacia en la producción, recolección, uso y disposición de la información, de acuerdo con los lineamientos estratégicos emitidos por las autoridades competentes.
8. Dirigir, coordinar y articular el apoyo técnico a la Dirección de Planeación en materia de análisis, recopilación y procesamiento de la información para la definición de políticas, y lineamientos, de acuerdo con los requerimientos y necesidades de la Personería de Bogotá.
9. Revisar con las subdirecciones y dependencias todo lo relacionado con el desarrollo de los contenidos y ambientes virtuales requeridos para el cumplimiento de las funciones y objetivos de la Personería de Bogotá.
9. Coordinar todas las acciones y tareas con el oficial de seguridad, en busca de cumplir las políticas del SSGT y desde luego brindar confianza y seguridad a todos los usuarios tecnológicos de la entidad.
10. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 19. Creación de la Subdirección de Ingeniería de Software, Bases de Datos y Seguridad. Crear la Subdirección de Ingeniería de Software, bases de datos y seguridad, dependiente de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicación DTIC.

Artículo 20. Funciones de la Subdirección de Ingeniería de Software, Bases de Datos y Seguridad. La Subdirección de Ingeniería de Software, Bases de Datos y Seguridad, tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Dirigir, coordinar y evaluar las políticas, estándares y metodologías en materia de software requeridos por la Personería de Bogotá de acuerdo con las instrucciones del señor personero, para cumplir con los objetivos institucionales.
2. Coordinar y orientar el diseño de soluciones tecnológicas en sistemas de información y seguridades para optimizar los procesos requeridos en la entidad, de acuerdo con las necesidades y los lineamientos de la alta dirección.
3. Dirigir y articular con la Dirección de TIC los estudios que permitan determinar la factibilidad técnica y económica de desarrollar y/o adquirir las aplicaciones o sistemas de información que requiera la Personería de Bogotá para el cumplimiento de objetivos institucionales.
4. Asistir, acompañar y verificar el cumplimiento y atención a los requerimientos que en materia de sistemas de información sean solicitados por cada una de las delegadas y dependencias de la Personería de Bogotá para coadyuvar en el cumplimiento de las metas institucionales.
5. Dirigir la elaboración, actualización y mantenimiento de los manuales de aplicaciones (modelos ER, flujos de trabajo, diseños, arquitectura, etc.) de acuerdo con los lineamientos y la normatividad vigente y ajustándose los parámetros de documentación dada por la oficina de planeación y los estándares de calidad.
6. Orientar el desarrollo de los procesos para el flujo, procesamiento y utilización de la información y, en consecuencia, contribuir en el manejo oportuno y eficaz de la información.
7. Coordinar la gestión de los sistemas operativos y las bases de datos de la Personería de Bogotá, de acuerdo con las normas y estándares que rijan en el momento y que estén alineados a las normas dadas por el gobierno nacional.
8. Liderar y dirigir la implementación de sistemas de información requeridos por cada delegada y dependencia de acuerdo con la normatividad vigente y los lineamientos establecidos.
9. Liderar y dirigir la implementación de todas las herramientas de seguridad, tanto de la información como la infraestructura, que permitan a todas las delegadas y dependencias operar y brindar servicios de acuerdo con la normatividad vigente y los lineamientos establecidos en los sistemas de calidad implementados en la Institución.

10. Dirigir la creación, suscripción, generación y administración de perfiles de usuario y claves de seguridad para uso de los servicios informáticos de acuerdo con las políticas y lineamientos establecidos y debidamente articulado con las dependencias relacionadas.
11. Coordinar con la Subdirección de Infraestructura, Redes y Soporte, la implementación de los mecanismos de seguridad asociados a los recursos de hardware y software que garanticen el procesamiento de información de la entidad de manera integral, oportuna y de calidad.
12. Dirigir la administración de cambios y versiones en las herramientas de ofimática, el software de los sistemas de información de la Personería de Bogotá, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el área de seguridad.
13. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 21. Creación de la Subdirección de Infraestructura Redes y Soporte. Crear la Subdirección de Infraestructura Redes y Soporte, dependiente de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicación DTIC.

Artículo 22. Funciones de la Subdirección de Infraestructura Redes y Soporte. La Subdirección de Infraestructura Redes y Soporte, tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Administrar, mantener y monitorear la plataforma de infraestructura de telecomunicaciones adquirida e implementada en el centro de datos y sus componentes activos, de la Personería de Bogotá de acuerdo con la normatividad vigente.
2. Dirigir y coordinar la administración y operación del centro de datos (Datacenter) con el equipo de ingenieros, de acuerdo con la normatividad vigente y los lineamientos de la alta dirección.
3. Liderar el cumplimiento y la aplicación de las políticas de uso razonable y responsable de los recursos tecnológicos de la entidad y orientar su seguimiento de acuerdo con la normatividad vigente y los lineamientos de la alta dirección.
4. Coordinar, diseñar, orientar y ejecutar los planes de contingencia y la tolerancia a fallas, inherentes a los recursos y servicios de hardware y comunicaciones de la entidad para prever el flujo continuo de la información entre las dependencias locales y remotas de acuerdo con los lineamientos y la normatividad vigente.

5. Coordinar con la Subdirección de Ingeniería de Software, Bases de Datos y Seguridad, la implementación de los mecanismos de seguridad asociados a los recursos de hardware y software que garanticen el procesamiento de información de manera integral, oportuna y de calidad.
6. Dirigir y controlar que la prestación de los servicios de soporte contratados y de la entidad, se adelante en forma oportuna y brindando siempre soluciones a los diferentes usuarios tanto internos como externos.
7. Exigir con la Subdirección de Ingeniería de Software, Bases de Datos y Seguridad y la Dirección de TIC las garantías de los bienes adquiridos, de tal forma que se ejecuten en forma oportuna y eficiente.
8. Regular y coordinar con la Subdirección de Ingeniería de Software, Bases de Datos y Seguridad, la generación y administración de perfiles de usuario y claves de seguridad para uso de los servicios informáticos de acuerdo con los lineamientos establecidos.
9. Coordinar y dirigir la adquisición y seguimiento a los inventarios de bienes hardware y comunicaciones de la entidad de acuerdo con la normatividad vigente.
10. Vigilar y hacer el seguimiento a todos los procesos de impresión, ya sean por la entidad o por outsourcing y contribuir en el ahorro de los recursos.
11. Coordinar la prestación de los servicios de asistencia técnica a todas las dependencias de la entidad, incluyendo personerías locales centros de atención y oficinas de ministerios públicos, de forma oportuna para mantener el debido funcionamiento de las dependencias y prestar servicios efectivos y satisfactorios.
12. Dar lineamientos sobre los requerimientos de mantenimiento y conservación de los equipos por las diferentes dependencias y verificar la realización de las reparaciones correspondientes para coadyuvar con el cumplimiento de metas institucionales.
13. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 23. Modificación de las funciones de la Dirección de Gestión del Conocimiento y la Innovación. La Dirección de Gestión del Conocimiento y la Innovación, tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Promover la investigación al interior de la entidad con el fin de apoyar el cumplimiento de su misión, visión, objetivos y funciones, y generar nuevos conocimientos que fortalezcan la gestión institucional.

2. Incentivar la generación, el aseguramiento y la transferencia de conocimiento, a través del intercambio de experiencias, habilidades, buenas prácticas y lecciones aprendidas para fortalecer la toma de decisiones y el mejoramiento institucional.
3. Orientar el uso, aprovechamiento y disponibilidad de la información y promover herramientas de analítica institucional de la información producida como resultado de la gestión del conocimiento de la entidad.
4. Promover el diseño y la presentación de propuestas y/o iniciativas de innovación para generar soluciones orientadas a mejorar la gestión de los procesos institucionales.
5. Recopilar, analizar y visualizar datos institucionales de manera efectiva para apoyar decisiones informadas y estratégicas.
6. Identificar alianzas estratégicas con instituciones públicas o privadas que permitan fortalecer la colaboración y el intercambio de conocimientos, en coordinación con las dependencias de la Personería de Bogotá.
7. Recibir peticiones, quejas y reclamos sobre los temas de su competencia y atenderlos oportunamente de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales vigentes y los procedimientos establecidos por la Entidad.
8. Rendir los informes del área de su competencia dentro de los términos de ley y acorde con los procedimientos de la entidad.
9. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 24. Creación de las Personerías Locales de Usaquén II, Chapinero II, San Cristóbal II, Bosa II, Kennedy II, Fontibón II, Engativá II, Suba II, Rafael Uribe II, Ciudad Bolívar II. Crear las Personerías Locales de Usaquén II, Chapinero II, San Cristóbal II, Bosa II, Kennedy II, Fontibón II, Engativá II, Suba II, Rafael Uribe II, Ciudad Bolívar II, las cuales dependerán de la Personería delegada para el Relacionamento con el Ciudadano y Asuntos Locales.

Artículo 25. Funciones de las Personerías Locales. Son funciones comunes a todas las Personerías Locales y a las de Usaquén I, Usaquén II, Chapinero I, Chapinero II, Santafé, San Cristóbal I, San Cristóbal II, Usme, Tunjuelito, Bosa I, Bosa II, Kennedy I, Kennedy II, Fontibón I, Fontibón II, Engativá I, Engativá II, Suba I, Suba II, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, Rafael Uribe I, Rafael Uribe II, Ciudad Bolívar I, Ciudad Bolívar II, Sumapaz, las siguientes:

1. Velar por el cumplimiento de la Constitución Política, las leyes y los acuerdos distritales, en la localidad.
2. Dirigir y garantizar el cumplimiento de las políticas orientadas a la promoción y defensa de derechos humanos.
3. Liderar el ejercicio de la prevención y control de la función pública, en la localidad, en defensa del patrimonio público.
4. Dirigir la intervención del Ministerio Público ante inspecciones de policía del factor local y distrital y alcaldías locales, de acuerdo con los lineamientos establecidos para la protección de los derechos humanos y/o el interés público.
5. Dirigir la elaboración y seguimiento de las acciones de tutela, impugnaciones y desacatos que soliciten las personas como mecanismo de defensa de sus derechos.
6. Orientar y revisar los derechos de petición, por solicitud de las personas e intervenir ante las autoridades competentes cuando sea necesario en defensa de su derecho constitucional.
7. Remitir por competencia las solicitudes de investigaciones disciplinarias, fiscales y penales a las autoridades, cuando en ejercicio de sus funciones se evidencien hechos que así lo ameriten.
8. Dirigir la elaboración y suscribir los informes periódicos o especiales de sus actividades o de los trabajos y comisiones especiales, conforme a las metodologías, instrucciones y normas expedidas por las dependencias competentes.
9. Representar a la Personería de Bogotá en los diferentes comités, consejos y mesas locales, establecidos normativamente y que sean de competencia de la entidad, de conformidad con los lineamientos institucionales.
10. Articular con la Dirección de Asuntos Jurisdiccionales y la Dirección de Orientación y Asistencia al Ciudadano Locales actuaciones que permitan proteger de manera oportuna los derechos de los ciudadanos.
11. Articular con la Dirección de Asuntos Jurisdiccionales la elaboración de acciones constitucionales.
12. Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados por la Personería Delegada para el Relacionamento con el Ciudadano y los Asuntos Locales.

13.Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 26. La Personería Delegada de Relacionamento con el Ciudadano y Asuntos Locales, la Personería Delegada para la Segunda Instancia, la Dirección de Planeación, la Dirección de Gestión del Conocimiento e Innovación, la Dirección de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales, la Oficina Asesora de Comunicaciones y la Oficina Asesora Jurídica, dependerán del despacho del (de la) personero (a) y hacen parte de los procesos estratégicos de la Entidad. La Oficina de Control Interno se considera independiente, en virtud que dentro de su rol está el control y seguimiento a la operación y gestión de la entidad.

Artículo 27. Las Direcciones para la Asistencia en Asuntos Jurisdiccionales, Orientación y Asistencia a las Personas, Conciliación y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos y las personerías locales, dependerán de la Personería Delegada de Relacionamento con el Ciudadano y Asuntos Locales, y hacen parte de los procesos estratégicos de la Entidad.

Artículo 28. La Subdirección de Ingeniería de Software, Bases de Datos y Seguridad y la Subdirección de Infraestructura Redes y Soporte dependerán de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones y hacen parte de los procesos estratégicos de la Entidad.

CREACIÓN DE PERSONERIAS DELEGADAS EN LOS PROCESOS MISIONALES

Artículo 29. Creación de la Personería Delegada para la Misionalidad. Crear la Personería Delegada para la Misionalidad, dependiente de la Personería Auxiliar.

Artículo 30. Funciones de la Personería Delegada para la Misionalidad. La Personería Delegada para la Misionalidad, tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Asesorar y asistir al (a la) personero(a) Distrital en la formulación, aprobación, adopción, implementación y cumplimiento de las políticas relacionadas con el Ministerio Público y la defensa de los derechos humanos, prevención y control a la función pública y potestad disciplinaria.
2. Formular las políticas, planes, directrices, procesos y procedimientos necesarios para el ejercicio propio de las competencias de las delegadas a su cargo.
3. Dirigir, orientar y controlar el cumplimiento de las políticas, planes, directrices, procesos y procedimientos establecidos para el ejercicio propio de las competencias de las delegadas a su cargo.

4. Orientar y dirigir las acciones de promoción de los derechos humanos cuando sea de competencia de las dependencias adscritas a la Personería Delegada para la Misionalidad.
5. Formular las políticas, planes, directrices, procesos y procedimientos necesarios para el ejercicio de las actividades relacionadas con el proceso de prevención y control a la función pública.
6. Proponer y concertar mesas de trabajo interinstitucionales cuando del ejercicio de la acción de prevención y control a la función pública se desprenda su necesidad, a fin de proteger el ordenamiento jurídico, el patrimonio público y garantizar los derechos de las personas.
7. Articular los procedimientos y acciones institucionales para garantizar el cumplimiento de la misión, objetivos y funciones de la entidad, en coordinación con las demás dependencias de la entidad.
8. Adoptar las decisiones necesarias para prevenir, advertir o evitar afectaciones al ordenamiento jurídico, patrimonio público, y violaciones a los derechos de las personas.
9. Disponer el traslado de los hallazgos sobre hechos constitutivos de posibles conductas que ameriten procesos disciplinarios, fiscales o penales, a las autoridades competentes, cuando sea procedente.
10. Dirigir, evaluar y aprobar los informes sobre el ejercicio de la acción de prevención y el control a la función pública.
11. Proponer y concertar mesas de trabajo con las delegadas y/o dependencias responsables de los procesos misionales, cuando del ejercicio de las funciones de Ministerio Público y derechos humanos y de prevención y control a la función pública sean indispensables, a fin de evitar violaciones a los derechos humanos, detrimentos patrimoniales o la terminación inmediata a las afectaciones sobre los derechos de las personas.
12. Armonizar y articular, con las funciones de Ministerio Público y derechos humanos y prevención y control a la función pública, los procedimientos y acciones institucionales para garantizar el cumplimiento de la misión, objetivos y funciones de la Personería de Bogotá, D. C.

13. Establecer junto con el proceso estratégico de relacionamiento con el ciudadano, los lineamientos para las dependencias a su cargo que tengan como función la orientación y asistencia de las personas que soliciten los servicios de la entidad.
14. Las demás fijadas que le sean asignadas por ley, acuerdo o reglamento o que le delegue el (la) personero(a) Distrital por acto administrativo o en forma verbal cuando no fuera razonablemente posible emitir acto escrito.

FUNCIONES MINISTERIO PÚBLICO

Artículo 31. Modificación de las funciones de la Personería Delegada para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos I. La Personería Delegada para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos I, tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Efectuar seguimiento al cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos destinados a la promoción y defensa de los derechos humanos y derecho internacional humanitario.
2. Verificar el cumplimiento de las acciones de promoción de derechos humanos con enfoque diferencia y énfasis en sujetos de especial protección constitucional, (población LGBTI, indígenas, afros, ROM, habitante de calle, migrantes y trabajadores(as) sexuales y demás población vulnerable).
3. Orientar en derechos humanos y derecho internacional humanitario dentro del marco normativo nacional e internacional.
4. Recibir y tramitar las peticiones que se presenten contra los (as) servidores(as) públicos(as) del Distrito Capital, en relación con conductas u omisiones que puedan constituir violación de los derechos humanos y derecho internacional humanitario, dentro del ámbito de su competencia.
5. Solicitar las investigaciones disciplinarias y penales a que hubiere lugar, ante las autoridades competentes, contra los (as) servidores(as) públicos(as) que presuntamente infrinjan normas de derechos humanos o del derecho internacional humanitario.
6. Divulgar y promover el conocimiento de la Constitución Política en el Distrito, adelantando sensibilizaciones, programas de promoción y prevención sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario.

7. Elaborar un informe anual integral sobre el estado del respeto de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario en la jurisdicción del Distrito Capital.
8. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 32. Creación de la Personería Delegada para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos II. Crear la Personería Delegada para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos II, dependiente de la Personería Delegada para la Misiónalidad.

Artículo 33. Funciones de la Personería delegada para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos II. La Personería delegada para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos II, tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Efectuar seguimiento al cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos destinados a la promoción y defensa de los derechos humanos y derecho internacional humanitario.
2. Ejercer las funciones de agentes del Ministerio Público en los procesos y actuaciones de personas privadas de la libertad en el Distrito Capital (las URI, Estaciones de Policía y Centro de Traslado por Protección -C. T. P.-, entre otras) atendiendo las normas de competencia.
3. Orientar en derechos humanos y derecho internacional humanitario dentro del marco normativo nacional e internacional.
4. Recibir y tramitar las peticiones que se presenten contra los (as) servidores(as) públicos(as) del Distrito Capital, en relación con conductas u omisiones que puedan constituir violación de los derechos humanos y derecho internacional humanitario.
5. Solicitar las investigaciones disciplinarias y penales a que hubiere lugar, ante las autoridades competentes, contra los (as) servidores(as) públicos(as) que presuntamente infrinjan normas de derechos humanos o del derecho internacional humanitario.
6. Divulgar y promover el conocimiento de la Constitución Política en el Distrito, adelantando sensibilizaciones sobre los temas a su cargo, programas de promoción y prevención sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario.
7. Elaborar un informe anual integral sobre el estado del respeto de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario en la jurisdicción del Distrito Capital, dentro de los límites de su competencia.

8. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 34. Funciones de la Personería Delegada para la Familia y Sujetos de Especial Protección Constitucional. La Personería Delegada para la Familia y Sujetos de Especial Protección Constitucional, dependerá de la Personería Delegada para la Misión y tendrá a cargo las siguientes funciones.

1. Socializar la Constitución y adelantar acciones de promoción de los derechos de la infancia, adolescencia, mujer, personas mayores, familia y personas con discapacidad.
2. Liderar y orientar la intervención de los agentes del Ministerio Público en los procesos judiciales y administrativos en los que se discutan los derechos de los niños, niñas, adolescentes, mujer, adulto mayor, la familia y las personas con discapacidad, en defensa de éstos, en pro de su restablecimiento y prevalencia.
3. Velar que la administración distrital garantice los derechos y la protección integral de la infancia, adolescencia, mujer, adulto mayor, familia y las personas con discapacidad de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.
4. Validar el cumplimiento de las rutas de atención de las entidades distritales responsables del restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres, las personas mayores y con discapacidad.
5. Inspeccionar que se respeten los derechos y garantías fundamentales de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en centros de protección del orden distrital y en los centros de atención para el cumplimiento de las medidas de internamiento preventivo y sanciones del sistema de responsabilidad penal para adolescentes menores que sean objeto de medidas pedagógicas en establecimientos de protección del orden distrital.
6. Velar que las autoridades distritales correspondientes protejan y respeten los derechos fundamentales, civiles y políticos de la mujer, especialmente los derechos a la vida, integridad, y participación ciudadana.
7. Vigilar y salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad para recibir la atención de los servicios destinados por el Distrito que conlleven a lograr su atención y rehabilitación, de acuerdo con los protocolos establecidos.
8. Coordinar que los planes, programas y proyectos destinados a la protección de la infancia, adolescencia, mujer, personas mayores, familia y personas con

discapacidad en el Distrito Capital se cumplan y se ejecuten de acuerdo con los procedimientos y términos establecidos para ello.

9. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 35. Funciones de la Personería Delegada para la Protección de las Víctimas del Conflicto Armado Interno. La Personería Delegada para la Protección de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, dependerá de la Personería Delegada para la Misionalidad y tendrá a cargo las siguientes funciones.

1. Orientar a las víctimas del conflicto armado interno frente a los programas y servicios a los cuales tienen derecho, según las normas vigentes y asistir en la elaboración de acciones constitucionales y recursos para la garantía de los derechos de las víctimas.
2. Dirigir y orientar las solicitudes de inscripción en el Registro Único de Víctimas y remitirlas dentro del término legal a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
3. Investigar sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar cuando se presenten solicitudes de inscripción en el RUV transcurridos más de dos años a la ocurrencia del hecho, con el fin de establecer los elementos necesarios para determinar si existieron barreras que dificultaron o impidieron el acceso de las víctimas a la protección del Estado.
4. Liderar el proceso de conformación de la Mesa Distrital de Participación Efectiva de Víctimas.
5. Participar juntamente con las autoridades distritales en la elaboración del censo de las personas afectadas en sus derechos fundamentales a la vida, integridad personal, libertad personal, libertad de domicilio, residencia, y bienes cuando se presenten atentados terroristas y desplazamientos masivos en el Distrito Capital.
6. Planear y efectuar el seguimiento a la política pública de víctimas del conflicto armado y a las entidades distritales a cargo de la atención de esta población, de conformidad con los lineamientos institucionales.
7. Desempeñar la secretaria técnica de la Mesa Distrital de Participación Efectiva para Víctimas y de la Comisión Distrital del Ministerio Público para la Justicia Transicional.

8. Participar en los espacios interinstitucionales destinados al diseño y seguimiento de la política pública de asistencia, atención y reparación integral de la población víctima del conflicto armado del Distrito Capital establecidos por la Ley.
9. Ejercer el seguimiento a la implementación del punto cinco – víctimas -, del “Acuerdo de Paz para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, en el Distrito Capital.
10. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 36. Funciones de la Personería Delegada para la Defensa y Protección de los Derechos Colectivos y del Consumidor. La Personería Delegada para la Defensa y Protección de los Derechos Colectivos y del Consumidor dependerá de la Personería Delegada para la Misionalidad y tendrá a cargo las siguientes funciones.

1. Velar por el cumplimiento de la Constitución Política, las leyes, los acuerdos y las sentencias judiciales en materia de protección a consumidores y usuarios.
2. Dar a conocer a las autoridades competentes los hechos que deban ser investigados, a fin de que sean corregidas y sancionadas situaciones de vulneración o desconocimiento de los derechos de los consumidores y usuarios.
3. Fomentar o iniciar acciones populares en defensa de los intereses colectivos y de los derechos de los consumidores y usuarios, en coordinación con las dependencias de la entidad que sean competentes.
4. Fomentar o iniciar acciones de grupo para la efectividad de los derechos de los consumidores y usuarios por la violación de derechos colectivos.
5. Preparar las acciones necesarias en contra las empresas de servicios públicos en defensa de los intereses de los usuarios, en coordinación con las dependencias de la entidad que sean competentes.
6. Articular con las personerías locales la intervención del Ministerio Público, en acciones de policía en materia de protección al consumidor, en especial las relativas a control de productos que puedan atentar contra la vida, la salud y la seguridad de los consumidores, las de información o publicidad engañosa, cobro excesivo de intereses y abusos contractuales.
7. Dirigir, informar y capacitar en materias relacionadas con la protección al consumidor.

8. Orientar y asistir a las personas en la presentación de acciones administrativas o jurisdiccionales para la defensa de sus derechos que como consumidor le asiste, e intervenir en las mismas como coadyuvante en coordinación con las dependencias competentes de la entidad.
9. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 37. Funciones de las personerías delegadas para asuntos penales I y II. La Personería Delegada para Asuntos Penales I y la Personería Delegada para Asuntos Penales II, dependerán de la Personería Delegada para la Misionalidad y tendrán a cargo las siguientes funciones.

1. Socializar la Constitución y adelantar acciones de promoción en normatividad penal, actuaciones judiciales y debido proceso.
2. Ejercer la función de Ministerio Público ante la Fiscalía y los juzgados penales conforme a la Constitución y la Ley.
3. Velar como ente de control y representante de la sociedad, la sanción de las infracciones de la ley penal, la defensa de las personas acusadas sin justa causa, la protección de los derechos humanos de los procesados y la indemnización de los perjuicios causados con la infracción.
4. Definir la práctica de pruebas por parte de los agentes del Ministerio Público, conducentes al esclarecimiento de la verdad, las medidas de aseguramiento o la libertad del procesado, presentar alegatos e interponer recursos, asistir e intervenir en las audiencias públicas y en general, intervenir en todas las diligencias y actuaciones del proceso penal, atendiendo las competencias legalmente dispuestas.
5. Liderar las denuncias ante las autoridades correspondientes los hechos punibles que llegan a su conocimiento, susceptibles de investigación oficiosa y recibir los documentos y demás pruebas necesarias al efecto.
6. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 38. Funciones de la Personería Delegada para Asuntos Policivos y Civiles. La Personería Delegada para Asuntos Policivos y Civiles dependerá de la Personería Delegada para la Misionalidad y tendrán a cargo las siguientes funciones.

1. Socializar la ley, los acuerdos y reglamentos en materia de policía, así como en asuntos de movilidad, orientados al respeto del orden jurídico y la observancia del debido proceso en desarrollo de las actuaciones adelantadas por estas autoridades.
2. Ejercer el Ministerio Público ante las autoridades administrativas de policía de segunda instancia en Bogotá, D.C., a fin de verificar la actividad, procedimientos y fallos de policía, de conformidad con la normatividad vigente.
3. Velar por el cumplimiento de las órdenes de policía proferidas por el alcalde Mayor, los alcaldes locales, los inspectores de policía y las demás autoridades distritales y procurar la aplicación de las sanciones y de las medidas correctivas por contravenciones comunes, de competencia de las autoridades de policía.
4. Liderar las denuncias ante las autoridades competentes las irregularidades que se presenten por parte de autoridades y funcionarios(as) de policía; para ello, podrá practicar visitas y realizar el seguimiento al procedimiento de ejecución de las medidas correctivas, a fin de verificar el cumplimiento oportuno de los fallos proferidos por estas y en caso de mora u omisión, solicitar las investigaciones y sanciones pertinentes.
5. Ejercer el Ministerio Público ante los jueces civiles municipales, conforme a la normatividad vigente y siguiendo las políticas Institucionales.
6. Dar a conocer ante el Consejo Superior de la Judicatura las irregularidades que se presenten por parte de los jueces civiles municipales de Bogotá, D. C. en el trámite de los procesos bajo su conocimiento.
7. Liderar el Ministerio Público en los procesos contravencionales de movilidad, cuando lo considere necesario para la defensa del orden jurídico y de los bienes del Distrito.
8. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

FUNCIONES OTRAS DEPENDENCIAS

Artículo 39. Funciones de la Dirección de Planeación: La Dirección de Planeación dependerá del despacho del personero(a) y tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Dirigir la formulación, adopción y ejecución de la plataforma estratégica, táctica y operativa de la entidad, a través de la presentación de los planes, programas y proyectos para el cumplimiento de la misión institucional.

2. Realizar seguimiento y monitoreo a la ejecución de los planes, programas y proyectos para el cumplimiento de la misión, objetivos y funciones de la Personería de Bogotá, de conformidad con los lineamientos y directrices institucionales.
3. Elaborar y presentar los informes de avance de los planes, programas y proyectos institucionales ante las instancias pertinentes, de acuerdo con el ámbito de su competencia.
4. Dirigir la elaboración y presentación de los informes de gestión y de rendición de cuentas a cargo del despacho del (de la) personero(a) de Bogotá, atendiendo los lineamientos y directrices institucionales
5. Dirigir y orientar la administración y promoción del desarrollo, implementación y sostenibilidad del modelo de planeación y/o sistemas de gestión, adoptado(s) por la Personería de Bogotá, D. C., de acuerdo con la normatividad vigente.
6. Liderar la implementación y sostenibilidad de la cultura de la calidad en la entidad, teniendo en cuenta los lineamientos y directrices institucionales.
7. Dirigir y hacer seguimiento a la administración de la organización y operación del banco de proyectos de la entidad y la inscripción de los proyectos de inversión ante la Secretaría Distrital de Planeación, atendiendo los lineamiento y directrices institucionales.
8. Dirigir la formulación, elaboración, registro, seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión, de acuerdo con los lineamientos y directrices establecidas.
9. Orientar la articulación y alineación con la Dirección Administrativa y Financiera en la formulación del anteproyecto anual de presupuesto de inversión, teniendo en cuenta los lineamientos y directrices institucionales.
10. Dirigir la consolidación del programa de transparencia y ética pública de la entidad y facilitar su elaboración y seguimiento por parte de las dependencias responsables, con criterios de calidad, veracidad y oportunidad.
11. Ejercer la secretaría técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional.
12. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 40. Funciones de Oficina de Control Interno: La Oficina de Control Interno dependerá del personero(a) y tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Orientar el diseño de los planes, métodos, procedimientos, mecanismos de verificación y evaluación del sistema de control interno.
2. Coordinar el diseño, planeación y ejecución del programa anual de auditorías en el marco del pensamiento basado en riesgos para la verificación y evaluación del sistema de control interno.
3. Asesorar a la organización sobre los cambios que podrían tener un impacto significativo en el sistema de control interno, identificados durante la evaluación periódica de los riesgos y en el trabajo de auditoría interna.
4. Dirigir la evaluación del sistema de control interno de las dependencias y programas de la Personería de Bogotá para medir la eficiencia, eficacia y economía de los controles establecidos, para generar la formulación de recomendaciones y correctivos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas previstos.
5. Evaluar y verificar para contribuir a la mejora en los procesos institucionales, a través de auditorías internas y especiales.
6. Fomentar en la Personería de Bogotá la formación de una cultura de control en la gestión de todos los servidores de la Institución, para contribuir al mejoramiento continuo y el cumplimiento de la misión institucional.
7. Efectuar la evaluación independiente de la rendición de cuentas que realice la entidad.
8. Coordinar la elaboración de informes que por requerimiento legal le sean asignados a esta dependencia, así como aquellos que por su naturaleza evaluadora deba presentar y establecer su publicación.
9. Orientar la formulación de los planes de mejoramiento producto de auditorías internas y externas y realizar el respectivo seguimiento.
10. Cumplir con los requerimientos de solicitud de información de los entes externos y del personero de Bogotá en relación con la competencia de la Oficina de Control Interno.
11. Servir de enlace entre la Personería de Bogotá, D.C., y los entes externos de control, con el fin de facilitar el flujo de la información con estos organismos y verificar aleatoriamente la oportunidad, integridad y pertinencia de la información suministrada por los diferentes procesos y/o dependencias.

12. Participar en la formulación, implementación y evaluación de la política de control interno.
13. Ejercer la secretaría técnica del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno.
14. Generar alertas que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad.
15. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 41. Funciones de la Personería Delegada para la Segunda Instancia: La Personería Delegada para la Segunda Instancia dependerá del Personero(a) y tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Dirigir y orientar la atención de los procesos disciplinarios que se le asignen, para la revisión y aprobación del(la) jefe inmediato(a), de conformidad con la normatividad vigente.
2. Dirigir y orientar la práctica de pruebas necesarias dentro de los procesos que tenga a su cargo, atendiendo los lineamientos y directrices institucionales.
3. Dirigir los recursos de apelación interpuestos contra las evaluaciones definitivas del desempeño laboral, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes sobre la materia.
4. Proyectar las respuestas a las acciones de tutela que se interpongan contra la Personería Delegada para la Segunda Instancia.
5. Adelantar los despachos comisorios provenientes de entidades públicas, siguiendo los parámetros institucionales y la normatividad vigente.
6. Tramitar las solicitudes de poder preferente de los procesos disciplinarios en segunda instancia, conforme a la normatividad vigente.
7. Proyectar las respuestas a las peticiones y demás documentos que se producen en la personería delegada, de conformidad con la normatividad vigente.
8. Realizar los diferentes informes que le sean solicitados por el(la) superior inmediato(a), de acuerdo con las instrucciones impartidas y dentro de los términos establecidos.

9. Asignar al grupo de trabajo los asuntos de su competencia y atenderlos oportunamente de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales vigentes y los procedimientos establecidos por la entidad.
10. Desarrollar las actividades del plan operativo anual de la dependencia, que le sean asignadas, atendiendo los lineamientos impartidos por el(la) superior inmediato(a).
11. Diligenciar los sistemas de Información de la entidad de manera permanente, garantizando la oportunidad de acceder a la información a su cargo
12. Cumplir con las políticas y lineamientos de los Sistemas de Gestión de Calidad, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistemas de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad de la información que la entidad tiene implementado.
13. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 42. Funciones de la Oficina Asesora de Comunicaciones: La Oficina Asesora de Comunicaciones dependerá del personero(a) y tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Proyectar boletines y comunicados para prensa, radio, televisión e internet, así como textos para piezas comunicacionales y publicitarias, para divulgar de manera transparente, oportuna y eficaz las actividades propias de la misión institucional de la entidad y posicionar su imagen ante el Distrito Capital y el país.
2. Generar contenido periodístico de calidad, como reportajes, entrevistas y demás géneros informativos, para comunicar de manera efectiva las actividades y logros de la Personería de Bogotá, D. C.
3. Realizar el monitoreo de medios de comunicación para informar a la alta dirección sobre las acciones del organismo de control y las realizadas por otras entidades (en especial las distritales) que han sido divulgadas a través de estos, y establecer los casos deben actuar en virtud de su competencia.
4. Adelantar y desarrollar diferentes estrategias de divulgación y fortalecimiento de la comunicación interna y externa, conforme a los lineamientos establecidos por la entidad.
5. Proyectar la imagen institucional de la entidad a través de las redes sociales e internet.

6. Administrar y mantener actualizadas las redes sociales, asegurando la publicación regular de contenido relevante y la interacción con la comunidad en línea.
7. Revisar y corregir gramatical y ortográficamente los documentos asociados a los comunicados de prensa, y otros materiales escritos o producidos por la dependencia.
8. Garantizar que los comunicados de prensa y documentos publicados reflejen la imagen y los valores de la Personería de Bogotá, D. C., de manera precisa y profesional.
9. Elaborar los diferentes informes que se deban presentar sobre la gestión de la dependencia de conformidad con las directrices emitidas por la entidad.
10. Atender y orientar a las personas y periodistas sobre las funciones de la Personería de Bogotá, D. C.
11. Elaborar material que permita comunicar y difundir oportunamente las políticas, objetivos, acciones, actividades y resultados de la entidad, atendiendo los lineamientos impartidos por el despacho del (la) personero(a) de Bogotá, D. C.
12. Revisar y actualizar las bases de datos de periodistas y medios de prensa.
13. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 43. Funciones de la Oficina Asesora Jurídica: La Oficina Asesora Jurídica dependerá del personero(a) y tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Elaborar conceptos que solicite el personero de Bogotá, D. C., que el (la) superior inmediato(a) le asigne, de conformidad con los parámetros normativos e institucionales.
2. Efectuar las actividades de representación judicial de la entidad, que le asigne el (la) jefe inmediato(a), conforme a los lineamientos normativos establecidos.
3. Analizar y conceptualizar sobre las respuestas a los recursos en contra de los actos administrativos proferidos por la Personería de Bogotá, D. C., atendiendo los lineamientos normativos vigentes sobre la materia.
4. Proyectar las respuestas a las actuaciones y peticiones que se susciten con ocasión de las acciones constitucionales y procesos judiciales, en los que la Personería de

Bogotá, D. C., sea vinculada o actúe como parte, atendiendo los lineamientos normativos vigentes sobre la materia.

5. Elaborar los actos administrativos, documentos e informes asignados y que son competencia de la dependencia, así como las respuestas a las peticiones, de conformidad con las normas vigentes y los procedimientos establecidos.
6. Desarrollar las actividades para el cumplimiento del Plan Operativo Anual -POA de la Dependencia, de conformidad con las instrucciones impartidas por el (la) superior inmediato(a), conforme a los lineamientos normativos establecidos.
7. Efectuar la compilación de normas legales, conceptos, jurisprudencia y doctrina que se relaciona y fija parámetros para el ejercicio y cumplimiento de la misión de la Entidad.
8. Efectuar las actividades de representación judicial de la entidad, que le asigne el (la) jefe inmediato(a), conforme a los lineamientos normativos establecidos.
9. Realizar el registro de las sanciones disciplinarias proferidas contra funcionarios(as) o exfuncionarios(as) públicos(as) y particulares que desempeñen funciones públicas, conforme a los lineamientos normativos establecidos.
10. Tramitar las respuestas de las tutelas en las que la entidad sea accionada o vinculada, conforme a los lineamientos normativos establecidos.
11. Actuar como secretario técnico del Comité de Conciliación de la entidad cuando se le designe.
12. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

CREACIÓN DE DEPENDENCIAS DE FUNCIÓN PÚBLICA

CAMBIO DE NOMENCLATURA, CREACIÓN DE DELEGADAS Y FUNCIONES

Artículo 44. Objetivo de la modificación de denominación, creación de delegadas y de sus funciones. El objetivo del cambio de nomenclatura y funciones de las siguientes personerías delegadas es garantizar el ejercicio y ejecución de las funciones y responsabilidades misionales, definidas en la Constitución Política, la ley y los acuerdos distritales para la Personería de Bogotá D. C., dentro del ámbito de acción de sus competencias específicas, como órgano de control en el proceso de prevención y control a la función pública.

Artículo 45. Modificación de la denominación de la Personería Delegada para los sectores Gestión Pública, Gestión Jurídica y Gobierno. La Personería Delegada para los sectores Gestión Pública, Gestión Jurídica y Gobierno, se denominará Personería Delegada para los Sectores Gestión Pública y Jurídica, dependientes de la Personería Delegada para la Misionalidad.

Artículo 46. Funciones de la Personería Delegada para el Sector Gestión Pública y Jurídica. La Personería Delegada para los Sectores Gestión Pública y Jurídica, tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con el desarrollo institucional, el ejercicio de la función administrativa y pública Distrital, gestión documental el servicio al ciudadano, lucha contra la corrupción, relacionados con los sectores gestión pública y jurídica.
2. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes y proyectos relacionados con la utilización de los recursos físicos, tecnológicos e informáticos y el desarrollo de las funciones de organización, dirección, control y seguimiento del sector gestión pública.
3. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes y proyectos relacionados con la política laboral del Distrito Capital.
4. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes y proyectos relacionados con el sistema de control interno Distrital.
5. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes y proyectos en materia de compras y contratación pública en el Distrito Capital.
6. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes y proyectos en materia de gestión judicial y prevención del daño antijurídico del Distrito Capital.
7. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control al modelo de gestión jurídica pública del Distrito Capital.
8. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a los sistemas de información jurídica del Distrito Capital.

9. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos en materia de producción y mejora normativa en el Distrito Capital.
10. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las competencias jurídicas del Distrito Capital.
11. Dirigir el seguimiento al Plan de Desarrollo de la ciudad en los temas que sean competencia de la delegada, según las directrices y procedimientos establecidos.
12. Elaborar y presentar los informes de prevención y control a la función pública requeridos de los Sectores Gestión Pública y Jurídica.
13. Vigilar la conducta oficial de quienes ejercen funciones públicas, de los sectores de su competencia, y dar traslado a las delegadas de asuntos disciplinarios y demás organismos de control, cuando a ello hubiere lugar.
14. Recibir, atender y tramitar las peticiones y/o cualquier solicitud presentada ante la dependencia, de conformidad con los términos establecidos por la ley.
15. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 47. Creación de la Personería Delegada para el Sector Gobierno. Crear la Personería Delegada para el Sector Gobierno, dependiente de la Personería Delegada para la Misionalidad.

Artículo 48. Funciones de la Personería Delegada para el Sector Gobierno. La Personería Delegada para el Sector Gestión Jurídica, tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la protección y defensa de los derechos humanos y la convivencia pacífica de la ciudad.
2. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la gestión pública local y la consolidación de los procesos de gobernabilidad local.
3. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la participación ciudadana y en el control social a la gestión pública en el marco del sistema Distrital de participación.

4. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la defensa del espacio público y el saneamiento y registro de los bienes constitutivos del patrimonio Distrital.
5. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la coordinación de las relaciones de la administración distrital con las corporaciones públicas de elección popular y los gobiernos en los niveles, local, Distrital.
6. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la protección y garantía de los derechos, deberes y libertades individuales y colectivas de las comunidades étnicas y religiosas residentes en Bogotá.
7. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a la gestión que realicen los inspectores y corregidores distritales de Policía.
8. Elaborar y presentar los informes de prevención y control a la función pública requeridos del sector gobierno.
9. Vigilar la conducta oficial de quienes ejercen funciones públicas, de los sectores de su competencia, y dar traslado a las delegadas de asuntos disciplinarios y demás organismos de control, cuando a ello hubiere lugar.
10. Recibir, atender y tramitar las peticiones y/o cualquier solicitud presentada ante la dependencia, de conformidad con los términos establecidos por la ley.
11. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 49. Modificación de la denominación de la Personería Delegada para los Sectores Mujeres e Integración Social. La Personería Delegada para los Sectores Mujeres e Integración Social, se denominará Personería Delegada para el Sector Mujeres dependiente de la Personería Delegada para la Misionalidad.

Artículo 50. Funciones de la Personería Delegada para el Sector Mujeres. La Personería Delegada para el Sector Mujeres, tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos distritales relacionados con la eliminación de cualquier forma de discriminación de sexo, racismo y violencias contra las mujeres en sus diversidades étnicas, raciales y culturales.

2. Ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos distritales relacionados con la incorporación de derechos, garantías e igualdad de oportunidades para las mujeres.
3. Ejercer la acción de prevención y control a la transversalización y territorialización de las políticas públicas para las mujeres.
4. Ejercer la acción de prevención y control en el diseño, coordinación, implementación, ejecución y seguimiento a las políticas de promoción, prevención, atención e incorporación en planes, programas y proyectos y su articulación en el nivel local y distrital, así como procesos de sensibilización y capacitación para las mujeres.
5. Ejercer la acción de prevención y control en la gestión de la cooperación técnica y económica que se realice con las instancias distritales competentes que permita avanzar en la construcción de una ciudad democrática e incluyente para todas y todos, así como en la implementación de una política pública integral para las mujeres y en el ejercicio real y efectivo de sus derechos constitucionales y legales.
6. Ejercer la acción de prevención y control al diseño e impulso de estrategias para la transformación de la cultura institucional y ciudadana a través del lenguaje incluyente y de formas comunicativas para el avance en la comunicación en el distrito capital.
7. Ejercer la acción de prevención y control de la veeduría del Distrito Capital sobre la aplicación real y efectiva de las leyes, decretos y acuerdos establecidos para la mujer y sobre la eficiente, oportuna y constante prestación de los servicios dispuestos por la administración Distrital para la mujer.
8. Ejercer la acción de prevención y control sobre el apoyo a las diferentes formas de asociación de las mujeres en el Distrito Capital.
9. Elaborar y presentar los informes de prevención y control a la función pública requeridos del Sector Mujeres.
10. Vigilar la conducta oficial de quienes ejercen funciones públicas, de los sectores de su competencia, y dar traslado a las delegadas de asuntos disciplinarios y demás organismos de control, cuando a ello hubiere lugar.
11. Recibir, atender y tramitar las peticiones y/o cualquier solicitud presentada ante la dependencia, de conformidad con los términos establecidos por la ley.

12. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 51. Creación de la Personería Delegada para el Sector Integración Social.

Crear la Personería Delegada para el Sector Integración Social, dependiente de la Personería Delegada para la Misionalidad.

Artículo 52. Funciones de la Personería Delegada para el Sector Integración Social.

La Personería Delegada para el Sector Integración Social, tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Ejercer la acción de prevención y control sobre la formulación, orientación, desarrollo de las políticas sociales para los distintos grupos poblaciones, familias y comunidades, en especial de aquellos en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad y en la promoción de estrategias que permitan el desarrollo de sus capacidades.
2. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con el restablecimiento, prevención, protección y promoción de derechos de las personas, familias y comunidades, en especial de aquellos en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad.
3. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en el establecimiento de objetivos y estrategias de corto, mediano y largo plazo, para asegurar la prestación de servicios básicos de bienestar social y familiar para la población objeto.
4. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la rehabilitación de las poblaciones vulnerables, en especial habitantes de la calle, y su inclusión a la vida productiva de la ciudad.
5. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la protección de niñas, niños, adolescentes y jóvenes habitantes de calle, en riesgo de habitarla, vulnerables, en fragilidad social o en confito con la ley, en el Distrito Capital.
6. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a la gestión que se realice frente a las transferencias no condicionadas que adelante el Distrito Capital, y en particular, el sector de Integración Social.
7. Elaborar y presentar los informes de prevención y control a la función pública requeridos del sector integración social.

8. Vigilar la conducta oficial de quienes ejercen funciones públicas, de los sectores de su competencia, y dar traslado a las delegadas de asuntos disciplinarios y demás organismos de control, cuando a ello hubiere lugar.
9. Recibir, atender y tramitar las peticiones y/o cualquier solicitud presentada ante la dependencia, de conformidad con los términos establecidos por la ley.
10. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 53. Modificación de la denominación de la Personería Delegada para los Sectores Educación, Cultura, Recreación y Deporte. La Personería Delegada para los Sectores Educación, Cultura, Recreación y Deporte, se denominará Personería Delegada para el Sector Educación dependiente de la Personería Delegada para la Misionalidad.

Artículo 54. Funciones de la Personería Delegada para el Sector Educación. La Personería Delegada para el Sector Educación, tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos distritales relacionados con el acceso, permanencia, pertinencia, calidad y equidad en la prestación del servicio educativo en sus diferentes formas, niveles y modalidades.
2. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la inspección, vigilancia, control y evaluación de la calidad y prestación del servicio educativo en la ciudad.
3. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en el fomento en la educación técnica y tecnológica que realice la administración Distrital a través del sector educación.
4. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en el fomento al desarrollo del conocimiento a través de alianzas estratégicas con el sector productivo que realice el sector educación.
5. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la promoción de estrategias de articulación de la educación, con las demandas de la ciudad y las necesidades de sus habitantes.
6. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en el diseño de estrategias y programas para el desarrollo y formación de la niñez y la juventud que se adelanten por el sector educación.

7. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en el diseño e impulso de estrategias y programas para el desarrollo de los grupos étnicos atendiendo sus características socioculturales, el principio de interculturalidad y la necesidad de articularlo al sistema distrital de educación.
8. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en el diseño e impulso de estrategias y programas para el desarrollo de personas con discapacidad o limitaciones y con capacidades o talentos excepcionales, que adelante el sector educación del Distrito Capital.
9. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en el fomento de la investigación y su relación con los procesos de docencia que se adelante por parte del sector educación.
10. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la formulación, orientación y ejecución en coordinación con la Secretaría de Ambiente, de la política de educación ambiental del Distrito Capital.
11. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la administración, control y supervisión de los recursos provenientes del sistema general de participaciones con destinación específica para educación.
12. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos distritales relacionados con ciencia, tecnología e innovación del Distrito Capital, en coordinación, con las secretarías distritales de Desarrollo Económico y Planeación.
13. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control del sistema de carrera docente en el Distrito Capital.
14. Elaborar y presentar los informes de prevención y control a la función pública requeridos por el sector educación.
15. Vigilar la conducta oficial de quienes ejercen funciones públicas, de los sectores de su competencia, y dar traslado a las delegadas de asuntos disciplinarios y demás organismos de control, cuando a ello hubiere lugar.
16. Recibir, atender y tramitar las peticiones y/o cualquier solicitud presentada ante la dependencia, de conformidad con los términos establecidos por la ley.
17. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 55. Creación de la Personería Delegada para los Sectores Cultura, Recreación y Deporte. Crear la Personería Delegada para los Sectores Cultura, Recreación y Deporte, dependiente de la Personería Delegada para la Misionalidad.

Artículo 56. Funciones de la Personería Delegada para los Sectores Cultura, Recreación y Deporte. La Personería Delegada para los Sectores Cultura, Recreación y Deporte, tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la formulación de estrategias para garantizar la conservación y enriquecimiento de la creación y expresiones culturales propias de la ciudad diversa en su conformación étnica, sociocultural e histórica.
2. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control de diseño de estrategias de divulgación y conservación del patrimonio cultural tangible e intangible.
3. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control que realice el sector cultura para garantizar el ejercicio del deporte en sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas en pro de la formación de las personas y la preservación del desarrollo de una mejor salud en el ser humano.
4. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la formulación de mecanismos para lograr la participación de ciudadanos en programas recreativos y deportivos en el desarrollo del derecho constitucional que le asiste a todas las personas para la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre.
5. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la formulación de estrategias para garantizar la formación y el apoyo integral a los deportistas que realice el sector cultura, recreación y deporte.
6. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en el impulso a la formación y gestión de actividades y programas artísticos, culturales, deportivos y de alto rendimiento, acorde con los planes sectoriales y con el plan de desarrollo económico y social y de obras públicas del Distrito Capital.
7. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la formulación de políticas vigilancia y supervisión para la correcta administración y funcionamiento de los sistemas distritales de cultura de parques y de escenarios distritales, recreativos y deportivos.

8. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con el desarrollo, fomento y difusión del repertorio sinfónico nacional y universal por parte de la Orquesta Sinfónica de Bogotá.
9. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con los campos cultural, patrimonial, recreativo y el deporte que se desarrolle en el sector cultura, recreación y deporte.
10. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la formulación, orientación y coordinación de políticas que propicien y consoliden la conformación y permanencia de los clubes, escuelas, ligas o asociaciones solidarias de deportistas.
11. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la promoción de actividades recreativas e impulso de la práctica deportiva no competitiva, prioritariamente para los niños, jóvenes y adultos mayores.
12. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la promoción e impulso de estrategias que garanticen el desarrollo del arte y estímulo para los artistas.
13. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la priorización de la inversión para la construcción de parques con escenarios deportivos y recreativos.
14. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en el impulso a la formación y gestión de actividades artísticas, culturales, deportivos y de alto rendimiento para la población con algún grado de discapacidad.
15. Ejercer las funciones en materia de Ministerio Público ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.
16. Elaborar y presentar los informes de prevención y control a la función pública requeridos por el sector cultura, recreación y deporte.
17. Vigilar la conducta oficial de quienes ejercen funciones públicas, de los sectores de su competencia, y dar traslado a las delegadas de asuntos disciplinarios y demás organismos de control, cuando a ello hubiere lugar.
18. Recibir, atender y tramitar las peticiones y/o cualquier solicitud presentada ante la dependencia, de conformidad con los términos establecidos por la ley.

19. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 57. Modificación de la denominación de la Personería Delegada para los Sectores Hacienda y Desarrollo Económico, Industria y Turismo. La Personería Delegada para los Sectores Hacienda y Desarrollo Económico, Industria y Turismo, se denominará Personería Delegada para el Sector Hacienda dependiente de la Personería Delegada para la Misionalidad.

Artículo 58. Funciones de la Personería Delegada para el Sector Hacienda. La Personería Delegada para el Sector Hacienda, tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en el diseño de la estrategia financiera del plan de desarrollo económico, social y de obras públicas del Distrito Capital y del Plan de Ordenamiento Territorial, de conformidad con el marco fiscal de mediano plazo y el marco de gasto de mediano plazo.
2. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la preparación del presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e inversiones y el plan financiero plurianual del Distrito Capital.
3. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la formulación, orientación y coordinación de las políticas en materia fiscal y de crédito público.
4. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la formulación, orientación y coordinación de las políticas en material pensional, obligaciones contingentes y de cesantías.
5. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la formulación, orientación, coordinación y ejecución de las políticas tributarias, presupuestal, contable y tesorería.
6. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la provisión y consolidación de la información, estadísticas, modelos e indicadores financieros y hacendarios de la ciudad.
7. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la gestión de consecución de recursos de donaciones, cooperación y aportes voluntarios que financien el presupuesto distrital.
8. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la gestión, seguimiento y control a los recursos provenientes del orden nacional.

9. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en el mantenimiento, actualización y realización del censo catastral del Distrito Capital en sus diversos aspectos, en particular en la fijación del valor de los bienes inmuebles que sirve como base para la determinación de los impuestos sobre dichos bienes.
10. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la generación y manteamiento actualizado de la cartografía oficial del Distrito Capital.
11. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la elaboración de avalúos comerciales a organismos, entidades distritales y a empresas del sector privado que lo solicite.
12. Elaborar y presentar los informes de prevención y control a la función pública requeridos del sector hacienda.
13. Vigilar la conducta oficial de quienes ejercen funciones públicas, de los sectores de su competencia, y dar traslado a las delegadas de asuntos disciplinarios y demás organismos de control, cuando a ello hubiere lugar.
14. Recibir, atender y tramitar las peticiones y/o cualquier solicitud presentada ante la dependencia, de conformidad con los términos establecidos por la ley.
15. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 59. Funciones de la Personería Delegada para el Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo. La Personería Delegada para el Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo, tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos distritales relacionados con el desarrollo económico y social de Bogotá, en especial los sectores productivos de bienes y servicios, en un marco de competitividad y de integración creciente de la actividad económica.
2. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos distritales relacionados con la competitividad regional, la internacionalización de las actividades económicas, las relaciones estratégicas entre los sectores público y privado y la asociatividad de las distintas unidades productivas.
3. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos distritales relacionados con la generación de empleo digno

e ingresos justos, y estímulo y apoyo al emprendimiento económico y al desarrollo de competencias laborales.

4. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a los incentivos de la inversión nacional y extranjera del Distrito Capital y que sea adelantada por parte del sector desarrollo económico.
5. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a la participación del sector desarrollo económico en la elaboración y ejecución de la política de generación de empleo y la competitividad de las personas discapacitadas.
6. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a la coordinación con las autoridades competentes frente a la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, planes, programas y estrategias en materia de desarrollo económico sostenible tanto urbano como rural, en los sectores industrial agropecuario de comercio y de abastecimiento de bienes y servicios y de turismo de pequeña y gran escala.
7. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos distritales relacionados con la promoción del turismo y el posicionamiento del Distrito Capital como destino turístico sostenible, fomentando la industria del turismo y promoviendo la incorporación del manejo ambiental en los proyectos turísticos.
8. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la coordinación con los municipios aledaños, dentro de lo que se considera Bogotá región, frente a la elaboración de planes, programas y en general todo lo atinente a las políticas del sector turismo.
9. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la coordinación con las autoridades competentes frente a la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, planes, programas y estrategia en materia de abastecimiento de alimentos y seguridad alimentaria, promoviendo la participación de las organizaciones campesinas y tenderos.
10. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos distritales relacionados con la creación de instrumentos que permitan el incremento y la mejora de competencias y capacidades para la generación de ingresos en el sector informal de la economía de la ciudad, con miras a facilitar su inclusión en la vida económica, el desarrollo de condiciones que les garanticen su autonomía económica y el mejoramiento progresivo del nivel de vida.

11. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a la articulación del Distrito Capital con el ámbito regional en coordinación conjunta con la Secretaría Distrital de Planeación para la formulación de políticas y planes de desarrollo conjuntos, procurando un equilibrio entre los aspectos económicos y medio ambiente inherentes a la región.
12. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos distritales relacionados con el desarrollo de microempresas, famiempresas, empresas asociativas y pequeña y mediana empresa.
13. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control al desarrollo y estructuración de estrategias conducentes a la bancarización de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, que faciliten y democratizen el acceso al crédito.
14. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos distritales relacionados con la realización de convenios con organizaciones populares y de economía solidaria que implementen proyectos productivos y de generación de empleo.
15. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la implementación de estrategias de cooperación y asistencia técnica de carácter internacional dirigidas a mejorar los niveles de competitividad y la generación de economías de escala, en coordinación con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
16. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos distritales relacionados con ciencia, tecnología e innovación del Distrito Capital, en coordinación, con las secretarías distritales de Planeación y Educación.
17. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos distritales relacionados con el otorgamiento de alternativas para los sectores de la economía informal a través de la formación de capital humano, el acceso al crédito, la inserción en los mercados de bienes y servicios, y la reubicación de las actividades comerciales y servicios.
18. Elaborar y presentar los informes de prevención y control a la función pública requeridos del sector desarrollo económico, industria y turismo.
19. Vigilar la conducta oficial de quienes ejercen funciones públicas, de los sectores de su competencia, y dar traslado a las delegadas de asuntos disciplinarios y demás organismos de control, cuando a ello hubiere lugar.

20. Recibir, atender y tramitar las peticiones y/o cualquier solicitud presentada ante la dependencia, de conformidad con los términos establecidos por la ley.
21. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 60. Modificación de la denominación de la Personería Delegada para los Sectores Planeación y Movilidad. La Personería Delegada para los Sectores Planeación y Movilidad, se denominará Personería Delegada para el Sector Planeación dependiente de la Personería Delegada para la Misionalidad.

Artículo 61. Funciones de la Personería Delegada para el Sector Planeación. La Personería Delegada para el Sector Planeación, tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos distritales relacionados con el desarrollo territorial, económico, social y cultural, garantizando el equilibrio ambiental del Distrito Capital.
2. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la coordinación de la elaboración, ejecución, y seguimiento del Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas del Distrito Capital y de los planes de Desarrollo Local.
3. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la coordinación para la elaboración reglamentación, ejecución y evaluación del plan de ordenamiento territorial.
4. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en el desarrollo de las funciones de regulación del uso del suelo que realice el sector planeación, de conformidad con la normativa que expida el Concejo Distrital y en concordancia con la normatividad nacional.
5. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a la recopilación, provisión y consolidación de la información, las estadísticas, los modelos y os indicadores económicos, sociales, culturales, ambientales, territoriales de productividad y de competitividad, para la toma de decisiones de la administración distrital y que permita la promoción nacional e internacional del Distrito Capital.
7. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la asesoría que del sector planeación a la administración distrital en la formulación de planes y en proposición de criterios de priorización de recursos para la asignación del gasto público a las localidades.

8. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la articulación del Distrito Capital con ámbito regional para la formulación de políticas y planes conjuntos, procurando un equilibrio entre los aspectos económicos, sociales y de medio ambiente inherentes a la región, en coordinación con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.
9. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la formulación, ejecución y seguimiento de operaciones estratégicas de la ciudad.
10. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos distritales relacionados con ciencia, tecnología e innovación del Distrito Capital, en coordinación, con las secretarías distritales de Desarrollo Económico y Educación.
11. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la formulación y orientación de las políticas públicas en equidad e igualdad de oportunidades para los habitantes del Distrito Capital, en especial para las mujeres y las poblaciones que han sido discriminadas por razón de edad, etnia, género, discapacidad visual, auditiva o motora, en coordinación con las entidades distritales competentes y las organizaciones que representan a dichas poblaciones en el Distrito Capital.
12. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la coordinación y orientación de la cooperación nacional e internacional que gestionan los organismos del Distrito Capital en coordinación con la Oficina Consejería de Relaciones Internacionales.
13. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la formulación, orientación y coordinación del diseño e implementación de los instrumentos de focalización para la asignación de servicios sociales básicos y para la administración del SISBEN.
14. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en el conocimiento, trámite y decisión del recurso de apelación de las decisiones que profieran los inspectores y corregidores distritales de policía, respecto de los comportamientos contrarios a la convivencia en los asuntos previstos en el literal "O" del artículo 73 del Acuerdo Distrital 257 de 2006.
15. Ejercer las funciones en materia de Ministerio Público ante las Curadurías Urbanas del Distrito Capital.
16. Elaborar y presentar los informes de prevención y control a la función pública requeridos del sector planeación.

17. Vigilar la conducta oficial de quienes ejercen funciones públicas, de los sectores de su competencia, y dar traslado a las delegadas de asuntos disciplinarios y demás organismos de control, cuando a ello hubiere lugar.
18. Recibir, atender y tramitar las peticiones y/o cualquier solicitud presentada ante la dependencia, de conformidad con los términos establecidos por la ley.
19. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 62. Creación de la Personería Delegada para el Sector Movilidad. Crear la Personería Delegada para el Sector Movilidad, dependiente de la Personería Delegada para la Misionalidad.

Artículo 63. Funciones de la Personería Delegada para el Sector Movilidad. La Personería Delegada para el Sector Movilidad, tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos distritales relacionados con la regulación y control del tránsito, el transporte público urbano en todas sus modalidades, la intermodalidad y el mejoramiento de las condiciones de movilidad y el desarrollo de infraestructura vial y de transporte.
2. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control al desempeño de las funciones como autoridad de tránsito y transporte que realice el sector movilidad.
3. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos distritales relacionados con la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial y de transporte del Distrito Capital.
4. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos distritales relacionados con la movilidad en el corto y mediano plazo dentro del marco del Plan de Ordenamiento Territorial.
5. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control al diseño, establecimiento, ejecución, regulación y control como autoridad de tránsito y transporte de las políticas sobre el tránsito y transporte en el Distrito Capital.
6. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la formulación y orientación de las políticas sobre democratización del sistema de transporte masivo y publico colectivo.

7. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la orientación, establecimiento y planeación del servicio de transporte público urbano, en todas sus modalidades en el Distrito y en su área de influencia.
8. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la participación en el diseño de la política y los mecanismos de la construcción y explotación económica de las terminales de transporte de pasajeros, de carga y de transferencia.
9. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la planeación y coordinación de los mecanismos de seguridad vial, de la semaforización y señalización de los segmentos viales del Distrito Capital.
10. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la contribución que haga el sector movilidad a la elaboración, regulación y ejecución y del Plan de Ordenamiento Territorial; en la articulación del Distrito Capital en el ámbito regional para la formulación de las políticas y planes de desarrollo conjunto, y en las políticas y planes de desarrollo urbano del Distrito Capital.
11. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en el diseño, establecimiento y ejecución de los planes y programas en materia de educación vial.
12. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control del transporte intermunicipal en la jurisdicción del Distrito Capital, de conformidad con la normatividad aplicables.
13. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la administración de los sistemas de información del sector movilidad.
14. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la aplicación de medidas en cuanto a la regulación del parqueo público y el estacionamiento en vías y espacios públicos, cumpliendo con lo establecido en el POT y en el Plan Maestro de Movilidad.
15. Elaborar y presentar los informes de prevención y control a la función pública requeridos del sector movilidad.
16. Vigilar la conducta oficial de quienes ejercen funciones públicas, de los sectores de su competencia, y dar traslado a las delegadas de asuntos disciplinarios y demás organismos de control, cuando a ello hubiere lugar.

17. Recibir, atender y tramitar las peticiones y/o cualquier solicitud presentada ante la dependencia, de conformidad con los términos establecidos por la ley.
18. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 64. Funciones de la Personería Delegada para el Sector Ambiente. La Personería Delegada para el Sector Ambiente, tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos distritales relacionados con la recuperación, protección y conservación del medio ambiente en el Distrito Capital.
2. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control al desempeño en el liderazgo y coordinación que realice el sector ambiente al Sistema Ambiental del Distrito Capital –SIAC-.
3. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control al desempeño de las funciones como autoridad ambiental en el Distrito Capital que realice el sector ambiente, en cumplimiento de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente, a las autoridades competentes en la materia.
4. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control al desempeño en la formulación, ajuste y revisión periódica del Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital y la coordinación de su ejecución a través de las instancias de coordinación que se establezcan de conformidad con el presente Acuerdo.
5. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos distritales relacionados a la investigación, conservación, mejoramiento, promoción, valoración y uso sostenible de los recursos naturales y servicios ambientales del Distrito Capital y sus territorios socio ambientales reconocidos.
6. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos distritales relacionados con la conservación, consolidación, enriquecimiento y mantenimiento de la estructura ecológica principal y del recurso hídrico, superficial y subterráneo, del Distrito Capital.
7. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos distritales relacionados con la conservación, aprovechamiento y desarrollo sostenible de las áreas protegidas del Distrito Capital.

8. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control al desempeño en la definición y articulación con las entidades u organismos competentes, de la política de gestión estratégica del ciclo del agua como recurso natural, bien público y elemento de efectividad del derecho a la vida.
9. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control al desempeño en la formulación, ejecución y supervisión de la implementación de la política de educación ambiental distrital de conformidad con la normativa, políticas nacionales en la materia y en coordinación con las entidades competentes.
10. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control al desempeño de las funciones y competencias en materia de control y vigilancia al cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de recursos naturales y en el emprendimiento de las acciones de policía que sean pertinentes al efecto, y en particular adelantar las investigaciones e imponer las sanciones que correspondan a quienes infrinjan dichas normas.
11. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control al desempeño a la implantación y operación del sistema de información ambiental del Distrito Capital con el soporte de las entidades que producen dicha información.
12. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos distritales relacionados con la planificación urbanística del Distrito Capital en materia ambiental.
13. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a la coordinación que realice el sector ambiente de los procesos de integración regional con las instancias ambientales respectivas.
14. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control al diseño y coordinación las estrategias de mejoramiento de la calidad del aire, y la prevención y corrección de la contaminación auditiva, visual y electromagnética, así como establecer las redes de monitoreo respectivos.
15. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control al fortalecimiento que realice el sector ambiente al fortalecimiento de los procesos territoriales y las organizaciones ambientales urbanas y rurales.
16. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las actividades que realice el sector ambiente para el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos y desechos o residuos peligrosos y de residuos tóxicos, y en dictar las medidas de corrección o mitigación de daños

ambientales y complementar la acción de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB- para desarrollar proyectos de saneamiento y descontaminación, en coordinación con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

17. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las actividades que realice el sector ambiente para el desarrollo de programas de arborización y ornamentación de la ciudad, en particular de especies nativas y efectuar el registro e inventario en estas materias.
18. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a la formulación y coordinación de la difusión de la política rural en el Distrito Capital y brindar asistencia técnica y tecnológica, agropecuaria y ambiental a los productores rurales.
19. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a los lineamientos que se establezcan en el Plan de desarrollo, el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Gestión Ambiental en las materias previstas en el literal T, del Artículo 103 del Acuerdo Distrital 257 de 2006.
20. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en el conocimiento, trámite y decisión del recurso de apelación de las decisiones que profieran los inspectores y corregidores distritales de Policía, respecto a los asuntos previstos en el literal V del Acuerdo Distrital 257 de 2006.
21. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la gestión del riesgo en el Distrito Capital.
22. Elaborar y presentar los informes de prevención y control a la función pública requeridos del sector ambiente.
23. Vigilar la conducta oficial de quienes ejercen funciones públicas, de los sectores de su competencia, y dar traslado a las delegadas de asuntos disciplinarios y demás organismos de control, cuando a ello hubiere lugar.
24. Recibir, atender y tramitar las peticiones y/o cualquier solicitud presentada ante la dependencia, de conformidad con los términos establecidos por la ley.
25. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 65. Personería Delegada para el Sector Hábitat. Son funciones de la Personería Delegada para el Sector Hábitat:

1. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos distritales frente a la planeación, gestión, control, vigilancia, ordenamiento y desarrollo de la ciudad, en los aspectos relacionados con el hábitat y los servicios públicos.
2. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a la elaboración de la política de gestión integral del hábitat en articulación con las secretarías de Planeación y de Ambiente, y de conformidad con el POT y el Plan de Desarrollo Distrital.
3. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos distritales relacionados con la promoción y gestión de proyectos de renovación urbana, el mejoramiento integral de los asentamientos, los reasentamientos humanos en condiciones dignas, el mejoramiento de vivienda, la producción de vivienda nueva de interés social y la titulación de predios en asentamientos de vivienda de interés social.
4. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la promoción de la oferta del suelo urbanizado y el apoyo y asistencia técnicas, así como el acceso a materiales de construcción a bajo costo.
5. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la gestión y ejecución que realice el sector hábitat a las operaciones estructurantes definidas en el Plan de Ordenamiento Territorial y demás actuaciones urbanísticas.
6. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la formulación de la política y en el diseño de los instrumentos para la financiación del hábitat, en planes de renovación urbana, mejoramiento integral de los asentamientos, los subsidios a la demanda y la titulación de predios en asentamientos de vivienda de interés social.
7. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la promoción y coordinación de las políticas y acciones para la prestación eficiente, bajo adecuados estándares de calidad y cobertura de los servicios públicos domiciliarios, en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo y el Plan de Gestión Ambiental y velar por su cumplimiento.
8. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la formulación de la política y en el diseño de los instrumentos para la cofinanciación del hábitat, entre otros sectores y actores con el nivel nacional, las Alcaldías locales, los inversionistas privados, nacionales y extranjeros, las comunidades, las

organizaciones no gubernamentales ONGs y las organizaciones populares de vivienda - OPVs, en planes de renovación urbana, mejoramiento integral de los asentamientos subnormales, producción de vivienda nueva de interés social y titulación de predios en asentamientos de vivienda de interés social.

9. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la coordinación de las intervenciones de las entidades adscritas y vinculadas en los planes de mejoramiento integral, de asentamientos, producción de vivienda de interés social y de renovación urbana.
10. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en el diseño de la política de subsidios y contribuciones en la prestación de los servicios públicos, con base en los recursos del Sistema General de Participaciones y otros recursos de financiación definidos en la Ley 142 de 1994, sus reglamentaciones y demás normas concordantes.
11. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la coordinación de la gestión de las entidades distritales ante las autoridades de regulación, control y vigilancia de los servicios públicos domiciliarios.
12. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en las gestiones orientadas a la desconcentración y descentralización de la gestión de planes de producción o mejoramiento del hábitat en cada jurisdicción, según las competencias asignadas a las alcaldías locales.
13. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la promoción de programas y proyectos para el fortalecimiento del control social de la prestación de los servicios públicos domiciliarios, evaluar los sistemas de atención a los usuarios y orientar las acciones para la mejor atención a las peticiones, quejas y reclamos.
14. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la vigilancia e inspección frente a la enajenación y arriendo de viviendas para proteger a sus adquirentes.
15. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la contribución que realice el sector hábitat en la elaboración y en la ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial, en la articulación del Distrito Capital con el ámbito regional para la formulación de las políticas y planes de desarrollo conjunto, y en las políticas y planes de desarrollo urbano del Distrito Capital.

16. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la formulación de la política de ecourbanismo y en la promoción y coordinación de su ejecución, con la Secretaría Distrital de Planeación y con la Secretaría Distrital de Ambiente.
17. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la definición de la política de gestión estratégica, del ciclo del agua, la cual incluye la oferta y demanda de este recurso para la ciudad como bien público y derecho fundamental a la vida en coordinación con la Secretaría Distrital de Ambiente.
18. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la promoción y desarrollo de los lineamientos ambientales determinados por el ordenamiento jurídico en lo relacionado con el uso del suelo.
19. Elaborar y presentar los informes de prevención y control a la función pública requeridos del sector hábitat.
20. Vigilar la conducta oficial de quienes ejercen funciones públicas, de los sectores de su competencia, y dar traslado a las delegadas de asuntos disciplinarios y demás organismos de control, cuando a ello hubiere lugar.
21. Recibir, atender y tramitar las peticiones y/o cualquier solicitud presentada ante la dependencia, de conformidad con los términos establecidos por la ley.
22. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 66. Personería Delegada para el Sector Seguridad. Son funciones de la Personería Delegada para el Sector Seguridad:

1. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos distritales frente a la garantía de la convivencia y la seguridad ciudadana y la preservación del orden público en la ciudad.
2. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos distritales frente a la prevención y cultura ciudadana que promuevan la convivencia, la resolución pacífica de conflictos y el cumplimiento de la ley.
3. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos distritales frente al mejoramiento de las rutas de acceso a la justicia y el fortalecimiento de los mecanismos de justicia formal, no formal y comunitaria.

4. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a la coordinación y operación del Sistema Integral de Seguridad y Emergencias NUSE 123 del Distrito Capital, de manera conjunta, con la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias -CRUE-, y la Policía Metropolitana de Bogotá, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida y eficiente para la prevención y atención de los eventos de emergencias y seguridad en el Distrito Capital.
5. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos distritales frente a la prevención del delito en niños, niñas y adolescentes, y las competencias del Distrito frente al sistema de responsabilidad penal adolescente en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.
6. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos distritales frente al mejoramiento de la política carcelaria y penitenciaria en la ciudad de Bogotá y la atención al pos penado.
7. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control al apoyo que realice el sector a los programas de Policía Cívica en la ciudad de Bogotá, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la ley.
8. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control frente a la coordinación de los servicios de emergencia del Distrito Capital en el marco del primer respondiente.
9. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control frente a la coordinación de los consejos distritales y locales de seguridad y ejercer su secretaría técnica.
10. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control frente a la implementación de mecanismos de cooperación con las entidades y organismos nacionales e internacionales, de acuerdo con la normativa que regula las actividades de inteligencia y contrainteligencia en Colombia y las directrices que sobre la materia expida el Gobierno Nacional.
11. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control frente a la coordinación de las acciones sectoriales relacionadas con la seguridad ciudadana, la convivencia y el acceso a la justicia.
12. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control frente a la coordinación de la formulación de los planes integrales de seguridad para Bogotá y las

localidades, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo Distrital 135 de 2004, o la normativa que lo modifique o sustituya.

13. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control frente a la definición de los lineamientos estratégicos para la seguridad ciudadana y el orden público con las instituciones, entidades y organismos de seguridad del nivel territorial y nacional.
14. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control frente a la adquisición o suministro de los bienes, servicios y contratar las obras que se requieran para el mejoramiento de las condiciones de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en el Distrito Capital.
15. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control frente a la generación de condiciones que realice el sector seguridad a las condiciones de seguridad y convivencia pacífica a través del fortalecimiento de las acciones que adelantan la Policía Metropolitana de Bogotá, la Brigada XIII del Ejército Nacional, los organismos de seguridad e inteligencia del Estado con jurisdicción en el Distrito Capital y en general las autoridades cuya competencia se oriente a la prevención, conservación y mantenimiento del orden público, la seguridad ciudadana y la defensa dentro del perímetro de Bogotá.
16. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control frente a la coordinación de la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación estratégica para el fortalecimiento de la convivencia, la seguridad y la justicia, en coordinación con las entidades distritales, territoriales y nacionales competentes.
17. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control frente a la coordinación de las alianzas estratégicas con las comunidades, el sector privado y las entidades del orden distrital, territorial y nacional, orientadas a la convivencia, la prevención del delito, la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia.
18. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control frente a la coordinación de la formulación y adopción de políticas, planes programas y proyectos dirigidos a la promoción, desarrollo y organización de las iniciativas y procesos ciudadanos solidarios desde la perspectiva de seguridad ciudadana.
19. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control frente a la coordinación de las acciones de protección que se requieran para grupos vulnerables en condición especial de riesgo asociado a su seguridad.

20. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control frente a la identificación de líneas generales de diseño, formulación, adopción, seguimiento y evaluación de planes, proyectos y programas en seguridad ciudadana, que deban ser ejecutados por dicha institución, siguiendo las directrices, instrucciones y órdenes de la primera autoridad de Policía del Distrito Capital.
21. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control frente a la recopilación, centralización y coordinación de la información sobre seguridad ciudadana y sistemas de acceso a la justicia de manera cualitativa y cuantitativa, incluyendo aquella relativa a las reacciones, posturas, propuestas y acciones de otras autoridades y de la sociedad civil.
22. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control frente al apoyo técnico a las alcaldías locales en la formulación y adopción de planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana, convivencia y acceso a la justicia de acuerdo con los lineamientos definidos por el alcalde Mayor.
23. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control frente a la evaluación y revisión periódica del impacto, la pertinencia y la oportunidad de las políticas y estrategias de seguridad ciudadana y acceso a la justicia trazadas por la Alcaldía Mayor y ejecutadas por las entidades y organismos distritales y las alcaldías locales.
24. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control frente al fomento de la participación ciudadana para el seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas que adelante la Secretaría de Seguridad.
25. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control frente al conocimiento, trámite y decisión del recurso de apelación de las decisiones que profieran los inspectores y corregidores distritales de Policía, respecto de los comportamientos contrarios a la convivencia en los siguientes asuntos y que están previstos en el literal F del Artículo 5 del Acuerdo Distrital 637 de 2016.
26. Elaborar y presentar los informes de prevención y control a la función pública requeridos del sector seguridad.
27. Vigilar la conducta oficial de quienes ejercen funciones públicas, de los sectores de su competencia, y dar traslado a las delegadas de asuntos disciplinarios y demás organismos de control, cuando a ello hubiere lugar.
28. Recibir, atender y tramitar las peticiones y/o cualquier solicitud presentada ante la dependencia, de conformidad con los términos establecidos por la ley.

29. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 67. Personería Delegada para el Sector Salud. Son funciones de la Personería Delegada para el Sector Salud:

1. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos distritales frente al sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud de conformidad con las disposiciones legales.
2. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las acciones para coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Bogotá, D. C.
3. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a la vigilancia que realice el sector salud al cumplimiento de las políticas y normas técnicas, científicas y administrativas que expida el Ministerio de la Protección Social, para garantizar el logro de las metas del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, sin perjuicio de las funciones de inspección, vigilancia y control atribuidas a las demás autoridades competentes.
4. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a la administración y supervisión de los recursos propios, los cedidos por la nación y los del Sistema General de Participaciones con destinación específica para salud y cualquier otro tipo de recursos que se generen con ocasión del cumplimiento de su naturaleza, objeto y funciones, garantizando siempre su correcta utilización, dentro del marco de la ley.
5. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a la gestión y prestación de los servicios de salud prioritariamente a través de su red adscrita, de manera oportuna, eficiente y con calidad a la población pobre no asegurada que resida en su jurisdicción, en lo no cubierto con subsidios a la demanda.
6. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control al desarrollo que realice el sector salud en la inspección, vigilancia y control en salud pública, aseguramiento y prestación del servicio de salud.
7. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la formulación y ejecución del plan de atención básica y coordinar con los sectores y la comunidad las acciones que en salud pública se realicen para mejorar las condiciones de calidad de vida y salud de la población.

8. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la coordinación, supervisión y control de las acciones de salud pública que realicen en su jurisdicción las Entidades Promotoras de Salud -EPS-, las Administradoras de Régimen Subsidiado -ARS-, las entidades transformadas y adaptadas y aquellas que hacen parte de los regímenes especiales, así como las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -IPS- e instituciones relacionadas.
9. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la promoción del aseguramiento de toda la población con énfasis en la población más pobre y vulnerable, al Sistema General de Seguridad Social en salud de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico.
10. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en mantener actualizadas las bases de datos de la población afiliada al régimen subsidiado y reportar dichas novedades a la Secretaría de Planeación y demás entidades competentes.
11. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la definición, vigilancia y control a la oferta de servicios de salud del Distrito Capital, con el fin de garantizar su calidad y funcionamiento, según las necesidades de la población.
12. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la promoción del aseguramiento de las poblaciones especiales conforme lo define la ley y las acciones en salud pública establecidas en el ordenamiento jurídico.
13. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la promoción de la coordinación de políticas con otros sectores, en particular hábitat, educación, planeación y medio ambiente, para incidir de manera integral en los determinantes de la salud y en la atención de la enfermedad.
14. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control en la implementación de programas de prevención del consumo del alcohol, del tabaco y otras drogas y de rehabilitación y desintoxicación.
15. Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control frente al conocimiento, trámite y decisión del recurso de apelación de las decisiones que profieran los inspectores y corregidores distritales de Policía, respecto de los comportamientos contrarios a la convivencia en los siguientes asuntos y que están previstos en el literal o del Artículo 85 del Acuerdo Distrital 257 de 2006.
16. Elaborar y presentar los informes de prevención y control a la función pública requeridos del sector salud.

17. Vigilar la conducta oficial de quienes ejercen funciones públicas, de los sectores de su competencia, y dar traslado a las delegadas de asuntos disciplinarios y demás organismos de control, cuando a ello hubiere lugar.
18. Recibir, atender y tramitar las peticiones y/o cualquier solicitud presentada ante la dependencia, de conformidad con los términos establecidos por la ley.
19. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

MODIFICACIÓN DE DENOMINACIONES Y FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS

Artículo 68. - Modificación de la denominación de la Personería Delegada para la Potestad Disciplinaria I. La Personería Delegada para la Potestad Disciplinaria I se denominará Personería Delegada para Instrucción Disciplinaria I y dependerá de la Personería Auxiliar.

Artículo 69. Funciones de la Personería Delegada para Instrucción Disciplinaria I. La Personería Delegada para Instrucción Disciplinaria I, tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Recibir peticiones, quejas y reclamos sobre el funcionamiento de la administración distrital y atender oportunamente la efectividad de los derechos e intereses de los asociados, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales vigentes y los procedimientos establecidos por la entidad.
2. Adelantar las averiguaciones disciplinarias respectivas por irregularidades en el trámite de los asuntos oficiales en los cuales haya inobservancia de los términos legales y los requisitos señalados en la ley.
3. Poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos presuntamente constitutivos de responsabilidad fiscal, penal o administrativa para que sean investigados.
4. Vigilar la conducta oficial de los (as) servidores(as) públicos(as) del Distrito Capital, y verificar que desempeñen cumplidamente sus deberes, adelantar las investigaciones disciplinarias en la etapa de instrucción, todo de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales vigentes y los procedimientos establecidos por la entidad.

5. Solicitar a los (as) servidores(as) públicos(as) del Distrito Capital la información que se requiera para el cumplimiento de las funciones asignadas.
6. Verificar la ocurrencia de conductas y determinar si son constitutivas de faltas disciplinarias o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
7. Decidir sobre la apertura de averiguaciones disciplinarias, de acuerdo con los términos y formalidades establecidos en las disposiciones legales vigentes.
8. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 70. - Modificación de la denominación de la Personería Delegada para la Potestad Disciplinaria II. La Personería Delegada para la Potestad Disciplinaria II se denominará Personería Delegada para Instrucción Disciplinaria II y dependerá de la Personería Auxiliar.

Artículo 71. Funciones de la Personería Delegada para Instrucción Disciplinaria II. La Personería Delegada para Instrucción Disciplinaria II, tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Recibir peticiones, quejas y reclamos sobre el funcionamiento de la administración distrital y atender oportunamente la efectividad de los derechos e intereses de los asociados, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales vigentes y los procedimientos establecidos por la entidad.
2. Adelantar las averiguaciones disciplinarias respectivas por irregularidades en el trámite de los asuntos oficiales en los cuales haya inobservancia de los términos legales y los requisitos señalados en la ley.
3. Poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos presuntamente constitutivos de responsabilidad fiscal, penal o administrativa para que sean investigados.
4. Vigilar la conducta oficial de los (as) servidores(as) públicos(as) del Distrito Capital, y verificar que desempeñen cumplidamente sus deberes, adelantar las investigaciones disciplinarias en la etapa de instrucción, todo de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales vigentes y los procedimientos establecidos por la entidad.
5. Solicitar a los (as) servidores(as) públicos(as) del Distrito Capital la información que requieran para el cumplimiento de sus funciones.

6. Verificar la ocurrencia de conductas y determinar si son constitutivas de faltas disciplinarias o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.
7. Decidir sobre la apertura de averiguaciones disciplinarias, de acuerdo con los términos y formalidades establecidos en las disposiciones legales vigentes.
8. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 72. - Modificación de la denominación de la Personería Delegada para la Potestad Disciplinaria III. La Personería Delegada para la Potestad Disciplinaria III se denominará Personería Delegada para Instrucción Disciplinaria III y dependerá de la Personería Auxiliar.

Artículo 73. Funciones de la Personería Delegada para Instrucción Disciplinaria III. La Personería Delegada para Instrucción Disciplinaria III, tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Recibir peticiones, quejas y reclamos sobre el funcionamiento de la administración distrital y atender oportunamente la efectividad de los derechos e intereses de los asociados, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales vigentes y los procedimientos establecidos por la entidad.
2. Adelantar las averiguaciones disciplinarias respectivas por irregularidades en el trámite de los asuntos oficiales en los cuales haya inobservancia de los términos legales y los requisitos señalados en la ley.
3. Poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos presuntamente constitutivos de responsabilidad fiscal, penal o administrativa para que sean investigados.
4. Vigilar la conducta oficial de los (as) servidores(as) públicos(as) del Distrito Capital, y verificar que desempeñen cumplidamente sus deberes, adelantar las investigaciones disciplinarias en la etapa de instrucción, todo de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales vigentes y los procedimientos establecidos por la entidad.
5. Solicitar a los (as) servidores(as) públicos(as) del Distrito Capital la información que requieran para el cumplimiento de sus funciones.

6. Verificar la ocurrencia de conductas y determinar si son constitutivas de faltas disciplinarias o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.
7. Decidir sobre la apertura de averiguaciones disciplinarias, de acuerdo con los términos y formalidades establecidos en las disposiciones legales vigentes.
8. Las demás que le sean asignadas por disposiciones legales, de acuerdo con su naturaleza.

Artículo 74. - Modificación de la denominación de la Personería Delegada para la Potestad Disciplinaria IV. La Personería Delegada para la Potestad Disciplinaria IV se denominará Personería Delegada para Juzgamiento Disciplinario I y dependerá de la Personería Auxiliar.

Artículo 75. Funciones de la Personería Delegada para Juzgamiento Disciplinario I. La Personería Delegada para Juzgamiento Disciplinario I, tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Recibir peticiones, quejas y reclamos sobre el funcionamiento de la administración distrital y atender oportunamente la efectividad de los derechos e intereses de los asociados, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales vigentes y los procedimientos establecidos por la entidad.
2. Adelantar las averiguaciones disciplinarias respectivas por irregularidades en el trámite de los asuntos oficiales en los cuales haya inobservancia de los términos legales y los requisitos señalados en la ley.
3. Poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos presuntamente constitutivos de responsabilidad fiscal, penal o administrativa para que sean investigados.
4. Vigilar la conducta oficial de los (as) servidores(as) públicos(as) del Distrito Capital, y verificar que desempeñen cumplidamente sus deberes, adelantar las investigaciones disciplinarias en la etapa de juzgamiento e imponer las sanciones que fueren del caso, todo de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales vigentes y los procedimientos establecidos por la entidad.
5. Solicitar a los (as) servidores(as) públicos(as) del Distrito Capital la información que se requiera para el cumplimiento de las funciones asignadas.

6. Las demás que le sean asignadas por disposiciones legales, de acuerdo con su naturaleza.

Artículo 76. Creación de la Personería Delegada para Juzgamiento Disciplinario II. Crear la Personería Delegada para Juzgamiento Disciplinario II, dependiente de la Personería Auxiliar.

Artículo 77. Funciones de la Personería Delegada para Juzgamiento Disciplinario II. La Personería Delegada para Juzgamiento Disciplinario II, tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Recibir peticiones, quejas y reclamos sobre el funcionamiento de la administración Distrital y atender oportunamente la efectividad de los derechos e intereses de los asociados, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales vigentes y los procedimientos establecidos por la entidad.
2. Adelantar las averiguaciones disciplinarias respectivas por irregularidades en el trámite de los asuntos oficiales en los cuales haya inobservancia de los términos legales y los requisitos señalados en la ley.
3. Poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos presuntamente constitutivos de responsabilidad fiscal, penal o administrativa para que sean investigados.
4. Vigilar la conducta oficial de los (as) servidores(as) públicos(as) del Distrito Capital, y verificar que desempeñen cumplidamente sus deberes, adelantar las investigaciones disciplinarias en la etapa de juzgamiento e imponer las sanciones que fueren del caso, todo de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales vigentes y los procedimientos establecidos por la entidad.
5. Solicitar a los (as) servidores(as) públicos(as) del Distrito Capital la información que requieran para el cumplimiento de sus funciones.
6. Las demás que le sean asignadas por disposiciones legales, de acuerdo con su naturaleza.

Artículo 78. Las Personerías Delegadas para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos I y II; para la Familia y Sujetos de Especial Protección Constitucional; para la Protección de Víctimas del Conflicto Armado Interno; para la Defensa y Protección de los Derechos del Consumidor; la Personería Delegada Asuntos Penales I; Personería Delegada Asuntos Penales II; la Personería Delegada Asuntos Policivos y Civiles,

dependerán de la Personería Delegada para la Misionalidad y hacen parte de los procesos misionales de la entidad.

Artículo 79. La Personería Delegada para los Sectores Gestión Pública y Jurídica; la Personería Delegada para el Sector Gobierno; la Personería Delegada para el Sector Hacienda; la Personería Delegada para el Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo; la Personería Delegada para el Sector Planeación; la Personería Delegada para el Sector Educación; la Personería Delegada para el Sector Cultura, Recreación y Deporte; la Personería Delegada para el Sector Salud; la Personería Delegada para el Sector Ambiente; la Personería Delegada para el Sector Hábitat; la Personería Delegada para el Sector Mujeres; la Personería Delegada para el Sector Integración Social y la Personería Delegada para el Sector Seguridad, Convivencia y Justicia, dependerán de la Personería Delegada para la Misionalidad y hacen parte de los procesos misionales de la Entidad.

Artículo 80. Funciones de la Oficina de Control Interno Disciplinario: La Oficina de Control Interno Disciplinario dependerá de la Personería Auxiliar y tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Ejercer la potestad disciplinaria sobre los(as) servidores(as) públicos(as) de la entidad.
2. Liderar estudios de caracterización de las faltas cometidas, de los riesgos de incurrir en ellas y, proponer programas de prevención para evitar su materialización.
3. Coordinar actividades orientadas a la prevención de la comisión de faltas disciplinarias.
4. Conocer, estudiar y tramitar las denuncias, quejas y reclamos por las posibles faltas disciplinarias en que incurran los(as) servidores(as) de la entidad o de quienes presten funciones públicas en la misma, por infracción a la Constitución, las leyes, los acuerdos y demás normas relacionadas con la Personería de Bogotá, D. C.
5. Dirigir la acción disciplinaria, de conformidad con las normas legales vigentes.
6. Conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra los(as) servidores(as) de la entidad y exfuncionarios(as) de la entidad.
7. Presentar a la segunda instancia los procesos que hayan sido objeto del recurso de apelación interpuesto contra las decisiones de fondo proferidas.
8. Establecer las sanciones a que haya lugar según las disposiciones legales vigentes.

9. Formular los actos administrativos mediante las cuales se acojan decisiones ordenadas por la Procuraduría General de la Nación.
10. Presentar las investigaciones disciplinarias que ordena asumir la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del poder preferente.
11. Presentar y enviar las investigaciones del caso, a los organismos de control o entidades judiciales cuando exista mérito para ello.
12. Preparar, elaborar y presentar los informes de sus actuaciones a los organismos de control.
13. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 81. Funciones de la Dirección de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico: La Dirección de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico dependerá de la Personería Auxiliar y tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Gestionar peticiones, quejas y reclamos sobre el funcionamiento de la administración distrital y atender oportunamente la efectividad de los derechos e intereses de los asociados, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales vigentes y los procedimientos establecidos por la entidad.
2. Dirigir las averiguaciones disciplinarias respectivas por irregularidades en el trámite de los asuntos oficiales en los cuales haya inobservancia de los términos legales y los requisitos señalados en la ley.
3. Remitir ante las autoridades competentes los hechos presuntamente constitutivos de responsabilidad fiscal, penal o administrativa para que sean investigados.
4. Investigar la conducta oficial de los (as) servidores(as) públicos(as) del Distrito Capital, y verificar que desempeñen cumplidamente sus deberes, adelantar las investigaciones disciplinarias en la etapa de instrucción, todo de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales vigentes y los procedimientos establecidos por la entidad.
5. Requerir a los (as) servidores(as) públicos(as) del Distrito Capital la información que se requiera para el cumplimiento de las funciones asignadas.
6. Validar la ocurrencia de conductas y determinar si son constitutivas de faltas disciplinarias o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

7. Decidir sobre la apertura de averiguaciones disciplinarias, de acuerdo con los términos y formalidades establecidos en las disposiciones legales vigentes.
8. Prestar asesoría y apoyo técnico a las dependencias de la entidad, de conformidad con las solicitudes y necesidades de los diferentes procesos.
9. Preparar y presentar informes especiales, cuando la investigación lo amerite o sea indispensable, en desarrollo de las directrices del superior inmediato.
10. Formular y presentar recomendaciones al superior inmediato sobre el ejercicio de la función preventiva y, las acciones encaminadas a prevenir violaciones de los derechos, detrimentos del patrimonio público o conductas punibles.
11. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 82. Las personerías delegadas para Instrucción Disciplinaria I, II y III y para Juzgamiento Disciplinario I y II, así como la Oficina de Control Interno Disciplinario y la Dirección de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico, dependerán de la Personería Auxiliar y hacen parte de los procesos misionales de la entidad.

PROCESOS DE APOYO

DEPENDENCIAS Y FUNCIONES DE LOS PROCESOS DE APOYO

Artículo 83. Funciones de la Secretaría General. La Secretaría General dependerá del personero (a) y tendrá las siguientes funciones.

1. Dirigir, orientar y controlar la formulación e implementación de las políticas y estrategias de gestión del talento humano al servicio de la entidad, asegurando su alineación con el marco normativo aplicable y las directrices institucionales.
2. Dirigir, proponer y supervisar el diseño, ejecución y control de las políticas y acciones relacionadas con la gestión administrativa y financiera de la entidad, garantizando el cumplimiento de los lineamientos establecidos por las autoridades competentes y las normas de administración pública.
3. Liderar, coordinar y controlar el desarrollo de las políticas y acciones en materia de contratación pública, conforme al régimen jurídico aplicable y los principios de transparencia, eficiencia y eficacia.

4. Organizar, coordinar y supervisar en articulación con la Personería Delegada para el Relacionamento con el Usuario y Asuntos Locales, el sistema de gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) vinculadas a las funciones de la entidad, con el fin de que se dé respuesta oportuna y adecuada de conformidad con el marco normativo vigente.
5. Impartir lineamientos y supervisar la ejecución de los procesos relacionados con la vinculación, pago de subsidios y expedición de certificaciones para judicantes, en estricta observancia de las disposiciones legales y reglamentarias.
6. Ejercer la ordenación del gasto y celebrar contratos de prestación de servicios cuando le sea delegada esta función por el personero de Bogotá, garantizando el cumplimiento de los principios constitucionales de publicidad, responsabilidad, transparencia, economía y celeridad.
7. Gerenciar los proyectos de inversión asignados por el personero de Bogotá, asegurando su ejecución conforme a los lineamientos técnicos, normativos y presupuestales establecidos.
8. Participar activamente en los comités institucionales para los cuales ha sido delegado, desempeñando sus funciones con sujeción a las competencias asignadas y a los procedimientos internos de la entidad.
9. Establecer directrices para el adecuado funcionamiento de la ventanilla anticorrupción, garantizando su operatividad conforme a la normativa vigente y los lineamientos de la entidad.
10. Coordinar y supervisar la custodia, archivo y conservación de los actos administrativos emitidos por el despacho del personero(a) de Bogotá, D. C., en concordancia con los procedimientos institucionales de gestión documental.
11. Fijar las pautas para la asignación, distribución y seguimiento de la correspondencia del despacho del personero(a) de Bogotá, D. C., conforme a las competencias de cada área y a los procedimientos administrativos de la entidad.
12. Emitir lineamientos y supervisar la elaboración y presentación de informes dirigidos al Concejo de Bogotá, D. C. y a los entes de control, garantizando su contenido, oportunidad y pertinencia de acuerdo con los parámetros legales e institucionales vigentes.
13. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del empleo y el área y las fijadas por la ley, acuerdos, estatutos y reglamentos.

14. Apoyar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas relacionados con los procesos de apoyo de la Entidad, con el fin de optimizar la gestión interna y contribuir al logro de los objetivos estratégicos de la Personería de Bogotá, D. C.

15. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 84. Funciones de la Dirección de Talento Humano. La Dirección de Talento Humano dependerá de la Secretaría General y tendrá las siguientes funciones.

1. Dirigir el proceso de talento humano desde su planeación institucional, administración y gestión, de acuerdo con los objetivos, necesidades estructurales y coyunturales de la Personería de Bogotá.
2. Dirigir la definición de los elementos conceptuales y técnicos necesarios para la formulación de las políticas, planes, programas, estrategias de gestión y proyección del talento humano de la Personería de Bogotá.
3. Liderar los estudios sobre las necesidades de la planta de personal de la entidad para su adecuada provisión de empleos, de acuerdo con la planeación estratégica, requerimientos institucionales y normatividad vigente.
4. Liderar y dirigir la modificación y actualización del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la entidad, previo análisis de las necesidades del servicio y las solicitudes formuladas por las áreas;
5. Dirigir la formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos orientados a la gestión estratégica del talento humano de acuerdo con el ciclo de vida del servidor público, promoviendo la equidad laboral, el trabajo digno e inclusivo para el fortalecimiento institucional, conforme a la normatividad vigente.
6. Dirigir la implementación del programa de teletrabajo en la Personería de Bogotá, de acuerdo con la normatividad vigente.
7. Dirigir la proyección de actos administrativos relacionados con las novedades de personal y situaciones administrativas de los servidores y exservidores que estén vinculados en empleos de libre nombramiento y remoción de la Personería de Bogotá, y dar respuesta a las peticiones en materia del talento humano relacionadas con los mismos.

8. Dirigir la respuesta a las peticiones en materia del talento humano que se soliciten a la Personería de Bogotá.
9. Definir las estrategias para la implementación de la gestión del conocimiento de la entidad en coordinación con las dependencias correspondientes.
10. Promover la implementación de la política de integridad en la Personería de Bogotá.
11. Ejercer la Secretaría Técnica de la Comisión de Personal de la Personería de Bogotá, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.
12. Notificar los actos administrativos que en ejercicio de sus funciones expida.
13. Presentar los diferentes informes exigidos por la ley, solicitados por los organismos de control y en general, todos aquellos que le sean requeridos de acuerdo con la naturaleza de sus funciones.
14. Contribuir en el desarrollo del proceso de negociación sindical que realice al interior de la Personería de Bogotá, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.
15. Dirigir la aplicación de las políticas de la entidad en los planes y programas que se presenten en materia de bienestar social, incentivos, plan institucional de capacitación (PIC), salud ocupacional, aplicación de las normas de carrera administrativa, evaluación del desempeño, inducción y reinducción, clima organizacional y plan anual de vacantes.
16. Definir y dirigir la formulación de las políticas y planes relativos a la nómina de la entidad.
17. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos, los estatutos y los reglamentos.

Artículo 85. Creación de la Subdirección de Administración del Talento Humano. Crear la Subdirección de Administración del Talento Humano, dependiente de la Dirección de Talento Humano.

Artículo 86. Funciones de la Subdirección de Administración del Talento Humano. La Subdirección de Administración del Talento Humano tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Dirigir la aplicación de los componentes de la carrera administrativa en la Personería de Bogotá, D. C., de conformidad con la normatividad y procedimientos que rigen la materia y ante las instancias competentes.

2. Adelantar los procesos y trámites que en materia de carrera administrativa deban surtirse ante las instancias competentes, según los procesos y normatividad aplicable.
3. Coordinar la elaboración de la oferta pública de empleo de carrera vacantes que se proveerán por concurso de méritos, ante la instancia competente.
4. Coordinar la elaboración de los estudios para la identificación de los perfiles ocupacionales requeridos por la Personería de Bogotá, D. C., para el cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales.
5. Diseñar, ejecutar, evaluar y controlar las políticas y procedimientos asociados a la administración de planta de personal, selección, vinculación, distribuciones, situaciones administrativas, ubicaciones, traslados, encargos, evaluación del desempeño y desvinculación de los empleados públicos de la Personería de Bogotá con base en las necesidades reales, las metodologías y lineamientos aprobados, el cumplimiento a la normatividad vigente y los procedimientos establecidos.
6. Dirigir, orientar, coordinar y controlar las actividades relacionadas con los procesos de selección, vinculación del talento humano, así como las afiliaciones al sistema de la seguridad social integral.
7. Dirigir y orientar el análisis al cumplimiento de requisitos de los candidatos que desempeñarán los diferentes empleos públicos que conforman la planta de personal de la Personería de Bogotá.
8. Administrar los sistemas de información asociados a la administración del talento humano, de acuerdo con los procedimientos establecidos y las necesidades de la Personería de Bogotá.
9. Revisar y proyectar si procede, las certificaciones de no existencia de personal que sean requeridas por el área de contratación
10. Rendir los informes que en materia de administración de carrera administrativa requiera el organismo de vigilancia y control competente.
11. Recibir peticiones, quejas y reclamos sobre los temas de su competencia y atenderlos oportunamente de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales vigentes y los procedimientos establecidos por la Entidad.
12. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos, los estatutos y los reglamentos.

Artículo 87. Modificación de la denominación de la Subdirección de Gestión del Talento Humano. La Subdirección de Gestión del Talento Humano, se denominará Subdirección de Nómina y Gestión de la Información del Talento Humano y dependerá de la Dirección del Talento Humano.

Artículo 88. Funciones de la Subdirección de Nómina y Gestión de la Información del Talento Humano. La Subdirección de Nómina y Gestión de la Información del Talento Humano tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Administrar la elaboración de la nómina de la entidad, incluyendo las novedades, descuentos y demás situaciones administrativas y gestionar su pago oportuno, conforme a la normatividad vigente.
2. Gestionar y coordinar las apropiaciones presupuestales relacionadas con los servicios personales asociados a la nómina y aportes patronales al sector privado y público, que permitan atender las obligaciones salariales y prestacionales de los (as) empleados (as) de la entidad.
3. Liquidar y gestionar el pago de la seguridad social y de parafiscales a cargo de la entidad, de acuerdo con las normas vigentes.
4. Expedir las certificaciones laborales y los certificados para bonos pensionales, conforme a la normatividad vigente.
5. Gestionar el proceso de cobro de las prestaciones económicas ante las entidades promotoras de salud (EPS) y la administradora de riesgos laborales (ARL), derivadas de las incapacidades expedidas a los (as) funcionarios(as) de la entidad.
6. Atender las solicitudes de información que realicen las entidades distritales, sociedades administradoras de fondos de pensiones y entidades que administran y gestionan recursos del Sistema General de Seguridad Social.
7. Elaborar las liquidaciones y certificaciones de haberes laborales, que permitan cumplir con las obligaciones salariales y prestacionales propias del retiro de los (as) empleados (as) de la entidad, conforme a las normas vigentes.
8. Proyectar la elaboración de actos administrativos relacionados con el pago de los servicios personales asociados a la nómina y aportes patronales al sector privado y público.

9. Administrar y custodiar las historias laborales de los (as) funcionarios(as) y exfuncionarios(as) de la entidad, atendiendo las disposiciones vigentes.
10. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 89. Funciones de la Subdirección de Desarrollo del Talento Humano. La Subdirección de Desarrollo del Talento Humano, tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Direccionar estrategias de inducción, reintegración y desvinculación del talento humano según los lineamientos y la normatividad vigente.
2. Promover el desarrollo de las capacidades del talento humano con base en los lineamientos del Plan Institucional de Capacitación.
3. Implementar el programa de bienestar social e incentivos, teniendo en cuenta los criterios de equidad, eficiencia, cubrimiento institucional y la normatividad vigente.
4. Diseñar, administrar y ejecutar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de conformidad con la normatividad vigente.
5. Poner en funcionamiento el sistema de Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo con la normatividad vigente y el sistema Integrado de Planeación y Gestión.
6. Desarrollar la cultura organizacional teniendo en cuenta lineamientos de empleo público, marco ético institucional y estudios realizados.
7. Hacer seguimiento a la gestión de los planes de talento humano de la dependencia a su cargo, conforme a las metas e indicadores establecidos por la entidad.
8. Realimentar el desarrollo de la gestión de los planes teniendo en cuenta los resultados del seguimiento y la evaluación.
9. Formular y ejecutar los planes institucionales de bienestar, incentivos y capacitación, de conformidad con las políticas institucionales y las normas vigentes.
10. Participar en la formulación y ejecución de las estrategias, planes de acción y demás programas de la entidad.
11. Coordinar la expedición de los actos administrativos y demás documentos de competencia de la Subdirección, de conformidad con las normas vigentes y los procedimientos establecidos.

12. Gestionar el suministro de bienes y servicios para dar cumplimiento a las actividades establecidas en los planes institucionales de: bienestar, incentivos, capacitación y las del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
13. Coordinar la ejecución de las actividades programadas en los planes institucionales de bienestar, capacitación e incentivos, con la caja de compensación familiar, la administradora de riesgos laborales (ARL) y demás entidades, con el fin de garantizar su cumplimiento.
14. Coordinar la ejecución de las actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, con las ARL a las que estén afiliados los (as) funcionarios(as) de la entidad, con el fin de garantizar su cumplimiento.
15. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 90. Funciones de la Dirección Administrativa y Financiera. La Dirección Administrativa y Financiera dependerá de la Secretaría General y tendrá las siguientes funciones.

1. Definir y dirigir el plan de acción, los programas, proyectos y las estrategias de la dependencia en concordancia con las políticas y la misión de la entidad.
2. Dirigir la administración y el control a los procesos de apoyo relacionados con la gestión administrativa, financiera, contractual y demás requeridos por la entidad.
3. Dirigir la ejecución de los recursos financieros de acuerdo con los lineamientos expedidos por los entes competentes en el Distrito Capital.
4. Fijar las directrices para el adecuado manejo de los inventarios, el almacén, los seguros, los bienes y servicios y la infraestructura física con el propósito de propender por el normal funcionamiento de la entidad.
5. Dirigir y verificar la elaboración del anteproyecto de presupuesto, del plan anual de adquisiciones, del plan anual de caja (PAC) y de los demás planes y programas requeridos para la gestión financiera de la entidad.
6. Dirigir la preparación y presentación de los informes de gestión de la dependencia, dirigidos a la alta dirección de la entidad y a los organismos de control.
7. Dirigir los procesos de contratación adelantados por la entidad.

8. Alimentar los sistemas de información puestos y actualizar el registro de competencia y responsabilidad de la dependencia en los diferentes aplicativos de acuerdo con las instrucciones impartidas por el(la) superior inmediato(a) y dentro de los términos de ley.
9. Cumplir con las políticas y lineamientos de los Sistemas de Gestión de Calidad, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistemas de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad de la información que la entidad tiene implementado.
10. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 91. Modificación de la denominación de la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos. La Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos, se denominará Subdirección de Recursos Físicos y dependerá de la Dirección Administrativa y Financiera.

Artículo 92. Funciones de la Subdirección de Recursos Físicos. La Subdirección de Recursos Físicos tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Coordinar la ejecución de los lineamientos de adquisición, conservación, mantenimiento y dotación de la infraestructura física de la entidad.
2. Coordinar y controlar las actividades administrativas relacionadas con el manejo de los bienes y la administración de servicios generales, de vigilancia, mantenimiento, transporte, cafetería y demás requeridos en la entidad.
3. Coordinar, controlar y hacer seguimiento a las actividades relacionadas con los seguros y garantías que amparan los bienes muebles e inmuebles de la entidad.
4. Coordinar la elaboración y actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles, y elementos de consumo de acuerdo con las normas vigentes.
5. Rendir los informes del área de su competencia dentro de los términos de ley y acorde con los procedimientos de la entidad.
6. Recibir peticiones, quejas y reclamos sobre los temas de su competencia y atenderlos oportunamente de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales vigentes y los procedimientos establecidos por la entidad.
7. Administrar las actividades relacionadas con almacén y suministro de elementos requeridos por las diferentes dependencias de la entidad.

8. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 93. Creación de la Subdirección de Gestión Documental. Crear la Subdirección de Gestión Documental, dependiente de la Dirección Administrativa y Financiera.

Artículo 94. Funciones de la Subdirección de Gestión Documental. La Subdirección de Gestión Documental, tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Formular e implementar estrategias para el trámite oportuno de correspondencia interna y externa de la entidad, dando cumplimiento a las normas, procedimientos y sistemas establecidos.
2. Coordinar el desarrollo y la operación del proceso de gestión documental a través de las herramientas y aplicativos institucionales.
3. Brindar asistencia en materia de organización, custodia y conservación de archivos físicos, así como orientar en el manejo, organización, procesamiento, captura y almacenamiento de la información digital.
4. Monitorear los archivos de la entidad en sus diferentes etapas, para controlar el cumplimiento de las políticas, reglas y estándares de conformidad con las normas que regulan la materia.
5. Coordinar la elaboración, implementación y actualización de los instrumentos archivísticos de acuerdo con las normas aplicables y las políticas institucionales.
6. Rendir los informes que en materia de gestión documental requieran los organismos de vigilancia y control competentes.
7. Recibir peticiones, quejas y reclamos sobre los temas de su competencia y atenderlos oportunamente de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales vigentes y los procedimientos establecidos por la entidad.
8. Generar directrices, lineamientos y actualizar procedimientos en materia de gestión documental.
9. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 95. Funciones de la Subdirección de Gestión Contractual. La Subdirección de Gestión Contractual dependerá de la Dirección Administrativa y Financiera y tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Ejecutar el plan de acción, los programas, proyectos y las estrategias de la dependencia en concordancia con las políticas y la misión de la Entidad.
2. Gestionar los procesos contractuales en cumplimiento del manual de contratación de la entidad y la normatividad vigente.
3. Coordinar con las diferentes dependencias la gestión contractual, de acuerdo con los procesos y procedimientos vigentes.
4. Coordinar la evaluación técnica, económica y financiera de las propuestas presentadas por los oferentes en los diferentes procesos y modalidades de contratación.
5. Registrar de manera oportuna los contratos celebrados por la entidad en los sistemas de información establecidos para tal fin por las entidades distritales y nacionales.
6. Preparar y presentar los informes de la dependencia, solicitados por la alta dirección.
10. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 96. Funciones de la Subdirección de Gestión Financiera. La Subdirección de Gestión Financiera dependerá de la Dirección Administrativa y Financiera y tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Ejecutar el plan de acción, los programas, proyectos y las estrategias de la dependencia en concordancia con las políticas y la misión de la Entidad.
2. Coordinar con la Dirección Administrativa y Financiera la formulación de las políticas y planes sobre presupuesto, contabilidad y tesorería, de acuerdo con la normatividad vigente.
3. Coordinar el proceso de ejecución y control del presupuesto de la entidad conforme a las disposiciones legales vigentes y las políticas institucionales.
4. Coordinar la elaboración, administración y ejecución del Programa Anual de Caja, teniendo en cuenta las políticas fiscales y las obligaciones a cargo de la entidad.

5. Coordinar y verificar las solicitudes y actos administrativos para la modificación del presupuesto de la entidad.
6. Coordinar y gestionar las actividades relacionadas con la elaboración y presentación de los estados contables e informes complementarios, de acuerdo con la normativa vigente.
7. Controlar y verificar que el proceso de preparación, registro presupuestal y contable de todas las operaciones financieras de la entidad se realicen de conformidad con las disposiciones legales que le sean aplicables.
8. Dirigir la preparación y presentación de los informes de gestión de la dependencia, dirigidos a la alta dirección de la entidad y a los organismos de control.
9. Proporcionar orientación técnica y financiera y proponer los cambios que considere convenientes para lograr una eficiente gestión financiera y contable.
10. Coordinar el proceso de pagos de las obligaciones a cargo de la entidad
11. Coordinar y consolidar el anteproyecto de presupuesto anual de la entidad de acuerdo con los lineamientos internos y externos y con la normativa vigente.
12. Mantener actualizado los sistemas de Información de la entidad de manera permanente, garantizando la oportunidad de acceder a la información a su cargo.
13. Cumplir con las políticas y lineamientos de los Sistemas de Gestión de Calidad, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistemas de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad de la información que la entidad tiene implementado.
14. Las demás fijadas por la ley, los acuerdos y los reglamentos.

Artículo 97. La Dirección de Talento Humano, la Subdirección de Nómina y Gestión de la Información de Talento Humano, la Subdirección de Desarrollo de Talento Humano, la Subdirección de Administración de Talento Humano, la Dirección Administrativa y Financiera, la Subdirección de Gestión Contractual, la Subdirección de Gestión de Financiera, Subdirección de Recursos Físicos y la Subdirección de Gestión Documental, dependerán de la Secretaria General y hacen parte de los procesos de apoyo de la entidad.

CAPÍTULO III

Artículo 98. Personero(a) de Bogotá, D. C. Son funciones del personero(a) Distrital de Bogotá D. C., conforme al Decreto Ley 1421 de 1993 las siguientes:

Funciones como agente del Ministerio Público

1. Actuar directamente o a través de delegados suyos en los procesos civiles, contenciosos, laborales, de familia, penales, agrarios, mineros y de policía y en los demás que deba intervenir por mandato de la ley.
2. Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas cuando lo considere necesario para la defensa del orden jurídico, el patrimonio público, los derechos y las garantías fundamentales.
3. Defender los derechos e intereses colectivos adelantando las acciones populares que para su protección se requieran.
4. Con base en el artículo 282 de la Constitución, interponer la acción de tutela y asumir la representación del Defensor del Pueblo, cuando este último se la delegue.
5. Los funcionarios de la personería distrital que por delegación actúen como agentes del Ministerio Público no deberán acreditar las calidades de los magistrados, jueces y fiscales ante los cuales ejerzan las funciones delegadas. Tampoco tendrán la remuneración, derechos y prestaciones de éstos.

Funciones como Veedor(a) Ciudadano(a)

1. Velar por el cumplimiento de la Constitución Política, las leyes, los acuerdos y las sentencias judiciales.
2. Recibir quejas y reclamos sobre el funcionamiento de la administración y procurar la efectividad de los derechos e intereses de los asociados.
3. Orientar a los ciudadanos en sus relaciones con la administración, indicándoles la autoridad a la que deben dirigirse para la solución de sus problemas.
4. Velar por la efectividad del derecho de petición, con tal fin, debe instruir debidamente a quienes deseen presentar una petición; escribir las de quienes no pudieren o supieren hacerlo; y recibir y solicitar que se tramiten las peticiones y recursos de conformidad con las disposiciones vigentes.
5. Poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos que considere irregulares a fin de que sean corregidos y sancionados.
6. Velar por la defensa de los bienes del Distrito y demandar de las autoridades competentes las medidas necesarias para impedir la perturbación y ocupación de los bienes fiscales y de uso público.
7. Exigir de las autoridades distritales las medidas necesarias para impedir la propagación de epidemias y asegurar la protección de la diversidad e integridad del ambiente y la conservación de áreas de especial importancia ecológica.

8. Vigilar la conducta oficial de los ediles, empleados y trabajadores del Distrito y verificar que desempeñen cumplidamente sus deberes, adelantar las investigaciones disciplinarias e imponer las sanciones que fuere del caso todo de conformidad con las disposiciones vigentes.
9. Vigilar de oficio o a petición de parte los procesos disciplinarios que se adelanten en las entidades del Distrito.
10. Procurar la defensa de los derechos e intereses del consumidor.

Funciones como Defensor(a) de los Derechos Humanos

1. Coordinar la defensoría pública en los términos que señale la ley.
2. Cooperar con el Defensor del Pueblo en la implantación de las políticas que éste fije.
3. Divulgar la Constitución y, en coordinación con otras autoridades, adelantar programas de educación y concientización sobre los derechos humanos y los deberes fundamentales del hombre.
4. Recibir y tramitar las quejas y reclamos sobre la violación de los derechos civiles y políticos y las garantías sociales.
5. Solicitar de los funcionarios de la rama judicial los informes que considere necesarios sobre hechos que se relacionen con la violación de los derechos humanos.
6. Velar por el respeto de los derechos humanos de las personas reclusas en establecimientos carcelarios, psiquiátricos, hospitalarios, ancianatos y orfanatos.

Atribuciones especiales del (la) Personero(a) de Bogotá, D. C.

1. Nombrar y remover los funcionarios de la Personería.
2. Rendir semestralmente informe al Concejo sobre el cumplimiento de sus funciones.
3. Presentar proyectos de acuerdo sobre asuntos de su competencia.
4. Exigir a los servidores distritales la información que requiera para el ejercicio de sus funciones.
5. Expedir certificados de antecedentes disciplinarios para tomar posesión de un cargo en el Distrito.
6. Solicitar la suspensión de los funcionarios investigados cuando lo estime pertinente a fin de asegurar el éxito de las diligencias que adelante.
7. Fijar las políticas internas de la entidad y dirigir, coordinar y controlar la gestión de la Personería de Bogotá, D. C.
8. Dar posesión a las personas que ocuparán empleos del nivel directivo.
9. Dirigir, orientar y controlar las relaciones interinstitucionales con organismos nacionales o internacionales.
10. Proyectar el presupuesto de la entidad.
11. Ejercer o delegar la ordenación del gasto, así como el pago de las acreencias de la Personería.
12. Suscribir o delegar la suscripción de los contratos necesarios para la adquisición y el

suministro de los bienes y servicios requeridos para el funcionamiento y servicio de la entidad y, en general, administrar los bienes adscritos a ésta.

13. Redistribuir las atribuciones y delegaciones entre las dependencias y servidores(as) públicos(as) de la entidad y, determinar la estructura administrativa necesaria para el cumplimiento de su misión.
14. Resolver en segunda instancia los recursos presentados contra las decisiones emitidas en primera instancia de los procesos disciplinarios.
15. Aplicar los sistemas y procedimientos relacionados con el funcionamiento de la carrera administrativa de la Personería de Bogotá, D. C., en forma independiente de otros organismos distritales y desarrollar las disposiciones legales sobre la materia.
16. Conformar con los(as) servidores(as) públicos(as) de las diferentes dependencias de la entidad, sin alterar la estructura básica de éstas, grupos programáticos y asignarles las funciones temporales que sean pertinentes.
17. Modificar y/o adicionar, cuando sea necesario, mediante acto administrativo la redistribución de competencias asignadas a las diferentes dependencias de la Personería de Bogotá, D. C.
18. Las demás que le asigne la ley y los acuerdos distritales.

Artículo 99. Personería Auxiliar. La Personería Auxiliar, dependerá del Despacho de (la) personero(a) Distrital, y tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Reemplazar al (a la) personero(a) de Bogotá, D. C. en los casos de falta temporal o impedimento.
2. Adelantar las actuaciones, investigaciones y trabajos especiales que le encomiende el (la) personero(a) de Bogotá, D. C. y rendir los correspondientes informes.
3. Asesorar al (la) personero(a) de Bogotá, D. C., en la elaboración de informes que debe rendir a las autoridades competentes.
4. Representar al (a la) personero(a) de Bogotá, D. C. en las actividades oficiales que éste(a) le señale.
5. Dirigir, coordinar y controlar la actualización de los reglamentos internos de la entidad.
6. Asesorar al personero Distrital en la adopción de las decisiones necesarias para prevenir, advertir o evitar que las autoridades distritales incurran en:
 - 6.1 La violación de los derechos humanos;
 - 6.2 El desconocimiento de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos;

- 6.3 El daño antijurídico al patrimonio público distrital, y
 - 6.4 El quebrantamiento del orden jurídico.
7. Llevar un registro de las decisiones proferidas por las personerías delegadas, de conformidad con la regulación interna vigente.
 8. Asesorar y asistir al (a la) personero(a) Distrital en la formulación, aprobación, adopción, implementación y cumplimiento de las políticas relacionadas con el Ministerio Público y la defensa de los derechos humanos, prevención y control a la función pública y potestad disciplinaria.
 9. Establecer las directrices y controles necesarios para el correcto procedimiento de procesos de la Oficina de Control interno Disciplinario, reasignando los procesos disciplinarios según lo dispuesto en la normatividad vigente.
 10. Disponer el traslado de los hallazgos sobre hechos constitutivos de posibles conductas que ameriten procesos disciplinarios, fiscales o penales, a las autoridades competentes, cuando sea procedente.
 11. Formular las políticas, planes, directrices, procesos y procedimientos necesarios para el ejercicio de la competencia disciplinaria y de la Dirección de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico.
 12. Formular y orientar el ejercicio de la potestad disciplinaria por parte de las oficinas de control disciplinario interno, o de quienes hagan sus veces, en las entidades del Distrito.
 13. Dirigir estudios de caracterización de las conductas disciplinarias y formular acciones de prevención de estas.
 14. Dirigir, orientar y controlar las investigaciones disciplinarias contra los (as) servidores (as) públicos(as) de las entidades del Distrito Capital, conforme a las normas vigentes.
 15. Dirigir y verificar la elaboración de los informes de las delegadas de instrucción y juzgamiento disciplinario, con el fin de garantizar su calidad, pertinencia, razonabilidad y oportunidad.
 16. Distribuir a través del grupo de trabajo respectivo los asuntos que deban ser atendidos por las delegadas encargadas de los asuntos disciplinarios.

17. Orientar y dirigir la intervención en defensa de los derechos ante las autoridades administrativas y judiciales de oficio y a petición de parte.
18. Las demás fijadas que le sean asignadas por ley, acuerdo o reglamento o que le delegue el (la) personero(a) Distrital por acto administrativo o en forma verbal cuando no fuera razonablemente posible emitir acto escrito.

CAPÍTULO IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Artículo 100. Estructura organizacional. Para el desarrollo de sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos, la Personería de Bogotá D. C., tendrá la siguiente estructura interna y modificaciones de denominaciones de dependencias:

1 DESPACHO DEL PERSONERO DE BOGOTÁ D.C.

- 1.1 Dirección de Planeación
- 1.2 Oficina de Control Interno
- 1.3 Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC
 - 1.3.1 Subdirección de Ingeniería de Software, Bases de Datos y Seguridad
 - 1.3.2 Subdirección de Infraestructura, Redes y Soporte
- 1.4 Personería Delegada para la Segunda Instancia
- 1.5 Dirección de Gestión del Conocimiento e Innovación
- 1.6 Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales
- 1.7 Oficina Asesora de Comunicaciones
- 1.8 Oficina Asesora Jurídica
- 1.9 Personería Delegada para el Relacionamiento con el Ciudadano y Asuntos Locales
 - 1.9.1 Dirección de Asuntos Jurisdiccionales
 - 1.9.2 Dirección de Orientación y Asistencia a las Personas
 - 1.9.3 Dirección de Conciliación y Mecanismos alternativos de Solución de Conflictos
 - 1.9.4 Personerías Locales

- 1.9.4.1 Personería Local Usaquén I
- 1.9.4.2 Personería Local Usaquén II
- 1.9.4.3 Personería Local Chapinero I
- 1.9.4.4 Personería Local Chapinero II
- 1.9.4.5 Personería Local Santafé.
- 1.9.4.6 Personería Local San Cristóbal I.
- 1.9.4.7 Personería Local San Cristóbal II
- 1.9.4.8 Personería Local Usme.
- 1.9.4.9 Personería Local Tunjuelito.
- 1.9.4.10 Personería Local Bosa I
- 1.9.4.11 Personería Local Bosa II
- 1.9.4.12 Personería Local Kennedy I
- 1.9.4.13 Personería Local Kennedy II
- 1.9.4.14 Personería Local Fontibón I
- 1.9.4.15 Personería Local Fontibón II
- 1.9.4.16 Personería Local Engativá I
- 1.9.4.17 Personería Local Engativá II
- 1.9.4.18 Personería Local Suba I
- 1.9.4.19 Personería Local Suba II
- 1.9.4.20 Personería Local Barrios Unidos.
- 1.9.4.21 Personería Local Teusaquillo.
- 1.9.4.22 Personería Local Los Mártires.
- 1.9.4.23 Personería Local Antonio Nariño.
- 1.9.4.24 Personería Local Puente Aranda.
- 1.9.4.25 Personería Local La Candelaria.
- 1.9.4.26 Personería Local Rafael Uribe I
- 1.9.4.27 Personería Local Rafael Uribe II
- 1.9.4.28 Personería Local Ciudad Bolívar I
- 1.9.4.29 Personería Local Ciudad Bolívar II
- 1.9.4.30 Personería Local Sumapaz.

2. PERSONERIA AUXILIAR

- 2.1 Oficina de Control Interno Disciplinario
- 2.2 Personería Delegada para la Misionalidad
 - 2.2.1 Personería Delegada para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos I y II
 - 2.2.2 Personería Delegada para la Familia y Sujetos de Especial Protección Constitucional
 - 2.2.3 Personería Delegada para la Defensa y Protección de Víctimas del Conflicto Armado Interno

- 2.2.4 Personería Delegada para Defensa y Protección de los Derechos del Consumidor
- 2.2.5 Personería delegada para Asuntos Penales I y II
- 2.2.6 Personería Delegada para Asuntos Policivos y Civiles
- 2.2.7 Personería Delegada para el Sector Salud
- 2.2.8 Personería Delegada para Sector Ambiente
- 2.2.9 Personería Delegada para el Sector Hábitat
- 2.2.10 Personería Delegada para el Sector Gestión Pública y Jurídica
- 2.2.11 Personería Delegada para el Sector Gobierno
- 2.2.12 Personería Delegada para el Sector Mujer
- 2.2.13 Personería Delegada para el Sector Integración Social
- 2.2.14 Personería Delegada para el Sector Educación
- 2.2.15 Personería Delegada para los Sectores Cultura, Recreación y Deporte
- 2.2.16 Personería Delegada para el Sector Hacienda
- 2.2.17 Personería Delegada para los Sectores Desarrollo Económico, Industria y Turismo
- 2.2.18 Personería Delegada para el Sector Movilidad
- 2.2.19 Personería Delegada para los Sectores Seguridad, Convivencia y Justicia
- 2.2.20 Personería Delegada para el Sector Planeación

2.3 Personería Delegada de Instrucción Disciplinaria I - II - III

2.4 Personería Delegada para Juzgamiento Disciplinario I - II

2.5 Dirección de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico

3 SECRETARÍA GENERAL

3.1 Dirección de Talento Humano

3.1.1 Subdirección de Desarrollo del Talento Humano

3.1.2 Subdirección de Nómina y Gestión de la Información del Talento Humano

3.1.3 Subdirección de Administración de Talento Humano

3.2 Dirección Administrativa y Financiera

3.2.1 Subdirección de Gestión Contractual

3.2.2 Subdirección de Recursos Físicos

3.2.3 Subdirección de Gestión Documental

3.2.4 Subdirección de Gestión Financiera

CAPÍTULO V
MODIFICACIÓN DE LA ESCALA SALARIAL

Artículo 101. Modificación de escala de grados salariales: Modificar la escala de grados salariales y asignaciones básicas mensuales para los empleados públicos de la Personería de Bogotá D.C., en los niveles profesional y asistencial, la cual quedará de la siguiente manera:

GRADO SALARIAL	DIRECTIVO	ASESOR	PROFESIONAL	TÉCNICO	ASISTENCIAL
1	\$9.206.065	\$9.206.065	\$5.738.447	\$4.183.337	\$3.770.348
2	\$10.390.866	\$10.390.866	\$5.818.871		\$4.141.829
3	\$13.131.967		\$5.899.567		
4	\$13.783.934		\$5.980.263		
5	\$16.174.924				

Parágrafo Primero: Estas asignaciones y las demás de que trata este Acuerdo regirán a partir de su firma, sin perjuicio de los incrementos salariales que se establezcan en forma general para la vigencia 2025.

Parágrafo Segundo: Fijar la nomenclatura de los empleos de la planta de cargos del nivel profesional y asistencial de la Personería de Bogotá así:

NOMENCLATURA PLANTA ACTUAL - Acuerdo 755 de 2019				NUEVA NOMENCLATURA	
DENOMINACIÓN	CÓDIGO	GRADO	CANTIDAD ACTUAL	SUMA TOTAL	NUEVO CÓDIGO GRADO
Profesional Especializado	222	7	233	300	222 -03
Profesional Especializado	222	6	15		
Profesional Especializado	222	5	52		
Profesional Especializado	222	4	15	62	222 - 02
Profesional Especializado	222	3	15		
Profesional Especializado	222	2	32		
Profesional Universitario	219	1	164	164	219 - 01
TOTAL, NIVEL PROFESIONAL			526	526	

DENOMINACIÓN	CÓDIGO	GRADO	CANTIDAD ACTUAL	SUMA TOTAL	NUEVO CÓDIGO GRADO
Secretario	440	7	98	148	440- 02

Secretario	440	5	15		
Secretario	440	4	15		
Secretario	440	3	20		
Auxiliar Administrativo	407	7	7	169	407 -02
Auxiliar Administrativo	407	6	25		
Auxiliar Administrativo	407	5	20		
Auxiliar Administrativo	407	4	20		
Auxiliar Administrativo	407	3	76		
Auxiliar Administrativo	407	2	21		
Auxiliar Administrativo	407	1	20		
Auxiliar Servicios Generales	470	1	20	20	407-01
Conductor Mecánico	482	7	16	20	470 - 01
Conductor	480	2	12	16	482 -02
			12	12	480 - 02
TOTAL, NIVEL ASISTENCIAL			385	385	

Parágrafo Transitorio: Los empleos de servicios generales de carrera administrativa suprimidos, serán incorporados en el empleo de Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 01, de conformidad con el artículo 28 del Decreto Ley 760 de 2005.

Los empleos de Profesional Especializado Código 222 Grado 03, Profesional Especializado Código 222 Grado 04, suprimidos, serán incorporados en el empleo de Profesional Especializado Código 222 Grado 02.

Los empleos de Profesional Especializado Código 222 Grado 05, Profesional Especializado Código 222 Grado 06 y Profesional Especializado Código 222 Grado 07, suprimidos serán incorporados en el empleo de Profesional Especializado Código 222 Grado 03, de conformidad con el artículo 28 del Decreto Ley 760 de 2005.

MODIFICACIÓN DE LA PLANTA DE EMPLEOS DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ D. C.

Artículo 102. Supresión de empleos: Suprimir de la planta de empleos de la Personería de Bogotá D.C., los siguientes:

CARGOS POR SUPRIMIR
NIVEL DIRECTIVO

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CÓDIGO	GRADO	No. DE
Personero Delegado Coordinador	40	4	4
Personero Delegado	40	3	2
Total, Suprimir Directivos			6
NIVEL PROFESIONAL			
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CÓDIGO	GRADO	No. DE
Profesional Especializado	222	7	224
Profesional Especializado	222	6	12
Profesional Especializado	222	5	48
Profesional Especializado	222	4	14
Profesional Especializado	222	3	15
Total, Suprimir Nivel Profesional			313
NIVEL ASISTENCIAL			
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CÓDIGO	GRADO	No. DE
Auxiliar Administrativo	407	7	7
Auxiliar Administrativo	407	6	25
Auxiliar Administrativo	407	5	18
Auxiliar Administrativo	407	4	20
Auxiliar Administrativo	407	3	76
Secretario	440	7	96
Secretario	440	5	11
Secretario	440	4	15
Secretario	440	3	20
Conductor Mecánico	482	7	15
Auxiliar de Servicios Generales	470	1	20
Total, Suprimir Nivel Asistencial			323
TOTAL, CARGOS A SUPRIMIR			636

Artículo 103. Creación de empleos: Crear en la planta de empleos de la Personería de Bogotá D.C., los siguientes empleos:

DESPACHO DEL PERSONERO			
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CÓDIGO	GRADO	No. DE CARGOS
Asesor	105	2	2
Asesor	105	1	10
Secretario	440	2	2
Conductor Mecánico	482	2	2
Total, Crear Despacho			16

NIVEL DIRECTIVO			
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CÓDIGO	GRADO	No. DE CARGOS
Personero Delegado	40	3	9
Director Técnico	9	2	2

Subdirector	70	1	4
Jefe de Oficina	6	2	1
Personero Local de Bogotá	43	1	10
Total, Crear Directivos			26

NIVEL PROFESIONAL			
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CÓDIGO	GRADO	No. DE CARGOS
Profesional Especializado	222	4	40
Profesional Especializado	222	3	284
Profesional Especializado	222	2	29
Total, Crear Profesionales			353

NIVEL TECNICO			
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CÓDIGO	GRADO	No. DE CARGOS
Técnico Administrativo	367	1	14
Total, Crear Técnico			14
NIVEL ASISTENCIAL			
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CÓDIGO	GRADO	No. DE CARGOS
Auxiliar Administrativo	407	2	146
Auxiliar Administrativo	470	1	20
Secretario	440	2	142
Conductor Mecánico	482	2	15
Total, Crear Asistencial			323
TOTAL, CARGOS A CREAR			732

Parágrafo: Naturaleza de los empleos. La naturaleza de los empleos deriva de la Constitución y la Ley; los empleos del Nivel Asesor y Asistencial asignados al despacho del señor personero de Bogotá, D. C., serán de libre nombramiento y remoción, teniendo en cuenta que su ejercicio implica especial confianza y que tienen asignadas funciones de asesoría institucional.

Artículo 104. Planta Transitoria: Mantener la siguiente planta transitoria, hasta que las listas de elegibles conformadas para proveer los mismos pierdan vigencia.

DENOMINACION	CODIGO	GRADO	VACANTES OFERTADAS	# OPEC	MODALIDAD
Profesional Especializado	222	7	2	220786	Ascenso
Profesional Especializado	222	7	1	220787	Ascenso
Profesional Especializado	222	7	1	220788	Ascenso
Profesional Especializado	222	7	1	220789	Ascenso
Profesional Especializado	222	7	1	220791	Ascenso
Profesional Especializado	222	7	1	220792	Ascenso
Profesional Especializado	222	7	1	220810	Abierto
Profesional Especializado	222	7	1	220812	Abierto
Profesional Especializado	222	6	1	220798	Abierto
Profesional Especializado	222	6	1	220802	Abierto
Profesional Especializado	222	6	1	220807	Abierto
Profesional Especializado	222	5	1	220793	Ascenso
Profesional Especializado	222	5	1	220794	Ascenso
Profesional Especializado	222	5	1	220800	Abierto
Profesional Especializado	222	5	1	220808	Abierto
Profesional Especializado	222	4	1	220801	Abierto
Profesional Especializado	222	2	1	220795	Ascenso
Profesional Especializado	222	2	1	220796	Ascenso
Profesional Especializado	222	2	1	220809	Abierto
Profesional Universitario	219	1	1	220797	Ascenso
Secretario	440	7	2	220784	Ascenso
Secretario	440	5	1	220785	Ascenso
Secretario	440	5	3	220805	Abierto
Auxiliar Administrativo	407	5	2	220806	Abierto
Conductor Mecánico	482	7	1	220799	Abierto
Auxiliar Servicios Generales	470	1	5	220803	Abierto
Auxiliar Servicios Generales	470	1	15	220804	Abierto
TOTAL			50		

Parágrafo Transitorio: Los empleos de servicios generales de carrera administrativa suprimidos, serán incorporados en el empleo de Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 01, de conformidad con el artículo 28 del Decreto Ley 760 de 2005.

Los empleos de carrera administrativo de Profesional Especializado Código 222 Grado 02, Profesional Especializado Código 222 Grado 03, Profesional Especializado Código 222 Grado 04, serán incorporados en el empleo de Profesional Especializado Código 222 Grado 02, una vez se dé el vencimiento de las listas de elegibles.

Los empleos de carrera administrativa de Profesional Especializado Código 222 Grado 05, Profesional Especializado Código 222 Grado 06 y Profesional Especializado Código 222 Grado 07, serán incorporados en el empleo de Profesional Especializado Código 222 Grado 03, una vez se dé el vencimiento de las listas de elegibles.

Una vez las listas de elegibles pierdan vigencia, se incorporarán los elegibles a la nueva planta de personal de la entidad.

Artículo 105. Planta de empleos: Para la realización de los fines institucionales la Personería de Bogotá D.C., contará con la siguiente planta de empleos:

DESPACHO DEL PERSONERO			
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CÓDIGO	GRADO	No. DE CARGOS
Personero	015	06	1 (uno)
NIVEL ASESOR			
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CÓDIGO	GRADO	No. DE CARGOS
Asesor	105	02	2 (Dos)
Asesor	105	01	35 (treinta y cinco)
Subtotal Cargos	Treinta y siete (37)		
NIVEL ASISTENCIAL			
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CÓDIGO	GRADO	No. DE CARGOS
Secretario	440	02	Dos (2)
Conductor Mecánico	482	02	Dos (2)
Subtotal Cargos	Cuatro (4)		
Total, Cargos Despacho	Cuarenta y dos (42)		

PLANTA GLOBAL

NIVEL DIRECTIVO			
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CÓDIGO	GRADO	No. DE CARGOS
Personero Auxiliar	017	05	1 (uno)
Secretario General de Organismo de Control	073	04	1 (uno)
Personero delegado	040	03	30 (treinta)
Director Técnico	009	02	4 (cuatro)
Director Operativo	009	02	5 (cinco)
Subdirector	070	01	9 (nueve)
Jefe de Oficina	006	02	3 (tres)
Personero Local de Bogotá	043	01	30 (treinta)
Total, Cargos	Ochenta y tres (83)		
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CÓDIGO	GRADO	No. DE CARGOS
Jefe de Oficina Asesora de Jurídica	115	01	1 (uno)
Jefe de Oficina Asesora de Prensa	115	01	1 (uno)
Total, Cargos	Dos (2)		

NIVEL PROFESIONAL			
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CÓDIGO	GRADO	No. DE CARGOS
Profesional Especializado	222	04	40 (cuarenta)
Profesional Especializado	222	03	300 (trescientos)
Profesional Especializado	222	02	62 (Sesenta y dos)
Profesional Universitario	219	01	279 (doscientos setenta y nueve)
Total, Cargos	Seiscientos ochenta y uno (681)		

NIVEL TÉCNICO			
Técnico Administrativo	367	01	Catorce (14)
Total, Cargos	Catorce (14)		

NIVEL ASISTENCIAL			
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CÓDIGO	GRADO	No. DE CARGOS
Auxiliar Administrativo	407	02	169 (ciento sesenta y nueve)
Auxiliar Administrativo	407	01	20 (veinte)
Secretario	440	02	148 (ciento cuarenta y ocho)
Conductor Mecánico	482	02	16 (dieciséis)
Conductor	480	02	12 (doce)
Auxiliar de Servicios Generales	470	01	20 (veinte)
Total, Cargos	Trescientos ochenta y cinco (385)		
TOTAL, PLANTA DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.	MIL DOSCIENTOS SIETE (1207)		

Artículo 106. Remuneración: Adóptese la siguiente escala grados y asignaciones básicas mensuales para los empleados públicos de la Personería de Bogotá, D.C.:

GRADO SALARIAL	DIRECTIVO	ASESOR	PROFESIONAL	TÉCNICO	ASISTENCIAL
1	\$9.206.065	\$9.206.065	\$5.738.447	\$4.183.337	\$3.770.348
2	\$10.390.866	\$10.390.866	\$5.818.871		\$4.141.829
3	\$13.131.967		\$5.899.567		
4	\$13.783.934		\$5.980.263		
5	\$16.174.924				

PARÁGRAFO: Estas asignaciones y las demás de que trata este Acuerdo regirán a partir de su firma, sin perjuicio de los incrementos salariales que se establezcan en forma general para la vigencia 2025.

CAPÍTULO VI DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 107. Manual de funciones, requisitos y competencias laborales. El (la) personero(a) de Bogotá D.C. tendrá la facultad de modificar las funciones de los empleos y actualizar el Manual Específico de Funciones, requisitos y competencias laborales de los empleos de la Personería de Bogotá, D. C., de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia.

Artículo 108. Incorporación. Los empleados que se encuentran vinculados en empleos de carrera administrativa, en los niveles profesional y asistencial, con anterioridad a la vigencia del presente Acuerdo, serán incorporados en los empleos de la planta de personal descrita en el artículo 83 de esta disposición.

Parágrafo Primero: Se exceptúa de esta incorporación los empleos que hacen parte de la planta transitoria establecida en el artículo 80 del presente Acuerdo, los cuales serán incorporados en la nueva planta de personal de entidad, una vez culmine la vigencia de las respectivas listas de elegibles, conformadas con ocasión del proceso de selección 2544 de 2023 - Distrito Capital 6, de la CNSC, convocado mediante Acuerdos 109 del 20 de diciembre del 2023 y 148 del 3 de julio de 2024.

Artículo 109. Distribución de empleos. El (la) personero(a) de Bogotá, D.C., distribuirá los empleos mediante resolución, teniendo en cuenta la planta global de empleos a la que se refiere el presente acuerdo, la estructura, las necesidades del servicio, las políticas, planes, programas y proyectos de la entidad.

Artículo 110. Comités, Comisiones y Juntas. Los objetivos, la conformación y las funciones de los grupos de trabajo, comités, comisiones y juntas estarán establecidos por las disposiciones legales correspondientes. El (la) personero(a) de Bogotá, D. C., podrá reglamentar estos aspectos en los que decida conformar para el normal funcionamiento de la entidad.

Artículo 111. Asignación Salarial. Las asignaciones básicas mensuales se establecerán de acuerdo con el incremento salarial que fije la administración Distrital para cada vigencia fiscal, en acatamiento a los topes máximos que disponga el gobierno.

Artículo 112. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir del día siguiente a su publicación, modifica en lo pertinente los Acuerdos 34 de 1993, 13 de 1999, 182 de 2005, 514 de 2012, 755 de 2019 y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE